

Producir para vivir

Los caminos de la producción no capitalista

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS
(coordinador)



Boaventura de Sousa Santos (Coimbra, Portugal, 1940) es doctor en sociología del derecho por la Universidad de Yale, director del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de Abril de la Universidad de Coimbra y profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente es uno de los principales estudiosos del área de las ciencias sociales y cuenta con un amplio reconocimiento internacional. Entre sus obras destacan: *Para uma revolução democrática da justiça* (2007), *Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social* (2007) y *Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa* (FCE, 2004).

separación entre capital y trabajo
Leer la experiencia más global y crítica de
economía cooperativa del libro.

Producir para vivir

334.6
9964P
g.1
P.C.H

Traducción:
Eliseo Rosales
y Mario Morales

Boaventura de Sousa Santos
(coordinador)

Producir para vivir

Los caminos de la producción no capitalista

SyS 717189



Primera edición en portugués, 2002
Primera edición en español, 2011

Sumario

Santos, Boaventura de Sousa, coord.

Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista / comp. de Boaventura de Sousa Santos ; trad. de Eliseo Rosales, Mario Morales. — México : FCE, 2011

406 p. ; 23 × 17 cm — (Colec. Sociología)

Título original: Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista

ISBN 978-607-16-0539-9

1. Producción — Teoría económica 2. Cooperativismo 3. Desarrollo económico — Participación ciudadana 4. Globalización — Economía I. Rosales, Eliseo, tr. II. Morales, Mario, tr. III. t. IV. Ser.

LC HD2963

Dewey 334.6 S724p

Distribución mundial

Título original: *Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista*

Original Portuguese edition published by Editora Civilização Brasileira in Brasil
D. R. © 2002, Boaventura de Sousa Santos

Edición original en portugués publicada por Editora Civilização Brasileira in Brasil
D. R. © 2002, Boaventura de Sousa Santos

Diseño de portada: Paola Álvarez Baldit

D. R. © 2011, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios: editorial@fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55) 5224-4672; fax (55) 5227-4694

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-607-16-0539-9

Impreso en México • *Printed in Mexico*

<i>Lista de acrónimos y siglas</i>	9
<i>Introducción. Para ampliar el canon de la producción</i> Boaventura de Sousa Santos y César Rodríguez	15
I. <i>La reciente resurrección de la economía solidaria en Brasil</i> Paul Singer	63
II. <i>El debate sobre swadeshi</i> Harsh Sethi	103
III. <i>Comunidad, pobreza y seguridad en el campo de Sudáfrica: ¿oportunidades de emancipación o estrategias marginales de supervivencia?</i> Heinz Klug	123
IV. <i>«Movilización sin emancipación» Las luchas sociales de los sin tierra en Brasil</i> Zander Navarro	146
V. <i>La emancipación del movimiento en el movimiento de emancipación social continua (respuesta a Zander Navarro)</i> Horácio Martins de Carvalho	181
VI. <i>El MST y la canonización de la acción colectiva (respuesta a Horácio Martins de Carvalho)</i> Zander Navarro	203
VII. <i>«El dorso de la ciudad»: los sin tierra y la concepción de otro tipo de ciudad</i> João Marcos de Almeida Lopes	219

VIII. <i>En busca de alternativas económicas en tiempos de globalización: el caso de las cooperativas de recicladores de basura en Colombia</i>	255
César Rodríguez	
IX. <i>Cooperativas y la emancipación de los marginados: estudios de caso de dos ciudades de la India</i>	286
Sharit K. Bhowmik	
X. <i>Unión General de Cooperativas en Mozambique: ¿un sistema alternativo de producción?</i>	310
Teresa Cruz e Silva	
XI. <i>La acción local de los ciudadanos como forma de resistencia ante la nueva ola de colonización global: el caso de la Asociación In Loco en el sur de Portugal</i>	338
Alberto Melo	
XII. <i>¿Sistemas alternativos de producción?</i>	369
Aníbal Quijano	

Abin	Agência Brasileira de Inteligência (Agencia Brasileña de Inteligencia).
ACCMV	Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida (Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Miseria y por la Vida).
ACI	Alianza Cooperativa Internacional.
ADS	Agência de Desenvolvimento Solidário (Agencia de Desarrollo Solidario, Brasil).
AECA	Associação Estadual de Cooperação Agrícola (Asociación Estatal de Cooperación Agrícola, Brasil).
ANCA	Associação Nacional de Cooperação Agrícola (Asociación Nacional de Cooperación Agrícola, Brasil).
Animar	Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local (Asociación Portuguesa para el Desarrollo Local, Portugal).
ANR	Asociación Nacional de Recicladores (Colombia).
Anteag	Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária (Asociación Nacional de Trabajadores en Empresas de Autogestión y Participación Accionaria, Brasil).
ARB	Asociación de Recicladores de Bogotá (Colombia).
Astroagri	Associação dos Trabalhadores Organizados na Agricultura (Asociación de los Trabajadores Organizados en la Agricultura, Brasil).
BA	Estado de Bahía, Brasil.
Banespa	Banco do Estado de São Paulo (Banco del Estado de São Paulo, Brasil).
BID	Banco Interamericano de Desarrollo.
BM	Banco Mundial
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Brasil).

BPD	Banco Popular de Desenvolvimento (Banco Popular de Desarrollo, Mozambique).
CEE	Comunidad Económica Europea.
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe (de la ONU, sede: Santiago de Chile).
CES	Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, Portugal).
CITU	Center for Indian Trade Unions (Centro de los Sindicatos de la India).
CLOC	Coordenação Latino-Americana de Organizações Camponesas (Coordinación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas).
CMN	Corporaciones Multinacionales
CNA	Congreso Nacional Africano.
CNBB	Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil).
Coagri	Cooperativa de Reforma Agrária dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Cooperativa de Reforma Agraria de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Brasil).
Coep	Comitê de Entidades no Combate à Fome e Pela Vida (Comité de Entidades para el Combate al Hambre y por la Vida, Brasil).
Concrab	Confederação Nacional de Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil Ltda. (Confederación Nacional de Cooperativas de la Reforma Agraria del Brasil, Curitiba).
Contralesa	The Congress of Traditional Leaders of South Africa (Congreso de Líderes Tradicionales de Sudáfrica).
Cooproserp	Cooperativa de Produção e Serviços de Pitanga (Cooperativa de Producción y Servicios de Pitanga, Brasil).
Cootram	Cooperativa de Trabalho (Cooperativa de Trabajo, Brasil).
Copavi	Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória (Cooperativa de Producción Agropecuaria Vitoria, Brasil).
CPA	Communal Property Association Act (Ley de Asociación de Propiedad Comunal, Sudáfrica).
CPA	Cooperativas de Produção Agropecuária (Cooperativas de Producción Agropecuaria, del MST, Rio Grande do Sul, Brasil).

CPI(M)	Communist Party of India [Partido Comunista de la India (Marxista)].
CPS	Cooperativas de Prestação de Serviços (Cooperativas de Prestación de Servicios, del MST, Brasil).
CPT	Comissão Pastoral da Terra (Comisión Pastoral de la Tierra, de la Iglesia Católica, Brasil).
CUT	Central Única dos Trabalhadores (Central Única de Trabajadores, Brasil).
DIEESE	Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos, Brasil).
Eletrosul	Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A (Centrales Eléctricas del Sur de Brasil, S.A.).
Emater	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural).
I ENERA	I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (I Encuentro Nacional de Educadoras y Educadores de la Reforma Agraria, Brasil).
ENSP	Escola Nacional de Saúde Pública (Escuela Nacional de Salud Pública, Brasil).
ESOP	Employee Stock Ownership Plans (Planes de Participación de los Empleados en el Capital de las Empresas, EUA).
Finep	Financiadora de Estudos e Projetos (Financiadora de Estudios y Proyectos, Brasil).
Fiocruz	Fundação Oswaldo Cruz (Fundación Oswaldo Cruz, Brasil).
FMI	Fondo Monetario Internacional.
Frelimo	Frente de Libertação de Moçambique (Frente de Liberación de Mozambique).
GAL	Grupos de Acção Local (Grupos de Acción Local, Portugal).
GZV	Gabinete das Zonas Verdes da cidade de Maputo (Oficina para Zonas Verdes de la ciudad de Maputo, Mozambique).
ICA	International Cooperative Alliance (Alianza Cooperativa Internacional).
Icco	Inter Church Organisation for Development Cooperation (Organización Intereclesiástica para la Cooperación y el Desarrollo, Holanda).
ICDS	Integrated Child Development Scheme (Plan Integrado para el Desarrollo de los Niños, India).
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, Brasil).

Inesc	Instituto de Estudos Socioeconômicos.
ITCP	Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, Brasil).
JST	Jornal Sem Terra (Periódico Sin Tierra, del MST, Brasil).
LEAP	Legal Entity Assessment Programme (Programa de Tasación Legal en la Entidad, Sudáfrica).
MG	Estado de Minas Gerais, Brasil.
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Brasil).
NBSTC	North Bengal State Transport Corporation (Corporación Estatal de Transporte de Bengala Norte, India).
OAB	Orden dos Advogados do Brasil.
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OCs	Organizações Cívicas e Solidárias (Organizaciones Cívicas y Solidarias, Portugal).
OGM	Organismos genéticamente modificados.
OMM	Organização da Mulher Moçambicana (Organización de la mujer Mozambiqueña).
ONG	Organizaciones No Gubernamentales.
ONU	Organización de las Naciones Unidas (Nueva York, EUA).
PA	Estado de Pará, Brasil.
PAC	Projetos Alternativos Comunitários (Proyectos Alternativos Comunitarios, Brasil).
Petrobras	Petróleo Brasileiro, S. A. (Petróleo Brasileño, S. A.).
PGU	Programa de Gestão Urbana (Programa de Gestión Urbana del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos, ONU).
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
PR	Estado de Paraná, Brasil.
PRE	Programa de Reabilitação Econômica (Programa de Rehabilitación Económica, Mozambique). Programa de Reajuste Estrutural (Programa de Reajuste Estructural, Mozambique).

PRES	Programa de Reabilitação Econômica e Social (Programa de Rehabilitación Económica y Social, Mozambique).
Pronaf	Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Programa Nacional para Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, Brasil).
Proninc	Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas (Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas, Brasil).
Radial	Rede de Apoio para o Desenvolvimento Integrado do Algarve (Red de Apoyo para el Desarrollo Integrado del Algarve, Portugal).
Renamo	Resistência Nacional de Moçambique (Resistencia Nacional de Mozambique).
RJ	Estado de Río de Janeiro, Brasil.
ROAPE	Review of African Political Economy (Revista de Economía Política de África).
RS	Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.
RST	Revista Sem Terra (Revista Sin Tierra, del MST, Brasil).
SC	Estado de Santa Catarina, Brasil.
SCA	Sistema Cooperativista dos Assentados (Sistema de Cooperativismo de los Colonos en los Asentamientos, del MST, Brasil).
SP	Estado de São Paulo, Brasil.
UDR	União Democrática Ruralista (Unión Democrática Rural, Brasil).
UEM	Universidade Eduardo Mondlane (Universidad Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique).
UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil).
UFRJ	Universidade Federal de Rio de Janeiro (Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil).
UFMS	Universidade Federal de Santa Maria (Universidad Federal de Santa María, Brasil).
UGC	União Geral de Cooperativas Agropecuárias de Maputo (Unión General de Cooperativas Agropecuarias de Maputo, Mozambique).
Unac	União Nacional de Camponeses (Unión Nacional de Campesinos, Mozambique).
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, París, Francia).

Unicamp	Universidade Estadual de Campinas (Universidad Estatal de Campinas, Brasil).
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
Unisol	União e Solidariedade das Cooperativas do Estado de São Paulo (Unión y Solidaridad de las Cooperativas del Estado de São Paulo, Brasil).
Usina	Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado (Centro de Trabajos para el Ambiente Habitado, São Paulo, Brasil).
VIH	Virus de inmunodeficiencia humana.
WED	Women, Environment and Alternative Development (Mujeres, Ambiente y Desarrollo Alternativo).
WID	Women in Development (Mujeres en el Desarrollo).
ADPIC	Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.
OMC	Organización Mundial de Comercio.
CMN	Corporaciones Multinacionales.

Introducción

Para ampliar el canon de la producción

Componente de
participación oprimida
que mira la conducta humana - en la producción
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS
CÉSAR RODRÍGUEZ

Espiritu del texto (ET)

Como demuestra la reciente consolidación de numerosos movimientos y organizaciones de todo el mundo que pugnan por una globalización contrahegemónica, los diversos siglos de predominio del capitalismo no lograron disminuir la indignación y la resistencia efectiva a los valores y prácticas que constituyen su núcleo central como sistema económico y forma de civilización. De hecho, la historia del capitalismo —desde su aparición, Wallerstein (1979) lo llamó «el largo siglo XVI»— es también la de las luchas de resistencia y de la crítica a esos valores y prácticas. Desde el combate de los campesinos ingleses contra su integración forzada a las fábricas protocapitalistas, provocada por la apropiación privada de las tierras comunales, en el siglo XVIII, hasta las luchas contemporáneas de las comunidades indígenas en los países semiperiféricos o periféricos contra la explotación de sus territorios ancestrales, pasando por todo tipo de movimientos obreros, el capitalismo ha sido constantemente enfrentado y desafiado. Estos retos han ido acompañados de una vasta tradición de pensamiento crítico— desde el pensamiento asociativo de Saint-Simon, Fourier y Owen en Europa, en el siglo XIX, hasta la reivindicación de un desarrollo alternativo o, incluso, el rechazo de la idea de desarrollo económico en los países periféricos o semiperiféricos, en el siglo XX, pasando por la crítica marxista del capitalismo industrial— que impulsó el debate sobre formas de sociedad más justas que sean alternativas viables a las capitalistas (Macfarlane, 1998). Al imaginar y luchar por sociedades en las cuales se elimine la explotación, o por lo menos se reduzca drásticamente, las prácticas y teorías críticas del capitalismo —añadidas a otras cuyo objetivo son formas diferentes de dominación, como el patriarcado y el racismo— mantuvieron viva la promesa moderna de emancipación social.

Al inicio del siglo XXI, la tarea de pensar y de luchar por opciones económicas y sociales es particularmente urgente por dos razones relacionadas entre sí. En

primer lugar, vivimos en una época en que la idea de que no hay alternativas al capitalismo logró un grado de aceptación que probablemente no tiene precedentes en la historia del capitalismo mundial. En efecto, a lo largo de las dos últimas décadas del siglo xx, las élites políticas, económicas e intelectuales conservadoras impulsaron con tal agresividad y éxito las políticas y el pensamiento neoliberales que la idea tatcheriana, según la cual «no existe alternativa» alguna al capitalismo neoliberal, ganó credibilidad, incluso entre los círculos políticos e intelectuales progresistas.

Las décadas precedentes avivaron y reavivaron la «utopía del mercado autorregulado» (Polanyi, 1957) que había dominado en el siglo xix. Con todo, al contrario de lo que sucedió en el siglo xix, el resurgimiento de esta utopía bajo la forma de neoliberalismo contemporáneo no fue acompañado por la reactivación simultánea de las luchas y del pensamiento crítico, que pasaron a la defensiva y se tienen que reinventar y reorganizar. Esta situación empezó a cambiar en los últimos años con el renacimiento del activismo a favor de una globalización contrahegemónica, que incluso comenzó a desarrollar formas de coordinación, como el Primer Fórum Social Mundial en Porto Alegre, a finales de enero de 2001. Dado que, como observó Polanyi con claridad, las instituciones que encarnan la utopía del mercado autorregulado «no podrían existir por mucho tiempo sin aniquilar el material humano y natural de la sociedad [porque] habrían destruido físicamente al hombre y devastado el ambiente» (1957: 3), la idea de que no hay salidas no predominaría por mucho tiempo. Luego de que la globalización neoliberal fue eficazmente puesta en duda por múltiples movimientos y organizaciones, una de las tareas urgentes consiste en formular propuestas económicas concretas, que sean al mismo tiempo emancipadoras y viables y que, por eso, proporcionen un contenido específico a los planteamientos de una globalización contrahegemónica. La reinención de las formas económicas alternativas es urgente porque, en contraste con los siglos xix y xx, al principio del nuevo milenio la alternativa sistémica al capitalismo, representada por las economías socialistas centralizadas, no se muestra viable ni deseable.

El autoritarismo político y la inviabilidad económica de los sistemas económicos centralizados fueron dramáticamente expuestos por el colapso de éstos a fines de los años ochenta y principios de la década de 1990 (Hodgson, 1999). Incluso aquellos que, ante la evidencia del autoritarismo y lo inaceptable de este sistema, persistían en la posibilidad de una alternativa al capitalismo (es decir, el socialismo centralizado) fueron obligados a pensar de otra forma. Para quienes, como a nosotros, los sistemas socialistas centralizados no ofrecían una opción emancipadora del capitalismo, la crisis de éstos creó la oportunidad de recuperar o inventar rutas (en plural) que apuntaran hacia prácticas y formas de sociabilidad anticapitalistas. Como se verá en el estudio que presentamos, estas alternativas son mucho menos grandiosas que la del socialismo centralizado, y las teorías que les sirven de base son menos ambiciosas que la creencia en la inevitabilidad histórica

Los escenarios
complejos (E + t)

del socialismo que dominó el debate del marxismo clásico. De hecho, la viabilidad de tales opciones, por lo menos a corto y mediano plazo, depende en buena medida de sobrevivir en el contexto del dominio del capitalismo. Entonces, lo que se pretende es centrar simultáneamente la atención en la factibilidad y en el potencial emancipatorio de las múltiples alternativas que se han formulado y practicado un poco por todo el mundo y que representan formas de organización económica basadas en la igualdad, la solidaridad y la protección del ambiente.

Este espíritu es el que inspira este trabajo introductorio y los estudios de caso incluidos en el presente volumen. La insistencia en la viabilidad de las alternativas no implica, con todo, una aceptación de lo que existe. La afirmación fundamental del pensamiento crítico consiste en la aseveración de que la realidad no se reduce a lo que existe. La realidad es un campo de posibilidades donde tienen cabida opciones que fueron marginadas o que ni siquiera se intentaron (Santos, 2000: 23). En este sentido, la función de las prácticas y del pensamiento emancipadores consiste en ampliar el espectro de lo posible por medio de la experimentación y de la reflexión sobre proposiciones que representen formas de sociedad más justas. Al apuntar más allá de lo que existe, estas formas de pensamiento y de práctica ponen en duda la separación entre realidad y utopía y formulan propuestas lo suficientemente utópicas para representar un desafío al *statu quo*, y suficientemente reales para no ser descartadas con facilidad por inviables (Wright, 1998). El espectro de posibilidades resultante es mucho más amplio que aquel que muchos partidos y pensadores de izquierda defendieron en los últimos años. En América Latina, por ejemplo, una corriente influyente de la izquierda, cuyas ideas fueron resumidas en los trabajos de Unger y Castañeda,¹ ofrece como alternativa al sistema capitalista únicamente variaciones ya conocidas. En palabras de Castañeda, las opciones viables para la izquierda se limitan a promover el sistema capitalista «con las variaciones, reglamentaciones, excepciones y adaptaciones que las economías de mercado de Europa y Japón incorporaron a lo largo de los años» (1993: 42). Como mostraremos en el balance de las experiencias y las diferentes teorías económicas que presentamos más adelante, el predominio del capitalismo no reduce la amplitud de posibilidades a las referidas variaciones. Por el contrario, esta gama de posibilidades incluye maneras de concebir y organizar la vida económica que implican reformas radicales dentro del capitalismo, basadas en principios no capitalistas o que apuntan, incluso, hacia una transformación gradual de la economía en formas de producción, intercambio y consumo no capitalistas. → posibilidades utópicas del sistema

Cualquier análisis que, como el nuestro, procure subrayar y evaluar el potencial emancipatorio de las propuestas y experiencias económicas no capitalistas que

¹ Véase, por ejemplo, el documento «Una alternativa latinoamericana», producido por un grupo de políticos latinoamericanos (entre ellos, los ex presidentes de Chile, Ricardo Lagos, y de México, Vicente Fox), convocado por Unger y Castañeda, en Buenos Aires, en noviembre de 1999, <<http://www.robertounger.com/alternative.htm>>.

se han hecho por todo el mundo debe tener en cuenta que, frente a su carácter antisistémico, esas experiencias y propuestas son frágiles e incipientes. Por eso analizamos las alternativas con base en una perspectiva que se puede llamar «hermenéutica de las emergencias» (Santos, 2001), es decir, que interpreta de manera envolvente la forma como las organizaciones, movimientos y comunidades resisten la hegemonía del capitalismo y se adhieren a opciones económicas basadas en principios no capitalistas. Este enfoque amplía y desarrolla las características emancipadoras de estas propuestas para tornarlas más visibles y creíbles. Esto no implica que la hermenéutica de las emergencias renuncie a analizarlas rigurosa y críticamente. No obstante, el análisis y la crítica procuran fortalecerlas, y no propiamente disminuir su potencial.

Antes de que avancemos en el análisis de las iniciativas y propuestas concretas, es necesario precisar las expresiones utilizadas en las discusiones sobre estos temas. A falta de un término mejor, las prácticas y teorías que desafían al capitalismo son frecuentemente calificadas como «alternativas». En este sentido, se habla de una globalización alternativa, de economías alternativas, de desarrollo alternativo, etc. Existen razones para cuestionar la conveniencia política y teórica de utilizar este adjetivo —calificar algo como alternativo implica, desde luego, ceder terreno a aquello a lo que se pretende oponer, lo que, de esta manera, reafirma su carácter hegemónico—. Sin embargo, pensamos que, en vez de un cambio de lenguaje, lo que se exige al inicio de una interrogación que procura teorizar y volver visible el espectro de alternativas es formular la pregunta obvia: ¿alternativo en relación con qué? En otras palabras, ¿cuáles son los valores y prácticas capitalistas que esas alternativas critican y procuran superar? A pesar de la amplitud de esta pregunta —que, de hecho, apunta a uno de los temas centrales de las ciencias sociales, es decir, la caracterización del capitalismo como fenómeno económico y social—, es necesaria por lo menos una breve respuesta para definir el sentido de la exposición que sigue. Y así lo haremos porque el objetivo central es, precisamente, presentar un mapa y un conjunto de tesis sobre la trayectoria y las posibilidades actuales de las prácticas y visiones del mundo inspiradas en los principios capitalistas. Al plantear la pregunta y los términos de nuestro argumento de forma general, esperamos que esta introducción sirva como telón de fondo y preparación para la lectura de los estudios de caso incluidos en este libro y que discuten, a partir de diferentes ángulos y experiencias diversas, en qué grado las iniciativas escogidas para el análisis constituyen alternativas económicas emancipadoras.

Tradicionalmente, las líneas de pensamiento crítico subrayan tres características negativas de las economías capitalistas. En primer lugar, que produce sistemáticamente desigualdades de recursos y de poder. En la tradición marxista, el efecto que figura en el centro de las críticas es la desigualdad económica y de poder entre las clases sociales. La separación entre capital y trabajo y la privatización de los bienes públicos actúan como motores que producen rendimientos desiguales y relaciones

sociales marcadas por la subordinación del trabajo al capital. Las mismas condiciones que hacen posible la acumulación generan desigualdades dramáticas entre las clases sociales de cada país y entre países en el sistema mundial. La tradición feminista concentra sus críticas en cómo las diferencias de clase refuerzan las diferencias de género y, por lo tanto, en la forma en que el capitalismo contribuye a reproducir la sociedad patriarcal. De igual modo, las teorías críticas de base racial subrayan la manera en que la opresión entre razas y la explotación económica se alimentan mutuamente. En segundo lugar, las relaciones de competencia que exige el mercado capitalista producen formas de sociabilidad empobrecidas, basadas en el beneficio personal y no en la solidaridad. En el mercado, el motivo inmediato para producir e interactuar con otras personas es «una mezcla de codicia y de miedo [...] Codicia, porque las otras personas son vistas como posibles fuentes de enriquecimiento, y miedo, porque ellas son vistas como amenazas. Éstas son formas horribles de mirar hacia los otros» independientemente de que ya estamos acostumbrados a ellas, como resultado de siglos de capitalismo» (Cohen, 1994: 9).

Esta reducción de la sociabilidad al mero intercambio y beneficio personal está en el centro del concepto de alienación de Marx y es la que inspira críticas y propuestas contemporáneas que procuran ampliar los ámbitos en que el intercambio se basa en la reciprocidad y no en las ganancias monetarias —como las economías populares estudiadas por Quijano (1998) en América Latina— o disminuir la dependencia de las personas en relación con el trabajo asalariado, de tal forma que no sea necesario «perder la vida para ganar la vida» (Gorz, 1997). En tercer lugar, la explotación creciente de los recursos naturales en todo el mundo pone en peligro las condiciones físicas de vida en la Tierra. Como hicieron visible las teorías y movimientos ecologistas, el grado y el tipo de producción y consumo exigidos por el capitalismo no son sustentables (Daly, 1996; Douthwaite, 1999). El capitalismo tiende a agotar los recursos naturales que permiten su propia reproducción (O'Connor, 1988). Contra la posibilidad de destrucción de la naturaleza, los movimientos ecologistas propusieron una amplia variedad de alternativas, que van desde la imposición de límites al desarrollo capitalista hasta el rechazo de la propia idea de desarrollo económico y la adopción de estrategias antidesarrollo, basadas en la subsistencia y en el respeto a la naturaleza y a la producción tradicional (Dietrich, 1996).

En la práctica, ciertamente, las críticas y las alternativas formuladas a estas características del capitalismo tienden a combinar más de una de las líneas mencionadas. Por ejemplo, el ecofeminismo promovido por movimientos de mujeres en la India articula la crítica y la lucha contra el patriarcado con la preservación del ambiente (Shiva y Mies, 1993). De igual forma, las cooperativas no sólo buscan la remuneración igualitaria de los trabajadores-dueños de las empresas cooperativas, sino también la creación de formas de sociabilidad solidarias basadas en el trabajo colaborativo y en la participación democrática para la toma de decisiones sobre

las empresas. Aun en el mismo contexto, propuestas como la creación de una renta mínima universal, acompañada de la disminución del horario de trabajo, no procuran establecer tan sólo un nivel de bienestar material básico, sino también liberar tiempo para el desarrollo de sociabilidades y habilidades diferentes de las que son exigidas por el mercado (Van Parijs, 1992).

El mapa de iniciativas y de visiones económicas alternativas que presentamos más adelante, así como el conjunto de experiencias analizadas en los estudios de caso incluidos en este volumen, es muy variado. Como se verá, los estudios de caso incluyen desde organizaciones económicas populares constituidas por los sectores más marginados en la periferia hasta cooperativas prósperas en el centro del sistema mundial. No obstante, al criticar y procurar superar, en mayor o menor escala, las características del capitalismo ya analizadas, estos tipos de experiencias tienen en común, aunque no pretendan sustituir el capitalismo de un solo golpe, que tratan (con resultados dispares) de hacer más incómoda su reproducción y hegemonía. Los múltiples tipos de iniciativas que incluimos en nuestro mapa crean espacios económicos en los que predominan los principios de igualdad, solidaridad o respeto a la naturaleza. De acuerdo con el primer principio, los frutos del trabajo se distribuyen de manera equitativa entre sus productores y el proceso de producción implica la participación de todos en la toma de decisiones, como en las cooperativas de trabajadores. Gracias al principio de solidaridad, lo que una persona recibe depende de sus necesidades y la contribución depende de sus capacidades. De esta manera funcionan, por ejemplo, los sistemas progresivos de tributación y transferencias cuya creación o defensa, en el contexto de la globalización neoliberal, constituye una propuesta alternativa al consenso económico hegemónico. En este principio se inspira también el movimiento de *fair trade* (comercio justo), en el que el precio que pagan por un producto los consumidores del norte contribuye, efectivamente, a la remuneración justa en el sur. En nombre de la protección al ambiente, la escala y el proceso de producción se ajustan a imperativos ecológicos, incluso cuando éstos contrarían el crecimiento económico.

La escala de las iniciativas es igualmente variada. Las alternativas incluyen desde pequeñas unidades de producción locales —como las cooperativas de trabajadores de los barrios marginados en los países de la periferia del sistema mundial— hasta propuestas de coordinación macroeconómica y jurídica global que garanticen el respeto a los derechos laborales y ambientales mínimos en todo el mundo, pasando por tentativas de construcción de economías regionales basadas en principios de cooperación y solidaridad.

Frente a semejante diversidad, las alternativas varían mucho respecto a su relación con el sistema capitalista. Mientras unas (por ejemplo, las cooperativas) son compatibles con un sistema de mercado e incluso con el predominio de las empresas capitalistas, otras (por ejemplo, las propuestas ecológicas antidesarrollo)

implican una transformación radical o incluso el abandono de la producción capitalista. No obstante, pensamos que es importante estudiar estas iniciativas por dos razones distintas: resistir la tentación de aceptarlas o rechazarlas con un criterio simplista que equilibre exclusivamente si éstas ofrecen alternativas radicales al capitalismo. Por un lado, este simple criterio de (des)calificación encarna una especie de fundamentalismo alternativo que puede cerrar las puertas a propuestas que, aunque dentro del capitalismo, abren las posibilidades a transformaciones graduales en direcciones no capitalistas y crean enclaves de solidaridad en el seno del capitalismo. Más que de la vieja dicotomía entre reforma y revolución, se trata, como afirma Gorz (1997), de aplicar reformas revolucionarias, es decir, emprender reformas e iniciativas que surjan dentro del sistema capitalista en que vivimos, pero que faciliten y proporcionen credibilidad a organizaciones económicas y de sociabilidad no capitalistas. Por otro lado, semejante criterio estricto de evaluación de las alternativas implica, en último análisis, una hermenéutica del escepticismo y no de la emergencia, que acaba por rechazar todo tipo de experimentación social al estar siempre contaminado por el sistema dominante. Ya que ninguna de las propuestas viables representa una alternativa sistémica al capitalismo (o sea, una organización micro o macroeconómica integral, basada exclusivamente en valores de solidaridad, igualdad y protección del ambiente), las opciones con que contamos tienen relaciones directas o indirectas con los mercados locales, nacionales y hasta internacionales. En otras palabras, aunque sepamos cómo hacer que funcione una economía basada en el interés individual (es decir, en el mercado), si no aprendemos cómo hacerlo con una economía fundada en la generosidad (Cohen, 1994), las iniciativas no representan nuevas formas de producción que sustituyan a la forma capitalista. Con todo, eso no les quita relevancia ni potencial emancipador. Al encarnar valores y tipos de organización opuestos a los del capitalismo, las opciones económicas generan dos efectos de gran contenido emancipador.

① En primer lugar, en lo individual implican frecuentemente cambios fundamentales en las condiciones de vida de sus actores, como muestran los estudios sobre la transformación de la situación de los recolectores y recicladores de basura en la India y en Colombia, analizados respectivamente por Bhowmik y Rodríguez en este volumen. En segundo lugar, en el ámbito social, la difusión de experiencias con buen éxito implica la ampliación de los campos sociales en que operan valores y formas de organización no capitalistas. En algunas situaciones —como en el caso del complejo cooperativo Mondragón, en España, que tiene influencia sobre una región entera (Whyte y Whyte, 1988)—, el alcance de las iniciativas es tal que transforma de manera considerable los patrones de sociabilidad y los resultados económicos. Al enfrentarse a partir de la perspectiva de una hermenéutica de las emergencias, estas experiencias guardan, de hecho, la promesa de transformaciones a mayor escala en la dirección de formas de sociabilidad y organización económica no capitalistas.

Con base en la caracterización general delineada nos concentraremos en las formas de *producción* no capitalistas que constituyen el tema específico de los estudios incluidos en este libro.² Para ello, dividimos la parte restante de esta introducción en tres secciones. En la primera presentamos un mapa no exclusivo de propuestas y líneas de pensamiento sobre producción no capitalista. El objetivo central es establecer coordenadas generales para articular las múltiples iniciativas que se llevan a cabo, tanto en el centro como en la semiperiferia y en la periferia del sistema mundial y, en especial, las experiencias analizadas en los capítulos siguientes. Distinguimos tres grandes vertientes de pensamiento y de experimentación productiva no capitalista: *a)* exploramos brevemente el cooperativismo y otras propuestas que se basan en teorías sociales asociativistas, como el socialismo de mercado; *b)* investigamos las múltiples formas de organización económica de sectores populares en la semiperiferia y la periferia del sistema mundial, principalmente en actividades económicas informales, enunciadas en los estudios y las políticas sobre desarrollo alternativo; *c)* aludimos a las múltiples propuestas formuladas con particular vigor en los últimos años por el movimiento ecologista, que ponen en duda la propia idea de crecimiento económico y que, por consiguiente, representan alternativas al desarrollo económico. Estas tres líneas de alternativas de producción no se excluyen mutuamente y, de hecho, en la práctica ocurren de forma híbrida (por ejemplo, las iniciativas de desarrollo alternativo en la semiperiferia y en la periferia frecuentemente incluyen la creación de cooperativas de productores). En la segunda y tercera secciones relacionamos el mapa presentado en la primera con los estudios de caso analizados. Para ello, en la segunda sección resumimos los estudios de caso y en la tercera, como conclusión, enunciaremos nueve tesis, las cuales pensamos que captan los asuntos y dilemas comunes a los casos. Por nuestro interés en impulsar el debate sobre las formas de producción no capitalistas, enunciaremos estas tesis por medio de fórmulas cortas para discusión, que sintetizan nuestra lectura de los capítulos incluidos en este libro y la nueva visión de los desafíos que enfrentan las formas alternativas de producción en el contexto de la globalización contemporánea.

² La razón por la que nos concentramos en las alternativas de producción —y no tratamos, por ejemplo, las alternativas igualmente importantes que tienen que ver con la distribución y el consumo (como las formas de comercio justo o *fair trade*) o la redistribución de la renta (la creación de una renta mínima universal)— es puramente pragmática. Toda vez que un mapa general de alternativas económicas rebasa claramente los límites de este texto, y que los trabajos incluidos son estudios de caso sobre alternativas de producción, nos restringimos a la esfera de la producción. Sin embargo, uno de los factores esenciales para el avance de las alternativas de producción es su articulación con alternativas económicas progresistas relacionadas con la distribución, el consumo, la redistribución de recursos, las políticas de inmigración, la protección de los derechos laborales y ambientales, etc. Las alternativas de producción sólo pueden sustentarse y expandirse cuando entran en un círculo virtuoso otras alternativas en el campo económico y otros campos sociales.

Las formas de cooperativas de producción

La tradición cooperativa

La búsqueda de alternativas, ante los efectos excluyentes del capitalismo, a partir de teorías y experiencias basadas en la asociación económica entre iguales y en la propiedad solidaria, no es una tarea nueva. El pensamiento y la práctica cooperativista modernos son tan antiguos como el capitalismo industrial. De hecho, las primeras cooperativas surgieron alrededor de 1826, en Inglaterra, como reacción a la pauperización provocada por el cambio masivo de campesinos y pequeños productores en trabajadores de las fábricas pioneras del capitalismo industrial. Fue también en Inglaterra donde surgieron las que serían el modelo del cooperativismo contemporáneo: las cooperativas de consumidores de Rochdale, fundadas a partir de 1844, y cuyo objetivo inicial era oponerse a la miseria provocada por los bajos salarios y a las condiciones inhumanas de trabajo, por medio de la procuración colectiva de bienes de consumo baratos y de buena calidad para venderlos a los trabajadores. Las primeras cooperativas en Francia las fundaron los obreros alrededor de 1823, después de organizar protestas contra las condiciones inhumanas de trabajo en las fábricas donde laboraban, cuando decidieron crear y administrar colectivamente sus propias fábricas (Birchall, 1997: 21). Estas primeras experiencias surgieron por influencia de las teorías pioneras del asociativismo contemporáneo. En Inglaterra, el pensamiento de Robert Owen, quien participó directamente en la fundación de las primeras comunidades cooperativas, contribuyó a la tradición intelectual cooperativa. Las ideas asociativas en Inglaterra siguieron desarrollándose a principios del siglo xx, particularmente a través de la contribución de Harold Laski, R. Tawney y G. Cole (Macfarlane, 1998: 7). En Francia, las teorías asociativistas de Charles Fourier y de Pierre Proudhon inspiraron el establecimiento de las primeras cooperativas de trabajadores.

Desde sus orígenes en el siglo xix, el pensamiento asociativista y la práctica cooperativa se desarrollaron como alternativas tanto al individualismo liberal como al socialismo centralizado. Como teoría social, el cooperativismo está basado en dos postulados: por un lado, la defensa de una economía de mercado con principios no capitalistas de cooperación y mutualidad y, por otro, la crítica al Estado centralizado y la preferencia por formas de organización política pluralistas y federalistas, que dieron un papel central a la sociedad civil (Hirst, 1994: 15). Como práctica económica, se inspira en los valores de autonomía, democracia participativa, igualdad, equidad y solidaridad (Birchall, 1997: 65). Estos valores quedan asentados en un conjunto de siete principios, que han guiado el funcionamiento de las cooperativas de todo el mundo desde que su versión inicial fue enunciada

por los primeros cooperativistas contemporáneos, los pioneros de Rochdale. Esos principios son: el vínculo abierto y voluntario —las cooperativas están siempre abiertas a nuevos miembros—; el control democrático por parte de los miembros —las decisiones fundamentales son tomadas por los cooperativistas de acuerdo con el principio: «por cada miembro, un voto», es decir, independientemente de las contribuciones de capital hechas por cada miembro o su función en la cooperativa—; la participación económica de los miembros —tanto de propietarios solidarios como de participantes eventuales en las decisiones de beneficios—; la autonomía y la independencia en relación con el Estado y otras organizaciones; el compromiso con la educación de los miembros de la cooperativa —para permitirles una participación efectiva—; la cooperación entre cooperativas por medio de organizaciones locales, nacionales y mundiales; y la contribución para el desarrollo de la comunidad donde se localiza (Birchall, 1997).

Por un lado, a pesar de que el número de cooperativas se multiplicó rápidamente y dio lugar a un movimiento cooperativista internacional y, por otro, que la teoría asociativista fue retomada ocasionalmente por movimientos y teorías sociales, ni la práctica cooperativa ni el pensamiento asociativo que le sirve de base llegaron a ser predominantes. «El asociativismo nunca llegó a madurar hasta el punto de convertirse en una ideología coherente» (Hirst, 1994: 17), capaz de resistir los ataques que provenían tanto de las teorías del socialismo centralizado como del liberalismo individualista. El cooperativismo dio forma a experiencias ejemplares de economías solidarias —como el complejo cooperativo de Mondragón (España), al que nos referiremos más adelante—, pero no logró convertirse en alternativa importante en relación con el sector capitalista de la economía nacional y mundial. De hecho, la opinión que prevalecía en las ciencias sociales desde finales del siglo XIX (Web y Web, 1897) era que las cooperativas son intrínsecamente inestables por estar sujetas a un dilema estructural. Por un lado, corren el riesgo de fracasar porque su estructura democrática las vuelve más lentas en la toma de decisiones que las empresas capitalistas y porque el principio «por cada miembro, un voto» les impide alcanzar el nivel de capitalización necesario para expandirse, porque los inversionistas —sean éstos miembros o personas externas a la cooperativa— desean intervenir en las decisiones proporcionalmente a su contribución. Por otro lado, también según esta opinión, aunque las cooperativas logren crecer y expandirse, acaban por fracasar, toda vez que el crecimiento a costa del sacrificio de la participación directa de los miembros de la cooperativa —lo que se vuelve difícil en una gran empresa— exige, cada vez más, inversiones considerables de capital que sólo se obtienen recurriendo a inversionistas externos, cuya influencia desvirtúa el espíritu de la misma (Birchall, 1997; Ferguson, 1991).

No obstante, en los últimos años la teoría y las prácticas cooperativas han suscitado un renovado interés que desafía el pronóstico pesimista sobre la viabilidad económica de éstas y que recuperó los elementos centrales del pensamiento asociativo.

Con el fracaso de las economías centralizadas y el ascenso del neoliberalismo, académicos, activistas y gobiernos progresistas de todo el mundo han recurrido cada vez más a la tradición de pensamiento y organización económica cooperativa que surgió en el siglo XIX con el objetivo de renovar la tarea de reflexionar y crear alternativas económicas. Esta alteración se torna evidente en la bibliografía sobre el tema, tanto en los países centrales —donde han proliferado análisis teóricos sobre democracia asociativa y cooperativismo (Hirst, 1994; Bowles y Gintis, 1998) y estudios de caso sobre experiencias de cooperativas de trabajadores con mucho éxito (Whyte y Whyte, 1988; Rothschild y Whitt, 1986) o fracasadas (Russel, 1985)— como en los de la semiperiferia y periferia, donde ha tenido lugar dentro de las discusiones sobre propuestas de desarrollo alternativo que, como explicaremos, ven en las cooperativas y otras estructuras asociativas formas idóneas de canalizar las iniciativas populares (Friedmann, 1922). En América Latina, el interés renovado por el tema se expresó en las propuestas de reactivación de la llamada «economía solidaria», es decir, el sector de la economía al cual corresponden formas diversas de producción asociativa, entre las que destacan cooperativas y mutualidades (Singer y Souza, 2000).

¿A qué se debe el resurgimiento del interés por las formas de producción solidarias en general y por las cooperativas de trabajadores en particular? En nuestra opinión, hay cuatro razones fundamentales relacionadas con las condiciones económicas y políticas contemporáneas que hacen del estudio y la promoción de las cooperativas una tarea prometedoras hacia la creación de alternativas emancipadoras de producción. En primer lugar, aunque las cooperativas se basen en valores y principios no capitalistas —es decir, contrarios a la separación entre capital y trabajo y a la subordinación de éste a aquél—, siempre fueron concebidas y operaron como unidades productivas capaces de competir en el mercado. El cooperativismo considera que el mercado promueve uno de sus valores centrales: la autonomía de las iniciativas colectivas y los objetivos de descentralización y eficiencia económica que no son acogidos por los sistemas económicos centralizados. Frente a la comprobada inviabilidad e indeseabilidad de las economías centralizadas, las cooperativas surgen como alternativas de producción factibles y plausibles, a partir de una perspectiva progresista, porque están organizadas de acuerdo con principios y estructuras no capitalistas y, al mismo tiempo, operan en una economía de mercado. En segundo lugar, las características de las cooperativas de trabajadores tienen potencial para responder con eficiencia a las condiciones del mercado global contemporáneo por dos razones: por un lado, como demostraron Bowles y Gintis (1998), las cooperativas de trabajadores tienden a ser más productivas que las empresas capitalistas, porque sus trabajadores-propietarios tienen un mayor incentivo económico y moral para dedicar su tiempo y esfuerzo al trabajo, y porque, una vez que los trabajadores se benefician directamente cuando la cooperativa prospera, disminuyen drásticamente los costos de supervisión, que en una empresa capitalista son altos, porque la vigilancia constante del desempeño de los empleados es

necesaria para asegurar la cooperación de éstos con la empresa. Por otro lado, las cooperativas de trabajadores parecen ser especialmente adecuadas para competir en un mercado fragmentado y volátil como el que caracteriza la economía global contemporánea. De acuerdo con la abundante literatura sobre las transformaciones estructurales de la economía desde el inicio de la década de 1970 —que se remonta al trabajo pionero de Piore y Sabel (1984) sobre la «especialización flexible»—, las empresas aptas para competir en un mercado altamente segmentado y en continuo cambio, como el actual, son aquellas con capacidad de ajustarse con flexibilidad a las alteraciones de la demanda, motivar la participación activa e innovadora de los trabajadores en el proceso productivo y de insertarse en una red de cooperación económica formada por otras empresas pequeñas y flexibles, y por instituciones culturales, educativas y políticas de apoyo, en otras palabras, en una economía cooperativa. Ya que las cooperativas de trabajadores facilitan (de hecho, requieren) la participación activa de los trabajadores-propietarios, son normalmente pequeñas y tienen una vocación de integración con otras cooperativas y otras instituciones de la comunidad donde están localizadas; pueden ser, de hecho, «prototipos de la especialización flexible de la que hablan Piore y Sabel» (Ferguson, 1991: 127).³ En tercer lugar, como la característica esencial de las cooperativas de trabajadores es que éstos son propietarios, la difusión de las cooperativas tiene un efecto igualitario directo sobre la distribución de la propiedad en la economía, lo que a su vez, como demostraron Birdsall y Londoño (1997) para América Latina, estimula el crecimiento económico y disminuye la desigualdad. Por último, las cooperativas de trabajadores generan beneficios no económicos para sus miembros y para la comunidad en general, que son fundamentales para contrarrestar los efectos desiguales de la economía capitalista. Las cooperativas de trabajadores amplían la democracia participativa hasta el ámbito económico y, con ello, extienden el principio de ciudadanía a la gestión de empresas. Semejante ampliación de la democracia tiene efectos emancipadores evidentes por cumplir la promesa de eliminar la división que impera hoy entre la democracia política, por un lado, y el despotismo económico (es decir, el imperio del propietario sobre los trabajadores en la empresa), por el otro.

El caso ejemplar: el complejo cooperativo de Mondragón (España)

Frente a los numerosos intentos fracasados, la pregunta central de los estudios sobre este tipo de organización económica se refiere a las condiciones en que una

³ Por eso mismo, es sorprendente, como nota Ferguson, que Piore y Sabel solamente se ocupen de firmas capitalistas y «no consideren formas alternativas de propiedad y de control que cumplirían las condiciones de la especialización flexible [...] Toda vez que [Piore y Sabel] no problematizan [el conflicto entre capital y trabajo], no ponen atención ni al carácter despótico de la mayoría de las formas de «especialización flexible» ni a la posible promoción de las cooperativas de trabajadores» (Ferguson, 1991: 127).

cooperativa puede consolidarse y mantenerse. Para responder esta pregunta, es útil considerar las lecciones derivadas de la experiencia que se reconoce mundialmente como modelo de economía cooperativa: el complejo económico Mondragón, —ubicado en los alrededores de la ciudad del mismo nombre, en el País Vasco español, que empezó en 1965 y pertenece a los 30 000 trabajadores de sus 109 fábricas— su cadena de supermercados, su banco y su universidad.⁴

¿A qué se debe el éxito de Mondragón?, ¿qué lecciones se pueden sacar para promover y evaluar el funcionamiento de cooperativas en otros contextos? Las razones fundamentales del éxito están relacionadas con la inserción de las cooperativas en redes de apoyo y con el esfuerzo constante para hacerlas competitivas en el mercado global. Mondragón es una verdadera economía regional cooperativa porque las cooperativas de producción, consumo, crédito y educación que integran el complejo están íntimamente ligadas a través de enlaces múltiples de mutua dependencia. Así, por ejemplo, el banco cooperativo perteneciente al grupo (la Caja Laboral Popular) no sólo concede préstamos a las cooperativas con bases favorables, sino que sirve a éstas y al grupo, en su conjunto, como órgano de coordinación, supervisión y asesoría. La Caja hace un monitoreo constante del desempeño de cada cooperativa y recomienda y ayuda a implantar, como condición para la concesión de créditos, las modificaciones necesarias para mantener las cooperativas en condiciones de competir en el mercado. De la misma forma, la universidad tecnológica que atiende a todo el grupo (la Escuela Politécnica Profesional) se encarga de educar a los futuros trabajadores y administradores de las cooperativas y de darles formación para garantizar su flexibilidad laboral y la actualización de conocimientos. De esta forma, se garantiza el flujo e intercambio constante de información sobre sistemas de producción, finanzas, comercialización, etc., dentro del grupo cooperativo. Además de la coordinación y de la cooperación entre las empresas de Mondragón por medio de organizaciones de apoyo financiero y educativo (que también son cooperativas), un mecanismo central de ayuda mutua entre las cooperativas es su inserción en grupos económicos que siguen la lógica de la integración vertical. En efecto, las cooperativas del grupo Mondragón generalmente forman parte de subgrupos compuestos por empresas que desarrollan actividades económicas complejas y que funcionan como una cadena coordinada de suministradores y compradores mutuos de bienes y servicios que producen; por ejemplo, el grupo más grande de Mondragón —Fragor— reúne cerca de 15 fábricas cooperativas, con un alto grado de integración vertical, que producen bienes de consumo —refrigeradores, estufas, calentadores, lavadoras de ropa—, componentes industriales —para electrodomésticos, navajas de hierro, para

⁴ En ocasión de conmemorarse su medio siglo de existencia, la ONU seleccionó a Mondragón como uno de los 50 mejores proyectos sociales del mundo. En Whyte y Whyte (1998) se encuentra una presentación completa del caso Mondragón.

electrónicos— y maquinaria y servicios de asesoría para industrias —herramientas y servicios de auditoría (Whyte y Whyte, 1988: 167)—. La coordinación y la ayuda mutua entre las cooperativas se obtiene mediante la subordinación de éstas a los órganos de decisión participativos del grupo en su conjunto, los cuales determinan el financiamiento y los parámetros de la administración de cada cooperativa. El grupo, a su vez, tiene varios mecanismos de apoyo a las cooperativas, entre los que se destaca la redistribución de una parte de las ganancias de las cooperativas de mayor éxito entre las que atraviesan por dificultades temporales y la rotación de personal experimentado (por ejemplo, gerentes) de una cooperativa a otras, de acuerdo con las necesidades de cada una.⁵ En síntesis, Mondragón tuvo éxito porque logró transformarse en una verdadera economía cooperativa regional, cuya red de apoyo permitió la supervivencia y expansión de las cooperativas que forman parte de ella. Además, estas redes se fortalecieron mediante la cooperación entre el Estado —concretamente el gobierno regional vasco— y el grupo Mondragón en asuntos tan diversos como proyectos de investigación tecnológica, programas de estímulo al empleo y estudios periódicos sobre la evolución de la economía regional.

Por otro lado, sobre todo durante los últimos veinte años, el complejo cooperativo Mondragón emprendió estrategias empresariales que, sin desvirtuar su estructura cooperativa,⁶ le permitieron prosperar en condiciones de volatilidad y competencia interna intensa del mercado global. En estas condiciones, Mondragón demostró que las limitaciones impuestas por los principios cooperativos —el compromiso para la conservación del empleo de los trabajadores y la capitalización de las empresas con base en las contribuciones de los trabajadores, y no de inversionistas externos— pueden actuar como «restricciones virtuosas» (Streeck, 1997) que obligan a las empresas cooperativas a ser flexibles e innovadoras; por ejemplo, toda vez que uno de los objetivos centrales de Mondragón es la conservación del empleo de sus socios y, en caso de desempleo temporal, la prestación de un generoso y prolongado seguro de desempleo, el complejo está bajo la constante presión de crear nuevas cooperativas y puestos de trabajo, lo que exige constante innovación y mejora en la productividad. Un factor adicional que presiona la creación de nuevas empresas, pequeñas e innovadoras, es la política de evitar el crecimiento desmedido de sus cooperativas. Cuando una cooperativa exitosa se está expandiendo, Mondragón procura crear otras que se encarguen de algunas de las actividades desempeñadas por aquélla, de tal forma que se garantice tanto la

⁵ El resultado económico de la ayuda mutua entre las cooperativas dentro del complejo Mondragón ha sido significativo. Entre 1956 y 1983, por ejemplo, sólo tres de 103 cooperativas creadas hasta ese momento fracasaron y tuvieron que ser liquidadas.

⁶ Los estatutos de Mondragón impiden que las cooperativas y los grupos hagan modificaciones en su estructura contrarias a los principios cooperativos; por ejemplo, los socios-trabajadores tienen representación en todos los órganos de decisión y el número de trabajadores externos (es decir, los que no tienen el estatus de socio-propietario) está limitado a 10% del personal de cada cooperativa.

continuidad de la estructura del complejo —basada en grupos fuertemente intergrados de cooperativas relativamente pequeñas y flexibles— como la creación de nuevos focos de empleo e innovación. La respuesta adecuada del complejo a estas presiones para innovar fue facilitada por dos factores adicionales. Por un lado, los grupos cooperativos lograron altos niveles de capitalización, necesarios para modernizar sus procesos productivos sin recurrir a inversiones externas, gracias a las contribuciones adicionales de capital de sus socios-trabajadores y al apoyo de la Caja. Por otro lado, los grupos cooperativos de Mondragón entraron en múltiples alianzas con cooperativas y empresas convencionales en varias partes del mundo, que les permitieron aprovechar las condiciones del mercado global. En este sentido, la experiencia de Mondragón ofrece no sólo un contraejemplo ideal frente a la opinión prevaleciente sobre la inviabilidad de las cooperativas, sino también elementos de juicio importantes para evaluar otras experiencias de organización cooperativa.

Pero Mondragón no es la única experiencia con éxito. Aunque sea la más desarrollada y estable, en todo el mundo hay iniciativas exitosas de economías cooperativas de diversas escalas. En la semiperiferia del sistema mundial, un ejemplo notable es el conjunto de cooperativas del estado de Kerala (India), el cual adquirió notoriedad internacional en los últimos años. Los mecanismos de cooperación económica que han sustentado estas organizaciones desde su fundación, a finales de la década de 1960, son análogos a los que Mondragón utilizó. Como lo demuestra el detallado estudio de caso de una cooperativa de productores de cigarrillos de Kerala, hecho por Isaac, Franke y Raghavan (1998), los factores esenciales para sobrevivir frente a la competencia de las empresas capitalistas son una combinación de descentralización y colaboración entre cooperativas asociadas en red y la fidelidad al principio de participación democrática dentro de la cooperativa. El caso de las cooperativas de Kerala ilustra otro aspecto que no es tan evidente en el de Mondragón y que es muy importante en los estudios de caso incluidos en este libro. Se trata de que surgieron como resultado de un movimiento democrático de los campesinos de la región que procuraba hacer efectiva la ley de reforma agraria de 1969. El proceso de construcción y el éxito del movimiento crearon una combinación afortunada de «educación, activismo, optimismo y democracia» que dio lugar no sólo a las cooperativas, sino también a un conjunto de instituciones políticas, democráticas y progresistas, que es conocido como el «modelo de Kerala» (Isaac, Franke y Raghavan, 1998: 202). De esta forma, las cooperativas están insertas en un movimiento social amplio que, a su vez, se beneficia de la prosperidad de aquéllas, y existe continuidad entre la democracia participativa que impera en la esfera de la política en Kerala y la practicada en las cooperativas (Isaac, Franke y Raghavan, 1998: 198). Como afirma Hirschman (1984) en su fascinante análisis de las cooperativas en América Latina, esta transformación de la energía emancipadora, que empieza como movimientos sociales y se convierte en iniciativas

económicas solidarias y viceversa, es un fenómeno común a las experiencias cooperativas más duraderas. Como se verá a lo largo de los capítulos de este libro, este factor es fundamental para entender el éxito relativo de algunas de las cooperativas estudiadas.

*Asociativismo y socialismo:
del socialismo centralizado al socialismo de mercado*

Como explicamos en párrafos anteriores, las condiciones económicas, políticas y sociales contemporáneas son propicias para el resurgimiento del pensamiento asociativo y de las prácticas cooperativas. Este resurgimiento ha representado un desafío no sólo para las teorías y políticas liberales, sino también para las corrientes dominantes dentro de la tradición socialista. Como demostró Hodgson (1999), las teorías económicas socialistas tuvieron, desde que aparecieron a principios del siglo XIX hasta, por lo menos, mediados del siglo XX, una preferencia manifiesta por la planeación centralizada de la economía basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. En otras palabras, la tradición socialista sufrió, de acuerdo con Hodgson, de «agorafobia» —que significa literalmente miedo al mercado, y en sentido lato, miedo a los espacios abiertos— de la economía plural donde la competencia, en el mercado, tenga lugar.

En la práctica, esta posición fue adoptada por las economías socialistas más centralizadas, como la Unión Soviética, durante la mayor parte de su existencia. En el modelo soviético, lo que cada empresa producía era determinado por un plan anual elaborado mediante un proceso de consulta que implicaba a varios estratos de la burocracia estatal (Estrin y Winter, 1989: 127). Las decisiones sobre producción eran un proceso de negociación política en que las prioridades definidas por los dirigentes de la burocracia estatal, se imponían a través de planes que fijaban metas más altas que aquellas que las empresas podían lograr con los medios de los que disponían. Esto dio lugar a tres consecuencias muy conocidas: en primer lugar, la prioridad estatal de impulsar el crecimiento económico en vez de atender las necesidades de los consumidores provocó una escasez crítica de bienes de consumo y de medios para adquirirlos. En segundo lugar, los planes estrictos eran eficaces para forzar la utilización de los medios de producción disponibles, pero no constituían estímulos para innovar y aumentar la productividad. En tercer lugar, la dificultad para encontrar materias primas por medios legales llevaba a las empresas a comprarlos en el mercado negro, el cual también suministraba buena parte de los productos para los consumidores. De eso resultaba la coexistencia de un mercado negro sólido con la economía legal planificada (Estrin y Winter, 1989: 130). Como mostraron los acontecimientos de finales de los años ochenta y principios de los noventa, las presiones económicas creadas por estos tres

efectos, y porque sus consecuencias políticas eran insostenibles, llevaron al fracaso al sistema soviético.

Varias décadas antes del colapso soviético, pensadores socialistas (especialmente en Europa) y funcionarios estatales de algunos países de Europa del Este habían advertido sobre la inviabilidad del modelo soviético y trataron de replantear la relación entre socialismo y mercado. Así surgieron, alrededor de 1950, las primeras teorías y experiencias de lo que ahora se llama «socialismo de mercado» (Hodgson, 1999: 25). En la práctica, el intento más serio de encontrar una alternativa al modelo soviético se emprendió en Yugoslavia después de la ruptura de Tito con Stalin, en 1948. El «socialismo de mercado yugoslavo» se basaba en principios de descentralización de la producción y de participación de los trabajadores (Prout, 1985: 12). En vez de una economía completamente centralizada, en la que los medios de producción eran propiedad del Estado, en el modelo yugoslavo pertenecían a la sociedad, organizada en cooperativas de trabajadores democráticamente administradas, las cuales, a pesar de seguir las directrices de un plan general quinquenal establecido por el gobierno, estaban expuestas a los mecanismos de mercado. Sin embargo, en la práctica, el papel del Estado y de la planeación centralizada empezó a ser protagónico. En estas condiciones, la coexistencia entre planeación y mercado era tensa y acabó por volverse insostenible. Por razones idénticas, fracasaron las reformas en Hungría y Polonia a fines de los años sesenta e inicio de la década de 1970. Aunque estas reformas fueran experiencias menos ambiciosas y más vacilantes que la yugoslava, tenían en común haber intentado introducir mecanismos de mercado en una economía socialista.

En la época en que surgía la experiencia yugoslava, la teoría económica dentro de la tradición socialista empezó a elaborar modelos basados en el mercado que, no obstante, permitieran alcanzar los valores de igualdad y solidaridad. Tras los trabajos de Benjamin Ward, a mediados del siglo XX, la idea del socialismo de mercado, inspirada en el modelo de socialismo propuesto por Proudhon en la primera mitad del siglo XIX, fue debatida con creciente interés (Hodgson, 1999: 26). Este interés aumentó, como era de esperarse, con el fracaso del modelo de economía centralizada que había dominado el pensamiento y la práctica socialistas. Por esta razón, el modelo de socialismo de mercado atrajo una considerable atención durante la última década del siglo pasado, como lo demuestra la abundante bibliografía desarrollada sobre el tema.

La afirmación fundamental del socialismo de mercado consiste en que la forma viable y adecuada de perseguir los fines socialistas de solidaridad e igualdad es una combinación entre mecanismos de mercado y planeación económica, en la que el mercado tiene un papel preponderante (Le Grand y Estrin, 1989). Según esta perspectiva, no hay una relación necesaria entre mercado y capitalismo. El mercado es un mecanismo (el más eficiente que conocemos) de coordinación de las decisiones económicas descentralizadas. Por sí mismo, el mercado no genera

inevitablemente la desigualdad y alienación que caracterizan el capitalismo. Tales efectos son propios, de acuerdo con los defensores de este modelo, de los mercados capitalistas y no de los mercados en general (Le Grand y Estrin, 1989: 1). Es posible, por tanto, hacer reformas radicales en el régimen de la propiedad y en otras instituciones, de modo que los mercados faciliten la realización de los objetivos socialistas. Se exige, en especial, que las empresas sean propiedad de los trabajadores. Frente a los conocidos efectos igualitarios y democráticos de las cooperativas, explicados en las secciones anteriores, un mercado en el cual predominen las cooperativas y que sea regido por reglas básicas de redistribución de la riqueza (sin que esto signifique un retorno a la planeación económica que aniquile el mercado) puede promover simultáneamente la igualdad, la solidaridad y la libertad (Pierson, 1995).

El debate sobre modelos y experiencias concretas que combinen, por un lado, las ventajas del mercado y, por otro, las de la producción solidaria es hoy uno de los puntos de convergencia más activos de creación de alternativas a los modelos económicos convencionales. Como se constata en esta breve descripción, el socialismo de mercado consiste, fundamentalmente, en la reintroducción del asociativismo en la tradición socialista. Por ello, no es de sorprender que haya sido blanco de múltiples críticas, algunas dirigidas a sus elementos asociativistas y otras a la forma en que asume los objetivos socialistas. Puesto que la unidad económica privilegiada por este modelo es la cooperativa de trabajadores, se hicieron a aquél las mismas críticas sobre lo inviable de este tipo de organización económica que ya examinamos. En cuanto al elemento asociativista se formularon críticas a la timidez, más que a la inviabilidad, de la teoría. Hirst (1994), en particular, demostró convincentemente que no basta reorganizar la economía con base en cooperativas de trabajadores. Es necesario concebir, además, formas de coordinación entre las cooperativas, y entre éstas y las entidades estatales, para crear el tipo de regla de apoyo que caracteriza las experiencias exitosas, como la de Mondragón. En cuanto a las críticas que ponen en entredicho la posibilidad de alcanzar objetivos socialistas por medio del mercado, se ha señalado que éste produce desigualdad económica de manera inevitable y que genera tipos de sociabilidad individualista, siendo ambos efectos opuestos al socialismo (Cohen, 1994).

Además de los detalles del debate actual sobre el socialismo de mercado, para efecto del mapa de alternativas de producción que estamos elaborando, lo esencial es destacar la forma como ese debate ha reanimado la reflexión y las experiencias que pretenden combinar el asociativismo y el socialismo sin recurrir a formas inviables de planeación centralizada. Estas tentativas, sumadas a las que han surgido dentro de la tradición cooperativista, constituyen actualmente uno de los campos más interesantes de expansión de las alternativas de producción.

Las economías populares y el desarrollo alternativo en la periferia y en la semiperiferia

Las propuestas de desarrollo alternativo

La idea de desarrollo dominó las discusiones y las políticas económicas relativas a los países pobres durante más de medio siglo (Escobar, 1995; McMichael, 1996). Desde los primeros años después de la segunda Guerra Mundial, el objetivo declarado de los programas económicos nacionales de los países semiperiféricos y periféricos y de los programas de ayuda internacional emprendidos por países centrales y agencias financieras internacionales ha sido la aceleración del crecimiento económico de los países subdesarrollados como medio para «eliminar el foso» entre éstos y los países desarrollados (Cypher y Dietz, 1997). La historia de la idea y de los programas del desarrollo —que McMichael (1996) designó de manera apropiada como «proyecto de desarrollo»— está fuera de los objetivos de esta introducción. No obstante, para el estudio de la teoría del desarrollo alternativo es importante mencionar la justificación y el *modus operandi* de los programas de desarrollo, ya que la citada teoría fue formulada como reacción a estos. En términos generales, los proyectos de desarrollo económico fueron concebidos e implementados «a partir de la cima» (*top-down development*), con base en políticas trazadas e implantadas por agencias tecnocráticas nacionales e internacionales, sin la participación de las comunidades afectadas por esas políticas. Además, los planes de desarrollo estaban tradicionalmente centrados en la aceleración del crecimiento económico, principalmente del sector industrial (Cypher y Dietz, 1997). Este énfasis evidente en los resultados macroeconómicos implicó hacer a un lado otros objetivos sociales, económicos y políticos, como la participación democrática en la toma de decisiones, la distribución equitativa de los frutos del desarrollo y la preservación del ambiente.

La teoría del desarrollo alternativo está constituida por múltiples análisis y propuestas formulados por críticos de los postulados y los resultados de los programas de desarrollo convencionales. El origen de la teoría se remonta al inicio de la década de 1960, época en que, por todo el mundo, intelectuales, peritos en planeación económica y activistas, todos ellos críticos, empezaron a formular reflexiones y a organizar acciones en torno de las cuales se canalizó el descontento por el tratamiento tradicional que se daba al desarrollo. Algunos de los encuentros fundacionales fueron la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente (1972) —que dio lugar al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente— y el Seminario sobre Patrones de Utilización de los Recursos, el Medio Ambiente y las Estrategias para el Desarrollo, en Cocoyoc, México, en 1974, organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La idea de un desarrollo alternativo fue impulsada decisivamente a mediados de los años setenta

por la fundación sueca Dag Hammarskjöld (1975) y dio lugar a la Fundación Internacional de Alternativas de Desarrollo (1976), cuyos miembros incluían a muchos de los participantes de actos anteriores y cuyas publicaciones sintetizaron los pilares de la teoría. El debate sobre formas alternativas de desarrollo continuó en las décadas de 1980 y 1990 y hoy constituye una de las principales fuentes de energía e ideas en las críticas a la globalización neoliberal.

Los análisis teóricos y los trabajos empíricos que adoptan la perspectiva del desarrollo alternativo son muy variados.⁷ Sin embargo, todos comparten un conjunto de postulados y propuestas que constituyen la columna vertebral de la teoría. En primer lugar, el desarrollo alternativo está formulado con base en una crítica de fondo a la estricta racionalidad económica que inspiró el pensamiento y las políticas de desarrollo dominantes. Contra la idea de que la economía es una esfera independiente de la vida social, cuyo funcionamiento requiere del sacrificio de bienes y valores no económicos —sociales (igualdad), políticos (participación democrática), culturales (diversidad étnica) y naturales (el ambiente)—, el desarrollo alternativo subraya la necesidad de tratar la economía como parte integrante y dependiente de la sociedad y de subordinar los fines económicos a la protección de estos bienes y valores. En oposición al énfasis exclusivo de los programas de desarrollo en la aceleración de la tasa de crecimiento económico, el desarrollo alternativo destaca otros objetivos; está concebido como una forma de promover mejores condiciones de vida para la población en general, y para los sectores marginados en particular. «Si el desarrollo económico y social significa algo en absoluto, debe significar una mejoría sustancial en las condiciones de vida y sustento de la mayoría de las personas» (Friedman, 1992: 9). En este sentido, el desarrollo alternativo se inspira en los valores de igualdad y de la ciudadanía, es decir, en la inclusión plena de los sectores marginados en la producción y en el usufructo de los resultados del desarrollo. No obstante, al contrario de otras aproximaciones críticas —que expondremos en la próxima sección, y que no defienden un desarrollo alternativo sino alternativas al desarrollo—, esta línea de pensamiento y acción no rechaza la idea de crecimiento económico, sino que propone imponer límites y subordinarlos a imperativos no económicos. En segundo lugar, contra el desarrollo «a partir de arriba», esta perspectiva plantea un desarrollo de base, o de «abajo hacia arriba» (*bottom-up*). La iniciativa y el poder de

⁷ Una presentación de las principales líneas de desarrollo alternativo se encuentra en Friedman (1992) y McMichael (1996). Los trabajos a partir de esta perspectiva consisten, generalmente, en la presentación y análisis de estudios de caso fundados en investigación etnográfica y no procuran formular explícitamente una teoría general alternativa de la economía o del desarrollo. Una excepción es el trabajo de Friedman, que utilizamos en esta sección y que pretende «dar a la bibliografía sobre desarrollo alternativo lo que hasta ahora le ha hecho falta: un marco teórico explícito fuera de las teorías neoclásicas o keynesianas y, con esto, un punto de partida para la práctica» (1992: 8). No obstante, el esfuerzo por destacar los componentes teóricos básicos del desarrollo alternativo no debe ocultar que, a partir de esta perspectiva, la teoría, por un lado, y la práctica y el análisis empírico, por otro, están íntimamente ligados.

decisión sobre el desarrollo, lejos de ser competencia exclusiva del Estado y de las élites económicas, debe residir en la sociedad civil. En especial, frente a los efectos desiguales y de exclusión del modelo convencional de desarrollo, los actores de la búsqueda de alternativas deben ser las comunidades marginadas, las cuales han sido los objetos —y no los sujetos— declarados de los programas de desarrollo. En este sentido, la teoría propone como actores centrales del desarrollo a los sujetos colectivos, es decir, a las comunidades organizadas que procuran seguir adelante. El carácter colectivo del desarrollo de abajo hacia arriba genera un proceso de construcción de poder comunitario que puede crear el potencial para que los efectos de las iniciativas económicas populares alcancen la esfera política y generen un círculo virtuoso que haga frente a las causas estructurales de la marginación. En tercer lugar, el desarrollo alternativo privilegia la escala local como objeto de reflexión tanto como de acción social. Por esta razón, los trabajos producidos en este sentido han privilegiado el estudio etnográfico de comunidades marginadas y las propuestas resultantes tienden a sugerir que la acción local contrahegemónica debe concentrarse en el ámbito local de las comunidades estudiadas. En cuarto lugar, el desarrollo alternativo es escéptico, tanto en relación con una economía centrada exclusivamente en formas de producción capitalista como en relación con un régimen económico centralizado y controlado por el Estado. Ante estas formas de organización económica, propone alternativas basadas en iniciativas colectivas, generalmente en forma de empresas y organizaciones económicas populares de propiedad y gestión solidaria que tratan de oponerse, por un lado, a la separación entre capital y trabajo y, por otro, a la necesidad de recurrir a la ayuda estatal. De igual modo, las propuestas de desarrollo alternativo destacan las formas de producción e intercambio no capitalistas. Quijano (1998) y Friedman (1992), por ejemplo, subrayan la importancia de las actividades de trueque en las comunidades latinoamericanas marginadas. Estas actividades (como la preparación colectiva de alimentos, el cultivo comunitario de subsistencias, etc.) refuerzan los mecanismos de reciprocidad en las comunidades y permiten que sus miembros tengan acceso a bienes y servicios que su pobreza les impide adquirir en el mercado. Finalmente, en concordancia con su crítica al paternalismo estatal, el desarrollo alternativo favorece estrategias económicas autónomas. En los sectores populares, esto implica la promoción de iniciativas basadas en la autogestión de las empresas populares y la construcción del poder comunitario.

Como fácilmente se observa, las iniciativas económicas que caben en esta caracterización del desarrollo alternativo son muy variadas. Para efecto de esta introducción, basta indicar las principales líneas de pensamiento y acción, según las cuales las ideas de desarrollo alternativo han penetrado en la esfera de la producción. Distinguimos seis líneas que han sido puestas en práctica, tanto en la periferia y en la semiperiferia como en el centro del sistema mundial. En primer lugar, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG), comunidades

y sectores gubernamentales de la semiperiferia y de la periferia siguen promoviendo formas asociativas de producción (asociaciones de inquilinos, cooperativas de trabajadores, etc.), que procuran asegurar el acceso de las clases populares a bienes y servicios básicos. En segundo lugar, desde finales de la década de 1980, buena parte del dinamismo del desarrollo alternativo provino del movimiento ecologista, a través de las propuestas de «desarrollo sustentable». Desde que este concepto fue formulado en 1987, por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (conocida como Comisión Bruntland) —que lo definió como el tipo de desarrollo que «satisface las necesidades del presente sin poner en entredicho la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan sus necesidades»—, la cuestión de los límites ecológicos al crecimiento económico ha sido un tema dominante en el campo del desarrollo alternativo (Rao, 2000). Aunque ni el informe de la Comisión Bruntland ni la Conferencia de Río, reunida en 1992, hayan cuestionado la idea de desarrollo entendido como crecimiento económico, ambos documentos dieron un impulso decisivo al debate sobre la necesidad de imponer límites o transformar la producción para evitar la destrucción del ambiente (McMichael, 1996: 220). A pesar de que la cuestión del desarrollo sustentable dio lugar a profundas divisiones académicas y políticas (entre los países del norte y del sur y entre entidades políticas dentro de los países), su visibilidad ha incomodado la perpetuación del proyecto de desarrollo capitalista convencional, tanto en el centro como en la semiperiferia y la periferia (Douthwaite, 1999). En tercer lugar, gracias al activismo de movimientos feministas, el problema de la exclusión de las mujeres de los programas de desarrollo convencionales pasó a ser una fuente de dinamismo en las propuestas de desarrollo alternativo. Por medio de redes y encuentros internacionales, se ha consolidado, desde mediados de los años setenta, el movimiento Mujeres en el Desarrollo (Women in Development, WID), cuyo acto fundador fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, en la ciudad de México, en 1975 (McMichael, 1996: 227). Los objetivos del movimiento son: lograr el reconocimiento de la contribución del trabajo femenino en el desarrollo económico⁸ y promover la incorporación de las mujeres

⁸ Uno de los efectos más interesantes de la lucha por el reconocimiento del trabajo femenino (especialmente del trabajo doméstico que, por su invisibilidad pública, queda fuera de los cálculos económicos convencionales, como el producto interno bruto) ha sido el cuestionamiento del propio concepto de actividad económica y de la forma de medir lo que cuenta como producción. En este sentido, como lo presenta Benería (1996) en su tentativa de medir el impacto económico del trabajo doméstico de las mujeres, ampliar el concepto de producción —y de la economía en general— para incluir el trabajo no remunerado es fundamental para la formulación de concepciones políticas económicas que eliminen la discriminación contra las mujeres de los programas económicos convencionales. Las propuestas de desarrollo alternativo han demostrado convincentemente que el concepto y las medidas convencionales de la producción son inadecuados. Como sostienen Mander y Goldsmith (1996), con base en el trabajo de Halstead y Cobb (1996), el PIB y el PNB son inadecuados porque, de acuerdo con estas medidas, «actividades tan negativas como la destrucción de los recursos naturales, la construcción de más prisiones y la fabricación de bombas son medidas de la solidez de la economía. Entretanto, actividades mucho más deseables, como el trabajo doméstico no remunerado, cuidar a los niños, la

Revisar Salgado
Córdoba, la tierra

a los procesos de desarrollo por medio de políticas que aligeren la doble carga del trabajo doméstico y del trabajo asalariado que implica la entrada de las mujeres al mercado de trabajo. En cuarto lugar, un número creciente de programas de apoyo económico a las clases populares de la periferia y de la semiperiferia se ha concentrado en la prestación de servicios financieros a pequeña escala, especialmente microcréditos. El objetivo central de estos programas es facilitar el acceso de familias pobres a pequeñas cantidades de dinero que les permitan emprender o sostener actividades económicas productivas (Wright, 2000). Los programas de microcrédito han sido utilizados con especial intensidad en el sudeste asiático, particularmente en Bangladesh y en la India, y pasaron incluso a ser uno de los distintivos del Banco Mundial⁹ en la lucha contra la pobreza. Desde el punto de vista del desarrollo alternativo, la proliferación de programas de microcrédito es un arma de dos filos. Por un lado, los microcréditos en muchos casos se vuelven medios de subsistencia indispensables que tienen efecto directo sobre el nivel de vida de sus beneficiarios y, con frecuencia, van acompañados de programas de educación y desarrollo comunitario. Sin embargo, por otro lado, algunos defensores del microcrédito y algunas organizaciones que implementan este tipo de programas (Wright, 2000), toman los créditos como fines en sí mismos y rechazan enfáticamente cualquier tentativa de asociar la prestación de servicios financieros a los pobres con proyectos de construcción de poder comunitario. Los pobres, de acuerdo con esta perspectiva, sólo están interesados en recibir dinero y no en ser adoctrinados u organizados. Como se verifica con facilidad, el problema de este concepto del microcrédito, utilitarista y estrecho, consiste en que concibe la incorporación marginal, individual y precaria al capitalismo como la única alternativa para los actores económicos y populares y, de esta forma, adopta la lectura y las políticas neoliberales sobre la marginación y la informalidad (De Soto, 1989). En quinto lugar, movimientos sociales populares, tanto en el campo como en las ciudades, han reivindicado la acción directa, legal o ilegal, para promover que las clases subordinadas tengan acceso a recursos como la tierra y la habitación, que les permitan emprender actividades de producción alternativas. Probablemente el ejemplo actual más conocido de este tipo de estrategia es el Movimiento de los Sin Tierra (MST), en Brasil, el cual se estudia con detalle en cuatro de los trabajos incluidos en este libro, escritos a partir de perspectivas distintas por Navarro, Lopes, Carvalho y Singer. De la misma forma en que el MST ha impulsado la ocupación de tierras desocupadas con miras a una reforma agraria efectiva y a la promoción de formas de producción alternativas en Brasil, numerosas organizaciones y grupos de

prestación de servicios a la comunidad o la producción de artículos para uso directo [...] no son del todo registrados por las estadísticas».

⁹ De hecho, uno de esos programas, con sede en Yemen, fue escogido por el Banco Mundial como uno de los cuatro casos modelo presentados a los ministros de finanzas y de desarrollo reunidos en la asamblea mundial del Banco Mundial y del FMI, en Washington, en abril de 2000, <www.worldbank.org/news/pressrelease>.

diferentes partes del mundo promueven, hoy en día, la ocupación de edificaciones urbanas vacías con el fin de proporcionar un techo a quienes no lo poseen (Corr, 1999). Finalmente, como respuesta a los efectos perversos de la globalización sobre comunidades de todo el mundo, una vertiente importante del movimiento de crítica a la globalización propuso variadísimas tácticas de «retorno al lugar» o «relocalización» (Mander y Goldsmith, 1996). Entre las estrategias de regreso al desarrollo local está la creación de bancos comunitarios, campañas de publicidad para invitar a los consumidores a comprar únicamente lo que se produce en su localidad, formas de producción agrícola destinadas tan sólo al mercado local y al intercambio de servicios entre miembros de la comunidad con base en sistemas alternativos de medición del valor del trabajo (diferente del valor monetario) fundados en el principio de reciprocidad (Norberg-Hodge, 1996).

Los vacíos en el planteamiento del desarrollo alternativo

Las diferentes propuestas de desarrollo alternativo han tenido una repercusión importante en el pensamiento y las políticas económicas de la semiperiferia y la periferia y, como lo demuestra el resumen de la sección anterior, hoy forman parte de las estrategias y los argumentos contra la globalización neoliberal, tanto en esas zonas como en el centro del sistema mundial. Además de haber dado lugar a miles de proyectos económicos comunitarios, las propuestas de este tipo influyeron notoriamente en la transformación gradual del enfoque de numerosas ONG y gobiernos en relación con el desarrollo. Incluso, tuvieron un papel en la modificación, bastante lenta, de la aproximación ortodoxa a los programas de desarrollo emprendidos por agencias internacionales, como sugiere la preocupación declarada del Banco Mundial mediante programas de desarrollo comunitario y de microcréditos en la década de 1990. La visión del desarrollo alternativo también contribuyó a introducir, en múltiples foros y tratados internacionales, temas centrales dejados de lado por el planteamiento ortodoxo, como la preservación del ambiente, el respeto por la diversidad cultural y el efecto del desarrollo económico convencional sobre hombres y mujeres de los países pobres.

[No obstante, las propuestas tienen una limitación importante para la construcción de alternativas económicas emancipadoras, derivada del énfasis exclusivo en la escala local. Si bien esta orientación ha permitido al desarrollo alternativo ubicar en el centro de la discusión los efectos concretos de los programas de desarrollo y abogar por la transferencia de poder hacia actores locales, también llevó a desligarlo de fenómenos y movimientos regionales, nacionales y globales. Esta concentración en el lugar se sustenta en un concepto de comunidad como colectividad cerrada e indiferente, cuyo aislamiento garantiza el carácter alternativo de sus iniciativas económicas. De acuerdo con esta visión, la marginación de los sectores

populares crea las condiciones para que haya y sean deseables las economías alternativas comunitarias que operan sin conexión con la sociedad y la economía hegemónicas. Esto es especialmente notorio en los trabajos sobre economía informal que, con frecuencia, se presenta como un conjunto de actividades emprendidas exclusivamente por y para sectores populares y, por consiguiente, separado de la economía formal de la que dependen las clases media y alta. Esta visión dualista no sólo es incorrecta desde el punto de vista fáctico —puesto que, como demuestran numerosos estudios, existen estrechas relaciones de dependencia mutua entre las actividades económicas informales y formales (Portes, Castells y Benton, 1989; Cross, 1998)—, sino que también es contraproducente desde la práctica, porque limita el campo de acción y expansión de las formas alternativas de producción, consumo y distribución de bienes o servicios a los sectores sociales y a las actividades económicas marginadas. Un ejemplo reciente de esta tendencia se encuentra en la contribución de Burbach (1997) al debate sobre las economías populares:

En las zonas del mundo que el capitalismo despreció, está ganando terreno un nuevo modo de producción constituido por las que podríamos designar como «economías populares», y que también denominamos «economías posmodernas» (Burbach, Núñez y Kagarlitsky, 1997). Estas economías no compiten ni pueden competir con el capital transnacional en el proceso de globalización. Ocupan las márgenes, aprovechando las actividades que el mundo transnacional decide despreciar. Este proceso histórico se asemeja a la transición del feudalismo al capitalismo. El capitalismo primeramente garantizó las márgenes del feudalismo, y avanzó lentamente hasta que se convirtió en el modo de producción dominante. (Burbach, 1997: 18-19.)

El problema con esta perspectiva es que, como se constata claramente en los estudios de caso sobre las cooperativas de la India, Mozambique y Colombia incluidos en este volumen, las organizaciones económicas populares con frecuencia necesitan «competir con el capital transnacional en el proceso de la globalización» para mantenerse vivas y conseguir sus objetivos emancipadores. En efecto, como lo demuestra el caso de las cooperativas de recicladores de Colombia, cuya actividad informal está siendo colonizada por grandes empresas de limpieza, el proceso de la semiperiferia y la periferia es, con bastante frecuencia, el opuesto al descrito por Burbach, es decir, la colonización, por parte del capitalismo global, de las actividades económicas y de las zonas geográficas que hasta ahora habían permanecido en sus márgenes. En estos casos, sólo una articulación de la acción local con estrategias alternativas de incorporación o resistencia a escala regional, nacional o global puede evitar la extinción de las iniciativas locales que se enfrentan a la competencia capitalista.

Por lo tanto, una de las tareas urgentes de los múltiples enfoques que aquí tratamos con el tema general de desarrollo alternativo es formular modos de

pensamiento y acción que sean ambiciosos en términos de escala, es decir, que sean capaces de actuar a escala local, regional, nacional, e incluso global, dependiendo de las necesidades de las iniciativas concretas. Para ello, es necesario pasar de la idea de la comunidad como colectividad cerrada y estática (comunidad-fortaleza) hacia un concepto de comunidad como entidad viva y dinámica, abierta simultáneamente al contacto y a la solidaridad con otras comunidades, a diferentes escalas, y decidida a defender las alternativas contrahegemónicas que surjan en su interior (comunidades-amiba) (Santos, 1995: 485). Una estrategia monolítica de relocalización como respuesta a la globalización (Mander y Goldsmith, 1996) puede ser no solamente inviable —dada la profunda imbricación actual entre lo local y lo global—, sino también indeseable, porque la solidaridad generada en la comunidad no se extiende a miembros de otras comunidades. Este tipo de solidaridad entre alternativas locales es fundamental para su supervivencia y para la consolidación gradual de una globalización cosmopolita. En el campo de la producción, la fragilidad de las alternativas hace necesaria su articulación entre sí —en condiciones negociadas para evitar su cooptación y desaparición—, con el Estado y con el sector capitalista. Esta articulación de economías plurales a diferentes escalas, que no desvirtúen las alternativas no capitalistas, es el principal desafío que enfrentan hoy movimientos y organizaciones de todo tipo que buscan otro tipo de desarrollo.]

En busca de alternativas para el desarrollo

[Los orígenes de las discusiones y de las prácticas sobre alternativas de desarrollo están próximos a los del desarrollo alternativo. De hecho, los autores y organizaciones que abogan por las primeras formulan propuestas que coinciden parcialmente con las de los defensores del segundo —el énfasis en el lugar, la promoción de la autonomía comunitaria, etc.—. No obstante, al contrario de la visión del desarrollo alternativo —que propone modificaciones y límites al crecimiento, pero no cuestiona la propia idea de crecimiento económico—, las propuestas de alternativas al desarrollo radicalizan la crítica a la noción de crecimiento y, por consiguiente, exploran opciones posdesarrollistas.] Escobar menciona estas dos características y localiza sus fuentes de la siguiente forma:

Desde mediados y finales de la década de los ochenta [...] surgió un conjunto de trabajos relativamente coherente que destaca el papel de los movimientos de base, el conocimiento local y el poder popular en la transformación del desarrollo. Los autores que representan esta tendencia afirman que no están interesados en alternativas de desarrollo, pero sí en alternativas al desarrollo, es decir, en el rechazo total al paradigma. (Escobar, 1995: 215.)

[En la sección anterior explicamos el componente comunitario, popular y local; en ésta nos concentraremos en lo específico de las alternativas al desarrollo, es decir, en el contenido y las implicaciones del rechazo al paradigma del desarrollo económico. Probablemente la mejor forma de entenderlo sea enfrentar sus tesis ecológicas y feministas con propuestas ecológicas y feministas de desarrollo alternativo. En cuanto a lo primero, las posiciones ecologistas posdesarrollistas hacen una crítica radical a la idea de desarrollo sustentable. En los términos contundentes de Daly, «el desarrollo sustentable es imposible» (1996: 192). Tal como se utiliza actualmente, el término «desarrollo sustentable» equivale a «crecimiento sustentable» que, de acuerdo con Daly, es una contradicción. El crecimiento económico es imposible de sostener sin destruir las condiciones de vida sobre la Tierra. Según esta perspectiva, es imperioso cambiar la concepción de desarrollo. El único tipo de desarrollo sustentable es el «desarrollo sin crecimiento: mejoría con base física y económica que se mantiene en estado estable [...] dentro de las capacidades de regeneración y asimilación del ecosistema» (Daly, 1996: 193). El desarrollo entendido como realización de potenciales, como pasaje a un estado diferente y mejor, está lejos de la idea de desarrollo como crecimiento, como incremento. Las actividades económicas pueden, en este sentido, desarrollarse sin crecer.]

Una crítica paralela la han hecho las corrientes feministas contra la idea de incorporación de las mujeres al desarrollo. Contra la reivindicación de la importancia de las mujeres en el desarrollo como crecimiento (Women in Development, WID), autores y activistas feministas proponen el abandono del proyecto eurocéntrico, jerárquico y patriarcal de desarrollo. Según esta perspectiva —conocida como ecofeminismo (Women, Environment, and Alternative Development, WED)—, «la tarea no es solamente incorporar a las mujeres al modelo conocido, sino establecer un nuevo paradigma de desarrollo» (Harcourt, 1994: 5). Esto implica una transformación de la idea de desarrollo, basada en la recuperación de formas de entender el mundo que fueron marginadas por el modelo dominante, en las cuales las actividades económicas son solamente una parte de un conjunto de prácticas culturales a las que están subordinadas (McMichael, 1996). Tal como lo desarrollaron algunos de sus exponentes más representativos (Shiva y Mies, 1993), el ecofeminismo implica detener el desarrollo como crecimiento y adoptar un enfoque que dé prioridad a los medios básicos de subsistencia y esté centrado en las mujeres y en los niños.

[La alusión a formas alternativas de conocimiento nos lleva a otro elemento central de las alternativas al desarrollo. Se trata de la reivindicación de la diversidad cultural y de la diversidad de formas de producir y de entender la producción, que existen hoy por todo el mundo, a pesar de la expansión de la economía capitalista y de la ciencia moderna. Ante la evidencia de los efectos sociales y ambientales perversos de la producción capitalista y de la cultura materialista e instrumental que la torna posible, la fuente de alternativas al desarrollo se encuentra

en las culturas híbridas o minoritarias, de las cuales «pueden emerger otras formas de construir economías, de satisfacer las necesidades básicas, de vivir en sociedad» (Escobar, 1995: 225). Estas culturas pueden, entonces, subvertir la hegemonía del capitalismo y del conocimiento moderno. Por esta razón, según esta perspectiva, «la diversidad cultural es uno de los hechos políticos esenciales de nuestra época» (*idem*).

La resistencia al desarrollo como crecimiento y la formulación de alternativas basadas en culturas no hegemónicas sigue una tradición de pensamiento y acción que tuvo sus manifestaciones más importantes en la lucha contra el colonialismo. Probablemente, el ejemplo más destacado sea la idea del *swadeshi*, elaborada por Gandhi en el contexto de la lucha del pueblo indio contra el colonialismo británico, la cual se comenta en el capítulo de Sethi incluido en este volumen. En sentido estricto, *swadeshi* significa autonomía económica local basada en el «espíritu que nos exige que sirvamos preferentemente a nuestros vecinos inmediatos y que usemos las cosas producidas a nuestro alrededor en vez de las producidas en lugares remotos» (Gandhi, 1967: v). Esta estrategia de autonomía local fue crucial para el éxito de la lucha por la independencia de la India, la cual tomó impulso cuando los indios, exhortados por Gandhi, se rehusaron a comprar la sal vendida por los ingleses y debilitaron, de esta manera, la base económica del imperio británico. Sin embargo, como demuestra Kumar (1996), *swadeshi* es una forma de ver el mundo que implica alteraciones más profundas que la de la economía local. *Swadeshi* implica una actitud antidesarrollista frente a la producción y una actitud antimaterialista en relación con el consumo. Una vez que, de acuerdo con Gandhi, existe lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la ambición de todos, una alternativa al desarrollo implica una forma de ver el mundo que privilegie la producción de bienes para consumo básico, en vez de la producción de nuevas necesidades y de artículos para satisfacerlas a cambio de dinero.

Las propuestas que abogan por la superación del paradigma del desarrollo son hoy las más dinámicas y promisorias fuentes de alternativas de producción no capitalistas. En ellas participa un caleidoscopio de organizaciones y movimientos de todo el mundo, implicado en luchas muy diversas que incluyen la resistencia de grupos indígenas de todo el mundo a los proyectos de desarrollo económico que ponen en peligro su cultura y, con ella, su supervivencia física, como la lucha del pueblo U'wa, en Colombia, contra la explotación por parte de la Occidental Petroleum en sus territorios ancestrales. Luchas similares, por la afirmación cultural y la protección del ambiente, a partir de una perspectiva antidesarrollista, proliferan actualmente en todo el mundo, impulsadas por una combinación de activismo local y redes de activismo global. Otros ejemplos visibles son el movimiento de los chipkos, en la India, contra la tala comercial de árboles, y la resistencia, en el mismo país, a la construcción de la represa en el río Narmada.

A pesar de que estos y otros movimientos muestran claramente los beneficios de la articulación de luchas locales y redes de solidaridad, nacionales e internacionales, en la búsqueda de alternativas al desarrollo capitalista global, en buena parte de la bibliografía y los programas posdesarrollistas hay un énfasis casi exclusivo en la escala local, comunitaria. En este sentido, las propuestas posdesarrollistas se exponen a riesgos semejantes a los que señalamos a propósito del desarrollo alternativo, es decir, a la reubicación de la comunidad y de la cultura local y al abandono de las aspiraciones de solidaridad más allá de la esfera local. Este riesgo es evidente, especialmente —y de hecho, celebrado— en algunas propuestas posdesarrollistas, basadas en un posmodernismo hiperdesconstructivista que niega la posibilidad de crear diálogos interculturales y de extender el alcance del pensamiento y de la acción más allá del ámbito local (Esteve y Prakash, 1998). Este radicalismo de lo local es producto de la construcción de dicotomías —«el pueblo» contra «los otros», tradicional contra moderno, sociedad civil contra Estado, comunidad contra sociedad, local contra global, sabiduría popular contra conocimiento moderno— en las que no cabe la posibilidad de un término medio ni las propuestas de articulación entre los términos confrontados. El resultado es un rechazo completo a cualquier forma de pensamiento y acción globales, incluso a aquellos que tratan de establecer nexos de solidaridad entre luchas locales. A la «fantasía del pensamiento global» se opone la celebración de la diversidad local (Esteve y Prakash, 1998: 20).

Aunque las alternativas al desarrollo dependan, en gran medida, de la defensa de las alternativas locales y de las formas de vida y de conocimiento anticapitalistas que éstas puedan representar, el pensamiento y la acción posdesarrollista tienen mucho que ganar si —como muestran las luchas de éxito que articulan el activismo social, nacional y global—, en vez de celebrar incondicionalmente la diversidad local, se esfuerzan por desarrollar propuestas que se desplacen a través de todas las escalas, dependiendo de las necesidades de la lucha concreta. La diversidad cultural que puede impulsar la búsqueda de alternativas al desarrollo «no es una fuerza estática, sino que es transformada y transformadora» (Escobar, 1995: 226). En este sentido, las comunidades capaces de impulsar alternativas al desarrollo son las comunidades-amiba y no las comunidades-fortaleza. Desde el punto de vista posdesarrollista, es necesario formular, contra el paradigma capitalista, un paradigma ecosocialista cosmopolita, en que los *topoi* privilegiados sean la democracia, la ecología socialista, el antiproductivismo y la diversidad cultural (Santos, 1995: 484). De lo que se trata, en fin, para utilizar la afortunada expresión de la tesis de McMichael (1996), es de luchar por un «localismo cosmopolita» y plural, en el que las estrategias antidesarrollistas, de desarrollo alternativo, de cooperativismo y de socialismo asociativo, entre otras, generen espacios no capitalistas que apunten hacia una transformación gradual de la producción y de la sociabilidad hacia formas más igualitarias, solidarias y sustentables.

2. LOS ESTUDIOS DE CASO

Con base en el mapa exhaustivo de alternativas de construcción que presentamos, en las siguientes páginas situamos los 10 estudios de caso que componen este volumen. Para eso, dividimos lo que resta de esta introducción en dos secciones. En la primera, con la finalidad de orientar al lector, describimos muy brevemente cada uno de los estudios; en la segunda, con base en los estudios de caso y a manera de conclusión, formulamos nueve tesis para debate en relación con lo que consideramos son los principales problemas comunes en los diferentes capítulos de este libro.

Antes es necesario hacer dos aclaraciones: por un lado, los estudios de caso no cubren todos los tópicos incluidos en el mapa que elaboramos en las secciones anteriores. Por eso, aunque sirva para situarlos, su función es ampliar el espectro de alternativas más allá de las que están explícitas en estos estudios. Por otro lado, de acuerdo con el espíritu que anima el proyecto de investigación que dio lugar a este libro, los estudios de caso son muy diversos, tanto en su contenido —el tipo de iniciativa, la situación geográfica, etc.— como en el enfoque y hasta en el lenguaje utilizado por cada uno de sus autores. Como el lector podrá verificar, algunos capítulos están más próximos al estilo académico, mientras que otros están escritos desde la perspectiva del activista implicado en las luchas que analiza. Mientras algunos estudian experiencias a pequeña escala, otros analizan iniciativas emprendidas a escala regional e incluso nacional. En nuestra opinión, la diversidad de estudios de caso y el que éstos hayan sido realizados desde una perspectiva comparada (y en diálogo explícito entre sus autores), en países de la semiperiferia y de la periferia (Sudáfrica, Brasil, Colombia, India, Mozambique y Portugal) constituyen una de las contribuciones centrales de este libro. De igual modo, aunque sea claro que los autores analizan los casos con miras a aumentar el potencial emancipador de las experiencias estudiadas, las opiniones sobre temas comunes son diversas. Por esta razón, las tesis que formulamos en las conclusiones no deben entenderse como el resultado de un consenso entre los autores de los diferentes capítulos, sino como nuestro esfuerzo de síntesis y como una invitación al debate con base en la lectura de los textos.

El libro está dividido en cuatro partes. En la primera, Paul Singer (de Brasil) y Harsh Sethi (de la India) analizan experiencias de economía solidaria. En la segunda, Heinz Klug (de Sudáfrica), Zander Navarro, Horacio Martins de Carvalho y João Marcos Lopes (los tres de Brasil) estudian formas alternativas de acceso a la tierra y a la producción económica rural. En la tercera, César Rodríguez (de Colombia), Sharit Bhowmik (de la India), Teresa Cruz e Silva (de Mozambique) y Alberto Melo (de Portugal) presentan sus estudios de caso sobre asociaciones y cooperativas. En la cuarta, Aníbal Quijano (de Perú), como analista invitado, expone sus observaciones sobre los resultados de los estudios de caso y

sus reflexiones generales sobre el tema de las alternativas de producción. Ahora, presentamos lo esencial de los estudios que componen las tres primeras secciones.

El capítulo de Singer empieza con una caracterización general de la economía solidaria como modo de producción basado en el modelo cooperativo descrito en esta introducción. Para ilustrar el funcionamiento de la economía solidaria en Brasil, Singer analiza con detalle cuatro casos de experiencias cooperativas: la transformación de una fábrica de zapatos al borde de la bancarrota en una cooperativa de trabajadores en São Paulo, al inicio de los años noventa, y el posterior surgimiento de una asociación nacional de trabajadores cooperativos; la creación de una asociación nacional de cooperativas del sector metalúrgico, impulsada por el sindicato nacional de esa industria en 1999; la autogestión económica colectiva en los asentamientos del Movimiento de los Sin Tierra; y un conjunto de iniciativas emprendidas por la Iglesia católica brasileña, ONG y universidades para promover la creación de cooperativas de todo tipo en los sectores populares durante la década de 1990, particularmente mediante esfuerzos organizados de asesoría y apoyo prestados por las «incubadoras de cooperativas». Con base en el análisis de estos estudios de caso, Singer concluye que la organización de cooperativas en redes de mutuo apoyo, combinadas con el auxilio externo de sindicatos, organizaciones progresistas y movimientos sociales, puede dar lugar a la expansión de la economía solidaria en Brasil. En este sentido, es posible que la economía solidaria vaya más allá de la misión principal que ha cumplido hasta ahora, es decir, aliviar la situación generalizada de desempleo asociada a los efectos de la globalización neoliberal en Brasil.

El trabajo de Sethi examina la forma cómo las ideas de autonomía e identidad cultural en la India, resumidas en la filosofía gandhiana de *swadeshi*, pueden contraponerse a la globalización neoliberal en ese país. Para ello, el autor hace un balance general de los sucesos y de las tendencias económicas de la India desde el inicio de la liberalización económica, en los primeros años de la década de 1990, y muestra que, aunque la apertura económica de la India haya impulsado el crecimiento, también aumentó la desigualdad económica y la inseguridad en el trabajo. Al contrario de lo que sucede en otros países, donde la resistencia popular a los programas de ajuste estructural no ha tenido un efecto importante, en la India los sindicatos y organizaciones de base lograron, por lo menos, desacelerar la apertura y, de esta manera, evitar parcialmente la perturbación social que estos programas producen. No obstante, el poder político y económico permanece en manos de los partidarios de la continuación de la integración de la India a la globalización neoliberal. En estas condiciones, el autor indaga cuál es el papel que podría desempeñar el concepto de *swadeshi* como medio de resistencia y de creación de alternativas económicas.

El capítulo escrito por Klug estudia una institución creada por el gobierno sudáfricano en 1996 para permitir que las comunidades rurales marginadas tengan

acceso a la tierra y puedan producir colectivamente en el contexto del programa gubernamental de reforma agraria. De acuerdo con las reglas de estas instituciones —denominadas Asociaciones de Propiedad Comunitaria (Community Property Associations)—, las comunidades pueden ser dueñas de tierras entregadas por el gobierno para crear asociaciones regidas por reglas de autogobierno, las cuales, a su vez, deben respetar principios constitucionales mínimos que garanticen la participación democrática y la igualdad entre los miembros con énfasis especial en la igualdad entre hombres y mujeres. El autor analiza las asociaciones creadas por las comunidades sudafricanas con base en este programa y destaca cómo las reglas internas de las asociaciones interactúan —y a veces chocan— con el orden jerárquico establecido por las tradiciones de algunos pueblos sudafricanos. Klug destaca el papel del acceso a la tierra como forma de emancipación social e investiga el potencial transformador de las asociaciones estudiadas.

En su estudio sobre el Movimiento de los Sin Tierra (MST), Navarro descubre el origen del movimiento y hace un balance de sus realizaciones a lo largo de sus dos décadas de existencia. El autor subraya la forma en que el movimiento, por medio de un activismo constante y de tácticas exitosas de ocupación de tierras, revitalizó la lucha por la reforma agraria y obtuvo conquistas fundamentales para los campesinos sin tierra en una de las sociedades con más desigualdades en el mundo. Asimismo, Navarro destaca que la proliferación de los asentamientos del MST dio lugar a la democratización de los municipios brasileños, gracias a la capacidad del movimiento para enfrentar a la maquinaria política que tradicionalmente atrajo el voto de los campesinos. No obstante, de acuerdo con el autor, el MST tiene una estructura interna jerarquizada, gracias a la cual la participación y la discordancia son eficazmente limitadas. Para Navarro, el control social y el autoritarismo de esta organización interna ponen en duda el carácter emancipador del movimiento. Para desarrollar su potencial emancipador, concluye, el MST debe democratizarse internamente y ajustar sus estrategias a las nuevas circunstancias políticas brasileñas, particularmente a las oportunidades de colaboración fructífera con el Estado.

Carvalho presenta una visión distinta del MST. Como Navarro, destaca las realizaciones de éste en términos del número de asentamientos creados y de familias beneficiadas con la redistribución de las tierras ocupadas y con la expansión geográfica de la reforma agraria por varias regiones de Brasil. Para Carvalho, estas conquistas fueron posibles gracias a la formación de una identidad de valores entre los miles de miembros del movimiento, que hizo posible una movilización firme, necesaria para realizar acciones directas de ocupación de tierras. Sin embargo, al contrario de lo que expone Navarro, Carvalho sostiene que la organización interna del movimiento no es vertical, sino semejante a una sociedad en red, en la que los medios convencionales de lucha electoral no se utilizan para renovar los cuadros dirigentes. Además de eso, de acuerdo con el autor, hay una gran variedad

en las formas de gestión y de convivencia en los muchos asentamientos del MST. Para Carvalho, la emancipación social es un proceso continuo, y las movilizaciones y transformaciones del MST son parte del proceso sustentable que prosigue hasta ahora y que busca la modificación de los padrones de propiedad de la tierra y del modelo económico. Al capítulo de Carvalho le sigue una breve réplica de Navarro.

Siguiendo con el análisis del MST, el estudio de caso de Lopes describe con detalle cómo los aproximadamente 5 000 campesinos, pertenecientes al movimiento que ocupó una extensa propiedad en el sur de Brasil en 1996, concibieron la construcción de una ciudad alternativa en el territorio donde se establecieron. Después de que la institución estatal encargada de promover la reforma agraria les entregó la tierra ocupada, los habitantes del asentamiento debatieron, con apoyo de ONG y entidades estatales, el tipo de ciudad que querían. Propusieron utilizar las ruinas de una antigua ciudad-campamento en la zona, edificada décadas antes para albergar a los trabajadores que construyeron la represa de la región. El autor analiza el choque del concepto de ciudad de los sin tierra, un híbrido entre lo rural y lo urbano, con el concepto convencional de los funcionarios estatales y de los arquitectos de las ONG que los apoyaban. De este choque de formas de conocimiento y de vida surgieron, no obstante, alternativas de organización del espacio y de la producción que todavía ahora están en proceso de construcción.

Como demuestra esta breve presentación de los estudios de Navarro, Carvalho y Lopes —que se aproximan a uno de los casos estudiados por Singer sobre las cooperativas creadas por los sin tierra—, este libro contiene un sustancioso debate sobre el MST; sin embargo, no es nuestro objetivo intervenir en él. En los párrafos anteriores destacamos los ejes centrales de la discusión, que retomaremos al ilustrar las tesis que presentamos en la parte final. En todo caso, para que se profundicen los objetivos emancipadores que originan el MST, nos parece importante que el debate tenga lugar.

En su contribución al presente volumen, Rodríguez estudia un caso específico de cooperativismo que abarca a uno de los sectores más marginados de la sociedad colombiana: los recicladores de basura. Un sector minoritario de los aproximadamente 300 000 recicladores de basura colombianos organizó, a lo largo de 20 años, con el apoyo de entidades privadas y estatales, alrededor de 100 cooperativas de trabajadores, así como redes regionales y nacionales de cooperativas para transformar las condiciones de explotación del mercado del reciclaje y mejorar la calidad de vida de sus miembros. Este capítulo analiza el origen, las realizaciones y dificultades de las cooperativas, con la finalidad de responder a las preguntas más generales sobre las condiciones en que surgen organizaciones económicas que, como las cooperativas de trabajadores, desafían la división entre capital y trabajo propia de las empresas capitalistas y, al mismo tiempo, sean capaces de sobrevivir en un mercado cada vez más globalizado. El autor demuestra que las cooperativas de recicladores generan beneficios económicos y sociales sustanciales para los

socios. No obstante, la investigación también revela que las cooperativas fueron incapaces de transformar la estructura del mercado de reciclaje, el cual sigue beneficiando a las grandes empresas que compran el material reciclado. A lo largo del estudio se enfatiza la necesidad de las cooperativas en general, y de las de recicladores en particular, de formar redes de apoyo mutuo con otras cooperativas, con entidades estatales y, en ciertas condiciones, con empresas capitalistas, tanto en su país de origen como en el exterior. Este vínculo entre lo local y lo global puede ayudar a avanzar en la dirección de cumplir la promesa frustrada del cooperativismo como forma de globalización contrahegemónica.

Bhowmik también estudia experiencias de cooperativismo en sectores marginados de la clase trabajadora. Su trabajo está compuesto por una introducción sobre el cooperativismo y la emancipación social, seguida de cuatro estudios de caso realizados en dos ciudades de la India (Ahmedabad y Calcuta), que permiten analizar variantes y sacar conclusiones sobre las razones de éxito de algunas cooperativas y el fracaso de otras. El estudio sobre Ahmedabad trata de la experiencia de mujeres recicladoras de basura que formaron cooperativas con la ayuda de un sindicato de trabajadoras. Los tres estudios realizados en Calcuta se refieren a iniciativas de trabajadores de fábricas que quebraron y que decidieron comprar y administrar de forma cooperativa. Al comparar los cuatro estudios de caso, Bhowmik subraya el papel esencial que pueden desempeñar los sindicatos en la promoción de experiencias exitosas. El autor destaca, asimismo, la democracia interna de las cooperativas y la actitud del Estado en relación con ellas como factores importantes para el éxito o fracaso de las mismas.

El capítulo de Cruz e Silva sigue la línea de discusión de los trabajos de Rodríguez y Bhowmik en cuanto al potencial emancipador y las dificultades de las cooperativas conformadas por trabajadores de las clases más marginadas de la sociedad. El estudio de caso de Cruz e Silva se refiere a cooperativas de mujeres que viven en los alrededores de Maputo, capital de Mozambique, creadas a partir de las políticas socialistas posteriores a la lucha de independencia del país, a mediados de los años setenta. Las cooperativas, coordinadas por la asociación que constituye el objeto central de estudio, la Unión General de Cooperativistas, realizan diversas actividades de producción, especialmente de alimentos, para venta en el mercado de Maputo. La autora muestra las estrategias mediante las cuales las cooperativas asociadas a la Unión lograron mantenerse vivas y atender formas solidarias de sociabilidad y medios básicos de sustento para sus trabajadoras-propietarias. Sin embargo, el estudio revela igualmente la precariedad de las cooperativas en su lucha por sobrevivir en el nuevo contexto económico de Mozambique, caracterizado por la apertura a la competencia extranjera. En estas condiciones, la autora advierte sobre el riesgo de que las cooperativas desaparezcan e investiga las posibles alternativas que las podrían hacer viables en medio de un mercado abierto.

Finalmente, el trabajo de Melo presenta, a través de la mirada directa de participante del autor, una experiencia exitosa de desarrollo local emprendida en el sur de Portugal desde 1985. Se trata de una serie de iniciativas de diversos tipos —desde actividades de producción artesanal hasta la oferta de servicios básicos, como cuidar a los niños de los papás que trabajan, pasando por la capacitación para el autoempleo y por iniciativas culturales destinadas a desarrollar los lazos de solidaridad en las comunidades implicadas—, cuyo conjunto constituye un caso de desarrollo integral en el seno de las comunidades rurales marginadas. El autor se centra en el papel que la Asociación In Loco desempeñó en la promoción de desarrollo integral de la región estudiada. Asimismo, el capítulo subraya el efecto que la integración de Portugal a la Unión Europea —y, con ella, una versión de la liberalización neoliberal— tuvo en los programas de desarrollo local y sugiere que el futuro de éstos depende de la articulación de esfuerzos a escala local, regional y global.

3. CONCLUSIONES: NUEVE TESIS SOBRE LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN

Para cerrar esta introducción, formulamos un conjunto de tesis cortas que apuntan hacia los temas comunes de los estudios de caso incluidos en este volumen y que esperamos sirvan como provocaciones para su lectura y discusión. Con base en nuestra propia lectura de los casos, presentamos las tesis en forma de intervención explícita en el debate político y académico, en el que movimientos progresistas de todo el mundo están implicados. Las tesis se exponen aquí, por lo tanto, para ser discutidas, confrontadas, complementadas, criticadas o rechazadas.

Tesis 1

Las alternativas de producción no son solamente económicas, su potencial emancipador y sus perspectivas de éxito dependen, en buena medida, de la integración que logren estos procesos de transformación económica con los procesos culturales, sociales y políticos.

Como revelan los estudios de caso, las iniciativas de producción alternativa son, generalmente, tan sólo una parte de un proyecto integral de organización comunitaria. Aunque la producción sea parte esencial de las iniciativas, porque atiende al incentivo económico para la participación de los actores, la decisión de emprender un proyecto alternativo y la voluntad cotidiana de mantenerlo dependen, también, de las dinámicas no económicas —culturales, sociales, afectivas, políticas, etc.— asociadas a la actividad de producción. En este sentido, las alternativas son holísticas y su éxito depende, en parte, de la forma en que los procesos económicos y no económicos dentro de éstas se sustenten mutuamente.

El caso de la Asociación In Loco, en el sur de Portugal, presentado por Melo, ilustra bien el carácter de las iniciativas. In Loco es un proyecto de desarrollo local integral, que no abarca únicamente actividades empresariales comunitarias (producción de alimentos, artesanía, etc.), sino también actividades sociales (p. ej., organización colectiva de cuidado a los niños), culturales (educación y afirmación de las tradiciones locales) y políticas (procesos de democracia participativa en la toma de decisiones sobre proyectos y asuntos que afectan a la población en general). De igual manera, los casos presentados por Singer, Cruz e Silva, Bhowmik y Rodríguez sobre cooperativas de trabajadores muestran que la difícil transición de la producción capitalista hacia la producción cooperativa requiere actividades simultáneas de educación e integración social que mantengan el entusiasmo de los trabajadores participantes y generen las condiciones necesarias para la participación significativa de éstos en las decisiones de las empresas de las que son propietarios. Como demuestra Singer en su comparación de cooperativas brasileñas de diferentes sectores, la transición del trabajador de una relación de obrero/patrón a una de igualdad entre cooperativistas es difícil. El cambio de situación y de estatus requiere de un verdadero proceso de aprendizaje del nuevo papel y de las oportunidades y responsabilidades que la condición de propietario de la empresa implica. Este cambio es especialmente difícil cuando los actores son personas que sufrieron formas extremas de exclusión social, como los recicladores de basura. Como se ilustra en el caso colombiano, presentado por Rodríguez, un factor esencial para la continuación de las cooperativas en medio de dificultades de todo tipo es que éstas constituyan pequeñas comunidades de apoyo mutuo entre los recicladores participantes. En esas cooperativas, las actividades lúdicas, culturales, sociales y otras, promovidas por las cooperativas, son tan importantes —desde el punto de vista de los participantes— como el trabajo cotidiano de reciclaje y, de hecho, con frecuencia, son las razones centrales por las cuales los recicladores permanecen en las cooperativas. El carácter holístico de las iniciativas de producción es evidente en la experiencia de la creación de una ciudad alternativa por parte de los sin tierra, analizada por Lopes. Esta ciudad integra producción, habitación, recreación, usufructo y cuidado de la tierra y hace fluidas las fronteras convencionales entre lo rural y lo urbano, y entre los lugares de producción y los lugares de habitación y de convivencia pública.

Las alternativas de producción son, por lo tanto, iniciativas híbridas, una amalgama compleja de actividades muy diversas, como demuestran estos casos y muchos otros estudiados en diferentes partes del mundo (Hirschman, 1984; Wassertrom, 1985). Las actividades económicas suministran el sustento y el incentivo material, mientras que el sentimiento de vínculo y los procesos de educación e integración social generados en torno a éstas suministran la energía y el entusiasmo necesarios para que los participantes persistan y la alternativa no se desmorone o se desvirtúe.

Tesis 2

El éxito de las alternativas de producción depende de su inserción en redes de colaboración y de apoyo mutuo.

Dado su carácter contrahegemónico y el hecho de que en muchas ocasiones las experiencias de producción alternativa son emprendidas por sectores marginados de la sociedad, las iniciativas frecuentemente son frágiles y precarias. Como muestran todos los casos incluidos en este libro, el riesgo de cooptación, fracaso económico o deformación de los proyectos alternativos es muy elevado. Como también revelan los estudios de caso, la solución más adecuada para contrarrestar esta fragilidad es su integración en redes compuestas por otras iniciativas similares (p. ej., cooperativas) y por entidades diversas.

Uno de los factores más importantes para el surgimiento, supervivencia y expansión de las alternativas es la existencia de un movimiento social más amplio que las produzca y mantenga su integridad. El caso del MST es la ilustración más clara de esta afirmación. Los estudios de Carvalho, Singer, Navarro y Lopes destacan la forma en que las múltiples iniciativas de los habitantes de los asentamientos del MST —que van desde la producción de alimentos hasta la construcción de ciudades alternativas— fueron posibles gracias a la solidez del movimiento del que forman parte. De igual manera, en Mozambique, la energía política generada por la lucha de liberación nacional suministró el ímpetu necesario para la fundación de las cooperativas estudiadas por Cruz e Silva, y el triunfo del movimiento contra el *apartheid* en Sudáfrica dio lugar al régimen político que creó el sistema de reforma agraria, organizado en torno a las asociaciones comunales de campesinos estudiadas por Klug. Estas experiencias confirman las conclusiones de otros estudios sobre casos similares, como los que explican el éxito de las cooperativas de Kerala, en la India, al referirnos a su inserción en un movimiento de transformación social más amplio, que dio lugar al denominado «modelo de Kerala» (Isaac, Franke y Raghavan, 1998).

Las redes de apoyo mutuo, en particular, están compuestas por tres tipos de entidades: sindicatos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones, además de otros organismos económicos alternativos. Los sindicatos desempeñan un papel fundamental en la creación y promoción de varias de las experiencias exitosas, en particular de las cooperativas de trabajadores. Así lo demuestran los casos presentados por Bhowmik y Singer, en los que la iniciativa y el apoyo de los sindicatos fueron decisivos para que los trabajadores de varias empresas en bancarota pudieran pasar a ser sus dueños y las transformaran en cooperativas. En el caso estudiado por Singer, los sindicatos brasileños también contribuyeron a la fundación de organismos especializados en la promoción y apoyo de cooperativas de trabajadores. Las evidencias demostradas en estos casos —junto con las que existen sobre otros, como el de Kerala— revelan, en nuestra opinión, uno de los retos

más interesantes para el obrero en el nuevo milenio, es decir, la definición de su papel en la promoción de alternativas económicas que van más allá de la negociación obrero-patronal. Por otro lado, el apoyo de las fundaciones y ONG de promoción de desarrollo comunitario también aparece, en los estudios de caso, como aspecto crucial, sobre todo en la etapa de creación y consolidación de iniciativas. El apoyo externo de iglesias, organizaciones privadas de promoción social y de todo tipo de «animadores sociales» (Hirschman, 1984) está presente tanto en la fundación de grandes movimientos, por ejemplo, el MST, como en microiniciativas: las cooperativas de recicladores de basura. El dilema que enfrentan algunas de las iniciativas estudiadas es, precisamente, cómo sobrevivir de manera autónoma cuando termina el apoyo externo. Finalmente, es significativa la influencia positiva del apoyo entre organizaciones económicas alternativas (concretamente, entre cooperativas) que, en algunas situaciones —como en los casos de las cooperativas de Mozambique, Brasil y Colombia—, dieron lugar a asociaciones de segunda línea dedicadas a la promoción de las cooperativas.

Como demuestra el caso ejemplar de Mondragón, las cooperativas y demás organizaciones económicas no capitalistas son extremadamente frágiles cuando tienen que enfrentar, solas, la competencia del sector capitalista y condiciones políticas desfavorables. Por esta razón, la formación de redes de apoyo mutuo es indispensable. Éstas tienen, como integrantes naturales, organizaciones de todo tipo comprometidas con una agenda de transformación social. Sin embargo, como sucede en varios de los estudios de caso (p. ej., las cooperativas de Mozambique y Colombia), en el contexto de economías abiertas surge con frecuencia la necesidad de establecer alianzas con compañías capitalistas. Éste es uno de los aspectos más difíciles de la evolución reciente de las alternativas de producción en todo el mundo, dado el riesgo de cooptación o deformación que esto implica. No obstante, las relaciones de cooperación con empresas capitalistas no se deben descartar y, de hecho, a veces son indispensables. De lo que se trata, por lo tanto, es de negociar con cuidado las condiciones de relación e inserción en el mercado, de modo que se evite la desnaturalización de las alternativas.

Tesis 3

Las luchas por la producción alternativa deben ser impulsadas dentro y fuera del Estado.

Mención aparte merecen las relaciones entre las iniciativas de producción alternativa y el Estado. Tradicionalmente, las corrientes de pensamiento y acción progresistas que buscan alternativas económicas no capitalistas han mostrado una clara desconfianza del Estado. Esto es así tanto en relación con el cooperativismo como en relación con las propuestas de desarrollo alternativo y de alternativas al desarrollo. Fuertes razones sostienen esta desconfianza, debido al riesgo de cooptación de éstas por parte del Estado, la pasividad de éste ante los problemas de las

clases populares y el peligro de que las iniciativas se vuelvan dependientes de la ayuda estatal.

No obstante, como demuestran los estudios, las relaciones entre las alternativas de producción y el Estado son complejas y ambiguas. En muchas ocasiones, el Estado actúa como catalizador eficaz, e incluso como creador de éstas. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de las asociaciones de propiedad comunitaria de Sudáfrica analizadas por Klug. En otros casos, la acción contradictoria del Estado —que pasa del apoyo al abandono— puede ser altamente negativa y hasta poner en peligro incluso la propia supervivencia de las organizaciones. Es el caso, por ejemplo, de varias de las cooperativas estudiadas por Bohwmik, las cuales fueron apoyadas inicialmente por el Estado y casi desaparecieron cuando, de manera injustificada, éste les retiró su apoyo. En un tercer grupo hay una relación tensa y ambigua entre el Estado, las organizaciones y los movimientos. Esto se evidencia paradigmáticamente en la relación entre el MST y el Estado brasileño, descrita en detalle por Navarro, la cual incluye nexos tanto de colaboración y apoyo financiero como relaciones de antagonismo y oposición política.

Frente a esto, creemos que las alternativas no son dentro o fuera del Estado. Deben luchar dentro y fuera del Estado. La primera, para no ceder terreno político al poder económico hegemónico y movilizar los recursos del Estado a favor de los sectores populares. La segunda, para mantener su integridad, no depender de las fluctuaciones del ciclo político y seguir formulando alternativas al *statu quo*.

Tesis 4

Las alternativas de producción deben ser voraces en términos de escala.

Este punto ya se expuso en nuestra crítica al localismo que caracteriza algunas de las propuestas de economías alternativas. Contra este localismo, proponemos alternativas capaces de actuar en diferentes ámbitos, desde el local hasta el global, pasando por el regional y el nacional. La ambición ante las escalas de acción y de pensamiento se opone al fundamentalismo en relación con el privilegio de una escala particular. Aunque la escala local —las iniciativas comunitarias, la acción política concreta en el medio en que habitamos y donde se encuentran nuestras raíces— sea fundamental, no hay razón para impedir que las redes de apoyo y solidaridad que describimos en la tesis 2 se extiendan a escalas mayores. La escala, o combinación de escalas, del pensamiento y de la acción se deben escoger de acuerdo con la naturaleza y las necesidades de las iniciativas concretas en cada momento, y no de antemano ni definitivamente.

Esta tesis se ilustra con claridad en el caso portugués de desarrollo local integral presentado por Melo. Aunque los proyectos descritos por el autor estén claramente concentrados en lo local, su creación y su continuación fueron posibles

gracias a su capacidad de utilizar los recursos y adaptarse a las condiciones de transformación a escala nacional, europea y mundial. En efecto, el apoyo internacional, sobre todo el de la Unión Europea, ha sido fundamental para impulsar las actividades examinadas de desarrollo local. Al mismo tiempo, la reacción local a las circunstancias económicas nacionales y europeas, las cuales cambiaron rápidamente a lo largo de los años de vida de los proyectos, fue uno de los factores centrales de supervivencia y expansión. De manera semejante, Singer describe cómo las asociaciones brasileñas de apoyo a las cooperativas se beneficiaron, a su vez, con el apoyo de experiencias similares en Francia y en Italia. Finalmente, la necesidad de articular las diferentes escalas es evidente en los dilemas enfrentados por las cooperativas estudiadas por Cruz e Silva y Rodríguez ante la dificultad de que éstas desarrollaran estrategias de competencia con el capital global en el contexto de la apertura económica en Mozambique y Colombia, respectivamente.

Tesis 5

La radicalización de la democracia participativa y de la democracia económica son dos caras de la misma moneda.

Una de las características emancipadoras de las alternativas de producción no capitalista consiste en su potencial para sustituir la autocracia típica de la producción capitalista —es decir, la autoridad vertical que emana del «patrón» o del *mánager*— por la democracia participativa en las unidades de producción. En otras palabras, el objetivo es ampliar el campo de acción de la democracia, del campo político hacia el económico, y borrar, de esta forma, la separación artificial entre política y economía que el capitalismo y la economía liberal establecieron. Esta ampliación, no obstante, implica más que una alteración cuantitativa. El efecto esencial de la expansión del principio democrático es la creación de posibilidades de transformación cualitativa de la democracia en una democracia participativa. Es este tipo de democracia el que subyace en las alternativas radicales, en la política liberal y en el capitalismo.

El tema de la democracia interna abarca todos los estudios de caso. En el estudio de Klug sobre las asociaciones campesinas de productores, el requisito de la democracia interna es impuesto directamente por la ley que las creó, de manera que, en este caso, es el Estado el que promueve el vínculo entre democracia económica y política que, con frecuencia, choca con la jerarquía establecida por las reglas y costumbres ancestrales de las localidades. En los análisis de las cooperativas de Brasil, Mozambique, India y Colombia surge el tema familiar de la división entre los líderes y el resto de los trabajadores. En efecto, éste fue uno de los dilemas constantes de las cooperativas desde que apareció el movimiento cooperativo a principios del siglo XIX. ¿Cómo evitar el resurgimiento de jerarquías y la apatía

en organizaciones cuyo éxito depende de la participación directa y del compromiso de quien trabaja en ellas? Ésta es una pregunta difícil a la cual ninguno de los capítulos da una respuesta contundente. Singer sugiere que la solución podría encontrarse en los procesos de educación que acompañan el funcionamiento de las cooperativas para mitigar la división entre «patrones» y «empleados». Melo señala las ventajas de estructurar redes horizontales de apoyo mutuo entre organizaciones económicas alternativas de todo tipo, que aumentan la posibilidad de establecer relaciones horizontales en cada una de ellas. En cualquier caso, como confirma el estudio comparado de Bhowmik, cuando surgen procesos de participación democrática en las unidades de producción, aumentan notoriamente las posibilidades de que mantengan la energía que permitió su fundación y que sean capaces de adaptarse a condiciones adversas, debido a la mayor voluntad de cooperación de los trabajadores que participan en la toma de decisiones.

Los estudios sobre el MST dejan abierta una serie de preguntas sobre la relación entre alternativas económicas y democracia interna. En este sentido, este libro sirve para iniciar un debate fructífero para la evolución futura del movimiento, cuyas realizaciones son reconocidas tanto por los autores de los capítulos como por movimientos y organizaciones de todo el mundo. El debate se refiere a la forma en que las realizaciones del MST fueron o no acompañadas por la creación de una estructura interna democrática y abierta. Mientras Navarro sostiene que la organización interna del MST está muy jerarquizada, Carvalho defiende que está constituida por redes horizontales. Asimismo, los estudios de Singer y Lopes formulan observaciones que resultan útiles para avanzar en este debate.

Tesis 6

Existe una estrecha conexión entre las luchas por la producción alternativa y las luchas contra la sociedad patriarcal.

Como se vio en el análisis del desarrollo alternativo y de las alternativas al desarrollo, la intervención de la teoría y de los movimientos feministas en los debates sobre economías no capitalistas fue decisiva. De hecho, buena parte del dinamismo reciente de estos debates se debe a la hibridación de corrientes de pensamiento y acción críticas, representadas, por ejemplo, por el movimiento ecofeminista. Esta participación no es casual. Las luchas por la producción no capitalista forman parte de las luchas contra todas las formas de opresión: el patriarcado, la explotación, el racismo, etc. Las luchas económicas no tienen prioridad sobre las luchas de género, raza u otros tipos de movimientos de emancipación. La prioridad de una lucha sobre otra depende de las circunstancias concretas de cada momento y lugar. Por esta razón, las iniciativas de producción alternativa se alimentan —y contribuyen para su impulso— de las luchas contra la sociedad patriarcal. Las mujeres

no son sólo objeto de opresión de género, sino las principales víctimas de la explotación y marginación económica; las iniciativas y teorías sobre economías alternativas no pueden avanzar sin la participación destacada de ellas.

De hecho, como demuestran los estudios de caso, son grupos de mujeres los que con frecuencia impulsan las iniciativas económicas no capitalistas. Así sucede, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de recicladoras de basura estudiadas por Bhowmik. De igual manera, la extensa red de cooperativas asociadas a la Unión General de Cooperativas de Mozambique, estudiada por Cruz e Silva, está compuesta fundamentalmente por mujeres en condiciones de pobreza. De forma semejante —y como nota Klug, los principales factores asociados a la pobreza en Sudáfrica son: ser mujer, ser negro o vivir en el campo—, uno de los factores centrales de los conflictos generados por la fundación de las asociaciones de campesinos en este país está ligado a las relaciones de género. Los principios constitucionales igualitarios, establecidos por la ley que regula las asociaciones, chocan directamente con la jerarquía tradicional entre géneros en Sudáfrica, y por eso ha sido uno de los problemas más difíciles de solucionar en el proceso de constitución de asociaciones.

Tesis 7

Las formas alternativas de conocimiento son fuentes alternativas de producción.

En la búsqueda de alternativas a la producción capitalista, la contribución de culturas minoritarias o híbridas, marginadas por la hegemonía del capitalismo y de la ciencia moderna, es fundamental. Como sostuvieron, convincentemente, varios de los defensores de alternativas al desarrollo, hay formas de enfrentar/ver el mundo que establecen una relación radicalmente diferente de la capitalista/moderna entre seres humanos y naturaleza, entre producción y consumo, entre trabajo y tiempo libre, entre el uso y el lucro y entre desarrollo y crecimiento. Es necesario no únicamente respetar la diversidad cultural, que permite la supervivencia de estas visiones del mundo, sino también aprender de ellas para construir un paradigma de conocimiento y acción cosmopolita distinto del que subyace en la globalización neoliberal.

Tanto en nuestra alusión anterior a este tema como en los estudios de caso, el ejemplo más claro de este tipo de conocimiento alternativo es el concepto de Gandhi de *swadeshi*, cuya elaboración a la luz de las condiciones actuales de la India es la contribución central del trabajo de Sethi. De igual modo, el estudio de Lopes sugiere un paradigma alternativo de conocimiento urbano, una forma diferente de concebir la ciudad por parte de los habitantes de un asentamiento del MST en el sur de Brasil. El desafío que emerge de estos estudios de caso es plasmar estos puntos de vista del mundo en programas y acciones concretas capaces de ofrecer alternativas viables y creíbles ante los planteamientos y los programas hegemónicos.

Tesis 8

Los criterios para evaluar el éxito o el fracaso de las alternativas económicas deben ser graduales e incluyentes.

En una época de hegemonía del capitalismo global, es fácil asumir posiciones desesperanzadas o cínicas respecto a cualquier alternativa. El pesimismo se apodera con facilidad de las mentes impacientes, y la ausencia de una ruptura radical con el *statu quo* genera escepticismo ante cualquier alternativa gradual o local. Pero la paciencia de la utopía, de la que se nutre el pensamiento y las acciones de quien busca alternativas económicas, es infinita (Santos, 1995). Si el único criterio de evaluación del éxito de las alternativas no capitalistas es la transformación radical de la sociedad a corto plazo, mediante la sustitución del capitalismo por un nuevo sistema de producción, entonces ninguna de las alternativas que hemos discutido vale la pena.

Las alternativas de que disponemos implican transformaciones graduales que generen espacios de solidaridad dentro, o en los márgenes, del sistema capitalista. Participar en alternativas de este tipo implica transformaciones fundamentales en las condiciones de vida. El acceso a la tierra de los campesinos, sudafricanos o brasileños, implica una ruptura crucial con el sistema de exclusión latifundista, existente hasta hace pocos años. El gozo de beneficios mínimos de ciudadanía —como el acceso a servicios médicos o el derecho a vacaciones—, en el caso de las cooperativas más pobres de Mozambique, India o Colombia, es también un límite en la vida de estas personas. Como han sostenido Shiva y Mies (1993) y Dietrich (1996), la propia supervivencia puede dar lugar a la reevaluación del paradigma productivista y consumista. Además de eso, en muchos casos los cambios graduales y las pequeñas alternativas abren puertas hacia transformaciones estructurales también graduales. En la apertura hacia este tipo de oportunidades está su potencial de emancipación a gran escala.

Por otro lado, al evaluar el éxito o el fracaso de las iniciativas económicas alternativas, es crucial recordar su carácter holístico —que explicamos en la tesis 1—. En este sentido, la evaluación debe ser incluyente: debe contener tanto las realizaciones y fracasos en la búsqueda de objetivos económicos como no económicos. Hirschman (1984) reclamó elocuentemente este tipo de evaluación incluyente en relación con las cooperativas:

Las cooperativas tienden a ser juzgadas únicamente por su balance financiero, pues su salud financiera es frecuentemente precaria y su capacidad para coexistir con empresas exclusivamente orientadas a la producción de bienes en una sociedad de mercado individualista es, con frecuencia, puesta en duda. Sin embargo, así como los efectos sociales y políticos del capitalismo deben ser considerados en cualquier evaluación general de este modo de producción, necesitamos averiguar los beneficios y

los costos no monetarios de las cooperativas para hacer una evaluación completa de su funcionamiento. Sucede que, además, estos efectos no monetarios o intangibles son frecuentemente decisivos para entender su desempeño en el mercado. (Hirschman, 1984: 58.)

Tesis 9

Las alternativas de producción deben entrar en relación de sinergia con alternativas de otras esferas de la economía y de la sociedad.

A lo largo de esta introducción, y en los capítulos que siguen, se enfatiza la producción. No obstante, hay alternativas muy diversas que organizaciones y gobiernos progresistas de todo el mundo han promovido y hasta implementado en esferas tan diversas como el comercio (p. ej., las iniciativas de *fair trade*), la inversión (p. ej., el respeto de normas éticas por parte de inversionistas extranjeros en países del sur), la emigración (p. ej., las políticas de fronteras abiertas), la tributación (p. ej., la tasa Tobin), la renta mínima garantizada (p. ej., la propuesta de la renta mínima universal), la coordinación de la economía global (p. ej., la democratización del Banco Mundial y del FMI), etcétera.

Puesto que buena parte de estas iniciativas se ha articulado recientemente en forma de movimiento contra la globalización neoliberal, en espacios como el Fórum Social Mundial de Porto Alegre, existen ahora condiciones para promover la articulación de alternativas de producción con opciones económicas de otro tipo. En nuestra opinión, esta relación de sinergia entre propuestas económicas alternativas es fundamental para la supervivencia y expansión de las alternativas de producción; por ejemplo, como muestran los dilemas que hoy enfrentan las cooperativas de Mozambique y Colombia ante la competencia del capital transnacional, la inserción de éstas en mercados alternativos, como los propuestos por las iniciativas del *fair trade* que pagan precios justos en el país de origen y en el exterior por los productos de las cooperativas, podría evitar la desaparición de éstas o su absorción por empresas capitalistas. Este tipo de asociaciones se ha intentado con éxito en mercados alternativos, como los del café orgánico. Relaciones de complementariedad diversas entre las iniciativas mencionadas y muchas otras mantienen la promesa de promover con mayor firmeza el potencial de las alternativas de producción no capitalistas.

Los retos y dilemas que resumimos en las tesis precedentes son muy numerosos. Las probabilidades de éxito, inciertas. De hecho, una característica común a los estudios de caso de este volumen es el carácter abierto de sus conclusiones, que tiene su origen en la incertidumbre sobre el futuro de las experiencias analizadas. Pero los hombres y mujeres de diversas razas y nacionalidades que decidieron, al participar de estas experiencias, remar contra la corriente son la prueba viva de la capacidad de imaginación y de la voluntad de buscar alternativas de

producción al modelo dominante. En estas y en otras iniciativas semejantes en todo el mundo se amplía cotidianamente el canon de la producción y se recrea la promesa de emancipación social.

BIBLIOGRAFÍA

- Benería, L., «Toward a Greater Integration of Gender and Economics», *World Development*, 23(II): 1839-1850.
- Birchall, J., *The International Cooperative Movement*, Manchester University Press, Manchester, 1997.
- Birdsall, N., y J. Londoño, «Asset Inequality Does Matter: Lesson from Latin America», informe de trabajo del OCE, Banco Interamericano de Desarrollo, 1997 (mimeo.).
- Bowles, S., y H. Gintis, «Efficient Redistribution: New Rules for Markets, States and Community», en E. Wright (coord.), *Recasting Egalitarianism*, Verso, Londres, 1998: 3-74.
- Burbach, R., «Socialism is Dead, Long Live Socialism», en *NACLA*, XXXI(3), 1997: 15-20.
- _____, O. Núñez, y B. Kagarlitsky, *Globalization and Discontents*, Pluto Press, Londres, 1997.
- Castañeda, J., *La utopía desarmada*, Joaquín Mortiz, México, 1993.
- Castells, M., y A. Portes, «World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy», en A. Portes, M. Castells y L. Benton (coords.), *The Informal Economy*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1989.
- Cohen, G., «Back to Socialist Basics», *New Left Review*, 207(9/10), 1994: 3-16.
- Corr, A., *No Trespassing. Squating, Rent Strikes and Land Struggles Worldwide*, South End Press, Cambridge, 1999.
- Cross, J., *Informal Politics*, Stanford University Press, Stanford, 1998.
- Cypher, J., y J. Dietz, *The Process of Economic Development*, Routledge, Nueva York, 1997.
- Daly, G., «Sustainable Growth? No Thank You», en J. Mander y E. Goldsmith (coords.), *The Case Against the Global Economy*, Sierra Club Books, San Francisco, 1996: 192-196.
- Dietrich, G., «Alternative Knowledge Systems and Women's Empowerment», en N. Rao, L. Rurup y R. Sudarshan (coords.), *Sites of Change. The Structural Context for Empowering Women in India*, Friedrich Ebert Stiftung/Programa de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, Nueva Delhi, 1996.
- Douthwaite, R., «Is it Possible to Build a Sustainable World?», en R. Munck y D. O'Hearn (coords.), *Critical Development Theory: Contributions to a New Paradigm*, Zed Books, Nueva York, 1999: 157-177.
- Escobar, A., *Encountering Development*, Princeton University Press, Princeton, 1995.
- Esteva, G., y M. Prakash, *Grassroots Post-Modernism*, Zed Books, Nueva York, 1998.
- Estrin, S., y D. Winter, «Planning in a Market Socialist Economy», en J. le Grand y S. Estrin (coords.), *Market Socialism*, Oxford University Press, Nueva York, 1989: 100-138.
- Ferguson, A., «Managing Without Managers: Crisis and Resolution in a Collective

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

- Bakery», en M. Burawoy *et al.* (coords.), *Ethnography Unbound*, University of California Press, Berkeley, 1991: 108 y ss.
- Friedmann, J., *Empowerment. The Politics of Alternative Development*, Blackwell, Cambridge, 1992.
- Gandhi, M., *The Gospel of Swadeshi*, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1967.
- Gorz, A., *Misères du présent. Richesse du possible*, Galilée, París, 1997.
- Halstead, T., y C. Cobb, «The Need for New Measurements of Progress», en J. Mander y E. Goldsmith (coords.), *The Case Against the Global Economy*, Sierra Club Books, San Francisco, 1996: 197-206.
- Harcourt, W., «Introduction», en W. Harcourt (coord.), *Feminist Perspectives on Sustainable Development*, Zed Books, Londres, 1994.
- Harris, J. (coord.), *Rethinking Sustainable Development. Power, Knowledge and Institutions*, The University of Michigan Press, East Lansing, 2000.
- Hirschman, A., *Getting Ahead Collectively*, Pergamon Press, Nueva York, 1984.
- Hirst, P., *Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance*, University of Massachusetts Press, Amherst, 1994.
- Hodgson, G., *Economics & Utopia*, Routledge, Nueva York, 1999.
- Isaac, T., R. Franke, y P. Raghavan, *Democracy at Work in an Indian Industrial Cooperative*, Cornell University Press, Ithaca, 1998.
- Kumar, S., «Gandhi's Swadeshi: The Economics of Permanence», en J. Mander y E. Goldsmith (coords.), *The Case Against the Global Economy*, Sierra Club Books, San Francisco, 1996: 418-424.
- Le Grand, J., y S. Estrin (coords.), *Market Socialism*, Oxford University Press, Nueva York, 1989.
- Macfarlane, L. J., *Socialism, Social Ownership and Social Justice*, St. Martin Press, Nueva York, 1998.
- Mander, J., «Facing the Rising Tide», en J. Mander y E. Goldsmith (coords.), *The Case Against the Global Economy*, Sierra Club Books, San Francisco, 1996: 3-19.
- Mander, J., y E. Goldsmith (coords.), *The Case Against the Global Economy*, Sierra Club Books, San Francisco, 1996.
- McMichael, P., *Development and Social Change*, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 1996.
- Norberg-Hodge, H., «Shifting Direction: From Global Dependence to Local Interdependence», en J. Mander y E. Goldsmith (coords.), *The Case Against the Global Economy*, Sierra Club Books, San Francisco, 1996: 393-406.
- O'Connor, J., «Capitalism, Nature and Socialism: A Theoretical Introduction», en *Capitalism, Nature, Socialism*, 1(1), 1988: 3-14.
- Pierson, C., *Socialism after Communism. The New Market Socialism*, State University Press, University Park, 1995.
- Piore, M., y C. Sabel, *The Second Industrial Divide*, Basic Books, Nueva York, 1984.
- Polanyi, K., *The Great Transformation*, Bacon Press, Boston, 1957.
- Portes, A., M. Castells, y L. Benton, (coords.), *The Informal Economy*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1989.
- Prout, C., *Market Socialism in Yugoslavia*, Oxford University Press, Nueva York, 1985.
- Quijano, A., *La economía popular y sus caminos en América Latina*, Mosca Azul, Lima, 1998.
- Rao, P., *Sustainable Development. Economy and Policy*, Blackwell, Malden, 2000.
- Rothschild, J., y J. Whitt, *The Cooperative Workplace: Potentials and Dilemmas of Organizational Democracy and Participation*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
- Russell, R., *Sharing Ownership in the Workplace*, State University of New York Press, Albany, 1985.
- Santos, Boaventura de Sousa, *Towards a New Common Sense*, Routledge, Nueva York, 1995.
- , *A Crítica da Razão Indolente. Contra o Desperdício da Experiência*, Afrontamento, Oporto, 2000.
- , «Can Law be Emancipatory?», presentado en la Conferencia de la Law & Society Association, Budapest, julio de 2001.
- Shiva V., y M. Mies, *Ecofeminism*, Zed Books, Londres, 1993.
- Singer, P., y A. de Souza, *A Economia Solidária no Brasil*, Contexto, São Paulo, 2000.
- Soto, H. de, *The Other Path. The Invisible Revolution in the Third World*, Harper and Row, Nueva York, 1989.
- Streeck, W., «Beneficial Constraints: On the Economic Limits of Rational Voluntarism», en J. Hollingsworth y R. Boyer (coords.), *Contemporary Capitalism*, Cambridge University Press, Ithaca, 1997: 197-219.
- Thomas, T., R. Franke, y P. Raghavan, *Democracy at Work in an Indian Industrial Cooperative*, Cornell University Press, Ithaca, 1998.
- Van Parijs, P. (coord.), *Arguing for Basic Income*, Verso, Londres, 1992.
- Wallerstein, I., *The Capitalist World-Economy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1979.
- Wasserstrom, Robert, *Grassroot Development in Latin America and the Caribbean*, Praeger, Nueva York, 1985.
- Webb, S., y B. Webb, *Industrial Democracy*, Longman Green, Londres, 1897.
- Whyte, W., y K. Whyte, *Making Mondragon. The Growth and Dynamics of the Worker Cooperative Complex*, ILR Press, Ithaca, 1988.
- Wright, E., «Introduction», en Erik Wright (coord.), *Recasting Egalitarianism*, Verso, Londres, 1998: xi-xiii.
- Wright, G., *Microfinance Systems. Designing Quality Financial Services for the Poor*, Zed Books, Nueva York, 2000.

I. La reciente resurrección de la economía solidaria en Brasil

PAUL SINGER

I. BREVE INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

Lo que es

La economía solidaria fue inventada por los obreros en los inicios del capitalismo industrial, como respuesta a la pobreza y el desempleo resultantes de la difusión «desreglamentada» de las máquinas-herramienta y del motor de vapor a principios del siglo XIX. Las cooperativas eran tentativas de recuperar el trabajo y la autonomía económica, aprovechando las nuevas fuerzas productivas. Su estructuración obedecía a los valores básicos del movimiento obrero de igualdad y democracia, sintetizados en la ideología del socialismo. La primera gran oleada de cooperativismo en la producción fue contemporánea, en la Gran Bretaña, de la expansión de los sindicatos y la lucha por el sufragio universal.

La empresa solidaria niega la separación entre trabajo y posesión de los medios de producción, que es reconocidamente la base del capitalismo. La empresa capitalista pertenece a los inversionistas, a los que suministraron el dinero para adquirir los medios de producción y, por consiguiente, su única finalidad es proporcionarles lucros, el mayor lucro posible en relación con el capital invertido. El poder de mando, en la empresa capitalista, está concentrado totalmente (al menos en términos ideales) en las manos de los capitalistas o de los gerentes contratados por ellos.

El capital de la empresa solidaria lo poseen los que en ella trabajan y únicamente ellos. El trabajo y el capital se funden porque todos los que trabajan son propietarios de la empresa y no hay propietarios que no trabajen en ella, pues la propiedad de la empresa está dividida por igual entre todos los trabajadores, para que todos tengan el mismo poder de decisión sobre ésta. Las empresas solidarias son, en general, administradas por socios electos para la función y que se clasifican por las directrices aprobadas en las asambleas generales o, cuando la empresa es demasiado grande, en consejos de delegados electos por todos los trabajadores.

La empresa solidaria está compuesta básicamente por trabajadores, quienes sólo secundariamente son sus propietarios. Por eso, su finalidad básica no es maximizar

el lucro, sino la cantidad y la calidad del trabajo. En realidad, en la empresa solidaria no hay lucro, porque ninguna parte de su ingreso se distribuye en proporción a las cuotas de capital y puede pedir préstamos a sus propios socios o a terceros, y procura pagar los menores intereses del mercado a los acreedores (internos o externos).

El excedente anual —llamado «utilidades» en las cooperativas— se destina decididamente a los trabajadores. Una parte, en general, se dedica a la reinversión y puede ser depositada en el fondo «indivisible», el cual no le pertenece a los socios individualmente, sino únicamente en lo colectivo. Otra parte, que también se reinvierte, puede aumentar el valor de las cuotas de los socios, quienes tienen el derecho de sacarlas cuando se retiran de la empresa. El resto de las utilidades está destinado a un fondo de educación, a otros fondos «sociales» (de cultura, de salud, etc.) y, eventualmente, a la repartición entre los socios mediante criterios aprobados por ellos. Por lo tanto, el capital de la empresa solidaria no es remunerado, bajo ningún pretexto y, por consiguiente, no hay «lucro», pues éste se considera tanto jurídica como económicamente el rendimiento proporcionado por la inversión de capital.

La cooperativa de producción es la modalidad básica de la economía solidaria, y las relaciones sociales de producción que la definen están delineadas arriba. Otra es la cooperativa de comercialización, compuesta por productores autónomos, individuales o familiares (campesinos, taxistas, profesionales especializados, artesanos, etc.), que hacen sus compras en común y, cuando les toca, también sus ventas. Siendo la producción individual, la ganancia también lo es, y las utilidades de las operaciones comerciales se distribuyen, en general, entre los cooperativistas en proporción a la cuantía comprada o vendida por cada uno a través de la cooperativa.

Otra modalidad de empresa solidaria es la cooperativa de consumo, la cual es poseída por los que consumen sus propios productos o servicios. La finalidad de ésta es proporcionar la máxima satisfacción al menor costo de los cooperativistas. Pero, para ser empresa solidaria no puede haber separación entre trabajo y capital. Muchas cooperativas de consumo emplean trabajo asalariado, lo que ocasiona luchas de clase en su interior. Por eso *no* forman parte de la economía solidaria. Sólo pertenecen a ésta las cooperativas de consumo que convierten en miembros plenos a sus trabajadores. Algunos las denominan, por consiguiente, cooperativas mixtas.

Lo mismo se aplica a las cooperativas de crédito. Éstas son empresas de intermediación financiera poseídas por los depositantes. Para que sean solidarias, es necesario que los trabajadores que las operan profesionalmente sean socios de ellas. Las cooperativas de crédito comunitarias, formadas por habitantes de la misma ciudad o miembros del mismo sindicato, etc., emplean los depósitos en préstamos personales a los cooperativistas. Eso se llama crédito rotativo y rescata gente pobre de las garras de los agiotistas, puesto que los bancos comerciales están casi siempre cerrados a ella. Las empresas solidarias tienden a federarse, formando asociaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Lo que impulsa esta

tendencia es el mismo conjunto de factores que produce la centralización de los capitales en grandes empresas multinacionales y conglomerados: ganancias en expansión que permiten reducir costos, necesidad de reunir recursos para desarrollar una nueva tecnología y difundirla mejor, además de otras empresas de alto costo y alto riesgo.

La inserción económica y política de la economía solidaria

Muchas empresas que nacieron como solidarias terminan por adaptarse al capitalismo y, por lo tanto, dejan de ser solidarias. El caso más notorio fue el de las cooperativas de consumo, que tuvieron gran importancia en Europa, y que optaron por asalariar a sus trabajadores y administradores. Esta decisión provocó una firme resistencia de los cooperativistas más antiguos. El conflicto se trabó en relación con las cooperativas de producción creadas por las cooperativas de consumo y, sobre todo, por la gran central cooperativa mayorista inglesa, la cual abastecía a las demás. Los trabajadores de estas industrias cooperativas tenían participación en el capital, en las utilidades y en las instancias directivas, además de que difícilmente perdían el trabajo, incluso en épocas de crisis. A la vista de los demás trabajadores asociados a las cooperativas de consumo, y por lo tanto «dueños» de las cooperativas de producción, los que trabajaban en éstas estaban siendo privilegiados respecto a los otros, meros asalariados (Cole, 1944: cap. IX).

El abandono de la autogestión en las empresas creadas por cooperativas de consumo fue posteriormente imitado por las de comercialización. Esto representó en la práctica una ruptura —jamás admitida— respecto de sus principios, lo que no impidió que el movimiento cooperativista, representado mundialmente por la ACI (Alianza Cooperativa Internacional), continuara sustentando los principios de Rochdale, que definen la cooperativa como democrática e igualitaria. Así, en teoría, las cooperativas siguen siendo autogestionarias, pero en la práctica muchas pagan sueldo a quienes las manejan.

Debido a la veneración de los valores de la economía solidaria en el cooperativismo, parte importante del mismo procura practicarlos, aproximándose en menor o mayor grado al perfil de la empresa solidaria. Muchas cooperativas probablemente pasaron por periodos en que fueron empresas solidarias, y por otros en que se asemejaban más a empresas capitalistas. Estas oscilaciones se deben a la inserción económico-social de cada cooperativa —muchas surgen a partir de luchas obreras o campesinas— y al «espíritu de la época»,¹ que impregna a los

¹ Nadie logra escapar completamente al espíritu de la época o *Zeitgeist* (en alemán). Un caso ilustrativo es el de los *kibutzs*, comunidades cooperativas integrales que durante dos generaciones socializaron no sólo los medios de producción, sino también los de consumo, viviendo según el lema: «A cada quien según sus necesidades, a cada quien según su capacidad». Surgieron a partir de 1910, formados por emigrantes rusos y de Europa

cooperativistas ya de valores solidarios y democráticos, ya de individualismo y culto a la competencia.

La economía solidaria se compone de las empresas que efectivamente practican los principios del cooperativismo, es decir, la autogestión. Ésta forma parte de la economía cooperativa o social sin confundirse, no obstante, con las cooperativas que emplean asalariados. En realidad, la mayoría de las empresas presenta grados muy variados de autogestión, no sólo de cooperativa a cooperativa, sino dentro de una misma en diferentes momentos.

La economía solidaria constituye un modo de producción que, junto a otros modos —capitalismo, pequeña producción de mercancías, producción estatal de bienes y servicios, producción privada sin fines de lucro—, componen la formación social capitalista, pues el capitalismo no sólo es el modo de producción predominante, sino que adapta la superestructura legal e institucional de acuerdo con sus valores e intereses.

Aun siendo hegemónico, el capitalismo no impide el desarrollo de otras formas de producción, porque es incapaz de incluir a toda la población económicamente activa. La economía solidaria crece en función de las crisis que la competencia ciega de los capitales privados ocasiona periódicamente en cada país, pero sólo se vuelve viable y se torna una alternativa real al capitalismo cuando la mayor parte de la sociedad, que no es propietaria del capital, se hace consciente de que es de su interés organizar la producción de manera que los medios de producción sean de todos los que los utilizan para generar el producto social.

2. LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL BRASIL DE HOY

Autogestión a partir de la bancarrota o crisis de las empresas: la Anteg

La economía solidaria surge en Brasil, en esta etapa histórica, probablemente como respuesta a la gran crisis de 1981-1983, cuando muchas industrias, incluso de gran capacidad, solicitan un pacto y entran en proceso de bancarrota. Corresponde a esta época la formación de las cooperativas que adquieren la industria Wallig de estufas, en Porto Alegre; la Cooperminas, que explota una mina de carbón en quiebra en Criciúma (Santa Catarina), y las que operan las fábricas (en Recife y en São José dos Campos) de la antigua Tecelagem (Tejidos) Parahyba de cobijas. Todas éstas continúan en función hasta hoy.

Oriental, en una época en que prevalecían valores socialistas mientras se gestaba la Revolución de Octubre. A partir de la década de 1980, parte de los *kibutzs*, debido a la oleada neoliberal, abandonó las prácticas comunistas, introdujo dinero en las relaciones internas, estimuló el trabajo asalariado externo entre los miembros y amplió el trabajo asalariado en la producción interna de los que no lo eran.

El cierre de empresas y el despido de numerosos trabajadores prosiguen durante las décadas de los años ochenta y noventa, dos decenios perdidos. Poco a poco se desarrolla una tecnología para aprovechar las oportunidades que ofrece la legislación a los trabajadores de arrendar o adquirir la universalidad de los bienes, derechos, acciones y obligaciones del deudor en bancarrota, o el patrimonio de los antiguos patrones, y así preservar sus puestos de trabajo. El sindicato, como representante legal de los trabajadores, interviene ante la justicia y promueve la formación de una asociación de empleados de la compañía en vías de desaparecer y después da lugar, eventualmente, a una cooperativa.

La cuestión crucial del proceso está en llevar a los trabajadores los principios de la economía solidaria, convencerlos para unirse en una empresa en que todos son dueños por igual, cada uno con derecho a voto, empeñados solidariamente en transformar un patrimonio devaluado en un nuevo emprendimiento solvente. La alternativa convencional sería crear otra empresa capitalista, controlada no por todos los trabajadores sino por los más antiguos y más bien remunerados, poseedores de los mayores créditos laboristas y, por lo tanto, depositarios de las mayores cuotas de capital.

El equipo que mejor desarrolla esta tecnología tiene su origen en la antigua Secretaría de Formación del Sindicato de Químicos de São Paulo, donde tenía como misión actuar dentro de las empresas para «concientizar a los trabajadores, y evaluar a la sociedad en su conjunto y a los políticos a partir de lo que representaban desde el punto de vista de los intereses de la clase dominante nacional e internacional» (Anteg, 2000: 15). En 1991 cambia la directiva del Sindicato de Químicos y la Secretaría de Formación es clausurada.

En el mismo año, en función de la apertura del mercado interno a las importaciones, entra en crisis una gran fábrica de zapatos, la Makerly, de Franca (São Paulo), que entonces empleaba a 482 trabajadores. El Sindicato de los Zapateros se empeña en impedir que gran número de trabajadores pierda sus empleos y llama a uno de los integrantes del antiguo equipo de los químicos, Cido Faria, entonces en el DIEESE (Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos), para transformar a la empresa en vías de quebrar en una «fábrica de trabajadores». El DIEESE, una antigua y prestigiosa entidad de apoyo a los sindicatos, no sólo cedió a su funcionario, sino que contribuyó con literatura sobre los ESOP (Employee Stock Ownership Plans), que son planes de participación de los empleados en el capital accionario de las empresas en Estados Unidos, donde reciben incentivos por ley y se han difundido bastante. En aquel momento, en São Paulo no se conocía ningún modelo de traspaso de la posesión de una empresa capitalista a manos de sus antiguos empleados organizados en asociación.

Los trabajadores adoptaron la idea del sindicato y se propusieron adquirir la maquinaria de los dueños de la Makerly por 600 000 dólares. Para conseguir el crédito correspondiente del Banespa (Banco del Estado de São Paulo, banco oficial

del Estado de São Paulo, hoy vendido a Santander), fue necesaria una intensa lucha política, que culminó con la ocupación de la sede del Banespa en Franca. Después de 91 días de presión y negociaciones, se firmó un acuerdo por el cual, como garantía del préstamo, 49% de las acciones de la empresa quedaron con el banco. Debido a ese acuerdo, la Makerly tuvo que seguir siendo una sociedad anónima y no una cooperativa. Controlada por los trabajadores, la empresa funcionó con éxito durante los años siguientes, hasta que en marzo de 1995 el gobierno federal intervino en el Banespa y le suspendió la línea de crédito a la Makerly, lo que determinó el cierre de sus actividades.

La experiencia de la Makerly permitió desarrollar una metodología de transferencia de empresas capitalistas a sus empleados. «Gente de todo el país, sindicalistas, políticos, trabajadores, prensa, todos iban hasta Franca para conocer la experiencia que ellos denominaron “fábrica del trabajador”» (Anteag, 2000: 56). Otras empresas, en general grandes y antiguas, entraron en crisis y acabaron convirtiéndose en autogestionarias: Cobortores Parahyba, Facit, Hidro-Phoenix, etc. En 1994 fue realizado en São Paulo el Primer Encuentro de los Trabajadores en Empresas de Autogestión, en el que participaron representantes de seis empresas. En este encuentro se decidió crear la Anteag (Asociación Nacional de los Trabajadores en Empresas de Autogestión y Participación Accionaria). La Anteag surge no sólo para ayudar en la lucha de los trabajadores por la preservación de sus puestos de trabajo y, al mismo tiempo, por el fin de su subordinación al capital, sino también para asesorar las nuevas empresas solidarias.

Los proyectos necesitaban ser coordinados porque, aunque inicialmente presionados por el desempleo, cuando los trabajadores adquirían las empresas tenían que enfrentarse a innumerables cuestiones, nuevas para ellos, entre otras aquellas relativas al mercado y a la comercialización de los productos, al acceso al crédito y al control presupuestario de la empresa, a la organización del trabajo y de la producción, a la tecnología, a la legislación. Si, por un lado, las relaciones de solidaridad entre los trabajadores y el apoyo de algunos sindicatos a sus iniciativas eran fundamentales, por otro, no eran suficientes. Había necesidad de articular personas e instituciones, democratizar informaciones, crear un espacio para el debate y la producción de alternativas. En fin, había la necesidad de una entidad que asumiera esos papeles. Era el comienzo de Anteag. (Nakano, 2000: 68.)

En el proceso de transformación de una empresa en bancarrota o en vías de quebrar en una empresa solidaria, se atraviesan etapas cruciales. La primera es ganar la anuencia de los propios trabajadores, quienes necesitan aceptar el cambio de sus créditos laborales por cuotas de capital de «su» nueva empresa, lo que solamente sucede si creen que son capaces de tomar la administración de la empresa en crisis y rehabilitarla. La alternativa es dejar que la empresa sea clausurada por

la justicia y así permanezca hasta que se vaya a subasta; del valor recaudado, ellos recibirán una fracción de sus créditos. En general pasan años entre el sello de clausura de la fábrica y su subasta, y en este periodo tanto las instalaciones como la maquinaria sufren una depreciación casi total. Por consiguiente, en esta opción, gran parte de los créditos rescisorios se pierden, mientras que, si fueran invertidos en una cooperativa, existe siempre la posibilidad de que preserven su valor y hasta de que éste aumente.

Son varios los factores que llevan a los trabajadores a asumir el riesgo de tomar posesión del patrimonio de la empresa o, por el contrario, a preferir buscar otro empleo asalariado: su grado de cohesión y confianza mutua, el apoyo externo al proyecto autogestionario, la mayor o menor probabilidad de encontrar otro empleo con remuneración y condiciones de trabajo satisfactorias, etc. En general, en los casos en que la refundación de la empresa en las manos de los trabajadores tenga buen resultado, la clase obrera se divide entre una mayoría que se compromete en la propuesta y una minoría que la rechaza. El que la universalidad de los bienes, derechos, acciones y obligaciones del deudor en quiebra sea mantenida en funcionamiento por la nueva firma, preserva su valor, lo que es una ventaja para los acreedores, incluso para los trabajadores que no quieren integrarla, pues éstos también acaban por recibir una fracción mayor de sus créditos laboristas.

La segunda etapa es conseguir que el patrimonio de la compañía pase a los trabajadores asociados, lo que muchas veces requiere un crédito cuya garantía es el propio patrimonio negociado. En general, un crédito de grandes proporciones sólo se obtiene en los bancos oficiales, lo que depende de una decisión política de su dirección. «Echar a andar» tal decisión exige una fuerte movilización y una intensa presión sobre ésta, que en el caso de la Makerly tomó la forma de ocupación de la sede del banco. El sindicato cuenta con la solidaridad de otros sindicatos y de su central, y si el número de trabajadores es grande, logra conquistar el apoyo de los medios de información, de los partidos de izquierda y sus miembros en el Parlamento, de la Iglesia y, eventualmente, del alcalde o presidente municipal y del gobernador. Todo eso cuenta como medio para hacer viable la futura cooperativa, que, para seguir funcionando, tiene que continuar con el apoyo tanto de la justicia como del banco.

La tercera etapa consiste en la viabilidad de la nueva empresa mediante la recuperación de la clientela, de los abastecedores y de los créditos de la antigua empresa. Los primeros tiempos son muy duros, pues los trabajadores tienen que acumular capital circulante o de trabajo, lo que significa que durante cierto periodo no tendrán el retiro «completo» (nivel deseado de ganancia mensual, en general igual a lo que tenían cuando eran empleados), sino mucho menos. Constituye el llamado «periodo heroico», que puede durar meses, en el cual los trabajadores no consiguen, a veces, ni siquiera un rendimiento de subsistencia.

Una vez superado el periodo crítico, gran parte de la antigua clientela vuelve y una nueva es atraída, los abastecedores depositan su confianza en la cooperativa y el retiro se vuelve cada vez más completo. Es sólo a partir de este momento cuando la empresa solidaria entra en su normalidad. Los trabajadores escogidos para ejercer funciones gerenciales toman cursos y van adquiriendo nuevas habilidades. El hábito de realizar asambleas se va consolidando y los trabajadores que continúan en las líneas de producción se acostumbran a adquirir conocimiento de las dificultades que han soportado y de los éxitos obtenidos y a decidir en conjunto la conducción de la empresa.

Por sorprendente que sea, la gran mayoría de los intentos de transformar compañías medio quebradas o totalmente en bancarota en empresas solidarias ha sido un éxito. Esto se explica, en primer lugar, por los sacrificios hechos por los cooperativistas, quienes se disponen a trabajar durante meses con ganancias mínimas, algunas veces tan sólo a cambio de canastas básicas (conjunto estandarizado de alimentos que debe suplir las necesidades esenciales de una familia por determinado periodo). Pero también por la enorme dedicación y amor al trabajo ya no alienado, de lo que resultan aumentos inesperados de productividad y gran reducción de pérdidas y desperdicios. Y, finalmente, por el aprendizaje de los nuevos administradores de las técnicas y habilidades en la gestión de comprar y vender, de recibir y de dar crédito, de innovar productos y procesos y de entablar relaciones solidarias con otras autogestiones.

La Anteag fue creciendo ininterrumpidamente. Con el éxito de las primeras empresas solidarias, se multiplicaron las iniciativas de sindicatos y trabajadores en el mismo sentido y, para hacerlas viables, solicitaban la asistencia de los técnicos y formadores de la Anteag. A partir del año 2000, la Anteag empezó a ser también contratada por gobiernos que decidieron dar prioridad a la economía solidaria. El gobierno de Olívio Dutra en Rio Grande do Sul formuló un convenio con la Anteag que llevó a la ampliación del conjunto de funcionarios en el estado para actuar en todas las regiones, y los resultados no se hicieron esperar: en un año surgió cerca de un centenar de nuevas cooperativas, que posibilitaron la preservación de decenas de miles de puestos de trabajo.

Otros gobiernos estatales mostraron también su interés en contratar a la Anteag, y en 2001 un buen número de los nuevos alcaldes hizo lo mismo. En enero de 2001 estaban recibiendo asesoría de la Anteag alrededor de 160 empresas solidarias en todo Brasil, incluso la mayor de todas, la Usina Catende, la cual abarca cinco municipios en Pernambuco, y donde trabajan 3 200 familias. La Catende quebró en 1995, y desde entonces funciona como empresa autogestionaria al contar con el apoyo de los sindicatos de los trabajadores rurales, de la Agencia de Desarrollo Solidario de la Central Única de Trabajadores (CUT), del gobierno de Cuba (que suministra agrónomos especialistas en el cultivo de la caña) y de la Anteag.

La Unisol, una iniciativa de los sindicatos obreros

Conforme hemos visto, la historia de la Anteag deja en claro que la transformación de empresas, en crisis o quebradas, en cooperativas de producción exige la intervención activa de un sindicato de categoría. La Anteag surgió del movimiento sindical y terminó transformándose en una organización de apoyo, independiente del sindicalismo, pero permanentemente comprometida en sociedades con sindicatos empeñados en la conversión de empresas capitalistas en solidarias. Ahora trataremos de otra organización, con objetivos análogos, formada más recientemente por dos sindicatos del ABC, conjunto de municipios industriales de la Gran São Paulo, famoso por su sindicalismo combativo.

Estos sindicatos fueron el de los Metalúrgicos y el de los Químicos del ABC. El de los Metalúrgicos es el más poderoso, pues representa a los trabajadores de la industria automovilística, que hasta tiempos recientes concentraba a la mayoría de las ensambladoras en São Bernardo do Campo, con numerosas fábricas de componentes localizadas en los municipios vecinos. En 1978, en pleno régimen militar, el Sindicato de los Metalúrgicos organizó una huelga para ocupar la fábrica y, sorprendentemente, no fue reprimida, lo que fue una señal de que, a partir de entonces, el derecho de huelga volvía a tener vigencia en Brasil. Esto desencadenó una enorme ola de huelgas que abarcó al país entero y dio fama nacional al denominado «nuevo sindicalismo», del cual Lula se tornó figura emblemática.

El Sindicato de los Metalúrgicos tomó varias iniciativas de repercusión nacional contra la eliminación en masa de puestos de trabajo por la industria. La más célebre fue el acuerdo en la cámara sectorial que negoció cierta renuncia fiscal del Estado, salarial de los trabajadores y lucrativa de las empresas, que se tradujo en una baja de precios, debido a un fuerte aumento en las ventas de vehículos correspondiente al aumento de la producción, con pleno mantenimiento del empleo. Las ganancias en expansión compensaron las renunciaciones. Acuerdos análogos se negociaron con otras cadenas productivas.

Es en el contexto de «un sindicalismo propositivo donde se formulan propuestas de intervención en las políticas públicas, en las políticas industriales y sectoriales y en los cambios producidos en las fábricas» (Oda, 2000: 94), lo cual explica por que el Sindicato de los Metalúrgicos se comprometió, relativamente pronto, con el movimiento de la economía solidaria. Ya en su Segundo Congreso, en 1996, el sindicato decidió discutir con los trabajadores la formación de las cooperativas, la autogestión, etc., como medios de garantizar los puestos de trabajo. El Congreso decidió que podrían ser socios del sindicato todos los trabajadores de la categoría (incluso cooperativistas) y no únicamente asalariados formales, como era la regla prácticamente general hasta entonces en Brasil.

«Con la intención de ampliar los conocimientos acerca de sistemas cooperativos, el sindicato estableció, en 1998, un protocolo de propósitos para el intercambio

de informaciones a partir de las experiencias en la región de Emilia Romagna, Italia» (Oda, 2000: 97). El protocolo tuvo la participación de varias asociaciones sindicales italianas y de la Lega delle Cooperative (Liga de las Cooperativas), que es la mayor federación de cooperativas de la península. Ello dio como resultado la visita de delegaciones brasileñas a Italia y de dirigentes de la Lega y otras sociedades italianas a Brasil, lo que llevó a diálogos fecundos que continúan desarrollándose.

Mientras sucedían estos avances en el plan macroeconómico, la crisis en la Conforja, la mayor fragua del país, localizada en Diadema, daría ocasión, a partir de 1996, a la implicación directa del sindicato en una gran operación de rescate de puestos de trabajo.² Enseguida, el sindicato se comprometería con otras operaciones semejantes: la transformación de la Nichiden en Coopertronic, de la Cervin en Uniwidia, de la formación de la Cootrame por los trabajadores despedidos de la Nordon, la transformación de la Olan —una empresa textil y, por lo tanto, no perteneciente a la categoría metalúrgica— en Cooperautex, y de la kwca en Metalcooper y Fibercoop.

En la medida en que el sindicato fue dando apoyo a estas cooperativas, la complejidad de la tarea se hizo patente. En febrero de 1998, un seminario interno realizado por el sindicato concluyó que era necesario proporcionar a los nuevos cooperativistas:

Información, formación y capacitación para la conducción del negocio. Esta necesidad proviene también de que, en las referidas cooperativas, la mayoría de los trabajadores cooperativistas está constituida por obreros, de baja o media calificación y, por lo tanto, con menores posibilidades de recolocación en el mercado de trabajo. Por el contrario, los profesionistas que actuaron en cargos de jefatura o administración en las antiguas empresas que cerraron o quebraron buscan su recolocación en el mercado de trabajo o en la creación de otros negocios independientes, en vez de participar en estas cooperativas. (Oda, 2000: 98.)

Lo que no debería sorprender, pues los técnicos y gerentes constituían la élite dirigente de las empresas que cerraron o fueron a la bancarrota, y es muy normal que la mayoría dudara de la autogestión, convencida de que únicamente las formas autoritarias y jerárquicas de gestión o administración son eficientes. Para ellos, entrar en una cooperativa equivale a renunciar al poder, al estatus y a los privilegios e igualarse a los demás cooperativistas, aun cuando éstos poseen mucho menos «méritos» que ellos. No obstante, hay casos (como el de Conforja) en que ingenieros y ex directores no sólo se adhieren a las cooperativas, sino que incorporan los valores de la autogestión y se empeñan en tornarlos realidad. Adoptan posiciones

de liderazgo y quedan frustrados con la persistencia de la mentalidad de «empleados» entre muchos socios menos calificados de la cooperativa.

Una pieza clave en el proyecto del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, en relación con las cooperativas, teniendo como referencia las experiencias internacionales, es la constitución de una asociación, la Unión y Solidaridad de las Cooperativas del Estado de São Paulo (Unisol Cooperativas). Esta sociedad, que fue políticamente bien recibida durante la clausura del Tercer Congreso de los Metalúrgicos del ABC, tiene fuertes vínculos con el movimiento sindical, con partidos políticos y con otras entidades de la sociedad civil. (Oda, 2000: 102.)

La Unisol surgió en 1999 como posible rival de la Antegag: propone los mismos objetivos e inevitablemente terminará desarrollando actividades semejantes. Formalmente constituye también una asociación de cooperativas, aunque por lo pronto se localicen todas en el ABC paulista, y pretende abarcar asociaciones de todo el estado de São Paulo.

La Unisol cuenta con una Incubadora de Cooperativas Populares, apoyada por la alcaldía de Santo André y ligada a la Fundación Santo André (institución municipal de enseñanza superior). Las cooperativas creadas y amparadas por la Incubadora posiblemente se integrarán a la Unisol, que tenderá a expandirse, impulsada por los mismos factores que explican el gran crecimiento de la Antegag: el desempleo en masa, la intensificación de la competencia que lleva a empresas antiguas y de envergadura a la crisis y finalmente a la quiebra, y el éxito de las cooperativas de producción que sucedieron a las empresas que cerraron y que posiblemente refuerza la confianza de los trabajadores en que éstas tienen una gran oportunidad de resucitar en sus manos.

Estudio de un caso: la metamorfosis de Conforja

Conforja era una empresa que se estableció en Diadema, en 1968, para producir conexiones de acero forjado y tubería. Conviene hacer notar que 1968 marca el inicio del «milagro económico» brasileño, cuando el crecimiento, particularmente industrial, alcanza un ritmo extraordinario, sostenido por aproximadamente nueve años. Conforja se torna la abastecedora única de Petrobras (Petróleo Brasileiro, S. A.), el monopolio estatal de petróleo, que en la década de los años setenta se empeña en explotar los grandes yacimientos submarinos descubiertos en la costa de Brasil. Entre 1974 y 1976, el número de empleados de Conforja pasa de 550 a 1 170, y su facturación en dólares sube de 8.4 millones a 28.2 millones. En los años ochenta, Conforja diversifica su actividad y se transforma en una multiempresa que fabrica máquinas, enrolados y plásticos, y negocia frutas y cereales, minerales, madera, etcétera.

² Más adelante presentaremos una síntesis del estudio de este caso (véase el siguiente apartado).

La situación de la empresa cambia cuando, en 1990, el gobierno de Fernando Collor de Mello decide abrir el mercado interno a las importaciones. Conforja era líder de un oligopolio, el cual dominaba 70% del mercado de forjados, y de repente se vio invadido por abastecedores extranjeros que competirían con precios menores. Desde ese año en adelante, Conforja empieza a tener perjuicios, reduce el número de empleados y atrasa frecuentemente el pago de salarios, lo que naturalmente provoca protestas, huelgas abiertas o disimuladas, con gran daño en la producción. En 1994, el principal accionista de Conforja, para salvar la firma, propone al Sindicato de los Metalúrgicos del ABC transformarla en una cogestión, lo que produce un intenso debate entre los trabajadores. En 1995 quedan en Conforja únicamente 630 empleados, menos de la mitad del personal de 1989, pero aun así un número significativo de puestos de trabajo que valdría la pena salvar.

El sindicato y la mayoría de los trabajadores concuerdan con la propuesta del empresario y, en agosto de 1995, se firma un protocolo de intenciones de cogestión entre la empresa y sus empleados representados por el sindicato. Enseguida, los trabajadores forman una asociación denominada Assecon para atribuirse la mitad de la gestión de la empresa mediante la adquisición de 45% de las acciones de la misma. La Anteag es convocada para asesorar al sindicato y a la comisión de fábrica en esta experiencia de cierto modo inédita para todos los participantes.

Para ayudar a rehabilitar la empresa, los trabajadores habían aceptado una reducción de la jornada semanal de trabajo de 44 a 40 horas, con reducción proporcional de los salarios (lo que hasta entonces había sido rechazado siempre por los sindicatos). A pesar del sacrificio y de las propuestas de los representantes de los empleados en la dirección de Conforja, la crisis seguía. La facturación continuaba disminuyendo y provocaba atrasos en el pago de salarios, vacaciones, aguinaldos, etc. Además, «las definiciones adoptadas en el ámbito de la cogestión no eran implantadas de manera efectiva, dando como resultado el descrédito de los miembros de la Assecon, de la comisión de fábrica y del sindicato próximo a los trabajadores» (Oda, 2001: 73).

Al parecer, el poder real de la dirección de Conforja continuaba en manos de los antiguos directores, algunos de los cuales no se sometían a las decisiones de la cogestión. En julio de 1997, el sindicato realizó un plebiscito entre los trabajadores de Conforja. La mayoría se manifestó por la disolución de la Assecon, por el rompimiento del acuerdo de cogestión y por la destitución de la comisión de fábrica. La empresa volvía a quedar únicamente bajo la responsabilidad de los propietarios y perdía el apoyo del sindicato en las negociaciones con los gobiernos municipal y estatal, que permitían la continuidad de las operaciones a pesar de la falta de pago de impuestos, tasas y de las cuentas de agua y electricidad.

A partir del momento en que el sindicato asumió la tarea de preservar los 630 puestos de trabajo, éste (junto con la Assecon) empezó a presionar a las administraciones públicas para obtener una moratoria de los débitos ya incurridos, a la

expectativa de que Conforja se rehabilitaría financieramente en poco tiempo. Con la ruptura del acuerdo de cogestión, la empresa perdió este apoyo que, en aquellas circunstancias, era esencial para su supervivencia. En poco tiempo, la bancarrota de la empresa sería decretada. Ante este panorama, el hijo del fundador de la empresa, quien estaba en la dirección, entendió que la mejor alternativa era entregar la gestión a una cooperativa formada por los empleados. «La posibilidad de arrendar las máquinas, equipamientos e instalaciones a los trabajadores se mostraba más ventajosa para Conforja y su heredero que simplemente tener la empresa lacrada y el patrimonio de la familia transformado en universalidad de bienes, derechos, acciones y obligaciones de deudor en quiebra» (Oda, 2001: 77).

La dificultad mayor para transformar Conforja en una autogestión era convencer a los trabajadores, pues habrían de ser despedidos de sus empleos para convertirse en los nuevos dueños del emprendimiento. Una parte de ellos, cuyo líder era un director disidente del sindicato, optó por seguir siendo asalariada, lo que significaba no implicarse en ningún intento de salvar la empresa que, con la venta de los bienes del deudor en quiebra, pudiera recibir una parte de sus derechos rescisorios, además de los salarios atrasados. Los demás, cuyos líderes eran los dirigentes de la ex Assecon, iniciaron discusiones sobre la formación de una cooperativa que pudiera adquirir la empresa y superar la crisis en que estaba inmersa.

Es interesante observar que el corto periodo (alrededor de dos años) en que funcionó la cogestión fue decisivo para convencer a los líderes de los trabajadores de que una cooperativa de producción que remplazara a Conforja tendría posibilidades reales de rehabilitación. La cogestión: «Cumplió un papel importante, pues el acceso a la información hizo posible que los trabajadores que integraban la ex Assecon empezaran a comprender los procesos administrativos, financieros, comerciales y productivos, además de ganarse el respeto de los demás trabajadores como potenciales líderes».

El paso de la cogestión a la formación de una cooperativa:

sólo fue posible concretarlo debido al acceso a los datos relativos a la empresa —relación de clientes, costos de producción y administración, entre otros; al aprendizaje en relación con el funcionamiento de la fábrica—, a la incorporación de los conocimientos de la operación con la administración y la gestión de los negocios de la fábrica; a las discusiones en torno a las alternativas elaboradas por los trabajadores durante el periodo de la cogestión; y al liderazgo concretado en conjunto con los demás trabajadores (Oda, 2001: 74-75).

A pesar de que la mayoría de los trabajadores era favorable a la fundación de una cooperativa —el manifiesto en este sentido se difundió en octubre de 1997— no tuvo lugar en ese entonces porque era demasiado el temor de romper el vínculo de empleado y renunciar al derecho al salario, jubilación, vacaciones, aguinaldo,

etc., aunque no les estuvieran pagando integralmente estos beneficios. El manifiesto proclamaba la confianza de los trabajadores en ser «capaces de construir una empresa, de tal forma que el área fabril de Conforja no clausure sus actividades: los edificios no cierren, las máquinas no paren» (Oda, 2001: 77). Pero la confianza no era, en ese momento, suficiente para que los empleados de la empresa se dispusieran a tomar una decisión temeraria y se volvieran cooperativistas.

La crisis de la empresa siguió durante algunos meses más, hasta que un sector de la fábrica, el de tratamiento térmico, logró romper la inercia. Este sector contaba con una clientela externa para sus servicios, lo que lo tornaba financieramente independiente de la crisis en la producción de forjados, laminados, tubos y conexiones. Un grupo de ex integrantes de la Assecon preparó la formación de la cooperativa, consultando incluso a los clientes sobre si continuarían comprando los servicios después del traspaso de la gestión a los trabajadores. Como el resultado fue positivo, las últimas dudas fueron superadas, aunque con mucha dificultad.

Los trabajadores sólo conocían dos funciones posibles en la economía: o se era patrón o empleado. El autoempleo colectivo era un enigma y la autogestión se ignoraba: «Incluso para los líderes que conducían el proceso de formación de la cooperativa, ésta era una experiencia nueva. De esta manera, temas como la gestión de la cooperativa, la organización del proceso productivo y de trabajo y, principalmente, de la participación de los socios-trabajadores en la conducción de los negocios de la cooperativa no ocuparon un lugar destacado en los debates realizados con los trabajadores» (Oda, 2001: 80).

El 14 de diciembre de 1997, la asamblea de fundación de la Coopertratt (Cooperativa Industrial de Trabajadores en Tratamiento Térmico y Transformación de Metales) tuvo lugar en la sede regional de Diadema del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC. En marzo del año siguiente, Conforja y Coopertratt firmaban un contrato de arrendamiento, prestación de servicios «y otros acuerdos», por lo cual la segunda podría usar edificios, máquinas y equipamientos de la primera a cambio de la prestación de servicios de tratamiento térmico por parte de la segunda, además de porcentajes sobre la facturación de la cooperativa con clientes externos. El contrato era bastante complejo, con porcentajes progresivos para Conforja conforme aumentaba el ingreso externo de Coopertratt.

Un detalle revelador del contrato consiste en que Conforja no sólo dejaba de ser responsable de la remuneración de los trabajadores socios de la cooperativa, sino que ésta empezó a responder incluso por el pago de las obligaciones rescisorias de los mismos. En otras palabras, los trabajadores del sector de tratamiento térmico fueron despedidos por Conforja, mientras que los que decidieron asociarse a la cooperativa quedaron como responsables para generar sus propias partidas rescisorias. De los trabajadores que no quisieron adherirse a la cooperativa, la responsabilidad por el pago de estos derechos seguía siendo de Conforja.

La Coopertratt asumió la gestión de los negocios a su cargo y obtuvo rápidamente muy buenos resultados económicos, que se reflejaron en el retiro de sus socios, que ya en el segundo mes fue «completo», es decir, el flujo de caja permitió que los trabajadores recibieran integralmente la remuneración promedio que tenían antes de la crisis de la empresa. Cuando estos hechos fueron del conocimiento de los demás trabajadores, ellos también se animaron a crear sus cooperativas. Los integrantes de la ex Assecon planearon formar tres cooperativas más de producción, a partir de las unidades de negocios de la empresa, y dos que prestarían servicios a las de producción: una de ingeniería, mantenimiento y herramental, y otra de logística y comercial. Solamente se formaron las primeras tres (entre marzo y abril de 1998): Cooperlafe (laminación de anillos y forjados especiales); Coopercon (conexiones tubulares) y Cooperfor (forja).

Las cooperativas de servicio no prosperaron porque no hubo quien convenciera a los empleados de los sectores técnico y administrativo de dar el gran salto y convertirse en patrones de sí mismos. Los principales líderes que habían integrado la Assecon ya estaban en las cooperativas de producción. Además, tecnócratas y burócratas son más apegados a la jerarquía, ya que en ésta ocupan posiciones de privilegio. Se comprende que en su mayoría hubieran optado por enfrentar las dificultades de un mercado de trabajo con exceso de oferta en vez de igualarse a los trabajadores manuales en un arreglo autogestionario que aún no había comprobado su «eficiencia».

No todos los empleados administrativos y técnicos eligieron esta opción. Varios entraron en las cooperativas por afinidad con sus dirigentes, porque su actividad estaba ligada a uno de éstos o para suplir alguna laguna, etc. En mayo de 1998, cuando las cuatro cooperativas tomaron el lugar de Conforja, esta última tenía 449 empleados, de los cuales 269 se volvieron cooperativistas. Los 180 restantes (40% del total) prefirieron dejar la empresa. Los primeros eran los «despedidos internos» y los últimos, los «despedidos externos».

Con la formación de las cuatro cooperativas, todo el capital material de Conforja es arrendado, lo que exige un nuevo contrato. De la facturación líquida, por área de valores, habría las siguientes deducciones: de 3.5 a 4.5% para la cuenta de Conforja; 3.5% para las partidas rescisorias de los despedidos internos, y de 5.5 a 7.5% para los despedidos externos. Incluso los socios de las cooperativas mantienen sus derechos a créditos diferenciados individualmente, lo que significa que una partida de 3.5% del ingreso generado por todos los cooperativistas se destina a pagar derechos proporcionales a la antigüedad y otras circunstancias de la pasada actividad, realizada por cada uno en Conforja. Y una partida, casi dos veces más grande que el mismo ingreso, se destina a pagar los derechos de los trabajadores que optaron por dejar la empresa.

Estos dispositivos contractuales muestran el enorme apego de los trabajadores a sus derechos laborales, los cuales se habrían perdido en su mayor parte de no

haber sido por las cooperativas de producción que recuperaron la empresa. Los despedidos internos concordaron en trabajar para asegurar los derechos de los despedidos externos, porque «según el ex presidente de la Coopertratt, el riesgo de que los “despedidos externos” abrieran un proceso laboral para reivindicar el pago de sus derechos por parte de las cooperativas, antes del decreto de quiebra de Conforja, era muy grande» (Oda, 2001: 85).

Las cuatro cooperativas contrataron al propietario de Conforja para prestar servicios de asesoría en gestión empresarial mediante el pago de 1.5% de la facturación líquida. De esta forma, se consideraron los intereses de todas las partes implicadas en la crisis de la empresa. Pero, a pesar del desempeño razonable de las cooperativas, la quiebra de Conforja no se pudo evitar, y fue decretada en marzo de 1999. Este acto transformó el patrimonio arrendado por las cooperativas en universalidad de bienes del deudor en quiebra, en propiedad, en principio, de los acreedores de la empresa. Como el interés de estos últimos era seguir manteniendo en actividad el emprendimiento, se firmó un nuevo contrato de arrendamiento ante el juez del proceso de bancarrota.

De manera general, el desempeño económico de las cooperativas en 1998 y 1999 fue bueno, al dar la esperanza de que la crisis podría ser superada. El ingreso operacional bruto fue de 5.4 millones de reales en 1998 y de 9.6 millones en 1999, siendo el costo con los cooperativistas de 1.5 millones en 1998 y 2.9 millones en 1999. Es necesario recordar que el ejercicio de 1998 no cubre todo el año. Finalmente, las utilidades de las cuatro cooperativas fueron de 300 000 reales en 1998 y de 209 000 en 1999. A este respecto, su desempeño fue bastante diferente: las utilidades de la Coopertratt se duplicaron, al pasar de 131.5 mil reales en 1998 a 260.4 mil en 1999; la Cooperlafa sufrió una pequeña disminución en las utilidades (116.8 mil en 1998 y 97.9 mil en 1999), mientras que las otras dos tuvieron pérdidas en 1999: la Coopercon de 39.5 mil reales y la Cooperfor de 109.8 mil reales.

Los datos disponibles no permiten una evaluación efectiva del desempeño de cada una de las cooperativas, pero las dificultades económicas motivaron dos cambios en la dirección de la Coopercon. El 1 de diciembre de 1998, cinco de los integrantes del Consejo de Administración fueron sustituidos debido al descontento de los trabajadores con sus retiros, los cuales eran mucho menores que el retiro completo y ellos lo consideraban como una especie de derecho adquirido.

En el inicio de su mandato, el segundo presidente electo optó por pagar las remuneraciones de los socios-trabajadores, en detrimento de la situación económico-financiera de la cooperativa [...] El 26 de agosto de 1999, también por medio de una asamblea general extraordinaria, la Coopercon promovió la sustitución de su presidente y del coordinador general de la cooperativa. El desequilibrio en las cuentas de ésta, ocasionado por el bajo volumen de facturación debido a la necesidad de recursos para compra de materias primas e insumos y por la propia presión de los trabajadores

para el pago de los retiros —que una vez más volvió a ser inferior al «retiro completo»—, instaron a las demás cooperativas a manifestarse respecto a la necesidad de una «intervención blanca» en la Coopercon. (Oda, 2001: 93-94.)

A pesar de las dificultades que algunas de las cooperativas enfrentan, los socios han alcanzado su objetivo inmediato de preservar sus puestos de trabajo y alcanzar remuneraciones compatibles con el trabajo que realizan. La información disponible a este respecto se refiere a la Cooperlaf, donde el retiro promedio en julio de 2000 era de 1 094.86 reales, el cual se compara de manera favorable con el salario promedio de un metalúrgico del ABC, que era entonces de 1 051.63 reales (Oda, 2001: 111). Al considerarse la situación desesperante en Conforja, que finalmente la llevó a la quiebra, es probable que el desempeño económico de las cooperativas se deba considerar como una mejoría, la cual se consolidará con el paso del tiempo.

De manera general, la práctica de la autogestión se volvió habitual en las cuatro cooperativas. En cada una, además del Consejo Administrativo estatutario, hay un coordinador que ejerce la jefatura. Son personas que ya desempeñaban una posición de liderazgo en Conforja, y todos ex jefes o ingenieros y ex integrantes de la Assecon. Les toca articular los procesos productivos, supervisar a los demás socios y está entre sus funciones la «indicación para el aumento de los retiros/demarcación de funciones/cargos, definición y cumplimiento de horas extras cuando sean necesarias, definición de prioridades de la producción para la atención a clientes/intereses financieros de la cooperativa, entre otros» (Oda, 2001: 89).

Aunque los coordinadores dispongan de gran poder, sus decisiones en general son sometidas a las asambleas generales, que suelen ser numerosas. Entre marzo de 1998 y febrero de 2000, las cuatro cooperativas realizaron nada menos que 120 asambleas, con una asistencia promedio que varía entre 70.4% en la Coopertratt y 77.8% en la Coopercon. Es interesante notar que las dos cooperativas con peor desempeño (Cooperfor y Coopercon) son las que registran mayores índices de comparecencia, lo cual parece indicar que la participación de los socios es más intensa precisamente porque los problemas que enfrentan son más graves. Las asambleas les dan una amplia oportunidad a los socios para incorporar rubros a la agenda y manifestarse.

A pesar de las señales de que la autogestión es una realidad, en alguna medida son los coordinadores quienes se quejan por la falta de participación y de iniciativa de los socios. Según el coordinador de calidad de la Cooperlafa, «no hemos logrado cambiar la mentalidad de los trabajadores [pues] ellos aún son muy dependientes de un patrón». El presidente de la Cooperfor cree que «muchos socios se acostumbraron y siguen trabajando como ex empleados». Para el coordinador general de la Coopertratt, «el “cambio de filosofía” [...] sólo ocurrirá mediante la participación de ellos en los cursos técnicos y en cursos sobre cooperativismo».

Para este coordinador, estos cursos proporcionarían «una mayor autonomía hacia una toma de decisiones sobre la producción, además de darles la posibilidad a los socios de pensar en el negocio estratégicamente y no a corto plazo» (Oda, 2001: 116).

El caso de Conforja es muy revelador acerca de las potencialidades que encierra la transformación de empresas capitalistas en crisis en cooperativas de producción. Gran parte de los titubeos y resistencias de los trabajadores para arrojarse a esta aventura se debe a su calidad de inédita. Con el tiempo y la experiencia acumulada en cooperativas y entidades de apoyo, como la Anteag y la Unisol, es de esperarse que la percepción de las ventajas para los trabajadores de pasar de la condición de asalariados subalternos a socios con plenos derechos de participación en las decisiones se generalice. Es curioso que otros actores, como los depositarios del capital o de derechos sobre la universalidad de bienes del deudor en quiebra, sean más rápidos al entender las ventajas para ellos de transferir a los ex empleados los derechos y responsabilidades sobre el capital físico, por el simple hecho de que sólo su utilización continua garantiza su mantenimiento material y, por lo tanto, la preservación de su valor.

Autogestión a partir de la reforma agraria: el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)

La lucha por la tierra no es nueva en Brasil. Al ser fuertemente reprimida durante gran parte del régimen militar, fue retomada poco a poco cuando ocurre la apertura del gobierno. Comienzan nuevamente las ocupaciones de tierras en los latifundios y, de estas experiencias, surge el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra). De acuerdo con el propio movimiento, en su fase inicial (1979-1984):

La conquista de la tierra es el eje central. El MST quería resolver el problema de la tierra desde el punto de vista individual [...] El desposeído tomaba la tierra y se convertía en pequeño propietario [...] La producción estaba volcada básicamente hacia el autosustento (al mercado iba lo excedente). El nivel de cooperación que existía era lo espontáneo: auxilio gratuito y trueque de días de servicio. (Concrab, 1998: 28-29.)

La agricultura de subsistencia que se practicaba en pequeñas propiedades familiares no logró mejorar el nivel de vida de los campesinos y a algunos se les obligó a entregar la tierra. A partir de 1986, empieza la discusión de cómo organizar a los propietarios, con el Primer Encuentro Nacional de Colonos, en el que estuvieron representados 76 asentamientos de 11 estados. A pesar de la resistencia inicial, «por las experiencias negativas del modelo tradicional de cooperativismo, caracterizado como grandes empresas agroindustriales que desarrollaron una

política de explotación económica de los agricultores» (Concrab, 1999: 6), la discusión evolucionó a favor de este sistema en términos que hoy diríamos son los de la economía solidaria.

Durante la Nova República (Nueva República) (1985-1989), se multiplicaron las asociaciones en los asentamientos, estimuladas por los órganos gubernamentales de extensión rural, especialmente la Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural). La aceptación del cooperativismo ocurre gradualmente. En 1998 se publica un *Manual de cooperación agrícola* del MST. En 1989, el MST intenta organizar la producción en los asentamientos mediante Laboratorios Organizacionales, metodología desarrollada por Clodomir de Moraes a partir de la experiencia de las Ligas Campesinas cuyo objetivo es la formación de cooperativas de producción autogestionarias. En ese mismo año se crean también las primeras CPA (Cooperativas de Producción Agropecuaria) en Rio Grande do Sul: la Coopanor y la Cooptil. En esta fase, la motivación para organizar la cooperación empieza a ser económica (acumular capital) y política (liberar a la totalidad de empleados y procurar sustentar el MST) (Concrab, 1998: 31).

Los documentos del propio movimiento registran que hubo una ruptura en 1989:

Por vez primera se formularon líneas políticas para la organización de los colonos y para la organización de la producción [...] Surge el desafío para realizar una producción que implicara la subsistencia y el mercado. El problema de producción empezaba a ser tan importante como la ocupación [...] Se percibió que las pequeñas colectividades y las grandes asociaciones no lograban incrementar la producción, ora porque eran muy pequeñas, ora por no guiarse con criterios económicos. (Concrab, 1998: 29.)

La política del MST en relación con sus asentamientos se consolida en 1991-1992 con la creación del Sistema Cooperativista de los Colonos, formado en cada asentamiento por cooperativas agropecuarias, cooperativas de comercialización regionales, grupos colectivos y asociaciones; en el ámbito estatal se establecieron Cooperativas Centrales de la Reforma Agraria, y en el nacional se creó la Concrab (Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Brasil, Ltda.), el 15 de mayo de 1992, en Curitiba.

Las CPA unifican los lotes de tierra de los miembros y trabajan el conjunto de acuerdo con un plan de producción. Siendo ésta colectiva, la distribución del producto *in natura* y en dinero tenía que ser orientada por la contribución de cada uno y evaluada de alguna manera. Se pasó así de un modelo bastante individualista, en que el pequeño agricultor tiene toda la autonomía y se expone a todos los riesgos, a uno totalmente colectivista, en que cada miembro de la cooperativa participa de un trabajo socializado, de acuerdo con una repartición del trabajo previamente planeada.

La CPA se inspiró en el modelo de Cuba, en el que la cooperativa tenía poca autonomía frente al Partido-Estado y se enmarcaba en la planeación nacional. En pocos años quedó claro que, en Brasil, este tipo de cooperativa no era compatible con la mayoría de los colonos. Solamente una minoría políticamente convencida se adhirió con entusiasmo a las CPA y persiste en éstas. Ya en 1993 su fracaso se hizo evidente y comenzó a ser reconocido. En varias CPA se registraron conflictos seguidos de abandono por gran parte de los cooperativistas.

La CPA, a pesar de la crisis que atraviesa, se muestra superior a la pequeña propiedad, en cuanto a la forma de organizar la economía en los asentamientos:

En las CPA se crearon guarderías, comedores colectivos, que posibilitaron la participación de las mujeres en la producción [...] La integración con grandes agroindustrias, opción y condición de algunas cooperativas, hizo posible el acceso al capital y al conocimiento y calificación de la mano de obra de los agricultores. La capitalización de las CPA lleva a los colonos de estas cooperativas a tener en promedio una renta mayor que los propietarios individuales, y la capitalización es en promedio 10% superior. El nivel de vida es superior en la mayoría de los lugares que el de muchas familias, las cuales viven empleadas en la ciudad, considerando la producción y la renta monetaria. También es superior en promedio a los poseedores (ocupantes de tierras con el consentimiento de sus propietarios), los que van a medias en la producción con los dueños y hasta la gran parcela de pequeños agricultores que aún resisten en el campo. (Concrab, 1999: 24-25.)

Las CPA revelaron desde su inicio graves deficiencias administrativas y técnicas, debido a la poca formación en estas materias por parte de los colonos. Para remediar esta carencia, se creó el curso Técnico en Administración de Cooperativas, en Veranópolis (Rio Grande do Sul), y el primer grupo se inició en 1993. Seis años después ya se habían formado 500 técnicos en cooperativismo, en un nivel de segundo grado. Todo lleva a creer que, con la paulatina incorporación de estos técnicos a las cooperativas de producción y comercialización, el desempeño administrativo y técnico debe de estar mejorando.

El fracaso de las CPA se debió a que, posiblemente, la mayoría de los colonos prefiere la pequeña producción de mercancías, aunque dé como resultado un menor nivel de vida y un mayor riesgo, debido a la gran oscilación de los precios de los productos agrícolas. En las cooperativas formadas a partir de la crisis de empresas industriales, los asociados siempre trabajaron colectivamente bajo el mando del capital, lo que los hizo conscientes de que dividir el emprendimiento en pequeños talleres individuales sería poco factible y un fracaso económico. Además, no tenían dificultad para evaluar la contribución de cada uno al producto y, por lo tanto, para definir reglas de repartición entre ellos del rendimiento obtenido.

La situación de los trabajadores rurales es, en este sentido, completamente diferente. El trabajo agrícola se hace en pequeñas unidades, incluso cuando se

realiza en tierra ajena, arrendada, cedida u ocupada. Son pocas, en el medio rural brasileño, las empresas agrícolas integradas anexas a las fábricas. Además, cada colono es dueño de un lote individual que recibe del INCRA. Por lo tanto, la alternativa para trabajar de manera autónoma es factible, además de ser el modelo «natural» en el campo brasileño. No debe sorprender, entretanto, que la primera tentativa para implantar la economía solidaria mediante la reforma agraria haya fracasado en parte.

No obstante, el MST sigue empeñado en desarrollar una agricultura moderna en los asentamientos que conquistó y sabe que esta meta exige un grado avanzado de cooperación entre los agricultores. Al reconocer que la CPA no es deseada por la mayoría de los colonos de los asentamientos, el movimiento hizo un retroceso táctico: en vez de dar prioridad únicamente a la CPA, empezó a desarrollar otras formas de cooperación, como las cooperativas de comercialización, las cuales preservan la individualidad del campesino, pero permiten organizar compraventas en común, con una palpable ventaja para todos en términos de precios. Además, estas cooperativas (denominadas CPS: Cooperativas de Prestación de Servicios) ayudan a mecanizar la agricultura mediante la compra en común de equipos caros, como tractores y máquinas cosechadoras, y permiten el desarrollo de agroindustrias.

Pero el MST procura evitar que el asentamiento sea dividido entre los asociados de las CPA o las CPS y los que trabajan aisladamente en sus lotes. El Sistema Cooperativista de los Colonos (SCA) pretende abarcar a todos los habitantes de los asentamientos, incluso a los individuales. Por medio de este sistema, el MST procura dar a los asentamientos una estructuración democrática, en que la economía solidaria pueda avanzar en la medida en que más y más colonos entiendan que la cooperación vale la pena y ofrece menos riesgos que la actividad individual aislada.

Para el MST lo que importa es que todos los propietarios de los asentamientos participen en una experiencia de cooperación, rompiendo de esta manera con el aislamiento, pues aquélla tiene como objetivo el desarrollo de la producción. La cooperación tiene como fin contribuir al avance de la organización de la producción para mejorar la calidad de vida de las familias de los colonos. Unos pueden únicamente ofrecer días de servicio; otros pueden comercializar en conjunto; otros, tener una asociación en las máquinas; algunos, tener alguna línea de producción en común; algunos otros pueden estar en grupos colectivos; otros, estar ligados a una cooperativa, y finalmente otros más, pertenecer a una cooperativa totalmente colectiva. (Concrab, 1998: 50.)

La secuencia de solidaridad, construida de esta manera, es un modelo que el movimiento popular podrá desarrollar en las ciudades. Cada modalidad de cooperación combina en diferentes grados la autonomía individual con trabajo colectivo y depende tanto de la voluntad de los miembros como de las características

de la producción. En la propia agricultura hay ramas de producción, como el cultivo de fresas o la crianza de pequeños animales, en que el trabajo individual o familiar tiende a ser más eficaz que el trabajo colectivo a gran escala, que a su vez es probablemente superior en las plantaciones de cereales altamente mecanizadas y que utilizan intensamente productos químicos.

3. ESTUDIOS DE UN CASO: ASENTAMIENTOS DE LA REFORMA AGRARIA EN PARANÁ

Abapan

Tres asentamientos diferentes fueron estudiados por Maria Antônia de Souza (1999): Abapan, Novo Paraíso y Santa Maria. El primero es el más antiguo, surgió en 1985 y en éste la posesión de la tierra es totalmente individual. Las familias son provenientes del norte y del oeste de Paraná. El MST sugirió que se organizaran por grupos de la misma procedencia. Existen tres asociaciones.

El presidente de una de las asociaciones nos relata que la segunda de éstas surgió a partir de divergencias en el interior de la primera, pues los trabajadores tenían objetivos diferentes, tanto en términos del tiempo que se destinaba al trabajo, como al tipo de producto y al número de miembros de la familia que iba a implicarse en las actividades. Otro grupo más de personas que no estaba organizado, al observar el trabajo de las otras dos asociaciones, decidió formar una tercera, donde el objetivo es siempre la venta de productos en conjunto, así como la elaboración de proyectos para la obtención de créditos agrícolas. (Souza, 1999: 140.)

En Abapan, el trabajo es realizado por la familia en su lote individual, lo que permite conservar la división tradicional del trabajo y la autoridad entre los sexos. La autoridad paterna tiende a predominar. Pero como pequeños agricultores autónomos, los colonos de los asentamientos quedan en una situación inferior en la venta de sus productos e imposibilitados para conseguir créditos y adquirir equipamiento de mayor envergadura y valor. Para superar estos obstáculos, procuran asociarse, lo cual implica un precio: pérdida de autonomía, necesidad de coordinar el tiempo de trabajo en tareas comunes y qué tipo de producto producirán las familias, además de conciliar el trabajo de los miembros de éstas para la asociación con lo realizado en sus unidades individuales. Las divergencias respecto a estos asuntos llevaron a la escisión de la primera asociación, y el deseo de preservar algo de autonomía indujo a la conformación de una tercera. Cada asociación tiene en promedio 13 familias, un número pequeño que debilita las ventajas de ésta, pero probablemente expresa el máximo de renuncia a la cual los colonos están dispuestos.

Finalmente, en 1997, 12 años después del inicio del asentamiento, se logró reunir a las asociaciones en la Cooperativa de Comercialización Cotramic, que pretende vender en conjunto la producción de todos los asentamientos del municipio de Castro para alcanzar los mejores precios y los menores gastos de transacción por unidad. Sólo que, por motivo de la investigación, «la cooperativa estaba sin actividad debido a la propia acción de los socios, “quienes terminan por esperar las decisiones de la dirección [...] No comprenden que también ellos pueden decidir”» (Souza, 1999: 140). La explicación de la inactividad tal vez se deba a que:

El estatuto de la cooperativa prevé que cada socio debe de estar organizado en grupos de 10 familias, lo que motiva/obliga a los trabajadores a organizarse y a (re)elaborar experiencias de tipo práctico [...] técnico (por ejemplo: el trabajo manual empieza a ser realizado con maquinaria, como el tractor), familiar (por ejemplo: en un grupo, las decisiones no las toma el «jefe» de la familia, sino el grupo cuyos miembros deben estar de acuerdo). (Souza, 1999: 142.)

Era mucho cambio de una sola vez, sobre todo si se propone de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. En la fundación de la cooperativa estaban presentes, además de los asociados de dos asentamientos, representantes del Partido de los Trabajadores, ediles y un diputado estatal, el sindicato de trabajadores rurales de Castro y miembros de la dirección estatal del MST. Hablaron en público representantes de la Central Cooperativista de los Asentamientos, del MST y el agrónomo de la región que condujo la asamblea. El primero enfatizó que «serán los “pequeños” los que irán a dirigir la cooperativa». El agrónomo, entre otras consideraciones, creyó que debía advertir que la cooperativa «no va a enriquecer a nadie ni va a mejorar si el grupo no quiere» (Souza, 1999: 141-142). La impresión que da el informe consiste en que la cooperativa es una idea de los asesores y de los que apoyan de manera externa, quienes, con las mejores intenciones, proponen la reorganización total del asentamiento, teniendo como objetivo los avances técnicos y económicos. Sólo que la propuesta ignora la enorme dificultad de las familias asentadas para asociarse y emprender actividades en común. El que la cooperativa no haya salido del papel se debe a la resistencia pasiva de los grandes interesados que, sin osar discordar abiertamente, decidieron «quedarse a esperar las decisiones de la dirección».

Novo Paraíso

El segundo asentamiento estudiado por Souza (1999) es el de Novo Paraíso, cuya área era una propiedad irregular. Al saber esto, el MST dirigió una carta al asentamiento Ouro Verde, en el municipio de Cantagalo, donde gran número de familias

ocupaba un área demasiado pequeña, y convocó a las personas hacia el área referida, la cual conformaba el inmueble Tigre. Quince familias se desplazaron hacia allá y encontraron a otras 27 familias venidas de Inácio Martins, que ya habían formado la Cooproserp (Cooperativa de Producción y Servicios de Pitanga). La unión de los dos grupos dio como resultado un total de 42 familias asociadas a la cooperativa.

El desarrollo de este paso inicial se observa mejor a través del estudio realizado por Raquel Sizanowski (1998) de esta cooperativa, la cual fue fundada el 24 de agosto de 1989, pero cuyo asentamiento se hizo oficial sólo hasta 1992 y en este intervalo no contó con líneas de crédito. Además, la Cooproserp fue la primera cooperativa totalmente colectiva, en que los lotes de las familias fueron agrupados en una sola unidad de producción. No había experiencia anterior, los únicos conocimientos que poseían los cooperativistas sobre el manejo de una cooperativa colectiva eran los adquiridos en el Laboratorio Organizacional de Campo, el método de capacitación creado por Clodomir de Moraes.

El periodo entre 1989 y 1992 representó:

Tres años de campamento en el área, viviendo en condiciones precarias y bajo constantes amenazas de desalojo, enfermedades y escasez de alimentos. Aún en 1989, cinco familias desisten de la propuesta de colectivización y abandonan el campamento [...] En 1990, 18 familias abandonan la propuesta de la Cooproserp y se mudan a otro local, también dentro del mismo asentamiento y, enseguida, realizan la división de su parte en lotes individuales, organizando el trabajo a partir de la unidad familiar. (Sizanowski, 1998: 48.)

En 1992, cuando se da la oficialización del asentamiento, representantes del MST y del Instituto Ambiental de Paraná deciden que:

Sólo podrían permanecer en el área aquellos que continuaran la experiencia colectiva. Luego de esta delimitación, de las 18 familias que habían optado por el trabajo individual, cuatro vuelven a la Cooproserp y las otras constituyen la Astroagri, que posee una forma de organización más sencilla, con mayor autonomía de los colonos en relación con la producción para el autoconsumo y un volumen de inversiones menor que la Cooproserp [...] Por divergir de la colectivización, 16 familias desisten del proyecto. A fines de 1992, 15 familias permanecen en la Cooproserp y 11 se fijan en la Astroagri. (Sizanowski, 1998: 49.)

Los cambios, con todo, no cesan. En 1993, nueve familias abandonan la cooperativa y se mudan al asentamiento de Nova Cantu, de donde vienen 10 familias a la cooperativa. En 1996, dos familias dejan la cooperativa y se mudan al asentamiento Araguaí. Al año siguiente, dos familias entran a la Cooproserp. La autora observa al respecto:

Estas familias que se retiraron de la cooperativa renunciaron a sus propiedades, es decir, a la propiedad individual de cada familia, luego de su salida, queda en poder de la cooperativa [...] ¿Por qué estas familias, después de mucho sacrificio, de las luchas en el MST, de los periodos de campamento [...] deciden abandonar la cooperativa y dejar la tierra que conquistaron? El abandono de la cooperativa se constituye en el problema central de esta investigación. (Sizanowski, 1998: 50.)

Conviene observar en principio que todas las familias que salen de la cooperativa reciben tierras, ya sea en el propio asentamiento Novo Paraíso, ya sea en otros asentamientos. Lo cual muestra que el MST acepta que las familias abandonen el primer experimento de cooperativismo colectivo, lo que permite suponer que para el propio movimiento esta modalidad de organización social no podría ser impuesta a todos los colonos. Maria Antônia de Souza (1999: 144-145) observa, en relación con la Astroagri (Asociación de los Trabajadores Organizados en la Agricultura), que ésta resulta del rechazo a la colectivización: «Hacen el intento de trabajo individual, donde no obtuvieron resultados, y son obligados a retomar nuevamente lo colectivo en la forma de asociación».

De manera general, los testimonios recogidos por las dos investigaciones entre los colonos asentados que permanecieron en la cooperativa y los que la dejaron permiten entrever tres motivaciones principales que causaron el abandono: *a*) el escaso rendimiento económico para un esfuerzo de inversión relativamente grande. Muchos testimonios hablan de la frustración con la ganancia insuficiente, pero reconocen el sistema de actuar sin mediaciones de los que desisten, pues es necesario más tiempo para recoger los frutos; *b*) el descontento por la falta de incentivos a los que trabajan más y producen mejor. Los retiros se calculan por el número de horas trabajadas, sin distinguir diferencias de esfuerzo ni de resultados. Eso lleva a algunos a «perder el ánimo» primero, y después a optar por el lote individual, donde el esfuerzo y la productividad no son compartidos ni las ganancias uniformadas por el promedio; *c*) insatisfacción con el papel del trabajo familiar en lo colectivo: sólo los adultos son socios y ganan, de modo que las familias con hijos pequeños tienen que sostenerlos por cuenta propia; además, el padre pierde su poder de «jefe» de la familia y ésta pierde el poder de decidir sobre su producción y su trabajo.

Las condiciones de vida (presumiblemente en 1997, cuando Raquel Sizanowski dirigió su investigación) de las familias asociadas a la Cooproserp eran razonables. Pertenecían a la cooperativa 16 familias, 11 parejas y 5 solteros, con 26 niños, 8 adolescentes y 29 adultos, lo que hace un total de 63 personas.

Las viviendas son organizadas en *agrovillas*,* donde cada familia posee un lote individual de 12 x 30 m. En algunas hay huertas y pequeños animales, como gallinas y

* *Agrovila*, neologismo brasileño definido como núcleo de población con servicios integrados de comunidad. [T.]

pavos. La construcción de las casas, así como alguna mejora o reforma, es de responsabilidad del asociado [...] Las casas son todas de madera, la mayoría sin revestimiento y algunas sin piso de madera. Cuentan con energía eléctrica y redes de drenaje, pero únicamente en una de éstas hay baño. La mayoría de las familias posee televisión, radio, refrigerador y estufa de gas, aunque la estufa con leña sea más utilizada; sólo en una casa hay antena parabólica y en dos hay regadera eléctrica. A pesar de ser todavía rústicas, las casas en general están limpias y bien arregladas. (Sizanoski, 1998: 51-52.)

Para los 16 niños de hasta seis años hay una guardería, dirigida por dos madres, quienes reciben un salario de la alcaldía. Los 10 niños de 7 a 14 años asisten a una escuela municipal cerca de la cooperativa, la cual atiende también a los niños de la Astroagri. El centro de salud más próximo se encuentra en Pitanga, aproximadamente a 30 km de distancia. Las enfermedades habituales se tratan con plantas medicinales. «Todos los niños están saludables y bien alimentados» (Sizanoski, 1998: 51). En 1997 la cooperativa distribuyó 38 000 reales a sus socios, lo que da un promedio de aproximadamente un salario mínimo por mes.

La investigadora presenta como conclusión que:

Al hacer algunas comparaciones externas, como por ejemplo entre habitantes de *favelas* urbanas y estos colonos, podemos afirmar que su condición de supervivencia es superior a la de los primeros, pues se alimentan bien, tienen casa, buena salud, trabajo. No poseen un nivel de vida ideal, pero se encuentran muy distantes de la miseria de las *favelas*. (Sizanoski, 1998: 55.)

Maria Antônia de Souza presenta una evaluación idéntica: «En relación con el funcionamiento de la cooperativa y los avances obtenidos en el asentamiento, es notoria la mejoría en la calidad de vida de las familias, de la construcción de casas, de la infraestructura y de los sectores de producción» (Souza, 1999: 145).

Santa Maria

Formado por grupos excedentes de asentamientos en el oeste y centro oeste de Paraná, el asentamiento de Santa Maria tuvo su inicio en 1992, pero su regularización final ocurrió hasta 1994. Es el más reciente de los tres asentamientos estudiados. Las familias llegaron a él con el propósito «de fundar una cooperativa y trabajar en colectividad. La Copavi (Cooperativa de Producción Agropecuaria Vitória) fue fundada por 25 familias que habían sido arrendatarias. Cuando tuvo lugar la investigación de Maria Antônia de Souza, había 19 familias, de las cuales

estaban «cuatro en proceso de experimentación, lo que constituye una especie de preparación para la colectividad, donde la familia se inserta en un sector de producción y en la organización del asentamiento como un todo, al empezar a conocer las normas de la cooperativa» (Souza, 1999: 148). Ésta es una práctica en los asentamientos del MST: «Los lugares que dejan las familias que renuncian son ocupados por otras familias que se interesan por la colectividad y pasan por un año de experimentación en el asentamiento» (Souza, 1999: 146).

El propósito de los cooperativistas era tanto económico como político. El reglamento interno de la Copavi determina como sus objetivos:

Ser una cooperativa de producción, comercialización e industrialización con el objeto de organizar el trabajo de sus socios; liberar mano de obra para contribuir al MST y al SCA; ser una organización social de reivindicación y de lucha a favor de la reforma agraria y de interés de su marco social; dar ejemplo a través de los resultados económicos y sociales en que la reforma agraria tuvo éxito; especialización de la mano de obra, garantizar la participación en las decisiones, ejecución, control y reparto de utilidades mediante la gestión democrática. (Souza, 1999: 149.)

La cooperativa intentaba dedicarse a lo pecuario, la labranza, la horticultura y la industria. La actividad más lucrativa es la referente a las huertas, cuya producción se comercializa en Paracity y en el municipio vecino de Cruzeiro. En volumen, la producción más grande es la de leche, que pretendían industrializar.

Entretanto, llegaron a la conclusión de que «no sabían hacer, por ejemplo, aguariente, trabajar con los derivados de la leche, etc.» Por otro lado, ahora que han logrado tener calidad en la producción, se tropiezan ante el mercado, por ejemplo, en la cuestión de la legalización de la leche. [Uno de los socios] afirma que la leche debe de ser lo «más importante» y que hay muchas inversiones, por ejemplo, en el área de los cerdos y de los pollos, y poco lucro, es decir, las altas inversiones y el bajo rendimiento económico «repercuten políticamente, pues empiezan a mostrar que no han tenido buen resultado». (Souza, 1999: 149-150.)

La deficiencia técnica, que parece haber sido general en las CPA, se volvió un impedimento para la industrialización de los productos agropecuarios. Es probable que la calificación profesional de la nueva generación permita superar este problema. Pero, entretanto, resurge la «ventaja inmediata», la impaciencia con el rendimiento de las inversiones, que en este testimonio adquiere una connotación política: la ganancia modesta puede dar la impresión de que el experimento ha fracasado, lo que sería grave para una cooperativa que colocó entre sus objetivos «dar ejemplo mediante los resultados económicos y sociales de que la reforma agraria ha tenido un buen éxito».

Desde su fundación hasta 1999, 10 de las 25 familias fundadoras dejaron la Copavi. «Todos llegaron con el objetivo y la certeza de que lo colectivo sería la mejor manera de organizar el asentamiento. Entretanto, después de seis años, alrededor de 40% de las familias desistieron de la colectividad, al optar por formas individuales de trabajo y asociativas en el momento de la comercialización y compra de equipamientos e insumos agrícolas» (Souza, 1999: 150).

Los motivos de la renuncia de las familias ante la propuesta de constituir una comunidad colectivista son básicamente los mismos, como ya se vieron en el caso de Novo Paraíso: «mentalidad de las personas, convivencia en grupos; rendimiento económico; decisiones, pero principalmente la cuestión económica» (Souza, 1999: 149).

El MST ha encontrado una manera para facilitar la integración de las familias en la colectividad, la cual consiste en los «núcleos de familia», formados por vecinos. La *agrovilla* está formada por hileras de casas que dan origen cada una a un núcleo. Éste desarrolla lecturas, discute los problemas vividos, la rendición de cuentas, la planeación de las actividades. «Otro espacio para la discusión es el comedor colectivo. Durante el horario del desayuno se hacen consultas a las personas, indicaciones e informes.» Estas modalidades de integración suplen las deficiencias de las asambleas que se hacen mensualmente, pues según informa el presidente de la cooperativa, «la participación de las personas no es lo que debería ser, éstas tienen dificultades para discutir, opinar» (Souza, 1999: 149).

Esto parece ser una dificultad en muchos de los emprendimientos solidarios y no únicamente en las cooperativas rurales del MST, ya que los campesinos y obreros son personas humildes que se intimidan delante de un auditorio más grande y, por eso, rara vez hablan en las asambleas. Pero intentan manifestar sus puntos de vista mediante sus compañeros más desinhibidos con los cuales intercambian ideas en grupos menores. De ahí la importancia de los núcleos de familia y de la plática informal durante el desayuno en el comedor.

Conclusiones

Los tres estudios de estos casos comprueban la dificultad de implantar formas avanzadas de cooperación en los asentamientos orientados por el MST, tanto por cuestiones culturales —la preferencia de la mayoría de los colonos por la agricultura familiar bajo moldes tradicionales— como por cuestiones económicas. Las familias se dejaron convencer de la superioridad de las cooperativas de producción por su mayor facilidad para adquirir equipamientos y máquinas portadoras de tecnología avanzada. Esperaban que el «sacrificio» de sus recursos del Procepa, cedidos al fondo común, resultara en ingresos abundantes, lo que en ninguno de los dos casos —Cooproserpe y Copavi— sucedió, al menos en los primeros años de vida de las cooperativas. La frustración de estas expectativas tal vez haya sido

el motivo más importante de las familias que desistieron para optar por la producción individual y la comercialización asociada.

El Primer Censo de la Reforma Agraria de 1997 muestra el predominio de la producción individual en los asentamientos: 93.96% contra únicamente 1.21% de producción colectiva y 4.28% de forma mixta (Souza, 1999: 150). Los estudios del caso dan una idea de la dinámica que condujo a esta situación. El mismo censo da otra información relevante: el origen social de los colonos: 66.13% eran agricultores o campesinos, 5.67% trabajadores rurales, «siendo los restantes distribuidos, entre otras actividades rurales, en jornaleros agrícolas mediante convenio, choferes, mecánicos, albañiles y carpinteros» (Souza, 1999: 152-153).

Tal vez las siguientes consideraciones de la investigadora sirvan como conclusión:

En el MST la propuesta de estas colectividades surge con el objetivo central del cambio de la sociedad y del sistema capitalista [...] Sin embargo, las formas idealizadas de las colectividades (totalmente colectivas) no están siendo reproducidas en los asentamientos, mientras que las asociaciones de producción y de comercialización están proliferando. Lo interesante es cuestionar el porqué de esta circunstancia y cuál es la influencia del proceso de socialización política que se vivió, en el periodo del campamento, por la mayoría de los colonos. Por un lado, conforme los testimonios de los que habitan en los asentamientos, sienten una mayor libertad en sus lotes individuales, aunque sepan que, para sobrevivir en el lote, es necesario estar agrupados. Por otro lado, se destacan los hechos sociales y culturales como factores que influyen en esta resistencia a la colectividad. Por ejemplo: mientras que en la colectividad todos trabajan «igualmente», al organizarse en sectores y coordinaciones de grupos, quien orienta el trabajo y las órdenes en los lotes individuales generalmente es el marido o el hijo mayor o aun la esposa, en algunos casos. En la colectividad, la división del trabajo y la repartición de utilidades es semejante a lo que ocurre en una empresa, y las normas de funcionamiento se aplican de acuerdo con lo previsto en el reglamento interno. Es decir, las colectividades exigen una ruptura sociocultural de un modelo anterior de trabajo y de familia. Lo «nuevo» se considera como algo muy diferente a lo vivido antes, principalmente para los ex pequeños agricultores. *Generalmente es bastante aceptado entre los jóvenes, cuyo interés es trabajar con maquinaria e industrialización de productos* [cursivas mías]. (Souza, 1999: 163-164.)

La frase final que se ha destacado abre la perspectiva de que la aceptación de lo colectivo por parte creciente de los colonos sea sólo cuestión de tiempo.

4. AUTOGESTIÓN COMO ARMA PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA: CÁRITAS, ACCIÓN DE LA CIUDADANÍA E INCUBADORAS DE COOPERATIVAS

Cáritas

Cáritas brasileña es una institución de la Iglesia católica, que forma parte de la red de Cáritas Internacional. Ésta tiene como fin dar apoyo a la acción social de la Iglesia y está orgánicamente ligada a la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB). Posee un secretariado nacional en Brasilia que coordina una red de Cáritas diocesanas y regionales. Cáritas desarrolla sus actividades con fondos generados en Brasil por una campaña de solidaridad permanente y con fondos donados por las Cáritas y otras instituciones confesionales del primer mundo dirigidas hacia la cooperación internacional.

Hay que distinguir en las acciones de Cáritas tres grandes rubros [...] el asistencial, el promocional y el de la solidaridad liberadora. El primero data de 1956 [...] cuando Cáritas se encargó de articular las obras sociales de inspiración católica para promover la distribución de los donativos y alimentos, especialmente la leche en polvo estadounidense [...] El promocional empieza en 1966. Las inquietudes provenientes de las contradicciones del programa de distribución de alimentos en el contexto del régimen militar instaurado son el resultado de un proceso de cambio [...] El lema «enseñar a pescar» se contraponía a «dar el pescado», propio de la fase anterior. Experiencias diversificadas de acciones comunitarias del tipo de las comunidades eclesiales de base, de las asociaciones de desarrollo comunitario y del cooperativismo dan sustento práctico a la reflexión sobre el desarrollo.

[...] El énfasis en la solidaridad liberadora, actual fase de Cáritas, privilegia un enfoque, un punto de partida sobre el cual actúa ya sea en situaciones de urgencia, en apoyo a iniciativas comunitarias o asociativas, o a las movilizaciones populares [...] La urgencia para llevar a cabo acciones mediante proyectos que respondieran a las reales necesidades de la comunidad llevó a la opción por la línea de auxilio a los Proyectos Alternativos Comunitarios (PAC) como expresión de compromiso social con el pueblo y como una demostración visible de que los trabajadores organizados y apoyados encuentran una salida para sus condiciones de miseria. (Bertucci, 1966: 60-62.)

Este informe sintetiza la gran evolución de la Iglesia católica de una acción puramente asistencial hacia una postura de crítica al capitalismo, con la proposición de que la solidaridad libera. Ésta implica una tesis osada: la de que los trabajadores, en el momento que se organicen y obtengan apoyo, pueden por sí solos superar la miseria. Una de las implicaciones de esta tesis es que este auxilio no tiene que ser del Estado, postulado general de todas las corrientes de izquierda

hasta entonces. Cáritas empezó a apoyar a miles de PAC por todo el Brasil, desde 1984, contando con la ayuda de Cáritas suiza, Misericordia, Cebemo, Entraide e Fraternelle y Cáritas alemana.

La estrategia de vida de millones de excluidos empezó a considerarse como «alternativa de supervivencia». Alternativos han sido también los nuevos movimientos sociales que emergieron como fuerzas sociales capaces de enfrentarse al autoritarismo presente [...] Alternativos han sido aun los nuevos partidos políticos oriundos de estos movimientos. Como lo han sido incluso las Comunidades Eclesiales de Base [...] A los desposeídos les toca la búsqueda de soluciones a sus problemas de manera alternativa a aquellas tradicionales que se han intentado hasta entonces: ni el asistencialismo ni el clientelismo ni las soluciones venidas de arriba hacia abajo. En este contexto nace la propuesta de los PAC en la búsqueda de soluciones creativas y autónomas para los problemas de los excluidos. (Bertucci, 1996: 63.)

El sentido revolucionario prestado a la palabra «alternativo» da testimonio del notable cambio profundo de la Iglesia provocado por la opción preferencial por los pobres, es decir, por los no poseedores de los medios de producción. En un principio la nueva postura no tenía un programa claro de cómo los trabajadores saldrían de la miseria por sus propias fuerzas. Por consiguiente, convoca a las propias comunidades a encontrar las salidas, con la aplicación del antiguo, pero aún hoy indispensable, método de ensayo y error, mediante una vasta multiplicación de diferentes «experiencias».

Los PAC fueron clasificados en cuatro categorías: «comunitarios», subdivididos en productivos y de prestación de servicios, de apoyo a «movimientos populares», a la «acción sindical» y proyectos de «asistencia y promoción social». Se estudiaron 252 PAC implantados entre 1989 y 1992, los cuales corresponden a 25% del total apoyado por Cáritas, que se estiman en, aproximadamente, 1 000 hasta 1992. La mitad de los PAC en estudio eran comunitarios, 82% de éstos por actividades de ocupación y renta. Esto significa que alrededor de 100 de los 252 eran asociaciones o cooperativas solidarias. Una de las conclusiones del estudio establece que los PAC tienden a ser, cada vez más, proyectos productivos, deseados como medios para mejorar el rendimiento de manera asociativa. Una gran parte es rural y coincide con la experiencia del MST que se vio anteriormente. «Debido a las dificultades, los proyectos urbanos representan un mayor desafío. Están volcados completamente hacia la realidad del mercado, deben superar las limitaciones tecnológicas, desarrollar metodologías de capacitación gerencial para el desarrollo de habilidades emprendedoras, crear una economía expansiva de red de pequeños productores y de apoyo a la cadena productiva» (Bertucci, 1996: 80).

Esta conclusión deja claro que cierto número de PAC productivos urbanos logró el desafío, se insertó en la economía urbana y ahora se vuelve hacia el mercado

en busca de medios para tornarse competitivo y disputarse los compradores con empresas capitalistas comparables. Por consiguiente, se sienten desafiados a capacitarse de manera gerencial, a crear una economía de expansión y así en adelante. La tesis de que la solidaridad libera comenzó a ser comprobada en la práctica.

De la gran variedad de experiencias representadas por los PAC, la que ya a mediados de los años noventa reveló un mayor potencial liberador fue la de los proyectos comunitarios productivos, tanto en el campo como en la ciudad. En el campo, una buena cantidad de PAC fueron desarrollados en los asentamientos del MST. En las ciudades surgieron, a partir de la acción de Cáritas, cooperativas y grupos de producción asociada que sirvieron para reinsertar en la producción a personas socialmente excluidas y empobrecidas. No sorprende que, como escribió Bertucci (1996), «más recientemente los PAC empezaron a ser sinónimos de proyectos productivos».

De ahí se entiende que, al hacerse esta evaluación, los PAC productivos se hayan multiplicado. Al referirse tan sólo a Rio Grande do Sul, Gaiger (1996: 271) dice: «Se estima hoy [1999] que Cáritas haya promovido aproximadamente 750 proyectos comunitarios, al abarcar directamente a alrededor de 17 000 personas» (1996: 269). Y más adelante afirma:

Los proyectos alternativos, en su mayoría, son recientes en la historia de Cáritas —y del Estado, conviene agregar— y denotan una aproximación mayor entre las pastorales sociales, organizaciones no gubernamentales y movimientos populares, hecho que se dio en el transcurso de la última década y que penetró lentamente en los diversos ámbitos de la Iglesia católica. De cierto modo, como concepción y punto principal de acción, los últimos 15 años han sido testigos de una sucesión temporal entre proyectos asistenciales, de promoción humana y alternativos. (1996: 271.)

La Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Miseria y por la Vida

El desarrollo de experiencias de economía solidaria experimentó una fuerte aceleración en 1994, cuando la ACCMV (Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Miseria y por la Vida) decidió cambiar su táctica y, en vez de distribuir únicamente alimentos, empezó a fomentar también la generación de trabajo y renta. Esta organización ha alcanzado en dos años la misma evolución que Cáritas había hecho en 15, al pasar de una acción asistencial hacia una «solidaridad liberadora».

La actividad de Cáritas, a pesar de su amplitud territorial, era desconocida por el gran público, al quedar en cierto modo restringida a la Iglesia y a las comunidades movilizadas por ella. La ACCMV era un amplio movimiento de masas, el más grande de Brasil desde la lucha por las elecciones directas en 1938, en el ocaso de la

dictadura militar. Es curioso notar que su Secretaría Ejecutiva Nacional participó con Cáritas (representando a la CNBB), junto con la OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), la CUT (Central Única dos Trabalhadores), el Inesc, Cofecon y la Andifes, lo que lleva a creer que la actividad de Cáritas en el campo de la economía solidaria haya influido en el cambio profundo de la Acción a favor de éste.

La movilización lograda por la Acción fue desde su inicio muy grande:

En agosto de 1993, se estimaba que la ACCMV contaba con 200 comités esparcidos por todo el país. Este número se elevó a más de 3 000 en el mes de octubre del mismo año [...] La Campaña se encarga de Brasil: se realizan espectáculos al aire libre o en estadios o gimnasios, con grandes nombres de la música popular, cuyo objetivo es el acopio de alimentos para Navidad. (Gohn, 1996: 33.)

La cuestión de la generación de empleos fue una prioridad que se activó también en noviembre de 1993, durante la reunión de Betinho con varios secretarios del Ministerio del Trabajo para discutir problemas de desempleo en el país. También la alcaldía petista de Santos dio inicio en aquel mes a una campaña de generación de empleos en sintonía con la Campaña. La opción por la cuestión del empleo fue estratégica. Por un lado, tenía como fin responder a las críticas que se dieron por la asistencia asociada a la distribución de canastas y, por otro, darle un sentido nuevo a la movilización, de manera que los comités siguieran movilizados después de la Navidad. (Gohn, 1996: 34.)

Los resultados de la opción por el empleo por parte de Betinho y de la Acción de la Ciudadanía, por lo que sabemos, no fueron objeto de ningún levantamiento. Cabe notar que la Campaña era normalmente descentralizada y no hay registro de todo lo que se hizo por su iniciativa, pero por lo menos puede destacarse un acontecimiento importante y pleno de consecuencias: la conformación de la Cooperativa de Manguinhos, en Rio de Janeiro.

En esta región, donde se localiza la Fiocruz (Fundación Oswaldo Cruz), viven 35 000 personas, parte de las cuales habita en 10 *favelas* que conforman el Complejo de Manguinhos. Al estar desempleada gran parte de la población de las *favelas*, pobre y necesitada, el narcotráfico terminaba por darles empleo a los jóvenes. En 1994 estalló la lucha por los puntos de control de tráfico de drogas y de armas, y las balas perdidas de los tiroteos alcanzaron a la Fiocruz, sobre todo a la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSP), cuyas ventanas blindadas dan hasta hoy un mudo testimonio de la amenaza a la integridad física a la que alumnos y profesores estaban expuestos.

Esta situación movilizó a los cuerpos docente y discente de la ENSP, los cuales decidieron:

Abrirse a la comunidad, procurando entender lo que ocurría y contribuir a su análisis y solución [...] Una gran junta, que reunió alrededor de 80 representantes de las

comunidades del Complejo de Manguinhos, selló un acuerdo de enfrentamiento compartido de la situación [...] La primera iniciativa que se implementó fue, entonces, el fomento para la constitución de una Cooperativa de Trabajo (denominada Cootram), a fines de 1994, cuyo objetivo sería colaborar al enfrentamiento del desempleo y de la pobreza [...]

Al participar desde su inicio en el Comité de Entidades para el Combate contra el Hambre y por la Vida (Coep), la Fiocruz solicitó el apoyo de las asociaciones integrantes del movimiento, y de inmediato lo recibió de la Gerencia de Cooperativismo del Banco del Brasil³ para desarrollar la capacitación en cooperativismo, la cual fue realizada por el Instituto Superior de Cooperativismo de la Universidad Federal de Santa Maria (UFSM). Es relevante destacar cómo las condiciones materiales y de proyecto social compartido por las entidades componentes del Coep fueron importantes para impulsar la iniciativa de la Fiocruz. (Buss, 2000.)

La Cootram fue contratada por la Fiocruz, la cual reúne una cantidad considerable de instituciones de enseñanza, investigación y producción de vacunas, para el reciclaje de la basura y prestación de servicios de jardinería y de limpieza de los edificios del *campus* de Manguinhos. Además, la Cootram montó también un taller para costureras.

La reducción de gastos de la Fiocruz con las actividades de limpieza y de jardinería fue aproximadamente de 15% y cada cooperativista empezó a recibir el doble de lo que recibían los trabajadores contratados por las antiguas empresas privadas lucrativas que prestaban esos servicios. Este resultado transcurrió desde la disminución del lucro antes privatizado y su apropiación por la empresa privada, pero de posesión colectiva (la cooperativa) y por el contratante de los servicios de la misma (la Fiocruz) [...]

La Cootram empezó con 200 integrantes; sin embargo, cerró el año de 1999 con aproximadamente 1200 trabajadores cooperativistas, quienes participaban en áreas de trabajo de baja capacidad tecnológica [...] y, de manera independiente en sus relaciones con la Fiocruz, en la producción de materiales para la construcción y en talleres de corte y confección [...] Los materiales de construcción que producen poseen una calidad equivalente y un precio significativamente más bajo, siendo utilizados para mejorar las viviendas populares y la infraestructura urbana. Los recursos financieros se originan y circulan en la propia comunidad. Se trata, según muchos analistas, de una de las más exitosas experiencias de cooperativas populares de trabajo del país. (Buss, 2000: 120-128.)

³ Cabe hacer notar que el Banco de Brasil estuvo implicado profundamente en la Campaña contra el Hambre, junto con otras empresas estatales, particularmente bancarias. De los 3000 comités de la ACCMV en octubre de 1993, nada menos que 1907 eran del Banco de Brasil (Gohn, 1996: 33).

El caso de la Cooperativa de Trabajo de Manguinhos es un ejemplo desde varios aspectos. En primer lugar, porque nace de una iniciativa de la Fiocruz como integrante de la Campaña contra el Hambre, principalmente cuando ésta da prioridad a la opción por la economía solidaria como medio de combate a la miseria. En sus desarrollos, la Coep continuará participando activamente, como enseguida se verá.

En segundo lugar, el gran éxito de la Cootram se debió a la apertura del mercado de servicios de Fiocruz. Todo lleva a creer que estos mismos servicios ya los realizaban los habitantes de las *favelas*, en la condición de asalariados de las empresas privadas prestadoras de aquéllos. Pero, al sustituir a la empresa capitalista por la solidaria, la Fiocruz realizó un ahorro ventajoso, mientras que los cooperativistas obtuvieron una duplicación de su ingreso. No queda duda de que en la prestación de servicios de baja capacidad tecnológica, la cooperativa de trabajo, al menos en Manguinhos, es más competitiva que cualquier empresa capitalista análoga.

Incubadoras de cooperativas

En tercer lugar, el proceso de conformación de la Cootram implicó por primera vez a universidades, en este caso a la ENSP y a la UFSM. Una parte de la élite científica y educacional de Brasil decidió comprometerse para ayudar a construir la economía solidaria. El siguiente paso fue estandarizar esta ayuda en la forma de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP). La primera ITCP fue creada en 1995, en la Coppe/UFRJ, el centro de posgrado en ingeniería de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, mediante el convenio de la Coppe con la Finep y la Fundación Banco de Brasil, estas dos últimas, instituciones financieras de la nueva sociedad. En el segundo semestre de 1995, la Incubadora apoyó la implantación de la Cootram, junto con la Fiocruz y la Universidad Federal de Santa María. A partir de 1996, aquella empezó la formación de cooperativas en la Baixada Fluminense y en las *favelas* cariocas.

La Incubadora de Cooperativas Populares vino a llenar una laguna vital en el proceso de conformación de cooperativas y grupos de producción asociada —iniciado por Cáritas y expandido por la ACCMV—: la de dar asesoría continua a los emprendimientos solidarios al divulgar los principios del cooperativismo entre los grupos interesados y ayudarles a organizar actividades productivas o de prestación de servicios, a perfeccionar las técnicas empleadas, a legalizar las cooperativas, a buscar mercados y financiamiento, etc. También la propia universidad contrató cooperativas para la prestación de servicios de limpieza y congéneres en provecho propio, además de hacerlas viables y mejorar el rendimiento de los trabajadores. La Coppe, y enseguida otras unidades de la UFRJ y el Hospital Pedro Ernesto de la UERJ (Universidad del Estado de Rio de Janeiro) hicieron eso (ITCP, s.f.: 20-26).

Una vez reconocido el éxito de la ITCP de Rio de Janeiro, las entidades patrocinadoras —Finep, Coep (Comité de Entidades Públicas para el Combate al Hambre y por la Vida), la Fundación Banco de Brasil y la Coppe— decidieron ampliar el número de incubadoras en universidades, presentando en 1998 el Proninc (Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas). La Finep y la Fundación Banco de Brasil se proponen, mediante este programa, financiar la conformación de otras cinco incubadoras. En ese momento ya se había formado una incubadora en la Universidad Federal de Ceará, de manera que el apoyo de estas sociedades se extendería a cuatro nuevas incubadoras más, creadas en las Universidades Federal de Juiz de Fora, Federal Rural de Pernambuco, Estatal de Bahía, y de São Paulo.

Las nuevas incubadoras reciben su formación tecnológica inicial desde la de Rio de Janeiro. Los equipos, formados por profesores, técnicos y estudiantes de segundo año de carrera y posgraduados, organizan seminarios que conduce Gonçalo Guimarães y sus colegas de aquella incubadora, en los que la filosofía de la incubación y los principios del cooperativismo popular (idénticos a los de la economía solidaria) se transmiten y se discuten, pero el número de universidades interesadas en crear incubadoras sobrepasa el que se ha fijado el Proninc (Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares). De esta manera, surgen nuevas incubadoras en los dos últimos años en las Universidades Federal de Paraná, de Santa Catarina, de Pará, de Amazonas, Regional de Blumenau (Santa Catarina), del Vale do Rio dos Sinos (Rio Grande do Sul), Católica de Pelotas (Rio Grande do Sul), Fundación São João del Rei (Minas Gerais), Fundación Santo André (São Paulo), Ponta Grossa (Paraná), Londrina (Paraná) y Maringá (Paraná).

Las incubadoras universitarias deciden integrar una red para el intercambio de experiencias y de mutua ayuda. Tienen como objetivo establecer en cada universidad no sólo un centro de extensión (donde se ajusta la incubación), sino también de enseñanza e investigación. La enseñanza es necesaria para formar bases para las propias cooperativas y para las entidades de apoyo a la economía solidaria que continúan multiplicándose, como veremos más adelante. La investigación es indispensable para conocer la realidad de la economía solidaria en Brasil y también en el exterior, de manera que se sistematiza el análisis y la evaluación de las experiencias para generar proposiciones teóricas, las cuales sirven para tornar la economía solidaria más auténtica y más efectiva.

La red de incubadoras, conformada en 1999, decide aceptar la invitación de la Fundación Unitrabalho [Unitrabajo] para integrarse a ésta como uno de sus programas permanentes. A la Unitrabalho están afiliadas más de 80 universidades de todo Brasil y su finalidad es poner los servicios de las universidades a disposición de los trabajadores y sus organizaciones de clase. Todas las universidades que tienen incubadoras están en la Unitrabalho, y muchas otras afiliadas están interesadas en crear sus incubadoras. La expansión de la red de incubadoras universitarias

se da en la misma medida en que los emprendimientos solidarios se multiplican por todas partes de Brasil.

5. LOS SINDICATOS ADOPTAN LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Golpeados de frente por la crisis del mundo del trabajo que arrastra al país en la década de 1990, los sindicatos empiezan a reaccionar de manera precisa, puesto que su prioridad inicial era proteger los derechos laborales, amenazados de revocación o «flexibilización» por el gobierno de Collor de Mello y sus sucesores. En todos los casos de transformación de empresas en quiebra, o en vías de quebrar, en autogestiones, el sindicato tuvo que asumir el liderazgo del proceso, frecuentemente junto con la Anteag. El éxito de diversas cooperativas formadas de esta manera, que posibilitó la preservación de numerosos puestos de trabajo, llevó a que cada vez más sindicatos se empeñasen en la lucha por la creación de nuevas empresas solidarias.

El apoyo a las cooperativas autogestionarias formadas por ex asalariados soportó la resistencia de los sindicalistas, quienes identificaban el proceso con la transferencia a terceros de la mano de obra, lo que sucedía cada vez más mediante la conformación de seudocooperativas, con la única finalidad de robarles a los trabajadores sus derechos laborales. Como esta identificación (de cooperativas auténticas con falsas) es absurda, la cuestión pudo ser esclarecida por medio de un mejor conocimiento de la naturaleza de las cooperativas auténticas. Surgió, sin embargo, otra oposición a la economía solidaria, de naturaleza ideológica, la cual señalaba la necesidad de reforzar el trabajo asalariado por ser la base social de los sindicatos y porque sólo la clase obrera asalariada tendría como misión histórica derribar el capitalismo e instaurar el socialismo. Las cooperativas eliminaron el sentido de clase de los trabajadores y los convirtieron en patrones y obreros al mismo tiempo.

También esta argumentación se basa en la ignorancia de lo que es la economía solidaria. Las cooperativas de producción y del trabajo son denominadas «operarias» (*worker cooperatives*, cooperativas de trabajadores) a causa de su relación orgánica con el movimiento obrero. La Anteag, la Unisol y el MST no son menos obreros y socialistas que los sindicatos más militantes. Además, los miembros del sindicato que forman cooperativas obreras deben seguir perteneciendo al sindicato, el cual debería abrir sus puertas a todos los trabajadores que no explotan trabajo ajeno y se quieran afiliar. El que en Brasil la ley defina el sindicato como representante de trabajadores asalariados no debería ser un impedimento para que los sindicatos amplíen su alcance y comiencen a representar al conjunto de los que dependen de su propio trabajo para subsistir.

La discusión sobre la economía solidaria ha avanzado, como ya se vio con anterioridad, en los sindicatos del ABC paulista y también en la CUT (Central Única de los Trabajadores), la más grande y más combativa central sindical de Brasil.

UNIVERSIDAD DE COLOMBIA

A fines de 1998 la comisión ejecutiva nacional de la CUT aprobó la creación de un grupo de trabajo que iniciaría las discusiones sobre la política de esta Central respecto a la economía solidaria. Desde este GT (Grupo de Trabajo) se elaboró un proyecto que se desarrolla en sociedad con la Organización Intereclesiástica para la Cooperación y el Desarrollo (ICCO) de Holanda, la Fundación Unitrabalho y el Departamento Intersindical de Estudios Socioeconómicos (DIESE). De esta manera fue elaborado el Proyecto de Desarrollo Solidario de la CUT. En términos generales, este proyecto desencadenó un proceso de discusiones en todo el país, que culminó en 1999 con un seminario internacional, cuyo objetivo principal fue debatir y presentar la Agencia de Desarrollo Solidario de la CUT. (Magalhães y Todeschini, 2000: 138.)

Eso no quiere decir que la resistencia a la economía solidaria en el seno de la CUT haya cesado; sin embargo, la mayoría se ha manifestado de manera constante a favor de una actuación cada vez mayor de la central para el apoyo a los emprendimientos solidarios que los trabajadores han venido creando a lo largo de Brasil. La Agencia de Desarrollo Solidario (ADS) se ha dedicado a llenar una laguna que es la falta de un sistema de financiamiento a las cooperativas autogestionarias. En colaboración con el Rabobank, un gran banco holandés que controlan y poseen las cooperativas de crédito y el Bndes (Banco Nacional do Desenvolvimento), la ADS desarrolló un proyecto de red de crédito solidario, formado por numerosas cooperativas de crédito y por un banco cooperativo, con ánimo de financiar inversiones de gran volumen por parte de cooperativas de producción. La realización de este proyecto representará un gran salto de calidad para el desarrollo de la economía solidaria en Brasil.

Vale la pena registrar el surgimiento de una red de cooperativas de crédito en el sur, el sistema Cresol, que llegó a atender la necesidad de fuentes propias de financiamiento de los agricultores con familia de Paraná, de Santa Catarina y de Rio Grande do Sul. Las cooperativas de crédito del sistema tradicional están todas ligadas a cooperativas agrícolas dominadas en general por el capital. Las Cresol son independientes, autogestionarias.

Los principios y objetivos orientadores de las Cresol son: interacción solidaria, democratización y ampliación del acceso al crédito y a los servicios bancarios por los agricultores con familia, descentralización y nivelación, profesionalización del crédito, transparencia y contribución al desarrollo sustentable (social, económico y ambiental) [...] En diciembre de 1999, al completarse cuatro años de funcionamiento, el Sistema Cresol estaba conformado por 28 cooperativas [...] además de dos más de la Cresol que esperaban la liberación por parte del Banco Central. Está presente directamente en más de cien municipios [...] El número de asociados llega a 10 500 familias de agricultores [...] Las cooperativas son creadas y están compuestas por «agricultores familiares», y las fortalecen sindicatos, asociaciones y otras formas de «agricultores familiares» de la región donde actúan. (Bittencourt, 2000: 197-199.)

6. CONCLUSIONES

Este balance ya nace desactualizado, pues se basa en datos de uno o dos años atrás. La economía solidaria se desarrolla tan rápidamente en Brasil, que cualquier balance tiene que ser considerado como provisional. Lo que impulsa este desarrollo no es tan sólo el agravamiento del desempleo en masa y de la exclusión social. Muy probablemente fue el principal factor en los años ochenta e inicios de los noventa, cuando Cáritas y algunos sindicatos empezaron a apoyar sistemáticamente los esfuerzos de trabajadores y familias marginadas para librarse de la pobreza por medio de la solidaridad. Después surgieron la Anteag, la Campaña contra el Hambre, las Incubadoras de Cooperativas Populares y la Agencia de Desarrollo Solidario. Faltaría citar aún la formación de los Foros Estatales de Cooperativas en Rio de Janeiro, en Rio Grande do Sul y en São Paulo, el creciente desarrollo de cursos de formatos diferentes sobre economía solidaria y así sucesivamente.

Lo que impele a la economía solidaria a difundirse con una fuerza cada vez mayor ya no es la demanda de las víctimas de la crisis, sino la expansión del conocimiento de lo que es la tecnología social, económica y jurídica de implementación de economía solidaria. Cientos de iniciativas, que tendían a quedarse aisladas y, por consiguiente, debilitadas, a partir de los últimos años empezaron a recibir la atención y el apoyo de instituciones especializadas como Anteag, MST, incubadoras, Unisol, ADS y Cáritas, entre otras. Lo que este breve informe ha dejado en claro es que la economía solidaria ya afirmó su identidad y, debido a eso, está en condiciones de estructurarse local, regional y nacionalmente.

La construcción de una manera de producción alterna al capitalismo en Brasil aún está en el comienzo, pero los pasos cruciales ya han sido dados, las etapas vitales ya fueron vencidas. Sus dimensiones todavía son modestas frente al tamaño del país y de su población. Incluso así, no hay que olvidar cómo decenas de miles ya se liberaron por medio de la solidaridad. El rescate de la dignidad humana, del respeto propio y de la ciudadanía de estas mujeres y de estos hombres justifica ya todo esfuerzo invertido en la economía solidaria. Por eso despierta el entusiasmo.

BIBLIOGRAFÍA

- Anteag, *Construindo uma nova cultura nas relações de trabalho*, Anteag, São Paulo, 2000.
- Bernacci, Ademar, «Limites e possibilidades de organização dos excluídos. Os projetos comunitários da Cáritas Brasileira», en Luiz I. Gaiger (org.), *Formas de combate e resistência à pobreza*, Unisinos, São Leopoldo, 1996: 59-86.
- Bittencourt, Gilson Alceu, «Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural: uma experiência de economia solidária entre os agricultores familiares», en Singer y Souza (orgs.), *Economia Solidária no Brasil*, Contexto, São Paulo, 2000: 193-218.

- Buss, Paulo M., «Enfrentando a pobreza através da parceria Estado-comunidade: desenvolvimento local integrado e sustentável em Manguinhos, Rio de Janeiro», en *Cadernos de Oficina Social 5: Desenvolvimento local: práticas inovadoras*, Centro de Tecnologia, Trabalho e Cidadania, Rio de Janeiro, 2000: 117-132.
- Cole, G. D. H., *A Century of Co-Operation*, Co-operative Union, Mánchester, 1944.
- Concrab, *Sistema Cooperativista dos Assentados*, São Paulo, junio de 1998.
- , *Evolução da Concepção de Cooperação Agrícola do MST (1989 a 1999)*, Concrab, São Paulo, 1999.
- Gaiger, Luiz Inácio, «Os caminhos da economia solidária no Rio Grande do Sul», en Singer e Souza (orgs.), *Economia solidária no Brasil*, Contexto, São Paulo, 2000: 267-286.
- Gohn, Maria da Glória, «A Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, ou quando a fome se transforma em questão nacional», en Luiz I. Gaiger (org.), *Formas de combate e resistência à pobreza*, Unisinos, São Leopoldo (RS), 1996: 23-57.
- ITCP, *Ossos do ofício. Cooperativas populares em Cena Aberta*, ITCP, Rio de Janeiro, s.f.
- Magalhães, Reginaldo, y Remigio Todeschini, «Sindicalismo e economia solidária: reflexões sobre o projeto da CUT», en Singer y Souza (orgs.), *Economia solidária no Brasil*, Contexto, São Paulo, 2000.
- Nakano, Marilena, «Anteag, autogestão como marca», en Singer y Souza (orgs.), *Economia solidária no Brasil*, Contexto, São Paulo, 2000: 65-80.
- Oda, Nilson Tadashi, «Sindicato e cooperativismo: os metalúrgicos do ABC e a Unisol Cooperativas», en Singer y Souza (orgs.), *Economia solidária no Brasil*, Contexto, São Paulo, 2000: 93-107.
- , *Gestão e trabalho em cooperativas de produção: dilemas e alternativas à participação*, tesis, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, abril de 2001.
- Sizanoski, Raquel, *O novo dentro do velho: cooperativas de produção agropecuária do MST (Possibilidades e limites na construção de outro coletivo social)*, tesis, Universidade Federal de Santa Catarina, 1998.
- Souza, Maria Antônia, *As formas organizacionais de produção em assentamentos rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra — MST*, tesis, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, 1999.

II. El debate sobre «swadeshi»

HARSH SETHI

- Cuando los recuerdos mueren, un pueblo muere.
 —Pero, ¿qué sucede si inventamos recuerdos falsos?
 —Eso es peor —contestó el viejo—. Es asesinato.
 A. SIVANANDA (1977), *When Memories Die*.

INTRODUCCIÓN

Ésta es una época extraña, un tanto difícil. Palabras y frases pueden asumir nuevos significados, nuevas resonancias que a menudo no tienen mucho en común con su herencia. Ahora que estamos en un milenio nuevo, ante las celebraciones oficiales de nuestro cincuentenario, como Estado-nación independiente y como república democrática, secular y socialista, y listos para introducir la segunda generación de reformas, es momento de volver a examinar nuestra cita con el destino. Parte fundamental de este breve examen es volver a revisar algunas de las palabras clave que le dieron forma a nuestra lucha por la independencia.

Los conceptos de *swadeshi* y globalización son muy discutidos en el discurso indio.¹ Desde el *swadeshi* del Mahatma hasta las invocaciones de la actual administración hay un gran trecho. Entonces, como ahora, la principal preocupación era la economía. A principios del siglo XIX, a los indios les preocupaba la desindustrialización del país bajo el Raj, o Imperio Británico de la India, la competencia desleal entre los molinos de Lancashire y los millones de nuestros tejedores pobres. En una nación destrozada por la fuga económica, nuestra naciente burguesía con frecuencia buscaba apoyo de los líderes políticos.

¹ El término *swadeshi*, al igual que muchos términos indios, tiene una historia compleja. Literalmente, puede traducirse como nativo o nacional, en contraposición a lo extranjero o impuesto. En el contexto de la India moderna, el término apareció entre los siglos XIX y XX, cuando el país, como colonia inglesa, sufría los efectos adversos de una política económica que produjo la desindustrialización y una transferencia de superávit económico (fuga) a la metrópolis. En 1905, como reacción a la división de la provincia de Bengala, vimos el comienzo del movimiento *swadeshi*. Fue el primer ejemplo de un vínculo popular entre libertad económica y libertad política. Los primeros industriales, como reacción al régimen comercial entre la India e Inglaterra, que pretendía convertir al país en un proveedor de materias primas y consumidor de productos ingleses, se describieron a sí mismos como *swadeshi* y extendieron su apoyo a la naciente lucha política por la Independencia.

La fase actual de reformas económicas neoliberales ha generado temores parecidos: que el país sea colonizado nuevamente por las potencias occidentales, esta vez mediante las empresas multinacionales. En muchos sentidos, se considera que la soberanía del país está siendo erosionada y que se está perdiendo el poder autónomo de toma de decisiones. No sorprende que los conceptos del siglo pasado vuelvan a escena.

Dos ensayos de Gandhi en *Young India* y *Harijan* dejaron en claro su posición. Él entendía muy bien que el británico era el perro que estaba a la cabeza y el indio era el perro que estaba en la cola en su propio país. En consecuencia, cuestionó la noción de «igualdad de derechos» entre un gigante y un enano. «Antes de pensar en igualdad entre desiguales, el enano debe crecer a la altura del gigante [...] El proceso puede ser duro, pero es inevitable si los millones de personas sencillas deben ser iguales a los pocos privilegiados.»

Pero leer el llamado que hace Gandhi al *swadeshi* como una discriminación al revés, o incluso como un eslogan que diga: «Sea indio, compre un indio», sería hacerle una gran injusticia. Para él, *swadeshi* quería decir no sólo *svavalamban* (confianza en sí mismo) y *arthic swaraj* (independencia económica), sino también el conjunto de vidas y honor británicos, tan sagrados como los nuestros. En tanto proceso positivo de regeneración económica y social, quería decir atacar nuestros males internos, nuestras desigualdades arraigadas, así como combatir el injusto orden colonial. Pero, sobre todo, no había lugar para el rencor.

O considérese otra autoridad, frecuentemente invocada en estos días: Sri Aurobindo. Su estrategia para ganar la *swaraj* (independencia) se basaba en una doctrina de resistencia pasiva como método político para poner fin al régimen británico, y que sirviera como catalizador para la regeneración de la India. Era fundamental entender que todos compartíamos la lucha y el sufrimiento, de modo que la nación podría empezar con una unidad y una fortaleza totalmente desarrolladas. De otro modo, sostenía, podemos terminar «abrazando la libertad sobre un montón de cadáveres». Y proseguía: «Someterse a métodos ilegales o violentos de coerción, aceptar los atropellos y el vandalismo como parte de los productos legales del país equivale a ser culpable de cobardía, y al empequeñecer la madurez de la nación pecamos en contra de la divinidad que llevamos dentro y la divinidad de nuestra patria.»

El experimento de la India independiente con el *swadeshi* ha atravesado varias etapas, muchas de las cuales implican versiones de una economía de mando. El amplio consenso de las primeras décadas fue un recelo del mercado y la empresa privada, una confianza primordial en el mercado nacional (sustitución de importaciones), con el Estado (léase burocracia y clase política) al volante. En ninguna etapa hubo un intento serio por educar y movilizar a las masas. Por ello, nuestras políticas no sólo no gozaron de la sanción y la participación popular, sino que evolucionamos como una nación de suplicantes, que veía al gobierno como *mai-baap* (mamá-papá). Las opiniones de los expertos varían, pero mientras el país sí evolucionó como una base de producción moderna y diversificada, el sistema de planeación introdujo al mismo tiempo distorsiones serias y ayudó a que el Raj de permisos y cuotas se arraigara, con sus consiguientes retrasos y corrupción.

Los tiempos cambian, y también las formas. La década anterior, particularmente después del colapso de la Unión Soviética, parece haber sido el prelude de

una era de capitalismo desenfrenado. Desde la primera fe en la planeación estatal y el mercado nacional, el péndulo se ha movido hacia la liberalización interna y externa. El capital, la tecnología y los productos extranjeros se han convertido en los nuevos parámetros para evaluar la calidad, la competencia y el desempeño.

Aún es demasiado pronto para valorar las implicaciones de este cambio en la política. Sin embargo, lo que sí parece evidente es que abrir los diferentes sectores de la economía ha creado graves trastornos. Conectarse globalmente implica compartir tanto los repuntes como las caídas del mercado global. Por desgracia, al ser jugadores pequeños globalmente, no tenemos los medios para influir en las reglas del juego, según las define, por ejemplo, la OMC (Organización Mundial de Comercio) con sus nuevas normas para regir la propiedad intelectual o los flujos de capital (Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC], y las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, Acuerdo sobre las MIC). Y como los mercados habitualmente favorecen a los que están mejor dotados, las partes débiles —tanto global como internamente— tienden a empeorar, cuando menos en el ínterin.

Pero, antes de que prosigamos con el análisis, aunque sea brevemente, de un espectro de respuestas (tanto del discurso como de la acción), sería útil ubicar los orígenes, las dimensiones y las implicaciones de la crisis económica que emergió a principios de la década de 1990, y también esbozar la estrategia de estabilización macroeconómica, ajuste fiscal y reforma económica adoptada por el gobierno.

I. EL PROCESO

La mayoría de los expertos ubican el inicio del proceso de reforma actual en la crisis de la deuda externa de principios de 1991: crisis fiscal, un problema casi inmanejable de la balanza de pagos y una aceleración de las tasas de inflación. La causa más próxima podría haber sido la Guerra del Golfo, el aumento en los precios del petróleo y la inseguridad en el mercado de capital. Pero ahora se cree que la crisis no fue ni accidente ni consecuencia: fue el resultado directo del derroche financiero del gobierno. La deuda interna había crecido a 53.9% del PIB (producto interno bruto), la carga del servicio de la deuda a 19% del gasto del gobierno central, la deuda externa a 22.8% del PIB y la carga del servicio de la deuda a 29.8% de los ingresos por exportaciones. Pedir prestado para gastar ya no era posible, pues las instituciones crediticias habían reclasificado a la India como un país de alto riesgo. En general, el país estaba a punto de declarar una mora. A principios de 1991 no había mucho espacio de maniobra para vivir con dinero prestado o con tiempo prestado.

Al gobierno no le quedó otra opción que negociar un acuerdo urgente con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y acercarse al BM (Banco Mundial) en busca

de un préstamo de ajuste estructural. Todo programa de estabilización macroeconómica implica adelantarse a un colapso del problema de la balanza de pagos, reducir el déficit de la cuenta corriente y poner un freno a las presiones inflacionarias. Esos esfuerzos funcionan del lado de la demanda en economía: trabajar para reducir la demanda agregada recortando gastos gubernamentales, usar una política monetaria estricta y depreciar la moneda. El horizonte es a corto plazo.

Paralelamente, se encuentran los programas de ajuste estructural y reforma que buscan influir el lado de la oferta en un intento por aumentar el crecimiento de la producción. Esta política a mediano plazo pretende cambiar los recursos de los bienes que no son comercializables al sector de bienes que sí lo son y, dentro de éste, de la competencia de importaciones a las actividades exportadoras. Segundo, los cambios son propuestas del gobierno hacia el sector privado. Además de la asignación de recursos, la reforma estructural busca mejorar su utilización al cambiar la estructura de incentivos e instituciones, lo que reduciría el grado de intervención del Estado y lo haría depender más del mercado; es decir, desmantalaría controles para depender más de los precios y reduciría el sector público para depender más del sector privado.

Según este punto de vista ortodoxo, asiduamente promovido por las instituciones de Bretton Woods, el gobierno se embarcó en una amplia reforma del régimen de políticas. La reforma de la política comercial eliminó muchas restricciones cuantitativas a las importaciones (con excepción de los bienes de consumo) y poco a poco redujo aranceles. El deseo de aumentar el grado de apertura de la economía va más allá de los flujos comerciales y llega hasta los flujos de capital y tecnología; todo con el fin de exponer las empresas nacionales a una mayor competencia internacional. La reforma de la política industrial eliminó barreras a empresas nuevas, limitó el crecimiento de las existentes y, además, redujo la intervención estatal en las decisiones de inversión. Se pensaba que este proceso debía ser reforzado por la desregulación del sector financiero, por lo que la asignación y utilización de los recursos financieros quedó en manos del mercado. Finalmente, se ha iniciado la reforma del sector público, la cual implica la privatización, liquidando e invitando a participar y administrar a las empresas privadas.

No cabe duda de que las reformas estructurales que ya implementó el gobierno, combinadas con otras en preparación, representan una separación radical de la estrategia de desarrollo de las primeras cuatro décadas después de la independencia. En primer lugar, la función objetiva es el crecimiento económico combinado con eficiencia. La antigua preocupación por evitar la concentración de poder económico o tratar de redistribuir la riqueza (siempre retórica) ha sido abandonada explícitamente. El objetivo de lograr una reducción de la pobreza y la desigualdad no ha sido desplazado, pero ambas preocupaciones acerca de la equidad han sido subsumidas en la búsqueda del crecimiento con la premisa de que es tanto necesario como suficiente para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

En segundo lugar, hay una decisión consciente de reducir sustancialmente la función del Estado en el proceso de desarrollo económico y depender más del mercado. En general, las licencias industriales han sido remplazadas por intervenciones en el sector financiero. Las empresas públicas, tanto manufactureras como de servicios, se están convirtiendo en corporaciones y se han privatizado, parcial o totalmente. El nuevo punto de vista ortodoxo dice que gran parte del sector público en inversión, producción e incluso servicios se apodera de los escasos recursos del sector privado, lo que produce ineficiencia y una consecuente fuga del erario público.

En tercer lugar, el grado de apertura de la economía está creciendo significativamente a un ritmo rápido. El objetivo no es simplemente aplicar una disciplina de costos a la oferta mediante la competencia internacional, sino también reducir las diferencias entre precios nacionales e internacionales. El esfuerzo por integrar la economía nacional con la economía global se hace mediante la reducción de cuotas y aranceles para atraer activamente el capital y la tecnología extranjera.

Tan importante como las reformas en política industrial, política comercial, régimen de políticas para la inversión y la tecnología extranjeras, y sector público, han sido las iniciativas para el sector financiero: desregulación de bancos, ingreso de bancos del sector privado (tanto nacionales como extranjeros), activación del mercado de capital, etc. También debe señalarse que el proceso básico de reforma lo han seguido una variedad de regímenes: Congreso, Frente Unido y una Alianza Democrática Nacional encabezada por el Partido Bharatiya Janata (PBJ).

Hasta aquí se han discutido esencialmente los procesos internos de ajuste y reforma estructural. Pero el panorama sigue incompleto si no se toman en cuenta los procesos que acompañaron la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), que culminaron con el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La extensión de lo que antes era un régimen comercial que trataba con productores para que ahora incluya agricultura y servicios, flujos de inversiones y propiedad intelectual —todos en el nuevo marco de los mecanismos de resolución de disputas y permisos para represalias cruzadas— ha implicado un gran reordenamiento del sistema económico global. Se han introducido temas no económicos —cláusulas sociales, derechos humanos y ambiente— en lo que antes se consideraba un tema económico. Lo que se debate, y por lo que se lucha hoy en la India, es una combinación de los dos procesos anteriores: liberalización/privatización y globalización.

// 2. REACCIONES //

Si bien muchos observadores del panorama indio coinciden en que los cambios trascendentales, iniciados a principios de la década de 1990, probablemente eran necesarios, dictados por las compulsiones económicas inmediatas del manejo de

crisis, un *fait accompli*, se produjeron profundas divisiones entre la naturaleza real de la crisis y la estrategia real implementada, particularmente en términos de su oportunidad y secuencia; las críticas atacan el proceso de reforma por ser demasiado lento/vacilante/parcial o demasiado rápido/irreflexivo/radical.

Sin embargo, el debate en los círculos académicos es un tanto diferente de las reacciones en la plaza política, y las críticas describen el proceso de reforma como recolonizador, como una vil rendición a las instituciones de Bretton Woods o, dicho de manera más explícita, a la hegemonía de Estados Unidos, y, prácticamente, como el abandono de la soberanía nacional y las necesidades del pueblo. No obstante, es notable que *nadie* haya abogado con seriedad por regresar a la estrategia y los procesos de desarrollo de los primeros años.

Tomemos tres áreas en las que el debate ha sido particularmente áspero. Los que abogan por reformas más específicas han concentrado su cólera en el mercado laboral. Señalan que la legislación laboral cubre menos de 10% de la mano de obra del país; que mientras el mercado laboral del «sector formal» está sobrerregulado, lo que produce inflexibilidad respecto a ingresos y la producción y, por tanto, crea islas con salarios elevados, no hay protección para los realmente vulnerables de los sectores informales. En consecuencia, presionan para alinear la política laboral con la política económica, con base en la necesidad de apreciar la naturaleza descentralizada de las relaciones industriales y para permitir una mayor flexibilidad del ingreso y el rendimiento de la mano de obra en las unidades de producción. Dicho de manera más específica, su demanda consiste en reestructurar radicalmente las Leyes de Disputas entre Sindicatos e Industrias y cambiar el enfoque de la adjudicación a la negociación colectiva. En general, sienten que la rigidez del mercado laboral y los elevados salarios poco realistas en el sector informal son directamente responsables de la lenta tasa de inversión, en particular de la inversión extranjera directa.

En el mismo sentido, los liberalizadores entusiastas abogan por retirar la propiedad y la administración pública de las unidades estratégicas no básicas, cambiar la cartera de inversión en otras y convertir en corporaciones el resto, es decir, arrancar el control de las empresas del sector público al gobierno. Esta demanda es mayor en el área de la infraestructura, particularmente la energía y las telecomunicaciones. A los reformadores les gustaría desmembrar los monopolios gubernamentales y dar un mayor papel al capital privado, incluido el extranjero.

Hay constancia de que los esfuerzos por reestructurar las empresas del sector público, invitar a la participación del sector privado en proyectos de infraestructura e introducir más flexibilidad en las relaciones industriales por medio de las Leyes de Disputas entre Sindicatos e Industrias se han enfrentado a una resistencia concertada, no sólo de la mano de obra del sector organizado. Mientras se escribe este artículo, los empleados del Departamento de Telecomunicaciones están en huelga contra las propuestas de corporización que desbarataran por completo la

red de comunicaciones. De igual modo, todos los proyectos sobre energéticos que involucran inversión extranjera directa han tenido problemas, principalmente respecto a las tasas a las que debe comprarse la energía y la exigencia de que el gobierno de Unión ofrezca la garantía de una tasa de rendimiento asegurada del capital invertido. Son comunes las acusaciones de corrupción y sobornos.

Es evidente que el gobierno, si bien ideológicamente está comprometido con las reformas, ni ha estudiado detenidamente el proceso ni ha creado distritos electorales más amplios que facilitarían las reformas. Esto, a pesar del descontento extremo de la clase media por el funcionamiento de las empresas del sector público de producción, servicios y financieras. Estos estratos están convencidos de que las unidades «públicas» están marcadas por altos costos, fugas, corrupción e ineficiencia. En consecuencia, los esfuerzos por reducir el tamaño de las empresas, vincular los pagos con el rendimiento, introducir nuevas tecnologías, cambiar los mecanismos de resolución de disputas y garantizar la rendición de cuentas y la transparencia han sido resistidos con éxito hasta la fecha.

La situación se complica aún más porque, incluso en el sector industrial moderno, a las empresas nacionales, tanto grandes como pequeñas, cada vez les resulta más difícil adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Una mezcla de competencia de importaciones (precio, calidad) y una recesión cíclica en el mercado global han incrementado la incidencia de cierres y paros patronales, lo que ha creado un espectro de desempleo, particularmente en el sector de pequeña escala. Como era de esperarse, esto ha producido un amplio descontento laboral, aunque disperso y carente de coordinación. Posiblemente, la falta de actividad sindical organizada, con excepción de las empresas gubernamentales, se explica por el desempleo generalizado y el sentimiento de que el proceso de reforma es inevitable.

Veamos ahora el otro extremo de la economía de la India: la agricultura. Si bien históricamente la agricultura de la India ha sido, en general, una actividad privada que limita las plantaciones de productos comerciales (té, café, caucho, aceite de palma), el sector ha recibido un importante apoyo del Estado (con subsidios a insumos y productos) y ha estado regulado y protegido de la competencia externa. A lo largo de los años, la política básica se ha orientado a garantizar la seguridad alimentaria. Para ello, el gobierno ha tratado de llevar a cabo reformas agrarias (techos, consolidación, protección de la tenencia), ha invertido en infraestructura e investigación, ha controlado el mercado (restricciones al movimiento de granos, importaciones y exportaciones), etc. En general, el grado de globalización ha permanecido limitado.

Sin embargo, la presión por las reformas no ha dejado al sector intacto; principalmente por los intentos de reducir los subsidios a los insumos (electricidad, agua, fertilizantes, pesticidas, semillas) y permitir un mayor papel de las corporaciones del sector privado en el comercio. Además, como resultado del nuevo régimen de

la OMC, la última década ha presenciado el ingreso de multinacionales y agroindustrias no sólo en el mercado de alimentos procesados, sino directamente en la producción primaria. Los impuestos a la importación de muchos productos agrícolas, hortícolas y de granja han disminuido, así como los de maquinaria agrícola.

Todo esto ha cambiado sustancialmente la naturaleza de la economía agrícola y también de los otros sectores que producen bienes a partir de recursos naturales. La mayor participación del sector corporativo ha provocado un cambio en los patrones de cultivo. La presión ha aumentado para relajar las reglas sobre la propiedad y el control de la tierra y el agua, lo que genera mayores problemas para los pequeños productores. La operación del nuevo régimen de patentes ha traído semillas nuevas sobre las cuales los agricultores locales tienen poco control.

No obstante, es necesario percatarse de que, en lo macroeconómico, la India tiene enormes provisiones de granos alimenticios que superan su capacidad fiscal y de almacenamiento. En consecuencia, se está promoviendo la liberación completa del comercio en productos agrícolas, la reducción de subsidios, la disminución de aranceles, la abolición de la Ley de Bienes Esenciales, los controles de inventarios y la autorización del comercio de futuros, etc.; en pocas palabras, liberar y formar grupos corporativos del sector y ofrecer un mayor empuje a las exportaciones. Algunos han llegado a afirmar que ya no es necesario obsesionarse con la noción de autosuficiencia alimentaria.

Existe un temor generalizado de que secundar los acuerdos de la OMC respecto al acceso al mercado mediante la eliminación de las barreras no arancelarias y la incursión del capital privado, particularmente extranjero, no sólo empobrecerá a los pequeños campesinos, sino que colonizará el país. En toda la nación ha habido agitación en contra de medidas específicas. Sin embargo, es difícil desentrañar los movimientos en contra de las reformas de quienes buscan eliminar más controles. También se ha señalado que la actual mezcla de políticas, más que beneficiar a los productores o consumidores, favorece a los intermediarios.

\\Veamos ahora el debate sobre la propiedad intelectual y los regímenes de patentes, pues tiene implicaciones de largo plazo en todos los sectores.\\ La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales cubrió siete formas de propiedad intelectual: patentes, derechos de autor y conexos, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada. Se prescribieron ciertas normas de protección y una duración para cada una de ellas, con el fin de alinear la legislación nacional con las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio.

Si por un momento evitamos los debates filosóficos acerca de las patentes, la oposición de la India al acuerdo de los ADPIC se basa en el entendido de que el país ya tiene un régimen legal elaborado (Ley de Patentes, Ley de Comercio y Marcas Comerciales, Ley de Derechos de Autor y Ley de Diseños), de que ya

existen convenciones internacionales de protección a la propiedad intelectual, y de que la protección de la propiedad intelectual puede afectar las estructuras del mercado mediante prácticas comerciales desleales y restrictivas, por lo que introducir los ADPIC exige la formulación simultánea de una política de competencia y un código sobre transferencia tecnológica. El temor más grande, sin embargo, es que el país aún no esté listo para los estándares de protección «mejorados» propuestos: no tenemos un umbral de capacidad tecnológica; debido a las inversiones inadecuadas en formación de capital humano, no tenemos la habilidad requerida de innovación; y con los bajos ingresos per cápita, nuestro gasto en investigación y desarrollo es insuficiente. En particular, se teme que con el cambio de los procesos a las patentes de productos, la investigación y el desarrollo indígena se vean afectados adversamente; que el otorgamiento de derechos exclusivos de mercado represente que las corporaciones multinacionales (CMN) extranjeras se apoderen de los mercados importantes e impongan precios de monopolio. Esto está más marcado en el sector farmacéutico.

Se han esgrimido argumentos parecidos respecto a las variedades de plantas, semillas y microorganismos; en particular, que la protección de patentes en materia orgánica no es ética, que el comercio de semillas será dominado por las CMN y los precios subirán, que los biofertilizantes se volverán propiedad exclusiva de las multinacionales y que la biopiratería aumentará de manera espectacular. Si bien no hay mucho conflicto por las marcas registradas y los diseños industriales, hay mucho temor acerca de las indicaciones geográficas, los circuitos integrados y la información no divulgada, en parte porque no existen estatutos específicos que los protejan y hay poca legislación en la India.

Sin embargo, el mayor temor respecto a las reformas propuestas deriva de que la India tiene mecanismos de cumplimiento poco desarrollados. Trasladar las disputas de propiedad intelectual del campo del derecho civil al campo del derecho criminal, y que el peso de la prueba, particularmente en el caso de patentes de procesos, recaiga sobre el demandado, puede resultar en la criminalización de los productores indios. De igual modo, para el periodo de transición de 1995 a 2005, las solicitudes de patentes de producto deben ir acompañadas por derechos exclusivos de comercialización para un periodo de cinco años, que le otorgan al titular de la patente un monopolio sin cursar el debido proceso. Finalmente, existen conflictos acerca del mecanismo de resolución de disputas en la OMC. Con esto, y con las represalias cruzadas, se teme que la industria india enfrente un trato desleal y discriminatorio.

A diferencia de los conflictos por las manufacturas, la agricultura y los servicios, los conflictos sobre los derechos de propiedad intelectual (DPI) tienen que resolverse, en principio, en tribunales, a menudo en foros no nacionales. Por lo tanto, no es extraño que no hayan atraído la misma atención pública o protestas (con excepción del caso de la industria farmacéutica). Además, hay quienes

afirman que muchos de esos temores son exagerados, si no es que infundados, y que, más que enfocarse a actividades en contra de los ADPIC y la OMC, el país debería centrarse en mejorar sus sistemas de registro, fortalecer sus bases de datos y sus mecanismos de cumplimiento. También sostienen que, con el ambiente y el apoyo adecuados, los indios pueden emerger como grandes jugadores en el escenario mundial y que un nuevo régimen de derechos de propiedad intelectual a largo plazo mejorará las inversiones en investigación y desarrollo y ofrecerá un estímulo para este último.

Finalmente, examinemos la política y el debate acerca de la desregulación y la liberalización financiera. El objetivo principal de la reforma del sector financiero es mejorar la rentabilidad de la banca comercial y los sistemas de seguros propiedad del Estado y el funcionamiento del mercado de capital nacional, con base en la suposición de que la disciplina de mercado mejorará la eficiencia de ambos. Reducciones en el coeficiente de liquidez establecido por la ley y el coeficiente de reserva de efectivo han producido mayor disponibilidad de crédito para el sector privado. La simplificación de la estructura de tasas de interés diferenciales ha sido bien recibida también. Se han introducido, además, nuevos lineamientos para el funcionamiento, las prácticas contables y las normas de prudencia, con el fin de ajustarlas a los estándares internacionales.

Mayor rechazo han tenido los esfuerzos por abrir el sector bancario a jugadores privados, incluidos los bancos extranjeros, así como la corporatización de los bancos del sector público. Una resistencia importante proviene de los empleados, temerosos de los cambios en las condiciones de trabajo y de las reducciones de gastos. También se teme que el aspecto de «bien público» de la banca —el préstamo a sectores prioritarios— se reduzca como consecuencia. De ser cierto, esto tendría un fuerte impacto en la disponibilidad de crédito barato para el sector informal y los pequeños jugadores.

Al mismo tiempo, el mercado de capital se ha reformado para financiar la inversión en el sector privado y atraer la cartera de inversión extranjera. Se han modificado las reglas que rigen el ingreso y la salida de divisas, lo que permite a los capitales mayores contar con convertibilidad y repatriación de ingresos en el extranjero.

Si bien muchas de las reformas para dismantelar la sobrerregulación eran necesarias, el sistema sigue subgobernado porque los marcos institucionales y legales que deberían regir el mercado no han sido instalados. Esto abre el sector a graves riesgos, como se volvió evidente con los escándalos bancarios y de garantías de mediados de la década de 1990 y la proliferación de compañías financieras no bancarias que han defraudado al pequeño inversionista. No obstante, se ha considerado que resistir la presión de apresurarse hacia la convertibilidad de la cuenta corriente, o abrir el sector de seguros a pesar de dicha presión, son medidas prudentes.

A pesar de la proliferación de literatura sobre el proceso de liberalización (ajuste estructural y reforma) y globalización que lleva una década, no hay consenso, ni siquiera entre los círculos expertos, sobre lo esencial. Por ejemplo, ¿se han acelerado las tasas de crecimiento como resultado del proceso de reforma iniciado en 1991? De ser así, ¿cuáles han sido las implicaciones para la reducción de la pobreza y la desigualdad? Se afirma que la tendencia de la tasa de crecimiento del PIB, congelada en apenas 3.5% hasta mediados de la década de 1980, aumentó a 5.8% en 1980-1990 y a 6.1% en 1990-1998. Se dice, también, que la mejoría en la tasa de crecimiento es resultado de las reformas económicas y que las cifras nacionales de la pobreza nacional han disminuido espectacularmente (algunos sostienen que entre 19 y 24% de la población rural y de 15 a 20% de la población urbana). Esto implica que las reformas deben continuarse y profundizarse.

Primero las cifras de la pobreza. Existe un profundo desacuerdo entre los expertos respecto al modo de calcular estas cifras, pues el punto técnico es el período de memoria respecto al consumo de alimentos. Esto se debe a que las estimaciones de la pobreza en la India se basan más en el consumo y la nutrición que en datos sobre ingresos. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que la incidencia de la pobreza ha disminuido en las dos últimas décadas, pese al desacuerdo respecto a los factores causales.

Si se observan las tasas de crecimiento del PIB, se acepta que entre 1980-1981 y 1999-2000, la tendencia fue que la economía nacional creció cerca de 5.7%. El crecimiento es mayor en términos per cápita debido a la disminución en la tasa de crecimiento de la población. Esto es loable en un esquema comparativo porque, mientras la deuda y la inflación afectaron a gran parte del mundo en desarrollo, la situación india mejoró y se mantuvo estable.

Sin embargo, no ha habido una aceleración estadísticamente significativa en las tasas de crecimiento después de 1991-1992. De igual modo, no hay una aceleración estadísticamente significativa en los sectores primario y secundario. Por último, si se correlacionan las estimaciones de pobreza con las de desempleo y subempleo, se observa que hay un claro deterioro en la calidad del empleo (la mano de obra del sector organizado disminuyó, subió en el sector desorganizado, el autoempleo bajó, el empleo de salarios casuales aumentó).

Las cifras de la pobreza han disminuido, pero el desempleo ha empeorado. Es probable que el crecimiento haya ayudado sólo a aquellas personas, regiones o segmentos de la economía que ya están empleadas o tienen mejor condición económica. En otras palabras, la última década de crecimiento y estabilidad macroeconómica se ha alcanzado a costa de la desigualdad entre individuos, regiones y sectores. Dicho más claramente, la proporción de ingreso per cápita rural y urbano se ha deteriorado; existe un deterioro secular en la proporción de ingreso per

cápita entre el sector informal y el formal; ha habido un incremento constante en la desigualdad entre los estados más importantes; las proporciones de factor entre salarios y ganancias han cambiado a favor de estas últimas. Por tanto, parece que la orientación hacia el mercado, desde la década de 1980, ha profundizado las desigualdades.

A pesar de que los expertos comparten la opinión de que la liberalización económica es tanto necesaria como virtuosa, el panorama real actual es desigual. También está la diferencia entre las preocupaciones del gobierno y las del pueblo común. Sobre todo, hay grandes preguntas sobre la evolución común de la economía y la sociedad.

Los objetivos del gobierno a corto plazo, respecto al problema de la balanza de pagos, parecen haberse cumplido de manera adecuada. No obstante, preocupa que, a pesar de que las reservas de divisas extranjeras han subido, en vista de la alta proporción de deuda a corto plazo y depósitos repatriables, la situación es menos estable de lo que se supone. En lo que se refiere al manejo de la inflación, el gobierno ha tenido un desempeño bueno sólo en comparación con economías de América Latina; una inflación de 10% es alta para los estándares de la India. Además, se ha controlado, principalmente, gracias a buenos monzones sucesivos y a la ausencia de un golpe exógeno, situación que podría cambiar como resultado de la reciente alza en el precio del petróleo y el fantasma de la sequía en gran parte del país.

El gobierno tampoco ha tenido mucho éxito en el control de su déficit fiscal: casi todo se logra mediante recortes a los gastos de capital y del sector social. Puesto que el déficit de ingresos del gobierno muestra pocas señales de disminución, parece que el régimen fiscal sigue siendo insostenible.

Si dejamos de lado en los asuntos del gobierno y vemos los del pueblo común —desempleo y pobreza, agricultura y sector rural, e infraestructura (tanto física como social)—, encontramos que el proceso de reformas aún no aborda esos temas. Ya hemos dicho que la inflación es alta y el desempleo ha empeorado, lo que aumenta la desigualdad. Existe, entonces, gran preocupación por la presión para reducir los subsidios a la distribución pública de granos o para dismantlar los programas públicos de alimento por trabajo. De igual modo, la disminución de la inversión en infraestructura rural y otros recortes en sectores sociales, como educación, salud, vivienda —para reducir la carga de los subsidios en el supuesto de que una mayor privatización mejorará la eficiencia—, parece claramente equivocada. La reforma comercial en la agricultura puede contribuir también a las presiones inflacionarias.

Sin embargo, el mayor problema, no atribuible del todo al cambio de paradigma económico, es la continua desatención a los recursos humanos, las mejoras en las capacidades tecnológicas y un aumento importante en las disparidades. Todo esto ya ha causado tensión política, la cual probablemente se verá exacerbada con el paso del tiempo.

4. REPERCUSIONES MAYORES

Hasta aquí, nuestra breve investigación se ha enfocado en temas económicos, posiblemente porque las medidas propuestas e iniciadas, así como el debate posterior, se han orientado al terreno económico. Pero hay profundas implicaciones políticas y sociales en el cambio de estrategia de desarrollo.

No se ha entendido adecuadamente que la década pasada —la fase de reforma—, también ha sido una etapa de cambios políticos significativos. Si bien muchos analistas han hablado del cambio de un sistema dominante unipartidista a uno que implica coaliciones de gobierno en el centro, se ha prestado poca atención a la ampliación y profundización de la democracia en el país. La década de 1990 ha visto un aumento importante en la participación electoral de los estratos sociales marginados (castas programadas,* tribus programadas, minorías, mujeres) el surgimiento de nuevos partidos (regionales, étnicos o de castas), particularmente en los estados, y la institucionalización de una tercera capa de gobierno (los *panchayats* y municipios) que implican, sin importar qué partido o coalición gobierne en el centro, que el sistema tiene que dar cabida a las diversas preocupaciones de esas nuevas formaciones políticas.

Hasta ahora no está claro cómo el agudo aumento de las desigualdades se concilia con la profundización de la democracia. En el ámbito de los estados (regiones) se presencian conflictos entre los mejor dotados, con alto crecimiento, y los demás. El reciente revuelo por el *Informe de la Comisión de Finanzas*, donde los que tienen un alto desempeño han criticado a la Comisión por penalizarlos porque les va mejor en términos de devolución de finanzas, es un indicio de las cosas que vienen. Hasta el momento, el gobierno central ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de áreas o regiones atrasadas no sólo al asignar más recursos a los gobiernos de los estados más pobres, sino también al ofrecer incentivos para la inversión privada mediante vacaciones fiscales.

Más allá de los partidos políticos formales y la democracia representativa, la India ha tenido la fortuna de contar con una sociedad civil grande y vigorosa. Una variedad de ONG, enfocada tanto al lugar como al tema, ha promovido activamente los intereses de sus miembros creando redes para generar cambios en las políticas públicas. La última década, en particular, ha visto la profundización de los vínculos entre los actores de la sociedad civil local y las ONG internacionales que presionan globalmente para mitigar lo que perciben como efectos nocivos de la nueva ortodoxia económica. Seattle es sólo una señal de este proceso.

La década anterior presenció el surgimiento de un número de grupos, organizaciones y movimientos que, en diferente medida, han intentado combinar las

* *Scheduled Castes*, los antiguos «intocables» y *Scheduled Tribes*, que estaban al margen del sistema de castas y viven en bosques y zonas montañosas. [N. del E.]

luchas por los derechos de los pobres y desposeídos con los esfuerzos por encontrar una nueva perspectiva sobre el desarrollo. Esas luchas echan mano de movimientos anteriores (y que continúan), como los de Chipko en contra de la deforestación y la apropiación de los recursos de propiedad común por parte de la industria; los movimientos de pescadores en las zonas costeras en contra de las incursiones de la pesca de arrastre mecanizada; los esfuerzos de los trabajadores de las minas de carbón de Chattisgarh en contra de la reducción de gastos o los cierres de minas para establecer cooperativas para dirigirlos; el empeño por parte de los trabajadores de las fábricas de tubos de Kamani por apoderarse de la empresa abandonada por sus dueños, y los ejemplos pueden multiplicarse.

Lo que antes fueron luchas esencialmente nacionales en contra del capital privado local y las políticas económicas del Estado han adquirido un nuevo filo con la apertura de la economía y el mayor papel de los actores extranjeros. Coaliciones como la Alianza Nacional de Movimientos del Pueblo (ANMP, una red de grupos comunitarios, ONG, sindicatos y movimientos sociales), junto con partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, han cuestionado y se han manifestado en contra de lo que perciben como la «capitulación» ante las políticas de liberalización, privatización y globalización del Banco Mundial y el FMI. En este tema, las formaciones indias están tratando de trabajar juntas con actores regionales y globales para confrontar el régimen y las ideas de las nuevas políticas.

Una lucha importante es la que se ha dado contra la poderosa empresa Enron de Estados Unidos, a la que se otorgó un contrato para generar electricidad en el estado de Maharashtra. La pelea no sólo es en contra de los términos del contrato firmado con Enron, también es contra la política que depende del capital privado para desarrollar la infraestructura básica. Luchas similares se han iniciado contra la construcción de puertos privados, contra los programas forestales patrocinados por el Banco Mundial, contra el ingreso de compañías privadas de semillas y agroindustrias, contra la apertura de sectores de producción/consumo al gran capital, nacional o extranjero, que antes estaban reservados para el sector artesanal o de pequeña escala.

Cada una de esas luchas o movimientos, solos o colectivamente, enfrenta un reto difícil. Por un lado, necesitan responder efectivamente a las demandas de justicia redistributiva en contra del creciente desempleo y los cierres. Por otro, deben ser capaces de distinguir entre capital nacional y extranjero. Sin embargo, más importante aún es articular efectivamente una base política viable para crear una estrategia de desarrollo alternativo, donde las consideraciones de economía y ecología política se combinen con temas de consumo y estilo de vida.

Las luchas contra el ajuste estructural, la liberalización interna, la privatización y la globalización padecen de una profunda ambivalencia frente al Estado. Por un lado, se considera que un Estado fuerte y estable es el interlocutor más

efectivo en el campo global. En todo caso, el consentimiento indio a una gama de cláusulas de la OMC en la década de 1990 y la prisa por legislar para ajustar los regímenes legales nacionales a los códigos internacionales indican un debilitamiento del Estado indio. Esto explica la referencia rutinaria de someterse a la presión de Estados Unidos. Por el otro lado, es un alivio sustancial que los indios hayan resistido con éxito las presiones por una convertibilidad total de la moneda y mantenido cierto control sobre los flujos de capital, aislando parcialmente la economía del tipo de impactos que experimentaron las economías orientales y del sureste asiático durante la fusión de sus monedas.

Entonces, en los foros internacionales, ¿qué posición deben tomar los actores o las agencias de la sociedad civil de la India en contra de su propio Estado?

La situación es igualmente complicada cuando se abordan temas de privatización, liberalización interna y reformas estructurales. No sólo en los sectores organizados, sino también —si no es que más— en el caso de las economías de supervivencia, que dependen de recursos naturales, la apertura de esos recursos a las presiones del capital industrial, indio o extranjero, puede producir, o ha producido, un mayor desplazamiento y la desaparición de trabajos y actividades. Aquí las luchas se centran en contra del capital privado invasor y el Estado, por alterar el régimen legal para favorecer a los nuevos inversionistas. Sin embargo, si hay que asegurar las condiciones para que la nueva actividad no desplace tontamente y destruya la vieja, los movimientos deben trabajar con el con el Estado (oposición constructiva).

Los temas son igualmente complejos cuando se abordan aspectos relacionados con cláusulas sociales: trabajo infantil, ambiente, etc. La campaña india en contra del trabajo infantil ha tenido cierto éxito por las campañas internacionales en contra de productos que usan trabajo infantil. Esto no sólo mancilla la imagen del país en el extranjero, sino que afecta directamente a los involucrados en esa producción, reduce las exportaciones y, por lo tanto, la participación de la India en el comercio global. Como en el caso de los derechos de propiedad, los productores del país sostienen que una imposición prematura de estándares globales —desde salarios mínimos hasta el cuidado del ambiente— sólo resultará en la desindustrialización de la India.

Estos temas no están resueltos, como era de suponerse. Es obvio que los que se ubican en el extremo perdedor del nuevo contrato, probablemente no estarán satisfechos con las perogrulladas de las macro estadísticas respecto a las reservas, las tasas de crecimiento o la reducción de la pobreza. Buscarán apoyo donde sea posible para retener lo que poseen, aislar las economías o sociedades locales de los impactos de una incorporación más profunda en los mercados nacionales y globales, y para reducir los costos de transición. Sólo en el raro caso de que encuentren mercados nuevos y mejor pagados para sus productos (trabajo artesanal de gran demanda), estarán de acuerdo en relajarse y abrirse.

Quizá éstas son algunas de las razones por las que la política, la movilización y el discurso en torno a la problemática de la liberalización y globalización siguen tan confusos. Los que están a favor de una segunda generación de reformas, más rápidas, acusan al gobierno de carecer de voluntad política, particularmente en temas de reforma estructural interna. Le apuestan a los que ya están fuertes, o en posición de reinventarse, para participar en los nuevos mercados ampliados. Los exportadores de *software* indios son un ejemplo que viene al caso. Este estrato está convencido de que, a pesar de los problemas de transición, no sólo no hay forma de escapar de una mayor participación en el orden global emergente, sino que esta ruta ofrece las mejores oportunidades para escapar de la pobreza endémica.

En el otro extremo están los que colocan la *swadeshi* y la nacionalización en contra de la globalización. Muchos de ellos también están en contra de regresar al viejo orden. Ponen en primer plano los valores fundamentales de la sociedad india, consideran que ofrecen una base de resistencia y quieren que la nación sea guiada por factores inherentes a sí misma y no por una estructura global inestable e instituciones globales en constante cambio.

Sin embargo, una parte sustancial está a favor de la reforma y el cambio, pero no de la manera en que actualmente se busca. Sostiene que la creencia en que los mercados saben lo que hacen, o que la intervención del Estado no es necesaria o es contraproducente en el proceso de industrialización, es ahistórica. El discurso pone énfasis en un nuevo contrato entre el Estado y el mercado, por lo que se habla de la oportunidad, secuencia e intensidad del proceso de reforma. Asimismo, se subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los actores que influyen en la reforma y la necesidad de construir democráticamente la base electoral para el cambio.

5. CONCLUSIONES

Propiedad del ajuste estructural: el enfoque de los derechos en la India.

A fines de la década de 1980, había un amplio consenso en que la economía de la India había tenido un desempeño inferior a su potencial desde la independencia y el reconocimiento de la necesidad de un cambio importante en las políticas públicas. La mayoría de los organismos internacionales, si no es que todos, estaban de acuerdo en ello.

En lugar de firmar un acuerdo secreto sobre un programa de ajuste estructural con instituciones financieras internacionales, la India abrió la discusión sobre las políticas. Había, y sigue habiendo, críticas vociferantes sobre el camino de las reformas sugeridas. Pero el proceso de participación abierta y expresión de opinión ha producido dos resultados importantes.

Primero, a pesar de la persistente inestabilidad política y de gobiernos de coalición frágiles, ha sobrevivido el amplio consenso acerca de la reforma de la política económica. Todos los partidos políticos principales se han adherido al programa. La propiedad nacional no ha estado en discusión.

Segundo, las reformas económicas de la India han generado el crecimiento más rápido de la historia: el doble de la tasa anual promedio antes de las reformas. Esto ha revelado la importancia de las reformas y conducido a un debate público acerca de cómo deben compartirse los beneficios del crecimiento entre las regiones, los grupos y las clases. (PNUD, 2000, recuadro 3.II, p. 69.)

«La llave de la puerta del cielo también es la llave que podría abrir las puertas del infierno», dice un antiguo proverbio budista. El peligro y la oportunidad están tan mezclados en la liberalización de la economía india, que el viaje a la tierra prometida de una economía de mercado que funcione bien podría convertirse fácilmente en la horrorosa pesadilla de una mayor desigualdad para la mayoría. Si no ha sido así, se debe a que tenemos un sistema democrático y una prensa relativamente libre. Debemos aprender a respetar este marco institucional de democracia política al diseñar las políticas económicas.

Con este objetivo en mente, primero debemos aprender a evaluar la liberalización, no en términos de principios abstractos como la soberanía económica o incluso preocupaciones gubernamentales acerca del control del déficit fiscal o una posición cómoda de la balanza de pagos, sino en términos de las preocupaciones cotidianas de pobreza, desempleo e inflación. Segundo, las políticas económicas serán sustentables y benéficas si el gasto gubernamental pasa del consumo a la inversión productiva, al desarrollo de infraestructura física y social, y no implica pedir prestado de lo público para financiar el gasto del consumo. Tercero, el proceso debe garantizar autonomía para los productores con la correspondiente rendición de cuentas, lo que implica un funcionamiento transparente.

Regresemos al principio. La *swadeshi* de Gandhi exige que «el enano debe crecer a la altura del gigante»; el proceso implica atacar nuestros arraigados males y desigualdades, así como combatir el orden colonial injusto. Aurobindo destacaba: «Todos compartimos la lucha y el sufrimiento, así pues, la nación podría empezar con una unidad y una fortaleza totalmente desarrolladas». De otro modo, bien podríamos terminar «abrazando la libertad sobre un montón de cadáveres».

El crítico de arte e historiador Anand Kentish Coomaraswamy añadió otra dimensión. Para él, *swadeshi* es mucho más que sólo hacer que la India tenga confianza en sí misma y sea independiente económicamente, en especial en lo que se refiere a la industria y las manufacturas. Significa hacerlo sin las cosas que no vale la pena tener: «La civilización consiste, no en multiplicar nuestros deseos y los medios de gratificarlos, sino en el refinamiento de su calidad [...] una nación que siembra sus metas en la producción de cosas y no en las vidas de los hombres debe perecer».

Es desafortunado que, sin una base filosófica y social mayor, el debate sobre la *swadeshi* haya sido hegemonizado por economistas y empresarios, polarizados entre los que están a favor y los que están en contra de la liberalización y la globalización. Existe poca preocupación acerca de cómo nuestros ciudadanos carentes de recursos y con poca capacitación puedan sobrevivir en un nuevo mercado competitivo y cambiante sin las salvaguardas adecuadas y el apoyo del Estado. Más inquietante es la verdadera ausencia de una estrategia política, una discusión de las piezas instrumentales, es decir, de las organizaciones mediante las cuales las posturas enfrentadas esperan movilizar apoyo. En efecto, es poco probable que el cambio de la coalición política actual por otra, incluso si es dominada por la izquierda, conduzca a un cambio sustancial en la situación existencial de la mayoría.

¿Y qué con ir más allá de las polaridades del Estado y el mercado, o de lo nacional y lo extranjero? Esa perspectiva, promovida por los movimientos sociales, busca acusar al modelo de desarrollo y la política representativa de ser inherentemente injustos e insostenibles. Debe ubicarse, más bien, en las comunidades de base, dependiendo no sólo de sus recursos materiales sino de los sistemas de conocimiento indígenas, en un esfuerzo por adaptar el discurso del progreso. Sin embargo, permanece en los márgenes del discurso y la práctica política del país. No olvidemos que el movimiento social más visible de la India, el que se opuso a las grandes presas en el río Narmada, a pesar de una lucha constante durante más de 15 años, no ha sido capaz de bloquear la construcción de presas nuevas. Es verdad, esta lucha ha sensibilizado, como nunca antes, a la opinión pública india acerca de la importancia tanto de la sustentabilidad ecológica como de la participación democrática. Sin embargo, dominan las inquietudes sobre la economía política, más que la ecología política.

Con cierta dificultad, el país ha logrado marcar una huella en la antigua ortodoxia económica. Vacilante y poco entusiasta, impulsado por la crisis y no por la estrategia, se embarcó en un proceso de redefinición de reglas y regulaciones en un esfuerzo por reducir el poder de *babus* o señores y quitarle los grilletes a la creatividad de las clases productoras. Posiblemente, esto no había ocurrido por falta de un ímpetu externo. El temor es que, con la recesión, a medida que más empresas se vayan a pique, sumándose a las tribulaciones del alto desempleo y la inflación, un llamado a la *swadeshi* podría volverse xenofóbico.

Las naciones y las sociedades inseguras saben cómo volverse hacia su interior. Practicar el *swadeshi* y el *svavalamban* exige confiar en sí mismo. Si resulta demasiado fácil, provocará orgullo y autoglorificación que, particularmente si el presente es sombrío, puede basarse en triunfos pasados. Acompañando este proceso, comenzará la búsqueda de enemigos, tanto internos como externos. Además de Cargill o Coca-Cola, los frustrados también se dirigirán a quienes cuestionan la administración actual. Ahora, esto puede parecer un grito lejano, pero hay

sombras de nacionalsocialismo en muchos de nuestros arrebatos nacionalistas y antiextranjeros.

Lo que se necesita ahora es resucitar un *swadeshi* positivo e incluyente. Construir una renovada confianza en nuestras capacidades y habilidades, en nuestra gente y en nuestros sistemas de conocimiento. Sobre todo, estar dispuestos a aprender, a cambiar y adaptarse, a mantener las puertas y las ventanas abiertas y no perder la cabeza. Eso es *swadeshi*.

BIBLIOGRAFÍA

- Amin, S., *Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society*, Zed Books, Londres, 1997.
- Anandalakshmy, S., «The collective unconscious», *The Hindu-Folio*, 27 de agosto de 2000, <<http://www.hinduonnet.com/folio/fo0008/00080360.htm>> [consulta: 24 de mayo de 2010].
- Bagchi, A. K. (ed.), *Economy and Organization: Indian Institutions under the Neoliberal Regime*, Sage, Nueva Delhi, 1999.
- Bhaduri, A., y D. Nayyar, *The Intelligent Person's Guide to Liberalization*, Penguin Books, Nueva Delhi, 1996.
- Chadda, M., *Building Democracy in South Asia: India, Nepal, Pakistan*, Lynne Rienner Publishers, Nueva York, 2000.
- Debroy, B., y P. Shah, *Beyond the Uruguay Round: The Indian Perspective on GATT*, Response Books, Nueva Delhi, 1996.
- , *Agenda for Change: Action Plan for the Economy*, Nueva Delhi, Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies, 1998.
- Kahkonen, S., y A. Lanyi (eds.), *Institutions, Incentives and Economic Reforms in India*, Sage, Nueva Delhi, 2000.
- Nagraj, R., «India Economy Since 1980: Virtuous Growth or Polarization», *Economic and Political Weekly*, vol. 35, núm. 32, 5 de agosto, 2000: 2831-2839.
- Nayyar, D., *Economic Liberalization in India: Analytics, Experience and Lessons*, Orient Longman, Calcuta, 1996.
- PNUD, *Human Development Report 2000: Human Rights and Human Development*, Oxford University Press, Nueva York, 2000.
- Raghvan, C., *Recolonization: GATT, the Uruguay Round and the Third World*, The Third World Network, Penang, 1990.
- Roy, A., «Power Politics: The Re-incarnation of Repulstiltskin», *Outlook*, 27 de noviembre, 2000: 48-64.
- Seminar (469), *Swadeshi: A Symposium on the Current Rethinking on Opening Up the Economy*, septiembre, 1998.
- Sethi, H., «NGOs in the Era of Globalization: Reworking the State-Citizen Dialectic», documento presentado en la Universidad Jawaharlal Nehru, Seminario de la Fundación Konrad Adenauer sobre «Lo público y lo privado», octubre, 2000.

- Sethi, H., «Movements and Mediators», *Economic and Political Weekly*, vol. 36, núm. 4, 27 de enero-2 de febrero de 2001.
- Srinivasan, T. N., *Eight Lectures on India's Economic Reforms*, Oxford University Press, Nueva Delhi, 2000.
- Visaria, P., «Poverty in India during 1994-98: A Review of Alternative Estimates and the Database», 2000 (mimeo.).

III. Comunidad, pobreza y seguridad en el campo de Sudáfrica: ¿oportunidades de emancipación o estrategias marginales de supervivencia?

HEINZ KLUG

INTRODUCCIÓN

Para una gran parte de la humanidad, la oportunidad de producir depende de su posibilidad de tener acceso a la tierra. Pese a la urbanización y los imperativos de la economía de mercado, tener la ocasión de cultivar, cuando menos una pequeña cosecha de alimentos básicos —maíz, frijol, arroz— para complementar otras formas de ingreso, como el trabajo asalariado o las pensiones gubernamentales, es lo que hace la diferencia entre la capacidad de una familia para sostener una magra existencia o desintegrarse poco a poco. Cualquier proyecto que busque reinventar la emancipación social, que considere de manera particular formas alternativas de producción, debe abordar esta realidad. Ante el subempleo crónico y las vastas desigualdades en la tenencia de la tierra, activistas y encargados de la formulación de políticas en muchas regiones del mundo recurrieron, en el transcurso del siglo xx, a la reforma agraria. A pesar de las inmensas dificultades políticas e institucionales que implica, su promesa de garantizar el acceso a uno de los recursos productivos primarios es, todavía, parte importante en toda agenda progresista fuera de los países más altamente desarrollados e incluso ahí, los patrones de discriminación y tenencia insegura son elementos fundamentales en la vida de las comunidades más empobrecidas.

Luego de siete años de gobierno democrático, el debate por el programa de reforma agraria de Sudáfrica suele reducirse a la discusión de si el vaso está medio lleno o medio vacío (DAA, 1998; y Cliffe, 2000: 273-286). Si bien fue evidente que la promesa de la plataforma electoral del Consejo Nacional Africano (CNA) de 1994 —una transferencia de 30% de la tierra— no se cumplió en los primeros cinco años, miles de familias e individuos de los sectores más marginados de la sociedad se beneficiaron de la nueva estrategia de reforma agraria del gobierno, que implicaba tres aspectos: restitución, redistribución y reforma de la tenencia de la tierra. Más de 12 000 hogares recibieron más de 266 000 hectáreas de tierra con

el programa de restitución de tierra (Brand, 2000) y casi 250 000 personas, en 279 proyectos, recibieron tierra mediante el programa de distribución (Hanekom, 1998). Sin embargo, en el año 2000, cuando el gobierno retiró su proyecto de ley de derechos agrarios y hubo otros cambios en las políticas públicas, fue obvio que el proyecto se tambaleaba, particularmente en lo que se refiere al programa de tenencia de la tierra (Mayende, 2001), que prometía garantizarla a los millones de personas que vivían en las partes más empobrecidas y subdesarrolladas del país: los antiguos *homelands* (regiones raciales y étnicas) negros.

Si bien sigue siendo cierto y doloroso que el indicador más claro de pobreza en Sudáfrica, a fines del milenio, era y es ser mujer negra en una zona rural,¹ el programa de reforma agraria ha generado algunas oportunidades interesantes para crear formas alternativas de producir y construir comunidades viables. Pese al cambio en la política, en el cual el gobierno decidió que los beneficiarios de la reforma agraria serían los agricultores comerciales negros en lugar de las comunidades rurales pobres (Karuiik, 2000), la lucha por el acceso a la tierra ha continuado, y ha obligado al gobierno a prometer una reforma mayor y más rápida (Mbeki, 2001). El conflicto, por la dimensión política e institucional de esas reformas, será el centro de este estudio, particularmente la creación de una estructura legal para el reconocimiento de la propiedad comunal que, al mismo tiempo, garantice los derechos de propiedad de los participantes y la demanda de que los miembros de esta nueva institución de tenencia de la tierra adopten internamente formas gobierno con procedimientos democráticos, basadas en nociones de igualdad social y de género.

I. LA OPRESIÓN DE LA POBREZA ESTRUCTURAL

Uno de los principales retos al evaluar esas alternativas y su potencial emancipador² es aclarar la naturaleza de la meta en cuestión. En vista de los defectos de un siglo de desarrollo capitalista en África, en particular en el campo de Sudáfrica, limitaré la meta de emancipación, en este contexto, al rompimiento de la opresión de la pobreza estructural. Desde esta perspectiva, la dependencia, o la falta de autonomía y autodeterminación en su sentido más amplio, es el rasgo central de la opresión en una democracia formal.

En lugar de enfocarse solamente en la naturaleza del proceso de producción, se pretende considerar el potencial de una noción más amplia de emancipación de

¹ Véase *Za Now*, *Weekly Mail* y *Guardian*, 7 de septiembre de 2000, acerca del informe de Statistics, S. A., titulado «Measuring Poverty in South Africa» (Medir la pobreza en Sudáfrica), que afirma: «Ser mujer negra que vive en una zona rural es un claro indicador de pobreza».

² Tomo esta idea del razonamiento que dice: «Sin importar la manera en que conciba la realidad, la teoría crítica la considera como un campo de posibilidades, y su tarea es, precisamente, definir y evaluar el grado de variación más allá de lo establecido empíricamente» (Santos, 1999).

la dependencia social, económica y política, como una alternativa a los sistemas actuales de producción del campo sudafricano. En su punto más delicado, esto podría implicar numerosas libertades sencillas: emplear la propia mano de obra sin coerción, estar libre del hambre y las enfermedades, y ser capaz de participar en la toma de decisiones que afecten directamente la vida y a la comunidad. En su punto más grueso, esto podría tener el potencial de ofrecer un espacio donde las comunidades sean capaces de ingresar al mercado desde una posición de autosuficiencia relativa, al tiempo que se confrontan algunos temas internos de género y autoridad que limitan las posibilidades de emancipación interna dentro de la comunidad, o en lo individual.

Si bien los arreglos de la tenencia de la tierra y el estatus de la comunidad muestran gran variación en todo el panorama, desde los antiguos *homelands* (*bantustans*) o áreas comunales hasta las granjas corporativas y comerciales en diferentes zonas climáticas y agrícolas, las opciones de que dispone la amplia mayoría de beneficiarios de la reforma agraria siguen siendo muy limitadas. Para la mayor parte de los sudafricanos del campo, la oportunidad inmediata es conseguir cierta forma de seguridad en la tenencia. Con suerte, esto les asegurará el acceso a la tierra suficiente para adoptar una estrategia triple: producción de cultivos, cría de animales y empleo fuera de la granja, tanto para sostenerse a sí mismos como para reconstruir, poco a poco, después de la destrucción y la negación del *apartheid* que siguió a un siglo de desposeimiento colonial.

2. DESARROLLO, POBREZA Y FORMAS ALTERNATIVAS DE TENENCIA

El acceso equitativo a la tierra, sin embargo, podría ser insuficiente. En su estudio sobre la generación de ingresos y clases en KwaZulu-Natal, Michael Carter y Julian May concluyen que, entre otras limitaciones —como el reducido rendimiento de la mano de obra sin educación y la carga de recoger agua y leña—, hay «restricciones que limitan la capacidad de los pobres para utilizar de manera efectiva los activos productivos (por ejemplo, la tierra) que sí poseen» (Carter y May, 1999: 16). Sugieren que una estrategia efectiva de política pública buscaría eliminar las «restricciones que limitan la efectividad con la que los pobres del campo puedan usar los escasos activos que poseen», incluidas la promoción de instituciones financieras de microcréditos y la provisión de servicios esenciales, especialmente agua y energía (Carter y May, 1999: 16). Las implicaciones de la reforma agraria son claras: además de proporcionar acceso al recurso básico, la tierra, existe la necesidad de promover cuando menos un grado mínimo de desarrollo rural para permitir que las familias y las comunidades pobres empleen productivamente los nuevos activos a los que tienen acceso.

El desarrollo rural es uno de los mayores retos de Sudáfrica, y el peligro de que grandes secciones de la sociedad «puedan atascarse en una trampa estructural

de pobreza crónica» (Carter y May, 2001) es algo más que simple pesimismo. Es en este contexto donde el debate por la reforma agraria y la tenencia de la tierra, incluido el debate acerca de la propiedad comunal y la privada, es fundamental para la discusión sobre los medios, mecanismos e instituciones necesarios para promover el desarrollo rural. Mientras que la relación entre las zonas rurales «negras» pobres de Sudáfrica y las metrópolis urbanas «blancas» muy desarrolladas ya ha sido analizada, en términos del papel que las primeras desempeñaron como reservas de mano de obra y en el subsidio a la reproducción de ésta, el papel de la propiedad comunal de la tierra y la estructura de gobierno —ya sea una autoridad tradicional o un gobierno local democrático—, en esas áreas, destaca como tema central que debe abordarse en el futuro.

Si bien todavía se discute el origen del subdesarrollo de África, los intentos recientes por promover el desarrollo se han enfocado en la cuestión de los derechos de propiedad privada. Las instituciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, no sólo han puesto énfasis en la privatización de los activos del Estado, sino que también se han reenfocado en el futuro de la tenencia, ya sea al garantizar los derechos de propiedad o la división y privatización de los terrenos del municipio africano «con el fin de promover la inversión de capital y fomentar una mayor productividad» (Krueckeberg, 1999: 105). Pero, al mismo tiempo, estudios sobre los programas de títulos y registros han indicado que si bien «los títulos del Estado son importantes para los posibles inversionistas» que no pueden reclamar legítimamente la tierra, de acuerdo con los sistemas indígenas, «las mediciones y los títulos son, por lo común, un medio por el cual las elites y los grupos étnicos dominantes le quitan a los pastores y otros usuarios no intensivos o de temporal los recursos que ellos, sin embargo, necesitan» (Bruce *et al.*, 1994: 260).

En respuesta, los críticos de la privatización con frecuencia han recurrido a la idea de la tenencia comunal como el legado histórico de la África precolonial y como alternativa viable para la propiedad privada. Sin embargo, ya no es posible simplemente confiar en las reglas tradicionales de tenencia, y supone que «las sociedades preindustriales le deben su cohesión a valores libremente aceptados y compartidos por igual» (Hopkins, 1973: 27). Dicho romanticismo «no logra apreciar que la solidaridad puede ser resultado de la compulsión» (Hopkins, 1973: 27). Además, la noción de que el mero reconocimiento de las formas indígenas de tenencia reflejará las demandas y las necesidades de las comunidades rurales no reconoce el impacto del colonialismo en la construcción misma del derecho consuetudinario. Esto, a su vez, nos lleva a plantear la pregunta del papel de las «autoridades tradicionales» en las sociedades poscoloniales, particularmente a la luz del reconocimiento simultáneo, en muchas constituciones poscoloniales, de las autoridades tradicionales, de la ley indígena y de los diversos principios universales de igualdad y participación democrática.

En Sudáfrica, el reconocimiento constitucional de la ley indígena, en las constituciones posteriores al *apartheid*, obliga a una confrontación entre esas dos concepciones diferentes, particularmente en el contexto de la tenencia de la tierra «indígena». Con el objeto de cumplir con la demanda de formas colectivas de propiedad, el gobierno se enfrenta a la dificultad de esclarecer los derechos sobre la tierra indígena de un legado colonial de régimen indirecto, en el cual la soberanía política y la propiedad estaban entrelazados (Klug, 1995 y Mamdami, 1996). El resultado de esta combinación fue que los derechos de propiedad de individuos, grupos familiares y comunidades, que vivían en sistemas comunales de tenencia, quedaron atrapados en un modelo administrativo de derecho consuetudinario (Chanock, 1991: 76). El régimen indirecto distribuye las parcelas dentro de una comunidad como un «acto administrativo oficial» del liderazgo tradicional (Bennett, 1995: 133). Esto impuso un sistema de clientelismo y dependencia política, lo que socavó al gobierno comunitario y dio nueva forma al papel de las autoridades tradicionales en el proceso político. Después de que las autoridades coloniales construyeron una visión de la tenencia de la tierra africana de acuerdo con el «derecho consuetudinario», en el que los derechos más importantes —asignación, enajenación y reversión— eran conferidos exclusivamente al poder político encarnado por el jefe, faltaba un pequeño paso para afirmar que la pérdida de poderes soberanos ante la autoridad colonial hizo que los derechos sobre la tierra estuvieran sujetos a la autoridad administrativa.

El colapso de los derechos de propiedad dentro del reino, principalmente de la autoridad, tuvo consecuencias igualmente debilitantes para los derechos políticos de los africanos. Fundada en las prácticas del «régimen indirecto», defendidas primero por Theophilus Shepstone y modificadas por lord Lugard, la «preservación» de las «tierras nativas y las autoridades tradicionales» se tornaron en la justificación para excluir a los africanos de una participación política más amplia (Ashforth, 1990: 35-37). Esas consecuencias políticas llevaron a Martin Chanock a concluir que debemos pensar en los derechos sobre la tierra «como parte fundamental de la naturaleza del sistema de gobierno africano moderno» y en el papel de la ley, y su imperio, en los estados africanos. Como resultado, esos importantes derechos, de carácter económico y en última instancia políticos, permanecen inseguros en la medida en que están subordinados a un régimen administrativo que no ofrece a los terratenientes ningún derecho en contra del Estado (Chanock, 1991: 82).

Este resultado histórico plantea serias preguntas acerca del reconocimiento de la ley de tierra indígena después del *apartheid*. Para conservar el espíritu de la nueva constitución, y al mismo tiempo revitalizar la ley indígena, el nuevo Estado debe garantizar que aquellas comunidades e individuos que deseen continuar con un régimen de tenencia de la tierra dentro del esquema de una ética agraria indígena sean capaces de determinar sus contornos sin la interferencia administrativa basada en ideas coloniales. Así, las comunidades podrían ser capaces de reinfundirle

a la tenencia indígena normas y prácticas comunitarias, en lugar de depender de un decreto administrativo. Este proceso tiene el potencial de liberar los conceptos y las reglas del derecho «consuetudinario» de sus amarras coloniales y ajustar las nociones legales formales de la tenencia indígena a las ideas más recientes de las ciencias sociales. De particular importancia es el trabajo en historia y antropología legal (Maddock, 1996) que investiga hasta dónde el esquema legal de la «tenencia consuetudinaria» es moldeado por su construcción en un contexto dominado por nociones legales particulares y culturales de la propiedad y la manera en que los imperativos coloniales dieron forma al contenido particular de la tenencia usual (Berry, 1993; Mann y Roberts, 1991).

3. REFORMA DE LA TENENCIA Y LA CREACIÓN DE UN ESPACIO INSTITUCIONAL DISPUTADO

Cuando se introdujo en Sudáfrica la Ley de Asociaciones de Propiedad Comunal (APC) se anunció como la «legislación más progresista presentada por el gobierno», pues «envía un mensaje claro a organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, paraestatales y sociedad en general acerca de lo que el gobierno entiende por el concepto de control democrático» (Streek, 1996). Si bien la Ley APC se adoptó para abordar una gama de problemas asociados con la restitución y redistribución de la tierra,³ el hecho de que se haya adoptado la constitucionalidad como medio para resolver estos problemas refleja el poder del paradigma constitucionalista en la nueva Sudáfrica. El estatuto exige que los beneficiarios de las demandas de tierra de cualquier grupo, o de los programas de reforma agraria gubernamentales, elijan una «estructura constitucional» a través de la cual se constituyan como una comunidad y posean y controlen colectivamente su principal recurso: la tierra. Entre las dificultades inmediatas planteadas por los diferentes programas para el retorno y la redistribución de la tierra, estaba el asunto de cómo identificar a los beneficiarios de esos programas y cómo poseerían legalmente la tierra que recibieron. Si bien a principios de la transición democrática se hizo un llamado a la nacionalización de la tierra que rápidamente fue desacreditado, hubo un empuje inicial por parte del viejo régimen durante la transición —reflejada en la aprobación de la Ley de Actualización de los Derechos de Tenencia de la Tierra⁴—

³ Se ha dicho que en Sudáfrica, antes de la Ley APC, los sistemas de tenencia de la tierra comunal «ofrecían poca o nula protección para los miembros de la comunidad» y que la persona —ministro o jefe de gobierno— que tuviera los derechos legales de la tierra tenía «amplios poderes para ocuparse de la tierra como le placiera, sin consultar a la comunidad que vive en ella». Además, en «muchos casos, las comunidades establecían los derechos sobre la tierra que poseían de manera informal, sin ninguna protección legal» (Gilfillan, sin fecha: 1). Sobre la experiencia de los fideicomisos comunitarios y algunas de las dificultades relacionadas con el poder de los fiduciarios, véase Walker (1997).

⁴ Ley 112 de 1991.

para hacer hincapié en que la opción preferida era el dominio absoluto individual (Cross y Haines, 1988). Sin embargo, el reconocimiento de que los solicitantes rurales seguían buscando un tipo de control o propiedad comunal regresó los reflectores hacia las formas «tradicionales» o «consuetudinarias» de tenencia que permanecían, de cierto modo, tanto en la práctica como en la aspiración de muchas comunidades africanas (Small y Winkle, 1992; Cross, 1992). Pero las dificultades son enormes. La adopción de formas «consuetudinarias» de tenencia plantea preguntas acerca de la naturaleza y las fuentes del «derecho consuetudinario», incluido el papel de los jefes y el estatus de la mujer y los comuneros en esas comunidades (Holomisa, 2000). Aunque la naturaleza exacta de la tenencia «tradicional» o «indígena» se pone en duda por la manipulación, de que fue objeto durante el periodo colonial, la posibilidad de ofrecer un sistema de procedimientos para la creación de formas de tenencia diseñadas desde la comunidad parece satisfacer tanto a los partidarios de las costumbres como a los que están comprometidos con la participación democrática.

Mientras que los que abogan por el reconocimiento de los derechos de propiedad en la Constitución de Sudáfrica parecen concebir que tales derechos, en términos universales, son principalmente individuales, para proteger a los individuos del Estado predador, la cláusula de propiedad definitiva se refiere explícitamente a las comunidades que tienen derechos sobre la tierra, y se reconocen así los derechos de propiedad comunal como una forma constitucionalmente legítima.⁵ Cuando se lee a la luz del reconocimiento que la Constitución hace del derecho consuetudinario y los líderes tradicionales,⁶ la perspectiva sobre la tenencia de tierras comunales y sus vínculos con formas de gobierno «tradicionales» crea un contexto particular en el que se cuestionan de inmediato los conflictos por la definición de comunidad y gobierno local. Como indican las discusiones sobre los poderes del jefe sobre la tierra, hay una amplia gama de opiniones acerca de los tipos, el grado y la naturaleza de dicho poder de acuerdo con el derecho consuetudinario; sin embargo, la relación entre gobierno y tierra está claramente establecida (Kerr, 1990: 29-43). Al mismo tiempo, la promesa de restitución que contiene la Constitución, incluida la devolución de la tierra a las comunidades despojadas,⁷ planteó de inmediato el problema del reconocimiento: quién debe recibir el control sobre dichas tierras y quién debe tener la facultad de tomar decisiones acerca del uso futuro y el desarrollo de las mismas. En un contexto en que muchos hogares rurales son encabezados en la práctica por mujeres, resulta ser una situación muy delicada.

Si bien la lucha contra el *apartheid* se basaba en reclamos por democracia e igualdad —particularmente, equidad racial—, el relativo éxito de la exigencia por

⁵ Véase Constitución de 1996, secciones 25(6) y 25(7).

⁶ Constitución de 1996, secciones 211(1) y 212(1).

⁷ Constitución de 1996, secciones 25(7) y 25(6).

equidad de género no estaba, de ninguna manera, previsto. Aunque muchos movimientos anticolonialistas propugnaron por un papel igual de la mujer durante sus luchas, en muchos casos el Estado poscolonial trató de no cumplir esta promesa o reafirmó activamente nociones más particulares de las relaciones de género en el periodo posterior a la independencia. Fue esta preocupación lo que unió a las mujeres sudafricanas, de todo el espectro político, en la Coalición Nacional de Mujeres multipartidista, organismo que sentó las bases para la reafirmación y la inclusión de las demandas de género en la redacción de la Constitución interina de 1993. Sin embargo, fue la Liga de Mujeres del CNA, la que tomó el foro de negociaciones y consiguió que cada delegación en las negociaciones tuviera una mujer entre los representantes del consejo. En consecuencia, Sudáfrica fue el primer caso en el cual un organismo constitucionalista se estableció formalmente con el mismo número de hombres y mujeres.⁸ Al mismo tiempo, la Liga de Mujeres presionó por una mayor participación en el CNA, y ganó una recomendación del Comité de Trabajo Nacional para que una tercera parte de los candidatos en las elecciones de abril de 1994 fueran mujeres (*Saturday Star*, 16 de octubre, 1993: 6).

Estos beneficios no fueron permanentes. A pesar de esos grandes avances en una sociedad por demás profundamente sexista, y pese al encanto popular de la visión que el movimiento democrático tenía de una Sudáfrica «no racial ni sexista», las mujeres que participaban activamente en el proceso de negociación tuvieron que esquivar un reto directo resultante de las exigencias de los líderes tradicionales y sus demandas por el reconocimiento de la ley indígena. Estos líderes, representados en el proceso constitucionalista, inicialmente trataron de proteger el derecho consuetudinario de las disposiciones igualitarias de la Constitución.⁹ Siguiendo el modelo de Zimbabwe, propusieron una constitucionalización del sistema legal dual existente, de modo que el derecho consuetudinario y el derecho sudafricano general fueran sistemas legales paralelos que no se autorizaban ni interferían entre sí (Currie, 1998: 36). Esos reclamos por el reconocimiento de la cultura indígena llevaron a un intento de incluir disposiciones en el proyecto de ley interino para reconocer el «derecho consuetudinario» y regular las contradicciones entre la ley indígena y otros «derechos fundamentales». A pesar de que fue rechazado, un anteproyecto concedía a «cualquier tribunal que aplicara un sistema de derecho consuetudinario» el poder para determinar hasta dónde este derecho debilitaba la provisión de igualdad y para decidir cuándo y hasta qué punto esas reglas —incluso cuando discriminaban a las mujeres— debían ajustarse al requisito constitucional de equidad.¹⁰ Sin embargo, al final, producto de la tenacidad de numerosas mujeres del CNA en particular, la Constitución interina falló a favor de la equidad de

género, y se logró que la ley indígena estuviera «sujeta a la regulación de la ley», lo que implicaba su subordinación a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, y a la equidad de género en particular.¹¹

La equidad de género fue, en consecuencia, reconocida formalmente en el proyecto de ley interino, y la Constitución interina incluyó disposiciones específicas para el establecimiento de una Comisión de Equidad de Género que «asesorara e hiciera recomendaciones al Parlamento, u otras legislaturas, acerca de cualesquiera leyes o legislaciones propuestas que afecten dicha equidad y el estatus de la mujer».¹² Además, como parte del intento general que el gobierno de De Klerk hizo por apoderarse de las negociaciones, Sudáfrica ratificó la Convención Internacional por la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en enero de 1993, lo que comprometió al Estado sudafricano a cumplir obligaciones internacionales particulares en esta materia. La inclusión exitosa de este principio en la Constitución interina de 1993 y en la «definitiva» de 1996, fue producto de la movilización de las mujeres locales y del creciente reconocimiento de la equidad de género como una norma internacionalmente aceptada de derechos humanos y constitucionalismo. Así, si bien la Constitución estipula, por un lado, el reconocimiento de los líderes tradicionales y su función en el contexto del derecho consuetudinario, por el otro somete a la Constitución tanto el papel del liderazgo tradicional como el derecho consuetudinario.¹³ Por lo tanto, pese al reconocimiento histórico de la igualdad de estatus de la ley indígena y la ley común colonial heredada, esto sólo se logró mediante la subyugación mutua a los valores universales de la Constitución. Sin embargo, la victoria legal de la equidad sobre la «tradición» debe entenderse en el contexto de un proceso político continuo, en el que el estatus de los líderes tradicionales sigue siendo incierto. Por ejemplo, cuando un helicóptero aterrizó en la ceremonia de investidura del jefe Patikile Holomisa, en abril de 1999, y descendieron el ministro de Asuntos Constitucionales, Valli Moosa, el ministro de Seguridad, Sydney Mafumadi, y el presidente Mandela, lo que supuestamente era sólo un acto de toma de posesión, se transformó en un momento de gran importancia constitucional y política, lo que indicaba un nuevo reconocimiento del liderazgo tradicional. En este contexto se concibió e implementó la Ley de Asociaciones de Propiedad Comunal (APC), y en particular su requisito de equidad de género. Por un lado, ha habido un creciente reconocimiento del significado político de las autoridades tradicionales y la ley indígena; por el otro, hubo el triunfo formal del universalismo.

⁸ Por desgracia, no sucedió así en la Asamblea Constitucional electa.

⁹ Véase Technical Committee on Constitutional Issues, *First supplementary report*, 15 de junio de 1993: 3-6.

¹⁰ Véase la sección 32(2) del capítulo propuesto sobre derechos fundamentales, Technical Committee on Fundamental Rights During the Transition, *Tenth Progress Report*, 1 de octubre de 1993.

¹¹ Véase Constitución de Sudáfrica de 1993, sección 181.

¹² *Ibid.*, sección 119(3).

¹³ Constitución de 1996, sección 211(3).

4. LA LEY DE ASOCIACIONES DE PROPIEDAD COMUNAL (APC)

El reconocimiento constitucional de los derechos de propiedad, el derecho consuetudinario y la autoridad tradicional, así como la propiedad comunal y la equidad de género, definieron el terreno donde el gobierno de Mandela trataría de alcanzar sus objetivos de restitución y redistribución de la tierra.¹⁴ Su importancia política y simbólica se refleja en que la primera legislación aprobada por el nuevo Parlamento democrático fue la Ley de Restitución de Derechos Agrarios.¹⁵ Una vez que dispuso el reconocimiento de las demandas de tierra y un proceso para su devolución definitiva, el gobierno enfrentaba ahora el problema de definir los medios y las instituciones mediante las cuales se constituirían las comunidades que la heredarían.

Es esencial reconocer que el despojo colonial y el *apartheid* tuvieron consecuencias dramáticas para las comunidades rurales y las formas «tradicionales» de tenencia, pero también es importante reconocer la resistencia y la participación de esas comunidades en respuesta a la imposición colonial. Muchas de ellas respondieron activamente al surgimiento de mercados coloniales y, hasta su exclusión, compitieron favorablemente con agricultores blancos en el mercado (Bundy, 1979). Otras comunidades y grupos familiares se aferraron a la tierra durante las épocas colonial y del *apartheid*, a menudo resistieron los desalojos o adoptaron la estrategia de cumplir hacia el exterior con los cambiantes arreglos de tenencia, para permanecer en la tierra (Van Onselen, 1995). Esta tenacidad, reflejada con mayor claridad en las luchas de las comunidades que se opusieron a los traslados forzados (Platzky y Walker, 1985) o de los arrendatarios que se aferraron a la tierra (TRAC, 1988), contradice la noción de que el pueblo no valora o no quiere a la tierra. Además, ahora ha quedado claramente demostrado que el acceso a la tierra y los recursos naturales sigue siendo un valor económico importante para la forma de vida rural (May, 2000), incluso para los antiguos *homelands*, donde la degradación de la tierra y el hacinamiento han reducido en mucho la capacidad agrícola (Shackleton, Shackleton y Cousins, 2000). El dilema está, entonces, en imaginar un arreglo institucional con el potencial de ofrecer una forma más segura de tenencia para los habitantes del campo y un medio por el cual las comunidades rurales protejan sus recursos de las elites políticas u otros intereses externos, y que siga siendo lo suficientemente dinámico para permitir la resolución democrática de tensiones importantes y a menudo conflictivas entre las comunidades.

¹⁴ Para finales de 1998, acorde con los tres aspectos de la reforma agraria —restitución, reforma de la tenencia de la tierra y redistribución de la tierra—, se había comenzado a entregar tierra. Si bien la Comisión de Demandas de Tierras recibió 54 218 solicitudes antes de la fecha límite del 31 de diciembre de 1998, sólo 26 permitieron que 11 359 hogares beneficiarios recibieran la transferencia de 167 534 hectáreas de tierra. En lo que se refiere a la redistribución de la tierra, 16 252 hogares obtuvieron acceso a 219 214 hectáreas en 185 proyectos durante 1998. Véase, DAA, 1999: 89-90.

¹⁵ Ley 22 de 1994.

Asimismo, para muchas comunidades que han sido destruidas físicamente y dispersadas durante el traslado forzoso, este acto de constitución debería basarse en la definición misma de quién debe ser incluido como beneficiario de la restitución. En otras comunidades, que todavía mantienen un punto de apoyo en la tierra, la definición de la forma en que se usarán los recursos y se distribuirán sus beneficios quedaría en manos de miembros reconocidos. En consecuencia, el gobierno, al reconocer que la tierra debería ser transferida a grupos de personas, —mal definidos, conflictivos o que simplemente poseen recursos muy pobres—, se vio obligado a diseñar, cuando menos, un proceso con el cual se constituyeran esas comunidades. Esto proporcionó el ímpetu para la forma que tomó la Ley APC.

El rasgo central de la Ley APC es el requisito de que los beneficiarios de la restitución o la reforma agraria adoptaran una constitución que los definiera a ellos y a los medios por los cuales pretendían gobernar su «nuevo» recurso. Al mismo tiempo, la ley impone un conjunto de requisitos universales mediante la inclusión de principios constitucionales y un esbozo general de los temas que deben abordarse en una constitución, antes de que esté lista para ser registrada. La ley exige tanto un proceso de procedimientos específico, incluidos los de redacción del borrador, de adopción y de registro, como disposiciones sustantivas para el monitoreo gubernamental futuro, la regulación, la aplicación e incluso la ayuda para la resolución de conflictos. El conjunto de principios constitucionales ofrece una guía específica para la formulación y adopción de cinco principios «universales»: *a)* procesos de toma de decisiones justos e incluyentes; *b)* igualdad de membresía; *c)* procesos democráticos; *d)* acceso justo a la propiedad de asociaciones; y *e)* rendición de cuentas y transparencia. Además, la ley estipula que, a fin de estar lista para el registro, la constitución debe abordar una lista de asuntos incluidos en un programa en la ley, entre los que se encuentran algunas disposiciones muy importantes que faltaban por definir: *a)* la membresía en la comunidad; *b)* los derechos de propiedad de los miembros; *c)* cómo serán representados los miembros en el proceso de toma de decisiones de la comunidad; *d)* métodos para salirse de la comunidad, incluida la enajenación de los derechos de propiedad en casos de expulsión, abandono o muerte; y *e)* cómo puede cambiarse la constitución o disolverse la asociación y cómo deben distribuirse sus bienes. Finalmente, la constitución debe incluir tanto mecanismos para resolución de disputas como para definir y aplicar medidas disciplinarias en contra de los miembros de la comunidad. Estos últimos requisitos en particular tienden un puente sobre la división entre lo que podría entenderse en ciertas circunstancias como un acuerdo meramente contractual para el manejo de la propiedad conjunta —tal como un fideicomiso o un acuerdo de título seccional (o condominio)— y un sistema constitucional de gobierno, en el que los poderes se crean, definen y limitan.

Esta distinción, entre un mecanismo legal para el manejo conjunto de una propiedad común, por un lado, y la creación de un sistema de gobierno colectivo

sobre el principal recurso productivo de una comunidad, por el otro, sugiere el potencial emancipador inherente en la forma de Asociación de Propiedad Comunal, así como la fuente de resistencia ante esta forma que ha provenido principalmente de las autoridades tradicionales.

5. GOBERNAR LOS TERRENOS COMUNITARIOS: LAS CONSTITUCIONES APC Y EL CONTROL SOBRE LA TIERRA¹⁶

Si bien la Ley APC supone que las comunidades elaborarán sus propias constituciones a través de un proceso de intensa participación democrática, caracterizado por el poder otorgado a individuos y grupos antes marginados por una combinación de «tradición» y *apartheid*, la práctica ha sido más ambigua. Esta ambigüedad es evidente en las constituciones de 100 de las 150 APC registradas en los primeros tres años. De esas 100 constituciones, 60 son versiones casi idénticas de dos modelos particulares. Si bien 40 de esas 60 son réplicas de lo que podría definirse como el «modelo Gugulethu», las 20 restantes son casi idénticas al modelo que se desarrolló y aplicó en una región en especial: la provincia Free State. Las otras 40 incluyen ejemplos que van desde algunas que muestran claramente la participación popular —particularmente en la sección de infracciones disciplinarias—, hasta otras que han sido producto de programas de educación y capacitación intensivos realizados por equipos de ONG y organizaciones legales.

Pese a esta variedad, la preocupación por el control y la futura estabilidad de esas nuevas comunidades de terratenientes se ven ampliamente reflejadas en las disposiciones adoptadas para el gobierno comunal. Si bien la ley y la constitución «modelo» promovidas por varias ONG que ayudaban a las comunidades a elaborar sus constituciones hacían énfasis en los procedimientos democráticos, tanto en las variaciones del modelo como en ejemplos más particulares, el énfasis está en controlar la composición y los poderes del organismo rector. Uno de los métodos más explícitos, adoptados por el modelo dominante, es determinar el número de representantes que pueden ser elegidos para el comité directivo de los diferentes grupos de interés o bloques de poder de la comunidad. El modelo Gugulethu prevaleciente especifica que 75% del comité debe estar compuesto por miembros de la asociación; los representantes de los líderes tradicionales no deben exceder de 40%; cuando menos 50% deben ser residentes permanentes de la comunidad; y, como mínimo, 40% de los miembros del comité deben ser mujeres.¹⁷ Este reparto

¹⁶ Esta sección se basa, en parte, en una revisión y análisis de las primeras 100 constituciones APC registradas ante el Departamento de Asuntos Agrarios (DAA). Agradezco al DAA por haberme proporcionado copias de esas constituciones para mi investigación.

¹⁷ Véase Communal Property Association Constitution: borrador, en *A Guide to Establishing Legal Entities*, Esme Joaquin, 3 de abril de 1998.

explícito de influencias en el comité refleja una clara conciencia de tendencias particulares. Primero, hay una clara preocupación por tener bajo control la influencia de personas que no fueran miembros o no fueran residentes que, en el caso de viudas y de acuerdo con la ley consuetudinaria, podría incluir a parientes masculinos lejanos. Segundo, el requisito de residencia también limitará la influencia de miembros emigrantes de la comunidad, quienes podrían vivir «habitualmente» en una zona urbana, pero tener mucho contacto e influencia en la comunidad rural. Sin embargo, es más importante el intento por limitar la influencia del liderazgo tradicional —en un caso, al afirmar que 60% de los miembros en funciones no pueden ser miembros de la familia del jefe (núm. 4)¹⁸—, así como el de mejorar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, al exigir que 40% del comité sean mujeres (núm. 92). Igualmente interesante es que, en muchos de los casos en que se adoptó el formato modelo, la única modificación estuvo en la conformación del comité directivo. Aquí de lo que se trata claramente es de la representación de género. Lo más sorprendente es que hay casos en los que la única modificación al formato estándar es en relación con la garantía de porcentaje particular de mujeres. Si bien en algunos casos el porcentaje simplemente se reduce —aunque en un ejemplo la disminución a 20% estuvo acompañada de un incremento simultáneo en el porcentaje restrictivo que exigía que 90% del comité fueran solicitantes de tierra (núm. 21)—, en la mayoría la especificación del porcentaje cae por completo. En cambio, existe una declaración general de que la asociación «tendrá un comité con equilibrio de géneros» (núms. 71, 6, 22, 12, 18, 3, 92) o, incluso, menos específica, «todos los nombramientos futuros de miembros del comité deberán realizarse conforme a los principios de representación estipulados en la ley» (núms. 15, 16, 10, 95). Lo que queda claro en esos casos es que los participantes en la elaboración de la constitución se han preparado para aceptar el marco general de las constituciones modelo, pero han entendido la importancia de las cláusulas que definen los porcentajes específicos para los fines de representación en el comité directivo. Han modificado el modelo estándar para controlar la influencia externa —aumentando los porcentajes del comité que deben ser miembros de la asociación— y reducir e incluso eliminar simultáneamente la representación de mujeres. Por lo tanto, aunque hay pocas pruebas de que esas comunidades participaron activamente en la constitución o definición de sí mismas de maneras muy específicas durante el proceso de redacción de la constitución, existe una señal clara de que cuando el formato modelo confrontaba las relaciones de género, este reto se notaba y se atenuaba explícitamente. Sin embargo, es importante que, al aceptar el formato APC y sus requisitos de equidad formal entre los miembros, esas mismas comunidades pueden haber introducido en sus propias estructuras de gobierno las semillas para retos futuros acerca de cuestiones de participación y

¹⁸ Véase la lista de APC y la fecha de registro en el apéndice, al final de este capítulo.

representación de género. La estructura de la APC, definida legislativamente, y su implementación han implicado un intento por mediar entre las estructuras de poder —incluidas las autoridades tradicionales— y las demandas por formas más «universales» de representación democrática, como la participación igualitaria de las mujeres, pero ésta sigue siendo un área de negociaciones difíciles. A pesar de la confianza de algunos funcionarios del Departamento de Asuntos Agrarios en que los líderes tradicionales, por ejemplo, son considerados mediante la inclusión de cláusulas que «reconocen» su función en la comunidad —acompañado de la declaración de que, por supuesto, los jefes no son «dueños» históricamente de la tierra, como algunos han afirmado—, existen pruebas de que será mucho más difícil desviar la influencia de las autoridades tradicionales dentro de muchas comunidades. Algunas constituciones incluyen, en sus preámbulos, un reconocimiento del papel de los líderes tradicionales en la comunidad. Aun cuando reconocen el papel de la autoridad tradicional, continúan definiéndose a sí mismos y al funcionamiento de sus comités directivos en el formato democrático prescrito por la ley.

Al expresar las preocupaciones de la comunidad por la introducción de estas nuevas entidades legales, James Ngcobo, representante de la comunidad de KwaZulu-Natal, afirmó que:

Los fideicomisos agrarios que debemos establecer para tener acceso a la tierra son un caos institucional en las comunidades. Muchas comunidades no logran identificar la posición y las tareas de esas estructuras en relación con las estructuras existentes. Los *amakhosi* [líderes tradicionales] cuestionan el establecimiento de esas entidades legales instituidas para gobernar asuntos agrarios en zonas tribales y sostienen que la propiedad y la administración de la tierra es función de ellos. Los consejos tribales de zonas tribales desconfían de su futuro si esas estructuras logran apoderarse de sus funciones y papeles, que les han ganado el respeto de sus subordinados. (Ngcobo, 1997: 8.)

Aun en los casos en que la constitución limita específicamente la presencia de representantes del liderazgo tradicional en el comité directivo, hay inquietud de que su influencia eclipse a los demás. De nueva cuenta, James Ngcobo observa que:

El estatus *ex officio* de los *amakhosi* en los fideicomisos agrarios es vago, porque una vez que esté en ellos serán parte de la toma de decisiones y su palabra es definitiva. ¿Acaso el *inkosi* [jefe] tiene el derecho de influir en las decisiones del fideicomiso agrario? De ser así, entonces su estatus no es *ex officio*, y el fideicomiso no es independiente. Si no es así, entonces ¿cuáles son sus poderes? Incluso si el *inkosi* entiende y acepta su estatus *ex officio*, ¿acaso tiene el derecho de aprobar la decisión del fideicomiso antes de que sea implementada? ¿Qué tal si dice: «No, no pueden hacerlo»? ¿Tiene que llevarlo ante los tribunales el fideicomiso agrario? Concuéren conmigo: el papel de los *amakhosi* sigue siendo confuso. (Ngcobo, 1997: 9.)

Al comentar el asunto del papel de los *amakhosi* en relación con la reforma agraria en general, otro funcionario gubernamental dijo que:

Hemos aprendido en el proceso de implementación que sería totalmente insensato hacer a un lado a los *amakhosi*. Se puede confrontarlos, apaciguarlos, abdicarlos, caminar por la cuerda floja con ellos, sí, pero no se puede ignorarlos. Ya sea que nos reframos a ellos eufemísticamente como miembros de tribus, asociaciones comunales o como sea, nuestra realidad es que la puesta en marcha de la reforma agraria afecta principalmente la institución de los *ubukhosi*, y que ellos están afectando la implementación de nuestro programa de una manera muy importante. En KwaZulu-Natal, la gran mayoría de iniciativas de reforma agraria están apuntaladas por *amakhosi* o *izinduna* [caciques]. (Clacey, 1997: 6.)

En un número creciente de casos, incluido el de la comunidad Gugulethu cuyo borrador de constitución sirvió como constitución modelo de las APC, los conflictos entre las autoridades tradicionales y las personas comprometidas con la formación de una APC a veces han producido un *impasse* en el que fracasa el intento por el establecer una APC. En el caso de la zona comunal de Tshezi, documentada por Lungisile Ntsebeza, el intento por establecer una APC fue finalmente abandonado ante la resistencia de los jefes locales «bajo la influencia de autoridades tradicionales clave en el Conlitrasa [Congreso de Líderes Tradicionales de Sudáfrica] y la Casa de Cabo Oriental de Líderes Tradicionales», a pesar de que retrasaría, y posiblemente frustraría, un proyecto de desarrollo muy necesario iniciado por el Departamento de Comercio e Industria para estimular el turismo local (2000: 299).

De hecho, la resistencia de las autoridades tradicionales en varias partes del país ha dificultado la propagación de las APC. En KwaZulu-Natal, donde numerosos fideicomisos agrarios, establecidos como un medio para proteger la propiedad comunal en el periodo previo a 1994, se han reorganizado como entidades similares de acuerdo con la Ley APC, todavía hay muchos conflictos por la naturaleza de la toma de decisiones y la autoridad dentro de esas comunidades. En consecuencia, se han formado muy pocas APC nuevas. Una investigación realizada por el Programa de Evaluación de Entidades Legales (PEEL) en el distrito Muden de KwaZulu-Natal demuestra algunas de las dificultades de gobierno que enfrentan las comunidades en una situación parecida a las comunidades APC. Las tres comunidades estudiadas —la Emsi Lonsdale, la Vukile/Impala y el Fideicomiso Ntabenzima (granja Whitecliff)— enfrentan un mismo tipo de problemas que probablemente son muy típicos.¹⁹ Si bien hubo una organización bastante coherente de

¹⁹ Véase Legal Entity Assessment Programme (LEAP), Report on the Emsi Lonsdale Community (1999); Report on the Vukile/Impala Community (1999); y Report on the Ntabenzima Trust (1999).

la comunidad en la lucha por obtener el acceso a la tierra, como el Comité Agrario Muden, los fideicomisos comunitarios independientes, establecidos desde que se consiguió la tierra, han tenido experiencias dispares y, en gran medida, han carecido de la capacidad para producir un gobierno efectivo o las iniciativas de desarrollo esperadas por los beneficiarios. En el caso de Vukile el espíritu del acuerdo comunal permanece vivo, pero todavía hay un alto grado de confusión acerca de los términos exactos de los fideicomisos y su contenido o de las constituciones adoptadas por las comunidades. Algunas de estas dificultades se relacionan con el problema del idioma —los fideicomisos o las constituciones no han sido traducidos al zulu—, pero también hay indicios de que a pesar de las disposiciones constitucionales o del fideicomiso que asignan autoridad al comité electo, muchos de estos temas son más bien llevados ante las autoridades tradicionales, que siguen siendo el poder efectivo en la zona. A pesar de que la ONG de desarrollo local —la Organización para el Desarrollo de la Comunidad Zibambeleni— es una fuente de capacidad organizacional, la comunicación entre Zibambeleni y los comités directivos establecidos por los fideicomisos es muy débil. En cambio, Zibambeleni trabaja estrechamente con las autoridades tribales y trata directamente con las comunidades, en lugar de hacerlo a través de sus estructuras formales de gobierno. Esta debilidad en el gobierno de la comunidad se ve reflejada en las evaluaciones que concluyen que es necesario reestructurar los fideicomisos y establecer claramente el papel del Comité Agrario Muden. De hecho, es Zibambeleni quien está representado en el consejo regional y no los representantes de esas comunidades, mientras que el poder local permanece seguro en manos de las autoridades tradicionales, que en esta zona parecen tener un alto grado de legitimidad.

En algunas áreas, las dificultades se han exacerbado por el conflicto con el gobierno local, particularmente por el derecho de las autoridades tradicionales a participar *ex officio* en los organismos del gobierno local²⁰ y por la definición de los límites de éste. En particular, las autoridades tradicionales se han opuesto a cualquier intento por definir límites que no coincidan con sus propias jurisdicciones. Es importante señalar que, aunque algunos sostienen que no les corresponde a las APC apoderarse de las funciones del gobierno local y que los comités directivos sólo están allí para administrar las tierras comunes, los comités directivos APC se involucran de manera natural en la planeación del desarrollo y la prestación de servicios. Sin embargo, esta función es limitada por la Ley APC (sección 12), que requiere una mayoría de votos entre los miembros antes de que el comité ejerza un poder significativo sobre el recurso central de la asociación: la tierra. Antes de que el comité pueda vender, gravar o afectar de alguna manera los derechos agrarios de la comunidad, el comité debe obtener el permiso de la comunidad a través de

una reunión especial o general; algunas comunidades superan el requisito legislativo al especificar que una reunión especial necesita un quórum de 65% de los miembros, o debe lograr una mayoría más clara antes de tomar una decisión de este tipo. Ahora, tras varios años de experiencia en los que se han identificado un sinnúmero de problemas, muchos sugieren enmendar más la Ley APC para darle poder al Estado o administrar de manera más directa lo que en ocasiones han resultado ser instituciones vacías (Pienaar, 2000: 323). Sin embargo, estas sugerencias no logran reconocer que el potencial de las APC no radica tanto en su capacidad inmediata para conducir el desarrollo rural local, sino en el espacio que crean para una participación continua en los conflictos sociales y políticos que rodean el intento de crear regímenes de propiedad común viables; un proceso que, debe reconocerse, lleva mucho tiempo, es desordenado y cuestionado (Cousins, 1995). En este sentido, es importante reconocer que existe una gama de remedios legales «en las constituciones de las entidades, la Ley APC, las disposiciones del derecho consuetudinario y las leyes que regulan la conducta de los fideicomisarios y asociaciones de voluntarios, además de los remedios contractuales y delictivos civiles comunes y las sanciones del derecho penal» (Pienaar, 2000: 323). Si bien los problemas de acceso a los recursos legales pueden ser parte de la explicación, el no poder recurrir a esos múltiples remedios legales sugiere que las dificultades que enfrentan esas nuevas entidades van más allá de los asuntos de la tecnología legal. Más bien, es la confrontación provocada por el potencial emancipador de esta forma lo que ha generado el grado de tensión que ha acompañado su implementación.

No obstante los numerosos intentos por aplacar a las autoridades tradicionales, mediante su reconocimiento en los preámbulos o su inclusión en los comités directivos, los jefes siguen muy recelosos de la Ley APC. Esta oposición ha estado en primer plano en numerosos encuentros entre jefes y el Departamento de Asuntos Agrarios. Por ejemplo, en una reunión realizada el 24 de marzo de 1998 entre los jefes y el doctor Siphso Sibanda de la Dirección de Reforma de la Tenencia del Departamento de Asuntos Agrarios, los jefes afirmaron que ellos «consideran que la APC está debilitando sus poderes y que es un instrumento que busca dividir la tribu. Querían saber por qué la tierra debía transferirse a través de la APC» (Nzuza, 1998: 16). En respuesta, Sibanda les dijo a los jefes que había tres criterios que el gobierno consideraba «fundamentales y no negociables para el reconocimiento de una autoridad tradicional: a) equidad en términos de género y derechos constitucionales de las mujeres; b) democracia; y c) el debido proceso» (Nzuza, 1998: 16).

La tensión por esos criterios se intensificó aún más después de que el gobierno distribuyó un borrador del proyecto de ley de Derechos Agrarios,²¹ a principios de 1999. Este proyecto, diseñado para ofrecer seguridad de tenencia en áreas comunales —los antiguos *homelands*, donde la tierra «tribal» oficialmente «propiedad»

²⁰ Véase *African National Congress v Minister of Local Government and Housing, KwaZulu-Natal*, 1998 (3) SA 1 (CC).

²¹ Véase *Land Rights Bill*, 3 de junio de 1999 (borrador).

del Estado seguía bajo el control de las autoridades tradicionales—, incluía los mismos criterios.²² Justificado como un intento por abordar la degeneración de la administración de la tierra en esas áreas, así como el cumplimiento del imperativo constitucional de promover la seguridad de la tenencia, el proyecto de ley proponía un sistema de administración descentralizada de los derechos agrarios que estaría en manos de personas que establecerían los derechos de ocupación, uso o acceso a la tierra y quienes, en lo sucesivo, no podrían ser despojados de dichos derechos sin su consentimiento o sin recibir una compensación. Además, proponía la creación de un sistema de manejo de derechos agrarios que incluiría: *a)* «estructuras para los tenedores de derechos agrarios»; *b)* juntas de derechos agrarios —compuestas por líderes tradicionales, consejeros municipales y líderes respetados de la comunidad— en el consejo de distrito; y *c)* un funcionario de derechos agrarios, empleado del Departamento de Asuntos Agrarios en el distrito magisterial que representaría al ministro de Asuntos Agrarios, quien seguiría siendo el propietario nominal (Sibanda, 2000: 308). De acuerdo con el proyecto de ley, los consejos de derechos agrarios «actuarían como guardianes, revisarían los asuntos que afectan el estatus protegido de los tenedores de derechos locales y, en caso de ser necesario, referirían las decisiones a la consideración del funcionario de derechos agrarios» (Sibanda, 2000: 308). Los funcionarios de derechos agrarios estarían facultados para «investigar violaciones a la ley, presentar notificaciones, preparar casos e instituir medidas en el juzgado correccional para obtener reparaciones para los tenedores de derechos» (Sibanda, 2000: 308).

Aun cuando Sipho Sibanda sostenía que el proyecto de ley no planteaba ninguna amenaza para los líderes tradicionales, pues los titulares de los derechos tenían el poder, si lo deseaban, de decidir que las autoridades tradicionales manejaran sus derechos de manera cotidiana, en los hechos se buscaba, fundamentalmente, cambiar la relación *de facto* entre los líderes tradicionales y sus afiliados respecto al control de la tierra. A los líderes les preocupaba retener sus poderes para distribuir la tierra, decidir sobre conflictos agrarios y opinar en el manejo de los recursos de la comunidad de manera más general, pero el proyecto de ley le daba poder a los titulares de los derechos para elegir la forma de autoridad que desearían para que supervisara la administración de la tierra e implicaba que, en caso de conflicto, a los tenedores de los derechos agrarios un magistrado local les juzgaría luego de la intervención del funcionario de derechos agrarios, quien sería el representante del gobierno local. Así, aunque el gobierno afirmó que los líderes tradicionales no tenían nada que temer, la reacción de los líderes tradicionales fue ruidosa. En cuestión de meses, el gobierno retiró públicamente el proyecto de ley y el nuevo ministro de Asuntos Agrarios comenzó a hablar del papel de las tribus y, por lo tanto, de los líderes tradicionales en la administración de la tierra, e incluso

²² Sección 2(f).

llegó a sugerir que la tierra podría ser transferida del Estado a las «tribus, comunidades o personas que ocupan desde hace mucho tiempo la tierra del Estado» (Merten, 2000).

El retiro del proyecto de ley de Derechos Agrarios parece ser una victoria de las autoridades tradicionales que temían perder su jurisdicción sobre los asuntos agrarios, pero el debate no ha concluido. A pesar de que el nuevo ministro parecía preocupado por aplacar a las autoridades tradicionales, la constante crisis por la administración de la tierra y su impacto en el desarrollo, particularmente como consecuencia de la falta de seguridad en la tenencia, ha vuelto a poner estos temas en la agenda del gobierno (Mayende, 2001). Algunos críticos temían que el gobierno estuviera a punto de abandonar las políticas que parecían ocuparse de darle poder a los pobres del campo y, en cambio, depender de las fuerzas del mercado, pero ese cambio dramático no parece haberse materializado. Más bien, el Departamento de Asuntos Agrarios explora otra vez cómo abordar el tema de la seguridad de la tenencia en las zonas comunales y reflexiona sobre la mejor manera de involucrar a las autoridades tradicionales en el debate que facilitará el logro de esos objetivos.

6. PROMESAS Y PELIGROS

Aunque los resultados prometedores del compromiso inicial entre los que no tienen tierra y los terratenientes, por un lado, y entre los reclamos de equidad y las afirmaciones de la autoridad tradicional, por el otro, el futuro de las comunidades rurales —en especial, sus relaciones sociales internas y el acceso a los recursos necesarios para superar una historia de pobreza estructural— sigue en duda. Si bien algunas comunidades han obtenido acceso a la tierra y hay oportunidades institucionales de establecer nuevas formas de gobierno comunal, la necesidad de construir capacidades locales y el peso de las fuentes de poder siguen siendo obstáculos importantes. A pesar de que las autoridades tradicionales que conservan legitimidad entre las comunidades rurales pueden, de hecho, desempeñar un papel positivo en el gobierno local, su futura transferencia de poderes, mediante sugerencias de que la tierra podría ser puesta en manos de las tribus y no en entidades legales, así como el retiro del proyecto de ley de Derechos Agrarios, plantea preguntas importantes acerca de la seguridad de la tenencia, los derechos de las mujeres y el futuro de la participación democrática en las comunidades rurales. En este contexto, la existencia de las APC, pese a que todavía no son muchas y corren el riesgo de ser revisadas desde arriba o de ser sepultadas por la oposición de las autoridades tradicionales, ofrece un espacio institucional donde pueden librarse luchas y, con el tiempo, implementarse estrategias para alcanzar los objetivos de emancipación que muchos sudafricanos buscan. En cambio, si estas noveles instituciones son abandonadas, la ley no será más que una elaborada fachada que cubre una

versión poscolonial de la reserva: creación de lugares geográficos desde donde muchos de los ciudadanos más marginados de Sudáfrica continuarán librando campañas de estrategias múltiples para la supervivencia: un poco de ganado, una pequeña parcela de maíz, un espacio para recolectar los limitados recursos naturales, alojamiento y un lugar desde donde atreverse a confrontar las desigualdades de la vida en la periferia urbana.

APÉNDICE: APC Y FECHAS DE REGISTRO (CITADAS POR NÚMERO EN EL TEXTO)

3. Asociación de Propiedad Comunal Monyamane, 29 de abril de 1997.
4. Asociación de Propiedad Comunal Skeifontein, 3 de junio de 1997.
6. Asociación de Propiedad Comunal Lwalanemeetse, 21 de julio de 1997.
10. Asociación de Propiedad Comunal Katjebane, 27 de agosto de 1997.
12. Asociación de Propiedad Comunal Sizanani, 26 de septiembre de 1997.
15. Asociación de Propiedad Comunal Bethania, 23 de diciembre de 1997.
16. Asociación de Propiedad Comunal Mtintloni, 23 de diciembre de 1997.
18. Asociación de Propiedad Comunal Mahlambandlovu, 10 de febrero de 1998.
21. Asociación de Propiedad Comunal Diratsagae, 4 de marzo de 1998.
22. Asociación de Propiedad Comunal Baroka, 12 de marzo de 1998.
71. Asociación de Propiedad Comunal Selowe, 7 de julio de 1998.
92. Asociación de Propiedad Comunal Bedrog, 15 de octubre de 1998.
94. Asociación de Propiedad Comunal Thusanang, 4 de noviembre de 1998.
95. Asociación de Propiedad Comunal Masikule, 4 de noviembre de 1998.
98. Asociación de Propiedad Comunal Rietkuil Agri-Village, 6 de enero de 1999.

BIBLIOGRAFÍA

- Ashforth, Adam, *The Politics of Official Discourse in Twentieth-Century South Africa*, Clarendon Press, Oxford, 1990.
- Bennett, T. W., *Human Rights and African Customary Law*, Juta, Ciudad del Cabo, 1995.
- Berry, Sara, *No Conditions is Permanent*, University of Wisconsin Press, Madison, 1993.
- Brand, Robert, «110 000 Have Benefited from Restitution», *The Mercury*, 3 de julio de 2000.
- Bruce, John, S. E. Migot-Adholla y J. Atherton, «The Findings and Their Policy Implications: Institutional Adaptation or Replacement», en John Bruce y Shem E. Migot-Adholla (coords.), *Searching for Land Tenure Security in Africa*, Kendall/Hart, Dubuque, 1994.
- Bundy, Colin, *The Rise & Fall of South African Peasantry*, Heinemann, Londres, 1979.
- Carter, Michael, y Julian May, «Poverty, Livelihood and Class in Rural South Africa», *World Development*, vol. 27, núm. 1, 1999: 1-20.

- Carter, Michael, y Julian May, «One Kind of Freedom: Poverty Dynamics in Post-Apartheid South Africa», mayo de 2001 (mimeo.).
- Chanock, Martin, «Paradigms, Policies and Property: A Review of the Customary Law of Land Tenure», en K. Mann y R. Roberts (coords.), *Law in Colonial Africa*, Heinemann, Portsmouth, 1991: 61-84.
- Clacey, Richard, «Redistribution and Implementation», *Land Update*, vol. 57, abril de 1997: 4-7.
- Cliffe, L., «The Politics of Land Reform in Zimbabwe», en T. A. S. Bowyer y C. Stoneman (eds.), *Land Reform in Zimbabwe: Constraints and Prospects*, Ashgate, Aldershot, 2000.
- Communal Property Association Constitution: borrador, *A Guide to Establishing Legal Entities*, Esme Joaquim, 3 de abril de 1998.
- Cousins, Ben, «Common Property Institutions and Land Reform in South Africa», *Development Southern Africa*, vol. 12, núm. 4, 1995.
- Cross, Cathrine, «An Alternative Legality: The Property Rights Question in Relation to South African Land Reform», *South African Journal on Human Rights*, vol. 8, 1992: 305-331.
- Cross, C. R., y R. J. Haines (coords.), *Towards Freehold?: Options for Land and Development in South Africa's Black Rural Areas*, Juta, Ciudad del Cabo, 1988.
- Currie, Iain, «Indigenous Law», en Chaskalson *et al.* (coords.), *Constitutional Law of South Africa*, Juta, Ciudad del Cabo, 1998: 1-33.
- Departamento de Asuntos Agrarios, *Annual Report (1999)*, Government Printers, Pretoria, 1998.
- Gilfillan, D., *Communal Property Associations Act*, Legal Resources Center, Pretoria, s. f. (mimeo.).
- Hanekom, Derek, «Land Affairs is Taking Off», comunicado del ministro de Asuntos Agrarios en la Asamblea Nacional en ocasión de la votación presupuestaria sobre asuntos agrarios, 23 de abril de 1998.
- Holomisa, jefe Patekile, «Ubukhosi the Bedrock in African Democracy», *Daily Mail and Guardian*, 16 de febrero de 2000, <www.mg.co.za/mg/news/2000feb2/16feb-traditional.html>.
- Hopkins, Anthony G., *An Economic History of West Africa*, Columbia University Press, Nueva York, 1973.
- Karouik, Samuel, «Land Reform Could Widen the Divide», *Daily Mail and Guardian*, 2 de marzo de 2000, <www.mg.co.za/mg/news/2000mar2/15mar-land>.
- Kerr, A. J., *The Customary Law of Immovable Property and of Succession*, 3ª ed., Rhodes University, Grahamstown, 1990 [1976].
- Klug, Heinz, «Defining the Property Rights of Others: Political Power, Indigenous Tenure and the Construction of Customary Land Law», *Journal of Legal Pluralism*, vol. 35, 1995: 119-148.
- Krueckeberg, Donald A., «Private Property in Africa: Creation Stories of Economy, State, and Culture», *Journal of Planning Education and Research*, vol. 19, 1999: 101-107.

- Maddock, K., «From Terra Nullius to Mabo», en Ramus Kumar Raha (coord.), *Dimensions of Human Society and Culture: Essays Volume in Honor of Professor Probodh Kumar Bhowmick*, Guan, Nueva Delhi, 1996.
- Mann, K., y R. Roberts (coords.), *Law in Colonial Africa*, Heinemann Educational Books/James Currey, Portsmouth, 1991.
- Mayende, Gilingwe P., «Getting Out of the Policy Logjam: The Challenge of Land Tenure Reform in South Africa», documento presentado en el Centro de Tenencia de la Tierra, Universidad de Wisconsin en Madison, 5 de junio de 2001.
- Mbeki, Thabo, «Notes—Media Briefing on Cabinet Legislation», 26 de julio de 2001, <<http://www.gov.za/President/Speeches and Media Briefings>>.
- Mamdani, Mamood, *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*, Princeton University Press, Princeton, 1996.
- May, Julian, «The Structure and Composition of Rural Poverty and Livelihood in South Africa», en Ben Cousins (coord.), *At the Crossroads: Land and Agrarian Reform in South Africa in the 21st Century*, Programa para Estudios Agrarios y de la Tierra-Universidad de Cabo Occidental/Comité Nacional Agrario, Ciudad del Cabo, 2000.
- Ngcobo, James, «Redistribution and Institutional Arrangements», *Land Update*, vol. 57, 8-9 de abril de 1997.
- Ntsebeza, Lungisile, «Traditional Authorities, Local Government and Land Rights», en Ben Cousins (coord.), *At the Crossroads: Land and Agrarian Reform in South Africa in the 21st Century*, Programa para Estudios Agrarios y de la Tierra-Universidad de Cabo Occidental/Comité Nacional Agrario, Ciudad del Cabo, 2000: 280-305.
- Nzuza, Tholakele, «Tribal Authority Land and Ownership Discussed», *Land Info*, vol. 5, núm. 2, abril-mayo de 1998: 15-16, 19.
- Pienaar, Kobus, «“Communal” Property Arrangements: A Second Bite», en Ben Cousins (coord.), *At the Crossroads: Land and Agrarian Reform in South Africa in the 21st Century*, Programa para Estudios Agrarios y de la Tierra-Universidad de Cabo Occidental/Comité Nacional Agrario, Ciudad del Cabo, 2000: 322-339.
- Platzky, Laurine, y Cheryl Walker, *The Surplus People: Forced Removals in South Africa*, Ravan Press, Johannesburgo, 1985.
- Santos, Boaventura de Sousa, «On Oppositional Postmodernism», en Ronaldo Munck y Denis O'Hearn (coords.), *Critical Development Theory: Contributions to a New Paradigm*, Zed Books, Nueva York, 1999: 29-43.
- Shackleton, Sheona, C. Shackleton, y B. Cousins, «The Economic Value of Land and Natural Resources to Rural Livelihoods: Case Studies from South Africa», en Ben Cousins (coord.), *At the Crossroads: Land and Agrarian Reform in South Africa in the 21st Century*, Programa para Estudios Agrarios y de la Tierra-Universidad de Cabo Occidental/Comité Nacional Agrario, Ciudad del Cabo, 2000: 35-67.
- Sibanda, Siphon, «Proposals for the Management of Land Rights in Rural South Africa», en Ben Cousins (coord.), *At the Crossroads: Land and Agrarian Reform in South Africa*

- in the 21st Century*, Programa para Estudios Agrarios y de la Tierra-Universidad de Cabo Occidental/Comité Nacional Agrario, Ciudad del Cabo, 2000: 306-310.
- Small, Janet, Harald Winkler, del Transvaal Rural Action Committee, *Botho Sechabeng: A Feeling of Community*, National Land Committee, Johannesburgo, 1992.
- Streek, Barry, *Cape Times*, 7 de febrero de 1996.
- Technical Committee on Constitutional Issues, *First Supplementary Report*, 15 de junio de 1993.
- Transvaal Rural Action Committee, *A Toehold on the Land: Labour Tenancy in the South Africa Eastern Transvaal*, TRAC, Johannesburgo, mayo de 1988.
- Van Onselen, Charles, *The Seed is Mine*, David Phillip, Ciudad del Cabo, 1995.
- Walker, Cheryl, «Cornfield, Gender and Land», en Shamim Meer (coord.), *Women, Land and Authority*, David Phillip, Ciudad del Cabo, 1997: 55-73.

IV. «Movilización sin emancipación» Las luchas sociales de los sin tierra en Brasil¹

ZANDER NAVARRO

INTRODUCCIÓN

¿Quién detenta la propiedad sobre la tierra? ¿De qué manera? ¿Cómo puede venderla? ¿Cómo ha de comprarla? Si ésta nos pertenece, sí. Nosotros somos de la tierra. Somos sus hijos. Siempre, siempre. Tierra viva. Del mismo modo como cría a las larvas, así nos cría también. Tiene huesos y sangre. Tiene leche y nos amamanta. Tiene pelo, pasto, paja y árboles. Sabe producir comida. Hace nacer casas. Hace nacer gente. Ella cuida de nosotros y nosotros cuidamos de ella. Bebe *chicha*,² aceptando nuestra invitación. Somos sus hijos. ¿Cómo puede venderse? ¿Cómo puede comprarse? (Arguedas, 1970, *apud* Galeano, 1982: 256).³

El cambio social más impresionante y de mayor alcance desde la segunda mitad del siglo xx, y que nos aísla para siempre del mundo del pasado, es la muerte del campesinado [...] en la década de los años treinta, el rechazo de los campesinos a desaparecer aún se usaba de manera corriente como argumento contra la previsión de Karl Marx de que ellos se extinguirían. (Hobsbawm, 1996: 284.)

La historia social y política de Brasil en el periodo contemporáneo, especialmente a partir de los años finales del ciclo militar, o sea, entre el final de la década

¹ Deseo expresar mis más sinceros agradecimientos a un pequeño grupo de lectores de la primera versión del artículo, cuyos comentarios permitieron corregir equívocos y realzar los puntos analíticos de mayor relevancia, aunque ciertamente sin ninguna responsabilidad por los errores, formato interpretativo y argumentos remanentes. Por la lectura crítica de esa versión (lo cual me honró mucho), estoy profundamente agradecido a Boaventura de Sousa Santos, César Hamilton Goes, Eliane Cardoso Brenneisen, Gilson Bittencourt, Irio Luiz Conti, Jonathan Fox, José de Souza Martins, Maria Antônia Souza, Odaci Luiz Coradini y Raul Jungmann.

² *Chicha* es una bebida alcohólica utilizada en América Latina. [N. del E.]

³ En el original: «¿Qué tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella nos pertenece. Nosotros somos de ella. Sus hijos somos. Así siempre, siempre. Tierra viva. Como cría a los gusanos, así nos cría. Tiene huesos y sangre. Leche tiene y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja y árboles. Ella sabe parir papas. Hace nacer casas. Gente hace nacer. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe chicha, acepta nuestro convite. Hijos suyos somos. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar?» [N. del E.]

de 1970 y la primera mitad de la década siguiente, y que se extiende hasta nuestros días, presenta un conjunto de procesos sociales de los que, si bien algunos han sido comunes a otras sociedades latinoamericanas en la misma época, otros, con todo, son sorprendentes y hasta inesperados. Entre los primeros aspectos sobresale —como han destacado diversos autores— la rapidez de la consolidación de un régimen político inspirado en los límites relativamente estrechos de una democracia primordialmente electoral. O, aún en el primer grupo de procesos, repetidos en otros países de América Latina, cambios sociales intensos (como urbanización acelerada, por ejemplo) o, en el campo de la economía, los procesos inflacionarios crónicos, tan sólo parcialmente vencidos y, también, la adopción generalizada de una política de «ajuste estructural», a partir de mediados de la década de los ochenta. Preconizada por organismos financieros internacionales, esa política, en general, acabó integrando forzosamente, y de forma rígida, las economías del continente a los círculos financieros y comerciales internacionales, haciendo de la región uno de los casos paradigmáticos del fenómeno de la globalización.

Por otro lado, si se analiza el conjunto de procesos sociales que caracterizó a Brasil en el mismo periodo, difícilmente dejará de ser consensual la identificación del surgimiento de las luchas sociales en áreas rurales, particularmente las emprendidas por los llamados «sin tierra», como las más significativas y distintivas de esa época, luchas sociales inesperadas, en especial si se comparan con los diagnósticos típicos del periodo pasado, incluso entre marxistas, usualmente escépticos en cuanto a las posibilidades de organización política consecuente por parte de trabajadores rurales y campesinos.⁴

El origen, a principios de la década de los años ochenta, y el desarrollo posterior del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, volvió gradualmente conocida su sigla —MST— y otros de sus iconos públicos, especialmente su bandera roja y las típicas gorras usadas por sus militantes. Las luchas sociales emprendidas por esta organización, que nació como un movimiento que transcurre desde el proceso de transición política experimentado en Brasil a partir de finales de la década de los setenta (cambio acentuado posteriormente por la ascensión al poder del primer presidente civil en 1985), concretan probablemente uno de los más sorprendentes procesos sociales en el presente. La organización, en este capítulo, será de aquí en adelante tratada como Movimiento, MST o, simplemente, «la organización de los sin tierra» (la distinción conceptual entre movimiento social y

⁴ Entre aquellos que resaltaron las imposibilidades políticas de los «pueblos sin historia», incluido el campesinado, la referencia clásica es Hobsbawm (1959), pero esta literatura recibió a escasos autores en el campo intelectual de izquierda que presentaran una lectura alternativa. El ejemplo pionero, en este caso, es el estudio de Huizer (1976). Tan sólo en los años noventa, cuando se vino abajo la literatura inspirada en el marxismo trivial, es cuando surgieron autores más receptivos a la idea de participación política activa de las clases subalternas del campo. En Brasil, con todo, José de Souza Martins (1981), en un artículo clásico, ya señalaba, muchos años antes, las insuficiencias de la argumentación dominante en la época e indicó claramente, en la historia agraria brasileña, los momentos de intensa presencia política de estos grupos sociales.

organización formal no se analiza en este capítulo más que de manera breve, no obstante su decisiva importancia política para la comprensión del Movimiento). Normalmente más activo en el sur de Brasil en los años ochenta, en la siguiente década se convirtió poco a poco en una organización de gran alcance nacional que se estructuró en la mayoría de los estados brasileños y su actuación despertó un interés creciente, incluso internacionalmente.⁵ Los análisis sobre el MST, aunque se multiplicaron rápidamente en años recientes, son aún, con todo, insuficientes. En este periodo, los estudios e interpretaciones han sido, en general, o meramente idealizadores o superficiales, dedicados más bien a registrar sin crítica las acciones externas y públicas del Movimiento, asociándolas a las improbables potencialidades «revolucionarias» de los sin tierra y confundiendo de esta manera con la propia literatura apologética de la organización o, en otro caso, son estudios económicos centrados en ambientes restringidos de acción de los sin tierra, por lo común asentamientos rurales sobre los cuales ya hay un gran número de estudios. Un tercer grupo de estudios, con el objetivo de analizar el MST desde un enfoque más ambicioso, que rebase los límites estatales y lo interprete nacionalmente, a la luz de los procesos sociopolíticos y económicos más recientes, aún es notablemente menos numeroso, lo cual refleja las dificultades metodológicas de estas tareas.⁶ Como resultado, el conocimiento sobre el Movimiento en el Brasil (y de manera internacional), curiosamente, es aún inadecuado y parcial, lo que ha producido un considerable desencuentro analítico sobre este fenómeno social, independientemente de la perspectiva teórica o política, repitiéndose los análisis marcados por el encantamiento ideológico y por la superficialidad. Estos desencuentros, de hecho, son más complejos, como resaltó José de Souza Martins, pues envuelven a casi todos los actores implicados en las disputas sociales en el campo,

⁵ Entre los ejemplos que se multiplicaron en los años recientes se cita, únicamente a modo de ilustración, el material del influyente periódico *The New York Times*, que publicó en 1997 (20 de abril), en su cuaderno dominical, un largo artículo sobre el MST titulado «Los desposeídos», profusamente ilustrado con fotos del conocido fotógrafo Sebastião Salgado. También, la edición latinoamericana de la revista *Time*, en la cual el Movimiento ya fue motivo hasta de la portada (19 de enero de 1998).

⁶ Son innumerables los trabajos sobre el MST, los cuales lo abordan desde diferentes ángulos, excepto el último grupo de los «estudios nacionales», que ofrece escasos ejemplos. Probablemente la más osada incursión sobre la historia de este movimiento (incluso porque contó con el apoyo de la propia organización, lo cual hizo factible el acceso a los archivos y documentos propios) haya sido la tesis de doctorado de Fernandes (1999). Los resultados de este estudio, aunque reveladores y relevantes desde el punto de vista empírico, son modestos en términos analíticos, probablemente maculados por la íntima asociación entre el investigador y el disciplinado militante del Movimiento. Un caso similar, igualmente idealizador (y por la misma razón), aún en este grupo, aunque analizando únicamente las acciones «en educación» organizadas por el MST, es el trabajo de Caldart (2000), también una tesis de doctorado, que expresa los desaciertos entre la producción del conocimiento y sus restricciones ideológicas. No se conocen otros estudios que tengan el mismo alcance temático, aunque hayan proliferado en este periodo aquéllos sobre aspectos parciales de la acción del Movimiento, particularmente sobre el caso de los asentamientos rurales. Estos últimos serán citados en este artículo solamente cuando sean relevantes para el apoyo específico de los argumentos presentados. Para una idea general, no obstante, de los estudios sobre asentamientos ya realizados, consúltese las listas bibliográficas de los artículos que forman parte de la selección organizada por Medeiros y Leite (1999).

incluso a las agencias de mediación que pretenden representar a los sin tierra en el marco de la «política en general». Según este autor: «El silencio de los pobres no proviene únicamente por la clausura cultural en que viven. Proviene también de la usurpación de la palabra, del querer y del esperar por parte de aquellos que, al pretender generosamente ser solidarios, terminan por imponerles un nuevo y más grave silencio, el del habla postiza e inauténtica, anómica» (Martins, 2000a: 69).

El movimiento, originado formalmente en enero de 1984, aunque haya surgido años antes, a partir de la apertura política emprendida en el ámbito del ciclo militar, ya a fines de los años setenta, es el producto social y político de un conjunto de factores que serán descritos en las secciones siguientes. Estos determinantes incluyen desde las condiciones políticas represivas del periodo autoritario y el activismo político que desde ahí transcurre, hasta las acciones de movilización y politización organizadas por sectores radicalizados del clero católico; desde los efectos de la vigorosa modernización agrícola de la década citada, hasta la historia política de las comunidades rurales del sur de Brasil (donde el Movimiento se organizó primeramente); o aun, desde la apertura política iniciada en 1979 hasta los procesos sociales que acabaron impulsando un «ciclo de protesta» en áreas rurales de esa región brasileña. Es tal vez una de las más fascinantes trayectorias sociopolíticas que la historia brasileña haya producido jamás, pues en los últimos 20 años el MST ha logrado mantenerse suficientemente activo para influir en la agenda pública sobre el mundo rural y emprender acciones colectivas de gran repercusión, convirtiéndose en actor de referencia obligatoria en los asuntos ligados con la cuestión agraria brasileña. Extremadamente ágil, el Movimiento también ha desarrollado procesos de organización y dinámicas de estructuración que justifican su fuerza política, aunque sean mecanismos operacionales de sustentación casi siempre desconocidos, incluso, con cierta sorpresa, hasta por investigadores relacionados con el área correspondiente, mucho más atraídos por las acciones externas y por la visibilidad pública del Movimiento.

Tres advertencias son necesarias para situar mejor el conjunto de argumentos de este capítulo y delimitar claramente sus objetivos. Primeramente, se decide adoptar aquí una distinción analítica, con claras implicaciones políticas, entre la «organización de los sin tierra», que engloba el conjunto de su cuerpo dirigente principal y sus militantes intermediarios directamente ligados a la organización como sus funcionarios, y la amplia base social de las «familias sin tierra». Se incluyen, entre éstas, a los pequeños productores agrícolas empobrecidos, propietarios o no (en este caso, medieros, pequeños arrendatarios, socios y ocupantes de tierras con el consentimiento del propietario), poseedores de diminutas parcelas de tierra, insuficientes para su reproducción social, además de miles de familias rurales pobres que vagan por los campos brasileños en busca de ocupación y renta y, también, parte de los asalariados rurales, que en algunas regiones agrarias han sido atraídos hacia las filas del MST. El punto principal de este capítulo se centra,

casi exclusivamente, en la organización y su cuerpo directivo, su historia, estrategias de acción y su repertorio de opciones y decisiones a lo largo del periodo analizado, pero no a los sin tierra bajo su órbita, incluso porque, como se argumentará, muchas veces es significativa la distancia entre la base social y la agenda discursiva y las formas de acción social escogidas por la dirección, por lo que el éxito de la movilización del MST se explica por otras razones, diferentes de la adhesión consciente y voluntaria de su base social. El segundo aspecto que aquí se destaca se refiere al campo de procesos sociales que se interpretan. Se debe subrayar que este capítulo no está dedicado al análisis social del Brasil contemporáneo o a la discusión de la cuestión agraria brasileña *latu sensu*. Los determinantes más generales, de orden económico o sociopolítico, se citan únicamente para indicar contextos y coyunturas, pues la centralidad analítica se remite a la organización de los sin tierra, aun haciendo secundario (y, a veces, ni siquiera se menciona) el conjunto de otras organizaciones populares del campo brasileño, las relaciones establecidas y la naturaleza de los conflictos entre estas organizaciones. Aunque crucial, tampoco se discutirá detalladamente el papel del Estado y su política, sino contextualmente, y sólo se indica la naturaleza de las acciones gubernamentales en periodos específicos. Frente a la inmensa variabilidad de la red de relaciones construida y modificada a lo largo del tiempo entre estos actores, su mención adoptará aquí contornos más episódicos, simplemente para apoyo de los argumentos presentados. Finalmente, como se entenderá, las evidencias empíricas son, casi todas, relacionadas con situaciones del sur de Brasil (la mayoría, gauchas), siendo éste el tercer esclarecimiento previo que establece los límites de este capítulo. Si por un lado reflejan la experiencia como investigador del autor, se desea subrayar, con todo, que las ilustraciones empíricas extraídas de la historia del MST en Rio Grande do Sul (o en el sur de Brasil) son ampliamente significativas y representativas como para ser, con frecuencia, generalizadas para el resto del país. Originada en el Brasil meridional, la organización de los sin tierra tiene en Rio Grande do Sul su más antigua y firme filial. Prácticamente todas las iniciativas estructuradas por el MST fueron probadas primeramente en este estado, que ha servido de campo de experimentación para las diferentes iniciativas promovidas por la organización a lo largo del tiempo, y después repetidas nacionalmente.

Otra observación preliminar, imperativa para restringir los límites de este capítulo, se refiere a la noción adoptada de emancipación. De manera diferente a otras posibilidades conceptuales (p. ej.: la clásica noción habermasiana de «conocimiento emancipador»), la idea de emancipación en este capítulo está esclarecida restrictivamente según una dimensión política. Se refiere, precisamente, a las oportunidades de las clases subordinadas y de los grupos sociales más pobres, a partir de diferentes identidades, para construir de manera autónoma sus diversas formas de asociación y representación de intereses y, más relevante, para adentrarse en el campo de las disputas políticas y ejercer ahí su legítimo derecho de

defender reivindicaciones propias y procurar materializar sus demandas, sin el riesgo de eliminación o impedimentos políticamente ilegítimos materializados por grupos sociales adversarios. Esta proposición significaría un sistema político que incorporaría el conflicto social como parte de su propia naturaleza y legitimidad, de modo diferente a la tradición brasileña para lidiar con el conflicto social como una anomalía, la cual tiene que combatirse por todos los medios represivos. En una sociedad tan marcadamente desigual, si el conflicto no es parte de la política, las clases subordinadas jamás tendrán la oportunidad de alterar las diferentes asimetrías (y si son reales la autonomía de las formas de representación y la legitimidad del conflicto, ciertamente estaría abriéndose la senda hacia una «democracia emancipadora»). De esta manera, tal noción se distancia, totalmente, de la ambiciosa idea (fantasiosa en esta fase de la historia) de la correspondencia entre emancipación y la «gran transformación social», marcada por la profunda ruptura con el orden existente, es decir, en este capítulo *emancipación* no es sinónimo de ruptura antisistémica, y menos aún de un vago orden político socialista, sino que, en un panorama restringido, se adhiere aquí a la idea de la necesidad, relativamente obvia en el caso brasileño, de dar un significado real a tal concepto mediante la posibilidad de participación y representación política (insistimos, de manera autónoma, sin recurrir al líder mesiánico, ni a los partidos políticos que sofocan los intereses de los grupos subalternos ni a otra representación falsamente mediadora) e igualmente para concretar la presencia de estos grupos en un sistema de disputas políticas que los acepte e integre de manera legítima. Como se argumentará, incluso desde esta limitada noción de emancipación, el enorme éxito del MST cuando moviliza grupos sociales sin tierra para construir su estructura de acciones colectivas, ni siquiera remotamente se ha aproximado a la noción (aunque restringida) de emancipación antes referida, lo que justifica, por cierto, el título del capítulo. Al adoptar la perspectiva totalizadora de los grandes esquemas políticos de las tradiciones ortodoxas del marxismo, que descalifican las diferencias y alteridades sociales, además de impedir la autonomía de las formas de organización microsociales, locales y regionales, pues amenazarían la existencia de su propia dimensión nacional, el MST, como organización política, ha actuado como un freno hacia la emancipación de los más pobres del campo, sirviendo estos últimos mucho más a los propósitos, no siempre explícitos, del cuerpo dirigente de la organización.⁷

⁷ Maria Antônia Souza alerta, sin embargo, sobre las infinitas posibilidades desarrolladas por individuos sociales integrantes de la base más periférica del Movimiento, que son menos cuando están en los campamentos y más cuando ya están asentados, para contraponerse, muchas veces, a las decisiones de la organización y sus militantes y así crear «formas de resistencia». Su estudio, además (Souza, 1999), es una demostración ejemplar de esta alternativa construida por las familias sin tierra y se añade a un expresivo y riguroso conjunto de investigaciones más recientes que empieza a romper el «encantamiento» de la mayoría de los estudios anteriores. Sin adherirse, como es obvio, al mito de la neutralidad científica, e igualmente reconociendo la enorme dificultad de establecer fronteras precisas entre el conocimiento científico y la trivialidad ideológica, aun así una parte significativa de los estudios anteriores abandonó, muchas veces, los cánones más elementales de la

En este capítulo se presenta inicialmente una historia concisa del movimiento social, en la que destacan los determinantes que produjeron el nacimiento de protestas sociales en el sur de Brasil, las cuales generaron diversos movimientos sociales rurales, entre ellos la organización de los sin tierra. Enseguida, se presentan las fases más sobresalientes y las características de su evolución en las últimas dos décadas, procurando demostrar que el desarrollo del MST ha producido, en los años más recientes, formas de organización interna, opciones políticas y estratégicas y, también, una «lectura de realidad» que es extremadamente problemática, ya sea en relación con las demás organizaciones del campo, ya sea con sus propios integrantes; alternativas que los sin tierra han adoptado, en particular en función de su fuerza política y de sus orientaciones ideológicas. Finalmente, antes de las conclusiones que cierran este artículo, la segunda sección analiza un sintético conjunto de los dilemas actuales vividos por el Movimiento, en el que destacan los aspectos más críticos y controvertidos de su acción política, es decir, antes de señalar los resultados más destacados y notables de la acción política y organizativa de los sin tierra —tal vez ya suficientemente conocidos—, lo que se presenta y se discute, por no haber sido todavía introducido (por cierto, ni siquiera reconocido como real por la mayor parte de los analistas y miembros del Movimiento) es, exactamente, un sintético conjunto de aspectos del rostro invisible del Movimiento. Se espera que contribuya a ampliar el conocimiento sobre la organización, particularmente de sus opciones políticas, que al parecer tienen pocas posibilidades de construir una emancipación real de los pobres en el Brasil rural.

I. HISTORIA CONCISA DEL MST (1980-2000)

El contexto original

Así como ocurrió en otros países de América Latina en el periodo de la posguerra, también en el Brasil contemporáneo es posible identificar los diversos momentos más expresivos en que las poblaciones rurales más pobres, excluidas políticamente y subordinadas económicamente, ejercieron el derecho de movilizarse y organizarse, y de esta manera se adentraron en el espinoso y complejo campo de la política, en consonancia con lo que algunos autores definieron como «ciclos de protesta» (Tarrow, 1994). Usualmente se acepta que, en el caso de Brasil, son dos esos momentos. En el primero, que engloba parte de los años cincuenta y parte de la década siguiente y se clausura bruscamente con el golpe militar de 1964, se observó por vez primera la constitución y multiplicación de sindicatos de trabajadores rurales que movilizaban principalmente a los asalariados de las regiones comerciales

práctica de la investigación, al producir una amplia literatura puramente apologética que contribuyó poco al conocimiento acerca de los procesos sociales rurales.

del país, y también la aparición de ligas campesinas se centraron primordialmente en las demandas de pequeños productores, generalmente no propietarios, en particular en el nordeste brasileño. Además, como resultado de la liberalización política característica del populismo de aquella época —y de igual manera de las transformaciones en el medio rural—, otros actores, como el Estado, los partidos políticos e instituciones como la Iglesia católica, entraron vigorosamente en la escena política para disputarse la influencia y el control del proceso de organización de los «pobres del campo», además de proponer proyectos de cambio o de continuidad que, con el tiempo, se fueron polarizando crecientemente entre sí. La cuestión agraria acabó volviéndose un elemento detonador del golpe militar, que derrotó a las fuerzas políticas que proponían cambios estructurales en el país.

Otro momento expresivo del (re)surgimiento de los movimientos populares en el medio rural empezó a materializarse a fines de la década de los setenta, decenio que se caracterizó, por cierto, en primer lugar, por un inédito padrón de violencia rural y, segundo, por procesos de modernización y desarrollo capitalistas igualmente sin precedentes. A partir de aquellos años, el movimiento sindical de trabajadores ligado a la estructura oficial comenzó a mostrarse más dinámico, pero aun así, constituyó también otra rama competitiva, que años después se vincularía a la Central Única de los Trabajadores (CUT). Otros hechos, a principios de los años ochenta, acabarían por constituir el MST, que reintrodujo agresivamente el «lema» de la reforma agraria en el escenario político brasileño, además de otras formas de expresión organizacional más regionalizadas, como movimientos de mujeres rurales, de agricultores amenazados por el desarrollo de grandes obras públicas (como hidroeléctricas), de pequeños productores que reivindicaban el acceso a la política sectorial del Estado, entre otros. De la misma manera, y como resultado de las extraordinarias transformaciones del medio rural, un proceso acelerado de mercantilización de las actividades productivas acarrió una creciente diferenciación social, especialización de la producción e integración a los complejos agroindustriales conformados en ese periodo, lo que creó otros intereses y la necesidad de nuevas formas de representación, y estimuló diversas acciones colectivas de pequeños productores y trabajadores rurales.

Los determinantes que contribuyeron al surgimiento y desarrollo de estos nuevos movimientos sociales rurales, que se iniciaron en el sur de Brasil (y en Rio Grande do Sul, en particular), entre fines de la década de los setenta y los años posteriores, podrían formar una larga lista e incorporar desde aspectos relacionados con la historia de la participación política en ese estado hasta una «cultura de la organización» que las comunidades rurales tradicionalmente presentan o, aun, elementos reactivos como oposición al control ejercido por las élites locales. En esta sección se argumentará que los movimientos sociales en la región citada fueron principalmente el resultado de tres factores: la liberalización política del periodo en los años finales del ciclo militar, los cambios estructurales en la economía agraria de

los estados que modernizaron su agricultura (básicamente, el centro sur de Brasil), y sus impactos sociales, además de la acción de sectores progresistas de la Iglesia católica, inspirados por la exacerbación de los conflictos en el campo, los cuales crecieron exponencialmente en los años setenta y, posteriormente, ya en la década siguiente, enmarcados en el conjunto de elementos discursivos propuestos por la Teología de la Liberación, factores que, como era de esperarse, ejercieron una influencia divergente en el tiempo y en el espacio agrarios (Navarro, 1996). La materialización de los efectos combinados de estos tres factores, sobre todo en los estados del sur, se debe a las características de la agricultura en esta región. Son estados con una fuerte presencia de agricultura familiar y donde la Iglesia católica tiene presencia igualmente expresiva como mediadora y estructura física, probablemente sin comparación con otros estados brasileños (en vista de la histórica presencia de la Iglesia entre las comunidades rurales, donde reclutan a hijos de agricultores para la carrera eclesiástica y también cuentan con el apoyo material de las familias rurales para construir iglesias, casas parroquiales, seminarios e, incluso para su manutención a lo largo del tiempo). El proceso de modernización agrícola desde los años setenta integró a la mayor parte de esas familias rurales en los diferentes círculos económicos y financieros y, cuando se agotó, creó crecientes problemas de reproducción social y tornó inevitable una alianza entre el brazo rural de la Iglesia católica, representado por la Comisión Pastoral de la Tierra (con sus mediadores oriundos, precisamente, de la agricultura familiar), y las nacientes organizaciones populares del periodo, como las entidades sindicales y los movimientos sociales, como el MST. Sólo después de su consolidación en los estados del sur, durante la mayor parte de los años ochenta, fue posible, gradualmente, para estas nuevas organizaciones ampliar su radio de acción hacia los demás estados, lo que ocurrió en la segunda mitad de esa década y, en especial, a partir de los años noventa.

El MST: fases de su historia

Un análisis de la historia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, aunque restringida a regiones específicas de Brasil, representaría un desafío para la investigación, en vista de la vigorosa historia social que este Movimiento desarrolló a partir de los primeros años de la década pasada. Organizado nacionalmente desde mediados de los años ochenta, el MST ha tenido una capacidad sorprendente de reinventarse políticamente, según las variaciones coyunturales, y una creatividad sin paralelo con los demás movimientos. Ha logrado, de este modo, mantenerse a flote y evitar situaciones de fuertes indefiniciones, como la situación experimentada por el movimiento sindical u otros movimientos sociales rurales. Sus desafíos son también proporcionalmente mayores por tener como base social a los «más pobres entre los pobres del campo», normalmente grupos

sociales de ocupación esporádica, sin vivienda definida, sin acceso a la escolaridad y, casi siempre, fácilmente víctimas de manipulaciones políticas de todo orden: en el lenguaje del propio Movimiento, su base forma el «lumpesinato», los sectores sociales más frágiles del medio rural. Pero su desafío principal es aquel derivado de la misma razón de su existencia: tratar de presionar socialmente para alterar un padrón de propiedad de la tierra históricamente consolidado, en el cual el control de este recurso se mantiene en manos de una minoría de propietarios.

Entre los movimientos sociales surgidos en esos años de transición política, el MST posee la más fuerte identidad social y ha sido capaz de definir bien su base social y motivarla. Como resultado, es un movimiento con expresiva capacidad de movilización, y el impacto de sus acciones, en general, es de gran visibilidad pública. Al haberse convertido en un actor social reconocido y participativo en las luchas sociales, los resultados de sus actos han sido razonablemente significativos, pues ya logró forzar el nacimiento de miles de nuevos asentamientos en todo Brasil, aunque tal vez, las cifras no sean tan relevantes en términos numéricos, si se comparan con las de la población potencialmente demandante de tierra. Según los números oficiales, hasta fines de 1996 se habían asentado, en todo el país, 117 000 familias, pero tan sólo entre enero de 1997 y junio del año siguiente, otras 114 000 recibieron sus lotes de tierra y los programas de reforma agraria federales estimaban que sería posible ofrecer acceso a la tierra, entre 1999 y 2002, a otras 400 000 familias. Estos resultados, por lo menos en algunas subregiones, han contribuido a una mejor distribución agraria en varias regiones rurales del país, al crear oportunidades de ocupación y de acceso a la tierra para miles de familias, además de instaurar dinámicas económicas nuevas.

Probablemente, desde una perspectiva general, se puede segmentar la historia del Movimiento en tres momentos principales —corriendo el riesgo, claro, de una simplificación extrema, especialmente a partir de 1994-1995, cuando el Movimiento se expandió nacionalmente y las variaciones regionales se acentuaron significativamente—. El primer momento se refiere a los años formativos, desde el inicio de la década de los años ochenta, cuando los primeros grupos de los sin tierra se organizaron, sobre todo en Rio Grande do Sul y en Santa Catarina, empezando por su estructuración formal (en 1984, con el congreso de constitución, en la ciudad de Cascavel, en Paraná), la realización de su primer congreso nacional en Curitiba (enero de 1985) y hasta el simbólico año de 1986, en que concluyó esta primera fase, cuando el Movimiento era todavía esencialmente sureño. En este primer periodo, el MST, con fuerte presencia de mediadores religiosos ligados a los grupos progresistas de la Iglesia católica, e incluso como dirigentes del propio Movimiento, seleccionó acciones de presión con poco potencial de confrontación y optó frecuentemente por la negociación. Su interlocutor principal fueron los gobiernos estatales hasta 1985. En este último año, nacionalmente, a partir del primer gobierno civil que tomó posesión y clausuró el ciclo militar, se enfrentó al

gobierno federal. Se subrayaba en esta primera fase, en virtud de la participación de la Iglesia católica, la adhesión a acciones marcadas por la no violencia y, por parte del gobierno federal, la presencia clara de la reforma agraria en la agenda del Estado, en virtud de la militarización de estas disputas sociales. Eran, con todo, momentos de fácil reclutamiento de agricultores con poca tierra o sin ésta y el Movimiento se expandía ágilmente, con base en el significativo apoyo de los mediadores de la Comisión Pastoral de la Tierra y en las facilidades operacionales, ofrecidas por las estructuras de la Iglesia católica. No se formaron muchos asentamientos nuevos, sino que los pocos que se concretaron sirvieron como fuerte estímulo para la ampliación de la capacidad de movilización.

Una segunda etapa tuvo lugar entre 1986 y 1993. En este periodo, las acciones del Movimiento se volvieron, gradualmente, de confrontación (simbolizado, incluso, por el cambio del lema principal, de la «Tierra para quien la trabaja», pasó, en esta segunda fase, a «Ocupar, resistir, producir»), con varios episodios de enfrentamientos con policías o guardaespaldas de los grandes propietarios, debido a una nueva orientación interna que privilegiaba esta táctica de lucha —particularmente, la de partir del rechazo de los agricultores sin tierra para someterse a la dirección irrefutable adoptada hasta entonces por mediadores de la Iglesia católica—. A partir de esta fase, por lo tanto, se invierte la relación entre los mediadores religiosos que, si antes definían la orientación general del Movimiento, empezaron a ser bases auxiliares de la organización, lo que tan sólo se acentuó en los años siguientes, cuando permanecieron en la órbita del MST únicamente el conjunto de dirigentes más radicales del clero católico. En el sur, un episodio que ilustra bien este periodo fue, entre otros hechos innumerables, el «conflicto de la Praça da Matriz» [Plaza de la Catedral], ocurrido en el centro de la ciudad de Porto Alegre, en agosto de 1990, cuando los agricultores se enfrentaron a la policía militar estatal, en un incidente cuya violencia sorprendió fuertemente a la opinión pública de aquel estado.⁸ En resumen, estas tendencias reflejaban la apresurada adhesión a un ideario leninista, aunque simplificado, por parte del pequeño grupo de dirigentes principales, que sacrificó hasta la orientación del periódico de la organización, el cual empezó a ser un simple instrumento de «agitación y propaganda».

Como resultado, en este periodo se organizó también este movimiento social como un «movimiento de bases» (y no «de masas», como se pensó en el primer momento, estimulado por la presencia de la Iglesia), y poco a poco dejó de asumirse como «movimiento social», en el sentido sociológico de la expresión, pero se

⁸ El episodio causó intensa repercusión, pues los agricultores estuvieron implicados en un violento conflicto con la fuerza policial, en pleno centro de la ciudad de Porto Alegre. En cierto momento, un grupo de los sin tierra cercó a un soldado y uno de ellos lo degolló con su hoz; posteriormente, todos huyeron en medio de la confusión reinante. La policía militar del estado acabó deteniendo a falsos culpables y los inculcó sin pruebas. El MST, a su vez, transformó la prisión de los acusados en un problema diverso y consideró a sus militantes presos como «prisioneros políticos», cambio que produjo resultados públicos satisfactorios para la organización y desvió el debate hacia otro ángulo, en vez de enfocarlo al asesinato del militar.

moldeó propiamente como una organización centralizada.⁹ El MST dejó entonces el sur como región privilegiada de acción y transfirió su sede hacia São Paulo (donde aún permanece). En esos años, el gobierno federal empezaría a ser su interlocutor principal, hasta por lo menos el año de 1988, cuando se abandonaron las esperanzas de que ocurrieran amplios procesos de expropiación de tierras, pues el gobierno federal poco a poco puso término a sus intenciones en este rubro, que habían sido la promesa inicial del gobierno civil de la Alianza Democrática, que tomó posesión en 1985. Aun cuando, al final de esta fase, se volvió a enfrentar a los gobiernos estatales, éste sería el periodo de mayores resultados prácticos (tan sólo remplazado por los resultados del periodo iniciado en 1996), con el número de asentamientos que se ampliaba y un número significativo de agricultores reclutados para las acciones propuestas. Al final de esta segunda fase, el MST experimentó una crisis relativa, en vista de la presencia ostensiva de fuerzas contrarias, como la efímera Unión Democrática Ruralista (UDR), organización de grandes propietarios que optaba por métodos violentos de confrontación en sus acciones en el medio rural. Pero surgió también otro problema creciente, en parte todavía no resuelto, relacionado con el crecimiento rápido del número de asentamientos que empezaron a imponer una pregunta apremiante: ¿cómo organizar la producción en estas nuevas áreas para volver viables económicamente a los de los asentamientos y presentarlas como «áreas modelo»? La respuesta a esta pregunta, desarrollada por el Movimiento en diversos asentamientos en varios estados, representó uno de los más fascinantes ejercicios de ideologización que jamás se hayan producido, cuando el MST propuso (e impuso, hasta donde fue posible) la constitución de cooperativas enteramente colectivizadas: una notable evidencia del grado de mistificación ideológica alcanzado hasta entonces.¹⁰

⁹ En este punto se hicieron patentes amplias posibilidades de una interminable controversia, no sólo acerca del concepto «movimiento social», sino también de las diferencias entre una colectividad social que se organiza como movimiento y otra que se estructura como una organización inspirada en los manuales leninistas. Como en este artículo no se pretende discernir entre diferencias teóricas y conceptuales, únicamente se enfatiza que el autor de este artículo, en relación con el primer aspecto, se adhiere a una noción de movimiento social que no prescinde de un alto grado de participación de sus miembros y una estructura decisoria flexible y democrática. Si no fuera así, la referencia será, en todo caso, a una organización, tal como el MST, que optó por adherirse, a partir de 1986, y los riesgos mayores, entre tantos otros, son exactamente aquellos de todas las organizaciones formales no democráticas —y en especial, aquellas que se juzgan portadoras de una ilustración político-ideológica—. La referencia obligatoria, en este caso, es la obra clásica de Roberto Michels, cuya «ley de hierro de la oligarquización de las organizaciones» es conocida, una tesis que indica una *tendencia* poderosa en el desarrollo organizacional. Este autor advertía, ya en 1911: «La democracia es inconcebible sin organización [que es ...] el arma de los débiles en sus luchas contra los más fuertes [...] de medio, la organización pasa a ser un fin [...] quien dice organización, dice oligarquía» (cf. R. Michels, *Political Parties, passim*, citado en Jonathan Fox, 1990).

¹⁰ Algunos estudios sobre asentamientos ya han analizado este curioso intento de «ideologización de la producción». Consúltense, por ejemplo, Cazella (1992); Navarro (1995); Souza (1999); Pereira (2000) y Brenneisen (2000). Es importante destacar, sin embargo, el estudio de Neusa Zimmermann, realizado en el asentamiento de São Pedro (Rio Grande do Sul), probablemente el estudio pionero que analizó, con notable percepción sociológica, las tensiones generadas en las nuevas áreas, frente a las propuestas del Movimiento (Zimmermann, 1989).

El tercer momento engloba los años más recientes y se inició en 1994, cuando el MST se vio comprometido en un nuevo conjunto de hechos políticos de consideración, como la creciente desconfianza de los demás movimientos en relación con los sin tierra y su organización, en virtud de distintas maneras de comprender la vida social y las estrategias de transformación política de la sociedad, pero también de la nueva realidad de los asentamientos, ahora más numerosos y que exigían respuestas rápidas en cuanto a la organización de la producción y de los productores en estas áreas. El hecho sobresaliente, sin embargo, es que el MST, a partir de ese año, «conquistó» São Paulo, logró consolidarse en ese estado y descubrió un campo privilegiado de actuación: el Pontal do Paranapanema, enorme área agraria ideal para tácticas de lucha del Movimiento, pues es una región adquirida por devolución, donde los propietarios de tierras, en su mayoría, no tienen ya el derecho de recurrir a actos expropiatorios (decididos en última instancia). Por actuar con esta desenvoltura en el estado más influyente, con una fuerte repercusión en los medios de comunicación, el Movimiento empezó a tener presencia aún más marcada en asuntos relativos a la reforma agraria y se convirtió en interlocutor obligatorio para este tema y los asentamientos.¹¹

La otra razón de la creciente fuerza política y capacidad de presión del MST se derivó de algunos hechos trágicos que en años recientes han marcado algunas ocupaciones de tierra, cuya circunstancia ciertamente no sorprende en su totalidad, por la postura de confrontación adoptada por el Movimiento como su principal arma de lucha y por la costumbre de las fuerzas militares de reprimir violentamente dichas ocupaciones. Dos de éstas fueron especialmente decisivas para impulsar las presiones sociales a favor de la reforma agraria en los últimos años: los episodios de Corumbiara, en Rondônia (agosto de 1995) y la masacre de Eldorado dos Carajás, al sur del estado de Pará, ocurrida en abril del año siguiente.¹² En ambos casos, varios trabajadores rurales fueron asesinados debido a la brutal acción de las fuerzas policiales. Estos acontecimientos, reflejaron, en cierta medida, una fuerte inflexión pública en favor de la organización de los sin tierra, especialmente porque el segundo hecho produjo una intensa repercusión, al haber

¹¹ Las evidencias de la importancia de ubicarse en São Paulo se materializan en la extensiva presencia, desde entonces, del Movimiento en las páginas de periódicos y revistas, además de los habituales reportajes en otros medios. Hay otra razón crucial para explicar el resurgimiento de la fuerza del MST en esos años: probablemente, en la historia de Brasil, nunca los propietarios de tierra habían estado tan debilitados políticamente como en la actualidad, siendo notorias las señales de esta fragilidad, no sólo económicamente, sino también desde el punto de vista organizacional.

¹² El otro gran acontecimiento reciente, que produjo una enorme repercusión y claramente «acorraló» al gobierno federal en esa ocasión, fue la marcha a Brasília, realizada en abril de 1997, la cual culminó con una reunión pública de grandes proporciones, que aglutinó a alrededor de 100 000 personas en esa ciudad. Un minucioso estudio sobre la marcha se encuentra en Chaves (2000). Otros actos de presión realizados en los años siguientes, como la invasión de edificios públicos en diversas capitales o, aún más recientemente (enero de 2001), los ataques a estaciones agrícolas experimentales que investigan organismos genéticamente modificados (OGM) también produjeron magníficos espacios en los medios de comunicación, pero es dudoso que hayan producido la adhesión de la población, como en los otros casos citados.

sido filmado el enfrentamiento y, posteriormente, reproducido de manera repetida en diferentes momentos. Fruto de su fuerte influencia en aquella coyuntura, sin sorpresa, el III Congreso Nacional del MST modificó nuevamente su máxima política, esta vez hacia la «Reforma agraria: una lucha de todos».

Existe también un factor que casi siempre ha sido ignorado, aunque de relativa importancia interna en las decisiones de la organización y sus características actuales. En este periodo más reciente, en función de las actividades de formación desempeñadas en las escuelas que el MST instaló, donde jóvenes de los asentamientos reciben formación política y algunos cursos técnicos para oficios o profesiones, poco a poco se constituyó una «segunda generación de militantes», esta vez formada por jóvenes oriundos de todos los estados brasileños, que reflejan realidades agrarias muy diversas y, en relación con los estados ubicados en la mitad norte del país (las regiones nordeste, norte y centro oeste), militantes mucho más abiertos a interpretaciones aún más radicalizadas de la realidad, que muestran sus propias experiencias de vida. El resultado ha sido la lenta aparición de un nuevo conjunto de líderes que defienden y realizan acciones colectivas más osadas y contestatarias del orden social. La imagen de un MST «provocador» que se ha constituido gradualmente, en especial a partir de 1998, probablemente repercute más en la acción regional de estos nuevos liderazgos y menos en la percepción política dominante entre los dirigentes (mayoritariamente sureños) de la «primera generación», quienes, aunque todavía mandan en la organización, de manera creciente tienen que enfrentarse con la radicalidad de los jóvenes dirigentes recientemente incorporados a la estructura decisoria. Empieza a sorprender, en este sentido, el contraste discursivo entre los jóvenes dirigentes del Movimiento, cuando se comparan entre los diferentes estados del sur y, por ejemplo, del nordeste del país.

En los años más recientes (entre 1994-1995 y nuestros días), las acciones del Movimiento se expandieron en algunas regiones agrarias y volvieron a otras (entre éstas, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, cuna del MST), aunque no es el objetivo de este artículo discutir las razones que explican tales variaciones. Probablemente, es más relevante registrar lo que se presenta hoy para el Movimiento como sus dos más grandes desafíos. Primero, el problema de la democracia, pues se aproxima el momento en que la organización podrá confrontarse con disensiones y conflictos crecientes, no sólo internamente sino también en las relaciones con otros movimientos sociales y organizaciones del llamado «campo popular», en este último caso en virtud de la profundización de las diferencias políticas e ideológicas. Por estructurarse como una organización esencialmente no democrática, son también amplias las señales de conflictos internos, en que el *ethos* militarista y la devoción casi religiosa de algunos de sus militantes intermedios, comandados por un pequeño conjunto de líderes nacionales principales, tal vez no sea suficiente para asegurar el control de los campamentos y, sobre todo, de los

asentamientos.¹³ Evidentemente, lo que más se destaca en este aspecto, es el instrumentalismo de una retórica ideológicamente antisistémica, meramente construida para fines internos (en el sentido de mantenimiento de la cohesión del conjunto de sus principales militantes), y que logró desarrollar una identidad política monolítica y la seguridad de sus objetivos políticos y formas de acción.¹⁴ Se trata de un aparente lenguaje oscuro, tal vez incomprensible para aquellos que se informan sobre el MST tan sólo de manera periférica (o mediante los superficiales e impresionistas artículos periodísticos), lo que produce curiosos comportamientos de algunos sectores sociales, diferentes entre sí, pero igualmente equivocados. Por un lado, los sectores conservadores reaccionan a la retórica izquierdista y a los símbolos que, así creen, probablemente el «muro ya habría enterrado», y claman por la imposición de los preceptos legales que evitarían la acción de los sin tierra cuando ocupan propiedades privadas. Pero otros sectores sociales y agrupamientos partidarios socialistas de extracción urbana, también desinformados acerca del mundo de la política rural, y motivados únicamente por los manuales de literatura «clásica», pretenden percibir en las acciones de ocupación de tierra, y en el crecimiento del Movimiento, potenciales políticos de transformación que, de hecho, no existen en el campo de expectativas de los trabajadores sin tierra: son cambios relevantes, es decir, en el sentido de la democratización de la «sociedad rural», sin contener, con todo, motivaciones políticas destinadas a promover rupturas.

El objetivo de la formación política de los jóvenes agricultores sin tierra en las escuelas del Movimiento se sitúa, como se dijo, en un campo completamente distinto. En resumen, se pretende tan sólo producir la adhesión a una visión «total» y cerrada de la política que, de hecho, ni siquiera procura ubicarse concretamente en relación con el desarrollo político brasileño reciente, pues se vuelve totalmente

¹³ Son innumerables las evidencias de la limitada base educacional de las escuelas de formación política del Movimiento. Claramente, bajo varios mecanismos doctrinarios utilizados, el énfasis no estaba en la formación política universalista de los jóvenes sin tierra participantes sino, por el contrario, en reforzar la «mística» del MST, creando una generación de militantes ciegamente voluntaristas. De esta manera, no es de sorprender que los estratos intermedios del Movimiento, en su acción política, actúen de forma rígidamente dogmática y uniforme, sujetos a un conjunto mínimo de preceptos políticos, del cual no pueden echar mano, pues se debilitarían en la interlocución y en las disputas políticas por la falta de capacidad política más incluyente. También sin sorpresa, resultante de una formación política tan limitada, la adversidad desaparece en los esquemas de interpretación utilizados por las bases de la organización, pues esta complejidad sería incompatible con la extremada simplicidad de la formación política de los militantes sin tierra.

¹⁴ Esta razón instrumental se vuelve más evidente cuando se verifica que, de hecho, la historia del MST se organiza fuera del campo institucional (por tanto, antisistémica) tan sólo en relación con las ocupaciones de la tierra —acciones que, en muchos estados (como en el sur), son poco impactantes, pues ya son vistas como simples instrumentos de presión que garantizan el acceso a otras áreas de tierra—. En cuanto a lo restante de su agenda referente a demandas y acciones, el Movimiento, por el contrario, tal vez hasta sea el más integrado (al sistema dominante) de todos los movimientos sociales y sus organizaciones. Las evidencias de este argumento son tantas que, por ser probablemente notorias, no parece necesario relatarlas, baste tal vez destacar que en los años más recientes la sustentación del MST se da, mayoritariamente, por el acceso a las políticas públicas que garantizan el apoyo financiero a la organización. Nada más contradictorio, por tanto, que su exclusión de legitimidad discursiva acerca del Estado (Martins, 2000).

«hacia adentro», ya que está destinada esencialmente a mantener la disciplina, la motivación y la cohesión entre sus militantes intermediarios. Algunas veces la mistificación ideológica alcanza lo patético en el intento de reforzar la perspectiva polarizada del mundo y el maniqueísmo de las interpretaciones políticas. El periódico del Movimiento, por ejemplo, es tal vez el mejor espejo de los cambios realizados. Hasta 1996 era una publicación plural, pero en ese año sufrió la intervención de la dirección nacional y fue transformada en «instrumento de agitación de masas», al mejor estilo del recetario leninista. A sus periodistas, por desconfianza, se les apartó y fueron sustituidos por «reporteros populares», reorientación que empezó a reflejarse en sus páginas. Como ilustración de la nueva opción ideológica, entre decenas de posibilidades de distorsión deliberada de los hechos, está la manera como el periódico, en su sección de «hechos diversos», trató la prisión del boxeador estadounidense Myke Tyson, en 1991, acusado (y posteriormente condenado, incluso confeso) de estupro. En la perspectiva «política» del diario, este hecho simplemente no sucedió, y la prisión de Tyson tuvo lugar en vista de la histórica discriminación racial en ese país, única razón para ser preso y condenado, según lo que el periódico publicó, probablemente para sorpresa de sus lectores más informados. En este caso, como en la mayor parte de la agenda política organizada por la dirección del Movimiento, fruto también de un discurso inspirado por los sectores ligados a la Comisión Pastoral de la Tierra que le sirve como apoyo religioso de legitimación, el recurso es la polarización extremada entre el «bien» y el «mal». Curiosamente, incluso en medio de la creciente complejidad social y cultural del país —así como de la ampliación del marco político e ideológico, una vez vencido el ciclo militar del pasado—, los instrumentos de movilización del MST jamás lograron sobrepasar los estrechos límites de una perspectiva marcada por polos antípodas que oponen lo virtuoso y lo maléfico, distantes de cualquier correspondencia real. Sujeta a esta armadura de visible simplificación ideológica, con fines meramente instrumentales, no es de sorprender que la organización rara vez haya conseguido establecer alianzas o agendas comunes siquiera con las demás organizaciones populares del campo brasileño.

Esta formación política impide completamente la comprensión de sus militantes acerca de la realidad social y de los problemas de la política *at large* y, por ser superficial e incongruente, ha producido sorprendentes y habituales casos de rompimiento y conflicto, particularmente cuando la identidad social original, nacida en el mundo de la «pequeña producción» y rota en los periodos de campamento y de las ocupaciones de tierra, se concreta nuevamente con la llegada al asentamiento y la reconstitución de la vida comunitaria del pasado. En tales situaciones y entre tantos colonos, son comunes las ansias de retroceder en relación con su organización. Entretanto, como los grupos disidentes no tienen el mando sobre los medios de su sustentación —como aquellos que el MST creó a lo largo del tiempo—, las familias rurales descontentas en los asentamientos son apartadas

rápida de la convivencia con los demás colonos y, en algunos casos, se les retira incluso del lugar. Por tal razón, al no poder apoyarse en el «ciclo virtuoso» que mantiene al Movimiento, estas disidencias raramente constituirán grupos organizados con poder y visibilidad pública. Cuando esto ocurrió, representaron simples apéndices de partidos políticos de izquierda o, en tal caso, sobrevivieron por corto tiempo, sin mayores oportunidades de supervivencia. En Pernambuco, por ejemplo, en los años de 1996 y 1997, había por lo menos seis «movimientos sin tierra», presentes en aquel estado, ninguno representaba amenaza alguna para el MST ni podía sobrevivir por mayor tiempo.

El otro desafío que ha surgido con fuerza creciente para el Movimiento es exactamente la gestión de los nuevos asentamientos que se multiplican por el país. No se pretende analizar aquí este tema en su especificidad, pues se aparta del objetivo del presente texto. Tan sólo se registra que las propuestas productivas defendidas hasta ahora no han concretado situaciones innovadoras en relación con las posibilidades usualmente enfrentadas por agricultores familiares empobrecidos. En este sentido, los asentamientos, como regla general, no deberán ser más que de vida temporal para las familias que perdieron su tierra y vuelven a tener acceso a una parcela o a un asentamiento. Optar, como ha sido el caso más usual en los asentamientos, por formatos tecnológicos típicos o de «agricultura de supervivencia» o, como en muchos asentamientos del sur del país, por la «agricultura moderna» —esta última, al exigir insumos agroindustriales y de estructuras productivas, eleva los niveles de endeudamiento de los colonos—, no ofrece una viabilidad económica y productiva a los nuevos parcelarios, particularmente a la luz de los condicionantes macroeconómicos del periodo reciente.

Probablemente se está iniciando una cuarta fase en la historia del Movimiento, quizá definida por su apertura a partir de 1998, cuando las dificultades para las acciones de la organización se ampliaron notablemente. Aunque la retórica justificadora —debido a la incertidumbre de estos años— venga señalando, en particular, los resultados de «acciones criminosas» gubernamentales, argumento que parece distante de la realidad (un simbólico autoengaño compartido por tantos de sus aliados), el hecho es que el creciente aislamiento del MST, en relación con las demás organizaciones populares del campo, e incluso hasta en relación con algunas entidades antes aliadas, típicamente urbanas, refleja, eso sí, el conjunto de nuevas opciones políticas de la organización.

Irónicamente, la historia reciente del MST repite, desde diversos ángulos, la historia de las ligas campesinas en sus años anteriores a la ruptura institucional de 1964, y comprueba de esta manera la naturaleza cíclica de los procesos sociales. Desde la exacerbación de la retórica política hasta las formas extremadas de lucha social, pasando por el ataque al Estado, e incluso hasta por la pueril adopción de «programas militares», las lecciones de la historia pasada parecen haber sido olvidadas por los dirigentes de la organización. En los últimos tres años, el Movimiento

ha optado por un proceso de radicalización política cuya *rationale* parece contraria a cualquier plan interpretativo. Al preferir invadir, por ejemplo, edificios públicos, ocupar algunas propiedades notoriamente productivas (que no pueden ser expropiadas, según la ley), invadir navíos para denunciar la carga de «granos transgénicos», afrontar directamente a las demás organizaciones populares del campo, realizar actos de presión política sobre temas recientes y aún muy controvertidos en la esfera de los debates públicos (como los tratados de libre comercio ahora propuestos o el tema de los organismos genéticamente modificados), además de repetir exhaustivamente un discurso contra el Estado, el Movimiento se ha alejado de antiguas áreas de adhesión política y ha estrechado su campo de acción. Tal vez la señal más significativa de esta nueva fase, si se concreta, sea exactamente la reserva de la cúpula de la Iglesia católica para aliarse, casi incondicionalmente (como en el pasado), con la organización de los sin tierra, crecientemente desconfiada por sus formas de acción y opciones políticas, aunque la agencia de mediación de la Institución, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), venga actuando desde hace años como línea auxiliar del Movimiento (el más riguroso análisis sobre la acción y la historia de la CPT se encuentra en Martins, 2000: 11-71 y 133-153).¹⁵ El tiempo, no obstante, es el que indicará si tales rupturas se concretarán más ampliamente o si, en caso contrario, el MST se reorganizará políticamente e interpretará mejor sus alternativas y posibilidades a la luz de los cambios operados en Brasil durante el reciente periodo.

2. EL MST Y LOS DILEMAS DE LA LUCHA SOCIAL EN EL CAMPO

La experiencia social y política del Movimiento, particularmente en los años más recientes (desde mediados de la década de los noventa hasta nuestros días), ha sido muy significativa, por un lado, por sus virtualidades y la extraordinaria capacidad de mantenerse activo como actor social fuertemente presente en la vida política, pero también, en contrapunto, es una historia organizacional ejemplar, cuando revela su difícil situación actual.

En este artículo, a la luz de los resultados más expresivos alcanzados por el MST, sería necesario un espacio considerable para enlistar su enorme conjunto de

¹⁵ Para no citar la campaña nacional por la delimitación del tamaño de las propiedades rurales (¿en un régimen capitalista?) o, aún más comprensible, la posición de la organización en relación con el programa intitulado «Banco de la Tierra», que pretende ofrecer crédito para la adquisición de tierra a las familias que no la poseen, con recursos del Banco Mundial. Contrariamente a lo esperado, en vista de su fuerza política en el periodo (el proyecto fue implantado en 1997), el MST se rehusó siquiera a negociar con el gobierno federal los límites de este programa (el cual, dependiendo de las condiciones de pago, es atractivo para las familias rurales más jóvenes en la forma de crédito agrario). Prefirió, por el contrario, el mecanismo inocuo de la «denuncia» del programa y la reivindicación, ante el Banco Mundial, de la instalación del *Inspection Panel* que, sin sorpresa, no produjo ningún efecto práctico.

realizaciones a lo largo de los años y en las diversas regiones rurales brasileñas. Son varios los casos, por ejemplo, de regiones que antes estaban relativamente «dormidas» desde el punto de vista económico, con escasísimas actividades productivas y que se volvieron dinámicas con la presencia de asentamientos formados en el área e, igualmente, con la llegada de la organización de los sin tierra y sus líderes, es decir, por un nuevo conjunto de «agricultores vueltos dirigentes municipales», quienes empezaron a presionar más intensamente a las instituciones locales, interfiriendo con mayor insistencia en la implantación de políticas gubernamentales y, en especial, al comenzar a ejercer mayor vigilancia sobre las prácticas políticas. Esas pequeñas regiones subnacionales revitalizadas son innumerables y se extienden por todo Brasil; responden al origen de un conjunto de familias rurales más participativas y, como consecuencia, contribuyen a la democratización de sus respectivos municipios. Como resultado, la multiplicación de los asentamientos en prácticamente todos los estados ha provocado, especialmente, la renovación política de esos rincones rurales al democratizarlos lentamente y favorecer nuevas prácticas sociales, ejercidas antes de manera especial por los grandes propietarios de tierras. Los propios asentamientos también se derivan, en gran parte, de las acciones de presión del Movimiento y menos de previas decisiones gubernamentales. Aunque la reforma agraria y la «necesidad de cambiar la estructura de propiedad de la tierra» estuvieran incluidas en la agenda política brasileña desde hace largo tiempo, y algunos gobiernos, en la historia del país, adoptaran posiciones favorables para la implantación de programas de reforma agraria, la multiplicación de los asentamientos en un número creciente y sin precedentes, en los últimos cinco años, se relaciona directamente con las presiones realizadas por el MST (y, en algunos estados, por el movimiento sindical de trabajadores rurales), sin dejar de reconocer la coyuntura favorable a la implantación de esta política frente a la fragilidad de los grandes propietarios de tierras.¹⁶ Las ocupaciones de tierra, en efecto, han sido decisivas para impulsar el programa de reforma agraria. Teniendo como referencia 100 ocupaciones en todo el país en los primeros años de la década de los 90, crecieron exponencialmente a partir de 1996, cuando alcanzaron 398 ocupaciones y llegaron a casi 600 dos años después, con una pequeña caída en los años más recientes. Sintomáticamente, es el periodo en que la administración federal avanzó más en su programa de conformación de nuevos asentamientos.

En este sentido, la eficacia política y organizativa emprendida por el Movimiento tal vez pudiera estar localizada en tres conjuntos de resultados principales.

¹⁶ Contrariamente al sentido común predominante, entre 1995 y 2001, por ejemplo, la administración federal realizó un programa de reforma agraria que expropió tierras y asentó a familias rurales en un número que rebasa prácticamente *todo* lo histórico anterior, sumadas todas las iniciativas antes realizadas por otros gobiernos. Si los números generales son extremadamente significativos en esta comparación, póngase atención a que ni así se alteró de manera perceptible el índice de Gini referente a la distribución de tierras en el país, que permanece como uno de los más altos del mundo.

Primeramente, la permanencia del tema «reforma agraria» en el escenario de debate político de la sociedad brasileña en ese periodo, demanda que probablemente estaría debilitada, e incluso eliminada, sin la organización de los sin tierra para insistir en la necesidad de su implantación. En segundo lugar, la formación de un número considerable de asentamientos garantizó el acceso a la tierra a un número igualmente significativo de familias rurales pobres (ya indicado), las cuales, sin esta alternativa, habrían quedado a merced de la opción de migrar hacia las ciudades, en una época de bajo dinamismo de la economía y de reducción de las oportunidades de trabajo.¹⁷

Finalmente, el tercer aspecto que merece destacarse como mérito notable de la organización en muchas regiones se refiere exactamente a la citada democratización de la vida política de los pequeños municipios, al constituirse nuevas formas de representación y de organización que el Movimiento estimula en cuanto se establecen los asentamientos. Asociado a este hecho, hay un ángulo de extraordinario efecto en algunas regiones brasileñas, fruto de las osadas acciones del MST, y que se refiere a un cambio en sentido contrario de las relaciones entre grandes propietarios de tierra y los «pobres del campo». Históricamente, como es sabido, esas relaciones reflejaban la categórica dominación política de los hacendados en las diversas regiones agrarias, y era evidente bajo diferentes formas de subordinación económica que soportaron las clases subalternas del campo brasileño. En algunas regiones, con todo, en vista de la multiplicación del arma de presión del Movimiento (las ocupaciones de tierra), estas relaciones se han visto alteradas, al crear sentimientos de creciente temor en los grandes propietarios de tierra, que atestiguan, a menudo, la incapacidad del Estado para contraponerse, como en el pasado, a esta forma de presión organizada por los sin tierra. En algunas regiones, como en el sur, este temor se expresa a veces visiblemente —si se analizan las reacciones de los propietarios—, cuando las ocupaciones de tierra aumentan en número y en zonas específicas. Este cambio contrario, en relación con el pasado de dominación política de los más grandes propietarios, es, tal vez, uno de los resultados más notables de la historia del Movimiento, que amplía así las oportunidades de crecimiento de las áreas disponibles de tierra para programas de reforma agraria, facilitadas ahora por la desesperanza entre los grandes propietarios, gradualmente impotentes para contraponerse a las ocupaciones.¹⁸

¹⁷ Y, en los asentamientos, en muchas regiones, se materializan acciones de gran mérito social, como las iniciativas educacionales, que han dado acceso a la escolaridad a miles de niños. Para una información general sobre la acción del Sector de Educación del MST, consúltese Gohn (1999).

¹⁸ Este cambio en sentido contrario puede estar simbolizado por la manifestación del periódico (de orientación conservadora) *Zero Hora*, el principal de Rio Grande do Sul, que el 14 de agosto de 2000, publicaba en su titular principal: «Hacendados definen plan de resistencia a amenazas de sin tierra». 10 años antes, un titular semejante trocaría ciertamente la posición, en la frase, de las palabras «hacendados» y «sin tierra». Una sintomática indicación del clima de relativo desaliento que se generó entre los grandes propietarios, en algunas regiones, incapaces, cada vez más, de usar el aparato estatal para mantener intocable su patrimonio agrario.

Una vez revisada genéricamente, la muy exitosa agenda de la acción del MST, es oportuno indicar lo que la literatura rara vez señala: una serie de dificultades y desencuentros generados por las formas de acción y opciones políticas seleccionadas por el Movimiento, que someten su historia reciente a una opinión crecientemente crítica. De entre estas situaciones difíciles, se citan algunas sucintamente discutidas:

a) La formación de un «círculo virtuoso» que apoya la acción política de la organización y permite la realización de un sinnúmero de acciones públicas que a todos sorprende está sustentada en formas de control social en «sus» asentamientos, donde las familias rurales son sometidas a la prepotencia de los dirigentes intermedios, con lo que repiten el padrón conservador de jerarquización que siempre fue la marca distintiva de las relaciones sociales rurales en el Brasil (se han multiplicado, insistimos, los trabajos de investigación demostrativos de tales prácticas en esas áreas). Este control social se concreta porque estos dirigentes fungen como mediadores de la política gubernamental destinada a los asentamientos y, como resultado, el acceso a los fondos públicos ha sido el principal mecanismo de control social de los colonos. Al mantenerse este padrón, se controla de igual manera al público que será reclutado, no sólo para formar a nuevos militantes de la organización (los jóvenes hijos de los colonos, sometidos a percepciones doctrinarias acerca de la vida social), sino también a aquellos que serán convocados para engrosar las acciones públicas y ocupar propiedades rurales, realizar marchas, invadir edificios públicos, y otras iniciativas que forman el enorme repertorio de luchas desarrollado en el periodo. La agilidad del MST en estos años se asienta, por lo tanto, en dos pilares centrales: los recursos humanos reclutados en los asentamientos, por un lado (tanto para formar bases como para ofrecer la marca de la presencia cuantitativa de sus acciones externas), como, por otro, el control que el Movimiento ejerce, como mediador, sobre la aplicación de fondos públicos dirigidos a los asentamientos, lo que permite la selección de bases más leales a sus objetivos estratégicos y, en contrapartida, ejerce presiones virtualmente irresistibles, incluso sobre los eventuales agricultores más inconformes, con la tentativa de hegemonía del MST en el asentamiento. El acceso a tales fondos públicos cuenta no solamente con la gama de nuevas políticas constituidas en el periodo, en diversos ámbitos, sino también con el amplio apoyo de sectores sociales urbanos más radicalizados, muchos funcionarios gubernamentales que han facilitado la realización de proyectos y el correspondiente acceso a esos fondos. Aunque ciertamente es legítimo en sí mismo que el MST reivindique (y consiga) acceso a las políticas públicas instituidas en años recientes, no deja de ser curioso que los actores sociales urbanos con los cuales la organización se relaciona desconozcan, casi totalmente, a su interlocutor que representa a los sin tierra, excepto en el plano más visible, el de las acciones externas realizadas periódicamente, que han tenido el

poder de despertar lealtades, muchas veces incondicionales, entre segmentos urbanos. Aquí se repite, por analogía, la inesperada disonancia entre el «MST real» y el «MST virtual», que Hellman cuestiona en relación con el caso del movimiento zapatista en México. Sorprendida por el enorme apoyo internacional y solidaridad en relación con los zapatistas, la autora justifica este interés, inicialmente, por ser un «caso extremo», el cual aparece como una confrontación directa entre los más pobres y los más poderosos, lo que oscurece los problemas analíticos que están detrás de la visibilidad pública de los zapatistas. Así, en relación con el caso mexicano, para la historia de los sin tierra en Brasil sería posible repetir lo que dice la autora cuando enfatiza que «Chiapas virtual establece una seductora atracción para las personas desencantadas y desmoralizadas de izquierda, la cual es fundamentalmente diferente del llamado a las luchas en el rumbo o dirección del Chiapas real» (Hellman, 2000: 1);¹⁹

b) Como corolario, la práctica política del Movimiento, a lo largo de los años, al obedecer a la ortodoxa preferencia leninista de su dirección principal, ha sido esencialmente no democrática, como ya antes se ha enfatizado. Ninguno de sus dirigentes, por ejemplo, se somete a cualquier responsabilidad interna (o externa, dígame de paso), al no existir los canales de rendición de cuentas y de responsabilización.²⁰ Los dirigentes no son electos en ningún acto público, sino escogidos cuidadosamente por las bases más altas, con el criterio de la lealtad y sumisión a las directrices principales, las cuales son obedecidas rígidamente, bajo pena de perder la posición en la estructura del organismo.²¹ Los ejemplos que ilustran esta

¹⁹ Observaciones de arrebatos pierden completamente el sentido de la realidad. Sobre Chiapas, por ejemplo, Michael Löwy observó que «es un movimiento cargado de magia, mitos, utopías, poesía, romanticismo, entusiasmo y esperanzas salvajes, de "misticismo" [...] y de fe» («Sources and resources of Zapatism», en *Monthly Review*, 49(10), marzo de 1998, 1-2) y, en relación con el MST, fue aún más categórico: «también se caracteriza por una mezcla sorprendente de religiosidad popular, revuelta campesina "arcaica" y organización moderna, en la lucha radical por la reforma agraria y, a largo plazo, por una "sociedad sin clases". Este movimiento social [...] se ha vuelto hoy el más importante de Brasil, la principal fuerza de oposición a la política de modernización neoliberal emprendida por sucesivos gobiernos brasileños» («La mística de la revolución», *Folha de S. Paulo*, 1 de abril de 2001, Caderno Mais!, 6). Si se hubiera adentrado por lo menos una vez en los rincones rurales brasileños (o mexicanos), o conocido textos referenciales de la literatura internacional (Moore, 1967, por ejemplo), Löwy concordaría ciertamente con Martins cuando éste subraya que «falta demostrar, con evidencias, que nuestro campesinado tiene una virtualidad histórica similar a la que fue consagrada al proletariado en la teoría [marxista] de las transformaciones sociales», resaltando que la supervivencia campesina dependerá de que «se realicen en aquello que los preserva y transforma al mismo tiempo: emprendedores comunitarios y condóminos orientados por los valores tradicionales y conservadores de la tierra, del trabajo, de la familia, de la comunidad y de la religión» (Martins, 2001: 48-49).

²⁰ Esta observación no debe confundirse, claro, con la dramática aflicción personal cobrada a los trabajadores rurales y pequeños productores en la historia agraria brasileña, bajo las diversas formas de violencia instituida por los grandes propietarios de la tierra, que han dado como resultado centenares de víctimas a lo largo de los tiempos. Se destaca aquí, como es obvio, el «juego democrático», que no admitiría la intolerancia que les quita lo legítimo a los diversos interlocutores y, mucho menos, los elimina. Consúltense, por tanto, los boletines anuales de la Comisión Pastoral de la Tierra, *Conflitos no Campo do Brasil*, publicados regularmente desde los años ochenta, donde las sombrías estadísticas de violencia rural son organizadas. Véase también a Barp (1997).

²¹ Vendría a propósito insistir, en esta parte, que tales posiciones representan, en todos los casos, situaciones de movilidad social que, relativamente, son irresistibles para la amplia mayoría de los jóvenes rurales reclutados

curiosa oposición entre el discurso público de los dirigentes, que reivindican la democratización de la sociedad y de sus estructuras políticas, y su autoritaria jerarquía interna, que no admite la más mínima disensión, son innumerables. Bastaría en este punto citar, tal vez, dos casos recientes en campos distintos. Primeramente, en sus decisiones para combatir el proceso de privatizaciones a lo largo de los años noventa, en 1999 un grupo de militantes invadió una caseta de cobro en una carretera privatizada en el estado de São Paulo y destruyó las instalaciones. Como investigaciones de opinión demuestran que la mayoría de los usuarios que utilizan esta carretera no ha sido contraria a su privatización (cuando mucho valoran negativamente los precios que se cobran), ¿cómo no responsabilizar a los dirigentes del Movimiento por un acto político que no encuentra, por lo menos en este caso, legitimación alguna, por no recibir apoyo político y social a la acción realizada? Sorprendentemente, repitiendo situaciones similares, el Movimiento y sus aliados intentan transformar la prisión de algunos de los responsables en un hecho exclusivamente político, al realizar una intensa actividad de propaganda que transforma a los responsables, actualmente sujetos a investigación criminal, en «prisioneros políticos». Otro caso, en un campo distinto, se refiere a la reciente decisión de las autoridades federales responsables del área ambiental de penalizar al MST por la deforestación indiscriminada ocurrida en algunas áreas de asentamiento en el norte del país y de imponerle una pesada multa financiera (que, dígame de paso, tan sólo corresponde a lo que prevén las leyes ambientales brasileñas, consideradas mundialmente como de las más progresistas). Y, otro caso más, la reciente revelación de haber ocurrido en Paraná la más grande deforestación continua de la Mata Atlántica en los últimos 15 años, que coincidió exactamente con la conformación de un asentamiento rural en la misma área (Cf. *O Estado de S. Paulo*, 27 de abril de 2001). ¿Cómo irán, en todo caso, a fincar el acto de responsabilidad del Movimiento, si sus dirigentes formales ni siquiera son reconocidos, pues la práctica de la organización es mantener estructuras no legalizadas, escoger dirigentes subalternos y desconocidos públicamente para asumir formalmente la fachada jurídica, bajo otros nombres, de la organización (que es la forma legal bajo la cual le es posible al MST recibir fondos públicos, firmar convenios y ejercer otros actos jurídicamente regulares)? Esencialmente, este tópico no se refiere, como parecería a primera vista, a los métodos de acción política de la organización, que incluso siendo ilegales, son muchas veces legítimos. Se remite, eso sí, al

por el MST. Ubicados social y económicamente entre los más pobres de la estructura social brasileña, no es necesario un análisis más profundo para imaginar el impacto que representa, para las expectativas de estos jóvenes, la posibilidad de salir de su comunidad para ocupar «posiciones de poder», realizar cursos, viajar, en fin, beneficiarse de la presencia pública del MST, inicialmente en la propia región, pero con la posibilidad de extenderse nacionalmente. El resultado inevitable ha sido la formación de un expresivo estrato de militantes intermedios quienes mantienen una férrea disciplina y obediencia a los dirigentes principales, amenazados con ser desplazados en este proceso social ascendente si titubean en algún momento (o aun, lo que ha sido inaceptable en la historia del Movimiento, si osan oponerse a las decisiones de la «alta dirección»).

reto crucial del juego democrático, cualquiera que sea, la posibilidad de irrestricta materialización de formas de representación que, autónomamente, estructuren sus intereses y los disputen abiertamente en el campo de las luchas políticas sin dejar de asumir sus responsabilidades cuando emprenden acciones públicas más osadas, controvertidas y de confrontación. En este segundo caso, por ejemplo, con una rápida problematización a la vista, ¿cómo reconocer los derechos de las comunidades indígenas, casi siempre presentes en áreas adyacentes a los asentamientos, cuando utilizan sus recursos naturales como forma de supervivencia, como es común en el norte del país? Nótese también que la práctica no democrática del Movimiento, al proscribir cualquier debate y compromiso con otros grupos sociales del medio rural, aunque notoria, ha sido minimizada por casi todos los sectores ubicados a la izquierda del espectro político, como si éste fuera un tema menor e irrelevante.²²

Un argumento en contra de esta proposición sobre el aspecto refractario a las prácticas democráticas del MST nos remitiría a otra pregunta que se presenta comúnmente: ¿podría ser diferente, si consideramos el ordenamiento jurídico existente, el papel represor del Estado, la acción intimidatoria de las organizaciones patronales e incluso, la depreciación cultural de lo «rural» (y sus habitantes), tan presente en el imaginario social brasileño? ¿Cómo movilizar a familias rurales extremadamente pobres, sin escolaridad y ocupación regular, muchas veces sin siquiera una vivienda? ¿Habría otra forma organizativa diferente a la centralizada, fundada en la férrea disciplina, que incluso castigue los «deslices» que hieren el estatuto disciplinar del Movimiento? ¿Una estructura interna democrática no acabaría, por último, debilitando al Movimiento y su capacidad de lucha social? Estas dudas, a la luz de la historia política brasileña, ciertamente son más que razonables y sustantivas. Entretanto, lo que se argumenta en este capítulo es la decisión de jamás intentar siquiera una forma de organización diferente, ya sea en función de realidades regionales distintas o, en tal caso (lo que es más relevante), en función de cambios en los contextos políticos a lo largo de la historia de la organización de los sin tierra. Probablemente, incluso los análisis menos refinados concordarían, a pesar de las diferencias de perspectivas teóricas y políticas, en que han ocurrido cambios en el sistema político brasileño desde los primeros años del Movimiento hasta los días actuales y, por lo tanto, que las mismas formas de lucha

²² Formalmente, el MST no existe, pues su sigla e imagen pública reflejan únicamente al actor político. La faz formal del Movimiento se da a través de una organización llamada Anca (Asociación Nacional de Cooperación Agrícola) y sus afiliadas, las Aecas (que son las asociaciones estatales), todas registradas legalmente. Además, están las innumerables cooperativas del Movimiento y algunas formas de organización menores, todas éstas capaces de reivindicar el acceso a fondos diversos, regularmente, según los imperativos legales y, posteriormente, sostener financieramente al Movimiento en sus luchas políticas. Al contrario de la supuesta descentralización, todas esas organizaciones están totalmente jerarquizadas y obedecen a la dirección nacional del Movimiento.

no podrían mantenerse indefinidamente. Si las ocupaciones de tierra representaban un acto extremo de confrontación con las estructuras del poder de las oligarquías agrarias durante los años ochenta —¿o sería en los noventa, en la mayor parte de los estados?— si una agenda discursiva antisistémica asumía un claro significado político en la larga noche de los generales, entre 1964 y 1984 (exactamente porque materializa la polaridad «nosotros»-«ellos», una reafirmación de la versión de la polaridad moral «bien» y «mal»), ¿tendría sentido político, en la coyuntura política de los años noventa, cuando los gobiernos fueron constituidos después de disputas electorales legítimas? La descalificación política e ideológica del Estado que expresa el antagonismo de la sociedad hacia la dictadura militar, en el primer momento, ¿a qué racionalidad política obedece en el cambio de milenio? El persistente rechazo a cualquier experimento democrático, ya sea internamente, ya sea en sus relaciones con las demás organizaciones del campo, vuelve imposible afirmar sus posibilidades políticas, pero también permite acentuar la incongruencia entre un régimen político que se democratiza e institucionaliza y una organización que insiste en una retórica antisistémica;

c) El aspecto no democrático de la historia del Movimiento podría, desgraciadamente, ser también fácilmente comprobado desde otros ángulos. Sin extender demasiado estas consideraciones, mencionaré otras tres peculiaridades. Primeramente, como se ha dicho, el control social sobre las familias rurales asentadas, cuyas evidencias empíricas comienzan lentamente a surgir como resultado de la investigación sociológica, más conformada por el rigor de su trabajo de investigación y menos por sus preferencias militantes. De esta manera, son cada vez más conocidos los diversos mecanismos utilizados por los dirigentes de la organización, que tienen la responsabilidad de los asentamientos en una determinada región. Mecanismos que no sólo someten a los colonos a la sujeción mediante el control de los fondos públicos, sino que muchas veces recurren a la más abierta intimidación, incluso física. La formación de cooperativas totalmente colectivizadas, que hacen *tabula rasa* de la historia social de los agricultores, antes pequeños propietarios, por ejemplo, encuentra una fuerte resistencia en las familias rurales, lo que ha generado innumerables conflictos en los asentamientos conformados. A modo de ejemplo, en su cuidadoso y original estudio, que comparó los asentamientos rurales en el sudoeste de Paraná, Eliane Cardoso transcribe el desahogo de una agricultora que se desligó de la cooperativa «socialista» formada en el asentamiento, lo cual sirve de ejemplo paradigmático para las numerosas situaciones de inconformidad social, tan habituales en los asentamientos controlados por el MST. La entrevistada, al referirse al modo instituido por la organización, argumenta: «El trabajo comunitario [colectivo] era así tipo esclavo, queda todo junto, pero sólo manda uno [...] si usted tiene una vaca para leche, usted no mandaba; si tiene un puerco, usted no mandaba [...] La hora estaba señalada para ir al servicio, si llegaba un pariente a la casa, la señora tenía únicamente tres días para hospedarlo

[...] La vida entera trabajamos de empleados y nunca hemos sido tan mandados de esta manera» (Brenneisen, 2000: 165).²³

Además, la incorporación de estos comportamientos empezó a ser una de las señales de lo cotidiano de la organización, incluso en momentos épicos y de gran visibilidad pública. Cuando tuvo lugar la muy exitosa marcha a Brasilia, en 1997, por ejemplo, se volvieron conocidos los métodos rígidos de control establecidos por los dirigentes, retratados posteriormente por estudiosos de aquel hecho. En su minucioso estudio sobre la marcha, Chaves relata el control casi militarizado del suceso, las pesadas penalidades y la conducción del proceso y sus decisiones de manera completamente centralizada, incluso sin divulgación a los participantes. Al relatar el caso de la expulsión de un integrante de la marcha por la supuesta trasgresión a las normas, destaca:

Hay muchas maneras de inhibir la expresión y distintos modos de control social [...] el desacuerdo tendía a considerarse como indisciplina y, según la gravedad, podía ser sujeto de expulsión [...] Ese temor se hizo presente en la Marcha Nacional; sin embargo, se vuelve cotidiano en los campamentos del MST: muchos de los sin tierra disponen de todo para garantizar en ellos por un tiempo la subsistencia de la familia y la supervivencia del sueño de la tierra [...] El poder silencioso del miedo, que hace callar, se volvería aún más opresivo en los últimos días de la Marcha Nacional. (2000: 217-218.)

El segundo aspecto notable, aún en este rubro, se refiere a la «homogenización forzada» de las diferencias y el fuerte rechazo a la diferencia. Tal vez el mejor ejemplo, en este caso, sea la subordinación de las demandas específicamente femeninas de las mujeres, forzadas a someterse a las «luchas mayores» que, supuestamente, asegurarían, si salen victoriosas, la incorporación de demandas específicas en un momento futuro. En la historia social y política del Movimiento, ha sido melancólica la trayectoria de muchas mujeres con un notable talento personal para ocupar posiciones de liderazgo, pero no lo hacen porque están sujetas al machismo dominante en el MST o, lo que es aún más perverso, sólo si adoptan el discurso dominante en la organización, «masculinizando» su discurso, podrán mantener la posición y ascender en la estructura. Como resultado de este control debido al género, que asocia el estilo de vida patriarcal y la quimera ideológica de las «luchas principales y secundarias», la trayectoria de las mujeres en el Movimiento ha sido objeto de una contradicción obvia, que es la distancia entre el discurso igualitario para efecto externo y las prácticas internas, y se ha llegado

²³ Consúltense también los estudios de Souza, 1999, y Pereira, 2000, donde se hacen evidentes las innumerables formas encontradas por las personas de los asentamientos para resistir a los formatos organizacionales impuestos.

incluso al ocultamiento de su trabajo, descalificándolo. La más extensa investigación realizada sobre este tema es categórica en sus conclusiones:

Se verifica que la relativa equidad entre los sexos, observada en el ambiente de los campamentos, se rompe y pierde significado en los asentamientos, cuando la participación femenina se restringe sorprendentemente. Los datos sugieren que la baja participación de las mujeres es propia de los asentamientos, fuera de las que no representan un comportamiento naturalmente femenino [...] Si esto ocurre, se debe a las barreras a la participación erigidas a partir de las relaciones sociales y de género, y del código de valores que las sustenta —compartida por hombres y mujeres— que emergen y se vuelven predominantes con la normalidad de lo cotidiano en los asentamientos. (Rua e Abramovay, 2000: 286.)

Otro aspecto, que se destaca en este mismo inciso, habla de la persistente postura política, algo sorprendente, del Movimiento, de categóricamente quitarle la legitimidad al Estado, lo que parece ser incomprensible, antes que nada por ser el MST, como ya se dijo, el más integrado de los movimientos populares brasileños, y al extraer de aquél, además, su propio y principal apoyo financiero. Esta exclusión de la legitimidad, ya subrayada por Martins (2000), forma parte de la estructura discursiva de la organización de los sin tierra, realizada probablemente por dos razones: la orientación ideológica de sus dirigentes principales y la ya antes citada «razón instrumental», cualquiera que sea, para mantener un discurso unitario que afirme la cohesión interna de sus militantes y también atraiga el apoyo de sectores urbanos radicalizados. Esta postura, con todo, se mantiene en diversas situaciones, especialmente aquellas que no afecten el acceso a los fondos públicos, cuya interrupción comprometería el apoyo financiero de la organización. Por ejemplo: al ser convidado en julio de 2000 a ocupar un asiento en el Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, incluso sin tener la organización existencia formal, el MST rechazó tajantemente la posibilidad, pero no por esto ha dejado de exigir el acceso a las políticas públicas federales implementadas por el ministerio correspondiente y con la supervisión del Consejo, valiéndose para ello de todas las formas de acción posibles, incluso el enfrentamiento (aunque esto signifique confrontarse abiertamente con las demás organizaciones que representan a los sectores sociales más pobres, igualmente demandantes de acceso a estos fondos públicos). De la misma manera, el Movimiento no ha sido ni siquiera capaz de reconocer algunas medidas recientes en el campo agrario que son inéditas en la historia de Brasil y que representan un golpe profundo a la estructura de poder de las grandes propiedades rurales. Entre estas medidas, por ejemplo, como una de las más notables, está la decisión gubernamental de cancelar el catastro de todas las propiedades de mayor extensión que no fueran capaces de demostrar la regularidad de sus títulos. Terminado el plazo para esta comprobación, poco menos de 2 000

latifundios, en todo el país, no proporcionaron información convincente y se les anuló el catastro (en la práctica, su derecho a estas propiedades), lo que representó un área de poco más de 60 millones de hectáreas, es decir, casi cuatro veces el tamaño del estado de São Paulo. En este caso, se amplía, a corto plazo, la cantidad de tierras disponibles para acciones en materia de reforma agraria a un ritmo casi exponencial, y abre innumerables oportunidades para nuevos asentamientos. Si fuera la lógica operativa del Movimiento, en los años más recientes, la representación efectiva de los sin tierra, y la reforma agraria su principal demanda (y no otros objetivos, incluso partidistas), una interlocución con el gobierno federal, aunque mantenida bajo criterios críticos y de distanciamiento político, agilizaría enormemente la ocupación productiva de esos inmuebles.

Tal vez una evidencia de la práctica continua de quitarle la legitimación al Estado que persigue el Movimiento pueda ser extraída de la siguiente cita, en la que el máximo dirigente de la organización hace un sulfúrico ataque al poder judicial en una manifestación (pública) realizada hace algunos años. Citas como ésta podrían repetirse *ad nauseam*, incluso en el periodo inmediatamente reciente, las cuales demuestran la limitada noción de política sostenida por los dirigentes del MST desde mediados de los años ochenta, cuando la organización empezó a orientarse por otro ideario político, que todavía la conforma de manera doctrinaria. En esa ocasión, João Pedro Stédile, fundador del Movimiento y aun hoy su más destacado dirigente, probablemente imaginándose como el próximo responsable del área de la reforma agraria del gobierno federal, pues su candidato a las elecciones presidenciales de 1994 se encontraba en aquel momento en una cómoda delantera frente a los demás candidatos, no titubeó en descalificar toda y cualquier iniciativa gubernamental en este rubro y, en relación con la acción de la justicia, propuso un curioso mecanismo de neutralización cuando fuera necesario, subrayando según sus palabras:

El tercer aspecto en la acción del gobierno es la legislación, es el poder judicial. Mucha gente ha dicho en conferencias: «Ah, el problema de Brasil es que el poder judicial va a ser un problema» [para la implantación de la reforma agraria]. Ustedes saben mejor que yo [...] que el poder judicial en Brasil es un pelele del poder ejecutivo, son una bola de barberos, no existe ninguna independencia entre el poder judicial y el poder ejecutivo, empezando por el Supremo Tribunal Federal [...] si los tipos son designados por el presidente de la República, ¿alguno de ellos va a criticar al presidente? [...] En tal caso, un judicial que comienza desde el Supremo con estas características, el pequeño juicio allá [en los lugares distantes] nosotros lo compramos a él con un churrasco, ¿verdad?, el precio viene bajando, promotor de justicia entonces, Dios nos libre.²⁴

²⁴ Conforme lo expresado por João Pedro Stédile (mayo de 1994), en una manifestación pública realizada en el ámbito del II Encuentro Estatal del Equipo de la Reforma Agraria de la Emater/RS, acto realizado en la

d) Finalmente, al no poder extenderme en este capítulo sobre una larga lista de problemas políticos y organizacionales que presenta actualmente el MST —contrariamente al sentido común compartido por analistas sociales distantes de las realidades agrarias—, ni incluso detallar otras decisiones polémicas o no democráticas adoptadas por la organización,²⁵ es necesario subrayar que las estrategias escogidas por el Movimiento y sus acciones de presión y reivindicación también han ignorado una posibilidad histórica, tal vez única, creada en los años noventa, y bajo la cual los intereses del Movimiento y su agilidad social y política podrían reforzar los resultados de manera extraordinaria. Se refiere aquí al (re)surgimiento del «desarrollo rural» como demanda creciente de las poblaciones rurales, especialmente en regiones donde sus organizaciones son más actuantes. En la década pasada, por varias razones conocidas, se modificaron las condiciones de producción en el medio rural brasileño que, sumadas a los cambios políticos realizados por el proceso de descentralización experimentado en Brasil en el mismo periodo, y por las nuevas formas de gestión estatal implementadas por gobiernos recientes, dieron como resultado la reaparición de esta demanda en diversas regiones agrarias. Cada vez más, el conjunto de organizaciones (exceptuando el MST) se asocia a un ideario propositivo que procura reconstituir las posibilidades de formas de desarrollo rural dinamizadoras de la economía local o regional que instituyan nuevas alternativas en la generación de ingresos y en el aumento de oportunidades de trabajo, de integración a los mercados y que influyan también en las esferas políticas del municipio o de la región. Pretenden, de esta manera, asegurar la mejora de las condiciones de vida de las familias rurales que representan. Algunas de

ciudad gaucha de Veranópolis, promovido por la empresa pública de extensión rural de Rio Grande do Sul, la Emater/RS (transcripción literal sacada de la grabación de la conferencia). Este dirigente, principal líder del MST desde su fundación, es hijo de pequeños agricultores de Rio Grande do Sul, entró en la lucha política reclutado por la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia católica en los años setenta. Economista, con un curso de posgrado realizado en México, se ubica ideológicamente en el campo del marxismo ortodoxo y, aunque es un hábil estratega y profundo conocedor del mundo rural brasileño, se caracteriza también por ofrecer constantes fanfarronadas en sus manifestaciones públicas; el repertorio de su lenguaje más pintoresco, compone actualmente un anecdotario político. Su liderazgo, con todo, es indiscutible, y merece incluso hasta la producción, por parte de sus asistentes, de una literatura propia al estilo «culto a la personalidad» (conforme el libro *Brava Gente*, organizado por Stédile y Fernandes, 1999).

²⁵ Sería extremadamente saludable para el debate democrático (y desde una perspectiva de izquierda), por ejemplo, discutir otros dos hechos inquietantes en la historia del Movimiento, de una lista a estas alturas ya extensa de casos similares. Primeramente, cuando el MST interfirió en las elecciones previas a que escogieran al candidato del Partido de los Trabajadores en 1998, en Rio Grande do Sul, lo que alteró el resultado final y la elección del candidato oficial. Utilizaron para eso el sobado artificio, típico del pasado clientelista de las oligarquías agrarias, de las «urnas móviles», las cuales fueron llevadas a los asentamientos en busca de los votos deseados por la dirección del Movimiento. El segundo aspecto es más reciente y nos remite a la decisión del organismo de introducir el tema de los OGM en su agenda de acción, y prometer destruir «todas» las plantaciones experimentales e, incluso, asociar tales experiencias genéticas a la «globalización» y, así, por extensión, a los símbolos de esta última, como la cadena de alimentos rápidos Mac Donald's, cuyos establecimientos empiezan a convertirse en blanco de invasiones de sus militantes. Sería curioso (y políticamente relevante) saber lo que piensan los asalariados de esta cadena, que es la tercera empresa privada en cuanto al número de empleos ofrecidos en Brasil, si persisten estos ataques y sus lugares de trabajo estuvieran amenazados.

estas iniciativas caracterizan hoy a determinadas subregiones del mundo rural brasileño, que empiezan a salir del acorralamiento reciente e inician nuevas formas de dinamismo social, económico y político. En todos los casos conocidos, la decisión del Movimiento ha sido ignorar tales iniciativas o, aún más problemático, combatirlas, a veces agresivamente, sin concordar para establecer alianzas políticas, en ningún caso conocido, con las organizaciones que buscan emprender estos cambios.²⁶

En un periodo en el cual los grandes propietarios de tierras se debilitaron sustancialmente y perdieron su capacidad de extraer del Estado federal el apoyo financiero que siempre obtuvieron en el pasado, además de tener a los agricultores más pobres (englobados en la categoría más general de «agricultores familiares») creando una brecha inédita en el ámbito del mismo Estado (por medio de una política pública específica, como el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar [Pronaf] y, más recientemente con la institución de un Ministerio de Desarrollo Agrario que, de hecho, es el «Ministerio de los pobres del campo»), es sorprendente que el MST continúe ajeno a estas transformaciones recientes. Se mantiene, de manera admirable, en la misma estrategia antes citada, refractario (y hasta hostil) a las demás organizaciones de pequeños agricultores rurales y, de la misma forma, soñando con la «toma del Palacio de Invierno», cuando la economía rural brasileña, en este milenio que se inicia, se encuentra completamente mercantilizada y las familias rurales ni siquiera remotamente adoptarían proyectos políticos que no fueran, cuando mucho, reformistas, pues jamás se adherirían a las proyecciones de transformación política que los dirigentes principales del Movimiento defienden (y enseñan en sus escuelas de formación política a los jóvenes reclutados en sus asentamientos).²⁷ Probablemente éste es, en la actualidad, el mayor impedimento político que las familias rurales más pobres en Brasil han experimentado: el proceso de democratización de la sociedad brasileña produjo una capacidad de reivindicación sin precedentes en el medio rural y una presencia en la esfera pública igualmente inédita, además de contar, en la mayor parte de los

²⁶ O de lo contrario, decidiendo promover acciones de abierta provocación a las demás organizaciones, como la notoria tentativa de ocupación de la Hacienda Catende, en Pernambuco, ya expropiada y donde la Federación de Trabajadores Agrícolas de aquel estado desarrolla un promisorio experimento de gestión solidaria con otras familias sin tierra que se asentaron en ese antiguo latifundio.

²⁷ O conforme a la ilustradora observación de José de Souza Martins: «Me parece complicado colocar al campesinado en el centro de un proyecto histórico para esta sociedad, como si fuera una categoría cuya inserción social le asegurara un papel dominante en la historia, porque supuestamente fuera éste una clase portadora de la universalidad posible del hombre [...] Como si su destino histórico fuera el destino de todos [...] Las contradicciones del campesinado no se resuelven en la soledad de su penoso vivir. Se resuelven más bien con el fortalecimiento de las concepciones conservadoras y en su contradictoria integración a un modo de vivir y producir cuya lógica reside, exactamente, en su destrucción como grupo humano particular. Su visión de mundo se funda en su propia experiencia del mundo. Ése es su límite y su posibilidad, marcada esencialmente no sólo por la lucha por la tierra, sino sobre todo por la lucha siempre renovada contra el perecimiento histórico (2000: 49, cursivas del autor).

años recientes, con una posibilidad política de acción mucho más favorable de los gobiernos federales del periodo, sin comparación con épocas pasadas y, sobre todo, sin contar con la oposición (y acción) en la misma fuerza del pasado, de las organizaciones de los grandes propietarios. Pero, como perversa ironía, en esos mismos años, la organización que se volvió más fuerte, en vista de su desarrollo, se ha venido constituyendo, más y más, en un significativo estorbo para la construcción de procesos nuevos y promisorios de desarrollo rural en el Brasil, al asumir así una inesperada e insospechada faz conservadora, cuando sus luchas sociales se comparan con las demandas de las familias rurales más pobres del país.

3. CONCLUSIONES

La teoría crítica fue desarrollada para luchar contra el consenso como forma de cuestionar la dominación y crear el impulso de luchar contra ésta. ¿Cómo proceder en una situación en que el consenso dejó de ser necesario y, por tanto, su desmitificación dejó de ser el resorte del inconformismo? ¿Es posible luchar contra la resignación con las mismas armas teóricas, analíticas y políticas con que se luchó contra el consenso? (Santos, 2000: 35.)

Movimientos sociales transformados en organizaciones formales, como el MST, una vez realizado este cambio, empiezan a regirse por otras lógicas constitutivas y diferentes intereses, diversos de los originales, tanto en sus relaciones externas, mantenidas con los demás grupos políticos, como en sus relaciones internas. Se destaca, en este caso, la estrecha relación entre el origen social de los sin tierra y las oportunidades creadas por la expansión de la organización, incluso en términos de carrera política y, más genéricamente, por la extraordinaria ampliación de formas de movilidad social ascendente, posibilidad preservada mientras la organización logra mantener su ritmo de crecimiento. En este sentido, los análisis «fuera de lugar» sobre el MST, es decir, aún enfocados por las coyunturas políticas del periodo militar o de sus años inmediatamente posteriores, casi siempre corroborados por polaridades político-ideológicas que son el atributo del pasado, pero distantes de las formas sociales actuales, obedecen a las necesidades del juego de disputas partidarias o, en todo caso, representan obvios equívocos analíticos.

El título de este capítulo se inspiró en el conocido estudio realizado por Maxine Molyneux sobre el papel y el destino de la participación de las mujeres y los intereses de género en la llamada «revolución sandinista» nicaragüense. En aquel caso, un proceso de ruptura sociopolítica prometía la emancipación de las mujeres del país, que fueron parte significativa y activa de los ejércitos formados por la guerrilla. Entretanto, argumenta la autora, durante el proceso revolucionario, y especialmente después de la victoria de los grupos insurgentes, la especificidad de

los sujetos políticos representados por ellas se sumergieron en la «lucha general». Surge aquí un claro y decisivo problema político, no resuelto en aquel caso, cuando la autora insiste en que:

Mucho depende de lo que se entiende por sujetos «que pierden su especificidad» y los objetivos universalizados. Porque la universalización de los *objetivos* de los sujetos revolucionarios no necesariamente implica la pérdida de sus *identidades* específicas [...] si la revolución no exigió la disolución de las *identidades* de las mujeres, sí exigió la *subordinación* de sus *intereses específicos* a los objetivos mayores de [...] establecer un nuevo orden. Esto plantea una cuestión importante en el centro de los debates acerca de la relación entre la revolución socialista y la emancipación de las mujeres [lo que introduce el tema crucial y general] [...] que es aquel de las garantías políticas. Porque si los intereses debido al género serán concretados únicamente dentro del contexto de consideraciones más amplias, es esencial que las instituciones políticas responsables por esos intereses tengan los medios de impedir su completa sumisión y sus acciones posponerse indefinidamente. (Molyneux, 1985: 228-229, 251, cursivas de la autora.)

Aunque parece distinta, la historia reciente del MST en Brasil es notablemente análoga en relación con la proscripción de las posibilidades de emancipación de los grupos sociales representados por la organización. No sólo han sido ignoradas diferencias específicas de cuño sociocultural entre grupos de familias rurales reclutadas y subordinadas a las formas de movilización animadas por el Movimiento, sino, todavía más crucial, también lo han sido diferencias en términos de edad, género, formas de inserción productiva, historias regionales de agricultura, tipos de organización y representación previas (combatidas férreamente en nombre de la «unidad de la lucha») e, igualmente, las diferencias de enfoques estratégicos y formas de acción políticas, éstas invariablemente descalificadas y no aceptadas en nombre de una supuesta homogeneidad política, por cierto jamás explicitada claramente.

El resultado final, en todas las regiones agrarias brasileñas, ha sido la significativa materialización de una capacidad de movilización emprendida por el MST, anclada en los mecanismos antes señalados y evidente en innumerables hechos y acciones, pero también la incapacidad, por otro lado, de producir sujetos sociales con una real autonomía organizativa, arquitectos de su propio destino lo que los imposibilita para registrar la emancipación social y política entre sus objetivos de vida. La historia del Movimiento, en este sentido, pierde su carácter de novedad y sólo repite la melancólica trayectoria de otros agrupamientos políticos ubicados en el campo de la izquierda tradicional, únicamente promisorios cuando son iluminados por el foco de sus acciones externas. Bajo los símbolos e iconos elaborados para efectos externos, subyace la silenciosa desconfianza de sus participantes

sometidos, el desconocimiento acerca de los objetivos del propio Movimiento, los impedimentos productivos en todos los asentamientos rurales, la feroz disputa política por la hegemonía en la organización de los pobres del campo, el desprecio por la política social democrática y, sorprendentemente, como se indicó antes, la reiteración del control social y de las formas de mando usuales en el medio rural brasileño, ejercidos anteriormente por los grandes propietarios de tierra y sus delegados, y hoy materializados bajo otras formas y encubiertos por el discurso progresista.

Las posibilidades de contar con ayudas externas, frente a las coacciones sociales y económicas inflingidas por la globalización, que han aumentado la desigualdad social en tantos países, incluso en Brasil, de igual manera han sido poco aprovechadas por el Movimiento. Su repercusión internacional, al buscar apoyos, refleja especialmente la capilaridad de instituciones ubicadas en la órbita de lo religioso, que periódicamente promueven acciones de divulgación, campañas y diversas formas de protesta, con resultados en lo general poco eficaces en términos de difusión del «problema agrario» en Brasil. La tentativa de la organización, a su vez, de crear algún tipo de cooperación internacional todavía es muy embrionaria. Inicialmente se constituyó por medio de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC), sin ningún efecto práctico y, recientemente, se intenta a través de la Vía Campesina <www.viacampesina.org>, una articulación de organizaciones campesinas del continente de cuyo cuerpo dirigente el MST forma parte. Además de esto, únicamente existe la divulgación en portales de internet de sus campañas y acciones <www.mst.org.br>, que tampoco tienen una significativa repercusión internacional. Incluso el recibimiento del llamado «Nóbel Alternativo», o el Premio Rey Balduino, atribuido por el gobierno belga a organizaciones dedicadas al tema de los derechos humanos, ha sido poco utilizado en la promoción de una red de cooperación internacional que pudiera realizar acciones diversas y formas de presión más eficaces. En este sentido, al contrario de otros campos emergentes, como las polémicas internacionales dirigidas a las organizaciones promotoras del libre comercio o la creciente acción relacionada con el tema de los OGM (por no hablar de temas ambientales), parece que una «contraglobalización» de naturaleza emancipadora, que incorporara los intereses de los sin tierra del Brasil, aún no ha encontrado condiciones objetivas para concretarse. Una razón, tal vez, sea la naturaleza de la lucha social que comanda la organización, la cual probablemente no tenga ya la convocatoria del pasado y no encarne una «novedad» (compárese, por ejemplo, con el caso de Chiapas y sus particularidades innovadoras, discutidas por Hellman, 2000). Pero otra razón de esta ineficacia transformadora, en el plano internacional, ciertamente se remite a la naturaleza política adoptada por MST. A la luz de la historia de la organización en los últimos veinte años, como se argumentó en este capítulo, tal vez no sea inesperado este diagnóstico y evaluación. La emancipación social y política de los pobres del campo

de Brasil, en este contexto, se mantiene como un simple espejismo, que sólo la fabulación de otros tiempos, distantes en el futuro, casi utópicos, puede ofrecer y pospone, como ha ocurrido desde siempre, la constitución de un ambiente social en el cual las esperanzas y el mundo real no estén separados por abismos insuperables.

BIBLIOGRAFÍA

- Arguedas, José María, y F. Izquierdo, *Mitos, leyendas y cuentos peruanos*, Casa de la Cultura, Lima, 1970. Citado en Eduardo Galeano, *Memorias del fuego (I), Los nacimientos*, Siglo XXI, Madrid, 1982: 256.
- Barp, Wilson, *Fronteira da cidadania: cartografia da violência na Amazônia brasileira*, tesis de doctorado, Unicamp, Campinas, 1997.
- Brenneisen, Eliane Cardoso, *Relações de poder, dominação e resistência: a organização social e da produção em assentamentos rurais na região oeste do Paraná*, tesis de doctorado, PUC-SP-Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências Sociais, São Paulo, 2000.
- Caldart, Roseli Salette, *Pedagogia do Movimento Sem Terra*, Vozes, Petrópolis, 2000.
- Cazella, Ademir A., *Assentamentos rurais e cooperação agrícola. O caso do Assentamento 30 de Outubro (SC)*, disertación de maestría, CPDA/UFRRJ, Rio de Janeiro, 1992.
- Chaves, Christine de Alencar, *A Marcha Nacional dos Sem-Terra*, Relume Dumará/UFRRJ-Núcleo de Antropologia da Política, Rio de Janeiro, 2000.
- Fernandes, Bernardo Mançano, *Contribuição ao estudo do campesinato brasileiro. Formação e territorialização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, 1979-1999*, tesis de doctorado, USP-Departamento de Geografia, São Paulo, 1999.
- Fox, Jonathan, «Democratic Rural Development: Leadership Accountability in Regional Peasant Organizations», *Development and Change*, 23 (2), 1990.
- Gohn, Maria da Glória, «A formação do cidadão nos cursos do MST», *Sociologias*, 1(2): 144-188, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
- Hellman, Judith Adler, «Real and Virtual Chiapas: Magic Realism and the Left», *The Socialist Register*, The Merlin Press, Londres, 1999: 166-183. También en <www.theglobalsite.ac.uk> [consultado el 5 de marzo de 2001].
- Hobsbawm, Eric, *Primitive Rebels*, Manchester University Press, Manchester, 1959.
- , *Eras dos extremos. O breve século XX, 1914-1991*, Companhia das Letras, São Paulo, 1996.
- Huizer, Gerrit, *El potencial revolucionario del campesino en América Latina*, Siglo XXI, México, 1976.
- Martins, José de Souza, «Os camponeses e a política no Brasil», en José de Souza Martins, *Os camponeses e a política no Brasil*, Vozes, Petrópolis, 1981: 21-102.
- , «As hesitações do moderno e as contradições da modernidade no Brasil», en José de Souza Martins, *A sociabilidade do homem simples. Cotidiano e história na modernidade anômala*, Hucitec, São Paulo, 2000: 17-54.
- , *Reforma agrária: O impossível diálogo*, Edusp, São Paulo, 2000a.

- Medeiros, Leonilde Sérvalo, y Sérgio Leite, (orgs.), *A formação dos assentamentos rurais no Brasil. Processos sociais e políticas públicas*, Editora da Universidade, Porto Alegre, 1999.
- Molyneux, Maxine, «Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State and Revolution in Nicaragua», *Feminist Studies*, 11(2), 1985: 227-254.
- Moore, Barrington, *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Allen Lane/The Penguin Press, Harmondsworth, 1967.
- Navarro, Zander, «Ideologia e economia: formatos organizacionais e desempenho produtivo em assentamentos rurais - o caso do assentamento "Nova Ramada", Rio Grande do Sul, Brasil», Informe de investigación, 1995 (mimeo.).
- , «Democracia, cidadania e representação: os movimentos sociais rurais no Estado do Rio Grande do Sul, 1978-1990», en Zander Navarro (org.), *Política, protesto e cidadania no campo*, Editora da Universidade, Porto Alegre, 1996: 62-105.
- Pereira, José Roberto, *De camponeses a membros do MST: os novos produtores rurais e sua organização social*, tesis de doctorado, UnB-Programa de Pós-graduação em Sociologia, Brasília, 2000.
- Rua, Maria das Graças, Miriam Abramovay, *Companheiras de luta ou «Coordenadoras de Painelas»? As relações de gênero nos assentamentos rurais*, UNESCO, Brasília, 2000.
- Santos, Boaventura de Sousa, *A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência*, vol. I, *Para um novo senso comum*, Cortez, São Paulo, 2000.
- Souza, Maria Antônia de, *As formas organizacionais de produção em assentamentos rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST*, tesis de doctorado, Faculdade de Educação-Unicamp, Campinas, 1999.
- Stédile, João Pedro, Bernardo Mançano Fernandes, *Brava gente*, Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 1999.
- Tarrow, Sydney, *Power in Movement. Social Movement, Collective Action and Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
- Zimmermann, Neusa de Castro, *Depois da terra, a conquista da cooperação*, disertación de maestría, UnB, Brasília, 1989.

v. La emancipación del movimiento en el movimiento de emancipación social continua (respuesta a Zander Navarro)

HORÁCIO MARTINS DE CARVALHO

I. ¿Y QUE HAY DE MALO EN ELLO?

Habría sido muy difícil para los 80 representantes de trabajadores rurales sin tierra provenientes de 13 estados del país, reunidos durante el I Encuentro Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, en enero de 1984, en la ciudad de Cascavel (Paraná), vislumbrar que la constitución del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) daría inicio formal a uno de los más complejos, dinámicos e innovadores movimientos sociales masivos de trabajadores rurales jamás registrados tanto en la historia del Brasil como en la de los demás países de América Latina.

Dieciséis años después, durante el IV Congreso Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, realizado del 7 al 11 de agosto de 2000 en la capital del país, Brasilia, en el centro del poder político nacional, 11 000 delegados provenientes de 24 estados y del propio Distrito Federal, 29 personas que representaban a 22 organizaciones campesinas extranjeras, 110 personas en nombre de organizaciones no gubernamentales o comités de amigos del MST, otros invitados y personalidades que marcaron la historia de las luchas sociales en Brasil y en otros países diversos del mundo, se reunieron, festejaron, aprendieron a reavivar sus energías, no sólo para los enfrentamientos de las luchas por la tierra, sino, ahora, por la reforma agraria y contra el modelo económico vigente.

Así como en los demás congresos del MST, lo que se presenció fue un encuentro festivo, de cultura, de agradecimiento, de solidaridad, de formación y de debate de sus líneas políticas: se volvió, en esa semana, una referencia nacional para quienes tenían conciencia, ya fuera por el lado de las clases dominantes y de los gobiernos, ya fuera por el de las clases subalternas del país, pero ese encuentro formal de los trabajadores rurales, el mejor jamás realizado en América Latina, era, antes que nada, una demostración de pujanza, firmeza y renovación de un movimiento social de masas, el cual viene obligando políticamente, desde

hace 16 años, a las clases dominantes a aplicar la reforma agraria en la lista de la agenda política nacional. De la misma manera, para los tecnócratas del aparato gubernamental, para amplios sectores de la intelectualidad de las universidades y para las centrales sindicales de centroizquierda, remarcó la exigencia de repensar el papel de las clases subalternas en el campo de la correlación de fuerzas políticas e ideológicas del país.

Los congresos del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra son una síntesis de su capacidad de ser y hacer. Esos encuentros representan una expresión de solidaridad entre combatientes sociales que arriesgan sus vidas en las confrontaciones de la lucha por la tierra, es una demostración de ternura entre los compañeros del mismo ideal y una renovación de los compromisos con los valores que comparten. En los congresos se discuten las líneas generales de la política del MST. No se caracterizan por ser espacios políticos de luchas electorales internas, y es así porque en los congresos no hay elecciones ni las luchas políticas internas resultantes de éstas. Los distintos procesos de renovación de las instancias de dirección siguen por otros caminos.

¿Y por qué los considero como una síntesis de esa capacidad de ser y hacer? Porque durante el congreso, además del gran encuentro festivo y de debate político, se reproducen prácticas similares a las de los campamentos después de las ocupaciones de tierras: todos los delegados acampan en grandes tiendas de lona negra y organizan sus vidas durante la reunión por medio de colectivos denominados *brigadas*, cada una de éstas para un sector esencial: las cocinas comunitarias, los centros de salud, las guarderías, los círculos de estudio, de tiempo libre, la seguridad, la disciplina, la cultura, en fin, todas aquellas dimensiones de la vida que constituyen lo cotidiano en una ciudad efímera con más de 11 000 personas, ciudad que acampó durante una semana dentro de la capital del país y se autogobernó bajo las miradas atentas de los policías de los servicios de inteligencia.

Entonces, cómo explicar esa presencia sobresaliente y duradera del MST en el escenario nacional si su lucha por la tierra y por la reforma agraria en Brasil enfrenta a enemigos históricos, con fuerza y poderes económicos, políticos e ideológicos enormes, como:

- a) La alianza histórica de las clases dominantes en Brasil, desde mediados del siglo XIX, entre el empresariado que constituye los capitales agrario, industrial, comercial y bancario, nacional e internacional, el cual siempre se mantuvo, y actualmente más que nunca, contra la reforma agraria del país.
- b) El gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales, mediante la manipulación de las políticas públicas, así como de los medios masivos de información contra los intereses de las clases subalternas en el campo; del aparato represivo directo, como el uso de la policía federal y las policías militares estatales, e indirecto, por medio de los servicios de inteligencia, ya sean explícitos

como la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), o los que se mantienen con bajo perfil aparentemente, como los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y los de las policías militares estatales, todos ellos articulados con los servicios similares estadounidenses.

- c) Las fuerzas paramilitares. Tanto los denominados popularmente *jagunços* (pistoleros de alquiler) o las empresas de seguridad privada contratadas por los grandes propietarios de tierras.
- d) Las agencias multilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que además de financiar la reforma del Estado y la reestructuración de la economía conforme los patrones del Fondo Monetario Internacional (FMI), actúan en la formación de la opinión pública y en la ideológica en el primer nivel del gobierno federal para, como ejemplos, implantar la reforma agraria (*sic*) de mercado o la privatización de los sectores de la educación y la salud, sin considerar toda obligatoriedad de privatización de las empresas económicas estatales en el proceso de reforma del Estado.
- e) Amplios sectores de la intelectualidad de centroizquierda del país que, ya sea por el desencanto personal con la política, ya sea por la cooptación por parte de los sectores moderados de las clases dominantes (transformismo, conforme lo señala Gramsci), se adhirieron a las reformas políticas y macroeconómicas neoliberales o a la ideología dominante que considera a los pequeños productores rurales familiares como un sector de la producción sin esperanza histórica.

Los apoyos recibidos por el MST dentro del país y provenientes del exterior son considerables y necesarios. Sin embargo, no son suficientes para acabar con su prolongada permanencia en la lucha por la tierra, por la reforma agraria y por la superación del actual modelo económico por más de dieciséis años, ni para comprender la complejidad alcanzada hoy por el MST, la cual se fue desarrollando poco a poco dentro del movimiento de masas y gracias a él. No obstante, es oportuno que las fuentes de apoyo sean sucintamente explicitadas:

- a) Los sectores progresistas de las iglesias, en particular la Iglesia católica y la luterana, mediante la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
- b) Los movimientos sociales populares del campo y de las ciudades.
- c) Los sindicatos rurales, de la industria y del comercio y las centrales sindicales progresistas.
- d) Fracciones de las clases medias urbanas y rurales.
- e) Sectores de la intelectualidad progresista de diversas universidades, de centros de investigación y de organismos gubernamentales.
- f) Organizaciones no gubernamentales del país y del exterior.

- g) Comités de solidaridad con los sin tierra de Brasil, constituidos en 12 países de Europa; en Estados Unidos de América articulados por la Global Exchange, y en Canadá, por diversas organizaciones no gubernamentales.
- h) Intercambio y apoyo de organizaciones campesinas latinoamericanas por medio de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC) en América Latina y de la Vía Campesina internacional.
- i) La mayoría de la opinión pública brasileña.

En el mes de julio de 2001 se realizó en Francia el 4º Encuentro de Amigos del MST,¹ con la presencia de 104 personas oriundas de 13 países de Europa. A pesar de la diversidad y lealtad de los apoyos, éstos no nos indican cómo el MST ha resistido y superado embates contra tan fuertes oponentes. ¿Cuáles son las energías humanas que están siendo liberadas cotidianamente en las prácticas sociales de este movimiento de masas, que hacen que centenares de miles de familias de trabajadores rurales sin tierra, y una parte considerable de ellas ya con tierra, se sientan comprometidas con los ideales y valores de sus compañeros para continuar la lucha, incluso cuando su supuesto objetivo inmediato, como la obtención de la tierra, fue alcanzado? ¿Qué procedimientos participativos fueron creados para permitir afirmar que este Movimiento no se desvió hacia una organización burocrática formal, aunque entendida por algunos investigadores sociales como una organización social de masas? ¿Cuáles han sido los secretos íntimos del MST que deberán de revelarse, quizá ya revelados, para contribuir a la reflexión sobre este movimiento social manchado por sorpresas, innovaciones y capacidad para cambiar por tan largo tiempo?

Deseo sugerir que el camino para conocerlos se encuentra en el movimiento desencadenado por el MST hacia la continua emancipación social de las clases subalternas del campo, el esfuerzo para la superación de la explotación económica, de la dominación política y de la sumisión ideológica, en fin, de las opresiones a que las familias de los trabajadores rurales sin tierra o con poca tierra han sido sometidas en Brasil. En este esfuerzo histórico de liberación social continuo de las clases subordinadas en el campo, el MST se sumergió en un proceso propio de emancipación de diversas tutelas potenciales. Al dar continuidad histórica a diversos movimientos sociales de lucha por la tierra y por la reforma agraria, el MST tuvo que desvincularse de las iglesias, los sindicatos, los partidos, el Estado y del centralismo burocrático.

2. SECRETOS ÍNTIMOS²

Las personas, los grupos y clases sociales que desean ser y llegar a ser sujetos de sus historias están en permanente tensión entre la alienación y la conciencia crítica, entre la dominación y la liberación, y entre la tutela y la emancipación. Muchas veces, ya sea por la alienación o por represión física o mental, personas, grupos y clases sociales se conforman con la sujeción y ensayan, cual espasmos, en los límites de sus posibilidades presentes, microconquistas en un proceso continuo de supuestas liberaciones. En el imaginario de las personas y grupos sociales, esas microconquistas representan la liberación sin que, necesariamente, se den cuenta de que tales libertades están siendo permitidas por otros, sea persona, grupo o clase social.

De manera general, esas microliberaciones personales y sociales no significan efectivamente procesos de emancipación, y no dan necesariamente inicio al proceso de liberación social. No obstante, en la complejidad de las formas y grados de sumisión, permiten que afloren sentimientos de libertad, modos sublimados de alienación, los cuales se verifican en los espacios económicos, políticos e ideológicos consentidos por los dominantes.

Deseo sugerir que la emancipación social es un proceso continuo. Puede tener comienzo, y la percepción de su inicio podrá incluso fecharse, pero no tiene fin. Así, incluso en los procesos revolucionarios, personas, grupos y clases sociales logran hacer fluir emancipaciones personales y sociales³ en un movimiento permanente, es decir, siempre incompletas. A cada movimiento de la sociedad —y la sociedad está siempre en movimiento— nuevas correlaciones de fuerzas económicas, políticas e ideológicas se constituyen y colocan de nuevo las relaciones de tutela y de emancipación bajo nuevas configuraciones.

No supongo que la emancipación social continua exija la presencia de mediaciones formales tipo representación de intereses; sean éstas asociaciones, sindicatos, partidos, Estado o iglesias. Estas mediaciones pueden, en determinadas circunstancias, ser necesarias, pero no indispensables. Los movimientos de masas, en la búsqueda de la realización de ideales objetivos y subjetivos, permiten la afirmación de catarsis personales, revigorización y descubrimiento de nuevos valores humanos, individuales y colectivos, y proporcionan emancipaciones personales y sociales

² La expresión "secretos íntimos" fue originalmente utilizada por Alencar (2000: 24): «Primero, me inspiré en Marx, cuando este filósofo advierte que, al estudiarse una sociedad, se busquen en ella las relaciones de los secretos íntimos de los aspectos sociales de la producción, de las relaciones sociales de producción, quién, cómo y por qué detentan el poder. Segundo, reconozco que estos dos términos, secretos e íntimos, suenan a pleonasma: secreto significa sigilo, confesión, luego algo íntimo, personal. E íntimo es aquello que pasa en lo interior, es personal, particular».

³ Esta relación entre lo personal y lo social es para mí fundamental. Su tratamiento, no pertinente en este capítulo y contexto analíticos, se ubicaría en el proceso dialéctico entre lo singular y lo general, entre el ser y la sociedad, y entre lo psicológico y lo social.

¹ Los encuentros anteriores tuvieron lugar en España, Alemania y Bélgica, respectivamente.

muchas veces insospechadas. Las acciones sociales por la denominada acción directa desencadenan procesos de emancipación o, dependiendo de cómo se procesó la emulación hacia la acción directa, ya han sido consecuencia de emancipaciones en movimiento. Las acciones directas por los movimientos de masas no demandan mediaciones formales de representación de intereses.

Como hipótesis, afirmaré que el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra revigorizó y dio un nuevo sentido al proceso histórico de emancipación social continua de las clases subordinadas en el campo, proceso que ha resultado objetiva y subjetivamente en la afirmación de la identidad social de los trabajadores rurales sin tierra, en el redescubrimiento de un sentido histórico hacia esa fracción de las clases dependientes en el campo, como en la conquista cotidiana de la dignidad de millones de personas de éste y de la ciudad, comprometidas en la lucha por la tierra, por la reforma agraria y por el cambio del modelo económico vigente. Esa emulación en el proceso de emancipación social continua estaría contribuyendo a la construcción de la ciudadanía activa de las personas de sectores considerables de las clases subalternas en el campo.

Las acciones directas —como las ocupaciones de tierras y de predios públicos— y la resistencia prolongada en los campamentos, así como la implantación de una pedagogía propia en las escuelas, las nuevas capacidades y maneras de formar a los militantes, la búsqueda de alternativas de administración en los asentamientos, y las místicas y valores adoptados como códigos culturales para la afirmación de la identidad de los sin tierra redefinen, en la práctica de las luchas de emancipación social continua, nuevas relaciones entre el Estado y esa fracción de la sociedad civil.

De este modo, como las acciones directas del MST contradicen y tratan de redefinir —frente a la ofensiva de las concepciones y acciones burguesas— el espacio público y las concepciones dominantes de la sociedad civil, todo lleva a creer que la afirmación ciudadana de esos sectores que luchan por la tierra, por la reforma agraria y por el cambio en el modelo económico vigente, tiene lugar en los espacios sociales creados por ellos mismos, en una tensión dialéctica entre espacios sociales emancipados socialmente y la tentativa también continua de tutelar esos espacios por las clases dominantes.

Entonces, el Movimiento está siempre actuando, en especial en relación con el Estado burgués, el espacio público y la sociedad civil, creados históricamente por éste de manera autoritaria. Según Marilena Chauí, en Brasil es el Estado quien funda la sociedad.

Incluso si consideramos que la constitución del MST ocurrió en un contexto político favorable a las acciones de masa⁴ —que sintetizado por la transición entre

⁴ Debo resaltar que si el MST fue constituido en una coyuntura política en que se toleraban las acciones populares de masas (1984), esa tolerancia de los gobiernos fue clausurada en 1990, con la elección del gobierno de Collor, cuando se reiniciaron las acciones represivas contra los movimientos y organizaciones populares. Este comportamiento represor de las clases dominantes, por medio de sus gobiernos, se ha venido ampliando

una dictadura militarista y una democracia liberal burguesa, por el agravamiento de la situación de las clases subalternas en el campo (consecuencia del modelo económico capitalista intensivo reproducido por el gobierno a partir de los intereses del capital monopolista internacional), y por la ampliación, diversificación e intensificación de las organizaciones y movimientos sociales en el ámbito de la sociedad civil—, el carácter de este movimiento social ha sido producto de una construcción permanente en que los valores, mística, líneas políticas estratégicas, acciones directas de ocupación de la tierra y emancipaciones sociales continuas, vueltas hacia sí mismas, han sido afirmadas, criticadas y superadas en un esfuerzo social, sin precedentes en la historia del Brasil, de construcción de un movimiento de masas en el campo.

El MST nació al liberarse de la tutela de dos instituciones que, al tiempo que le dieron vida, le quitaron su libertad: las iglesias⁵ y los sindicatos de trabajadores rurales.⁶ También, en una dinámica participativa con otros movimientos y organizaciones sociales de redescubrimiento de nuevos caminos para la lucha por la tierra, se fue liberando de los partidos políticos, del Estado e, internamente, del centralismo burocrático que la búsqueda de la unidad estratégica de lucha insinuaba en un país con las proporciones territoriales y culturales del Brasil.

Se puede considerar que la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y los dirigentes de sindicatos de trabajadores rurales vinculados a ésta fueron los responsables, en el ámbito de los debates para la constitución del MST,⁷ de su emancipación de la tutela de las iglesias (católica y luterana) y del sindicalismo de trabajadores rurales. Esta posición política quedó explícita en el I Encuentro Nacional de los Sin Tierra, realizado del 23 al 26 de septiembre de 1982, en Goiania,⁸ con la presencia de 28 trabajadores rurales sin tierra oriundos de 16 estados, junto con 22 agentes pastorales vinculados a la Iglesia católica o a la luterana de diversos estados del país.⁹ En la presentación de la Carta a los Compañeros Sin Tierra del Brasil (Comisión Pastoral de la Tierra, 1982: 9) afirmaron:

bajo las más diversas formas desde entonces, durante el gobierno (dos periodos) de Fernando Henrique Cardoso. Un amplio y contemporáneo proceso de sofocamiento económico, político e ideológico de los movimientos y organizaciones sociales populares en el campo está presente, incluso con el apoyo de la agencia de financiamiento multilateral Banco Mundial.

⁵ Me refiero a los sectores de las iglesias católica y luterana que, después del Concilio Vaticano II, postularon una práctica pastoral que fue denominada “teología de la liberación”.

⁶ El sindicalismo de trabajadores rurales en Brasil estuvo históricamente comprometido, con mayor o menor intensidad, con la lucha por la tierra y por la reforma agraria, a pesar de las sucesivas oleadas de cooptación emanadas de las clases dominantes, en particular en los municipios (los sindicatos rurales tienen base municipal).

⁷ En aquella oportunidad había otras alternativas: constituirse, en el ámbito de la CPT, en una comisión de sin tierra y, en otra vertiente, la de municipalizar la lucha por la tierra al subordinarla a los sindicatos de trabajadores rurales, todos de campo de actividad municipal.

⁸ Tanto el Encuentro realizado en Cascavel (enero de 1984) como el de Goiania (septiembre de 1982) fueron denominados, por diversas circunstancias, como I Encuentro Nacional de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.

⁹ Evito citar los nombres de personalidades.

En lo referente a la articulación, los participantes decidieron que deben fortalecer los vínculos regionales, es decir, a partir de las categorías de las grandes regiones, como jornaleros agrícolas del sudeste y sur, arrendatarios del sur, ocupantes de tierras del centro oeste, asalariados de la zona de la caña de Pernambuco, etc. Después de fortalecida esta articulación regional, se debe establecer entonces una articulación nacional más amplia. Para mantenerla, se eligió una coordinación, aún provisoria, de los sin tierra. Entre otras tareas, esta coordinación tendrá la función de preparar el 2º Encuentro Nacional de los Sin Tierra, entre septiembre de 1983 y enero de 1984.

En ese I Encuentro se externó la preocupación, tanto por miembros dirigentes y asesores de la CPT como de los sindicatos de los trabajadores rurales, sobre el futuro del movimiento de los sin tierra, en el sentido de que éste se constituyera como una organización independiente de las iglesias, así como de los sindicatos.

La emancipación social del MST en relación con la CPT fue un importante proceso vivido por ambas partes, ya que jamás cesó, por parte de la CPT, la solidaridad, la cooperación y la defensa de las acciones efectuadas por el MST. En estos 16 años de historia del MST, la CPT fue fundamental no únicamente en el apoyo a las ocupaciones de tierras improductivas sino, sobre todo, en la defensa de los derechos humanos de las personas perseguidas y a las que no se les ha hecho justicia en el campo, entre ellas las denominadas "trabajadores rurales sin tierra".

Durante el I Congreso Nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), realizado en Bom Jesus da Lapa (Bahía), del 28 de mayo al 1 de junio de 2001, 25 años después de su fundación, fue proclamada la distinción entre «tierra como espacio de producción y tierra como espacio de vida». En la Carta da Lapa do Bom Jesus, declararon, una vez más, como una de las acciones prioritarias, luchar por el rescate de la libertad de la tierra, y apoyar y reforzar, entre otras proposiciones, «las ocupaciones de tierra promovidas por los sin tierra, sus movimientos y organizaciones» (Maranhão, 2001: 5 y ss.).

El movimiento masivo de los trabajadores rurales sin tierra se emancipó de las iglesias y de los sindicatos, pero eso no significó que la religiosidad y las luchas de carácter corporativo hubieran sido relegadas ni que fueran subestimadas las experiencias de los demás movimientos y organizaciones sociales de lucha por la tierra en Brasil y en América Latina.

En el I Encuentro Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, realizado en 1984, fueron definidos los principios de organización, las reivindicaciones y las formas de lucha del Movimiento. Algunos de los principios de organización ya establecían su carácter: dirección colectiva, división de tareas (cada uno contribuye según sus capacidades y habilidades), disciplina, estudio, formación de bases (formar sus propios cuadros), lucha de masa (apoyada en la idea de que el derecho asegurado por la ley no garantiza ninguna conquista para el pueblo) y vinculación con la base.

Estas definiciones formales establecidas en 1984 se concretaron, revisaron y ampliaron durante la historia del Movimiento,¹⁰ en una praxis permanente que permite afirmar que en el MST todo es movimiento, es siempre un largo proceso de reflexión, movilización y acción. Esta característica penetra la percepción y corrección de errores y desvíos. En función de la propia vivencia de los trabajadores rurales sin tierra, se acepta socialmente que las innovaciones o las correcciones de errores, sin considerar los casuismos, se implanten después de aflorar un sentimiento interno generalizado favorable en todas las instancias del Movimiento.

Desde esta perspectiva, una crítica correctamente formulada no siempre logra, a corto plazo, obtener resultados concretos. Esto se debe a la complejidad y diversidad de las innumerables instancias directivas,¹¹ su carácter colegiado y, en los asentamientos, a la diversidad de formas de dirección y de percepción de la realidad. La comprensión de las críticas y de los cambios posibles que desde ahí han transcurrido demanda tiempos no solamente cronológicos sino, sobre todo, culturales. Afloran, en realidad, muy variadas maneras de descubrir soluciones para un mismo problema.

¿Cuáles son, entonces, los secretos íntimos que deberíamos conocer para que, supuestamente, comprendiéramos un poco más a este movimiento social de masas que desde hace más de 16 años incomoda a las clases dominantes del país en su lucha por la emancipación social continua de las clases subordinadas del campo? Sugiero que se consideren los siguientes aspectos: acción de la masa, lucha de acción directa expresada en la ocupación de tierras, valores, mística, dirección colectiva, formación de militantes, autonomía del propio Movimiento y su capacidad de, involuntariamente, constituirse como un tipo de sociedad en red con identidad social de proyecto (Castells, 1999: 28).

Sugiero que la revelación de estos secretos íntimos debe partir de la acción de la masa directa en el proceso de ocupación de tierras.

Cuando el MST optó por la acción directa, concretada en la ocupación de tierras, se insertó directamente en una lucha de clases contra el capital.

Se afirma frecuentemente que la lucha de los trabajadores rurales sin tierra es contra el latifundio. Esta afirmación no es incorrecta, pero es insuficiente. La expresión «latifundio», exaltada en América Latina, significa la gran propiedad rural improductiva, pero en el caso brasileño, se refiere a aquel inmueble rural que no cumple la función social.¹² Al excluir que dicha palabra no abarca los variados planes sociales en que se realiza la lucha de los trabajadores rurales sin tierra

¹⁰ Ya se han realizado, desde entonces, otros nueve encuentros nacionales y cuatro congresos nacionales.

¹¹ Descentralizadas en los 23 estados de la federación y en el Distrito Federal donde existe el MST, así como en las regiones dentro de cada estado hasta el nivel más elemental representado por los asentamientos.

¹² En la Constitución Federal de 1988 la palabra "latifundio" fue excluida, pero permaneció en ella la exigencia de que la propiedad privada de la tierra rural cumpliera una función social. Si no se cumple esta disposición constitucional, será susceptible de expropiación social para fines de reforma agraria.

—hoy mucho más amplia y con el objetivo de la reforma agraria y el cambio en el modelo económico—, ha sido poco destacado que los grandes propietarios de tierra estuvieron siempre integrados al empresariado urbano, sea éste comercial, industrial o bancario.

En febrero de 1985, cuando se elabora el I Plan Nacional de Reforma Agraria: I PNRA (implantado por ley federal en octubre de 1985), desde la entonces denominada Nova República (autodenominación del primer gobierno federal civil electo después de la dictadura de 1964 a 1984), fue posible tener acceso directo a las estadísticas catastrales de los inmuebles rurales y, cuál no sería la sorpresa: la mayoría de los grandes propietarios de tierras del país (los latifundistas) residían o tenían la sede de sus empresas en la región metropolitana de la ciudad de São Paulo, el centro industrial del país.

Esta constatación formal, mediante el acceso a las estadísticas oficiales, aunque ya anunciada desde mediados de la década de 1960 por diversos estudiosos del asunto, indicaba que los grandes inmuebles rurales en Brasil estaban concentrados en manos del capital financiero y comercial, y ya no, como muchos suponían, en las de los «coroneles» (jefes políticos propietarios de tierra) de los sertones.

El MST, al optar por la ocupación de los grandes inmuebles rurales improductivos, se enfrentó directamente con el gran capital financiero y comercial, nacional y extranjero. Al romper con las prerrogativas históricas y legales del derecho de propiedad privada de la tierra improductiva, estaba afirmando, de manera directa, que no aguardaría la acción del Estado para realizar la reforma agraria en Brasil. Por lo tanto, se emancipaba de éste. Rompía con la práctica histórica de diversos movimientos sociales de lucha por la tierra y de la lucha sindical y partidaria de reivindicar del Estado la reforma agraria.

La emancipación del MST del Estado, pero sin abdicar de la disputa de los recursos y servicios públicos, ya era evidente desde el I Congreso Nacional del MST,¹³ realizado en enero de 1985, cuando una de las recomendaciones políticas a los militantes fue la de no engañarse con la Nova República. En este Congreso se reafirmó la convicción de que la reforma agraria avanzaría solamente si se ocupaban las tierras por la lucha de la masa (Stédile y Fernandes, 1999: 51).

Esta percepción del carácter tutelar del Estado sobre las clases subalternas del campo (y de la ciudad), por las acciones de coerción y de formación de consenso en la garantía de la hegemonía de las clases dirigentes sobre las demás clases sociales del país, fue determinante para la construcción de la diversidad y complejidad internas del Movimiento.

Como las áreas rurales ocupadas por la acción de masas representaban (y todavía lo hacen) una afrenta para los privilegios legales del supuesto derecho a la

¹³ En la dinámica decisoria del MST hay diferencias tanto de épocas y relaciones de hechos como de tipos de participantes entre encuentros y congresos.

propiedad privada absoluta (*sic*), instituidos de manera consuetudinaria por las clases dominantes, el gobierno federal dificultó siempre la formulación y la aplicación de las políticas públicas agrícolas que se relacionaran con las áreas ocupadas por el MST para la reforma agraria.

Esta circunstancia, determinó que la lucha por la tierra fuera ampliándose gradualmente hacia la lucha por políticas públicas agrícolas compatibles con la situación económica de los trabajadores rurales asentados, lucha por educación y salud públicas en los asentamientos, lucha por la seguridad física de las personas en función de las ofensivas de la represión de la política militar, civil paramilitar y de pistoleros profesionales, lucha por el acceso a los medios de comunicación de masas, entre tantas otras.

En el movimiento de estos frentes de lucha tan diversificados se constituyeron colectivos sectoriales del MST, como frente de masas, educación, salud, cooperación agrícola, género, formación, cultura, derechos humanos, comunicación y relaciones internacionales, todos articulados en cada estado de la federación y en el Distrito Federal y, finalmente, en la nación. La necesidad de la instancia nacional se debió, en Brasil, además de a una unidad estratégica de lucha, a dos situaciones históricas básicas: la presencia fuerte, centralizadora y concentradora del gobierno federal, en especial en la formulación de políticas públicas y, como resultado de esa tendencia, a la consolidación de la arena política nacional como la única susceptible de negociación política en la dinámica de las luchas de clases.

La complejidad de estos procesos se estimará si se tiene como referencia que en la actualidad hay, aproximadamente, 1 500 asentamientos bajo la hegemonía del MST. Además, estos presentan formas diferenciadas de gestión en una amplia gama que engloba desde sistemas presidencialistas hasta enteramente colectivistas (Carvalho, 1998). Ensayan procesos de participación y organización consensuados (Carvalho, 1994), y se oponen a la lógica gubernamental dominante, explícita en los programas de desarrollo rural sustentable financiados por el Banco Mundial, que exigen la creación de organizaciones populares¹⁴ para que las personas y familias reciban financiamientos gubernamentales subsidiados.

La estrategia de desarrollo autoritario —de arriba hacia abajo— de la sociedad civil, por medio de políticas públicas compensatorias (financiamientos ya sea subsidiados ya a fondo perdido, es decir, sin expectativas de reembolso para los gobiernos), se ubicó en el marco de las reformas macroeconómicas promovidas por el FMI para mitigar el proceso de concentración creciente de renta y de riqueza.

La necesidad de «compensar» tiene un componente de equidad y de justicia, asociado a la racionalidad en la distribución de los costos de la crisis, la estabilización y el ajuste a corto y mediano plazos. Pero integra también la racionalidad de la reforma

¹⁴ Proceso al que he denominado de «participación y organización forzados» (Carvalho, 1994).

económica y de la reforma social. Se trata, de hecho, de recuperar transitoriamente los equilibrios distributivos que se distorsionaron por la forma como los distintos sectores de la sociedad absorbieron los costos de la crisis y de las reformas emprendidas para superarla. (BID, 1993: 26.)

Para rendir cuentas de las luchas locales, regionales, estatales y nacionales están en movimiento los colectivos sectoriales¹⁵ anteriormente citados, en lo nacional, en cada uno de los 23 estados y en el Distrito Federal, en los cuales el MST tiene presencia efectiva. Además, hay que considerar que en el ámbito de cada estado están constituidas direcciones regionales, de cuatro a siete por estado en promedio.

Cada instancia, desde el asentamiento, pasando por las direcciones regionales, estatales y la nacional, posee autonomía relativa. A manera de ilustración se puede usar la dinámica de estudio, reflexión y debate de los temas para los encuentros nacionales, así como para los congresos: los asuntos se discuten desde los núcleos de base, unidad de articulación de las familias (por cercanía o en calidad de vecinos) dentro de un asentamiento, hasta llegar a la dirección nacional.

Estos centenares de centros de decisión, aliados al carácter de masa del MST, le dan a este Movimiento una dinámica propia: la diversidad y la velocidad de las alteraciones en la correlación de fuerzas políticas e ideológicas no propicia condiciones objetivas para la cristalización de estructuras organizacionales burocráticas, ni entre las instancias de dirección ni entre los colectivos sectoriales. Una de las razones reside en el origen del MST: la ocupación de la tierra.

Este hecho se da a partir de un movimiento de masa local, en el límite, y rara vez en el ámbito microrregional. Para una ocupación de tierra se movilizan centenares y hasta miles de familias (hombres y mujeres, niños, jóvenes y viejos), es decir, miles de personas. Sería muy difícil suponer que, por más grande que fuera la disciplina para las acciones de masa en la ocupación de la tierra, ésta podría transferirse y cristalizarse en una organización burocrática. Son otros los valores que proporcionan la unidad interna del MST. Tal vez ahí resida uno de los más complejos secretos íntimos del Movimiento.

Sugiero que la identidad social construida por el MST, al lado de sectores de clases subalternas en el campo en el transcurso de la lucha por su emancipación social continua, se debió a la capacidad política e ideológica que este Movimiento tuvo para consolidar la identidad social de resistencia¹⁶ que, tradicionalmente, los movimientos y organizaciones sociales de lucha por la tierra terminan por construir.

¹⁵ Se han constituido otros colectivos sectoriales, como el del ambiente, el de la convivencia con la sequía en el nordeste brasileño, etcétera.

¹⁶ «Identidad de resistencia: creada por autores que se encuentran en posiciones/condiciones depreciadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, construyendo, de esta manera, trincheras de resistencia y supervivencia con base en principios diferentes de los que penetran a las instituciones de la sociedad, o incluso opuestos a estos últimos» (Castells, 1999: 24).

Al mismo tiempo que se consolidaba la identidad de resistencia, esta misma era superada por la ampliación de los planes sociales en que acontecieron las luchas. En este movimiento contradictorio de consolidación de la resistencia y de su superación se fue construyendo la identidad del proyecto, que ocurre «cuando los actores, al utilizar cualquier tipo de material cultural a su alcance, construyen una nueva identidad capaz de redefinir su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social» (Castells, 1999: 24 ss.).

La identidad de proyecto de este movimiento social está en construcción. La conciencia social de que la obtención de la tierra por sí sola es insuficiente para la realización de sus objetivos económicos inmediatos ya es efectiva; la percepción de que las demás luchas sociales, como educación, salud, cultura, formación, etc., son indispensables para su emancipación de dos de las tres barreras que los dominan —el latifundio y la ignorancia—,¹⁷ es creciente y ya les da significado; la tercera, el capital, en función de los procesos de exclusión social y aumento de la pobreza en el país, va poco a poco dándole sentido a los sin tierra.

Entretanto, derribar la barrera del capital exigirá una identidad social más amplia que aquélla restringida a los sin tierra o incluso a las clases subalternas en el campo. Presupondrá, para que la identidad del proyecto emerja como capaz de buscar la transformación de toda la estructura social del país, la unidad de las clases sometidas del campo y de la ciudad. Al luchar a favor de esta perspectiva, el MST amplía sus alianzas sociales y políticas entre los sectores de las clases subordinadas de la ciudad.

Como propone una identidad de proyecto, necesaria para la emancipación social continua de las clases sometidas del campo, se podría suponer que el MST defenderá la hipótesis de que los sin tierra serían portadores, en sí, de la fuerza social capaz de transformar la estructura social del país. Ésta es una percepción equivocada de la estrategia del MST, y en función de ella afloran alusiones de que el MST se estaría convirtiendo en un partido político campesino.

Supongo que esta lectura de la dinámica del movimiento de masas deja de percibir que la lucha social campesina (y la de los trabajadores en sentido amplio) está, predominantemente, determinada por la necesidad y no por las aspiraciones y utopías, como ocurriría con sectores de las clases medias urbanas. La lucha contra la barrera del capital se les ha hecho evidente a los sin tierra como una necesidad, ya sea por la conciencia que adquieren de los procesos de explotación a los que están sometidos al enfrentar los mercados de insumos y de productos, ya sea en función de la concreta pobreza crónica en que se encuentran, a pesar de las mejoras que han obtenido en los demás planes sociales de sus vidas, como educación, salud, cultura y organización.

¹⁷ El MST, considera simbólicamente, que su lucha social objetiva es la de derribar tres barreras: la del latifundio, la de la ignorancia y la del capital.

Los nuevos significados que los diferentes planes sociales de lucha, derivados de la pelea por la tierra, han proporcionado a los que no la poseen —y que se van constituyendo en la base de su identidad social como sin tierra, aunque muchos ya la hayan conquistado—, han sido revelados por los valores que el MST adopta y defiende. Aliado a estas virtudes, como referencia hacia los comportamientos personales y hacia las relaciones de intersubjetividad entre los sin tierra (Carvalho, 1999), el MST ejerció siempre el desarrollo de símbolos y místicas.

Sugiero, además, que el movimiento de masas del MST logró desarrollar internamente una sociedad en red. Las multitudes que ocupan las tierras de los latifundios o de los grandes capitalistas; la diversidad de tipos de personas que configuran estas multitudes; los centenares de centros de decisiones gestados y administrados por tantos perfiles socioculturales diversos; las tentativas de cooptación, por parte de los organismos gubernamentales, de militantes, líderes locales, dirigentes y amigos del MST; las presiones políticas e ideológicas de las clases dominantes que intentan impedir que estas multitudes derriben las barreras del latifundio y de la ignorancia; la represión militar, las amenazas de muerte y de tortura, los asesinatos de líderes, de familias sin tierra y de sus dirigentes; las manipulaciones de las políticas públicas, las ofensivas ideológicas y financieras del Banco Mundial para implantar la reforma agraria de mercado (*sic*); en fin, son muchas las dimensiones, los planes sociales y las fuerzas actuantes en éstos, contrarias a la construcción de la identidad social sin tierra, que difícilmente se supondría que estas conquistas habrían sido realizadas a partir de estructuras de organización burocráticas o de organizaciones sociales cuya pertinencia sería la estabilidad o el dirigismo central.

Una de las posibles evidencias de que el MST ha superado las formas corporativistas y los mecanismos liberales de la representación política está en la práctica de las audiencias y reuniones con las autoridades gubernamentales: siempre comparecen decenas de sin tierra. No se presentan dos o tres representantes, sino colectivos de trabajadores que son portadores de decisiones de la masa de trabajadores en los asentamientos. Esta práctica es, incluso, noticia en los medios de comunicación masiva, en función de las dificultades constantes que se generan por la presencia, ya sea en los gabinetes ministeriales, sea en el del presidente de la República, de decenas de representantes de trabajadores, cuando el protocolo instituido exige la presencia de tan sólo unos pocos.

A veces, los investigadores sociales han estudiado e interpretado partes de esta totalidad en movimiento denominado MST y, en función de este enfoque (tanto por el sesgo sincrónico como el diacrónico), son inducidos a conclusiones no siempre pertinentes. La cuestión de la colectivización en los asentamientos es un caso significativo.

Son pocos los asentamientos en el país que ejercitan la cooperación en la producción o en la comercialización expresa, sea ésta en la forma cooperativista

tradicional o en las cooperativas colectivizadas. Lo que predomina, y denota una debilidad en el proceso de organización de la producción para superar el individualismo económico, es la iniciativa empírica de la producción agropecuaria o en la extracción familiar tradicional de productos naturales no cultivados.

Hacia fines del año 2000 había aproximadamente 250 000 familias en alrededor de 1 500 asentamientos que se identificaban con el MST. Esto significó un área liberada del poder de los capitalistas de siete millones de hectáreas. En estos asentamientos, hasta junio de 2001, se constituyeron y están operando 49 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) de régimen colectivista, que abarcan a 2 299 familias y 32 Cooperativas de Prestación de Servicios (CPS), que incluyen a 11 174 familias y siete cooperativas más, dos de crédito, dos de trabajo y tres de pequeños productores, lo que da un total, en este conjunto de cooperativas, de 13 473 familias. Están en operación en estos asentamientos 70 unidades agroindustriales del Sistema de Cooperativismo de los Asentamientos (SCA), y 27 más en proyecto. Paralelamente al SCA, se constituyeron centenares de asociaciones de productores, inducidas por las políticas públicas al ser indispensables para el recibimiento de créditos rurales subsidiados.

La mayoría de las 49 CPA, inspiradas en un tipo de cooperativa cubana, se constituyó como una forma de resistencia política y, al mismo tiempo, de ensayo para la superación del individualismo económico. Fueron consecuencia de dos factores coyunturales, aunque contradictorios: la fuerte represión económica, política, ideológica y policial desencadenada contra el MST durante el gobierno de Collor de Mello (1990-1992), cuando el MST sufrió la más fuerte persecución política y policial, y exigió retrocesos defensivos en la lucha por la tierra¹⁸ para evitar su exterminio. Uno de estos tipos de refugio creados fueron las CPA. El otro factor fue la necesidad de enfrentar políticamente, mediante una forma de organización de la producción más compleja, la situación oligopolista y oligopsónica de los mercados de insumos y productos agropecuarios, teniendo en cuenta la completa liberación de los mercados por la eliminación de mecanismos como las adquisiciones del gobierno federal y las cantidades de mercancía disponibles (*stocks*) reguladoras, impuesta a la población a partir del gobierno de Collor. Las CPA y, posteriormente, las CPS fueron respuestas a situaciones concretas vividas por los trabajadores rurales asentados sin tierra.

No obstante, si a partir del gobierno de Collor y del aumento de las prácticas de represión de los movimientos y organizaciones populares el MST tuvo que buscar formas defensivas, como las CPA, para evitar su exterminio, hubo también un resurgimiento de las fuerzas y energías sociales dentro del propio MST, que fueron canalizadas hacia diversas actividades ofensivas, entre éstas las marchas.

¹⁸ La lucha por la tierra presentó dos grandes ofensivas para la ocupación de ésta: en 1986 y en 1996. Las dos ofensivas se dieron como respuesta a la ineptitud gubernamental en la implantación de la reforma agraria y a las tentativas de cooptación de los sectores de centroizquierda por el gobierno federal.

Entre 1989 y 1994, el lema de orden era «ocupar, resistir y producir».¹⁹ No obstante, en los años 1990 y 1991, las acciones se concentraron en resistir. La marcha surge como iniciativa para salir de la tendencia al aislamiento, inducida por la acción defensiva del propio MST y por las campañas gubernamentales en los medios de comunicación masiva. Su objetivo era «mostrarle a la sociedad que un problema social sólo se resuelve con la adopción de medidas políticas» (Stédile, 1999: 151).

Las marchas fueron transformadas no sólo en acción política, sino también educativa, cuando los marchistas, al pasar por las ciudades, localizaban a los líderes populares de la región, hacían juntas en las escuelas y parroquias, ofrecían alimentos producidos en los asentamientos, etc. En los días en que los marchistas permanecían acampados junto a las pequeñas ciudades, la atención se volvía hacia ellos y hacia sus acciones de animación política.

La acción política y pedagógica de las marchas hizo evidente que un movimiento social de masas podría realizar una movilización prolongada y de gran alcance, sin depender de los organismos gubernamentales, partidarios ni sindicales (Martins, 2001). La gran marcha²⁰ hacia Brasilia, la Marcha Nacional por la Reforma Agraria, Empleo y Justicia, se realizó del 17 de febrero al 17 de abril de 1997,²¹ cuando otra tentativa del gobierno federal para aislar al MST de la opinión pública y del pueblo reafirmó el entendimiento de que solamente las acciones masivas podrían evitar el aislamiento político de los movimientos sociales.

Una lección se aprendió en este periodo: es posible mantener tácticas ofensivas cuando se están viviendo coyunturas caracterizadas por la resistencia. Pero, para que eso ocurra, se vuelve una necesidad estar del lado del pueblo y compartir con éste el gesto colectivo de lucha por la emancipación social y de reafirmación de su identidad social.

A pesar de las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores rurales sin tierra, su identidad social se realimenta siempre por la práctica de los valores y de la mística captados con profundidad por el MST en todos sus actos.

Los valores o las virtudes, «esta fuerza que actúa, o que puede actuar [...] Es una disposición adquirida para hacer el bien» (Compte-Sponville, 1995: 7-9), que se desean en cada militante del MST, son adoptados explícitamente, sin prejuicios y sin volverse precepto. Siete valores son enfatizados: solidaridad, belleza, valoración

¹⁹ Este lema de orden fue alterado posteriormente: «Reforma agraria, una lucha de todos», en 1995 (III Congreso Nacional del MST) y «Reforma agraria para un Brasil sin latifundios», en 2000.

²⁰ Los trabajadores rurales sin tierra partieron de tres estados: São Paulo, Minas Gerais y Mato Grosso. Eran 1 330 personas. Caminaron aproximadamente 1 000 km hasta Brasilia, donde fueron recibidos el día 17 de abril de 1997 por 100 000 personas.

²¹ El 17 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina. Esta fecha fue instituida por Vía Campesina, organización mundial articuladora de las organizaciones y movimientos sociales del campo, en homenaje a la masacre de 19 trabajadores rurales sin tierra, asesinados por la policía militar del gobierno del estado de Pará, en Eldorado dos Carajás, el 17 de abril de 1996.

de la vida, gusto por los símbolos, gusto de ser pueblo, defensa del trabajo y del estudio, y capacidad de indignarse (Bogo, 1998: 6 y ss.).

En los hogares y en las escuelas de los asentamientos, en los cursos, encuentros y juntas de formación, en el frente de masas durante las ocupaciones, en los campamentos, en los actos públicos, en fin, donde una persona militante del MST está presente se espera que ejercite los valores compartidos con sus compañeros. Y, más aún, consigo mismo. Las campañas de embellecimiento de los asentamientos, cuando la noción de lo bello se debate y se refleja en lo cotidiano, es un secreto íntimo que muchos de los sectores considerados de centroizquierda omiten, aun en los movimientos de masas. Desde la ocupación de tierras que realizan miles de familias, cuando la atención y la alerta despiertan los instintos de defensa y de supervivencia, hasta la flor que brota con exuberancia en las plazas de los asentamientos, hay muchos planes sociales vividos por las personas sin tierra que les proporcionan emancipaciones personales y sociales continuas, en una humanización plena de significados e ideales.

En este movimiento de rescate y reafirmación de valores, la mística se vuelve parte de la vida como forma de manifestación colectiva de un sentimiento. Los símbolos de la mística son rescatados de diversas fuentes, como la naturaleza contemplativa de la vida campesina, la cultura popular musical y la devoción religiosa (Bogo, 2001: 2). Los símbolos son diversos, entre ellos se encuentra la bandera, el himno, el *Jornal Sem Terra* (periódico), las herramientas, los frutos del trabajo en el campo y la gorra. El constante recuerdo de los compañeros muertos hace que, con su ejemplo, renazca más fuerte en los sentimientos de cada sin tierra. Ellos no están ya ausentes sólo en el seno de una familia, sino de todo el Movimiento.

En el movimiento de emancipación social continua de los trabajadores rurales sin tierra se aprendió que si los cursos son necesarios para la formación de los militantes,²² no son suficientes. Todos los colectivos de formación deben tener en cuenta las 10 lecciones aprendidas en la práctica de las luchas sociales: que la militancia se hace por la práctica, por la experiencia, por la ciencia, por la cultura, por la disciplina, por el ejemplo, por la convivencia y la repartición, por el espíritu de sacrificio, por el trabajo productivo y por la crítica y autocrítica. Los cursos y estas 10 lecciones, así como las virtudes y cualidades personales de cada militante que necesitan ser cultivadas, forman parte de un amplio movimiento que es, al mismo tiempo, de formación, de aprendizaje y de transformación del mundo.

En todos los cursos, juntas y encuentros, la mística recuerda a los luchadores del pueblo que fueron paradigmas en la historia de las luchas de liberación y de emancipación social. Grandes pancartas con las caras estampadas de Marx, Engels,

²² Desde 1999 el MST, mediante un convenio con la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), realiza anualmente cursos masivos durante 10 días seguidos, de tiempo completo, para jóvenes militantes. En estos tres años (1999 a 2001) participaron aproximadamente 4 000. Esta práctica de formación intensiva y masiva se propaga a otras universidades del país.

Lenin, Rosa Luxemburgo, Olga Benário, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Ho Chi Minh, Ernesto Che Guevara, Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares, Carlos Marighela, Paulo Freire, Florestan Fernandes, José Gomes da Silva y, recientemente, Milton Santos, entre tantos otros, se hacen presentes con sus ejemplos de vida. Ritos como éstos, a veces interpretados como culto al pasado y al anacronismo, se valoran para que la ruptura y la reconstrucción entre las utopías del pasado, las que se construyen en el presente y las que deberán florecer en el futuro, sean una referencia.

La dinámica del MST es un reflejo de su práctica histórica. Los valores y la mística son destacados y reforzados por la educación en los asentamientos y campamentos.

En los asentamientos, en julio de 2000, había 1 800 escuelas de enseñanza básica [de la 1ª a la 8ª serie (primaria y secundaria)] con 3 800 educadoras y 150 000 estudiantes; había 1 200 educadores de jóvenes y adultos y 25 000 alumnos jóvenes y adultos; 250 *cirandas* infantiles (nombre que el MST les da a las guarderías) y 25 trabajadores rurales sin tierra cursando medicina en Cuba, además de decenas que estudian en escuelas de nivel superior en Brasil. El MST, por medio del sector de educación, mantiene seis cursos de formación de educadores y técnicos, tres escuelas de enseñanza media en las áreas de gestión de cooperativas y organización de la producción y un curso supletorio de 1º y 2º grados. El MST estableció convenios y acuerdos con 25 universidades, públicas y privadas, para la realización de diferentes tipos de cursos.

A partir de 1997, y como referencia a la trayectoria de la educación escolar, el MST realizó varios encuentros y conferencias nacionales sobre educación. El I Encuentro Nacional de Educadoras y Educadores de la Reforma Agraria (I ENERA), que se llevó a cabo en 1997 en las dependencias de la Universidad de Brasilia, con el apoyo de la propia universidad, de la UNICEF, de la UNESCO y de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), tuvo una participación de aproximadamente 700 personas, entre profesores de escuelas de campamentos y asentamientos, profesores de primaria de jóvenes y adultos, y educadores infantiles, así como de delegaciones de 19 estados y del Distrito Federal (Caldart, 2000: 175).

Esta capacidad de ser y hacer del MST está abierta a toda la sociedad brasileña y a los extranjeros que visitan y colaboran en sus colectivos sectoriales. Se vuelve permeable a las diversas formas de pensar y actuar. Para que sus proposiciones sean diseminadas, incluso en el sentido de encontrar caminos hacia la construcción continua de una identidad de proyecto en las clases populares del país, se utilizan diversos medios de comunicación masiva.

Desde 1987 el MST mantiene un programa de radio de alcance nacional, con ediciones semanales. En función de la importancia de la radio en el proceso de comunicación rural, el MST adquirió horarios en varias estaciones particulares o vinculadas a las iglesias en los diversos estados del país, y empezó a estimular la

creación de estaciones comunitarias. Desde el 2000 produce el programa radial *Vozes da terra* (*Voces de la tierra*), que es distribuido mensualmente a todas las estaciones del MST, y a las católicas, a las universitarias y a algunas comerciales. Aproximadamente 2 000 estaciones de radio reciben este programa.

Además de eso, al mismo tiempo que se amplía la penetración de los programas radiofónicos, desarrolla acciones a través de otros medios de comunicación, la mayoría del propio MST, entre los cuales se encuentran el periódico *Jornal Sem Terra* (JST); la *Revista Sem Terra* (RST); carteles, exposiciones; conferencias; concursos de danza; exposiciones de fotografía y artesanías; ferias; concursos de poesía, de música y de la canción; producción y exhibición de películas, encuentros, venta de productos con la marca de los sin tierra y de la Reforma Agraria. Ha avanzado la comunicación interna en el MST y de éste con otros organismos de la sociedad civil nacional e internacional mediante la red de computadoras y navegación por internet. En la red existe, desde hace cinco años, una página *web* del MST abierta internacionalmente.

Es este complejo objetivo y subjetivo de asentamientos, campamentos, instancias decisorias, frentes de masas, colectivos sectoriales, escuelas, centros de salud, medios de comunicación, formación de militantes, valores, mística, símbolos y personas motivadas, movilizadas y participantes, lo que configura el movimiento social de masas denominado Movimiento de los sin tierra.

Desde hace 16 años, este Movimiento construye, con varias fracciones de las clases subalternas del campo, una identidad social de resistencia. Se moviliza solidariamente con otros movimientos y organizaciones sociales, partidos, sindicatos, iglesias y personalidades hacia la construcción de una identidad de proyecto de las clases oprimidas del campo y de la ciudad. Comparte la utopía de transformar la estructura social brasileña mediante la acción de masas.

¿Por qué el MST se consolidó como movimiento social de masas? Antes que nada, porque obtuvo conquistas, logró resultados prácticos en todos sus frentes de lucha. Sus militantes, simpatizantes y el conjunto de la sociedad brasileña pueden percibir y verificar las victorias alcanzadas.

3. BUSCANDO OTROS CAMINOS

Algunos estudios sobre el MST²³ podrían intentar dar a conocer este movimiento de masas desde el punto de vista holístico, en el que las dimensiones sincrónica y diacrónica se crucen sistemáticamente a través de algunas divisiones periódicas posibles, pero teniendo siempre en consideración la totalidad de la formación

²³ Obsérvese con atención el movimiento social de masas sin tierra que se constituyó en Bolivia durante el Primer Encuentro Nacional de Campesinos Sin Tierra de Bolivia, realizado el 9 y 10 de junio de 2001, en Yacuiba, Gran Chaco (América, 2001: 17).

social brasileña, en un esfuerzo por que lo económico, lo político y lo ideológico se disocien analíticamente.

Supongo que intentar comprender las formas de cooperación en los asentamientos sin tomar en cuenta los cambios en la política gubernamental hacia la agricultura y, en especial, aquélla para la reforma agraria; que estudiar la pedagogía del colectivo sectorial de la educación sin la debida articulación con las acciones conservadoras de enseñanza-aprendizaje impuestas por los gobiernos en las escuelas públicas de 1º grado (primaria y secundaria); que interpretar las ocupaciones de tierras rurales y de los predios públicos sin rescatar los largos procesos de negociación anteriores a estas acciones directas entre los colectivos del MST y las autoridades gubernamentales; que intentar caracterizar las formas de participación dentro de un movimiento de masas como el MST sin considerar que la complejidad del desarrollo contemporáneo de la sociedad civil brasileña se dio bajo la hegemonía de las ideas liberales conservadoras hegemónicas, reproducidas tanto por iglesias y escuelas como por los medios masivos de comunicación; que las microconquistas sociales se dieron en los espacios tutelados por las clases dominantes; que desconocer u omitir el amplio proceso de cooptación de sectores importantes de la intelectualidad brasileña, sería de poca ayuda para revelar los secretos íntimos del Movimiento.

Para una posible identificación del carácter diferenciado de este movimiento social de masas, yo podría suponer —y que sean tolerantes los filósofos— que el MST, incluso sin conciencia de esto, sobrepasó la razón centrada en el sujeto (Kant), lo cual privilegiaría el ego solitario, hacia la razón comunicativa (Habermas), en un acuerdo consensual alcanzado mediante la interacción comunicativa entre iguales (véase Kumar, 1997: 191).²⁴

En este sentido, el MST, entendido como un movimiento social de masas, no se fue transformando gradualmente en una organización social de ese tipo, sino que fue adquiriendo un carácter similar al de una sociedad en red, similar a la dominante transformada o adaptada a la globalización. Podría sugerir, conforme Castells (1999: 426) que:

El segundo y principal agente identificado en nuestra jornada hacia los campos poblados por movimientos sociales consiste en una forma de organización e intervención descentralizada e integrada en red, característica de los nuevos movimientos sociales, que refleja la lógica del dominio para la formación de redes en la sociedad informacional y reaccionando contra ella... Estas redes hacen más que simplemente organizar actividades y compartir información. Representan a los verdaderos productores y

²⁴ No tuve la intención de usar ni reduccionista ni mecánicamente las ideas de Kumar. Cito el pasaje de arriba tan sólo como referencia para la reflexión. La responsabilidad de lo afirmado, y su contextualización, es exclusivamente mía.

distribuidores de códigos culturales. No sólo por la red, sino por sus múltiples formas de intercambio e interacción.

La cuestión central que debe destacarse en la comprensión de la trayectoria y del carácter del MST es menos la razón y sí el movimiento de emancipación social continuo de la dominación, y de ahí la problemática planteada por la búsqueda de la autoconciencia, la autodeterminación y la autorrealización universales.

4. SIENDO ASÍ...

Estoy tentado a sugerir que el MST transmite, en su propio movimiento, no sólo una exigencia metodológica de repensar la naturaleza y el carácter de los movimientos sociales de masas, sino que hace aflorar nuevos elementos de indagación sobre la relación entre el movimiento social de masas y su organización social. Propongo como hipótesis que el MST tiene más características de un tipo de sociedad en red que de una organización social de masas. Y todo lleva a creer que éste cuestiona, involuntariamente, como práctica social, la determinista relación unívoca de movimiento social para organización social.

Este tipo de sociedad en red proporciona, de alguna manera y con gran flexibilidad, el surgimiento de una masa de personas con utopías no siempre plenamente consciente de ellas, muchas veces llena de incongruencias, pero con una energía humanizadora que enfrenta, rompe y presenta a la sociedad en la cual se insertan proposiciones, pensamientos y aspiraciones mucho más allá, por la superación, de aquellas que configuran el pensamiento único neoliberal y, en éste, el socialdemócrata. No tiene miedo de defender, aunque ora tímidamente, ora sin completo conocimiento del concepto erudito, los valores del socialismo.

El redescubrimiento de nuevos códigos culturales para la construcción de la identidad social de los sin tierra está en movimiento por los flujos de información y de símbolos que les abren comunicación con las demás clases subordinadas del país y de otros países de América Latina.

En este sentido, el socialismo, y los valores que intrínsecamente presupone, ya no asustan más o desmovilizan a amplios sectores de las clases subalternas del campo, hoy identificados como sin tierra.

BIBLIOGRAFÍA

- Alencar, Francisco A. G., *Segredos íntimos: a gestão nos assentamentos de reforma agrária*, Universidade Federal do Ceará Edições, Brasil, 2000.
 "Bolivia: Encuentro nacional de los sin tierra", *América Latina en movimiento*, núm. 335, año XXV, 2ª época, 26 de junio de 2001, ALAI, Quito.

- BID, *Reforma social y pobreza: hacia una agenda integrada de desarrollo. Trabajos del Foro sobre Reforma Social y Pobreza*, BID/PNUD, Washington/Nueva York, 1993.
- Bogo, Ademair, "A Vez dos Valores", *Cuaderno de formación*, núm. 26, MST, enero de 1998, São Paulo.
- , *A mística razão da persistência*, 2001 (mimeo.).
- Carvalho, Horácio Martins de, *A participação e a organização consensuadas como uma das dimensões da cidadania*, Projeto Áridas/GT VII/Integración con la sociedad/Seplan-PR, Brasília, 1994 (mimeo.).
- , *Formas de associativismo vivenciadas pelos trabalhadores rurais nas áreas oficiais de reforma agrária no Brasil*, IICA/MEPF/NEAD, agosto, Brasília, 1998 (mimeo.).
- , *A interação social e as possibilidades de coesão e de identidade social no cotidiano da vida social dos trabalhadores rurais nas áreas oficiais de reforma agrária no Brasil*, IICA/MEPF/NEAD, Curitiba, 1999 (mimeo.).
- Castells, Manuel, *O poder da identidade. A era da informação: economia, sociedade e cultura*, vol. 2, Paz y Terra, São Paulo, 1999.
- Comissão Pastoral da Terra, *Boletín*, VIII (42), septiembre-octubre 1982, Goiania.
- Comte-Sponville, André, *Pequeno Tratado das Grandes Virtudes*, Martins Fontes, São Paulo, 1995.
- Kumar, Krishan, *Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna: Novas Teorias sobre o Mundo Contemporâneo*, Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1997.
- Maranhão, Malú, «Celebração da terra, água, direitos: celebração da vida», *Boletín de la Comissão Pastoral da Terra*, XXI, (163) 2001, 5-10.
- Martins, Adalberto, correo electrónico enviado al autor el 19 de julio de 2001.
- Salete Caldart, Roseli, *Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola*, Vozes, Petrópolis, Brasil, 2000.
- Stédile, João Pedro, y Bernardo Mançano Fernandes, *Brava gente: a trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil*, Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 1999.

VI. El MST y la canonización de la acción colectiva (respuesta a Horácio Martins de Carvalho)

Zander Navarro

INTRODUCCIÓN

Una tajada de carne de serpiente
 Hervid, coced, en la caldera bien caliente.
 Ojo de salamandra y pata de sapo,
 Lengua de can y pelos de murciélago,
 Diente de víbora venenosa y sucia,
 Pata de lagarto y ala de lechuza [...]
 Macbeth: —¿Qué hacéis?
 Hechiceras: —Una acción que no tiene nombre.
 (SHAKESPEARE, *Macbeth*, acto IV, escena I.)

En calidad de portavoz del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el capítulo de Horácio Martins de Carvalho es, al mismo tiempo, auspicioso y melancólico en sus argumentos en contra y, tal vez, sombrío en sus presagios. El documento debe de ser nostalgia, primeramente, ya que es un hecho rarísimo esta decisión de la organización, en sus casi 20 años de existencia, de responder a un análisis crítico sobre el cual fue informada. En su historia, el Movimiento prefirió usualmente optar por el silencio en relación con los analistas y observadores que, eventualmente, hayan puesto en duda decisiones y opciones de la organización. De esta manera, a la luz de la respuesta, tal vez aún sea posible mantener esperanzas de que el MST repensará su trayectoria respecto a su capacidad de relacionarse con otras organizaciones populares, entidades de apoyo y asesoría, representaciones variadas de la sociedad, intelectuales progresistas y diversas instituciones, para volverse más abierto al diálogo y sin predefiniciones sobre los rumbos de desarrollo agrario y sus posibilidades de transformación socioeconómica, en especial en relación con las oportunidades reales de emancipación política de los sectores sociales subalternos del vasto mundo rural brasileño.

Contrariamente a lo sugerido por De Carvalho, la prohibición del MST del diálogo político con el llamado «campo democrático y popular» se distancia de una fantasmiosa «firmeza ideológica», pero demuestra, inversamente, una nítida fragilidad, pues viene forzando a sus dirigentes y militantes al malabarismo retórico, a la analogía de la propia organización y a la estrechez analítica. La repetición de formas de acción colectiva y de «visiones del mundo» abrazadas por sus dirigentes, sorprendentemente únicas y homogenizadas en los diversos estados, en un país que, por el contrario, es tan diverso y heterogéneo, refleja, eso sí, inseguridad ideológica e incertidumbre en cuanto a los caminos que se deben seguir. Al formar a sus jóvenes militantes a partir de limitados marcos de referencia, la organización recurre a una visión instrumentalista de la política como medio de incidir —por medio de militantes que deberían dominar su propio arbitrio y libertad de interpretación— no en la realidad sobre la cual actúan, sino sirviendo, antes que nada, a otros propósitos (igualmente señalados en el artículo original), no siempre manifestados claramente a todos los miembros del Movimiento. Adicionalmente, como es notorio, prácticamente ninguno de los convenios celebrados por la organización con las universidades públicas, citados por De Carvalho, amplía realmente un conjunto de conocimientos nuevos para los militantes sin tierra que participan, sino que sólo cancela la propia visión política del Movimiento sobre el mundo rural. Desafortunadamente, en nombre de la disciplina y de incontables recetarios comportamentales impuestos, sus militantes ni siquiera alcanzan algún tipo de conciencia política propia, pues son compelidos a la repetición monocórdica del discurso de sus principales dirigentes, al quitarles un expresivo margen de especificidad de acción e interpretación de formas de lucha adecuadas a la diversidad regional del país, poniendo obstáculos a los talentos organizativos y cercenando la formación libre y genuina de nuevos liderazgos.¹

Aun así, como resultado de su visibilidad social tan expresiva, que De Carvalho destaca de manera correcta, actualmente ya son numerosos los estudios realizados

¹ Se aproximan más a lo jactancioso y menos a «normas de organización» los ejemplos, que se repiten, de la creación de códigos disciplinarios para los militantes del MST y, aún más grave, para las familias ya asentadas (en este último caso, imposición no sólo ilícita, sino ilegítima). Inicialmente, en la segunda mitad de la década de los años ochenta, se difundió la conocida e infamante cartilla que describía los supuestos «vicios» de los agricultores que no deseaban someterse a los colectivos instituidos por la organización, «vicios» que deberían ser combatidos por los militantes, a cualquier precio, para formar al «Nuevo Hombre». De Carvalho, en su capítulo de respuesta, sin modestia señala las nuevas normas comportamentales. Al citar al ideólogo oficial del Movimiento, Ademar Bogo, un creativo hijo de pequeños agricultores de Santa Catarina, radicado desde hace años en el nordeste del país, muestra que además de la superación de los supuestos «vicios», a las familias sin tierra también se les empezó a cobrar, en los años noventa, en función de sus nuevos ingresos, como aquellas normas que exigen de todos la adhesión a la cartilla de los «siete valores principales» y, también, al estricto cumplimiento del manual de las «10 lecciones» que los llamados colectivos de formación deben considerar en sus actividades (véase también Bogo, 1999). Exprimididas entre el peso de la dominación política de las oligarquías agrarias, por un lado, y las excentricidades propuestas por el MST, por otro, se torna difícil imaginar cuáles son las oportunidades reales de emancipación de las familias rurales más pobres, incluso en el sentido estricto enfatizado en el capítulo original contenido en este conjunto de textos.

sobre algunas partes de la acción política, características de la organización y de las diversas facetas de la vida social con las cuales el MST se relaciona, aunque, como también se ha enfatizado, son todavía escasos los análisis que han osado asomarse a este proceso social como un todo. Probablemente, al considerarlos en forma global, pueden tipificarse en dos los estudios hechos, excluyendo la literatura propagandística, los artículos periodísticos o aquellos que atienden las finalidades puramente partidarias.² Primeramente, incluyendo la mayoría de las referencias académicas producidas hasta aquí, se encuentran los estudios orientados por el «encantamiento ingenuo», fruto no necesariamente de la incapacidad de investigación social de sus autores, sino derivados de análisis que anteceden falsos postulados, cualesquiera que sean, sobre una idealización del objeto de estudio y una «positividad» establecida *a priori*, la cual santifica, antes de conocerlas incluso, las organizaciones que representan a las clases subalternas, vueltas virtuosas por definición previa. Normalmente son estudios apresurados, cuando implicarían visitas de campo y recolección de datos y, así, permanecen en la superficie de los fenómenos y procesos sociales. Sus autores son, casi siempre, miembros de las clases medias urbanas, y tal hechizo puede, muchas veces, adoptar rasgos patéticos e, incluso inesperadas aberraciones antropológicas. Como cuando, por ejemplo, esos estudiosos se sorprenden con las «palabras» de los sin tierra y de los miembros de las familias rurales más pobres, las cuales, si son coherentes en su expresión, a veces son opiniones triviales sobre la vida cotidiana y, no obstante, incluidas ceremoniosamente en estos estudios como pruebas del «saber popular», como si tales personas, por más humildes y marginadas que fueran, habitaran otro mundo y no una sociedad que se transformó notablemente en los últimos cincuenta años. En este periodo se amplió el grado de información, la intensidad de las relaciones sociales y los medios de transporte, sobre todo cuando son individuos participantes (aunque marginados) en un proceso más general de mercantilización de la vida social, típico de Brasil. Este proceso de cambio general, muchas veces también ignorado, destruyó el «mundo del pasado», el cual pontificaba el aislamiento exacerbado y el dominio de la gran propiedad territorial como soberana indiscutible de los ambientes agrarios, lo que determinó la variedad de procesos sociales en tales esferas.

El segundo conjunto de estudios sobre las luchas sociales en el campo incluye lo que podría llamarse «dogmatismo *pasadista*», al referirse a otro tipo de interpretadores, normalmente vinculados a las tradiciones marxistas ortodoxas y poco afectos a cualquier tipo de apertura auténtica. Son autores que pontifican sobre el (ilusorio) vigor económico de la actividad agropecuaria y otorgan importancia

² Por razones de espacio y para evitar ampliar todavía más el campo de esta polémica, no se citarán, en esta parte, autores y referencias bibliográficas representativas de las áreas de estudios citados. Cualquier observador informado sobre el tema, con todo, fácilmente identificará a los representantes significativos que se encasillarían en cada caso.

social y política a actores y clases sociales que en nuestros días han sido fuertemente debilitados.³ Su apoyo incondicional, exclusivamente ideológico, al MST, que mitifica la organización y su potencial, no reside, realmente, en un conocimiento profundo del medio rural y su población y, menos aún, de la economía agraria brasileña, sino solamente en una lectura religiosa del cambio social, que introduce categorías (como «latifundio») cuya preeminencia política es actualmente pequeña, pero consideradas, sin embargo, como piezas «decisivas» por tales autores para la transformación social brasileña. Desgraciadamente, muchos mediadores religiosos son también incansables difusores de esta perspectiva, tal vez por actuar en regiones más remotas y aisladas, donde, haciendo eco del pasado, estas propiedades aún existen, y se adhieren casi siempre de forma pueril a este ideario dogmático que venera el pasado.

Los estudios y análisis que integran este segundo grupo, a pesar de incluir temas recientes y hasta alguna jerga terminológica moderna, no se liberan de las anclas que los inmovilizan en el pantano del marxismo común. Su orientación es conceptualmente reificadora y el capítulo de De Carvalho se encuentra ciertamente en este grupo, y su respuesta, según tal categorización, representa de igual manera la misma orientación que identifica a los dirigentes principales del Movimiento, especialmente los pocos textos que su dirigente principal publica ocasionalmente.⁴

La idealización de la vida social y de las luchas políticas, típica de este último grupo, se expresa de forma clara en el capítulo de réplica, cuando el autor insinúa que la acción política del MST organiza «procesos revolucionarios», o cuando, en el párrafo final, sugiere que «el socialismo, y los valores que intrínsecamente presupone, ya no asustan más o desmovilizan a amplios sectores de las clases subalternas del campo, hoy identificadas como sin tierra». Reforzada por la referencia al uso ritualista y doctrinario de iconos del pensamiento socialista, en actividades

³ Aunque dogmáticos, son autores cuya lectura del marxismo es, por lo menos, parcial. Los errores analíticos de Marx acerca del desarrollo agrario (reconocidos ampliamente por la literatura internacional) pasan de largo en estos estudios. Piensan que los procesos de concentración y centralización del capital, materializados en la creciente concentración de la propiedad de la tierra, son inevitables (aunque no han sido concretados en ninguna sociedad capitalista avanzada); hacen uso del marxismo para proponer apuestas políticas fundadas en clases social es que Marx trató desdenosamente, como la esencia de la «idiotez rural» y, sobre todo, proponen la división de la tierra, formando nuevos propietarios para promover no el dinamismo capitalista, sino el socialismo (!). Como Ellis destaca: la economía política marxista «tiende a ser crítica y algunas veces abiertamente hostil a la estrategia de desarrollo rural centrada en las pequeñas propiedades. El énfasis en la desigualdad, en las relaciones de poder, clases sociales y diferenciación de las áreas rurales lleva al escepticismo acerca de las características de equidad defendida bajo esta estrategia» (2000: 23).

⁴ Evidentemente, hay un tercer grupo de estudios, aquel que escapa a las trampas típicas de la categorización presentada. Son los análisis que logran mantener un distanciamiento analítico del objeto de estudio (sin que esto signifique neutralidad, imposible de alcanzar) y que, especialmente, no pierden la capacidad crítica en el análisis de los procesos sociales, al contraponer características estructurales con cambios coyunturales, y cambios económicos con facetas políticas y culturales. Así, son capaces de analizar un fenómeno relevante como el MST a la luz de otros procesos constitutivos del mundo rural y en relación también con otros cambios nacionales (e internacionales). Aunque todavía escasos, estos estudios, afortunadamente se han ido ampliando y en el artículo original fueron citados en forma debida.

de la organización (enmarcados por la mágica palabra «mística», incorporada por el discurso religioso que dio origen al Movimiento), esta mención es sorprendente frente a la realidad que viven las familias rurales en la gran mayoría de las regiones agrarias brasileñas.⁵ De hecho, lo que aquí subsiste, al reflexionar sobre la orientación estratégica de la organización, se resume en la adhesión a una perspectiva fundamentalista de la acción política, completamente disociada de la realidad agraria brasileña. De manera aún más directa, De Carvalho ya presentó, en otro texto, el sentido más general de los cambios propuestos, como los entiende:

Serían tres los objetivos estratégicos de un proyecto para el desarrollo rural y la democratización en el campo [...] romper con la estructura de poder económico, político e ideológico de los oligopolios y de las oligarquías en el campo [...] desmantelar el carácter corporativo del Estado [...] apoyar y estimular las más diversas formas de asociatividad, dando énfasis a la cooperación en el proceso de producción y a los colectivos de agroindustrialización, de manera que se supere la distorsión del privatismo, de la libre iniciativa y del individualismo como valores ideológicos de la burguesía liberal [...] serían necesarias varias medidas políticas y económicas y antes que todo, sin duda, una concepción del mundo que niegue el modo de producción capitalista como la única alternativa posible para el desarrollo de la sociedad [...] La lucha por la tierra en el Brasil y la asociatividad gestada en los asentamientos de la reforma agraria, así como el modelo tecnológico alternativo que está siendo adoptado por miles de productores rurales, constituyen evidencias de que los sectores populares en el campo tienen una propuesta integral alternativa para la economía rural. (1998: 230 y 233.)

A la luz de estas formulaciones, es deplorable que la respuesta no haya sido beneficiaria de la experiencia que su autor recogió en su trayectoria profesional,⁶

⁵ A De Carvalho lo acompañan otros ideólogos que, igualmente, comparten este festival de equívocos. James Petras, por ejemplo, luego de haber vivido en Brasil por un tiempo en años recientes y visitado diversas regiones, cree que «los campesinos latinoamericanos tienden a considerarse como *combatientes en una guerra de clases desencadenada por la clase capitalista y por el aparato del Estado*. El discurso de los intelectuales campesinos y la movilización de los movimientos sociopolíticos del campo no dejan dudas sobre esto [...] Estos movimientos siguen mostrando un considerable dinamismo en términos de sus formas de lucha. De esta manera, muestran disposición para integrar alianzas cívicas entre las clases, construir o participar de amplias alianzas con las fuerzas opositoras, al mismo tiempo que mantienen una autonomía esencial frente a los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales de izquierda. *La experiencia del MST en Brasil es particularmente ilustrativa en este aspecto*» (2001: 112, cursivas mías). Confrontados con esta lunática evaluación (por lo menos en relación con el caso brasileño), ni los más aguerridos militantes del Movimiento, probablemente, se reconocerían en esta observación tan quimérica.

⁶ Experimentado conocedor del mundo rural brasileño, viajero frecuente por las regiones del interior del Brasil, consultor de organizaciones rurales, pero también informado sobre los proyectos gubernamentales y de agencias multilaterales dedicadas al desarrollo rural (pues ha sido también consultor del Banco Mundial), ¿cómo puede creer De Carvalho que las familias rurales más pobres «están listas para el socialismo»? Por cierto, nunca será por demás introducir también la vieja e incómoda pregunta: «¿cuál socialismo?»

al haber sido forzado a producir un texto puramente propagandístico. Es problemático debatir, por ejemplo, sobre la afirmación que insiste en que «las acciones directas por los movimientos de masas no demandan mediaciones formales de representación de intereses», cuando De Carvalho iguala las ocupaciones de tierra a las «acciones directas». Aunque las luchas sociales requieran siempre un vasto repertorio de mediaciones —al no atenerse sólo a los espacios de representación convencionales, principalmente en sistemas políticos que portan una fuerte herencia autoritaria—, y ciertamente las acciones directas (casi siempre no institucionales) desempeñen un papel decisivo en el éxito del Movimiento, la proposición de De Carvalho está mal formulada, por lo menos. El problema central, tantas veces repetido en este debate, se refiere, por un lado, al distanciamiento de sus militantes y su base social en cuanto a las opciones de formas de lucha social, que jamás han sido transparentes (es decir, no existe la responsabilización como legítimo mecanismo interno). Externamente, por otro lado, la oposición entre la descalificación ideológica de la «política» *lato sensu* (que incluye las formas de representación existentes) y la incansable búsqueda de ocupación de los espacios institucionales crean una inevitable sensación de abierto oportunismo político. Así, en cuanto a esta proposición, cabría tan sólo la pregunta: en el caso específico del MST, ¿qué papel le tocaría en tal caso a la Asociación Nacional de Cooperación Agrícola (ANCA), que existe desde el origen del Movimiento, para actuar como «representación de intereses»? E incluso, llevado al extremo que sugiere el argumento, ¿De Carvalho creería en la posibilidad de una sociedad organizada a partir únicamente de «acciones directas», sin cualquier forma de representación? Tampoco se discutirá aquí, por otro lado, los números que presenta De Carvalho, extraídos de los panfletos de divulgación del MST, la mayoría por lo menos discutibles, aunque en menor magnitud, representan iniciativas que, muchas veces, son de extraordinario mérito social (como se justificó en el capítulo original).⁷ Es decisivo, en esta época de la historia brasileña, discutir, eso sí, los puntos centrales de divergencia, desagrado, y tono esquivo y disfrazado de los contrapuntos presentados. De esta manera, sintéticamente, parecen *seis* los temas principales que integran la controversia, los tres primeros más generales y los demás relacionados con las características internas de la propia organización.

⁷ El capítulo de De Carvalho contiene un sinnúmero de afirmaciones controvertidas. Su interpretación acerca de las cooperativas colectivizadas del Movimiento (CPA), por ejemplo, según él «formas de resistencia» originadas en la coyuntura adversa del gobierno de Collor, no corresponde a la realidad. Las CPA fueron estructuradas ya en 1987 e implantadas a partir del siguiente año, cuando el MST decidió adherirse a la propuesta de los folclóricos «laboratorios organizacionales» que dieron origen a las primeras cooperativas. Se puede intentar el olvido de este deplorable episodio de la historia del Movimiento, pero borrarlo de los registros de la realidad correspondería a las prácticas estalinistas del pasado.

I. EL «PROYECTO ESTRATÉGICO»

Primeramente, sobre el intitulado «proyecto político» de las familias rurales, que en opinión de De Carvalho (y del MST) sería identificado por las familias rurales sin tierra como el «socialismo» (jamás explicita su forma y naturaleza), tal proposición se aproxima *ipso facto* al flagrante delirio ideológico y es inmediata su refutación. De hecho, no existe, en *ninguna* región brasileña, aceptada por algún agrupamiento social visible (ni siquiera en los asentamientos), la adhesión, por vaga que fuera, a alguna idea del socialismo, a no ser que éste fuera definido únicamente en la forma de valores más solidarios para ser compartidos (dejando de ser, por lo tanto, un «proyecto de sociedad»). Esta verificación no implica, ciertamente, que no pudiera darse, en algún momento futuro, la gestación de colectivos sociales que compartan un ideario socialista. Pero actualmente, en este periodo histórico, nada sería más extraño al imaginario social y político de las familias rurales, incluidas las más pobres. Hay aquí una confusión obvia entre deseo y realidad, y causa alguna sorpresa que los dirigentes de la organización y sus intelectuales prefieran comprender el mundo rural a través de viseras mistificadoras, pero no a partir de lo concreto vivido. Esta falta de sintonía entre la realidad y el ilusionismo verbal también es evidente en la propuesta sometida al MST, también por De Carvalho, de transformar los asentamientos rurales bajo su influencia en «comunidades de resistencia de la tierra», en las cuales, en su formulación, las familias rurales deberán conformarse con su pobreza, porque «las posibilidades de acumulación quedarían pospuestas, sea porque el modelo económico vigente ya está negando las condiciones para ello, sea porque la prioridad pasa a ser la resistencia, para cambiar lo más general de la sociedad y no lo particular de cada uno: una opción política» (De Carvalho, 2000: 3).

2. EL DESARROLLO AGRARIO Y SU INTERPRETACIÓN

Rechazada esta transformación y ruptura sociopolíticas, por su imposibilidad objetiva en un periodo medio previsible, se deriva un segundo aspecto, igualmente estructural y macrosocial, en este caso esclarecido por la lógica de la sociedad capitalista en la cual vivimos. ¿Cómo interpretar el desarrollo agrario reciente más allá de la jerga con que es señalado en el capítulo de réplica? Aunque el tema sea de obvia controversia, tal vez sea posible entender algunos cambios de los años más recientes, los cuales delimitan el desarrollo agrario y, aún más, constituyen el espacio posible para las acciones en la dirección del desarrollo rural en Brasil. A grandes rasgos, tales cambios se presentan a continuación, en una sección específica.

Pequeño bosquejo sobre el desarrollo agrario brasileño reciente y sus características principales⁸

Los años noventa abrieron un nuevo capítulo en la historia económica y en el desarrollo social brasileño, cuyos determinantes más generales son aún objeto de encendido e intenso debate, pero ciertamente se remiten a las reorientaciones macroeconómicas, tecnológicas y políticas actuales en el mundo (normalmente bajo la etiqueta, correcta o no, de «globalización».⁹ ¿Y el campo brasileño, bajo el impacto de estos cambios? En este caso, en especial en sus regiones agrarias más desarrolladas y más rígidamente subordinadas a los círculos económicos y financieros, principalmente aquellas que se originaron en el intenso proceso de modernización antes citado, tal vez sea posible sintetizar algunas de las principales transformaciones observadas en los últimos años y, como consecuencia, esbozar los desafíos e impedimentos del presente. Desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, lo que parece actualmente relevante es la verificación de un grado más alto de producción agropecuaria alcanzado. Desde ese ángulo, parece ser completamente «satisfactorio» para la demanda interna, pues los intensos procesos de urbanización de los años sesenta y setenta, aunque se han enfriado en años recientes, parecen haber estabilizado la demanda de alimentos y materias primas. Así, la exigencia adicional de producción agrícola parece estar hoy totalmente determinada por el crecimiento demográfico y por un padrón de distribución de renta que, a su vez, no parece susceptible de alteraciones expresivas en un plazo relativamente corto. Bastaría, por ejemplo, asociar este factor a la multiplicación de asentamientos rurales en Brasil y a la necesidad de las familias rurales asentadas para vender sus eventuales excedentes, en este contexto de empobrecimiento de la agricultura y de la caída de los precios pagados, para entender los crecientes límites a la viabilidad económica de estas nuevas áreas.

Como consecuencia, es desde este ángulo económico-comercial como las transformaciones más sobresalientes se materializan al ocasionar efectos significativos

⁸ Esta sección está, de manera abreviada, extraída de Navarro (2000). La comprensión del autor acerca del desarrollo agrario brasileño en el periodo contemporáneo y de la naturaleza, posibilidades y objetivos de políticas de desarrollo rural se encuentra en Navarro (2001). Para una interpretación actual, centrada en análisis sectoriales, desde una visión macroeconómica, consúltese la importante antología organizada por Leite (2001).

⁹ Como señales principales del periodo reciente, varios autores sintetizan estos cambios profundos, típicos de fines del siglo xx y que caracterizan a la mayoría de las naciones capitalistas de desarrollo avanzado o intermedio. Entre tales cambios recientes se destacan: a) el desempleo, que empieza a ser estructural; b) la centralidad, en el sistema económico, del monetarismo y del capital financiero; c) la transferencia estructural a terceros, que de esta manera deja de ser accesoria; d) la transformación de la ciencia y de la tecnología en fuerzas productivas, y ya no en una simple base del capital; e) la desobligación y rechazo político de la presencia estatal, incluso hasta en el ámbito de la política social y, como resultado, la política de privatización empieza a ser estructural; f) la transnacionalización de la economía, lo que acentúa igualmente la inutilidad del Estado nacional; g) la antigua distinción entre países del primer y tercer mundos se ha sustituido, en cada bloque, por una visible y creciente división entre bastiones de riqueza absoluta y de pobreza extrema; h) finalmente, este conjunto de condiciones materiales corresponde a un imaginario social y político, en este fin de siglo, que se denominó como neoliberalismo.

en la actividad agropecuaria. La apertura comercial (y la constitución del Mercosur) ha modificado fuertemente las regiones productivas, especialmente en el sur del país, y ha afectado en particular a los agricultores familiares más pobres, en general impreparados para la confrontación con ambientes comerciales más competitivos. Han encontrado dificultades crecientes para mantener sus actividades y asegurar ingresos que garanticen la continuidad de sus emprendimientos. La intensificación de los trueques comerciales ha producido un abaratamiento general de los precios de los productos agrícolas, reducido la renta rural y generalizado una situación crítica en los ambientes productivos de la agricultura del país, lo que afecta la dinámica económica de los municipios y regiones dependientes de las actividades rurales. A partir de 1994, con la implantación del Plan Real que revaluó el cambio (por lo menos hasta a principios de 1999), también los sectores agroexportadores fueron muy castigados por esta dificultad adicional.¹⁰

En cuanto a las ocupaciones rurales —y ésta ha sido otra modificación importante, experimentada especialmente a partir de la década de 1990—, los cambios recientes son de dos órdenes. Primeramente, una situación relativamente nueva en que se alcanzó —fruto de los procesos antes mencionados— un aparente tope de demanda de trabajo (de base agrícola), el cual solamente se ha ampliado cuando las estadísticas son de grandeza económica nacional, pues nuevas regiones de producción (en el centro oeste y en el norte) se van lentamente incorporando al sistema productivo agrícola nacional. En las regiones agrarias consolidadas y tradicionales (como el nordeste rural en gran parte, o aun en el sur), sin embargo, este agotamiento del padrón de empleo es visible. En diversas regiones del interior, la reducción de las formas de ocupación rural ha estimulado la adhesión al MST, pues se constituyó una «población sobrante» que, al parecer, no puede recurrir ya ni a las ciudades (donde las oportunidades de empleo también se redujeron) ni a las regiones de libre frontera, en el norte, en vista de la apropiación privada de estas tierras, que en gran medida impiden el acceso fácil a la tierra en estas regiones.

El segundo aspecto importante, en relación con la nueva estructura del trabajo rural, no es aún suficientemente conocido, pues apenas empezó a investigarse. Se refiere a la aparente ampliación de las posibilidades de ocupación en áreas rurales, pero en actividades no agrícolas, cuyo crecimiento ha sido significativo en años recientes. En este sentido, conforme diversos estudiosos lo han enfatizado, el medio rural brasileño dejó de ser principalmente agrícola y el comportamiento del mercado de trabajo ya no está asociado nada más al calendario de estas actividades, pues crecientemente se desarrolla un conjunto de actividades no agrícolas que parece determinar, cada vez más, la dinámica de las ocupaciones en áreas rurales del país.

¹⁰ El medio rural brasileño ha experimentado, en los años noventa, un proceso de empobrecimiento visible y generalizado en todas sus regiones. Entre la adopción del Plan Real (julio de 1994) y el final de 2000, por ejemplo, mientras la inflación total alcanzó 94% en todo el periodo, los precios agrícolas subieron solamente 45%, la raíz de la caída de la renta rural a lo largo de esos años.

En cuanto a los cambios políticos, en la misma década, obedecen a tres determinantes principales. Primeramente, y también como consecuencia de las modificaciones productivas de los últimos treinta años, el relativo debilitamiento de las organizaciones rurales más tradicionales, tanto de los grandes propietarios territoriales como las representativas de los intereses de los pequeños productores, usualmente englobados por el sindicalismo rural. El resultado ha sido la proliferación de nuevas formas de organización en el medio rural brasileño, desde el surgimiento de movimientos sociales, que se institucionalizaron eventualmente en organizaciones (como es el caso del MST), hasta el gran número de pequeñas formas organizativas que se han expandido en el ámbito local, pasando por la reorientación de las representaciones de los grandes propietarios de tierras y empresarios rurales. Se destaca, en relación con estas últimas, la virtual desaparición de la patronal que, en cierto periodo, desempeñó el papel de contrapunto de los latifundistas ante el surgimiento del MST. La Unión Democrática Ruralista (UDR), conformada en 1986, dejó de existir posteriormente y, luego de ser restaurada a finales de los años noventa, es tan sólo una pálida imagen de la organización de los grandes propietarios de tierra que en su inicio enfrentó el tema de la reforma agraria propuesto por el primer gobierno civil después del ciclo militar y realizó un gran número de acciones de confrontación destinadas a eliminar al Movimiento y a las organizaciones populares del campo. La virtual desaparición de la UDR es, de igual manera, una clara señal del debilitamiento generalizado de la agricultura tradicional y del fin de sus innumerables beneficios financieros antes formalizados por las políticas públicas.¹¹ Los análisis realizados actualmente han ignorado este hecho inédito en la historia agraria de Brasil, ante el debilitamiento sin precedentes de una clase social que, desde siempre, dominaba el campo brasileño de manera casi absoluta, y se adueñaba de los sectores públicos y, como consecuencia, sustituía al propio Estado.

Todavía en el campo de la «política en general», es también relevante citar otros dos aspectos de notable significado a partir de los años noventa: la descentralización política inaugurada con la promulgación de la Constitución Federal en 1988 es uno de esos hechos significativos, pues este cambio ha transferido hacia los municipios una parte creciente de responsabilidades de variados órdenes, pero sin una compensación presupuestal. Si este proceso de redistribución de responsabilidades formales prosigue y se consolida, como parece ser la tendencia más

¹¹ Es exactamente en relación con las grandes propiedades rurales (y al «latifundio», en especial) que la retórica del Movimiento y sus intelectuales parecen estar en la actualidad totalmente desenfocados. Ignorar los profundos cambios en el desarrollo agrario brasileño en los últimos treinta años, e insistir en los análisis del pasado previo a la modernización, como hace el Movimiento, desplaza hacia el plano de la irrealidad lo demandado por la organización de los sin tierra. Si en muchas regiones la presencia de la gran propiedad es todavía significativa y relevante para la estructuración de los procesos políticos locales o regionales, su relativa importancia en el conjunto del país (y, particularmente, para el establecimiento de la política del Estado) es hoy casi irrelevante. La ceguera ideológica, con todo, ha impedido a la organización entender mejor estos procesos de cambio en el mundo rural brasileño.

general, el municipio pasará cada vez más a ser el ambiente por excelencia de la actuación de los diferentes actores sociales ligados al mundo rural. Ésta es una de las razones centrales para explicar el (re)surgimiento de la demanda social de «desarrollo rural» en tantas regiones agrarias, rápidamente incorporada a la agenda de las organizaciones de trabajadores rurales y de pequeños productores (escapando, por tanto, a la casi siempre inaccesible formulación federal e introduciendo las formas de acción y disputas sociales en un ambiente donde son mayores las probabilidades de intervención e influencia). Al privilegiar la acción nacional, en especial, y la homogeneidad de su agenda en todo su territorio, algunas organizaciones del campo (como el MST) encuentran situaciones de obvios desaciertos políticos y fragilización de sus acciones. En vista de la inmensa diversidad económico-estructural y social en el campo brasileño (remarcada por el proceso de modernización selectivo de los años setenta), las políticas diferenciadas, incluso en relación con la reforma agraria, representan actualmente una relativa obviedad, aunque todavía ignorada por la mayoría de las organizaciones rurales. Es justo que se destaque, entre tanto, como De Carvalho señala con propiedad, que el Movimiento haya intentado estimular diferentes formas de gestión en los asentamientos bajo su influencia, sin fijarse ya exclusivamente en la propuesta original de las cooperativas colectivizadas, sino reconociendo otras posibilidades.

Así, el tercer factor de orden político que ha de citarse se refiere a la reciente aceptación gubernamental de la noción de «política diferenciada» para el mundo rural, con la expresión «agricultura familiar» que adquiere, en la presente década, un status político-institucional antes inexistente. Independientemente de los problemas de naturaleza teórico-conceptual asociados a esta última expresión, por vez primera en la historia de Brasil empezó a ser vista de manera segmentada, y los agentes sociales rurales dejaron de entrar en la categoría genérica de «productores». La introducción de la noción de agricultura familiar, que indica un conjunto social de intereses propios, padrones de sociabilidad diferenciados y un *modus operandi* específico en el mundo rural, es probablemente el más extraordinario cambio político-institucional en los años recientes, pues ha abierto nuevas y promisorias posibilidades de acción política y de intervención en el campo brasileño, incluso nuevos espacios de demanda social y de estructuración de innovadoras formas de organización.

3. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA DESLEGITIMACIÓN DEL ESTADO

El tercer tema central de debate sobre el futuro del mundo rural, aún más general, se refiere al Estado. En el contexto de los cambios antes señalados, empieza a ser esencial una nueva relación de los movimientos sociales rurales (incluyendo, claro, al MST) y el Estado, y queda, nuevamente, la sorpresa de la deslegitimación retórica

de este último, repetida discursivamente en todo momento, no obstante la fácil y rápida integración sistémica de las prácticas del Movimiento en todos los estados y regiones donde actúa. Según De Carvalho —impávido en este argumento por lo menos ilógico—, no hay aquí ninguna contradicción. Según el autor, el MST optó por no «aguardar la acción del Estado para la realización de la reforma agraria en Brasil. Por lo tanto, se emancipaba del Estado» al escoger las ocupaciones de tierra como su arma de presión principal. Pero, agrega, «sin abdicar por la disputa de los recursos y servicios públicos». Imaginemos que hay seriedad en el argumento. Cabría tal vez preguntar quién legitima tales «recursos y servicios públicos», ¿serían otras formas de Estado, amparadas en estructuras normativas supranacionales? Si las ocupaciones de tierra (un arma de lucha social utilizada eficazmente por el MST) realmente aceleraron la formación de nuevos asentamientos, ¿hay algún asentamiento rural en Brasil que no haya sido regularizado por el Estado? Por lo tanto, volviendo al tema central: ¿cuál es la lógica operativa de una organización que ideologiza y reduce al extremo sus prácticas políticas, la formación de sus militantes, su agenda discursiva y sus formas de lucha social, mientras que rápidamente busca la integración sistémica, amparada en el mismo Estado? Es forzoso admitir que, sin tal coherencia entre el itinerario discursivo y los resultados del repertorio de acciones colectivas, el riesgo será, lógicamente, evaluar las prácticas políticas del Movimiento como un embuste o, más grave aún, como mistificadora manipulación de las familias rurales más pobres.

4. EL CONTROL SOCIAL SOBRE LOS COLONOS

A la luz del marco de cambios y de los desaciertos políticos antes señalados, los demás aspectos esenciales —que completan el sexteto de temas centrales que contraponen el MST al objetivo de desarrollo rural, de la reforma agraria y de las relaciones con las demás organizaciones del campo— remiten a la propia organización y a sus opciones estratégicas, que fueron el objeto primordial de análisis del capítulo original. Por esta razón, el capítulo de réplica asumió resultados insatisfactorios en cuanto a estos temas y, realmente, optó por no discutirlos.¹² De esta

¹² Ciertamente no se discutirá aquí el artificio de la noción de «emancipación social continua» o la sugerencia de que el Movimiento se organiza «en red». La primera idea es inocua en sí misma. ¿O sería posible suponer que «emancipación», como proceso de autoconocimiento, creciente libertad individual, sumado a la irrefrenable y libre acción de colectividades sociales, pueda *a priori* recibir un límite político determinado? La idea en sí, por lo tanto, no es errónea, sino que reside en la trivialidad, pues tales límites, si son previos y definitivos, nunca serían democráticos, por definición. En este punto, rigurosamente, no hay discordancia con la sugerencia de De Carvalho, pues la idea «restrictiva» de emancipación fue introducida en el capítulo original simplemente para resaltar que ni siquiera bajo esta limitada noción alcanza concreción entre los sin tierra orientados por la organización. Ya la sugerencia de que la organización está estructurada en forma de «red», para indicar que es descentralizada, representa cuando mucho una verdad a medias. Como se sugirió en el capítulo original, el Movimiento realmente otorga poder de decisión a las instancias secundarias, además de la dirección nacional,

manera, el cuarto tema se refiere al control social (y político) de los colonos en las áreas bajo la influencia y hegemonía del MST. En vista de los argumentos antes presentados, tan solo cabe repetir que esta presencia significativa en los asentamientos ha sido utilizada, en especial, para reclutar bases, normalmente jóvenes del lugar, para actividades de formación y, posteriormente, para realizar acciones externas. Permanece de esta manera la pregunta más general: ¿cuándo permitirá la organización, en «sus» asentamientos, que los propios colonos decidan sus formas de cooperación (si no prefieren la ocupación familiar de sus parcelas específicas), como mejor entiendan (es decir, respetando su autonomía) y, en particular, cuándo dejará de utilizar fondos públicos para ejercer diferentes modos de control social sobre las familias instaladas en estas nuevas áreas? ¿O sería inaceptable, como algunos creen, someter esta pregunta al Movimiento, cuando se actúa en el espacio público de la política y, adicionalmente, se sustenta mayoritariamente de fondos también públicos?

5. ALIANZAS Y RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES

Al considerar el conjunto de cambios recientes ya señalados, es curioso que el Movimiento se juzgue portador de fuerza política para contraponerse a las transformaciones macrosociales realizadas. Parece que también se encuentra aquí una más de las decisiones que intrigarán a futuros observadores, cuando analicen estos años. Verificarán una coyuntura que tal vez haya sido, comparativamente, la más favorable para la implementación de cambios significativos para los más pobres del campo. Primeramente porque los grandes propietarios territoriales se debilitaron, como nunca antes había ocurrido en la historia agraria de Brasil, victimados por la caída constante de los precios de los productos agrícolas (y de sus tierras), y de igual manera acorralados por la creciente competencia en los diversos mercados donde actúan. En esos mismos años, aumentó la fuerza de las organizaciones rurales representativas de los sectores sociales del campo (incluso el MST, como se ha destacado siempre) y, finalmente, hubo una apertura inédita de canales y de espacios reales de implementación de políticas en el ámbito del gobierno federal, también sin precedentes en la historia brasileña.¹³ ¿Por qué no fue aprovechada

con tal de que sean relativamente irrelevantes desde el punto de vista político. Es importante que algún día el MST le ofrezca a la sociedad, por ejemplo, una explicación pública de los mecanismos de elección de sus dirigentes, las reglas de su funcionamiento interno y los procedimientos para la definición de sus estrategias, en caso de que quiera una legitimidad social más significativa. Organizarse de forma clandestina, pregonar que sea ésta una manera interna de estructuración democrática (además del ejercicio del control autoritario en los asentamientos) y, al mismo tiempo, demandar «más democracia» en el funcionamiento del sistema político brasileño hace de su acción una comedia, tal es la disonancia entre discurso y práctica.

¹³ No hay duda de que la historia registrará el incontable rosario de errores del Movimiento en sus relaciones con el gobierno federal a partir de 1996, cuando prefirió optar por el rechazo perentorio y ni siquiera negociar con el Ministerio de Desarrollo Agrario, aunque este último creara oportunidades de ampliación de sus acciones, en una apertura inédita. Al preferir hacer *tabula rasa* de la acción gubernamental, el MST acabó

esta oportunidad histórica, tal vez única? La respuesta no nos remite solamente a las características internas de la organización y sus opciones políticas y organizativas, sino al permanente rechazo para construir cualquier tipo de alianza (al contrario de lo que De Carvalho pregona, quien firmemente, refutando todos los hechos conocidos, piensa que el Movimiento actúa «solidariamente con otros movimientos y organizaciones sociales»), pues la noción de alianza que el MST ha defendido a través de los años ha sido sinónimo de dominar y no de compartir y respetar las opciones y alternativas de las demás organizaciones. Desde mediados de la década de los ochenta, en la «segunda fase» citada en el artículo original, cuando el MST rechaza categóricamente cualquier alianza política, definida como tal, con otras organizaciones populares del campo, y prefiere, por el contrario, combatir las y, si fuera posible, dominarlas (para ello creó su departamento sindical, el llamado Movimiento de los Pequeños Agricultores, además de incorporar a otros movimientos sociales rurales). Permanece, como consecuencia, la pregunta-síntesis: ¿en ambientes agrarios crecientemente complejos y heterogéneos, el MST cree que podrá construir procesos de desarrollo rural y de emancipación política de los pobres del campo con base en el monopolio organizativo?¹⁴

6. ¿POR QUÉ NO APOSTAR EN LA DEMOCRACIA?

Éste es el tema central y decisivo, que tal vez se pueda extender a las demás organizaciones populares y a los partidos y movimientos políticos que buscan crear alternativas sociales, en vista de las grandes transformaciones que marcan a la humanidad al comienzo de este nuevo milenio. Desafortunadamente, parece que aquí se construye, como en el poema, una falsa línea del horizonte para inspirar a tantos, aunque la práctica social continúe, eso sí, confinada a la inquietante oscuridad de

demonstrando que su estrategia se fundamentaba (y así viene siendo) en una base que es principalmente electoral y menos de representación de los sin tierra del país. Si el Movimiento hubiera tenido por lo menos el interés de formalizar los «acuerdos críticos» con el Ministerio, sin echar mano de su autonomía y sin apoyar el resto de la política de la actual administración federal, los resultados, en términos de áreas expropiadas y familias asentadas, serían incomparablemente mayores y tal vez habrían logrado alterar finalmente la distribución de la propiedad de la tierra de manera significativa en algunas regiones. La historia cobrará la responsabilidad política de cuando el Movimiento cercenó, en vista de una estrategia inspirada en la pequeñez del ideario del «conflicto por el conflicto», la ampliación de los resultados de los programas de reforma agraria en el periodo.

¹⁴ Las intolerantes relaciones del MST con las demás organizaciones del campo recuerdan la observación de Walzer, cuando afirma que: «Tampoco trataré aquí de la tolerancia política cuando los grupos comprometidos constituyen movimientos y partidos opuestos. Al competir por el poder político, éstos son indispensables para el régimen democrático, que literalmente exige la presencia de líderes alternativos (con programas alternativos), aunque nunca lleguen de hecho a ganar una elección. Son coparticipantes, así como los miembros del equipo adversario en un juego de básquet. Sin ellos no hay juego, y por eso tienen el derecho de hacer canastas y vencer, si pudieran. Sólo hay problemas cuando las personas quieren interrumpir el juego o acabar con él, reivindicando al mismo tiempo los derechos de los jugadores y la protección de las reglas» (1999: 14).

las callejuelas estrechas y sombrías.¹⁵ Por despreciar continuamente la idea de democracia y sus correlativos como la constante materialización de esferas públicas, evaluada como una «herencia burguesa» de la modernidad, sectores del pensamiento socialista (y particularmente la tradición marxista) no han entendido las incesantes reformulaciones que tal noción ha recibido, ya sea por el impulso teórico del pensamiento más progresista o, en todo caso (y especialmente) forzado por las circunstancias históricas del periodo reciente. Al no abrirse al debate político, pero aferrándose al marxismo común, la organización parece desconocer los esfuerzos teóricos, especialmente del llamado «marxismo occidental», para reconstruir la base democrática del socialismo. La «crisis de la política» y sus instituciones ha animado a la reconstrucción del propio significado y del sentido potencialmente transformador de la democracia, no siempre entendido por la mayoría de las organizaciones populares ni por parte de los intelectuales socialistas. La noción de democracia de este nuevo siglo, muy probablemente, sufrirá aún otros sensibles y rápidos cambios, incluso (o principalmente) por la acción virtuosa de diversas prácticas sociales y formas de lucha política de organizaciones populares. Una de esas tantas características, que rompe con el rasgo normativo y de procedimiento de la noción de democracia heredada de la modernidad, se refiere justamente a la incorporación del conflicto como elemento constitutivo de la política, con lo que deja de ser una anomalía para combatirse de modo natural. Las ocupaciones de tierra, por ejemplo, en esta nueva concepción democrática, aunque se mantienen eventualmente como ilegales, pasarían a ser recibidas políticamente como formas legítimas de presión de grupos sociales ubicados de manera desigual en la estructura social, es decir, en sociedades desiguales las armas de lucha social empezarán a ser incorporadas, desde una perspectiva revisada de la democracia, como formas legítimas de presión usadas para combatir la desigualdad social y la exclusión política. Ésta es tan sólo una sucinta ilustración de la compleja e inmensa tarea que tantos actores sociales modernos (entre los cuales está el MST) tienen actualmente enfrente, en este caso específico haciendo eco de lo que Boaventura de Sousa Santos (2001) intituló como elaboración de una «teoría democrática de la ilegalidad no violenta». Si se ignora el desafío para disputar la reconstrucción del formato democrático que moldeará los lineamientos normativos que ya están siendo estructurados, las clases subordinadas correrán el riesgo, si se comportan como equivocados coadyuvantes, de repetir otras encrucijadas históricas cruciales, de observar únicamente los nuevos ropajes de continuidad del orden social, o de asistir al espectáculo del «cambio del no cambio», parafraseando la conocida formulación. Las nuevas avenidas sociales, abiertas en las tres o cuatro décadas por los

¹⁵ «Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte? — O que vejo é o beco» [¿Qué importa el paisaje, Gloria, la bahía, la línea del horizonte? — Lo que yo veo es el callejón] Manuel Bandeira, «Poema do beco», 1936.

cambios realizados por la globalización que tantos desafíos y dilemas han creado para la emancipación social (en su sentido amplio), no pueden ser recorridas volviendo al pasado, como muchas veces parecen ser los itinerarios principales de la organización de los sin tierra en Brasil. La democracia, no como estructuración sociopolítica derivada simplemente de un recetario comportamental —como el que pregona la ciencia política liberal—, sino reconceptuada y elevada a su capacidad política transformadora y de real significación emancipadora, parece ser la apuesta de un nuevo mundo, en el cual prevalezcan los valores más grandes de la convivencia humana.

BIBLIOGRAFÍA

- Bogo, Ademar, «Novo ascenso na organização da cooperação», Bahía, 1999 (mimeo.).
- Carvalho, Horácio Martins de, «A superação do modelo de desenvolvimento rural vigente no Brasil», en Paulo F. Vizentini y Raul Carrion (org.), *Século XXI. Barbárie ou solidariedade? Alternativas ao neoliberalismo*, Editora da Universidade, Porto Alegre, 1998: 226-235.
- , «A crise de identidade dos pequenos produtores rurais familiares: possibilidades de superação», Curitiba, 2000 (mimeo.).
- Ellis, Frank, *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*, Oxford University Press, Oxford, 2000.
- Leite, Sérgio, *Políticas públicas e agricultura no Brasil*, Editora da Universidade, Porto Alegre, 2001 (Série Estudos Rurais).
- Navarro, Zander, «Dos impasses históricos às novas trilhas do desenvolvimento rural», en Winrock International, *Pobreza rural no Nordeste do Brasil. Um estudo participativo*, Winrock International/ Faculdade Integrada da Bahia, Salvador, 2000: 47-66.
- , «Desenvolvimento rural no Brasil: os limites do passado e as possibilidades do futuro», *Estudos Avançados* (dossier: «Desenvolvimento rural»), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.
- Petras, James, y Henry Veltmeyer, «Are Latin American Peasant Movements Still a Force for Change? Some New Paradigms Revisited», *The Journal of Peasant Studies*, 28(2), Londres, 2001: 83-118.
- Santos, Boaventura de Sousa, «As lições de Gênova», *Folha de S. Paulo*, 30 de julio, São Paulo, 2001: 3.
- Walzer, Michael, *Da Tolerância*, Martins Fontes, Río de Janeiro, 1999.

VII. «El dorso de la ciudad»: los sin tierra y la concepción de otro tipo de ciudad

JOÃO MARCOS DE ALMEIDA LOPES

INTRODUCCIÓN

Por más precisa y compleja que se pretenda la reflexión sobre un determinado hecho, en el momento justo en que ocurre, en un campo social y político importante —y efervescente— y con salidas relativamente inusitadas, sería equivocado pretender abarcar todos los matices, equívocos, aciertos y potencialidades presentes en el proceso de su desarrollo, principalmente si consideramos el carácter primario de los hechos que lo componen. Además de eso, si nos sumergimos en lo cotidiano de ese suceso, es decir, cuando el lugar del enunciado proviene del lugar de la enunciación, nos sentimos obligados al esfuerzo del análisis sistemático, debidamente distanciado. Incluso así, no estaríamos libres de recoger, a veces, solamente apariencias. Por otro lado, lo que surge puede traer, si estamos atentos, señales cuyo distintivo se fijará tan sólo a lo largo de la evolución del hecho: concederles libertad a éstas sería también asumir el riesgo de sostener, por la apariencia, aquello que el hecho parece indicar.

El presente capítulo es uno de esos casos: se trata de reflexionar sobre la potencialidad emancipadora, posiblemente identificable en el proceso de concepción de una ciudad propuesta ante el cambio de orden en la dinámica de producción de las ciudades modernas: en vez de pensarla a partir de sí misma, pensarla desde su «lado contrario», es decir, en este caso, el campo; en vez de concebirla como un mero lugar de circulación de mercancías, imaginarla como un lugar de encuentro y sociabilidad diferenciada; en vez de construirla en referencia a relaciones esencialmente mercantiles, erigirla a partir de su significado político. Emprenderla a partir de ahí, con todo, ha sido tan solo un ejercicio de emancipación imaginaria del estricto campo de la posibilidad en dirección al campo de las utopías: un proceso aún en curso.

El objeto en cuestión es la concepción de una ciudad de la reforma agraria, en el centro oeste del estado de Paraná, región sur de Brasil, que surge a partir de la

implantación de uno de los mayores asentamientos de la reforma agraria del país, el Asentamiento Ireno Alves dos Santos.

Formado por alrededor de 1 500 familias, es el resultado de un conflictivo proceso de negociación entre el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), órgano responsable de la política agraria y terrenos rurales en el país. Forma parte de este proceso, como será descrito más adelante, una arriesgada embestida del Movimiento, el 17 de abril de 1996, cuando aproximadamente 15 000 personas invadieron y ocuparon parte de un extenso latifundio —parcela en la que hoy se ubica el asentamiento—, situado en el interior de aquel estado, junto a un gran lago formado por una de las muchas represas del río Iguazú, uno de los más importantes abastecimientos de agua de la región y del país. La Central Hidroeléctrica de Salto Santiago, que justifica ese embalse, forma parte del complejo responsable de la generación de energía eléctrica para toda la región sudeste brasileña.

Ya en su momento se trataba, por lo tanto, de una doble condición adversa; por un lado, el área de conflictos que se manifiesta al cuestionar el derecho de propiedad y la función social de la tierra; por otro, la peligrosa proximidad a un campo de dominio estratégico, es decir, a las instalaciones de uno de los componentes del sistema de la electrificación de toda la región, económicamente la más importante de todo el país.

Las tensiones se agravan aún más a medida que, además de la situación ya tensa por la expropiación de la hacienda, para fines de la reforma agraria la municipalidad que alberga el nuevo asentamiento se ve amenazada con perder —jurídica y políticamente— casi la mitad de su territorio. Al proponer una «ciudad» concebida por su lado contrario (o reverso), los sin tierra disputan esta territorialidad establecida por los estatutos legales que también conforman las condiciones de vida civil en las ciudades brasileñas y que, por lo tanto, configuran aún los mecanismos de ordenación social que condenan como «desechables» a aquellos considerados como «incapaces» de insertarse en el mercado urbanizado y globalizado de nuestros días. Por eso el cambio en sentido contrario: es esta población «desechable» la que se vuelve a colocar en la disputa, no sólo por el espacio de la ciudad, sino también por una nueva concepción de «ciudad». Además de eso, al proponer la construcción de una «ciudad de la reforma agraria», los sin tierra avanzan más allá del campo descrito por la lógica burocrática, simplista, compensatoria y apaciguadora, establecida por los programas oficiales de reforma agraria vigentes en el país, y transmiten, al constituir una nueva área de conflictos, la posibilidad de imaginar, como sujetos políticos que hablan —o que rescatan la posibilidad de hablar—, una ciudadanía en el campo o, como decimos, una «ciudadanía sin ciudad» (Rizek e Lopes, 1999: 2). Por eso, la ciudad por su dorso: es el mismo campo pensando en sí mismo en dirección a una urbanidad que se propone transformada. ¿Pero hasta

qué punto el transmitir hacia fuera de los muros de la ciudad la reflexión sobre sí misma no invierte también la posibilidad de enunciar sus propias contradicciones? Es decir, ¿sería posible imaginar la constitución de derechos y ciudadanía a partir, justamente, de la no ciudad?

Además de la cuestión mencionada, este texto está concebido desde los límites restringidos de una acción esencialmente técnica y bastante contextualizada: una acción de profesionales —de la cual forma parte el autor de este capítulo—, compuesta principalmente por arquitectos y urbanistas que han trabajado, en los últimos 11 años, directamente con movimientos sociales que se articulan en torno a la cuestión de la vivienda. Es la entidad responsable del desarrollo de las discusiones, consultas y orientación técnica —incluso proyectos— para la concepción e implantación de la «ciudad de los sin tierra». Si por un lado es la propia experiencia de la entidad lo que la legitima en esta función, por otro, existe lo que es inusitado en la propuesta que se presenta: ¿cómo pensar una ciudad por su reverso? ¿Cómo lidiar con la objetividad de un planeamiento ordenador y autoritario, muy propio de las concepciones establecidas a partir de lo que conocemos como urbanismo moderno, frente a un contexto pleno de conflictos, alternativas, tensiones, incongruencias y disputas? ¿Hasta qué punto no vemos reinstalar las utopías que dieron origen al pensamiento urbano contemporáneo y las reeditamos reconociendo, incluso, el «agotamiento» de sus «energías», en los términos de Habermas (Habermas, 1987)? ¿Hasta qué punto no arriesgamos reproducir los mismos equívocos que hoy reconocemos como tales?

La cuestión central que motiva la presente discusión —si es posible distinguir algún potencial emancipador en los trámites de concepción e instalación de esta ciudad— se ubica, por otro lado, imbricada en lo cotidiano de la propia organización del asentamiento y del Movimiento como un todo. De esta manera, los parámetros de diálogo sobre los cuales se asienta el proceso de discusión de esta otra ciudad «se con/funden» en el espacio de conflictos que el MST describe y en el cual se inserta, y abarca no sólo el contexto local, sino también el área de disputas que se extiende nacionalmente. Esta permeabilidad acaba inmovilizando una evaluación aislada del término en cuestión, al imponer —por lo menos como referencia— un enfoque más amplio en relación con los aspectos que, aparentemente, no muestran vínculos inmediatos con el caso en discusión. Tal requerimiento se justifica si argüimos que esta permeabilidad tampoco contamina, por innumerables vasos comunicantes, alguna esencialidad que pudiera emanar de un emprendimiento como éste. Es decir, ¿hasta qué punto el discurso de la dirección del cuerpo político que se vuelve sujeto de este hecho —la construcción de una ciudad de la reforma agraria— no organiza y burocratiza los procedimientos, propugnando una falsa «armonía social» interna y formateando, por el lenguaje, un proceso paradójico inverso de «robo de la palabra» (Oliveira, 1999: 61 y 71)? ¿Será que estamos reproduciendo algunas representaciones que reflejan la propia negación de lo que se pretende contrahegemónico y emancipador?

A partir de la descripción del contexto en que se desarrolla este hecho, procuraremos enunciar algunas posibilidades para las cuestiones aquí formuladas. En cuanto a la última, puesto que se inserta en un campo más amplio y que, de cierta manera, define los contornos que delimitan mejor la cuestión central de este trabajo, procuraremos profundizar mejor en ella al final de este capítulo.

I. LA ACCIÓN: IMAGEN DE UN TIEMPO PRÓXIMO

Se trataba de ocupar una enorme hacienda: un latifundio de 84 000 hectáreas,¹ localizado en la porción centro oeste del estado de Paraná, en la región sur de Brasil. Sin la medida de la productividad —considerando que se trata aquí de un país de hambrientos—, la hacienda Giacometi extendía sus límites más allá de las fronteras demarcadas por la geografía o por los municipios.² Para justificarse ante la ley que defiende la función social de la propiedad en el país,³ la hacienda Giacometi se registraba como «área de reforestación» y sus propietarios contribuían a los fondos públicos mediante el impuesto que pesa sobre la propiedad rural con una cantidad anual que no llegaba a sumar 10 dólares estadounidenses.

Las crónicas, memorias habladas y cantadas, las pequeñas historias contadas, a veces a manera de anécdota y otras dramáticamente, pero siempre formuladas como un épico constitutivo de una identidad colectiva —expresado de forma elocuente en las fotos de Sebastião Salgado—, rescatan el recuerdo de una madrugada del día 17 de abril de 1996; a semejanza de una procesión, levantando a 15 000 personajes casi fantasmagóricos que se deslizaban sobre la neblina, los sin tierra marcharon hacia dentro de los límites de la hacienda, seguros de que traspasaban también el límite entre lo que fue y lo que podría llegar a ser.

Aquella multitud que se deslizaba en un cortejo sobre la tierra —no sin acompañarla el miedo en la garganta— esperaba cualquier cosa, pues nada le había quedado. Desposeídos de todo, tal vez aquella tierra pudiera colocar bajo sus pies alguna otra posibilidad de existencia. La solemnidad de la procesión, con todo, no sería más que un momento único; de la romería de pura necesidad desentonarían

¹ Equivale aproximadamente a un área circunscrita por un polígono de 29 x 29 km, es decir, 840 km². Esta área es mayor que la de un municipio brasileño de tamaño medio: basta recordar que Curitiba, la capital del estado de Paraná, ocupa un área de 432 km² y alberga a una población de alrededor de 1 400 000 habitantes.

² El estado de Paraná, a pesar de distribuir más de dos tercios de su población en ciudades (Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa y Cascavel son las más grandes), todavía desarrolla una economía eminentemente agropecuaria: es uno de los estados que más influencias recibieron de los movimientos de inmigración (particularmente alemana, polaca e italiana, además de algunos otros enclaves, como de ucranianos, por ejemplo) promovidos por programas oficiales alrededor de 1850.

³ La Constitución Federal, aprobada en 1988, prevé, como instituto orientador del derecho agrario —aún no reglamentado—, la exclusiva función social de la propiedad: nada que no se lea de la forma que se quiera entender.

también expectativas frente a lo desconocido, tejidas de posibilidades y deseos que, en la pesada sombra de la mayoría, aún se «con/fundían» sobre la misma trama y urdimbre tejidas por la lógica de la propiedad que aquel momento parecía negar.

2. PRIMERAMENTE: CONSTRUIR UN ESCENARIO

Fueron 22 días de cuidadosa planeación. Cada individuo, cada familia, fue instalándose a pocos kilómetros de ahí, en precarias tiendas de plástico negro montadas en las márgenes del camino que daba acceso a uno de los límites de la hacienda, manteniéndose ahí el tiempo necesario para «acumular fuerzas». Oriundas de diversas regiones, próximas y distantes,⁴ enteradas de la existencia del campamento a la orilla de la carretera por innumerables fuentes,⁵ las familias se organizaban en grupos que se alternaban en las actividades necesarias para la manutención y seguridad del campamento y el plan de ocupación.

Conducir a aquella multitud hacia dentro de las cercas que demarcaban la hacienda no se trataba de una acción desprovista de riesgo: al mando de sus propietarios, avisados respecto a los casi nómadas que acampaban al margen de la carretera cerca de ahí, la hacienda escondía a casi un centenar de guardias de seguridad, quienes, armados, vigilaban los movimientos de aquellos indigentes. Como en una emboscada, un momento de descuido por parte de los pistoleros contratados para la defensa de la propiedad —una prevención que en Brasil se ha hecho habitual y es dudosamente «justificable»— permitió neutralizarlos y abrir camino hacia la ocupación conducida por los sin tierra.

El compás de larga espera había llegado a su fin: a la señal de que la vigilancia había sido subyugada, un comando se desplaza, de tienda en tienda y, levanta a aquella masa de hombres y mujeres, niños, adultos y viejos; los sin tierra recorrieron el tramo que los separaba de la hacienda para, por uno de sus costados,

⁴ Las familias que conformaron aquel grupo eran originarias de regiones del interior del estado de Paraná. Hay, con todo, numerosos casos de familias emigrantes del sertón, casi nómadas, que han pasado gran parte de sus vidas procurando un lugar para permanecer; han vivido en otras regiones del estado, buscado en otros estados, vivido en ciudades, y algunos llegaron a intentar su vida en otro país, como es el caso de los llamados «brasiguayos» que, por la proximidad de la frontera con Paraguay, pasaron parte de su vida en aquel país, alternando estadías en Brasil, lo que dio como resultado un grupo de familias casi sin nacionalidad definida. Todas las situaciones, con todo, reflejan la misma dinámica migratoria impuesta ante la imposibilidad de cualquier sedentarismo económicamente viable.

⁵ Por ejemplo, aquello que el MST llama «frente de masa»: un gran número de militantes que se desplaza por el país recluta familias de poseedores (ocupantes de tierras, irregularmente o bajo custodia de sus propietarios), moradores en periferias de las ciudades, núcleos rurales, etc. Pero nos parece, en la medida en que la convivencia se vuelve más íntima, que prevalece lo que llamamos de «boca en boca»: alguien que supo del campamento le cuenta a otro que, a su vez, lo pasa adelante hasta alcanzar a la familia o a los individuos o grupos que se disponen a arriesgar alguna posibilidad con el Movimiento. De cualquier manera, no hay una selección disciplinada en registros en el momento del acceso al campamento que permita verificar, sistemáticamente, el origen de cada individuo.

romper la cadena que impedía —tan sólo simbólicamente— que el cancel se abriera para su avance.

3. DESPUÉS: UN PRECEPTO PARA ENFRENTAR LA PRECARIEDAD

Como ofrendas por una gracia concedida, estufas, muebles, herramientas y utensilios domésticos acompañaron, paso a paso, la caminata de 20 kilómetros hasta el casco antiguo del latifundio. Allí, en el corazón de la hacienda, junto a algunas construcciones que un día albergaron a los colonos y dieron apoyo a la intensa actividad de extracción de productos que justificaba a sus propietarios para defenderla como «productiva», los sin tierra instalaron sus tiendas, que habían traído desde las márgenes de la carretera, y así instituyeron un campo nuevo de resistencia, ya entre los pliegues del territorio que pretendían compartir. No se trataba ya de un lugar de paso, de lo efímero, del tenue límite entre el necesitar ir y el poder permanecer, el lugar de reunión de los que no tienen más que la compañía de quien nada tiene. Se trataba de clavar las uñas en aquel suelo y construir, como quien construye barricadas, la acumulación de fuerzas necesarias para el enfrentamiento de los días que siguieron.

Como lugar de plena manifestación de la necesidad, el campamento instalado en las entrañas de la hacienda rescataba, no obstante, otra posibilidad de trama para el enfrentamiento colectivo de las adversidades. Como a la orilla de la carretera, forzados por el hambre, por el riesgo, por el frío e incluso hasta por la indiferencia burocrática de quien los identificaba únicamente como vagos ocupantes de un «no lugar», los sin tierra aprendieron, por fuerza estratégica, a implementar mecanismos, agrupados en sectores, que se destinaban no sólo a mitigar los despojos de la necesidad sino, además, a subvertir algunas prácticas de orden puramente funcional.

De este modo, como en las filas de un vago ejército, los acampados se dividían por tareas, reguladas por un reglamento interno, «con leyes internas que todos deberían cumplir» (Secretaría Regional del MST, 1999). La realización de estas tareas se organizaba a partir de sectores responsables de la provisión de las demandas de aquella cotidianeidad inhóspita. Para el hambre y la sed, un Sector de Alimentación «distribuía por partes iguales los alimentos recibidos mediante donaciones hechas por personas amigas, sindicatos de trabajadores rurales y otras entidades de ayuda humanitaria». Para el orden y contra el miedo, un Sector de Seguridad, responsable no sólo de la «aplicación del reglamento interno», sino también de la vigilancia y defensa del propio campamento. Para el futuro y el cuidado de los niños, un Sector de Educación que «organizaba en simples tiendas de lona toda la educación de los niños, jóvenes y adultos del campamento». Para el albergue, un Sector de Infraestructura, que «planeaba y construía chozas, baños,

organizaba la distribución del agua, lonas y otros materiales». Para saber lo que sucedía ahí y en el mundo, un Sector de Comunicación, responsable de la «divulgación e información de todos los trabajos del campamento, de los acontecimientos políticos y socioeconómicos nacionales, y también de la distracción y entretenimiento de las familias acampadas». Para entender lo que sucedía, un Sector de Formación, encargado de «la conciencia social y política de los trabajadores, y de discutir la importancia de la Reforma Agraria y del cambio hacia una sociedad sin explotadores ni explotados». Para impedir las enfermedades, un Sector de Salud, que promueve la distribución de medicamentos y patrocina la realización de exámenes a partir de un programa de medicina alternativa llevado a cabo por el MST. Para la imaginación, la «mística», que representaba la dimensión de lo posible —a pesar de la precariedad—, replanteaba la propia historia —a pesar de una historia que sistemáticamente les había sido negada— y reafirmaba, de unos a otros, la condición de sujetos.⁶

Y para la conducción de aquel ejército, una Comisión Ejecutiva General «compuesta por 13 integrantes, elegidos por las propias familias del campamento».

Se practicaba una «centralidad» de gestión que permitía economizar las formas de enfrentar a las necesidades y (re)presentarlas como posibilidades de inversión de una práctica puramente funcional. Esto significaba construir estas posibilidades al enfrentar directamente la propia necesidad: lo que difiere radicalmente de la situación cuando se interpone la ostentación que sólo la segrega, al relevar el contexto que la reproduce y afirma.

Por otro lado, esa «centralidad» casi militarizada presupone un ordenamiento riguroso de los movimientos, los gestos y las miradas, y reproduce una sociabilidad vigilada y temerosa: quién llega, quién sale, quiénes son, lo que hacen, etc.; sin embargo, si se somete al campamento como un «campo de guerra», esa «centralidad» vigilada tal vez sea el único medio de defensa de aquel territorio de «ser nada», providencia que se justifica por la agonía de un tiempo que resiste más allá de la cadencia de los días y de las noches.

Cuando, a partir de enero de 1997, se distribuyeron los lotes y se firmaron los contratos de asentamiento con cada familia —lo que define su condición de «asentada»—, ocurrió un proceso inverso de dispersión, y aquella «centralidad» perdió su vigor y reveló, como se constató en este caso, un cierto debilitamiento de la coalición inicialmente establecida en función del orden pragmático que demandaba la estrategia de la ocupación. Cada familia en su lote, en contacto únicamente con

⁶ La «mística» consiste en una actividad casi «ritual», en la cual el Movimiento, como sujeto colectivo que se afirma, celebra su presencia y su capacidad de organización y movilización. Mediante signos y símbolos, representados en camisetas, gorras, himnos, música y movimientos que hicieron peculiar al MST, la «mística» incorpora un conjunto de significaciones que nos parece transponer la mera reproducción de un corolario ideológico. Pretende incorporar un ideario que funde tradiciones, historia, personajes y memoria, que delinean una especie de «héroe colectivo», quien hace presente toda la historia de las luchas agrarias y de los oprimidos que el Movimiento cree actualizar.

la corporativa, que hace viable la producción y que funciona como mediadora con el Movimiento, acaba por despegarse de aquella organicidad inicialmente establecida. Este hecho es importante para comprender los dos momentos que discutiremos en este caso específico: primero, un tiempo en el cual el MST se establece como el orden articulador inequívoco, en que las mediaciones entre individuos y comunidad política se estructuran a partir de demandas estratégicas y profundamente pragmáticas; después, con la dispersión de las familias en sus lotes, cuando las posibilidades de mediación entre sujeto simple y sujeto colectivo se diluyen a medida que se someten a las exequias exigidas por la microeconomía establecida por la rutina de los flujos de producción inherentes a la práctica cooperativista.

Es en este segundo momento, justamente, cuando surge la idea del restablecimiento de una nueva «centralidad», concebida a partir del arraigo de las relaciones de vida en el territorio de la utopía de una ciudad que se constituye por su «reverso»: una ciudad de la reforma agraria.

4. EL CONTEXTO DEL MOVIMIENTO: EL MST COMO ACCIÓN LOCAL

La ocupación de la hacienda Giacometi, dirigida en aquella madrugada como una acción militar, fue promovida y organizada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra —como tantas otras en otras partes del país— y, ciertamente, contribuyó a profundizar un poco más las raíces que el MST, como movimiento social organizado, ha cultivado a lo largo de los últimos 15 años. En la senda de otras tantas luchas campesinas, los sin tierra —como acabaron siendo conocidos genéricamente— reeditan y reinventan, por ejemplo, las luchas de las Ligas Campesinas,⁷ diezmadas por el régimen militar instaurado por el golpe de 1964. Mediante marchas que recorren el país a pie, organizando ocupaciones como la de aquella mañana, promoviendo el cooperativismo como estructura operativa para hacer viable la producción colectiva, definiendo e implementando programas para la formación del agricultor o proponiendo alternativas para la educación infantil, el MST ha logrado establecerse como uno de los más impertinentes sujetos —júzguense los medios o no— y ha conseguido alterar la falsa tranquilidad consensual impuesta por el neoliberalismo en Brasil.

Ocupar los costados de aquel enorme latifundio, por lo tanto, forma parte de un proceso que trasciende el valor de un conflicto agrario nacional, que implica un nuevo escenario que se ha venido construyendo en el país, ante los defectos de una estructura agraria que, incluso más allá de la cuestión de la propiedad, es injusta y

⁷ Es importante subrayar que las Ligas Campesinas, a pesar de la importancia que tuvieron en la década de 1960, cuando surgieron en el nordeste brasileño, reunían alrededor de 3 000 campesinos. El MST, ha logrado constituirse, a lo largo de los últimos 15 años, como un movimiento de masas y congrega aproximadamente, a 500 000 campesinos (véase la nota 9).

perniciosa desde la época en que la tierra fue transformada en objeto de derecho, todavía en tiempos del dominio portugués.

Además de eso, aquellos 15 000 campesinos que se desplazaron sobre aquella tierra llevaban consigo el eco de una aritmética que se impone —no tanto por la simple suma, que se realiza en cantidad, sino por la potencia del ruido que produce— ante el ejercicio permanente de «docilidad de los no incluidos»,⁸ acompasado por la unísona cantaleta consensual promovida por los dueños del poder.⁹

De esta forma, la ocupación de la hacienda Giacometi logró llamar la atención no sólo por la importancia, sino también por el significado y por la osadía.

El INCRA, responsable de la política agraria y de la tierra en el país, se vio obligado a promover la expropiación de 16 800 ha para el asentamiento de 900 familias (el 17 de enero de 1997) y, posteriormente, más de 10 000 ha (el 13 de agosto de 1998) para satisfacer la demanda de 1 478 familias, acomodadas hoy en lotes rurales de cinco a seis *alqueires* (12 a 14 hectáreas).¹⁰

Constituido como Proyecto de Asentamiento de Reforma Agraria Ireno Alves dos Santos —cuyo nombre rinde homenaje a un líder local del MST muerto en un accidente en la carretera que atraviesa toda el área—, el asentamiento da albergue a una población de 9 000 personas, casi 1.5 veces la población del municipio del cual forma parte. Lógicamente, la admisión de este nuevo contingente de habitantes acarrea al municipio una enorme demanda de servicios públicos y atención básica a las necesidades de consumo, lo que provoca un intenso reordenamiento económico de la región como un todo, y del propio municipio en particular.

5. EL CONTEXTO DEL MUNICIPIO: ENTRE LO COLECTIVO Y LO PARTICULAR

Entre las ciudades de Laranjeiras do Sul y Chopinzinho se localiza el municipio de Río Bonito de Iguazú, ubicado en la región centro oeste de Paraná. Antes de la instalación del asentamiento Ireno Alves dos Santos albergaba, aproximadamente, a 7 000 habitantes entre el pequeño núcleo urbano y su área rural —ésta sí, bastante extensa. Río Bonito de Iguazú abarca un área de alrededor de 70 140 ha, y casi 40% de esta área está ocupada hoy por el asentamiento—, lo que revela ya una carga de conflictos que precedieron y sucedieron a su instalación.

⁸ Se trata de una conjunción de referencias: Foucault, con la idea de constitución de un «hombre dócil» (Foucault, 1987) y de una locución que se ha vuelto habitual, al expresar la forma de exclusión de un contingente de «inútiles para el mundo» (Castel, 1998), ante el proceso de modernización llevado a cabo en Brasil en las últimas décadas.

⁹ Como cualquier movimiento social, el MST no alcanza a calcular siquiera una cantidad de personas implicadas: se habla de 500 000, siendo aproximadamente 200 000 personas organizadas en campamentos y otras 300 000 ya asentadas o en proceso de asentamiento.

¹⁰ Hay que destacar que inicialmente se encontraban acampadas, ya en el interior de la hacienda, 3 048 familias. El rumbo de la negociación emprendida por el INCRA dio como resultado un excedente que hasta hoy aguarda solución.

Río Bonito forma parte de un conjunto de ciudades de esta región, ubicado en la margen del río Iguazú y que sufrió —o se benefició— con la construcción de numerosas hidroeléctricas a lo largo de su curso, durante 1970 y 1980: Itaipú, en su desembocadura —que convierte a Paraná en exportador de energía eléctrica—, Segredo, Salto Osório y Salto Santiago, por ejemplo. Esta última se localiza en el territorio de ese municipio y la historia de su construcción no siguió un curso diferente de aquel dirigido por la política desarrollista de esa época. Promovida por Centrales Eléctricas del Sur de Brasil, S. A. (Eletrosul), la represa hidroeléctrica de Salto Santiago también dio como resultado la creación de un gran lago artificial, que expulsó a gran cantidad de pequeños propietarios, pues enormes áreas de tierra quedaron sumergidas. También promovió profundas modificaciones estructurales en las ciudades de la región, principalmente en las más próximas a las cotas límites de inundación, propiciadas por la demanda significativa de mano de obra y de servicios, además de aquella creada naturalmente por el éxodo de las áreas anegadas y la consecuente transferencia de grandes contingentes de población hacia los municipios vecinos que no fueron alcanzados por la formación del lago.

Con la llegada de los sin tierra y la instalación del campamento, de un día para otro la ciudad vio crecer su población de 7 000 habitantes a casi 16 000, lo que significó una ampliación desmesurada de nuevos usuarios de los servicios públicos, nuevos consumidores y, para aflicción comprensible del poder local, nuevos electores.¹¹

Tampoco les es ajena la precariedad de la infraestructura del municipio al cual pasaron a integrarse como «habitantes». Al tratarse de una prioridad para el MST, la educación básica fue motivo inmediato de una negociación entre los colonos y la alcaldía local.¹² Es significativo que uno de los primeros conflictos —después de superar aquellos inherentes al proceso, que van desde la ocupación de la tierra hasta la división de los lotes rurales y el efectivo asentamiento de las familias en éstos— fue con la administración del municipio, cuando se reivindicó la implantación de la

enseñanza básica en el área del asentamiento. En defensa de los intereses políticos y comerciales locales, el propio alcalde de Río Bonito promovió la tentativa de cooptación de familias asentadas, al ofrecer, además de un abundante churrasco, facilidades y prestaciones públicas, con tal de que cuestionaran la obligatoriedad de la vinculación del nuevo pequeño productor a las organizaciones cooperativas que el MST tiene como parte fundamental de la política de reforma agraria que defiende.

En efecto, en los asentamientos de esta región cuentan que la Cooperativa de Reforma Agraria de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Coagri) del centro oeste de Paraná —una de las mayores del país vinculadas al MST, que congrega aproximadamente a 4 500 familias, entre colonos asentados y pequeños productores rurales, y que mueve algo así como tres millones de reales anuales (actualmente cerca de 1.74 millones de dólares) —comercializa más o menos un millón de costales de granos, principalmente maíz, soya, frijol y arroz. La Coagri, como la casi totalidad de las Cooperativas de la Reforma Agraria ligadas al MST, se hace responsable no sólo del apoyo y la comercialización de la producción agrícola anual, sino también de la gestión del crédito destinado a los colonos, es decir, que toda la aplicación de los recursos de este crédito obedece a directrices establecidas a partir de parámetros fundados por un padrón mínimo de viabilidad y de subsidios presentados por técnicos contratados por la propia cooperativa.

Sería oportuno destacar que el MST ha enfrentado innumerables problemas con el modelo de producción que ha adoptado: incompatibilidad entre los patrones culturales de producción familiar y la estructura de producción en cooperativa, resistencia a la implementación de nuevos procedimientos, limitaciones gerenciales que terminan por imponerse en virtud de la insuficiencia de mecanismos de capacitación de personal o de la existencia de bases adecuadamente formadas, divergencia entre el volumen de trabajo invertido y el retorno obtenido (relación producto-área-trabajador), etc. Estas dificultades, cuando son enunciadas por la derecha, justifican la acusación de ineficiencia e incapacidad del Movimiento para establecer soluciones adecuadas para un mercado agrario dinámico, competitivo y globalizado, y de tener una postura retrógrada que mantiene la condición de miseria estructural en el campo, etc. Cuando la izquierda las hace explícitas, introducen el discurso de que la propuesta de solución a la cuestión agraria no es «socialista», toda vez que no promueve la efectiva abolición de la propiedad privada y la socialización de los medios de producción, por lo que no acaba con el «estrangulamiento» de la producción agraria, o más aún, que no son propuestas ampliamente aceptadas por las «masas agrarias» (Sampaio, 2001: 8). No toca aquí desarrollar tal discusión. De cualquier forma, procuraremos enunciar el contexto en que se establece este modelo y qué tanto acaba por determinar, para el segundo momento que hemos definido, las condiciones que detallan las posibilidades, incluso, de una ciudad de la reforma agraria.

¹¹ Cabe mencionar que la estructura política brasileña mantiene aún, fuera de los grandes centros urbanos, contornos nítidamente «parroquiales», lo que da como resultado una división del poder local en función de los acontecimientos y disputas también locales, ajena a cualquier organicidad partidaria. De esta forma, el impacto generado por el asentamiento Ireneo Alves dos Santos adquiere dimensiones de embate que extrapola la capacidad de absorción mecánica, por parte del *locus* político, al interferir drásticamente en lo cotidiano de las idas y venidas de los pequeños «coroneles» [jefes políticos propietarios de tierra] que comparten el poder.

Este hecho no es desatendido por los colonos de los asentamientos. En voz de uno de sus líderes, «mientras acampamos a la orilla de la carretera —el primer momento que mencionamos—, nos consideran bandidos. Cuando conquistamos la tierra y el crédito y nos volvemos consumidores —el segundo momento—, empezamos a ser considerados “muy importantes” para la economía local». Son, en este caso, asediados por un sinnúmero de comerciantes de todo: de semillas a maquinaria agrícola, de ropa a comida, de beneficios comerciales a beneficios políticos.

¹² El MST ha desarrollado, desde su origen, programas de educación y formación diferentes de los que promueven las instancias oficiales, y los implementa de forma casi simbiótica a las estructuras de enseñanza formalmente establecidas. Esto se da mediante la formación de profesores que integrarán —y atenderán las exigencias previstas— el cuerpo docente que actúe en la red oficial de enseñanza.

Las Cooperativas de la Reforma Agraria son hoy uno de los principales blancos de la «artillería» del gobierno brasileño contra el MST: presentan numerosos flancos frágiles, actúan en condiciones de extrema precariedad técnica y financiera, echan mano de medios administrativos poco recomendables (si consideramos que lo que se recomienda es la estricta sumisión a reglas que fueron instituidas para que tales cooperativas nunca existan), etc. De esta manera, un amplio espectro de juicios —a la derecha y a la izquierda, como ya vimos— ha fustigado la estructura cooperativista que opera el MST: desde la atribución a las cooperativas de la condición de «aparato», destinado a la cooptación de desinformados, hasta la captación de recursos para el financiamiento del propio Movimiento, o la formación de «bandas de invasores de tierras»;¹³ incluso, en el otro extremo, de instituto jerárquico manipulado por unos cuantos, en detrimento de una «democracia productivista», orientada a partir de una perspectiva colectivista de producción (Navarro, 1997). Por lo que nos fue posible detectar en el caso divulgado, tanto una versión como otra son bastante plausibles si filtramos el discurso oficial, tanto el promovido por los detractores del Movimiento como aquel formulado por sus líderes. Por otro lado, cada colono del asentamiento enuncia su propia versión y comprende, a su manera, el mecanismo que lo vincula a la cooperativa. Y es exactamente aquí donde el análisis habitual parece derrapar. Primero, porque los colonos —por lo menos con los que convivimos— cultivan una posición exacerbadamente oportunista: su vínculo con el sistema de producción está calibrado en función de las ventajas que momentáneamente se les ofrecen. Si es posible obtener crédito de los suministradores de insumos agrícolas a través de la cooperativa (para la adquisición de semillas y abono, por ejemplo), los colonos son rápidos para componer su cuadro de asociados. Cuando llega la cosecha, si se les hace alguna oferta mejor, no se resisten a entregar su producción a un intermediario local a cambio de favores que no se resumen en el «mejor precio», y hacen a un lado cualquier compromiso inicialmente firmado con la cooperativa. Esta dinámica normalmente no se plantea en los análisis que se promueven acerca del sistema de producción defendido por el MST. Sigue, casi exclusivamente, la evaluación del discurso oficial en la idea de que los colonos constituyen una simple «masa de maniobra» en las manos de las cooperativas gestadas por el Movimiento, dispuesta al despotismo de una dirección centralizadora y excluyente.

¹³ Sería bastante extensa la referencia a las innumerables causas que dan origen a esta versión propagadas por la prensa. Particularmente, una de las embestidas cruciales contra el MST, protagonizada por un gran diario paulista, a *Folha de S. Paulo*, atacaba justamente a la Coagri y a aquella instancia regional del Movimiento. La virulencia con que el reportero Josias de Souza trató la cuestión contribuyó a reforzar la creencia en cierta «orquestación» entre el periódico y el gobierno federal: al día siguiente de las «denuncias» de desvío de recursos de la Cooperativa («MST desvía dinero de la reforma agraria» es el título) y de que el MST «obligaba» a las familias asentadas a contribuir financieramente para el Movimiento («Director del MST confirma cobranza de 3%»), el gobierno federal demostró una eficiencia que no alcanza en muchas otras situaciones y suspendió todos los recursos para los asentamientos del estado de Paraná vinculados al MST, hasta que aquellas «irregularidades» fueran averiguadas (*Folha de S. Paulo*, 14 de mayo de 2000: A13-14; y 17 de mayo de 2000: A9).

Esta cuestión es vital para comprender mejor el marco en el que se desarrollan los conflictos con el poder público municipal de Río Bonito. Lo que ocurre es que, invariablemente, los intereses que la Coagri procura articular no armonizan con los intereses políticos y comerciales locales. En un cuadro típico de tensión, los conflictos a veces afloran en cuestiones que no hacen explícitos ni esos intereses ni el conjunto de sus interlocutores.

Al entender la amenaza que representaban las facilidades ofrecidas por el alcalde, el MST local promovió una gran manifestación frente a la sede de la presidencia municipal de Río Bonito de Iguazú, movilizó a las familias ya asentadas y a los integrantes de un nuevo grupo acampado en la misma orilla de la carretera que había albergado a los ahora «parcelarios»¹⁴ de la Giacometi, que exigía la infraestructura necesaria para la atención básica del asentamiento: escuelas, apertura de caminos empedrados, atención básica a la salud, transporte público, etc. Instados por los líderes del Movimiento y del asentamiento, los 800 campesinos que, literalmente, «abrazaban» el edificio de la alcaldía, mostraron una reacción esencialmente colectiva frente a las propuestas del alcalde, en contrapunto a cierta confusión ya instalada en virtud de la movilización de algunas voluntades particulares por parte de los colonos. Frente a la manifestación, el presidente se resistió, casi inflexible, a reconocer al MST como instancia de representación de los colonos asentados, insistía en que «cada quien era libre de escoger su propio camino». La junta en la presidencia municipal, organizada aprisa, contaba con la participación de integrantes del gobierno estatal —Salud, Educación y Medio Ambiente—, del INCRA, de secretarios y funcionarios de la alcaldía de Río Bonito y de líderes del MST. Ante la inflexibilidad del alcalde, en cierto momento los propios funcionarios de las instancias estatales y federales del gobierno procuraron removerlo, con el argumento de que «¡hasta el presidente de la República reconoce al MST!» Vencido, el presidente municipal sufrió además la derrota de comprometerse públicamente, frente a los manifestantes, con las cuotas de responsabilidad que le tocaban a la municipalidad. Como si eso no bastara, también se vio obligado, por las manos de uno de los niños del asentamiento, a ponerse una gorra del Movimiento, la cual representa uno de sus iconos más conocidos.

Este relato delinea, mínimamente, el contexto del conflicto generado por la presencia del asentamiento en la región y la diversidad de posiciones e intereses que medran en el propio Movimiento y en sus estructuras de producción. En este contexto reverberan los rumores entre el poder local y la masa de destituidos, principalmente por tratarse de una región en la que tradicionalmente se vio la acción de falsos propietarios, pistoleros y grandes latifundistas, muchas veces reunidos en una sola persona. Además de eso, también amplifica los rumores generados por los conflictos e intereses particulares, que sólo están suspensos —pero que

¹⁴ Denominación relativa a la «parcela» de tierra atribuida a cada familia asentada.

nunca dejan de existir— a partir de la acción colectiva que manifiesta la expresión de una comunidad política, en el sentido arendtiano del término. En la voz de un dirigente local, es necesario que el Movimiento aprenda a «administrar *en el conflicto*» y no a «administrar *el conflicto*». No sería, pues, a partir de la simple suma y de la preponderancia de un término de la ecuación sobre otros como se constituiría esta comunidad política. Buscando una imagen más compleja, lo que nos parece es que se trata de una ecuación diferencial, donde cada término encierra otra ecuación, compuesta por variables y funciones que la lógica matemática jamás permitiría conjugar.

6. EL CONTEXTO DEL ASENTAMIENTO:

CENTRALIDAD COMO CONDICIÓN DE SUSTENTABILIDAD

Con la implantación del asentamiento, todas las demandas referentes a las necesidades básicas de este grupo se organizaron en torno a dos vertientes de acción: por un lado, el «abrazo» con el poder público, que exigía un posicionamiento activo para la pronta atención de las necesidades de infraestructura local, es decir, escuelas, centros de salud, electrificación rural, telefonía, etc., además del crédito para la producción y una política de apoyo técnico que se adecuara a las dinámicas pretendidas por los sistemas productivos articulados por el MST: cooperativas de producción y crédito, introducción de técnicas alternativas de crianza y cultivo, programas de formación de técnicos, etcétera.

Por otro lado, el Movimiento se proponía articular acciones que permitieran conducir al asentamiento a lo que llamaremos «sustentabilidad autoconferida», entendiendo que, aunque alcanzara una eficiente estructura de producción de riqueza, efectivamente autoadministrada, la equitativa distribución de esta riqueza entre sus productores y la plena participación de éstos en la formulación de la política de conducción de todo el proceso no serían, por sí solas, finalidades capaces de provocar un aumento significativo ante un deseo de efectiva superación de las condiciones de precariedad. No ir más allá significaría perpetuar un ciclo que únicamente atenúa tensiones momentáneas. Así, pensar en una «sustentabilidad autoconferida» como proyecto de existencia en el campo no significaría tan sólo realimentar el proceso productivo allí realizado, sino refrendar un ciclo que no se dispone a la ruptura interna de los mecanismos de reproducción de un modelo que condena al campesino a los dominios de la precariedad. Significaría, también, extender nuevos territorios para la reinención de las prácticas, para la institución de nuevos oficios, para la creación de alternativas de los procesos productivos tradicionales, para la constitución de una nueva sociabilidad, etc. Significaría erigir, también, propuestas en el área de la vida colectiva, del tiempo libre y de la cultura, de la salud y de la educación, del conocimiento y de la tecnología, de la posibilidad

de una existencia en el campo sin abdicar de todos los beneficios que la urbanidad conquistó a lo largo de los siglos. Significaría imaginar una posible *polis* reinventada, donde su *ágora* se extendiera más allá del limitado territorio de las ciudades. Significaría reafirmar la «voluntad de permanecer en el campo, inventando una perspectiva, a primera vista extravagante, de construcción de una “ciudadanía sin ciudad”» (Rizek y Lopes, 1999).

Desde que se decretó la expropiación de parte de la hacienda Giacometi y el asentamiento de las 1 479 familias de los sin tierra, el MST regional empezó a discutir la necesidad de pensar e implementar alternativas que subvirtieran las tautologías de un orden mecánico que la inercia de un programa de «inclusión domesticada» —inmerso en el seno del programa de reforma agraria oficial— procura establecer como condición única, asegurada por la cantaleta consensual de una «reforma agraria sin conflictos», para el éxito de cualquier proceso de asentamiento rural.¹⁵

De esta manera, el proceso de discusión, promovido en mayo de 1997, y con la ocasión propicia de pensar el «asentamiento que queremos», llevó a los asentamientos a reflexionar sobre las propias precariedades, las limitaciones impuestas por el reducido volumen de recursos destinados al financiamiento de la producción¹⁶ y sobre las perspectivas que se dibujaban a partir de los postulados que

¹⁵ Un ejemplo de esto es el programa oficial promovido por el gobierno del estado de Paraná: Villa Rural. En los folletos que divulga la acción gubernamental, las imágenes representan familias felices alrededor de canastas y cestos de diferentes materiales repletos de «productos de la tierra», inadvertidamente tiernos y grandes. En el título, ya se comprende el contenido: «Reforma agraria con eficacia y sin traumas». Este programa prevé el asentamiento de familias en villas compuestas por lotes de 5 000 m², dotadas de vivienda, almacén de depósito de productos, gallinero e infraestructura. El financiamiento cuesta, aproximadamente, 80 reales mensuales (alrededor de 46 dólares) lo que, en el testimonio de un morador, es imposible pagar si «no se tiene un empleo», es decir, la «eficacia» de la pretendida reforma agraria depende de una condición externa al propio objeto que se pretende reformar.

¹⁶ El crédito destinado a cada familia dentro del programa oficial, denominado sintomáticamente Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf), preveía, hasta mayo de 2000 (cuando fue anunciada una serie de modificaciones que alteraba la política de subsidios), una suma de 9 500 reales (5 520 dólares), liberada en partidas, para la compra de insumos (semillas, productos químicos para el combate de plagas, abono, etc.) y el fomento a la producción. Además de esto, estaba previsto un recurso inicial para la instalación de la familia asentada: canasta básica de alimentos, apoyo para la construcción de viviendas, adquisición de equipamiento y herramienta, etc. Los recursos destinados a la compra de insumos y al fomento a la producción financian anualmente las zafas durante un periodo de 10 años, en promedio, negociados mediante un «Contrato del asentamiento», firmado entre el gobierno y cada familia asentada. Para esclarecer cómo las cooperativas consiguen, en este caso, operar con tales recursos, basta explicar que cada «parcelario» le transfiere a la persona jurídica de la cual forma parte —su cooperativa—, a través de un instrumento apropiado para este fin, la responsabilidad de la aplicación de tales recursos, de la comercialización de los productos y de la distribución de los resultados. Así, las cooperativas logran conjuntar un volumen de capital significativo, a partir del cual pueden obtener mejores precios y condiciones de negocio en el mercado formal. A título de comentario, sería ingenuo imaginar que las familias asentadas son atraídas de forma inflexible a partir de los mecanismos de presión promovidos por los líderes y por los dirigentes de las cooperativas, como si —así lo quiere hacer parecer el gobierno y la propia prensa— la relación entre las Cooperativas de la Reforma Agraria y los colonos no implicara conflictos, intereses particulares en tensión con los intereses colectivos, además de los que resultan del embate entre líderes y colonos asentados. Muchas veces, se ha pretendido insinuar que el colono compone una estirpe ignara e ingenua, dispuesta, por el MST, tan sólo como «dócil masa de maniobra», como ya se comentó en el cuerpo del capítulo.

establecía el programa oficial de la reforma agraria. Ya a partir de este momento quedaba claro que era necesario ir más allá del ámbito de la producción y de la gestión de ésta. Se hacía necesario discutir los meandros de la vida colectiva, la constitución de la vida más allá de la estricta satisfacción de la existencia material, procurando eliminar aquel parásito que la necesidad insiste en intercalar en el tejido de la existencia.

Quedaba claro, con todo, que se trataba de un proyecto de proporciones sin cuento: un ejercicio de utopía maniatado ya en los primeros pasos de su concepción. ¿Cómo pensar, entonces —como se propuso en el primer documento que discute el asentamiento «Ireno Alves dos Santos, el asentamiento que queremos»—, en una «*agrovilla* principal con centralización de todos los servicios y las grandes inversiones comunitarias», atendida «por un sistema de transporte interno planeado y eficiente»; o en un «gran centro educacional desde preprimaria a preparatoria, con amplias estructuras, servicios de calidad y profesionistas bien preparados», donde se preven «vacantes para todos», además de «todas las condiciones materiales y humanas para ofrecer una educación de calidad»; o también en un «gran centro de entretenimiento y cultura [...] vinculado al centro educacional», que desarrolle «múltiples actividades dirigidas a todas las edades, principalmente a la juventud, como forma de mantenerse en los asentamientos y no salir hacia las ciudades»; o en la casi intangible perspectiva de «llevar la ciudad y sus beneficios al campo», sin que haya las mínimas condiciones estructurales? Por el contrario, el programa oficial presupone el aislamiento de los colonos, tanto físico como funcional, y les reserva tan sólo la condición de «pequeño productor», reducido a un «sujeto económico» que tal vez venga a conquistar, en el futuro, algunas migajas de los improbables lucros de un mercado agrario y de tierras regulado únicamente por sí mismo.

En función de este análisis, los líderes locales, la coordinación del asentamiento y los colonos del Ireno Alves dos Santos discutían la idea de construir una «nueva centralidad» para el grupo, perdida desde el fin del campamento por la conducción de cada familia hacia su lote, una especie de estimación en el paso del primero al segundo momento que mencionamos. Esta «nueva centralidad» permitiría una mejor articulación del grupo, con la intención de establecer regímenes más orgánicos de gestión del asentamiento, en oposición a la dispersión y el aislamiento que, paradójicamente, se acentuaban a medida que los colonos se instalaban en sus parcelas. Así, también sería posible implementar algunas alternativas de producción que exigen la articulación con infraestructura centralizada: puestos agroindustriales para el beneficio de la producción del asentamiento, microindustrias (ebanistería y textiles, por ejemplo), actividades alternativas de empleo y renta (cooperativas de consumo y de construcción civil, sistemas de descanso y recreo, actividades culturales y de formación, etc.) o pequeñas instalaciones para servicios (talleres mecánicos, zapaterías, peluquerías, etcétera).

Además de esto, la «centralidad» pretendida permitiría la aglutinación de determinados servicios que, con la dispersión en las casi 27 000 ha de asentamiento, se volvieron prácticamente inviables: enseñanza hasta preparatoria, servicio de hospitales, centros de formación, centros para actividades deportivas y culturales, etcétera.

Para ello, se había reservado entonces un área de 264 ha que, inicialmente bautizada como «gran centro», debería albergar todos estos equipamientos y servicios como alternativa de la precaria, pero consolidada, infraestructura ya instalada en la sede del municipio de Río Bonito.

7. EL PRETEXTO DE LA CIUDAD:

CENTRALIDAD COMO CONDICIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA EXISTENCIA

Entretanto, el área trasera a lo largo del margen del gran lago formado por la represa de Salto Santiago escondía los restos de una «villa hidroeléctrica»: una ciudad-campamento construida para acomodar a los obreros, técnicos y encargados, contratados para la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Salto Santiago. Producto de la política desarrollista de los años setenta, la villa había sido planeada y construida pensando en su total desmontaje posterior. Así, todas las viviendas, equipamientos públicos e instalaciones se concibieron para su total remoción al final de las obras —lo que sucedió en 1983: de la noche a la mañana, el contingente poblacional, que en el auge del proceso de construcción alcanzó aproximadamente 13 000 habitantes, tuvo que buscar otro rumbo y otro lugar para vivir. Las ruinas de lo que quedó —todo el sistema vial, instalaciones de drenaje, aguas negras, captación y abastecimiento de agua con capacidad aproximada de 1.4 millones de litros, dos piscinas, pisos del cine y de la estación de autobuses, los restos de un antiguo hospital de 68 camas, así como los cimientos de todas las edificaciones, fueron escondidos por la selva y permanecieron así a lo largo de 15 años.

A mediados de 1998, algunos colonos del asentamiento que habían vivido en aquella ciudad-campamento propusieron rescatar las ruinas de entre la selva. Después de los primeros esfuerzos, todo el asentamiento y la propia dirección del Movimiento comprendieron que allí podrían fundar las bases de esa «centralidad», si se promovía la constitución de un núcleo urbano que pudiera extender las concepciones de producción, gestión y vida colectiva a partir de la reinención de la propia idea de ciudad.

En esa misma época, por invitación de la Secretaría Nacional del MST, visitamos el asentamiento Ireno Alves dos Santos.¹⁷ Ya en esa primera visita, las ruinas

¹⁷ Los primeros contactos se realizaron en la Secretaría Nacional del MST, en São Paulo, en abril y mayo de 1998, a través de la Confederación Nacional de Cooperativas de Reforma Agraria Brasileñas (Concrab), una estructura operacional vinculada al MST, que le da apoyo institucional y promueve la consolidación de la estructura cooperativista realizada por el Movimiento. Tales contactos se establecieron con el autor y otros técnicos,

de la antigua villa hidroeléctrica que estaban en proceso de limpieza emergían bajo la selva, y se propuso la instalación, ahí, de esa nueva «centralidad» que se discutía como posible alternativa para la sustentabilidad del asentamiento.

Desde los primeros contactos quedó claro que había una gran preocupación del Movimiento en cuanto a la posible dirección de sus propuestas para los asentamientos: ¿cabría aún insistir en el argumento de una reforma agraria exclusivamente basada en la lógica de la producción de alimentos, como condición inflexible para la erradicación de la miseria? Es decir, ¿bastaría repartir la tierra, plantar más, cosechar más y alimentar más para que desaparecieran los cimientos de una estructura social injusta y explotadora? Mucho se ha discutido sobre la validez de este argumento: es lógico que, a partir de recursos altamente desarrollados sea posible extraer de la tierra el máximo de productividad, y atender, si no con el excedente, por lo menos la estricta demanda por el alimento y riqueza. Si esto es posible, ¿por qué el MST se rehúsa a adherirse al padrón establecido por la política oficial de la reforma agraria y no admite hacerse «socio» para la implementación de esta política, y no hace esfuerzos de común acuerdo hacia este proceso de tecnificación del campo?

En primer lugar, si analizamos el propio concepto de «productividad» —objeto constante de choque entre las instancias del poder público (particularmente el INCRA) y el MST—, veremos que oculta posiciones políticas, como que los técnicos responsables de su delimitación utilizan parámetros tendenciosos, y los aplican para excluir numerosas propiedades de los procesos de expropiación para la reforma agraria.¹⁸

integrantes de la organización no gubernamental Usina: Centro de Trabajos para Ambiente Habitado. Creada en 1990 en São Paulo, la Usina reúne a arquitectos y urbanistas, ingenieros, sociólogos y abogados, además de que, eventualmente, aglutina técnicos de otras áreas, y actúa muy próxima a grupos que, en las ciudades, luchan por el acceso a la vivienda: los sin techo. Desde la década de 1980, con el relajamiento del régimen militar y el recrudescimiento de los movimientos sociales, el movimiento por la vivienda hace valer algunas de sus propuestas. Ya al final de esa década, logra abrir una brecha en la mecánica de financiamiento habitacional, instituida desde la creación del Sistema Financiero de Habitación, responsable de la política de provisión habitacional en el país, implantado en el año de instalación del régimen (1964). Se trataba de establecer otro flujo para la aplicación de los recursos destinados a la construcción de viviendas, y cambiar la lógica de financiamiento, intermediado por sectores del poder público o por empresas contratantes de obras públicas: «coladeras» bastante amplias por donde se escurrieron gran parte de estos recursos. A partir de una gran manifestación en Brasilia, en 1988, el Movimiento de Habitación logra negociar un programa de financiamiento que prevé, por primera vez en el país, la transferencia de recursos directamente a los usuarios, organizados en asociaciones para la gestión colectiva de su aplicación. Será al actuar ante organizaciones del Movimiento, elaborar proyectos, acompañar obras, auxiliar en la gestión de los recursos y promover programas de formación de grupos, como la Usina construirá la historia de su actuación entre los sin techo urbanos. A lo largo de los últimos 10 años, lo que se volvió diferencial en este proceso es la preservación de un principio de autonomía autogestionaria —llena de ventajas, hay que admitirlo— que ha caracterizado tanto la actuación del Movimiento de Habitación (particularmente en los grandes centros urbanos) como la de los grupos que lo asesoran, entre éstos la Usina. En función del tipo de trabajo que desarrolla es como este grupo de profesionales forma sociedad con el MST, particularmente en el asentamiento Ireno Alves dos Santos.

¹⁸ Es el caso, por ejemplo, de la inmensa cantidad de tierras utilizadas para pecuaria extensiva, consideradas por el INCRA como «productivas»: ocupan una hectárea de tierra por cada cabeza de ganado, consumen alrededor

En segundo lugar, basta argüir lo que es obvio: ¿quiénes son los dueños de los «recursos tecnológicos altamente desarrollados»? Y también es obvio que este proceso de tecnificación del campo no hace más que contribuir a la formación de grandes contingentes de miserables que vagan por el campo o, en su mayoría, migran hacia las ciudades, lo que acarrea resultados bastante conocidos.

En el límite, el problema que se planteaba era cuestionar el objeto comprometido en la lucha por la tierra. No bastaría con atizar el fuego en círculo y eximirse de cuestionar lo que podría estar más allá. No se trataba de promover el aislamiento del colono en su condición —nuevamente— de precariedad, condenándolo al ritual de un proceso que únicamente retarda su destierro, al compensar temporalmente las presiones generadas por la tensión de este movimiento.

Si es el modelo —que asocia una estructura agraria injusta, una concepción tecnoburocrática tendenciosa de los elementos de evaluación y de gestión de las acciones en pro de la reforma agraria y el restringido dominio de los medios de producción, de calificación de esa producción y de circulación de las mercaderías producidas en el campo— el que promueve la perpetuación de este círculo de fuego, se trataría de pensar la sustentabilidad de una propuesta de reforma agraria que se proyectara más allá de este modelo. Incluso, combatiendo el propio modelo.¹⁹

Esta posible sustentabilidad se diseñaría —o se autoverificaría—, en tal caso, a partir de la construcción de alternativas que aseguraran la posibilidad de superar los límites del área de acción del MST, al procurar subvertir el confinamiento implícito en el precepto establecido por el poder.

La propia Superintendencia Regional del INCRA, al hacer explícita la posición gubernamental cohesiva y uniforme, manifestaba tendencias distintas del discurso oficial nacionalmente impuesto por el órgano. También, impresionada ante la posibilidad de construir la primera ciudad de la reforma agraria del país, invertía decisivamente —con recursos financieros, incluso— en el rescate de aquellos escombros. Por otro lado, se establecía un nuevo frente de conflictos y embates, una vez que, obviamente, la «ciudad» pretendida por el MST no era la misma que pretendía la instancia regional del INCRA. Si por un lado el Movimiento no disponía de recursos para promover la limpieza de la villa y, además de eso, pretendía mantener relaciones cordiales con la Superintendencia,²⁰ por otro discutía la idea de

de cuatro años para su engorda antes de la matanza y rinden, en este periodo, aproximadamente 500 reales por hectárea (más o menos 290 dólares), y generan tan sólo tres empleos directos. En contrapartida, esta misma hectárea de tierra, al producir mandioca, puede rendir hasta 1 600 reales por hectárea (aproximadamente 930 dólares) en poco más de un año, y abarcar, ciertamente, a un contingente mayor de productores.

¹⁹ En efecto, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso ha propagado —haciendo eco de la vieja letanía de que la estructura productiva en el campo está atrasada y es incompatible con la «modernidad» pretendida— que el modelo de estructura agraria y de producción rural deberá conducirse en el sentido de alcanzar el modelo estadounidense, donde hoy tan sólo 4% de la población permanece en el campo, contra 25% de la población brasileña que aún no vive en las ciudades.

²⁰ Las relaciones fueron conflictivas hasta que un nuevo funcionario tomó posesión del cargo en la Superintendencia Regional. Mantener relaciones cordiales significaba, hasta cierto punto, asegurarse de que no se

una nueva «ciudad» en dirección opuesta a la que pretendía la representación del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria.

En una junta con las coordinaciones e integrantes del asentamiento y del MST regional, en agosto de 1998, propusimos un conjunto de temas con la intención de iniciar el debate sobre la concepción de esa ciudad y empezamos con una pregunta aparentemente simple: «¿Qué entiende cada quien por “ciudad”?» A pesar de que esa reunión pretendía esbozar la discusión sobre muchas otras cuestiones, y buscaba establecer un parámetro inicial para nuestra actuación, esa primera pregunta movilizó de tal manera la participación de los presentes que el resto de las cuestiones acabó siendo inocuo.

«Pensamos en una ciudad de otro tipo», diferente de aquella ciudad identificada como lugar de «explotación»; una ciudad donde sea posible congregarse, «al mismo tiempo», producción agrícola y actividades urbanas, que permita una «condición más amplia», que asocie «vida campesina o rural con la vida urbana»; no se trataba de imaginar una ciudad cuyo espacio físico fuera diferente de otra de la región, sino que debería ser un lugar donde lo diferente se diera por la «forma de organización»; una «ciudad sin discriminación», es decir, sin exclusión de los campesinos de las actividades típicamente urbanas, donde el «propio colono del asentamiento» pueda «generar el empleo para él mismo», donde pueda hacerse «dueño de sí mismo»; una ciudad que no se busque exclusivamente «por una cuestión de supervivencia», únicamente por el «empleo que pueda ofrecer»; en fin, una ciudad que se constituya como «medio de reunión», como «estructura montada sobre otra concepción social» y que se haga permeable a la «conciencia y al modo de vivir» que el medio rural produce.

Víctimas de cierto «fantasma dialogal» frente a un discurso que mínimamente reflejaba un poco del imaginario de aquellos campesinos en cuanto a su concepción de «ciudad», nos veíamos en el papel de técnicos del oficio de planear y construir tales ciudades y por otro lado, contradictoriamente inmersos en un discurso de aparente sumisión a los designios y encaminamientos propuestos por el INCRA. Así, en otra junta, ahora con la representación del superintendente regional de ese instituto, la dirección de la conversación se realizó bajo su conducción y determinó los próximos pasos, los criterios para la distribución de lotes en la Villa, el camino de los procesos necesarios para la recuperación y su dotación de infraestructura mínima para el funcionamiento e, incluso, el propio nombre de la ciudad. Bastante incómodos con la displicencia en el trato de las cuestiones del planeamiento urbano, y un tanto sorprendidos con el aparente servilismo del grupo que había realizado la ocupación del mayor latifundio del estado de Paraná, nos empeña-

colocaran impedimentos para la liberación de recursos a la producción, una práctica bastante común de las instancias del gobierno que manipulan, conforme a intereses y posiciones políticas, los mecanismos de la política gubernamental.

mos en la defensa de un enfoque más cuidadoso de las cuestiones urbanísticas, al asegurar, incluso, la no exclusión de los futuros usuarios de la ciudad en la discusión de su concepción. Estaban puestos allí en duda, además de los cánones propios de la metodología de planeamiento contemporáneo —bastante afecto a la ilusoria capacidad ordenadora del planeamiento urbano—, nuestra experiencia con los movimientos sociales urbanos y con la lógica impresa por esos movimientos en la resistencia frente al poder público. Después de la defensa de su punto de vista, alegando ya haber «dado origen a numerosas ciudades» y que «las ciudades empezaban así», el superintendente hacía amena su plática, al mismo tiempo que descalificaba el de los arquitectos: «Como dice el indio: ¡es en el andar de la carreta cuando las calabazas se acomodan!»

Lo que orientaba al grupo en ese momento era el trayecto de una acción estratégica, en el cual cada palabra, gesto o mirada consentían o se interponían en el choque de intereses frente a la posibilidad de construcción de una nueva ciudad. Como si no bastaran los propios intereses de la municipalidad, del poder local, de los comerciantes de la región, de los grandes productores vecinos, quienes veían al asentamiento como un poderoso competidor, también el propio INCRA, en la figura de su superintendente regional, depositaba ahí sus intenciones. Por otro lado, la cuestión central para el asentamiento era la garantía del acceso a los créditos. Distender momentáneamente la relación con el INCRA significaba evitar dificultades y posibles conflictos que pudieran entorpecer la negociación de aquello que era central: el crédito para la producción, aunque para ello fuera necesario someter el proyecto de la ciudad a las pretensiones políticas del superintendente regional. Al cuestionar esta postura, el grupo afirmaba que se trataba de una estrategia momentánea. Como decía en esos días uno de los líderes del asentamiento: «El superintendente pasa. La gente se queda».

8. EL SUBTEXTO DE LA CIUDAD: DISTANCIAS ENTRE CONCEPCIÓN Y ACTO

Y el superintendente pasó.

A mediados de noviembre de 1998, el asentamiento inició el proceso de habilitación para la recepción de los créditos de apoyo a la construcción de las viviendas. Estos recursos correspondían, en esa época, a 2 500 reales por familia (aproximadamente 1 450 dólares), lo que es una suma irrisoria si imaginamos que un automóvil nuevo, de un modelo popular, no sale en menos de 14 000 reales (alrededor de 8 000 dólares).

A pesar de la transferencia, más o menos por esa época, del superintendente regional del INCRA, y de una injerencia relativamente menor del Instituto en las rutas establecidas para la ocupación de la antigua villa hidroeléctrica, algunas orientaciones ya habían sido implementadas. Entre éstas, la división de parcelas, la demarcación y la distribución de los primeros 500 lotes. Esto generó, obviamente,

interrogantes y contratiempos, toda vez que apenas se hacía una idea de cómo sería una ciudad de la reforma agraria, mucho menos «vivir» en dos lugares al mismo tiempo: numerosas familias consideraban inútil disponer de un lote en la «ciudad», ya que «el lugar del agricultor está junto a la plantación, junto al ganado y al pasto»; otros imaginaban que surgía una posibilidad de adecuar mejor su rutina familiar, atender únicamente un rancho en el lote rural para su estancia a lo largo de la semana, y a la familia en la villa, próxima a los servicios o a los empleos que allí podrían ofrecerse; otros más proponían destinar el lote urbano para el acomodo de personas agregadas —padres o parientes próximos— y mantener su núcleo familiar en el lote rural. De cualquier manera, no se cuestionó, en ningún momento, si tenía o no caso disponer de un lote en la villa para cada familia asentada. Además de eso, poco se discutía —a no ser el alcalde de Río Bonito— sobre el hecho de que la villa estuviera ubicada a la orilla del gran lago, formado por la represa de la hidroeléctrica, lo cual hacía de todo ese territorio un área de preservación ambiental.

A pesar de eso y de las numerosas ponderaciones que exaltamos, procurando asegurar una rutina ocupacional que intentaba, primero, planear la ciudad para después ocuparla, se trataba, en ese momento, de clavar las uñas en las ruinas de aquello que un día había sido una «ciudad» para, encima de éstas, edificar lo que se pretendía como su «reverso». Se trataba, por lo tanto, de empezar estratégicamente por el final, de plantar los pies en ese territorio que un día había servido a la política desarrollista del gobierno militar. Al revés de la ciudad-campamento, estratificada, administrada y vigilada, como apoyo a la mecánica de desmesurada explotación de mano de obra transitoria, se quería una ciudad que predispusiera al ejercicio de la ciudadanía, al contrario de la ciudad-empresarial, erigida y poblada ya con fecha para terminar y que disponía de fastuosos recursos y de la vida de sus habitantes como si recursos y vidas fueran desechables; una ciudad donde la existencia digna se hiciera posible, un espacio no homogéneo y permanente de producción de la vida.

¿Pero cómo encaminar objetivamente los pasos hacia la construcción de esta otra representación de «ciudad», si la concreción de un espacio fragmentado y desordenadamente compartido, resultado de un proceso conducido de modo tan disparatado, que reproducía el diseño de una ciudad completamente dividida en lotes, jerárquica y singularmente vigilada y administrada —como lo fue la antigua villa hidroeléctrica—, y sin un proceso de discusión más cuidadoso, se interponía de forma tan determinante?

Tal vez el terreno idóneo con las adecuadas condiciones favorables y erigido sobre un territorio sujeto a embates y conflictos de tal orden y de tal monta, no exista, como muchas veces lo esperamos arquitectos y urbanistas. Uno de los agrónomos que trabajan en el asentamiento, al defender la concepción de la nueva «ciudad» como por lo menos una posibilidad de «crecimiento» a partir del ejercicio

de «experiencias nuevas» afirmó: «Las grandes ciudades acaban desenraizadas por razones económicas [...] Pero la ciudad es siempre un “lugar de encuentro”, de realización, de reunión de personas y cosas».

Sería, en tal, caso sobre este terreno inestable y con los recursos y condiciones dispuestos para ese momento como se iniciaría la construcción de las primeras casas de la villa. A partir de un proceso de discusión con cada grupo de familias del asentamiento, procurando establecer un programa que incluyera desde la cultura constructiva local hasta lo cotidiano del uso de la vivienda, desarrollamos los proyectos necesarios y auxiliamos a los colonos en el montaje de una cooperativa de servicios para la construcción civil —la Cooprotterra—, con el objetivo de habilitar y capacitar al grupo, no sólo para recibir y administrar los recursos destinados a la construcción de las viviendas, sino también para ejecutar los servicios, abriendo espacio para un pequeño contingente de colonos en la práctica de oficios vinculados a la construcción civil, desde ese momento una alternativa de ocupación para los integrantes de las familias asentadas, disponibles en virtud de la constante reducción de la necesidad de mano de obra en la producción agrícola.

A lo largo de nuestra experiencia con los movimientos habitacionales urbanos, desarrollamos un procedimiento para discutir la distribución de los espacios en una vivienda, pues se procura evitar la simple exposición y consulta de opciones frente a «modelos» previamente definidos —es decir, completamente imbuidos de la lógica de quien da forma a ese «modelo»— o representaciones formuladas por los propios interlocutores, sin ningún criterio técnico o de viabilidad, con lo que declinaríamos, justamente, la responsabilidad de asumir la función de técnicos para la cual fuimos llamados, al atacar, la mayoría de las veces, representaciones de una vivienda referidas a un imaginario difícilmente realizable. Así, con los elementos de la pedagogía propuesta por Paulo Freire —uno de los grandes educadores brasileños—, hemos procurado construir un enfoque que busca excluir los referenciales de forma e iluminar, como contenido, las sutilezas de la organización de la vida cotidiana en el interior de la vivienda, convirtiéndola en el tema generador para la formulación de directrices de proyecto. De esta forma, creemos que es posible construir un «programa», propiamente dicho, que emerja de los rituales cotidianos, y esponga de esta manera la propia «cultura del habitar», practicada por el interlocutor, y que valore más los referenciales establecidos por el tiempo —la historia de las relaciones del habitante con el espacio— que aquéllos enunciados por el espacio: la forma como ordenadora de relaciones en el tiempo.

No está por demás comentar que, cuando este procedimiento se propuso a los sin tierra, entre otras situaciones, nos encontramos con posiciones diametralmente diversas de las que experimentamos con grupos urbanos. Tal hecho puede parecer obvio, pero la trama que resultaba de ese diálogo señalaba un conjunto de relaciones que parecían hacer explícito un imaginario más allá de una divulgada «cultura campesina». Hay una intensa mezcla de elementos de la cultura rural y anhelos

burgueses, profundamente urbanos, que definen rutinas cotidianas en un imaginario bastante denso y complejo. A pesar de las distintas concepciones de lo que es «habitar», se interpone siempre la lógica patriarcal de la casa como un «reino», del lugar donde se habita como «estabilidad», «reunión» y «prosperidad», catalogados como reproducción de la idea de propiedad e individualidad burguesas que parecen desentonar con el lema colectivista que le ha dado reputación al MST. Además, las simples actividades cotidianas que se llevan a cabo en el interior de la vivienda manifestaban demandas por un cuidado que negaba la condición de precariedad anteriormente vivida, en la que ni siquiera algo de privacidad era posible. Una situación en el diálogo con los colonos del asentamiento llamó mucho la atención: el querer colocar el baño fuera de la casa. No que no fuera conocido el recurso, lo cual es muy propio de la cultura campesina. Como no le habíamos prestado atención a eso, uno de los argumentos presentados para la explicación del acontecimiento aportaba un poco de humor paranense: uno de los colonos, al comentar una visita realizada a un «compadre», al sentir una indisposición intestinal, había solicitado entrar al baño. Para su desagrado, el baño estaba dentro de la casa, junto a la sala. Como no había opción y el cólico le impedía esperar más, concluyó el relato: «¡Usted ni imagina la sinfonía que hubo!»

Fue a partir de estos elementos como los proyectos se desarrollaron y ejecutaron. Queda claro que no fue posible evitar los trastornos, los conflictos y los equívocos.

Por un lado, para sorpresa hasta de los mismos técnicos implicados, fue posible construir una buena casa, de 48 m², con albañilería de ladrillos de cerámica, con todas las puertas, ventanas y marcos, y el mínimo necesario de instalaciones, lo que parecía utópico al principio, dada la exigüidad de recursos. Además, se pudo remunerar, aunque de manera mínima, a los colonos que integraban la Cooperativa.

Por otro lado, la capacitación del grupo no había logrado tener éxito, en función de la enorme dificultad para, en medio de un proceso acelerado de producción, hacer compatible el cronograma de obra y tiempo adecuado para esta capacitación. Este desacuerdo acarrió también equívocos administrativos, e implicó un déficit al final del proceso de construcción de las primeras 500 casas de casi 10% del valor total aplicado, el cual sólo ahora está siendo auditado. Claro que esto ocasionó conflictos y acusaciones de todo tipo: desde improbidad —particularmente por parte de la alcaldía del municipio, que se servía de este pretexto como arma contra el MST local— hasta cuestionamientos internos en cuanto a la capacidad operacional de los responsables. Claro que no se justificaba, como así lo propusieron algunos líderes, alegar la falta de capacitación como desagravio a las confusiones administrativas. Tal hecho anuncia, sin embargo, el universo de precariedades en que operan los asentamientos y sus estructuras de producción, como contrapunto a la acusación fácil de improbidad tantas veces propagada por la prensa, por el gobierno, por algunos análisis provenientes de la academia —como ya se vio—

e incluso hasta por los propios colonos del asentamiento. Por otro lado, el contexto también sirve de plato fuerte para una comparación inmediata: en una evaluación muy superficial, deben haber sido literalmente abandonados en la villa de la hidroeléctrica recursos por aproximadamente ocho millones de dólares, perceptibles en los restos de la infraestructura, pavimentos, calles, construcciones, etc. Ante tal número, ¿cómo establecer un juicio justo en cuanto a la capacidad administrativa de esta o de aquella estructura de gestión de los negocios públicos?

9. PROSPECCIÓN: EN LAS ENTRELÍNEAS DEL DESEO POR UN TIEMPO PRÓXIMO

De cualquier modo, la construcción de las casas promovió la definitiva «posesión» de la antigua villa. Era nítida la impresión de que la vivencia cotidiana en ese contexto, al limpiar los terrenos, echar los cimientos, levantar la albañilería y revestimientos, e impulsar alguna habitabilidad en aquel lugar, promovería también la apropiación del sitio. Tal vez un poco de ese montón de pretensiones, hecho explícito en voz del técnico citado, se realizara a través de paredes, tejados y, principalmente, de nuevos moradores.

Es importante comentar que no todos los incluidos en la primera etapa decidieron aplicar su cuota de recursos destinados a la vivienda para la construcción de una casa en la antigua villa. Garantizada desde el inicio la opción, muchos prefirieron construir sus casas en el lote rural, lo que dio como resultado un total aproximado de 300 casas construidas en los lotes urbanos.

No obstante, la ocupación fue precaria: aún hoy no hay red de agua instalada, energía eléctrica o sistema de recolección de aguas negras o de basura. Prevalecen, por lo tanto, los recursos tradicionales para la evacuación del drenaje —acumulado en fosas construidas, muchas veces, sin criterio de higiene—, captación de agua —algunas decenas de metros, hasta las fuentes de agua—, conservación de alimentos —a falta de refrigerador, se sala la carne— o la tirada de la basura, que se acumula en zanjas para quemarse posteriormente. Nada diferente, sin embargo, de la situación en los lotes rurales: allí tampoco hay recolección de basura, red de energía eléctrica o de tratamiento de agua, mucho menos tratamiento de aguas negras. Es decir, el contexto de precariedad se mantiene, independientemente de si se trata del nuevo núcleo urbano o en los lotes rurales del asentamiento.

De cualquier forma, será aquí, sobre este parco residuo de urbanidad inicialmente instalado, donde el asentamiento será objeto de críticas, de evaluación, de realimentación de los mecanismos de reflexión sobre un imaginario que nos parecía difícil de constituirse por sí solo.

A lo largo del segundo semestre de 1999, mantuvimos contactos con el Programa de Gestión Urbana (PGU), administrado por el Centro de las Naciones

Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat Organización de las Naciones Unidas), y a través de su oficina regional para América Latina y el Caribe fue posible obtener recursos para, finalmente, promover una secuencia de seminarios con los colonos del asentamiento, quienes pretendían establecer un conjunto de referencias que permitieran consolidar un «concepto de ciudad», para orientar un planeamiento del nuevo núcleo urbano que se establece a partir de la realidad vivida por esos campesinos, asociando «vida campesina o rural con vida urbana».

Es lógico que construir una base de referencias para concebir una «ciudad» con más de 9 000 campesinos como interlocutores, de los que pocos han vivido, efectivamente, una experiencia urbana más duradera, era una tarea semejante a pensar en algo a partir de una realidad empírica.

El proceso de «Consulta Urbana» —como se le denominó al conjunto de seminarios que se realizaron desde julio de 2000— pretendió disponer, de la misma forma en que establecimos la discusión de la vivienda con los sin techo urbanos, de un argumento que eliminara, momentáneamente, la discusión del espacio físico de la ciudad, y dirigiera el foco sobre la trama de relaciones que ahí se instalaría. Este procedimiento permitió construir los referenciales, como temas generadores, a partir de las representaciones propuestas por los colonos, articuladas a partir de la economía interna de sus prácticas, de su cotidianeidad, sus experiencias y deseos, manifiestas en la forma como lidian con su propia historia y como luchan para constituirse como sujetos. Es significativo el testimonio cantado por un colono del asentamiento: cuando se le instó a contar sobre el día de la ocupación, apenas logró balbucir una palabra. Fue necesario ponerle una guitarra en las manos para que una extensa oda a ese «héroe colectivo», que se constituía a la medida en que se afirmaba como sujeto, brotara en una compleja trama, vertida en música por el colono que ni siquiera sabía leer ni escribir. O la aseveración de otro de ellos, que había trabajado en la construcción de la villa de la represa, cuando vio algunas fotos de la época en que ésta aún existía como «ciudad», al contar que un día se había cubierto de barro a la entrada del sector destinado a las viviendas de los ingenieros, después de tanto trabajar ahí, se imaginaba invitando ahora, «para un churrasco», al ingeniero que habitó ese mismo lugar donde él vive hoy. O las reacciones de un público atento, de más de 400 colonos, al asistir a una representación teatral, puesta en escena para el primer seminario por un grupo de São Paulo, que discutía las relaciones entre capital y trabajo en el mundo contemporáneo, en las ruinas del antiguo cine de la villa. O también, la visceral identificación con la historia, contada por el mismo grupo de teatro, sobre la muerte de un compañero de la región, víctima de la truculencia de la policía estatal.

«Producción», «gestión» y «vida colectiva» fueron los temas generadores, establecidos a partir de las primeras etapas de la Consulta Urbana. En la huella de un cuestionamiento propuesto inicialmente en cuanto a la «ciudad que queremos», el escenario se ampliaba, y se extendía la cuestión, en función de la demanda formulada

por los propios colonos que participaron en el acto. Para el «asentamiento y la ciudad que queremos», se colocó en el orden del día discutir cómo se implicaban las relaciones entre la producción de la existencia, la gestión autónoma y colectiva de las actividades comunes, la construcción de una posibilidad de vida que trascendiera las limitaciones impuestas por el yugo de las precariedades y el territorio de una ciudad que se expandía más allá del espacio tradicional de la ciudad formal. Esta noción de territorialidad, mucho más imbricada al modo de articulación y ocupación del asentamiento, acabó implicando la extensión del proceso de Consulta Urbana y la promoción de los seminarios de las comunidades, donde las discusiones empezaron a darse en cada una de las cinco comunidades, alrededor de las cuales los diversos grupos de familias asentadas se agregan territorialmente, y establecen núcleos intermediarios de articulación de servicios —escuela primaria, comercio de géneros de primera necesidad, almacén de la cooperativa, etc.— y lugares de encuentro para el tiempo libre y las actividades religiosas.

Para los técnicos involucrados en las discusiones, iluminar la idea de «ciudad» a partir de su extensión en un tejido que transpone la propia geometría urbana a la cual estamos acostumbrados, lleva también al cambio en sentido contrario de los cánones de la planeación contemporánea, al lanzarnos nuevamente hacia ideas de origen del propio urbanismo moderno, desafiándonos a considerar la idea de «ciudad como región» (Geddes, 1994), o a partir de las concepciones premarxistas de ciudad, particularmente aquellas vinculadas al pensamiento anarquista. Remite, aun, a las representaciones formuladas a partir de las concepciones utópicas que siempre se han manifestado en la historia de la humanidad e, incluso, en la historia de Brasil.

Pero, además de las prácticas usuales del oficio, hay una cuestión que trasciende lo cotidiano y dirige otros contenidos hacia una lógica de planeación, lo cual nos hace creer en la posibilidad de detectar alguna potencialidad realmente transformadora. Se trata de la forma en que se establecen los parámetros de referencia para los trabajos de planeación: como ya se vio, no existían allí las condiciones preformateadas y predisuestas, como era de esperarse en los procedimientos usuales en la práctica de planeamiento. El campo de tensiones que describimos constituye un terreno poco firme para ello y nos parece bien que así sea. De esta manera, es posible rescatar el tiempo y la historia para la discusión del espacio, y creemos que esto sólo ocurre en la medida en que operamos los trámites de planeación a partir del conocimiento de las relaciones implicadas en el espacio. Ahora, tales relaciones, si permitimos su plena manifestación, son traspasadas por muchas contradicciones, concepciones diferenciadas, voluntades particulares que se difunden, gran parte de las veces, de forma bastante pragmática, etc. Es, por lo tanto, un campo de conflictos por excelencia. Eliminar el conflicto sería sofocar la palabra y, en términos de Rancière, eliminar la posibilidad de la política. Pensar urbanísticamente una ciudad como el lugar de la política significaría amplificar y dar espacio

a lo explícito del conflicto, por la voz calificada y construida democráticamente a partir de la heterogeneidad de las relaciones vividas, orientando la lógica en sentido contrario al espacio homogéneo, que es el espacio de la mercadería y de las relaciones puramente mercantiles.

Es significativo que, ya en las discusiones con cada una de las comunidades, los aspectos que más vitalidad mostraron, desde nuestro punto de vista, se referían a la «vida colectiva» en cuanto tema generador. El colorido pragmático que sustenta la discusión en cuanto a la «gestión» y a la «producción», los otros dos temas, transcurre justamente por la lógica económica y financiera que ni siquiera una cooperativa como la Coagri logró llevar a buen término. Parece que hay una disminución de la cohesión, en este segundo momento del movimiento, cuando el MST ya no se establece más como aglutinante inequívoco de las voluntades individuales del colono asentado que se vuelve un «sujeto económico», agente puro de producción y consumo, el cual cuenta como una pieza más en la lógica de la dinámica cooperativista. Tal vez aquí sí, el MST no alcance el mismo resultado que en el momento anterior, justamente por imprimir la misma reducción de las relaciones de la vida a las relaciones de mercado que el neoliberalismo y la propia ideología burguesa sostienen, como veremos más adelante. Cuando pensamos el urbanismo fuera de esa dinámica de reducción, avanzamos hacia un campo nuevo de operación del oficio y es justamente en este contexto como se habían visto desde el «revés» las posibilidades inmersas en todo el proceso de concepción de la ciudad.

10. CONSIDERACIONES FINALES

Hay una dificultad muy grande en este proceso, toda vez que son innumerables los conceptos de «ciudad» que están en juego. Particularmente, cuando promovemos la reflexión a partir de las relaciones que llenan de contenidos la forma urbana, se tornan explícitas, también, las tensiones inherentes al juego político. En esta trama de intereses, difusos o plenamente delineados, entran en escena los disgustos, desconfianzas, anhelos y deseos de una gran cantidad de colonos,²¹ las concepciones políticas, muchas veces interpuestas con los conceptos, o con los discursos

²¹ En la discusión del proyecto, uno de los colonos del asentamiento insistía en la adecuación de su casa para la instalación de un puesto de comercio, principalmente porque su ubicación en la villa sugería una buena condición para ello. Su insistencia acabó por generar cierto malestar, pues se discutía con los líderes la organización colectiva de los servicios comerciales de la villa. Otro colono, al encontrar una oportunidad para economizar con algo de ventaja, propuso aumentar los recursos para construir una casa más grande. Se comprometió a resarcir a la Cooprotterra por el material excedente en cuanto vendiera un inmueble que poseía en la ciudad. Después de que estuvo concluida, mucho mayor de lo que permitían los recursos iniciales, éste no vendió el inmueble ni le pagó a la Cooperativa. E incluso hubo comentarios velados que insinuaban que la dirección de la Cooperativa debía de estar «tomando algo de ventaja». Estas situaciones, entre otras, demuestran qué tanto se mantienen los intereses particulares en un régimen de tensión, casi todo el tiempo, en relación con las expectativas formuladas por el Movimiento.

oficiales, formulados por la dirección del asentamiento o la instancia local de dirección del Movimiento; las necesidades objetivas de la cooperativa local, complicadas muchas veces por las sombras de la ineptitud en el cuidado administrativo; las propuestas que orientan al MST en los nacional y que, las más de las veces, articulan el discurso oficial proferido localmente; los intereses políticos del poder público, de los comerciantes y de las fuerzas políticas locales, que ven los asentamientos con buenos ojos si se considera únicamente a sus colonos, o como amenaza si se les considera como *locus* de acción del MST; las estrategias para la implementación de la política de la reforma agraria propagadas por el INCRA y en constante mutación, al procurar neutralizar las acciones del Movimiento; los cuidados policíacos y la falta de atención de la multinacional que detenta los derechos de explotación de la Represa Hidroeléctrica de Salto Santiago; e incluso hasta nuestros anhelos urbanísticos y arquitectónicos que se introducen en la urdimbre de este tejido. En este intrincado conjunto de posiciones y oposiciones, ¿cómo considerar la potencialidad emancipadora, eventualmente presente, en la concepción y construcción de una ciudad de la reforma agraria?

Nos parece, con todo, que hay un conjunto de referencias que delimitan un campo de diálogo común, capaz de establecer alguna cohesión interna en el MST y que logra un sistema de conexiones entre posiciones dispares y aparentemente contradictorias. No creemos que sería posible conjugar tal cohesión con la fuerza de un discurso unificado, o con una «tecnología» de movilización popular, o por la condición de rehén que la Cooperativa pueda imponerles a los colonos en relación con el Movimiento (ya vimos que no es lo que, efectivamente, sucede), o aun por la devoción que, eventualmente, podamos identificar en algunos militantes en relación con el Movimiento.

Por más fuerte, cohesiva, centralizadora y autoritaria que pueda manifestarse la estructura que conduce y orienta a un determinado cuerpo político, se podría cuestionar si cualquier forma de alienación, o de concesión, de los individuos partícipes de este cuerpo a favor de esta estructura subsistiría, consciente o inconscientemente, tan sólo por el yugo impuesto mediante una oscura «tecnología» de dominación, gestada a partir de intereses particulares engendrados por pequeños grupos, que toman posesión como líderes del cuerpo político en cuestión. Además de eso, se podría argüir, también, si la convención establecida originalmente para la constitución de este cuerpo no llevaría a costas los elementos de su propia constitución particular, en la cual los intereses individuales comprenderían también los residuos de composición de la voluntad general, abstraída, a partir de ahí, como autónoma en relación con las voluntades particulares.

¿Hasta qué punto la constitución de una «comunidad política» prescindiría de la adhesión, consciente o inconsciente, de sus participantes, a no ser por la fuerza? E incluso si fuera por la fuerza, no se podría verificar cuál es su naturaleza y si esta misma no formaba ya parte de las condiciones predispuestas para el ingreso en

esa comunidad, es decir, ¿hasta qué punto la presunción no acaba excluyendo una latente «conciencia popular trágica», en la cual aquel que ignora que sabe, sabe que ignora (Chauí, 2000: 311 y 312)? Y a medida que ocurre esta adhesión, ¿cómo definiría los elementos particulares la voluntad general —que no es en absoluto inerte ni inerte— y promovería su autonomización en la forma de constitución de un nuevo sujeto colectivo?

Ahora, pensar una «ciudad» por su «reverso» es reconsiderar y revisar el lugar del acuerdo original, rescatar el espacio de la ciudad para el pleno ejercicio de la composición del *óikos* y del *nomos*, de una economía de las relaciones que se articulan en el espacio y en el tiempo. Si hay un acuerdo —y nos parece que hay—, es a partir de intereses particulares manifiestos en la forma de contradicciones que muchas veces nublan nuestra capacidad de intelección. Exentar cualquier racionalidad de los elementos atómicos del cuerpo político nos parece también una forma oscura de paternalismo cobarde.

Por otro lado, ¿por qué el Movimiento no se remite a la estructura vigente que sustenta la municipalidad local y no propone alterar, aunque poniendo en el «reverso», la correlación de fuerzas que ahí se establece? ¿No estaría el MST promoviendo la subversión de una institucionalidad socialmente legítima, sustentáculo de un orden urbano que mantiene esa municipalidad y frente a la cual el Movimiento promovería ataques desestabilizadores, sin reconocerla bien asentada y legítima, fundada en el derecho y en la razón, como lo prescriben hasta incluso los diccionarios? Esta cuestión se desplaza en dirección a la posición adoptada por el Movimiento en relación con la institucionalidad que, por ejemplo, le hace viable la propia reforma agraria. ¿Por qué el MST parece insistir, casi incansablemente, en una aparente desestabilización de este orden que sustenta un programa de reforma agraria que podría, como afirman sus defensores, implementarse sin conflictos? Vendría a propósito recordar a Rousseau: «Dirán que el déspota asegura a sus súbditos la tranquilidad civil. De acuerdo, ¿pero cuál es la ventaja para ellos, si las guerras a las que son arrojados por la ambición del déspota, su insaciable avidez, las vejaciones impuestas por su ministerio los arruinan más que sus propias disensiones? ¿Qué ganan con eso, si incluso esa tranquilidad es una de sus miserias?» (Rousseau, 1997: 61).

Basta verificar que las representaciones de la institucionalidad hacia la cual el MST promueve varias de sus acciones —como la alcaldía de Río Bonito, en el caso en cuestión— no han cumplido formalmente con su papel, teóricamente atribuido por el propio derecho que lo instituye, o sea, «asegurar el bien común» —si aún valen algunos postulados de la teoría política clásica—. ¿Sería equivocado, en este análisis, concebir únicamente el ideal de un Estado mediador, proveedor y promotor de beneficios colectivos?, legitimado por la posible «tranquilidad civil» que su institucionalidad podría, eventualmente, asegurar, desapegada de los profundos desajustes —paradójicamente, también institucionales— promovidos por la

intensa práctica de corrupción, de «imposiciones vejatorias impuestas por nuestros ministerios» (obsérvese —si hay luz—, la crisis energética por la cual atraviesa el país, resultado de la total impericia administrativa y de planeamiento estructural), y de despotismo practicado en nombre de una supuesta «tranquilidad civil» (téngase aquí en cuenta, la cantidad de medidas provisionales promulgadas por un gobierno que se pretende democrático, resultados a medias de mecanismos constitucionales que aseguran la permanencia de un Estado dictatorial en el país, aunque camuflado), lo cual se verifica sin mucho esfuerzo en la vida política brasileña reciente y que más ha contribuido hacia la perpetuación de la condición de «miseria apaciguada» que históricamente agujonea al pueblo de este país («Se vive tranquilo también en las mazmorras y, ¿tanto bastará para que nos sintamos bien en ellas?» Rousseau, 1997: 61 y 62). Ahora, por el contrario, nos arriesgaríamos a afirmar que el MST, en este aspecto, poco tiene de emancipador, en realidad, las acciones dirigidas ante la institucionalidad vigente tienen que ver más con el restablecimiento de sus bases primarias (aquellas que podrían —o deberían— sustentar el acuerdo por el cual ese Estado existe, es decir, la promoción del bien común y no el de los intereses particulares —nada más aquellos derechos que se preservan como «derechos burgueses»—) que con la instalación de un proceso permanente de deslegitimación del Estado y desestabilización institucional. Lo que pretendería el MST sería, por lo tanto, nada más reclamar de este Estado —y de la municipalidad de Río Bonito— su condición de «sujeto de derecho», como sujeto promotor legítimo de una «voluntad colectiva», en la acepción clásica del término. De esta manera, el MST no haría más que defender, al contrario de lo que se piensa, la propia legitimidad de ese «sujeto de derecho» para que, por medio de él, sea posible la constitución de una urbanidad libre, democrática y efectivamente promotora de ciudadanía. Invertir esta lógica sería también proponerla en su «reverso»: aunque tan sólo se constituya en otro término de la misma ecuación. Por consiguiente, hacer emerger, en el mismo territorio, otra concepción de «ciudad».

Si insistimos en este análisis, sería fácil, mediante esta matriz, suscribir la idea de construcción de una nueva «centralidad», concretamente estructurada en las formas de gestión de un nuevo territorio urbano, así como la «visión militarizada de estructuración social de las nuevas áreas reformadas, casi nada democrática y poco tolerante a la voluntad e historia familiar de los propios agricultores» (Navarro, 1997: 126). Creemos que aflora aquí, nuevamente, la prevalencia del equívoco de sujetar «voluntad colectiva» a la suma simple de las «voluntades particulares», como si por el dominio o imposición de «voluntades particulares», bastante particulares, fuera posible establecer un orden consensual definido, exento de diversidad, conflictos e indecisiones, identificado como «voluntad colectiva», como procuramos hacer evidente a lo largo del capítulo. Ahora, por medio de esta clave, una línea de análisis podría señalar que, por medio de la fuerza de una «centralidad democrática», disciplinaria, que comanda la confrontación permanente con el

orden público local —y también con el regional y nacional—, el MST pretendería subvertir el orden institucional vigente para instalar en éste lo que defiende. Se podría recordar una de las máximas rousseauianas: «la fuerza no hace el derecho». Si el efecto toma el lugar de la causa (como en Aristóteles o en Hobbes, para quienes el derecho del más fuerte es tratado como «natural»), solamente hay sucesión en el ejercicio de la fuerza. Luego, no es el derecho lo que está en juego, sino el lugar del ejercicio de esa fuerza. No nos parece que sea éste el proyecto propuesto para la ciudad de la reforma agraria. Ni, incluso, del MST. El hecho de que integrantes del Movimiento, y hasta colonos, participen en la disputa electoral en Río Bonito replantea la base institucional que sustenta la lógica de poder local en el centro de la disputa por el espacio de la ciudad. Y es nuevamente aquí donde el MST parece perder el aliento: el que en este momento de su trayectoria su preeminencia entre los colonos del asentamiento no sea tan inequívoca como lo fue en el momento de la conquista de la tierra, parece mostrar que el resultado de su acción acaba confundándose con la disputa por el lugar del ejercicio de la fuerza, a pesar de no tener esto como objetivo. Es sintomático observar que, en la disputa electoral del año 2000, de los más de 20 candidatos a las presidencias municipales de la región, ninguno haya sido electo. Ni el candidato registrado con el apoyo del Movimiento y que cedía la vicepresidencia a uno de los líderes del asentamiento obtuvo éxito, ni siquiera por el número mayoritario de colonos electores. La única excepción es el vicepresidente actual, que es un colono del asentamiento, quien se propuso llegar a un acuerdo con el candidato de las fuerzas del poder. Si, por un lado, el Movimiento se empeñaba en esa disputa, al creer que así obtendría las condiciones para, a partir de la institucionalidad vigente, tener la posibilidad de implantar su concepción de «ciudad», por otro, perdía el dominio que una aparente «centralidad» política determinante podría conducir el resultado del pleito municipal, justamente por aceptar las reglas del juego.

A partir del caso en cuestión, no parece sustentable la sospecha de una organicidad vertical profundamente articulada a una centralidad «militarizada», promovida por la dirección del Movimiento, capaz de aislar el hecho de que el que mueve a la gran masa, que se da a sí misma el nombre de MST, no es únicamente una voz de mando. De nuevo, al recordar a Rousseau —con el riesgo de parecer rousseauistas— frente al mando despótico: «Afirmar que un hombre se da gratuitamente constituye una afirmación absurda e inconcebible; tal acto es ilegítimo y nulo, tan sólo porque aquel que lo practica no se encuentra en el dominio completo de sus sentidos. Afirmar la misma cosa de todo un pueblo, es suponer un pueblo de locos: la locura no crea derecho» (Rousseau, 1997: 62).

Es cierto que el MST no ha logrado alcanzar siquiera alguna distinción más significativa que el alarde promovido por la prensa y, a veces, por el propio gobierno. Si imaginamos que en el país aún hay en el campo alrededor de 25 millones de habitantes, ¿qué significa un parco medio millón? Es cierto, también, que su campo

de acción se estrecha a medida que se le asocia, solamente, al hecho de «ocupar tierras», y se opaca todo el conjunto de propuestas que el Movimiento ha formulado, más allá del puro enfrentamiento por el conflicto agrario. Tampoco hay duda en cuanto a la planeada precariedad que se le impone a sus asentamientos, y detiene cualquier posibilidad de desarrollo de recursos tecnológicos más adecuados, y aumentar la productividad y, consecuentemente, ampliar las condiciones más allá de la simple subsistencia.

Sus representaciones, construidas a lo largo de los últimos años, no se objetivan cuando están inmersas en el —o emergen desde el— orden establecido. Qué tan cuestionable es —si la Historia se hace presente— imaginar que sea posible algún proceso radical de transformación sin que se pretenda, al menos, sacudir las columnas de las posiciones del orden vigente. Por otro lado, en la circunscripción del área de un «pensamiento único», el Movimiento —como sujeto que se constituye y logra afirmarse— ha conseguido, al menos, la provocación de hacer explícito el conservadurismo arcaico que se ampara por detrás de la pretendida modernidad neoliberal, haciendo patente un poco de lo que la prosperidad hegemónica no logra digerir.²²

No obstante, ¿hasta qué punto la absorción de las acciones promovidas por el MST por el orden hegemónico no es una cuestión de tiempo? ¿Hasta qué punto estas acciones no se vuelven compensatorias, en la medida en que —a pesar del marco de conflictos que actualmente generan— se pierden en el campo de una utopía que se acaba realizando por su «revés», domesticándose y pasando a formar parte del conjunto de estrategias con las cuales se pretende transformar a la sociedad brasileña en una inofensiva «comunidad solidaria»?

Una clave, tal vez, para comprender lo que hace el MST para aglutinar un contingente inédito de población campesina en torno a las luchas que promueve y, a partir de éstas, establecerse como un cuerpo político mínimamente cohesivo y cimentado —como trincheras de resistencia frente al orden hegemónico—, podrían ser las formas individuales de representación y elocución por las cuales los sujetos particulares que lo componen se enuncian. Al discurrir sobre el movimiento neoliberal y de cómo, a partir de éste, se manifiesta uno de sus discursos ideológicos, Francisco de Oliveira analiza, al identificar como simulacro, la «reducción del retorno al individuo con la prevalencia exclusiva del mercado como

²² Como ya había afirmado José de Souza Martins: «Un movimiento como éste [el MST], que agrupa a poblaciones cuyo conflicto social alcanza los cimientos del sistema, que es el derecho de propiedad, tiene una función modernizadora indiscutible». Y, en desacuerdo con una afirmación del presidente de la República Fernando Henrique Cardoso, cuando consideraba que el «Movimiento representa lo arcaico contra lo moderno», Martins concluye: «El Movimiento de los Sin Tierra significa que es el portador y el agente moderno, porque cuestiona la estructura de propiedad y, por medio de ésta, la del poder: cuestiona la propiedad concentrada injustamente, antisocial y, como consecuencia, cuestiona el poder oligárquico que es, en el fondo, antidemocrático. El Movimiento es el único agente social que proclama todos los días que la cuestión agraria no es sólo, predominantemente, una cuestión económica. Ésta es una cuestión política» (Martins, 1997: 34).

única institución reguladora, autorreguladora tanto del destino de los recursos económicos como de las relaciones sociales y de la sociabilidad en sentido general». De esta manera, entender al individuo como una entidad molecular reducida a una fracción de la lógica de mercado —que se constituye a partir de la simple suma de voluntades individuales— ofusca y mantiene «bajo sospecha» el «entendimiento del mercado como una institución de regulación autoconstruida». Y concluye:

Si la reducción al individuo permanece en el terreno puramente ideológico, aunque se constituya actualmente como la expresión ideológica por excelencia del movimiento neoliberal, la reducción a lo privado —que no es la misma cosa que el individuo— se asienta en otras raíces, sociológicamente distintas, de las cuales es posible investigar sus fundamentos en el propio proceso de acumulación de capital y de su concentración y centralización. (Oliveira, 1999: 55 y 56.)

Nos parece, a partir de la reflexión sobre el contexto aquí descrito, que el deslizamiento promovido por la comprensión equivocada de que el MST se constituye a partir de un discurso centralizado y realizado de manera centralizada es nada más que proyectar sobre el Movimiento la misma minimización que el neoliberalismo promueve como formato consensual para el establecimiento de un pensamiento único. La pretensión de definir el Movimiento a partir de un filtro analítico que reverbera esta reducción no sería más que una tentativa de «domesticar» su comprensión. Por otro lado, el propio MST, al centrar el cooperativismo como una de sus principales estrategias de articulación del asentamiento —observación hecha a partir del caso en estudio—, acaba de rehén, como en una trampa, del propio sistema que, paradójicamente, le garantiza ampliar las luchas más allá de la conquista de la tierra. Por el sesgo económico y por la lucha productivista que terminan siendo implementados por la práctica cooperativista, el Movimiento no haría más que deslizarse y reproducir la misma «reducción del retorno al individuo con la prevalencia exclusiva del mercado». Además de eso, este hecho también opaca la expresividad de otros campos de acción del Movimiento, en particular el potencial del trabajo de formación y del programa de educación que desarrolla en los campamentos y asentamientos con los cuales mantiene vínculos.

No ponemos de relieve, es cierto, la comprensión de que la viabilidad del asentamiento empieza por el orden productivo, pero nos parece que el hecho de que el Movimiento disponga de una capacidad real de estar compuesto de individuos —y no exclusivamente de sujetos privados— acarrea una tensión permanente entre su propio agotamiento y el efectivo potencial transformador que puede tener en las manos.

Cuando el Movimiento se determina como sujeto colectivo a partir del individuo que produce *vida*, y no exclusivamente mercancías, nos parece, —por nuestras impresiones en el Ireño Alves— que alcanza mayores avances en términos de eman-

cipación social: surge la posibilidad de un proyecto de construcción de cultura, salta a la vista el contenido suministrado en sus escuelas, no es posible dejar de reconocer diferencias en los programas de la radio comunitaria, llama la atención la demanda de los colonos del asentamiento por espacios para teatro, música, danza, etc. Tal vez sea ése el campo del orden contrahegemónico y efectivamente emancipador.

Sería difícil, cuando vemos, defender la «mística» del MST como una práctica pedagógica donde es posible tratar el imaginario como mediación entre entendimiento y pura sensibilidad, es decir, como el campo posible de unidad entre concepto e intuición. Si se comprende como una *vaga paidéia*, un ejercicio que opera en y a partir del universo cultural de esos individuos, que constituye para ellos una «historia colectiva» y permite vislumbrar la conciencia de un sujeto que opera sobre sí mismo, tal vez sea posible comprender qué tan falso es atribuir la relativa preeminencia que el Movimiento tiene hoy únicamente al puro ejercicio de una fe ciega en las «procesiones» que toman por asalto la propiedad ajena o a una racionalidad dogmática que forma un ejército de autómatas.

Parece ser que mediante un «casi ritual», «casi simbólico», en el cual se pre-escriben los contenidos de una nueva forma, es como las representaciones se delinean intangibles por el orden hegemónico: no forman parte de la trayectoria preestablecida, no dialogan sin mediaciones con el orden vigente, no se prestan a la pura instrumentación y se realizan en el campo del propio conflicto.

Al permitirnos la redundancia, sería a partir de este imaginario como se admite la posibilidad de imaginar una posible «otra ciudad»: una ciudad que se permita su «reverso», que se haga germinal en el dorso oscuro de la tierra que la ampara y la niega. Conocedora de su potencial transformador, pues ahí se propone construir, pensar y realizar, esta «otra ciudad» compone un espectro en la amplitud de acción del propio MST: en el embate por la subversión de las estructuras hegemónicas de dominio mediante la reinención de la acción práctica que se intenta como acción política, el Movimiento reinventa el lugar de la propia política.

BIBLIOGRAFÍA

- Castel, Robert, *As Metamorfoses da Questão Social*, Vozes, Petrópolis, 1998.
 Chauí, M., «Marilena Chauí» (entrevista), en M. Nobre y J. M. Rego, *Conversas com Filósofos Brasileiros*, São Paulo, São Paulo, 34, 2000: 299-336.
 Foucault, M., *Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão*, Vozes, Petrópolis, 1987.
 Geddes, P., *Cidades em Evolução*, Papirus, Campinas, 1994.
 Governo do Estado do Paraná, *Paraná, Estado de Vida*, propaganda institucional, 1998.
 Habermas, J., «A nova intrasparência — a crise do estado do bem-estar social e esgotamento das energias utópicas», *Novos Estudos*, núm. 18, septiembre de 1987, Cebrap, 1987: 103-114.

- Martins, J. S., «A questão agrária brasileira e o papel do MST», en J. P. Stédile (coord.), *A Reforma Agrária e a Luta do MST*, Vozes, Petrópolis, 1997: 11-76.
- Navarro, Zander, «Sete teses equivocadas sobre as lutas sociais no campo, o MST e a reforma agrária», en J. P. Stédile (coord.), *A Reforma Agrária e a Luta do MST*, Vozes, Petrópolis, 1997: 111-132.
- Oliveira, F., «Privatização do público, destituição da fala e anulação da Política: o totalitarismo neoliberal», en F. Oliveira y M. C. Paoli (coords.), *Os Sentidos da Democracia*, Vozes, Petrópolis, 1999: 111-132.
- Rizek, C., y J. M. A. Lopes, «A cidade dos sem-terra: conflitos, imagens e práticas em torno da fundação da primeira cidade dos sem-terra do Brasil», ponencia presentada en el Coloquio Cultures Civiques et Democracies Urbaines, Cerisy-la-Salle, Francia, del 12 al 17 de junio de 1999 (mimeo.).
- Rousseau, J.-J., *Do Contrato Social*, Nova Cultural Ltda., São Paulo, 1997 (Os pensadores).
- Sampaio, P., «A questão agrária brasileira e a luta pelo socialismo», conferencia en el seminario promovido por el Partido dos Trabalhadores, 21 de mayo de 2001, São Paulo, 2000 (mimeo.).
- Secretaria Regional do MST, Coordenação do Assentamento Ireno Alves dos Santos, «Você sabe como se originou o assentamento Ireno Alves dos Santos?», Cantagalo, 1999 (mimeo.).

VIII. En busca de alternativas económicas en tiempos de globalización: el caso de las cooperativas de recicladores de basura en Colombia

CÉSAR RODRÍGUEZ

I. GLOBALIZACIÓN, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN

En los últimos años —luego de casi tres décadas de profunda intensificación del flujo de bienes, servicios, capitales y personas a través de las fronteras nacionales—, la labor de miles de personas y organizaciones progresistas alrededor del mundo que han denunciado los efectos excluyentes de la globalización neoliberal ha comenzado a tener una repercusión importante en las discusiones políticas y académicas sobre el rumbo de la economía mundial. En efecto, particularmente tras las protestas de Seattle a finales de 1999, la visibilidad e influencia de la crítica contra la globalización ha aumentado de forma considerable, hasta el punto de que hoy en día las organizaciones internacionales promotoras del proceso de globalización se han visto obligadas a reconocer, por lo menos en sus pronunciamientos oficiales, los efectos perversos de dicho proceso, como lo han demostrado las recientes cumbres del Banco Mundial. De esta forma, parece estar emergiendo un consenso que —sin poner aún en peligro el acuerdo hegemónico, esto es, el llamado Consenso de Washington— hace visible que la globalización neoliberal está fundada en condiciones políticas, sociales y económicas que tienden a reproducir y acentuar la desigualdad en todas las escalas geográficas: en lo global, entre el Norte y el Sur (Galbraith *et al.*, 1998); en lo nacional, entre clases sociales y entre regiones en cada país, como lo muestra el aumento de la desigualdad en los países de América Latina en las últimas dos décadas (CEPAL, 1998).

En la escala urbana, la brecha creciente entre ricos y pobres es particularmente patente. Como lo ha mostrado una de las vertientes más interesantes de los estudios sobre globalización —los análisis sobre el surgimiento de «ciudades globales» (v.g., Nueva York, Tokio y Londres en el centro; São Paulo, México y Bogotá en la semiperiferia latinoamericana) como nodos de control en el sistema económico global—, la economía y la sociedad de las grandes ciudades contemporáneas se caracterizan por un marcado dualismo (Sassen, 1991; Friedmann, 1995). En las

ciudades de la semiperiferia y la periferia del sistema mundial, este dualismo se manifiesta en la diferencia creciente entre los ingresos y condiciones de vida de un número pequeño de trabajadores calificados empleados por empresas del sector moderno de la economía, y los de un sector mayoritario y en expansión de personas calificadas y no calificadas que tienen empleos precarios (temporales o con bajos ingresos), están desempleadas o trabajan informalmente. El aumento considerable del sector informal en la semiperiferia y la periferia es especialmente significativo para los efectos de este escrito, no sólo porque constituye la expresión más visible de la precariedad del trabajo en las grandes ciudades, sino porque una de sus manifestaciones más impactantes —un número masivo y creciente de personas al borde de la indigencia que sobrevive escudriñando los botaderos de basura en busca de materiales reciclables para la venta— es el tema del estudio de caso que presento más adelante. En Bogotá, la ciudad en la que se centra dicho estudio, el sector informal ha aumentado considerablemente en los últimos años, hasta el punto de que en la actualidad la mayoría de la población bogotana económicamente activa (55%) trabaja en el sector informal (Uribe, 1997: 397). Este fenómeno es común a todas las grandes ciudades de América Latina. De hecho, la economía informal es la fuente de la mayor parte de los empleos creados en la década de los noventa (CEPAL, 1998), y su expansión está estrechamente relacionada con las medidas de ajuste estructural adoptadas en las últimas décadas en la región (Vilas, 1999).

Uno de los efectos centrales de la acentuación de la desigualdad en todas las escalas es la tendencia a la exclusión efectiva de grandes sectores de la población mundial del proceso de acumulación global de capital. El que la economía global contemporánea haya alcanzado un crecimiento sin precedentes al tiempo que aumenta el número de personas relegadas a vivir en sus márgenes —los desempleados permanentes, los campesinos sin tierra o pequeños propietarios rurales que practican agricultura de subsistencia y los sectores populares urbanos dedicados a actividades informales de supervivencia— hace pensar, como lo señala Friedmann (1992: 14), que «el capitalismo contemporáneo puede vivir [sin ellas]», de tal forma que «el mensaje que se les envía a estos sectores es claro: para todos efecto práctico, han pasado a ser redundantes en la acumulación global de capital». Redundantes como productores, en tanto desempeñan actividades de baja productividad y valor agregado. Redundantes como consumidores, en tanto su poder adquisitivo es mínimo, al grado de que, como señala con ironía Moody (1997), su participación en la sociedad de consumo consiste, fundamentalmente, en salir a la calle a «mirar vitrinas». Desde el punto de vista espacial, la exclusión de grandes sectores de la población es especialmente visible en las grandes ciudades, divididas en zonas claramente demarcadas que separan a ricos y pobres. Como Santos (1999: 22) lo ha hecho presente, esta «segregación social de los excluidos por medio de una cartografía urbana dividida en zonas salvajes [donde impera el estado de naturaleza hobbesiano] y zonas civilizadas [donde opera el contrato social]» constituye un verdadero «fascismo de *apartheid* social».

Pero el proceso de exclusión no avanza sin encontrar resistencia. Los excluidos resisten a diario a través de acciones individuales y colectivas muy diversas, que van desde estrategias de supervivencia hasta proyectos nacionales y globales de oposición, pasando por un sinnúmero de iniciativas locales. En América Latina, por ejemplo, como lo ha mostrado Hirschman (1984) en su sondeo de iniciativas económicas populares, los proyectos, propuestas y organizaciones de base van desde esfuerzos de campesinos pobres por controlar la comercialización de sus productos a través de cooperativas de mercadeo, hasta el trabajo conjunto de habitantes de barrios de invasión para acceder a la propiedad de los lotes y construir viviendas adecuadas, pasando por la lucha de pequeños artesanos por impedir, a través de cooperativas de trabajadores, la desaparición de su oficio ante la competencia de empresas dedicadas a la fabricación masiva de artesanías. Como lo anota Hirschman, lo que estas experiencias tienen en común es que, a través de ellas, grupos marginados se organizan para «salir adelante» mediante estrategias económicas colectivas. De igual forma, una amplia gama de movimientos sociales ha surgido o persistido en América Latina en tiempos de globalización, e incluyen movimientos de negritudes, trabajadores, indígenas, campesinos sin tierra y mujeres (Alvarez *et al.*, 1998).

Para los fines de este artículo, cuyo estudio de caso se refiere a una iniciativa popular de organización económica en Bogotá y otras ciudades de Colombia —la lucha colectiva de los recicladores de basura por mejorar sus condiciones de vida—, es especialmente importante resaltar las propuestas emprendidas por las clases populares, esto es, la mayoría de la población urbana, compuesta por sectores pobres de asalariados, trabajadores informales y desempleados.¹ Se trata de los habitantes de la ciudad para los cuales el «rebusque» es la estrategia diaria de supervivencia. Entre ellos se cuentan los trabajadores que ganan el salario mínimo, los vendedores ambulantes, los recicladores de basura, las empleadas domésticas, los indigentes de todas las edades y las miles de personas que prestan todo tipo de servicio en las calles. Bien como compradores, bien como productores o vendedores, los miembros de las clases populares alimentan una economía urbana de bajo costo que les permite acceder a bienes y servicios indispensables para su supervivencia. En este sentido, estas «economías populares» (Burbach *et al.*, 1997) constituyen una forma, aunque precaria, de resistencia, porque son mecanismos mediante los cuales las clases populares crean y explotan un nicho económico para sobrevivir. Sin embargo, cuando son vistas dentro del conjunto de la economía urbana, es claro que las economías populares están lejos de ser autónomas y, por sí mismas, emancipadoras. Por ejemplo, la economía informal está plenamente articulada con la economía formal, como lo evidencia el caso de los recicladores de

¹ Para el significado y connotaciones sociológicas y económicas del concepto «clases populares» o «sectores populares», utilizado frecuentemente en América Latina, véase Friedmann (1992: 15).

basura independientes que venden sus productos a intermediarios que, a su vez, lo venden a las grandes compañías productoras de papel. El caso de los recicladores muestra, además, que las formas económicas populares son fuentes de productos, servicios y mano de obra barata para el sector moderno de la economía. Este tipo de actividad, entonces, puede facilitar, antes que impedir, la explotación de las clases populares.

En vista de la ambivalencia del papel de las economías populares, la pregunta central para un estudio interesado en determinar el potencial emancipador de dichas economías es: ¿qué estrategias de organización y acción colectiva logran mitigar o eliminar la explotación de los actores económicos populares y liberar el potencial emancipador de este tipo de economías en tiempos de globalización? A lo largo de este trabajo, sostengo que las cooperativas y empresas solidarias populares capaces de sobrevivir en un mercado crecientemente global representan una estrategia particularmente promisorio. En la siguiente sección esbozo los elementos de dicha estrategia, cuyo alcance y limitaciones pueden ser apreciadas en detalle en el estudio de caso de las cooperativas de recicladores de basura en Colombia que expodré más adelante.

Luchas por la tierra y el territorio.

Las cooperativas de trabajadores en el contexto de la globalización

La búsqueda de alternativas frente a los efectos excluyentes del capitalismo, inspirada en teorías y experiencias basadas en la asociación económica entre iguales y en la propiedad solidaria, no es una tarea nueva. El pensamiento y la práctica cooperativista modernos son tan antiguos como el capitalismo industrial. De hecho, las primeras cooperativas surgieron hacia 1826 en Inglaterra, como reacción contra la pauperización provocada por la conversión masiva de campesinos y pequeños productores en trabajadores de las fábricas pioneras del capitalismo industrial (Birchall, 1997: 3). Como teoría social, el asociativismo está fundado en dos postulados: por una parte, la defensa de una economía de mercado basada en los principios no capitalistas de cooperación y mutualidad, y, por otra, la crítica al Estado centralizado y a la predilección por formas de organización política pluralistas y federalistas, que le den un papel central a la sociedad civil (Hirst, 1994: 15). Como práctica económica, el cooperativismo está inspirado en los valores de autonomía, democracia participativa, igualdad, equidad y solidaridad (Birchall, 1997: 65), plasmados en principios no capitalistas de organización empresarial. De acuerdo con los principios que rigen las cooperativas de trabajadores, por ejemplo, estos son propietarios de la empresa y participan directamente y en condiciones de igualdad en las decisiones fundamentales, independientemente del monto de su participación en el capital (Birchall, 1997: 65). En este sentido, las cooperativas de trabajadores buscan superar la división entre capital y trabajo —y el esquema de propiedad

individual y la administración jerárquica que la acompañan—, características de las empresas convencionales.

Pese a que, por una parte, el número de cooperativas se multiplicó rápidamente² y dio lugar un movimiento cooperativista internacional³ y, por la otra, la teoría asociativista fue retomada ocasionalmente por movimientos y teorías sociales, ni la práctica cooperativa ni el pensamiento asociativo que le sirve de base ha llegado a ser predominante. «El asociativismo nunca maduró hasta el punto de convertirse en una ideología coherente» (Hirst, 1994: 17), capaz de resistir los ataques provenientes tanto de las teorías socialistas de corte colectivista como del liberalismo individualista. El cooperativismo ha dado lugar a experiencias ejemplares de economía solidaria —como el complejo cooperativo de Mondragón, España—,⁴ pero no ha logrado convertirse en una alternativa importante frente al sector capitalista de la economía nacional y mundial. En este sentido, el cooperativismo, que desde sus inicios tuvo una vocación internacional, continúa siendo hoy un proyecto inconcluso de globalización contrahegemónica, basado en principios de solidaridad y democracia participativa.

La teoría y las prácticas cooperativas han suscitado un renovado interés en los últimos años. Ante el fracaso de las economías centralizadas y el avance del capitalismo de corte neoliberal, organizaciones y gobiernos progresistas alrededor del mundo han recurrido crecientemente a la tradición del pensamiento asociativo y a la forma cooperativa de organización económica, que surgió precisamente en oposición tanto al colectivismo como al individualismo liberal. Aunque están regidas por valores y principios no capitalistas —esto es, contrarios a la separación entre capital y trabajo y a la subordinación de éste a aquél—, las cooperativas siempre han sido concebidas y han operado como unidades productivas que compiten en el mercado. El interés reciente en las cooperativas y el pensamiento asociativo es evidente en los países centrales, donde han proliferado los análisis teóricos sobre la democracia asociativa y el cooperativismo (Hirst, 1994; Le Grand y Estrin, 1989; Bowles y Gintis, 1998) y los estudios de caso sobre experiencias cooperativas exitosas de trabajadores (Whyte y Whyte, 1988) o frustradas (Russell, 1985). También es notorio en la semiperiferia y la periferia, donde algunas de las iniciativas y discusiones más interesantes han estado asociadas al debate sobre

² En Inglaterra, por ejemplo, el número de cooperativas creció notablemente después de la experiencia pionera de Rochdale. Hacia 1865, cerca de 100 000 personas formaban parte de cooperativas de todo tipo, y hacia finales de siglo, el número había ascendido a 1.7 millones de afiliados y a casi 1 500 cooperativas. A finales de la primera Guerra Mundial, el número de cooperantes era cerca de tres millones (Birchall, 1997).

³ En efecto, en 1893 fue fundada la Alianza Cooperativa Internacional, entidad que hoy sigue representando el movimiento cooperativista mundial.

⁴ El complejo Mondragón fue iniciado en 1956 y es propiedad de los 30 000 trabajadores de sus 109 fábricas, su cadena de supermercados, su banco y su universidad. Mondragón fue escogida recientemente por la ONU como uno de los 50 mejores proyectos sociales en el mundo. Una presentación completa del caso Mondragón se encuentra en Whyte y Whyte (1988).

el «desarrollo alternativo», que comenzó en los años setenta y ha sido impulsado por autores y organizaciones que «resaltan el papel de los movimientos de base, el conocimiento local y el poder popular en la transformación del desarrollo» (Escobar, 1995: 15). Los debates sobre el desarrollo alternativo en general, y sobre el cooperativismo en particular, buscan teorizar y hacer viables formas de organización económica cuyos principios democráticos y efectos igualitarios contrastan con el despotismo que caracteriza el funcionamiento interno de las empresas capitalistas y los efectos desiguales del tipo de desarrollo económico fundado en éstas (Singer y Souza, 2000). Además, en condiciones de desempleo masivo, como las que imperan en buena parte del sur global, la promoción de cooperativas aparece como una alternativa a las políticas de empleo convencionales, como lo ilustran las experiencias recientes de fundación de cooperativas por parte de habitantes de favelas y campesinos sin tierra en Brasil (Singer, 2000; Almeida, 2000) y trabajadores en la India que han asumido el control de las fábricas en las que trabajaban para evitar la quiebra (Bhowmik, 2000).

A pesar de su contribución decisiva a la crítica de los efectos excluyentes del desarrollo capitalista, los escritos sobre desarrollo alternativo y cooperativismo en la semiperiferia y la periferia —concretamente en América Latina— han tendido a centrarse exclusivamente en el ámbito local. Esta tendencia a idealizar lo local en contraste con lo nacional y lo global es evidente en los trabajos más recientes sobre el tema, como lo muestran los estudios de Burbach sobre las economías populares en América Latina (Burbach *et al.*, 1997; Burbach, 1997). Para este autor, dichas economías proliferan «en las partes del mundo que el capitalismo ha desechado» y constituyen un «nuevo modo de producción» dedicado a las actividades económicas que las empresas trasnacionales han decidido descartar (*v.g.*, la venta callejera de artículos de baja calidad y el reciclaje de basuras en los botaderos) (Burbach, 1997: 18). Puesto que «estas economías no compiten y no pueden competir con el capital trasnacional en el proceso de globalización», su campo de acción es exclusivamente local (Burbach, 1997: 19).

El problema con esta visión es que —como lo muestra el caso de las cooperativas de recicladores de basura en Colombia y experiencias similares en otros países (Cruz e Silva, 2000)— las organizaciones económicas populares se ven cada vez más en la necesidad de competir con el capital trasnacional para mantenerse con vida e impulsar sus objetivos emancipadores. Mientras permanezcan en los márgenes de la economía, dichas organizaciones son, en la mayoría de los casos, medios de supervivencia y de reafirmación de la subordinación de sus miembros, no de mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares (Singer y Souza, 2000). Los márgenes, por lo demás, son cada vez más estrechos y riesgosos. Como lo ilustra el estudio de caso que presento más adelante, el proceso que está teniendo lugar en la semiperiferia y la periferia es justamente el contrario al descrito por Burbach, esto es, la colonización por

parte del capitalismo global de las actividades económicas (*v.g.*, el reciclaje de basura) y de las zonas geográficas que hasta el momento habían permanecido en sus márgenes. En estas condiciones, la articulación de las organizaciones económicas populares con el Estado y entidades nacionales e internacionales es una estrategia esencial para que organizaciones puedan insertarse gradualmente en el mercado nacional y global y en el proceso político. Por esta razón, las propuestas y teorías económicas progresistas, entre ellas las de desarrollo alternativo, deben ir más allá de lo local y establecer vínculos entre las iniciativas económicas locales, nacionales y globales. Como lo ha presentado Harvey (2000), sólo este tipo de estrategia emancipadora, capaz de moverse con fluidez entre las diferentes escalas, desde lo local hasta lo global y viceversa, representa una alternativa viable frente a la globalización neoliberal. Es en esta estrategia donde se encuentra la posibilidad de generar formas contrahegemónicas de globalización (Santos, 1995).

Plan y metodología del estudio

Contra este telón de fondo, la pregunta central que guía este trabajo es: ¿en qué condiciones surgen y se consolidan organizaciones económicas populares no capitalistas que, al mismo tiempo, faciliten la lucha por la inclusión de las clases populares y sean viables en un mercado globalizado? Para contribuir a la reflexión sobre esta pregunta, presento un estudio de caso sobre la formación y desarrollo de cooperativas de recicladores de basura en Colombia desde finales de la década de 1980. Este análisis está basado en un trabajo de campo de ocho meses en Colombia que abarcó el examen general de la evolución de la red de 94 cooperativas de recicladores, con base en una revisión documental y en entrevistas, y la observación detallada —inspirada en la metodología de investigación-acción participativa (Fals Borda, 1998)— del funcionamiento de una de las cooperativas más consolidadas —la Cooperativa Rescatar—, fundada en 1987, y cuya sede se encuentra en Bogotá.⁵

Cuatro razones hacen este estudio de caso especialmente relevante: en primer lugar, los recicladores de basura son uno de los grupos cuya presencia en las grandes ciudades alrededor del mundo muestra con mayor claridad el carácter global de la exclusión social a la que hice alusión anteriormente. Lejos de ser un fenómeno que se limita a Colombia o a América Latina, las miles de personas que sobreviven de la recuperación de materiales reciclables en las calles o en los botaderos de basura son comunes en las ciudades de la semiperiferia y la periferia,

⁵ El estudio de campo se realizó con la colaboración entusiasta y decisiva de Betsy Perafán, investigadora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de los Andes.

e incluso, aunque en proporción menor, en las ciudades del centro. Por ejemplo, se estima que en Colombia cerca de 300 000 personas —esto es, cerca de 1% de la población— viven de la recuperación de materiales reciclables en las ciudades (Hower, 1997). En México y en Egipto, la población recicladora es aún mayor en términos porcentuales (2% del total nacional) (Hoyos, 2000). En Manila, Filipinas, cerca de 12 000 personas dependen directamente del reciclaje (Mydans, 2000). En Pekín, aproximadamente 82 000 campesinos inmigrantes trabajan como recicladores informales (Eckholm, 2000). En segundo lugar, la exclusión social de la que son víctimas los recicladores es especialmente perversa y dramática. Debido al rechazo social generalizado a su forma de vida —que con frecuencia implica vivir en la calle— y a su oficio —que requiere estar en contacto permanente con la basura—, los recicladores son víctimas del máximo grado de exclusión y están relegados a las zonas más salvajes de la cartografía urbana —esto es, los botaderos, las calles y los guetos donde venden sus productos a intermediarios y, en ocasiones, habitan. En Colombia, el grado de exclusión de los recicladores se observa claramente en la expresión insultante: «desechables» que buena parte de la población utiliza para referirse a ellos. El reciclador es excluido hasta el punto de ser considerado redundante, eliminable, al igual que la basura en la que busca materiales reutilizables, como lo muestran las operaciones de «limpieza social» en las que recicladores y otros habitantes de la calle son eliminados por grupos armados de corte fascista, en ocasiones con la colaboración o connivencia de la fuerza pública. En tercer lugar, los recicladores colombianos se han asociado alrededor de formas no capitalistas de producción económica, principalmente cooperativas de trabajadores. En este sentido, los logros considerables y las limitaciones de esta experiencia son útiles para responder a la pregunta que guía este estudio. Finalmente, las cooperativas de recicladores han debido enfrentar las condiciones del mercado colombiano e internacional en tiempos de apertura económica y globalización. Las cooperativas surgieron a finales de los ochenta y principios de los noventa, precisamente en la época en que la política económica en Colombia dio un giro claro hacia la internacionalización y el neoliberalismo. Por esta razón, el análisis del funcionamiento de las cooperativas de recicladores puede dar luces acerca del potencial de este tipo de organización en el contexto del mercado globalizado.

En la siguiente sección expongo en detalle los resultados de este estudio de caso. Al hacerlo, intento poner en diálogo los resultados del trabajo empírico con las discusiones y la bibliografía sobre desarrollo alternativo y cooperativismo. Por esta razón, destaco la forma como las cooperativas se han visto afectadas y han respondido al impacto de la globalización. Como ya mencioné, esta reflexión sobre lo global está generalmente ausente de la literatura sobre alternativas económicas en la semiperiferia y la periferia. En este sentido, la exposición que presento constituye un estudio de caso extendido (Van Velsen, 1967), puesto que el análisis

del caso concreto es hecho con el fin de contribuir a teorías y discusiones generales sobre alternativas económicas emancipadoras. Después de desarrollarlo, en la tercera y última parte del escrito ofrezco algunas conclusiones.

2. DE «DESECHABLES» A EMPRESARIOS SOLIDARIOS: LA LUCHA DE LOS RECICLADORES DE BASURA EN COLOMBIA

El mercado del reciclaje

El reciclaje de residuos sólidos recuperables o reutilizables —como papel, cartón, vidrio, plástico y aluminio— es un paso fundamental en el ciclo productivo de numerosas industrias —particularmente en sectores como la producción de papel, envases y cartón. De hecho, buena parte de las materias primas utilizadas por estas industrias provienen del reciclaje. El uso de materiales reciclados en la industria tiene efectos económicos y ambientales decisivos. El reciclaje es una actividad económica considerable en Colombia. En 1990, el dinero generado por el conjunto de actividades que componen el circuito del reciclaje —recolección, transformación y transporte de materiales— fue de 22 millones de dólares (Fundación Social, 1990: 45). Desde el punto de vista ambiental, el reciclaje tiene efectos igualmente importantes. En Colombia, puesto que cada año se reciclan cerca de 300 000 toneladas de papel y cartón, el reciclaje preserva anualmente seis millones de árboles (ANR, 2000; Fundación Social, 1998).

Las cifras agregadas respecto al tamaño y el impacto del mercado del reciclaje no revelan, sin embargo, la dinámica altamente explotadora en que su funcionamiento está basado y que muestra de forma vívida los efectos del proceso de exclusión social en las ciudades al que me referí en la introducción a este escrito. En efecto, tal como se practica en Colombia, el reciclaje es posible por la combinación de un proceso de urbanización acelerado y desordenado —uno de cuyos síntomas es un sistema de recolección y disposición de basuras inadecuado y la falta de cultura ciudadana sobre el reciclaje en el hogar— y una marcada fragmentación social y espacial que da lugar a la coexistencia, por una parte, de un pequeño sector de la población con poder adquisitivo que en sus hogares y lugares de trabajo produce la mayor parte de la basura y los desechos reciclables de la ciudad y, por otra, de una población masiva de desempleados o subempleados, algunos de los cuales encuentran en la recuperación y venta de dichos materiales su medio de supervivencia.

Con este telón de fondo es posible entender la estructura y el funcionamiento del mercado del reciclaje, dividido en tres componentes. El primero es la recuperación de los materiales por parte de los recicladores. Se trata de una actividad muy competida. En ella participan cerca de 300 000 recicladores

informales⁶ en todas las ciudades colombianas, de los cuales aproximadamente 50 000 trabajan en Bogotá (Hower, 1997). El segundo componente son los intermediarios formales o informales, que compran los materiales a los recuperadores y los venden a las industrias. En ocasiones, los intermediarios tienen vínculos cercanos con las industrias compradoras (o incluso son financiados por ellas). El componente final del mercado son las industrias que adquieren el material reciclado, lo transforman y lo reutilizan en sus procesos productivos. A diferencia de la actividad de recuperación de materiales, su compra está altamente concentrada. El mercado del reciclaje es un oligopsonio: un número reducido de empresas consume los materiales reciclables e impone las condiciones y los precios a los recicladores (Fundación Social, 1998).

Debido a la estructura del mercado, no es sorprendente que los considerables beneficios económicos derivados del reciclaje se los apropien los compradores y, en menor medida, los intermediarios formales e informales, en tanto que los recicladores reciben ingresos que, usualmente, son menores al salario mínimo (esto es, 120 dólares mensuales) y que, por lo tanto, los mantiene en la miseria. La estructura y dinámica del mercado del reciclaje también pone en evidencia la íntima conexión y relación de explotación entre la economía popular informal y la economía formal. En efecto, como lo ha señalado Birkbeck (1978) en su estudio sobre el reciclaje en Cali, los recicladores son, aunque no se reconocen ni son reconocidos como tales, empleados del puñado de industrias que utilizan los materiales reciclados como materia prima.

Los recicladores

¿Quiénes son las miles de personas que recorren las calles y habitan los botaderos de basura de las ciudades de Colombia en busca de materiales reciclables? Los datos fragmentarios sobre el tema, complementados con el trabajo de campo hecho para este estudio, muestran que el oficio del reciclaje lo ejercen hombres y mujeres en proporciones similares. Aunque predominan los recicladores de entre 20 y 40 años, fue común encontrar, durante la investigación de campo con los recicladores en las calles de Bogotá, niños y ancianos trabajando en el oficio. Los recicladores laboran generalmente en familia, no de manera individual. El trabajo etnográfico con los recicladores de la cooperativa Rescatar, de Bogotá (en adelante «la cooperativa»), en sus zonas de recolección en la calle mostró, por ejemplo, que las tareas necesarias para la recuperación del material —*v.g.*, búsqueda en las bolsas y botes de basura, selección y embalaje de los materiales, manejo del vehículo utilizado para transportar el material— se dividen entre los miembros de familias extendidas

⁶ Los recicladores son informales porque su actividad (sacar basura de los botes o bolsas en la calle o en los botaderos) está formalmente prohibida y, por lo tanto, trabajan al margen de la ley.

de cuatro o más miembros. Es común que los recicladores lleven a sus hijos menores en los carros «esferados» en que transportan el material. El comentario de Heidy, de 17 años y socia de la cooperativa —«Soy recicladora desde que nací, porque mi mamá me cargaba en una caja en el carro esferado mientras trabajaba de recicladora»—, es representativo de la situación de varios de ellos.

La mayoría de recicladores tiene un bajo nivel de escolaridad. Un estudio reciente hecho en Bogotá muestra que, en las localidades escogidas, 73% de los recicladores no terminó primaria y 15% es analfabeta (Corporación Raíces, 1998). La investigación etnográfica en la cooperativa arrojó resultados similares. Muchos de los socios de la cooperativa comenzaron a trabajar como recicladores desde edad temprana y abandonaron los estudios ante la necesidad de dedicar más tiempo al trabajo o porque, como sucedió con Heidy, «no hubo plata para estudiar más». Sin embargo, es notorio el ingreso creciente al oficio en general, y a la cooperativa en particular, de personas con educación secundaria e incluso educación superior, ante el creciente desempleo en Colombia. El caso de uno de los nuevos socios de la cooperativa —Henry, de 50 años—, quien empezó a trabajar como reciclador al perder su empleo de maquinista tras la liquidación de la empresa estatal de ferrocarriles donde laboraba, es representativo de esta nueva tendencia.

Los recicladores ejercen su oficio en tres modalidades. El sector más visible de la población recicladora trabaja en las calles, recogiendo en un bulto, un carro esferado o una «zorra», los materiales que saca de los botes y las bolsas de basura. Las jornadas de trabajo en esta modalidad duran más de ocho horas e implican atravesar la ciudad de lado a lado. Comienza en los barrios populares, legales o de invasión, en los que habitan los recicladores; continúa en las zonas opulentas de la ciudad, donde se encuentra la basura valiosa, y termina con el regreso a las zonas populares, donde se encuentran las bodegas de las cooperativas o los intermediarios y a donde vuelven los recicladores a descansar. Estos son, así, unos de los pocos grupos que transgreden a diario las fronteras de la cartografía urbana. La segunda modalidad de reciclaje consiste en la recuperación de materiales en los botaderos de basura y rellenos sanitarios. Se trata de la actividad de hombres, mujeres y niños que trabajan durante largas horas en condiciones insalubres —y, con frecuencia, viven en sus alrededores, en casas de cartón y aluminio— seleccionando material a medida que los camiones de las empresas de aseo lo descargan. Por último, la modalidad de trabajo más favorable para el reciclador es la recuperación en la fuente, esto es, en los edificios residenciales o de oficinas. Debido a la imagen generalizada del reciclador como indigente peligroso —como «desechable»—, el acceso a las fuentes es, en la práctica, muy difícil.

A pesar de las duras condiciones de trabajo, de los bajos ingresos y del estigma que lo acompaña, el oficio no es, por regla general, una ocupación temporal. Son muy frecuentes los casos de recicladores que desempeñan la profesión durante buena parte o toda su vida. En las conversaciones con los miembros de

la cooperativa durante sus jornadas laborales en la calle o en la bodega de la cooperativa, las respuestas recurrentes fueron similares a las de Elisa, de 30 años, que dijo ser recicladora «desde pequeñita», o la de Darly, de 25, quien ha sido «recicladora desde los 13 años, cuando mi mamá me traía a la cooperativa». Son frecuentes los casos de personas que trabajaban en otros empleos informales, como Concepción —de aproximadamente 40 años—, que antes de ser recicladora trabajó en «oficios domésticos, en la prensa [vendiendo periódico en la calle] y en un chircal [depósito de arcilla donde se hacen ladrillos]». Un fenómeno creciente —y visible en la cooperativa— es el ingreso al oficio de bachilleres y profesionales que han quedado sin empleo.

Varias razones explican su permanencia en el oficio. El reciclaje es una de las pocas opciones laborales para personas que tienen sólo unos años de escolaridad. Además, el oficio tiene un atractivo no económico apreciado por quienes lo desempeñan, esto es, la independencia y la libertad que derivan de trabajar por cuenta propia. Como lo expresó Jairo, de aproximadamente 50 años y miembro de la cooperativa durante mucho tiempo, en una de nuestras conversaciones: «A mí siempre me ha gustado trabajar por mi cuenta... no me gusta que nadie me mande». De hecho, el valor supremo de la libertad en la cultura de los recicladores —«es mejor la libertad de uno, pase lo que pase», en las palabras de Diana, de 25 años— contribuye a la conducta individualista y competitiva que perpetúa la estructura explotadora del mercado, y hace especialmente difíciles —y meritorios— los esfuerzos por organizar a la población recicladora alrededor de los valores de cooperación y solidaridad.

Los dos problemas centrales

¿Cómo se reproduce la marginación extrema de la que son víctimas los recicladores? ¿Qué factores explican la estabilidad de las estructuras sociales y económicas de las que se alimenta el mercado del reciclaje y que mantienen a los recicladores informales en los márgenes de éste, «atrapados en la capa más baja del capitalismo, donde el sistema muestra su cara más brutal y antagónica»? (Birkbeck, 1978). Dos factores evidentes en la descripción ofrecida en la sección anterior constituyen, en mi opinión, el círculo vicioso que perpetúa la pauperización de los recicladores. Se trata de la explotación económica derivada de la estructura del mercado del reciclaje y de la conducta de sus actores dominantes (esto es, la gran industria y los intermediarios), por una parte, y la dramática exclusión social de la que son objeto los recicladores, por la otra. En otras palabras, los efectos económicos de la estructura del mercado del reciclaje explicados en la sección anterior se ven acentuados por los del estigma y la exclusión de los recicladores. En el imaginario social urbano en Colombia, los recicladores se ubican en los estratos más bajos y marginados, junto con los indigentes, limosneros, ladrones y demás habitantes de

la calle con los que son asociados por trabajar en la vía pública y en los botaderos, en permanente contacto con la basura. Los recicladores son, con frecuencia, excluidos incluso por los sectores populares⁷ y son víctimas de operaciones de «limpieza social». De hecho, uno de los episodios que provocó la fundación de las redes de cooperativas de recicladores fue el asesinato en Barranquilla, en 1992, de 11 recicladores cuyos cuerpos fueron luego utilizados para realizar experimentos médicos en un centro universitario. En síntesis, la explotación económica crea las condiciones de indignancia que provocan la exclusión social, la cual, a su vez, confina a los recicladores a los espacios urbanos y a los nichos económicos que posibilitan la perpetuación del mercado explotador.

En vista de este círculo vicioso, los pocos estudios sobre el tema tienden a concluir desesperanzadoramente. En este sentido, son representativas las conclusiones de Birkbeck (1978, 1979) en sus investigaciones sobre los recicladores de Cali. Para él, las dificultades que enfrentan son virtualmente insuperables, debido a la estructura del mercado y a la necesidad de mantener los precios de los materiales reciclables por debajo del costo de la materia prima nueva. No hay nada, entonces, que el analista pueda proponer para mejorar las condiciones de los recicladores:

No podemos proponer que se incremente de forma sustancial la participación [de los recicladores] en las utilidades generadas por la recuperación de materiales debido a las limitaciones estructurales que operan en la determinación de dichas utilidades. El reciclador de basura puede trabajar duro, puede tener buen ojo para escoger materiales valiosos, puede buscar y buscar hasta encontrar el comprador adecuado; en fin, puede ser el ejemplo perfecto del individuo emprendedor. Pero nada de esto lo llevará lejos. (Birkbeck, 1979: 182.)

Pocos años después, los recicladores, mediante su acción colectiva, desafiarían la conclusión trágica de Birkbeck. Como sucede en tantas ocasiones, los actores sociales objeto de explotación encontraron caminos de emancipación que el analista no pudo percibir. En la siguiente sección expongo la forma como un sector de los recicladores colombianos se ha asociado en cooperativas de trabajadores encaminadas justamente a luchar contra las limitaciones estructurales que parecían inamovibles.

⁷ Un episodio de la historia reciente de Bogotá ilustra esta exclusión por parte de los sectores populares. En 1996, la alcaldía de la ciudad debió reubicar a numerosas familias de recicladores que habían habitado durante muchos años en terrenos contiguos a la línea del ferrocarril porque habían sido adquiridos recientemente por un consorcio privado. Cuando intentó moverlos a dos barrios populares, la alcaldía se encontró con la tenaz resistencia de los habitantes de dichos barrios, quienes «se amotinaron y protagonizaron peleas callejeras, protestando y vociferando que no querían a los recicladores porque eran indeseables» (Uribe, 1997: 403). Los recicladores fueron ubicados finalmente en un tercer barrio, que ya tenía una población recicladora considerable.

Las cooperativas de recicladores

La solución a los dos problemas señalados implica una doble estrategia. Por un lado, requiere la transformación de las condiciones del mercado en favor de los recicladores a través de la lucha contra la dispersión y la competencia frontal entre estos. El mecanismo natural para alcanzar este objetivo es la concentración de la oferta de materiales reciclables en unas pocas organizaciones de recicladores capaces de recuperar una cantidad considerable de material que les permita tener una participación importante en el mercado y, por lo tanto, negociar los precios y las condiciones con las industrias compradoras. Por el otro lado, puesto que el estigma y la marginación social que afectan a los recicladores son un obstáculo importante para la lucha contra las condiciones del mercado, es indispensable que dichas organizaciones económicas asuman funciones sociales, políticas y culturales diversas que contrarresten la exclusión de la que son víctimas los recicladores. Entre ellas se encuentran la promoción del acceso a bienes y servicios básicos, cuya carencia refuerza el aislamiento y la miseria, como educación elemental secundaria y atención médica adecuada; la conformación de mecanismos de representación de los intereses de los recicladores frente a la sociedad y el gobierno; y la organización de actividades de integración entre la población recicladora que ayuden a desarrollar los lazos de solidaridad necesarios para la acción colectiva. Como lo han mostrado iniciativas económicas populares emancipadoras alrededor de América Latina (Wasserstrom, 1985; Hirschman, 1984), la lucha por la mejoría de las condiciones materiales de vida de los miembros de los sectores populares está intrínsecamente ligada a la lucha por sus derechos de ciudadanía. En este caso concreto, el progreso económico y la lucha por la inclusión son dos caras de la misma moneda. Sin una estrategia económica viable, los recicladores están condenados a la pobreza o, en el mejor de los casos, a depender indefinidamente de la caridad de ONG, benefactores individuales o de entidades gubernamentales aisladas. Sin una estrategia social, las ganancias económicas derivadas de la transformación del mercado del reciclaje no alteran las condiciones de exclusión de los recicladores en su conjunto.

La necesidad de una estrategia económica y social fue claramente percibida por los líderes dentro de la comunidad recicladora y por algunas ONG y entidades gubernamentales que, a comienzos de la década de los ochenta, iniciaron los primeros experimentos de organización. Las lecciones de estas experiencias pioneras fueron recogidas por un grupo de cerca de 200 recicladores en Manizales en 1986 que —en colaboración cercana con la entidad estatal encargada en ese entonces de promover el cooperativismo en Colombia (Dancoop), la agencia estatal de promoción de la educación técnica (SENA) y las Empresas Públicas de Manizales— fundó la Precooperativa Prosperar y obtuvo el apoyo de la Fundación Social, organización de asistencia privada financiada por un conglomerado económico

propiedad de la comunidad jesuita en Colombia (Hower, 1997). La Fundación Social influiría decisivamente en el proceso de organización de los recicladores en Colombia. En efecto, la Fundación Social desempeñaría el papel de catalizador externo —de «animador social»—, generalmente presente en las experiencias de organización económica de comunidades marginadas. Inicialmente en colaboración con el Dancoop, y posteriormente por su propia cuenta, la Fundación entró en contacto con las comunidades de recicladores y sus líderes, y los apoyó en la fundación y consolidación de las primeras cooperativas y redes de cooperativas.

El esfuerzo conjunto de grupos de recicladores, de la Fundación Social y de algunas entidades gubernamentales nacionales y locales dio lugar a la rápida proliferación de cooperativas a finales de los ochenta y principios de los noventa. Una de las primeras fundadas de esta forma (1987) fue Rescatar, con sede en Bogotá. En 1989 se creó Porvenir, una de las más exitosas de Bogotá. Iniciativas similares fueron emprendidas en las ciudades grandes y medianas del país, y en 1990 el número de cooperativas ascendió a cerca de 50, de las cuales la Fundación Social apoyaba a 20 (Fundación Social, 1990). Surgió entonces la necesidad de articular los esfuerzos de las cooperativas nacientes a través de redes regionales y de una red nacional. En la escala regional fueron creadas, por ejemplo, la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) en 1990, y la Asociación de Recicladores de la Costa Norte (Arcon) en 1992, esta última como respuesta al asesinato de 11 recicladores e indigentes en Barranquilla el mismo año. En la escala nacional, la Fundación Social patrocinó el Primer Encuentro Nacional de Recicladores en 1990, que dio lugar a la propuesta de creación de la Asociación Nacional de Recicladores (ANR), que entró en funcionamiento en 1991.

La creación de las redes regionales y la red nacional de cooperativas de recicladores tuvo lugar justamente en el momento en que el gobierno colombiano dio un giro decidido hacia la apertura y desregulación de la economía, con base en políticas públicas de todo tipo —fiscales, monetarias, laborales, sociales, etc.—, cercanas al modelo neoliberal. Un componente esencial de estas políticas fue el impulso a la privatización de la prestación de los servicios públicos. Uno de los primeros sectores en los que esta última estrategia fue utilizada fue el del servicio de recolección de basura en Bogotá. En 1990 la Alcaldía inició el proceso de privatización del servicio y otorgó licencias a consorcios creados por empresarios colombianos y multinacionales extranjeras para recoger la basura en 60% de la ciudad. Esto puso en evidencia los efectos ambiguos de la apertura y del proceso de globalización económica de la que ésta forma parte sobre la población recicladora en general, y sobre las cooperativas y las redes en particular. Por un lado, la privatización del mercado de la recolección de basura y del reciclaje creó una oportunidad para las cooperativas, esto es, podría prestar el servicio antes reservado a las empresas de aseo estatales. Por otra parte, puesto que las privatizaciones son hechas a través de procedimientos en los que sólo participan empresas que reúnen los requisitos

financieros y tecnológicos establecidos en las licitaciones y que están fuera del alcance de las cooperativas—, los recicladores quedan excluidos de entrada de la definición del futuro del mercado y enfrentan el riesgo de la desaparición del nicho del que dependen, si las empresas privadas que entran a prestar el servicio—como sucede cada vez con más frecuencia— se encargan no sólo de la recolección sino también de la recuperación del material reciclable. Este riesgo fue justamente uno de los motivos que llevó a los recicladores a organizar redes regionales y nacionales que funcionarían como gremios y representarían sus intereses.

La primera experiencia de las cooperativas con el proceso de privatización reveló tanto la oportunidad como la seria amenaza que implicaban. Cuando en 1992 la empresa estatal de aseo de Bogotá, que tenía todavía la responsabilidad de recoger la basura en 40% de la ciudad, entró en crisis y provocó una emergencia sanitaria en la ciudad, la ARB y la Fundación Social propusieron al gobierno que las cooperativas de recicladores se encargaran del servicio en las zonas que la empresa estatal solía prestarlo. La propuesta fue aceptada y la alcaldía contrató a la Fundación Social—que a la vez subcontrató a la ARB— para resolver el problema. Sin embargo, después de que los recicladores organizados resolvieron exitosamente la emergencia, el gobierno local exigió, para la continuación del contrato, que la Fundación Social—no la ARB— continuara siendo la contratista directa, debido a la desconfianza del gobierno de la capacidad de gestión de los recicladores, lo que denota el recelo generalizado hacia la población recicladora. Puesto que la Fundación Social no podía legalmente asumir esta responsabilidad, el gobierno descartó esta posibilidad y privatizó el restante 40% del servicio a través de una licitación adjudicada a un consorcio internacional.

A lo largo de la década de los noventa se multiplicaron las cooperativas y los esfuerzos por conformar alianzas entre ellas para crear empresas de aseo y manejo de residuos capaces de competir con empresas convencionales a medida que el proceso de privatización del servicio se expandió por todo el país. El ejemplo más notable de este tipo de alianza es la empresa Ecología y Aseo—Ecoaseo—cuyos accionistas son cooperativas de recicladores y redes de diversas regiones. Ecoaseo ha desarrollado una propuesta alternativa de prestación de servicios de aseo y reciclaje—que ha llamado «gestión ambiental de residuos sólidos con participación comunitaria»—, que pretende dar un servicio eficiente y mejorar las condiciones de vida de las comunidades de recicladores organizados (Rivas, 1997). Por la desventaja de Ecoaseo en términos de capital y tecnología en relación con las grandes empresas, su progreso ha sido lento. Sin embargo, en la actualidad presta el servicio en tres municipios y está en proceso de expansión a ciudades intermedias. Además, empresas de servicios públicos de tipo cooperativo, creadas por recicladores, han sido exitosas en el plano municipal, como lo muestra la experiencia de la organización de recicladores de San Gil—un municipio mediano en el nororiente de Colombia—, donde presta el servicio de aseo y reciclaje a 55% del municipio.

Por otra parte, un número importante de cooperativas ha hecho avances económicos muy considerables. Las cooperativas más exitosas han diversificado sus actividades para incluir no sólo el servicio de aseo y de reciclaje en viviendas e industrias—e incluso en zonas extensas de las grandes ciudades—, sino también la transformación de los materiales reciclados, la actividad de mayor valor agregado en el proceso. Además, las cooperativas y redes han intentado ocuparse directamente de la comercialización de los materiales que recogen, a través de cooperativas de mercadeo.

A lo largo de los años noventa se multiplicó el número de cooperativas alrededor del país, hasta el punto de que actualmente hay 94, de las cuales 88 forman parte de la ANR y agrupan a cerca de 10% de la población recicladora del país (ANR, 2000). Las cooperativas son muy diversas. Mientras que algunas han sido creadas hace pocos años, tienen una base social muy inestable, capitalización mínima y están en riesgo permanente de desaparecer, otras, como Rescatar y El Porvenir, en Bogotá, y Recuperar, en Medellín, han logrado consolidarse y encontrar nichos económicos que les han permitido mantenerse con vida e incluso reinvertir sus utilidades en la adquisición de bienes de capital y en diversificar sus actividades.

El desarrollo de las cooperativas ha ido de la mano de la consolidación de las redes regionales y de la red nacional. La ANR—que en marzo de 2000 celebró la VIII Asamblea General de Recicladores—se ha establecido como la entidad de representación del gremio, articulada con las cooperativas a través de las nueve redes regionales. Éstas se han ido consolidando lentamente y han emprendido proyectos diversos en favor de las cooperativas que la conforman.

Hasta comienzos de 1999, la Fundación Social prestó apoyo financiero y técnico a buena parte de las cooperativas y redes. Durante los 12 años que duró su respaldo, las virtudes y las dificultades características de la intervención de una organización facilitadora externa fueron evidentes. Por un lado, la Fundación suministró capital y servicios indispensables para el despegue de las cooperativas y las redes, que los recicladores muy posiblemente no habrían podido encontrar en bancos ni en entidades privadas, especialmente tras la quiebra del sector financiero solidario a mediados de los años noventa en Colombia. Por otro lado, sin embargo, el que la Fundación interviniera directamente en la gestión de las cooperativas para hacerlas rentables generó una reacción negativa de parte de los recicladores organizados, quienes han insistido en su autonomía y en su capacidad de autogestión.

En consecuencia, actualmente las cooperativas y redes están atravesando un periodo crítico en el que su capacidad de desarrollo autónomo está por comprobarse. El retiro de la entidad facilitadora que las venía acompañando y financiando ha creado una zozobra de la que las redes se están recuperando, mientras las cooperativas se enfrentan, además, a los efectos de la profundización del proceso privatizador del servicio de limpia y reciclaje, que crea, como se vio, tanto oportunidades como amenazas para los recicladores organizados. El ejemplo paradigmático

de esta situación es la inminente entrada en vigencia en Bogotá del Plan Maestro de Basuras, un programa de la alcaldía de la ciudad para resolver, en los próximos años, los problemas de recolección y disposición de los residuos sólidos, que daría a empresas privadas de limpia la responsabilidad de recuperar y separar directamente los materiales reciclables. A menos que las organizaciones de recicladores logren crear alianzas y organizaciones para participar e influir en este proceso, es muy posible que desaparezca el nicho económico del que dependen los casi 50 000 recicladores de Bogotá.

¿Cuál es el balance general de la historia de las cooperativas y las redes de recicladores en Colombia? En mi opinión, se trata de una historia que muestra, al mismo tiempo, el inmenso potencial emancipador de iniciativas económicas populares articuladas a través de formas no capitalistas de producción —lo que ha quedado plasmado, por ejemplo, en importantes premios internacionales otorgados a las organizaciones de recicladores de Colombia por su gestión social y ambiental—⁸ y las dificultades profundas que enfrenta una población altamente marginada dentro de un ambiente económico y político desfavorable. En la siguiente sección me ocupo de esta pregunta y ofrezco una síntesis de los logros, limitaciones y desafíos de las cooperativas en la actualidad. Al hacerlo, considero tanto el balance económico de estas experiencias —esto es, si son rentables y capaces de mantenerse con vida en el mercado— como su balance social —los efectos que han tenido sobre las condiciones de vida de los recicladores—. Como estos efectos se aprecian con claridad sólo en la microescala, esto es, en la vida diaria de las cooperativas y sus miembros, me concentraré en la información recogida durante la investigación etnográfica realizada con los miembros de Rescatar durante sus jornadas de trabajo en las calles de Bogotá y en la sede de la cooperativa.

El balance social de las cooperativas

La referencia al balance social es muy común tanto en los documentos producidos por las cooperativas y sus redes como en las reuniones de sus miembros. En Rescatar, por ejemplo, uno de los logros centrales que los directivos presentaron a los 37 recicladores socios presentes durante la asamblea general del año 2000⁹ fue que la

⁸ Entre estos premios se encuentran el otorgado a la ARB como la mejor experiencia comunitaria en Latinoamérica durante la Cumbre de la ONU sobre Asentamientos Urbanos y Desarrollo en 1999, y el premio al Programa de Reciclaje de la Fundación Social, como una de las 13 mejores iniciativas en el mundo durante la Segunda Conferencia Mundial del Medio Ambiente en Estambul, Turquía.

⁹ La asamblea tuvo lugar el 25 de marzo de 2000 en la sede de la cooperativa en Bogotá. Los 37 asistentes representan casi 80% del total de 50 miembros con plenos derechos de la cooperativa. De los 13 socios que no asistieron, cuatro presentaron excusa, dos estaban inhabilitados por no haber pagado sus aportes y uno estaba sancionado.

cooperativa había producido una utilidad económica cercana a los 10 millones de pesos (aproximadamente 5 000 dólares) en 1999 y, sobre todo, que su «utilidad social» —nombre utilizado por el gerente de la cooperativa en la asamblea para referirse a la suma invertida en el bienestar de sus socios (cerca de 25 000 dólares en el mismo año)— había sido elevada y que, por lo tanto, su balance social había sido positivo.

¿A qué se refiere este balance social? Se trata de una serie de beneficios individuales y colectivos —algunos materiales, otros intangibles— que, aunque aparentemente pequeños, implican una transformación fundamental de las condiciones de vida de los recicladores de la cooperativa. La cooperativa ha promovido el acceso gradual de sus miembros a los beneficios anejos a una ocupación en el sector formal de la economía. Los recicladores socios han sido afiliados a entidades de seguridad social (en salud y pensiones) y a cajas de compensación familiar. También han disfrutado por primera vez de los beneficios de primas y cesantías, y han accedido a beneficios propios de la ciudadanía social, esto es, bienes y servicios que aseguran su bienestar material mínimo a pesar de sus bajos ingresos. Esto ha creado situaciones claramente excepcionales en el contexto de la sociedad colombiana, caracterizada por un clasismo inveterado. Por ejemplo, los paseos de integración de los recicladores socios de Rescatar a los clubes de vacaciones de las cajas de compensación familiar dan lugar a la insospechada convivencia, por lo menos por un día, de los recicladores y miembros de las clases medias en las piscinas y áreas verdes de dichos clubes.

Además de los beneficios típicos de un empleo formal, el trabajo en las cooperativas desencadena cambios considerables en los recicladores en relación con su conducta diaria, sus condiciones de trabajo, la comunidad con la que conviven y la sociedad en general. En cuanto a la conducta individual, la cooperativa ejerce una presión sutil, generalmente a través de mecanismos informales —comentarios en reuniones, actividades de integración— contra hábitos comunes en la población recicladora no organizada, como la violencia intrafamiliar, el recurso ocasional a las drogas y el descuido en la forma de vestir. De hecho, buena parte de los cursos de inducción que se ofrecen periódicamente a los nuevos miembros de Rescatar se ocupa de aspectos como el cuidado del cuerpo, el respeto a los demás y la necesidad de llevar una vida familiar pacífica y responsable. Por ejemplo, en uno de esos cursos, a finales de julio de 2000, el gerente de la cooperativa exhortó a los nuevos socios «a que nos capacitemos, pero... no hay diferencia porque uno sabe más académicamente que otro. La equidad está en que el que tiene más conocimiento tiene una deuda social con quien no lo tiene para compartirlo». En la misma charla, instó a los nuevos miembros a respetar a sus esposas, en vista de la recurrencia a la violencia contra las mujeres en la población recicladora: «Somos nosotros los que establecemos patrones de belleza. ¿Ustedes saben cuál es el prototipo de mujer bella? El de la mujer que ustedes escogieron como pareja... Ojo con el maltrato. Tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos». De lo

que se trata, entonces, es de convertir la pertenencia a la cooperativa en un vehículo para la transformación gradual de los hábitos que impiden el avance de los recicladores como individuos, familia y comunidad. Aunque son frecuentes los problemas en la cooperativa por la persistencia de estas conductas, el que ninguno de sus 50 miembros viva en la calle y varios hayan reingresado a instituciones de educación secundaria y técnica, a partir de la experiencia en la cooperativa, muestra su potencial transformador.

En cuanto a las condiciones de trabajo, ser parte de la cooperativa tiene un efecto positivo decisivo. Esto se debe a dos razones distintas. Por un lado, la cooperativa hace posible el acceso a fuentes de reciclaje (esto es, a residencias, edificios e industrias que contratan directamente con aquélla el servicio de recuperación de materiales reciclables). Esto implica que el reciclador puede trabajar directamente en la fuente y dejar de hacer recorridos agotadores a través de la ciudad o de recuperar materiales en el botadero. Por otro lado, la pertenencia a la cooperativa tiene efectos simbólicos muy importantes que mejoran sustancialmente la actitud de la policía y la sociedad en general frente a los miembros de las cooperativas. Las conversaciones y el trabajo con los miembros de la cooperativa mostraron que laborar luciendo el uniforme de la cooperativa ha generado cambios notorios en sus condiciones de trabajo. El uniforme, similar al de los empleados de las empresas de aseo convencionales, le da al reciclador un estatus de trabajador que usualmente se le niega cuando circula por la ciudad luciendo ropas humildes. En este sentido, es representativo el comentario de Cristóbal, de 25 años, según el cual, desde que lleva el uniforme de la cooperativa, «la policía no me casca, ni tampoco la gente que antes me trataba de ladrón». Henry, el socio nuevo de la cooperativa, citado anteriormente, se refirió de la siguiente manera al cambio que implicó dejar de trabajar por su cuenta y entrar a la cooperativa: “Cuando trabajaba por cuenta mía, me fue regular, porque realmente no tenía las mismas garantías que tenemos acá [en la cooperativa]. Por ejemplo, la estabilidad; además, aquí uno va bien uniformado, está bien asesorado, el carrito [esferado] en buenas condiciones, bueno, hay miles de cositas que no tiene uno cuando trabaja por su cuenta”.

En cuanto al trabajo comunitario con los demás miembros de la cooperativa, la participación en los diversos órganos de ésta —asamblea general, junta de administración y junta de vigilancia, que tienen poder decisorio y a los cuales están sujetos los directivos de la cooperativa— es posiblemente la primera experiencia de participación democrática sustancial para muchos de los miembros, debido a la apatía política de la población recicladora, derivada de su exclusión de los beneficios de la ciudadanía.¹⁰ Igualmente, el trabajo colectivo en la cooperativa tiende a

¹⁰ De hecho, diversos estudios han mostrado que una parte considerable (cerca de 15%) de la población recicladora no tiene documento de identidad, esto es, la prueba mínima de ciudadanía y requisito básico para participar en la vida política (Corporación Raíces, 1998).

generar lazos de solidaridad que mitigan la desconfianza frente a sus compañeros y, en general, frente a las personas ajenas a su familia, que caracteriza a los recicladores. A diferencia de lo que reporta Birkbeck (1978) en su estudio de las relaciones entre recicladores desorganizados e intermediarios en el botadero de Cali, en el que encontró que unos y otros utilizaban todo tipo de trampas (*v.g.*, básculas alteradas o piedras en los costales de materiales) para engañarse mutuamente acerca del peso del material, mi experiencia como acompañante de los conductores de los camiones de la cooperativa que recogen y pesan los materiales recuperados por los recicladores socios mostró que éstos confiaban plenamente en el pesaje hecho por sus compañeros encargados de hacer la recolección. Esta confianza mutua tiene efectos positivos no sólo en la convivencia de los socios de la cooperativa, sino también en su eficiencia, porque permite acelerar las operaciones del proceso de reciclaje (*v.g.*, recolección y pesaje del material), que usualmente son lentas o conflictivas en el circuito informal.

En síntesis, los beneficios sociales de la cooperativa son parte esencial de su funcionamiento y de su atractivo para los recicladores. En algunos casos, son la única razón por la cual permanecen en la cooperativa. En las conversaciones y en el acompañamiento al trabajo diario fueron recurrentes los comentarios sobre la mayor conveniencia económica inmediata de trabajar por cuenta propia y vender a intermediarios. Vender el material recolectado a la cooperativa puede ser desventajoso desde un punto de vista estrictamente económico, ya que implica la pérdida de la opción de vender al que pague el mayor precio y recibir de éste adelantos o préstamos. En estos casos, entonces, la permanencia del reciclador en la cooperativa se explica sólo por los numerosos beneficios sociales que implica ser miembro de ésta. Por último, es importante tener en cuenta que las cooperativas de recicladores —de acuerdo con los principios del cooperativismo y con el fin de fortalecer su base social y económica— buscan activamente nuevos socios entre los recicladores desorganizados que laboran en la calle. Por lo tanto, los beneficios sociales que proveen son potencialmente expandibles a la población recicladora en general.

Por supuesto, el trabajo cooperativo también genera múltiples dificultades, que fueron evidentes en el trabajo de campo. Los beneficios sociales vienen de la mano de costos sociales que no hay en el trabajo individual. Por ejemplo, los procesos deliberativos de decisión en la cooperativa dan lugar a constantes diferencias entre los socios y afectan el funcionamiento de aquélla, en ocasiones de forma grave. Los conflictos más frecuentes que surgen en las reuniones formales y en las charlas informales tienen que ver con la desconfianza y el resentimiento mutuos entre los socios que tienen puestos administrativos de responsabilidad en la cooperativa, por un lado, y los que realizan trabajos manuales en las calles o en la bodega, por otro. Los socios también expresan su descontento por las frecuentes reuniones, que implican una carga adicional a su trabajo y a sus muchas responsabilidades

domésticas. Mientras que las fricciones típicas de los procesos deliberativos son comunes a todas las cooperativas, una dificultad adicional tiene que ver con las características propias de la población recicladora, específicamente con su bajo grado de escolaridad. El que la mayoría de los socios no tenga educación secundaria impide su participación plena en los cargos directivos y en las decisiones de la cooperativa que requieren conocimiento especializado. La opinión de Concepción, una de las socias, citada en párrafos anteriores, sobre sus limitaciones para participar en las reuniones —«no entiendo mucho lo que dicen en las reuniones y mi hija me tiene que explicar»— es representativa de esta dificultad. En este sentido, como lo expresó Ana Beatriz —una de las socias fundadoras, de aproximadamente 70 años—, es clara la división en la cooperativa entre «los jefes y nosotros, los obreros», es decir, entre los directivos y quienes trabajan como recicladores. Aunque el gerente era reciclador antes de entrar a la cooperativa —lo que sucede en muchas otras cooperativas y en las redes—, su transición de la calle a las oficinas y eventualmente a la gerencia es excepcional cuando se compara con la historia de la mayoría de los recicladores, quienes, como lo expresó otro de los directivos de la cooperativa, «no están por esta línea [y] se han enfrascado en sus papeles, en sus vidrios y en sus cartones, y pues se han quedado ahí». Por esta razón, varios de los cargos administrativos en la cooperativa son ocupados por personas que no han sido recicladoras y, aunque algunas no tienen educación secundaria, tienen una motivación y una capacidad de aprendizaje excepcionales en comparación con el socio promedio. La división entre directivos y recicladores, que es constantemente recalada por unos y otros, impide las relaciones horizontales que faciliten el trabajo cooperativo y deliberativo, y tiende a reproducir la jerarquía de las empresas capitalistas —esto es, entre «jefes» y «obrerros». Las dificultades para ascender dentro de la cooperativa, sumadas a los conflictos que derivan de las constantes discusiones y deliberaciones y a la atracción del regreso al trabajo por cuenta propia, ayudan a explicar la relativa inestabilidad del grupo de socios. Aunque la cooperativa tiene usualmente entre 40 y 50 miembros, son frecuentes los retiros temporales o definitivos.

Finalmente, el balance social y político de las redes de cooperativas muestra que han logrado convertirse en mecanismos de interlocución de los recicladores organizados con los gobiernos locales, regionales y el nacional. Sin embargo, las redes, a diferencia de las cooperativas, no tienen fuentes de ingreso propias y, tras el retiro de la Fundación Social, dependen de nuevas fuentes de apoyo externo. Los logros políticos de las redes han sido limitados. Por ejemplo, uno de los proyectos bandera de la ANR, la expedición de una ley que formalizara la actividad de los recicladores, dio lugar a una ley (Ley 511/99), cuyo contenido es predominantemente simbólico, como lo muestra que la única disposición de inmediato cumplimiento es la creación del Día Nacional del Reciclador.

El balance económico de las cooperativas

¿Qué han logrado las cooperativas en su intento por transformar la estructura del mercado del reciclaje en favor de los recicladores? Los logros económicos notables de cooperativas como Rescatar, El Porvenir y Recuperar ya se mencionan. Actualmente estas y otras cooperativas en el país cuentan con un capital de trabajo importante, que incluye bodegas, camiones, maquinaria y equipos de oficina. Una visita a la bodega de Rescatar, por ejemplo, sorprende al observador acostumbrado a la pobreza extrema de los recicladores en la calle. Los dos camiones y la tractomula, propiedad de la cooperativa, se encuentran a la entrada de una bodega llena de materiales reciclables y de maquinaria pesada para embalar los materiales para su posterior entrega. Varias cooperativas, en conjunto o de manera separada, han conseguido igualmente, incursionar en la transformación de los materiales reciclados y en la prestación del servicio de aseo y manejo integral de residuos a través de empresas de servicios públicos, como Ecoaseo, creadas para este efecto. En este sentido, varias han generado un proceso incipiente de acumulación de capital que les ha permitido permanecer en el mercado e incluso expandirse a nuevos nichos económicos.

Sin embargo, es claro también que el mercado del reciclaje sigue dominado por los intermediarios y las industrias compradoras, y que los ingresos de los recicladores asociados a las cooperativas siguen siendo muy bajos. En cuanto a lo primero, el que sólo cerca de 10% de los recicladores estén asociados a cooperativas implica que la oferta de materiales reciclados continúa, fundamentalmente, a cargo de recicladores desorganizados que compiten entre sí y contra las cooperativas, lo que perpetúa las condiciones favorables para los intermediarios y compradores. Debido a la cultura individualista de la población recicladora —y porque las cooperativas apenas están en su fase de nacimiento o consolidación—, sus esfuerzos por concentrar la oferta y alterar la estructura de precios han tenido un impacto modesto. En cuanto a los ingresos de los recicladores organizados, las conversaciones con socios de la cooperativa revelan que siguen siendo con frecuencia menores al salario mínimo. Además, como el acceso a los beneficios de la seguridad social es gradual y sólo se otorga a los socios más estables, buena parte de los recicladores organizados continúa excluida.

¿Qué razones explican las dificultades de las cooperativas para modificar la estructura del mercado? Algunos de los factores que limitan su éxito están fuera de sus manos, como el predominio de la cultura individualista que impide la integración de más recicladores informales a las cooperativas. Sin embargo, otros factores están dentro de su marco de acción y no han sido suficientemente atendidos. Dos son cruciales —como lo muestra la experiencia de Mondragón, en España (Whyte y Whyte, 1988)— para la supervivencia de las cooperativas en las condiciones cambiantes del mercado. En primer lugar, las cooperativas de recicla-

dores han emergido y se han desarrollado como unidades relativamente independientes. Las redes que han conformado en la escala regional y nacional cumplen funciones políticas gremiales, no de coordinación económica, asesoría o financiación, como lo hacen las entidades de segundo y tercer nivel en el complejo Mondragón. La Fundación Social ofrecía recursos y asesoría a cooperativas separadas, pero no servía como instancia de planeación o coordinación de las cooperativas en su conjunto. Después de su retiro, incluso este tipo de asesoría y apoyo ha tendido a desaparecer. En síntesis, las cooperativas no han logrado integrarse en una red económica de mutua ayuda. Su aislamiento se agrava porque en Colombia el sector cooperativo es bastante débil, especialmente tras la quiebra de la mayoría de las entidades financieras cooperativas a mediados de los noventa (Valencia, 2000). En segundo lugar, no han logrado establecer vínculos duraderos con entidades estatales y empresas privadas convencionales. La relación de las cooperativas y las redes con el Estado es intermitente y variable. No existe, en general, una política estatal de apoyo a los recicladores, sino esfuerzos ocasionales y aislados de algunas entidades por impulsar proyectos benéficos para las cooperativas. Las alianzas con las empresas capitalistas son también escasas. Aunque existen casos excepcionales —como la asociación de Rescatar con una empresa mediana para producir láminas de alta resistencia hechas de materiales reciclados—, en general las cooperativas no han logrado establecer relaciones de colaboración con empresas privadas. La ausencia de vínculos entre cooperativas, y entre éstas y el Estado y el sector capitalista, impide el surgimiento de una economía cooperativa del reciclaje que, como muestra el caso de Mondragón, constituiría la condición necesaria para la prosperidad de las cooperativas individuales en el largo plazo.

➔ A pesar de estas limitaciones, la historia de las cooperativas de recicladores muestra que pueden sobrevivir e incluso progresar lentamente en las condiciones actuales del mercado del reciclaje. Sin embargo, estas condiciones están cambiando rápidamente como resultado de la privatización y la modernización del servicio de aseo y reciclaje en las principales ciudades colombianas. Esto, a su vez, acentúa las dificultades surgidas de la falta de integración de las cooperativas en redes y en alianzas con el Estado y el sector privado. En la siguiente sección cierro el estudio de caso con un análisis del futuro de las cooperativas de recicladores en las condiciones cambiantes del mercado.

¿Pueden sobrevivir las cooperativas?

Dos cambios fundamentales —representativos de las transformaciones de la economía colombiana tras la apertura económica de inicios de los noventa— están ocurriendo en el mercado del reciclaje. En primer lugar, las industrias compradoras están fusionándose rápidamente para hacer frente a la competencia de industrias

extranjeras productoras de papel, vidrio, plástico y otros materiales que utilizan insumos reciclados. Con la concentración extrema de la demanda —de hecho, algunos de estos mercados han pasado de ser oligopsonios a ser monopsonios—, se acentúa el control del mercado por parte de los compradores. Esta evolución ha sido claramente percibida por los líderes de la comunidad recicladora, como lo muestra la intervención de Rodrigo Ramírez, gerente de Rescatar, en la asamblea anual de la ANR en marzo de 2000, a la que asistieron 79 líderes en representación de 44 cooperativas de todo el país:

¿En el sector del papel qué está pasando? Cartón de Colombia [la mayor empresa productora de papel del país] es prácticamente dueña de los molinos nacionales productores de cartón en el país. La única competencia sería era Papelsa. La compró. [De forma similar] se están repartiendo el mercado de la chatarra entre las únicas dos siderúrgicas con las que contamos en Colombia y miren cómo lo han deprimido, lo han reducido a nada, se han bajado los precios. De tal manera que nosotros, los recicladores, empezamos a quedar en las manos de un compador único. En otras palabras: en manos del monopolio.

En segundo lugar, el proceso de privatización del servicio de recolección de basura se ha profundizado y difundido alrededor del país. En vista de la insuficiencia de los sistemas actuales, los gobiernos locales, sobre todo en las ciudades principales, han diseñado planes comprensivos —como el Plan Maestro de Basuras de Bogotá— para otorgar a empresas privadas no sólo el servicio de limpia (que ya está en manos de consorcios multinacionales en buena parte de las ciudades) sino también el de reciclaje. Por la superioridad de estos consorcios respecto de las cooperativas en términos de capital y tecnología, la supervivencia de los recicladores organizados —e incluso de los desorganizados— depende de que las cooperativas comiencen a implementar en el corto plazo estrategias que les permitan ofrecer servicios de aseo y reciclaje competitivos. En otras palabras, debido a la tecnificación creciente del servicio que prestan, es improbable que en el mediano y largo plazo los recicladores sigan desarrollando su actividad artesanal, ni siquiera en los márgenes del mercado. Este riesgo grave ha sido percibido con lucidez por los representantes de los recicladores organizados, como lo muestran de nuevo las palabras del gerente de Rescatar en la asamblea de la ANR:

Miren lo que sucede en Colombia y en el mundo. Esto es una economía globalizada, es universal. Las mismas privatizaciones que están sucediendo en Colombia están sucediendo en Venezuela, en Ecuador, en Perú. Estamos en el siglo XXI, pero los recicladores estamos trabajando con herramientas de 1900. ¡Tenemos cien años de atraso! Estamos compitiendo en desigualdad de condiciones, con carrito esferado,

mientras que la empresa operadora de servicios de aseo tiene un vehículo americano o europeo de 200 millones de pesos. Así no se puede competir. Hay que aprender a desarrollar proyectos.

La necesidad de capitalizarse para modernizar sus equipos ha creado para las organizaciones de recicladores un dilema típico de las empresas cooperativas. Puesto que sus socios no tienen capacidad económica para hacer aportes extraordinarios de capital, las cooperativas dependen de inversionistas externos para conseguir el capital necesario para modernizarse. Además, debido a que el sector financiero cooperativo viene de una crisis severa en Colombia, no hay fuentes de financiación favorables para las cooperativas de recicladores. En estas condiciones, las cooperativas han debido depender o de su precaria capacidad de acumulación o de donaciones ocasionales hechas por entidades gubernamentales o fundaciones o gobiernos extranjeros para comprar bienes de capital.

¿Qué estrategias pueden evitar la desaparición de las cooperativas de recicladores y mantener su potencial emancipador para la población recicladora en general? La respuesta a esta pregunta apunta a los retos que enfrentan un gran número de cooperativas y organizaciones económicas populares en la semiperiferia y la periferia en tiempos de ajuste estructural y globalización. En la siguiente sección, a manera de conclusión, me ocupo de esta pregunta e intento hacer explícitos los elementos de juicio que pueden derivarse del estudio de caso que he presentado.

3. CONCLUSIONES

El estudio de caso ilustra el potencial y las dificultades de las cooperativas de trabajadores en la actualidad, especialmente de aquellas que surgen en las condiciones de extrema marginación que afectan a un número creciente de personas en países pobres. El aporte central del estudio de caso a las discusiones acerca de formas alternativas de organización y de desarrollo económicos y para la práctica de las cooperativas de trabajadores es la evidencia de la necesidad de superar el aislamiento y el énfasis en la escala local que, con frecuencia, caracteriza a esta línea de pensamiento y de acción. En el caso concreto de las cooperativas de trabajadores, es claro que su supervivencia en las condiciones de un mercado volátil y abierto a la competencia extranjera depende de su inserción en redes de apoyo con otras cooperativas, con entidades estatales y con empresas capitalistas en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Esta parece ser la conclusión «en la que todos los estudiosos de las cooperativas de trabajadores están de acuerdo: las posibilidades de éxito a largo plazo de una cooperativa que trate de sobrevivir en un mar de empresas privadas son muy bajas» (Whyte y Whyte, 1988: 277). La integración en redes —que explica el éxito de las iniciativas cooperativas más

prosperas, como Mondragón, y de otros proyectos de desarrollo local cooperativos (Melo, 2000)— es especialmente importante cuando se trata de organizaciones económicas solidarias de sectores que, como el de los recicladores, viven en la pobreza y trabajan en condiciones que dificultan su movilización colectiva.

La integración con otras empresas nacionales y extranjeras del sector solidario —cooperativas de trabajadores, cooperativas de consumidores, entidades financieras cooperativas, mutualidades, etc.— es una estrategia natural para las cooperativas, ya que la colaboración intercooperativa es uno de los pilares de la filosofía cooperativista. De lo que se trata es de formar un verdadero sector solidario de la economía basado en la coordinación y la colaboración entre empresas solidarias que realicen actividades complementarias. En el caso de las cooperativas de recicladores, es clara la necesidad de generar alianzas productivas con cooperativas similares en el país. En el extranjero, el medio natural para este empeño es la colaboración con cooperativas de recicladores y cooperativas de trabajadores que utilicen materias primas recicladas en el extranjero. Ésta es posiblemente la estrategia más difícil de emprender. Las cooperativas más exitosas apenas están comenzando a experimentar las ventajas de las telecomunicaciones y no cuentan con los medios ni con el personal necesario para iniciar contactos de este tipo. Las barreras tecnológicas y culturales (v.g., el idioma) son, por el momento, difíciles de superar para las cooperativas. En estas condiciones, el apoyo proveniente del extranjero continúa consistiendo en donaciones de entidades de promoción social o gobiernos amigos, no en lazos de cooperación económica duraderos.

Las dificultades para establecer alianzas con otras cooperativas nacionales y extranjeras no son exclusivas de las empresas de recicladores. En Colombia, en general, la alianza entre empresas cooperativas es una labor por hacer, ya que el sector solidario ha sido fuertemente golpeado por los efectos de la apertura económica y del abandono estatal, que dieron lugar a la quiebra del renglón más activo de la incipiente economía solidaria en el país, esto es, el sector financiero cooperativo. Sin embargo, hay numerosas experiencias aisladas que guardan la promesa de la consolidación en el mediano y largo plazo de una economía solidaria. Algunos ejemplos son cooperativas de trabajadores exitosas, como Colanta, fabricante de productos lácteos. Igualmente, comunidades campesinas, con el apoyo de ONG y organizaciones estatales, han emprendido un esfuerzo ambicioso de fundación de economías cooperativas regionales, precisamente en las zonas más afectadas por el conflicto armado (Valencia, 2000). Del progreso de estas iniciativas locales y regionales, y de su articulación en una economía solidaria nacional e internacional, depende la viabilidad de estas formas alternativas de organización económica en el país.

La integración de las cooperativas populares de trabajadores con organismos estatales encargados de funciones de promoción económica y social es igualmente importante. Como lo advierte Friedmann (1992: 7), «aunque un desarrollo alternativo debe comenzar localmente, no puede detenerse allí. Querámoslo o no, el

Estado continúa siendo un actor protagónico». La reserva tradicional de teorías e iniciativas económicas de base respecto al Estado tiene el mérito de evitar su cooptación y la generación de relaciones de dependencia de los actores económicos populares. Sin embargo, es improbable —como lo han entendido los recicladores— en Colombia al formar redes de representación política— que sin el apoyo estatal se generen las condiciones necesarias para que prospere la economía solidaria. Esto implica un desafío considerable para el Estado y, sobre todo, para quienes, dentro de él, están encargados de las políticas económicas y sociales. Como la guerra civil en Colombia lo muestra de manera dramática, el aplazamiento de la solución de los problemas de distribución de la riqueza y de exclusión de la mayoría de la población de la vida económica y política tiene efectos explosivos. No es fortuito, en este sentido, que la violencia en el país haya empeorado tras la frustración de los proyectos redistributivos contenidos en la Constitución de 1991 —que incluye normas específicas, pero nunca aplicadas, encaminadas a promover el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas— y que el tema de la promoción de este sector de la economía sea uno de los que surgen con frecuencia en las discusiones sobre una agenda de paz (Valencia, 2000). No es fortuito tampoco que el problema de la redistribución de la tierra y la riqueza, a través de programas de apropiación y aprovechamiento colectivo, sea parte esencial de los pactos constitucionales que en países como Sudáfrica han permitido la transición hacia la paz (Klug, 2000).

También las alianzas con empresas capitalistas son necesarias en un ambiente económico caracterizado por las fusiones con el fin de enfrentar la competencia global. Como lo muestra el caso de Mondragón, este tipo de alianzas es posible sin poner en peligro la estructura y los principios de las cooperativas de trabajadores cuando las empresas cooperativas son sólidas. Sin embargo, cuando se trata de cooperativas menos establecidas, es necesario estipular las condiciones de alianza con empresas capitalistas, de tal forma que las cooperativas no se desnaturalicen. El caso de las cooperativas de recicladores ilustra bien la necesidad y los riesgos de esta estrategia. A menos que logren unirse en consorcios de empresas de servicios de aseo y reciclaje con empresas privadas convencionales y, así, conseguir el capital y la tecnología necesarios para participar en los procesos de privatización, las cooperativas corren el riesgo de desaparecer. Al mismo tiempo, si la alianza se establece en términos que pongan en peligro la estructura cooperativa de las organizaciones de recicladores, es muy posible que éstas terminen siendo absorbidas por las empresas capitalistas con las que se asocian o pierdan su carácter cooperativo.

El resultado de la promoción de estos tipos de redes de apoyo mutuo es una economía plural, en la que coexisten el Estado, las empresas solidarias y las empresas capitalistas en el contexto de un mercado regulado. En este sentido, la promesa cooperativista decepciona tanto a los defensores de propuestas neoliberales —cuya economía ideal es una basada exclusivamente en empresas capitalistas

que compiten en un mercado libre— como a los defensores de un colectivismo estatal —que querrían eliminar el mercado y remplazarlo por la planeación económica centralizada—. No es ni la utopía de la sociedad de mercado criticada certeramente por Polanyi (1957), ni la utopía colectivista. Es una utopía real (Wright, 1998), porque es suficientemente radical como para no conformarse con la regulación del mercado sin alterar la división entre capital y trabajo, y suficientemente real como para ser viable en las condiciones del mercado contemporáneo. Y, en tanto tiene vocación global —puesto que uno de los principios del cooperativismo es la colaboración entre cooperativas alrededor del mundo—, puede ser una forma de globalización contrahegemónica. Para esto, sin embargo, las empresas cooperativas, dentro y fuera de los sectores populares, en el centro, la semiperiferia y la periferia, tienen un largo camino por recorrer.

BIBLIOGRAFÍA

- Almeida, J., «O Dorso da Cidade: Os sem-terra e a concepção de uma outra cidade», Simpósio A Reinvenção da Emancipação Social, Coimbra, del 23 al 26 de noviembre, 2000, <<http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa>>.
- Alvarez, S., E. Dagnino, y A. Escobar (orgs.), *Cultures of Politics, Politics of Culture*, Westview Press, Boulder, 1998.
- Asociación Nacional de Recicladores (ANR), *Folleto informativo*, ANR, Bogotá, 2000.
- Birchall, J., *The International Cooperative Movement*, Manchester University Press, Manchester, 1997.
- Birkbeck, C., «Self-employed Proletarians in an Informal Factory: The Case of Cali's Garbage Dump», *World Development*, 6(9/10), 1978: 1173-1185.
- , «Garbage, Industry and the "Vultures" of Cali, Colombia», en R. Bromley y C. Gerry, *Casual Work and Poverty in Third World Cities*, John Wiley, Nueva York, 1979: 161-183.
- Bhowmik, S., «Worker Cooperatives as Alternative Production Systems», Simpósio A Reinvenção da Emancipação Social, Coimbra, del 23 al 26 de noviembre, 2000, <<http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa>>.
- Bowles, S. y H. Gintis, «Efficient Redistribution: New Rules for Markets, States and Community», en E. Wright (org.), *Recasting Egalitarianism*, Verso, Londres, 1998: 3-74.
- Burbach, R., «Socialism is Dead, Long Live Socialism», *NACLA*, XXXI (3), 1997: 15-20.
- Burbach, R., O. Núñez y B. Kagarlitsky, *Globalization and its Discontents*, Pluto Press, Londres, 1997.
- CEPAL, *Panorama Social de América Latina*, CEPAL, Santiago, 1998.
- Corporación Raíces, *Censo de Recicladores en Localidades de Bogotá*, 1998 (mimeo.).
- Cruz e Silva, T., «União Geral de Cooperativas: Um sistema alternativo de produção?», Simpósio A Reinvenção da Emancipação Social, Coimbra, del 23 al 26 de noviembre, 2000, <<http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa>>.

- Eckholm, Erik, «Amid Garbage and Disdain, China Migrants Find a Living», *The New York Times*, 11 de febrero de 2000.
- Escobar, A., *Encountering Development*, Princeton University Press, Princeton, 1995.
- Fals Borda, O. (org.), *People's Participation*, Tercer Mundo, Bogotá, 1998.
- Friedmann, J., *Empowerment. The Politics of Alternative Development*, Blackwell, Cambridge, 1992.
- , «Where We Stand: A Decade of World City Research», en P. Knox y P. Taylor (orgs.), *World Cities in a World-System*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995: 21-47.
- Fundación Social, *Memorias del Primer Encuentro Nacional de Recicladores*, Fundación Social, Bogotá, 1990.
- , *Documento síntesis. Desarrollos comerciales en reciclaje*, Bogotá, Fundación Social, 1998.
- Galbraith, J., W. Darity y L. Jiaqing, «Measuring the Evolution of Inequality in the Global Economy», *CEPA Working Papers on Globalization, Labor Markets, and Social Policy*, 4, New School University, Nueva York, 1998.
- Harvey, D., *Spaces of Hope*, Berkeley, University of California Press, California, 2000.
- Hirschman, A., *Getting Ahead Collectively*, Pergamon Press, Nueva York, 1984.
- Hirst, Paul, *Associative Democracy*, Amherst, University of Massachusetts Press, Massachusetts, 1994.
- Hower, J., *Recuperación de la intervención con recicladores de 1986 a 1996*, Fundación Social, Bogotá, 1997.
- Hoyos, E., *Las organizaciones económicas populares: estrategias para romper el círculo vicioso de la pobreza. El caso de las organizaciones de recicladores*, tesis, Universidad de Los Andes, Bogotá, 2000.
- Klug, H., «Community, Property and Security in Rural South Africa: Emancipatory Opportunities or Marginalized Survival Strategies?», Simpósio A Reinvenção da Emancipação Social, Coimbra, del 23 al 26 de noviembre, 2000, <<http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa>>.
- Le Grand, J., y S. Estrin, *Market Socialism*, Clarendon Press, Oxford, 1989.
- Melo, A., «Citizen Local Action as a way of resistance against the new wave of worldwide colonisation. The case of the "In Loco Association" in Southern Portugal», Simpósio A Reinvenção da Emancipação Social, Coimbra, del 23 al 26 de noviembre, 2000, <<http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa>>.
- Moody, K., *Workers in a Lean World*, Verso, Londres, 1997.
- Mydans, Seth, «A World of Scavengers on the Fringes of Wealth», *The New York Times*, 23 de julio de 2000.
- Polanyi, K., *The Great Transformation*, Beacon Press, Boston, 1957.
- Rivas, C., *Políticas empresariales para el desarrollo de las organizaciones de recicladores*, Fundación Social, Bogotá, 1997.
- Rothschild, J., y J. A. Whitt, *The Cooperative Workplace: Potentials and Dilemmas of Organizational Democracy and Participation*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

- Russell, R., *Sharing Ownership in the Workplace*, State University of New York Press, Albany, 1985.
- Santos, Boaventura de Sousa, *Towards a New Common Sense*, Routledge, Nueva York, 1995.
- , «Reinventing Democracy», Institute for Law and Society, Nueva York, noviembre de 1999.
- Sassen, Saskia, *The Global City. New York, Tokyo, London*, Princeton University Press, Princeton, 1991.
- Singer, P., y A. Souza, *A Economia Solidária no Brasil*, Contexto, São Paulo, 2000.
- , «Economia Solidária — um modo de produção e distribuição», Simpósio A Reinvenção da Emancipação Social, Coimbra, del 23 al 26 de noviembre, 2000, <<http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa>>.
- Uribe, M., «Bogotá en los noventa, un escenario de intervención», en F. Giraldo y F. Viviecas (orgs.), *Pensar la ciudad*, Tercer Mundo, Bogotá, 1997: 391-407.
- Valencia, L., *Apoyo y fortalecimiento de la economía solidaria y cooperativa*, propuesta presentada en mesa de negociación del Gobierno Nacional, Farc. San Vicente del Caguán, Colombia, 2000 (mimeo.).
- Van Velsen, «The Extended-Case Method and Situational Analysis», en A. L. Epstein (org.), *The Craft of Social Anthropology*, Tavistock, Londres, 1967: 129-149.
- Vilas, C., «The Decline of Steady Job in Latin America», *NACLA*, XXII (4), 1999: 15-20.
- Wasserstrom, R., *Grassroot Development in Latin America and the Caribbean*, Praeger Publishers, Nueva York, 1985.
- Whyte, W., y K. Whyte, *Making Mondragon. The Growth and Dynamics of the Worker Cooperative Complex*, ILR Press, Ithaca, 1988.
- Wright, E., «Introduction», en Erik Wright (org.), *Recasting Egalitarianism*, Verso, Londres, 1998: 11-13.

IX. Cooperativas y la emancipación de los marginados: estudios de caso de dos ciudades de la India

SHARIT K. BHOWMIK

INTRODUCCIÓN

Este artículo pretende examinar el papel de las cooperativas como forma de darle poder a los sectores marginados de la clase trabajadora. Esto lo ejemplificaremos con la ayuda de dos estudios en dos metrópolis de la India: Ahmedabad en la India occidental y Calcuta en la India oriental. Analizaremos cooperativas formadas por recicladoras en Ahmedabad y cooperativas de trabajadores en Calcuta. Esos casos muestran cómo los trabajadores marginados de la sociedad tratan de proteger su derecho a un empleo remunerado mediante la acción colectiva.

El proceso de globalización, valiéndose del ajuste estructural, ha afectado de manera negativa a la clase trabajadora en todo el mundo. En muchos países en desarrollo, la mano de obra ha sufrido mucho, pues la reestructuración de la economía ha conducido invariablemente al desempleo debido al cierre de unidades industriales «no rentables». En la India, la Declaración de Política Industrial presentada ante el Parlamento el 24 de julio de 1981 estaba a tono con el proceso global de ajuste estructural. Dos rasgos sobresalientes de esta política son: en primer lugar, debilitar el sector público y, en segundo, reducir el empleo en el sector formal/organizado. Los sindicatos se han opuesto desde hace mucho tiempo a esas políticas. Han organizado huelgas en todo el país, cierres y manifestaciones, pero todo esto ha tenido poco o nulo efecto sobre las decisiones gubernamentales.

Los principales problemas los enfrentan los trabajadores de la pequeña y mediana industria, pues el apoyo legal a la seguridad en el trabajo y a la seguridad social no se aplica con el mismo rigor. Estos trabajadores son la mayor parte de la fuerza laboral industrial del país. Y en estas áreas es donde se necesitan medios alternativos de producción. El gobierno ha mostrado cierto interés en promover que los trabajadores adquieran las empresas. El párrafo 16 de la Declaración de Política Industrial dice: «Se promoverá la participación de los trabajadores en la administración. Se alentará a las cooperativas de trabajadores a participar

en paquetes diseñados para sanear compañías enfermas». Hasta el momento, esto parece ser de dientes para fuera, pues el gobierno no ha emprendido medidas para fomentar dichas cooperativas.

Al mismo tiempo, numerosas cooperativas han surgido de la lucha de los trabajadores por mantener el empleo y la producción. Hay algunos ejemplos en plantaciones de té, minas y unidades industriales. Los trabajadores de la finca de Té Sonali, una plantación que emplea a unos 500 trabajadores en el distrito de Jalpaiguri, en el estado de Bengala occidental, fundaron la primera cooperativa de este tipo en 1974. En Tripura, un estado del noreste de la India, cinco plantaciones de té están siendo administradas exitosamente por sus trabajadores desde principios de la década de 1980 (Bhowmik, 1992). En Dalli Rajhara, cerca de la Planta de Acero Bhilai en el estado de Chattisgarh, en la India central, hay seis cooperativas de trabajadores que funcionan en las minas a cielo abierto de mineral de oro (Bhowmik, 1994). En Calcuta, la capital del estado de Bengala occidental, hay cuando menos 20 unidades industriales que son administradas por cooperativas de trabajadores desde principios de la década de 1980. Todas ellas sobreviven con poca o ninguna ayuda financiera del gobierno, y el hecho de que hayan perdurado por dos décadas o más sin apoyo externo es una medida de su éxito. En este artículo, hemos tratado de examinar algunos ejemplos.

Junto con el desempleo provocado por el cierre de industrias, hay un número creciente de personas que llegan a las zonas urbanas, especialmente las metrópolis, en busca de trabajo. Proviene de las zonas rurales o de ciudades pequeñas, y emigran debido a que no encuentran una forma de sustento. Están poco capacitadas para competir en el mercado laboral y buscan trabajo para mantener alejados los retortijones del hambre. Es la forma más baja de autoempleo y la constituye la mayor parte de los pobres urbanos. Pero, como veremos en el caso de las recicladoras en Ahmedabad, también pueden mejorar sus condiciones de vida mediante la acción colectiva. Sin embargo, antes de que analicemos estos casos, examinemos primero el papel de las cooperativas para ayudar a los marginados.

I. COOPERATIVAS Y TRABAJADORES MARGINADOS

Los orígenes de la cooperación como un movimiento para cambiar y mejorar las condiciones económicas y sociales de los sectores menos desarrollados de la sociedad se ubican en la primera mitad del siglo XIX, en la filosofía de Robert Owen. La primera cooperativa se inició en Inglaterra en 1844; fue una tienda fundada por un puñado de tejedores desempleados en Toad Lane, en Rochdale. El grupo era conocido como los Pioneros Equitativos de Rochdale y su objetivo era ofrecer bienes de consumo a los trabajadores a precios justos. Los Pioneros de Rochdale consideraban que las cooperativas eran un paso hacia un objetivo mayor, es decir,

una sociedad socialista caracterizada por la democracia económica. Rochdale sirvió de modelo para muchas otras cooperativas en Inglaterra, Estados Unidos y Europa. Los principios básicos que regían el funcionamiento de esta cooperativa fueron adoptados por el movimiento cooperativista de todo el mundo: un voto por cada miembro (y no por cada acción, como en el caso de las sociedades en comandita), venta a precios de mercado, división de las ganancias entre los accionistas de acuerdo con el número de acciones de cada uno, e interés limitado sobre el capital en acciones.

El movimiento cooperativista nació de la necesidad de cambiar la sociedad gracias a una ideología basada en el igualitarismo. Los primeros cooperativistas —como los Pioneros de Rochdale y Robert Owen en Inglaterra, y Herr Schultz y F. W. Raiffeisen en Alemania— propagaron el movimiento como una alternativa a la naturaleza explotadora de la sociedad capitalista de la Europa del siglo XIX. Para ellos, la cooperación era un vehículo mediante el cual la explotación capitalista sería remplazada por una sociedad igualitaria y justa. Veían a las cooperativas como instrumentos para transformar sus sociedades. De este modo, sus objetivos difieren no sólo de los de la empresa privada, sino también de las formas tradicionales de intercambio y relaciones recíprocas.

Las opiniones de algunos de los primeros promotores de las cooperativas, como Robert Owen, fueron criticadas porque, si bien consideraban las cooperativas como una forma de transformación social, pensaban que el movimiento tendría éxito sólo si la mano de obra y el capital colaboraban para lograr dicha transformación. Carlos Marx, especialmente, fue un crítico contundente de esas opiniones. Sin embargo, el mismo Marx no se oponía a la formación de cooperativas. De hecho, propugnaba que podrían desempeñar un papel importante para emancipar a la clase trabajadora del capitalismo, siempre y cuando fueran aliadas del movimiento obrero. La principal contribución de esas instituciones radica en su habilidad para demostrar en la práctica que los trabajadores son capaces de adquirir y administrar los medios de producción. En sus instrucciones a los delegados que asistirían al Primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores en Ginebra, en septiembre de 1866, afirmó: “Reconocemos que el movimiento cooperativista es una de las fuerzas transformadoras de la actual sociedad basada en el antagonismo de clase. Su mayor mérito es mostrar en la práctica que el actual sistema despótico y pauperizante de la subordinación de la mano de obra al capital puede ser sustituido por el sistema republicano y caritativo de la asociación de productores libres e iguales” (Marx y Engels, 1976: 81).

Marx consideraba que las cooperativas eran una forma de emancipación para el trabajador oprimido y que le daban más confianza porque tomaba conciencia de que podía transformar las relaciones socioeconómicas prevalecientes mediante la acción colectiva. El Comité de Principios Cooperativos, nombrado por la Alianza Internacional de Cooperativas en 1965, asumió una posición similar. Señalaba

que una cooperativa: “Existe con el fin de que la gente normal tenga el control efectivo del mecanismo de la vida económica moderna [...] debe dársele al individuo, con demasiada frecuencia reducido únicamente a ser una pieza más de la máquina, la oportunidad de expresarse, de tener voz en los asuntos y destinos de su cooperativa y oportunidades de ejercer su propio juicio” (NCUI, 1969: 20).

De este modo, si son dirigidas democráticamente, las cooperativas pueden ayudar a reducir la enajenación de los trabajadores. Por eso es que no se espera que las cooperativas funcionen simplemente como sociedades de beneficio mutuo. Tienen, además, ciertas obligaciones sociales explicadas en detalle en los principios de la cooperación. Al ampliar este aspecto, la Comisión de Principios Cooperativos observó:

La cooperación, cuando mucho, busca algo más que la promoción de los intereses de sus miembros [...] Más bien, su objeto es promover el progreso y el bienestar de la humanidad. Es este objetivo el que hace que una sociedad cooperativa sea diferente de una empresa económica común y justifica que sea probada no sólo desde el punto de vista de los valores morales y sociales que elevan la vida humana por encima de lo meramente material. (*Ibid.*: 10.)

Debemos tener presentes estos objetivos al examinar la contribución de las cooperativas. En las siguientes secciones, trataremos de hacerlo.

2. RECICLADORAS DE AHMEDABAD¹

Toda metrópoli tiene una parte de su población que se gana la vida reciclando desperdicios. A estas personas se les atribuye el estatus más bajo entre los pobres urbanos y son, económicamente, los más pobres de los pobres. Una gran parte de esos recicladores son mujeres y niños. Deambulan por las calles a pie, buscando desperdicios, los cuales meten en los sacos que cargan. Salen de su casa al amanecer y caminan varios kilómetros todos los días hasta concluir su recolección ya entrada la tarde. Sus instrumentos de trabajo son un saco y una vara para pinchar y husmear entre la basura. En su trabajo corren numerosos peligros. Se cortan o magullan con objetos filosos y pedazos de vidrio o les salen alergias cutáneas por los desperdicios químicos de la basura. Al terminar la recolección del día, separan los materiales y los venden a los comerciantes. Las tarifas que reciben por sus objetos son muy bajas y esas personas viven al borde de la pobreza. Las condiciones

¹ La recopilación de datos sobre las recicladoras de Ahmedabad se realizó inicialmente en 1996. La he complementado durante mis visitas más recientes a la ciudad y con información de la Ahmedabad Management Association.

de los recicladores en las ciudades indias parecen peores que sus contrapartes en Colombia, quienes se mueven en carretas tiradas por animales mientras buscan desperdicios reciclables.²

Estas recicladoras cumplen una necesidad de los ciudadanos, pues, mientras trabajan para vivir, están limpiando las calles de desperdicios domésticos. Por desgracia, la policía y las autoridades municipales no las ven de esta manera. Son acosadas por las autoridades urbanas, quienes a menudo las amenazan e incluso golpean. Las secciones acomodadas de la ciudad las ven como una alteración al orden público y frecuentemente levantan demandas en su contra.

Ahmedabad es la capital de Gujarat, uno de los estados prósperos del país. Esta ciudad tenía varias industrias grandes, pero era especialmente conocida como centro de producción textil. Ahora el panorama luce diferente. Desde hace más o menos 15 años, la mayoría de las fábricas de textiles ha cerrado, dejando a gran número de trabajadores en la calle. Muchas viudas e hijos de esos trabajadores se han visto obligados a «salir a las calles para recolectar basura» (AMA, 1999: 56). Al igual que otras ciudades grandes, Ahmedabad también tiene un número de recicladores cuya subsistencia depende de lo que reciclan. Desde hace unos 25 años, una de las actividades de la Asociación de Mujeres Autoempleadas (AMA) de Ahmedabad ha consistido en organizar a las recicladoras de la ciudad (*Ibid.*). Examinaremos algunas de las actividades de este sindicato para ayudar a esta sección de la clase trabajadora.

El AMA tuvo sus orígenes en la Asociación de Mano de Obra Textil (AMOT), sindicato iniciado por Mahatma Gandhi en 1918 y que después se convirtió en el principal sindicato de trabajadores textiles en Ahmedabad. En 1968, la AMOT decidió iniciar una sección de mujeres del sindicato e invitó a Ela Bhatt a que se encargara de ella (Rose, 1992: 41). Su principal actividad era impartir programas de capacitación para desarrollar las habilidades de las mujeres pobres, de modo que pudieran ganarse la vida. Esto implicaba, principalmente, enseñar a las mujeres a coser en máquina y alentarlas a emprender actividades como la impresión de ropa y vestidos, el teñido de telas, etc. Su trabajo tenía, más bien, carácter de servicio social. Luego de realizar esas actividades por un tiempo, las organizadoras se dieron cuenta de que así sólo podrían ofrecer un alivio parcial a las mujeres marginadas. Lo que necesitaban era una organización que las uniera para luchar colectivamente por sus derechos básicos, como salario mínimo, salud, educación, etcétera.

En 1972, la sección de mujeres decidió convertirse en sindicato, apegándose a la Ley de Sindicatos de 1926. Era más fácil decirlo que hacerlo. Pese a que las trabajadoras estaban convencidas de que podrían formarlo, el Registro de Sindicatos pensaba lo contrario. La principal objeción fue que no había una relación entre patrón

y trabajador en una asociación de autoempleadas. Fueron necesarios 10 meses para convencer al Registro de que una asociación así bien podía ser un sindicato (Bhatt, 1997: 214). Actualmente el AMA, con sus casi 250 000 miembros, es el mayor sindicato registrado en el estado. En un principio, el AMA tuvo estrechos vínculos con AMOT, pero se separaron en 1981.

Sindicalizar a las recicladoras

Además de organizar a las trabajadoras autoempleadas en sindicatos, el AMA promueve cooperativas entre sus miembros para cubrir una variedad de servicios y también ayuda a ofrecer oportunidades de empleo alternativas. En el año 2000, el AMA patrocinó más de 80 cooperativas que cubrían una gran variedad de áreas: industriales, de producción y de servicios. Luego de formar una cooperativa, el sindicato ayuda a sus miembros a desarrollar habilidades financieras y administrativas. Organiza clases de educación para adultos para aquellas mujeres que, además de aprender a leer y escribir, quieren aprender a hacer cuentas y los objetivos de las cooperativas, entre otros temas. Esas actividades ayudan a los miembros a tener el poder de administrar sus cooperativas con sus propios recursos y no depender de extraños.

Una de las primeras actividades del AMA como sindicato fue organizar a las recicladoras de la ciudad; las sindicalizó para que pudieran protegerse del acoso de las autoridades civiles. El sindicato le dio a sus miembros delantales, guantes, zapatos y sacos para recolectar los desperdicios. En un inicio, recolectó donativos para comprar estos artículos. Los delantales y los sacos son azules y tienen escrito AMA (SEWA en inglés) en letras de color blanco. En esencia, son su identidad como miembros del sindicato, aunque también portan credenciales. Luego de su organización, a las que son miembros las acosaban menos. Se les permitía el acceso a varias calles que antes les estaban prohibidas. Su identidad como miembros del AMA es la principal responsable de este cambio de actitud, pues ahora se las ve como parte de un colectivo.

El acoso e impedirles realizar sus actividades no son las únicas formas de explotación que enfrentan estas trabajadoras. Los comerciantes a los que les venden lo que recogen todos los días les pagan precios muy bajos. Las mujeres son muy pobres y aceptan cualquier cantidad, pues éste es su único medio de subsistencia para ellas y sus familias. No tienen manera de conseguir un mejor precio; si el comerciante se niega a comprar lo que venden, ese día no comerán.

Las activistas sindicales del AMA estudiaron el mercado del reciclado de desperdicios y descubrieron que la demanda de papel usado fluctuaba a lo largo del año. Aumentaba en ciertos meses y disminuía en otros. Los comerciantes aumentaban sus ganancias almacenando el papel de desperdicio cuando la demanda era baja

² Véase, en este volumen, el capítulo de César Rodríguez.

y lo vendían cuando había mucha demanda. Después de observar las variaciones del mercado, las activistas del sindicato hallaron que las mujeres podían conseguir el doble de precio cuando la demanda era alta. Sin embargo, no tenían ni el espacio ni la habilidad para almacenar los bienes que recolectaban durante un determinado periodo. Sus condiciones económicas las obligaban a vender lo que hubieran recogido en el día.

El AMA decidió, entonces, abrir una bodega para guardar lo que sus miembros recogían todos los días. Se les pagaría diariamente una tarifa fija por sus artículos. Luego serían vendidos en subasta cuando los precios aumentarían. Todas las ganancias que se obtuvieran se distribuirían entre esas mujeres como una especie de bono. El esquema resultó todo un éxito y pronto se establecieron más bodegas en otras partes de la ciudad.

Formación de cooperativas

El siguiente paso que dio el sindicato fue buscar oportunidades de empleo alternativas o ingresos regulares para esas mujeres. Si parte de ellas pudiera tener otros tipos de trabajo, entonces el ingreso del resto aumentaría, pues crecería lo que recolectan. Esas nuevas actividades podrían emprenderse al formar cooperativas entre las mujeres.

En 1983, el AMA inició la formación de una cooperativa que aceptaría contratos para limpiar oficinas y recoger el papel de desperdicio de ellas, la Cooperativa AMA Saundariya Mahila. Actualmente, tiene cerca de 500 miembros y contratos para limpiar muchas oficinas grandes, instituciones académicas y otros edificios públicos. Además, firmó para llevarse el papel de desperdicio de oficinas municipales y del gobierno estatal. La cooperativa le paga a esas oficinas una cantidad fija por permitirle recolectarlo.

Cerca de 200 miembros de la cooperativa participan en esas actividades y reciben un sueldo regular por su trabajo. Las ganancias de la cooperativa las distribuyen entre todos sus miembros. En últimas fechas, la cooperativa tuvo que enfrentar algunos problemas porque el gobierno del estado no renovó su contrato para recolectar el papel de desperdicio en sus oficinas en 1999. Esto se menciona en el informe anual del AMA de 1999. También dice que la cooperativa Saundariya tenía esperanzas de renovarlo en el futuro cercano. Esto se logró luego de que el sindicato y la cooperativa, conjuntamente, convencieron a funcionarios del gobierno del estado de que el arreglo los beneficiaba a ambos.

Algunas de las recicladoras tenían mucha habilidad para preparar diferentes tipos de comida. El sindicato trató de ayudarlas a desarrollar sus habilidades para que iniciaran un negocio. A mediados de 1992, un grupo de esas mujeres comenzó a suministrar comida al Programa de Desarrollo Infantil Integral (PDII), patrocinado por el gobierno y que se inició para ayudar a los pobres en zonas

urbanas y rurales. El PDII ofrece educación a niños en edad preescolar, quienes reciben alimento a mediodía.

El grupo comenzó a recibir contratos para llevar comida a festejos. En 1994, y formó la asociación Sociedad Cooperativa Ama Trupti Nasta Mahila, con 130 afiliadas, todas recicladoras. Los miembros aceptan contratos para llevar y servir comida en bodas, funciones públicas y otro tipo de actos. A veces, sólo las requieren para servir la comida o preparar postres en esas reuniones. Además de esas actividades, la cooperativa tiene contratos para abrir comedores y puestos de venta de té en oficinas.

La cooperativa organiza programas de capacitación para sus miembros en diversos aspectos del manejo de alimentos, incluida la nutrición. También tiene programas de educación y alfabetización. Trupti Nasta es una de las organizaciones más exitosas patrocinadas por el AMA. Ha tenido ganancias, pues sus clientes aprecian la comida que preparan, ya que tiene buen sabor, es relativamente más barata y se sirve bien. La cooperativa trabajaba desde la sede del AMA en Ahmedabad, pero ahora ya compró su propio local en la ciudad (AMA, 1999: 60).

El AMA ha organizado varias actividades económicas de medio tiempo para recicladoras, a fin de aumentar sus ingresos. Una parte de sus miembros pela chícharos y legumbres por las mañanas y recoge papel por las tardes. Otro grupo de mujeres fabrica bolsas de papel y papelería.

Recuperación del amor propio

El éxito de las dos cooperativas de recicladoras de Ahmedabad se debe, principalmente, a sus fuertes vínculos con su sindicato, el AMA. En primer lugar, éste les ha ayudado a recuperar el amor propio como trabajadoras autoempleadas. En segundo lugar, los miembros han podido crear esquemas de empleo alternativos mediante cooperativas, lo cual ha aumentado sus opciones.

Debe señalarse que en la India la sociedad es dirigida por grupos sociales clasificados de acuerdo con una jerarquía: las castas (por cierto, la palabra casta tiene su origen en la palabra portuguesa *casta*). La pertenencia a una casta se basa en el nacimiento y, como tal, la posición en la jerarquía es fija. Por lo tanto, aunque el estatus individual cambie, el estatus social no. En la mayoría de los casos, las recicladoras pertenecen a las castas con clasificación más baja; las superiores consideran que su trabajo, que implica recoger desperdicios reciclables de las calles y de los basureros, es una ocupación sucia. Estas personas realizan tales actividades porque son muy pobres y no tienen otro medio de subsistencia. Por lo tanto, están social y económicamente oprimidas y son tratadas como parias entre los ciudadanos.

La formación de cooperativas ha ayudado a esas mujeres a mejorar sus condiciones, pero el factor crucial es que están vinculadas a su sindicato. El ímpetu

para mejorar sus condiciones de trabajo proviene de la acción colectiva, después de sindicalizarse. Esto les da confianza en sus propias habilidades. Fueron capaces de aumentar su desarrollo mediante las cooperativas. Por lo tanto, la interrelación de sindicatos y cooperativas puede convertirse en una medida efectiva de emancipación de los pobres y socialmente oprimidos.

Veamos ahora otro tipo de cooperativa y examinemos cómo ha contribuido a la emancipación de otra parte de la clase trabajadora. En la siguiente sección examinaremos el funcionamiento de las cooperativas de trabajadores en la ciudad de Calcuta.

3. COOPERATIVAS DE TRABAJADORES EN CALCUTA³

Hubo una vez en que Calcuta fue una metrópoli industrial famosa por sus molinos de yute y fábricas de ingeniería. Desde finales de la década de 1960, el panorama ha cambiado bruscamente. La ciudad fue testigo del cierre de muchas unidades industriales grandes. Durante la década de 1980, cerca de 1 500 dejaron de funcionar, por lo que se despidió a 1 580 000 empleados de esas unidades. Varias industrias más están a punto de cerrar.

En medio de este deprimente panorama, se encuentra un rayo de esperanza en el gran número de cooperativas de trabajadores que hay aquí. Hemos identificado cerca de 20 en Calcuta y sus alrededores; se trata, principalmente, de industrias pequeñas y medianas que tienen desde 20 hasta más de 100 trabajadores cada una. En nuestro estudio veremos cuatro de ellas.

Es necesario señalar algunas características de estos casos para tener un panorama general. Calcuta es la capital de Bengala occidental, en la India oriental. El estado está gobernado por una coalición de partidos políticos comunistas y de izquierda conocida como Frente de Izquierda. El mayor organismo político de esta coalición es el Partido Comunista de la India (Marxista), PCI (M), que también es el dominante. Esta coalición ganó las elecciones por primera vez en 1977 y ha seguido ganando hasta este momento (marzo de 2001). El principal sindicato del estado es el Centro de Sindicatos de la India (CSI), considerado el ala sindical del PCI (M). Los sindicatos de todas las cooperativas de trabajadores de Calcuta están afiliados al CSI, incluidos los cuatro casos de este estudio.

Las cuatro cooperativas han sido seleccionadas después de encuestar a gente de las 18 de las existentes (dos han desaparecido), éstas son como un astillero, una fábrica de cables de aluminio y conductores eléctricos, una fábrica de equipo de imprenta y una fábrica de máquinas de alambrado. Cada una de estas empresas trabajaron bien en su momento y fueron consideradas como las mejores en sus

³ La recopilación de datos sobre las cooperativas de trabajadores en Calcuta se realizó entre 1998-2000, mediante visitas periódicas. Le agradezco al doctor Kanchan Sarker por ayudarme a reunir la información.

respectivas áreas de producción. Hemos tratado de examinar por qué decayeron y cómo los trabajadores han tratado de revivirlas.

La cooperativa del astillero

Situada en la zona Cossipore en Calcuta, la Cooperativa Industrial de Trabajadores de Servicio e Ingeniería de Vapor del Río de Bengala Oriental, S. A., fue fundada en 1979. La compañía original era una antigua empresa de finales del siglo XIX, que dirigía un exitoso negocio naviero y luego comenzó a construir barcos como una de sus actividades principales. A partir de 1965, comenzó a decaer por varias razones. Algunas eran externas, y tenían que ver con la restricción para hacer negocios con la antigua Pakistán oriental (ahora Bangladesh), y otras se referían a la administración interna de la empresa. Logró seguir adelante hasta 1969; su balance de 1968-1969 mostró ganancias. Después, la compañía empezó a tener grandes pérdidas. En septiembre de 1976, los dueños cerraron, pues sus deudas eran insalvables. Los trabajadores, que alguna vez habían sido más de 1 000, fueron reducidos a 91, pues la mayoría se fue a buscar otro trabajo. Sus deudores tenían casos pendientes para recuperar la empresa en el Tribunal Supremo de Calcuta.

Luego de que el Frente de Izquierda llegó al poder, el sindicato le propuso al gobierno del estado que declarara a la empresa morosa y que asumiera su administración. El gobierno estatal le envió una propuesta al gobierno central en 1978 para absorber la compañía, pero éste la rechazó. Después, el sindicato le solicitó al gobierno del estado que le permitiera dirigir la compañía, lo cual fue aceptado, y aconsejó que los trabajadores formaran una cooperativa para administrarla. El Departamento de Reconstrucción Industrial del gobierno del estado ayudó a financiar la operación.

La cooperativa fue registrada en noviembre de 1979. Los 91 trabajadores fueron sus miembros. Los líderes locales del PCI (M) y del CSI los ayudaron en su empresa; su principal defensor fue el secretario del comité local del PCI (M). El gobierno del estado admitió la propuesta del sindicato porque estaba afiliado al CSI y por el apoyo político del partido.

Basada en la seguridad, la cooperativa apeló al Tribunal Supremo para que le permitiera comprar la compañía. El tribunal accedió y ordenó que un valuador oficial calculara el valor; así se fijó el precio y la cooperativa tomó posesión de la compañía el 30 de octubre de 1980. La escritura de compra se ejecutó en 1981. El gobierno del estado acordó ofrecerle un préstamo a la cooperativa para que pagara. La producción inició en diciembre de 1981. Un banco nacionalizado (después de que el gobierno del estado accedió a servir de aval) proporcionó una garantía de 3 000 000 de rupias más 400 000 del activo. Este monto era muy pequeño y a la cooperativa no le fue posible modernizar el equipo; esperaba que el banco le prestara dinero

para ese fin, y para eso necesitaba una garantía del gobierno estatal. Por desgracia, cuando se acercaron al gobierno, éste se negó a cumplir su compromiso.

Esta decisión fue un golpe para los trabajadores. Antes, durante la formación de la cooperativa, el ministro de Finanzas les había dado a entender a los trabajadores que éste sería un arreglo temporal, en tanto el gobierno del estado se apoderaba de la compañía. Ahora los trabajadores se habían dado cuenta de que el gobierno no adquiriría el astillero ni ayudaría a la cooperativa a desarrollarlo. Luego de una serie de reuniones generales, en las que los líderes del PCI (M) también participaron, los trabajadores decidieron que ellos solos deberían administrar la compañía. Se tomaron dos decisiones importantes: primera, congelarían los salarios hasta que mejorara la situación financiera; segunda, aumentarían la productividad, pues así reducirían los costos de producción. La cooperativa decidió contratar el trabajo de otras compañías, principalmente para la reparación de embarcaciones.

Estos esfuerzos se vieron compensados, pues quienes les encargaban trabajos quedaban satisfechos con el resultado. Algunos clientes estaban dispuestos a proveer la materia prima necesaria para la reparación, y a veces daban adelantos en efectivo. Para 1991, la cooperativa tenía un superávit de cerca de 1 400 000 rupias que podía usar como activo. Una decisión importante que tomó la asamblea general de la cooperativa en ese momento fue que los salarios no aumentarían ni siquiera después de registrar ese superávit. Los trabajadores se percataron de que su futuro podría estar seguro sólo si la cooperativa tenía fondos suficientes.

Los sucesos dieron un giro brusco en 1991. En esa época, el ministro de Transporte de Superficie buscaba un terreno grande para establecer un estacionamiento y un taller para uno de sus organismos: la Corporación de Transporte del Estado de Bengala del Norte (CTEBN). El gobierno del estado sugirió que la cooperativa cediera una parte de su terreno a la CTEBN. Esto podría formar un paquete de rehabilitación para la cooperativa. La CTEBN pagaría 10 000 000 de rupias. La Corporación de Transporte Fluvial del gobierno del estado adquiriría la cooperativa y modernizaría el astillero y el taller. La cooperativa tendría que reducir su personal a 50. Sólo podrían quedarse los trabajadores menores de 55 años y el resto recibiría una compensación adecuada. La cooperativa accedió a esta propuesta.

Puesto que los trabajadores estaban seguros de que el gobierno del estado adquiriría la empresa, decidieron derrochar el superávit que habían acumulado. Otorgaron altos bonos a sus miembros, construyeron casas nuevas para el personal de seguridad y gastaron grandes sumas de dinero en festivales.

En 1992 se realizaron elecciones para la asamblea del estado. El gobierno del Frente de Izquierda volvió a ganar, pero el ministro de Transporte de Superficie fue cambiado. El nuevo ministro quería revisar el plan. Hizo varias objeciones acerca de la ubicación del terreno y el costo de adquisición. El trato fue cancelado y, como resultado, los trabajadores sufrieron un fuerte revés. Ahora estaban peor que antes, porque no tenían activos para ejecutar sus pedidos de trabajo. Sin embargo,

este incidente fortaleció su resolución de usar su propia fuerza y no depender de otros. Sólo podían depender de la buena voluntad que habían creado antes. Poco a poco comenzaron a recibir pedidos y poco a poco su situación mejoró.

Visité esta cooperativa por primera vez en 1998. Los trabajadores parecían determinados a que su empresa tuviera éxito. La mayoría eran viejos. Sus uniformes estaban arrugados y rotos, pero sus rostros reflejaban determinación mientras trabajaban sin cesar. Cuando hablé con ellos, no mostraron ninguna señal de desánimo ni impotencia. Sin embargo, el personal administrativo criticó más la situación. Estaban resentidos porque el gobierno que habían apoyado, especialmente el PCI (M), les había dado la espalda. Estas personas todavía esperaban que el gobierno absorbiera la empresa. El líder local del PCI (M) que les proporcionó liderazgo externo, ahora criticaba la actitud del gobierno. Todos creían que la anterior propuesta había sido cancelada principalmente por un asunto de corrupción. Me dijeron que el trato no les representaba dinero a los que estaban en el poder, por lo que fue abandonado.

La cooperativa no pudo emplear personal técnico porque carecía de fondos. Tenía un asesor que era ingeniero naval, quien antes había sido gerente general de la compañía y luego había ayudado a los trabajadores a dirigir la empresa. Iba cada tercer día por la tarde a compartir sus conocimientos técnicos. No cobraba por sus servicios, pues era simpatizante del PCI (M) y tenía ingresos suficientes como asesor de otras compañías. La presencia de este hombre y del líder local del PCI (M) aumentó la confianza de los trabajadores, pues sentían que no estaban solos en estos difíciles momentos.

La situación era más o menos la misma cuando visité la cooperativa en junio de 2000. Su condición financiera era un poco mejor y los trabajadores recibían salarios más altos. El asesor les había traído más negocios. El resentimiento por la falta de apoyo del gobierno había aumentado. Sin embargo, tanto el sindicato como el PCI (M) estaban con la cooperativa en el ámbito local. Ésta fue la principal razón por la cual los miembros siguieron en el sindicato a pesar de las quejas contra el movimiento encabezado por el PCI (M). Una consecuencia importante de esta situación fue que los trabajadores confiaban más en sí mismos. Ya no dependían de organismos externos que atendieran sus problemas. Ésta fue la contribución más importante de la cooperativa: había incrementado la confianza de los trabajadores en ellos mismos.

Cooperativa de la imprenta

La Cooperativa Industrial de Empleados de la Fundición de Tipos y la Imprenta Oriental, S.A., se fundó en 1987 y tenía 42 miembros. El número total de empleados era 51, de los cuales 7 eran trabajadores administrativos y el resto, obreros.

Esta compañía, conocida como Fundición de Tipos e Imprenta Oriental, fue establecida en 1890 y se registró como sociedad en comandita por acciones en 1912. La compañía fabricaba materiales de impresión para linotipos. Esta técnica se volvió obsoleta en la mayor parte del mundo con la introducción del *offset*. Sin embargo, antes la compañía fue una de las mejores en su campo. Su mercado estaba distribuido por toda India y tenía pedidos de exportación de varios países, incluidos China, Nepal y Mauricio. En total, la mano de obra era de unas 500 personas.

Pese a los cambios en la tecnología de impresión, la compañía pudo mantener su posición porque era el único fabricante del ramo. Los linotipos del país dependían de sus provisiones. Además, su imprenta era conocida por su alta calidad y tenía pedidos de las principales editoriales.

Los problemas comenzaron en la década de 1960. Se trataba principalmente de pleitos entre los miembros de la familia que controlaba la compañía. Estas personas poseían colectivamente una mayoría de las acciones. En la década de 1970, el sindicato le señaló varias irregularidades a la gerencia. Si bien a los trabajadores se les pagaban sus salarios regulares, se descubrió que los fondos recaudados para seguridad social no eran depositados con las autoridades, quienes presentaron casos en los tribunales para su recuperación. La gerencia no pudo pagar lo que debía y, finalmente, en 1980 cerró operaciones. Esto continuó siete años, durante los cuales la mayoría de los trabajadores se fue a buscar otro trabajo. El sindicato sugirió que los trabajadores deberían formar una cooperativa que adquiriera la compañía con ayuda del gobierno. Así se formó la cooperativa en 1987 con 30 trabajadores que habían seguido luchando por sus cuotas. Mientras tanto, la compañía fue liquidada y la cooperativa, con el respaldo financiero inicial del gobierno del estado, pudo comprarla.

La cooperativa comenzó a funcionar en 1989; era dueña de la compañía, pero no tenía muchos activos. Sin embargo, consiguió trabajos de impresión y de fundición. Los negocios aumentaron y la cooperativa necesitó más empleados. Por recomendación del comité local del PCI (M), se contrataron 15 trabajadores temporales. Se les dio su plaza permanente al año y 12 de ellos se volvieron accionistas. Los problemas comenzaron poco después, en 1994. Los trabajadores originales estaban viejos, mientras que los nuevos eran jóvenes. Éstos exigían que los primeros se retiraran y les dejaran el puesto a los jóvenes. Además, el comité local del PCI (M) exigía que el partido usara como oficina uno de los edificios. Los trabajadores más viejos, que también apoyaban al partido, se opusieron a la propuesta, pues sentían que animaría al comité local a apoderarse del edificio. Esto provocó tensión en la relaciones.

Los problemas internos de la cooperativa habían sido creados por los líderes locales del PCI (M). Los miembros más viejos estaban con el partido e, inicialmente, habían confiado en sus líderes locales. Después de lo ocurrido, comenzaron a criticar su funcionamiento. Sospechaban que el comité local quería sacarlos para

llenar la cooperativa con su propia gente. Al mismo tiempo, esos trabajadores no se habían vuelto en contra del PCI (M) como partido. Votaban por sus candidatos durante las elecciones, e incluso participaban en la campaña del partido. Sus problemas eran básicamente con los miembros del PCI (M) local. Ante la insistencia de los trabajadores jóvenes en la asamblea general de 1997, el gobierno nombró a un funcionario administrativo que sustituyera temporalmente las funciones del comité administrativo.

La cooperativa sigue funcionando y puede pagar los salarios. Podría mejorar su situación si lograra conseguir trabajo de fundición. Sin embargo, le faltan los activos. Su imprenta está funcionando, pero la tensión entre los trabajadores viejos y jóvenes ha afectado su eficiencia.

Cables y conductores de aluminio

La Cooperativa Industrial de Trabajadores Alcond, S. A., fue fundada por trabajadores de Cables y Conductores de Aluminio Privados, S. A., en 1987. En el año 2000, tenía 150 trabajadores, de los cuales 35 eran oficinistas y el resto obreros. La cooperativa tenía 265 miembros, todos trabajadores de la compañía, pero cuando consiguieron otro trabajo algunos se fueron.

La compañía fabrica conductores de energía y cables de aluminio. Era muy conocida en su campo y considerada una empresa rentable. La demanda de sus productos aumentó después de que las corporaciones de electricidad del estado decidieron cambiar de cables de cobre a cables de alta tensión de aluminio. La compañía tenía unos 500 trabajadores en su nómina y fue rentable hasta la década de 1970. Tenía una gran clientela en la India y en el extranjero. Su fábrica está en Hyde Road, donde se ubican varias industrias.

Alcond comenzó a registrar pérdidas en 1978. Los trabajadores creen que se debió al desvío de recursos financieros de la compañía hacia otras inversiones. En 1983, cerró la fábrica. El sindicato de trabajadores recurrió a todas las oficinas del gobierno y usó todo tipo de presiones sobre la gerencia para que reabriera la fábrica. Luego de tres años de resuelta lucha, en 1986 los trabajadores pudieron obligar a la gerencia a reabrir la fábrica. Quince días después, la fábrica volvió a cerrar, y esta vez por que el banco que la financiaba presentó una demanda de liquidación para recuperar lo adeudado. Fue entonces cuando el sindicato decidió organizar a los trabajadores en una cooperativa que pudiera dirigir la fábrica.

El gobierno apoyó el movimiento del sindicato y la cooperativa quedó registrada en 1987. En ese momento, el Tribunal Supremo había ordenado rematar la compañía, para recuperar sus deudas. El gobierno del estado compró la compañía, y el 2 de diciembre de 1989 se la entregó a la cooperativa. El gobierno también proporcionó préstamos y materia prima para iniciar la producción. Además, fue

aval de préstamos bancarios por un total de 45 000 000 de rupias. La Junta de Electricidad del Estado de Bengala Occidental, una empresa del gobierno del estado, amplió su apoyo pidiéndole equipo.

En el momento de la adquisición, los miembros se percataron de que las máquinas y el equipo de la fábrica estaban dañadas. La cooperativa tuvo que gastar grandes sumas de dinero en reparaciones y mantenimiento. La producción pudo iniciar apenas en 1990, luego de siete años de cierre. En su primer año, la cooperativa registró una pérdida de 1 270 000 rupias, pero al año siguiente tuvo una facturación de 60 000 000 de rupias y una ganancia neta de 750 000 rupias. La cooperativa pudo contratar, en el primer año, a 300 de los trabajadores despedidos, y otros 100 en el segundo. Lo que es notable es que los trabajadores pudieron cambiar por completo la compañía a 18 meses de la adquisición.

Los problemas de la cooperativa comenzaron los años siguientes. Para cumplir sus pedidos, la cooperativa tomó préstamos del banco cooperativo contra su capital social. La mayor parte de los contratos que obtuvo provenían de empresas del sector estatal, como las Juntas de Electricidad de los estados de Bengala Occidental y Uttar Pradesh. Los pagos de esas organizaciones se retrasaban mucho, a veces 12 o 18 meses después de haber hecho las entregas. Por lo tanto, su capital fue bloqueado y no pudo realizar otros contratos, porque sus activos se acababan. Al mismo tiempo, los intereses de los préstamos aumentaron. Como en los otros casos, el gobierno del estado, que inicialmente había accedido a ser aval de los préstamos bancarios, se echó para atrás. Finalmente, en 1997 suspendió la producción, pues ya no podía conseguir activos para completar sus pedidos. Sus recursos se agotaron y no pudo pagar salarios. Varios de sus miembros se fueron a buscar trabajo en otros lugares y la cooperativa se quedó con 150 trabajadores.

En junio de 1998, la cooperativa pudo reiniciar sus actividades después de recuperar parte de lo que le adeudaban. Decidió no aceptar tareas independientes y no se presentaba en licitaciones. En cambio, comenzó a tomar trabajo de otras industrias. Esto le ha dado ciertos ingresos. En mayo de 2000, estaba mejorando su condición financiera a un ritmo constante, pero sus experiencias anteriores dejaron sentimientos amargos entre los miembros respecto a la actitud del gobierno del estado. Sus problemas en este sentido son muy parecidos a los de la cooperativa del astillero. Perdió contratos porque no ofreció sobornos a las autoridades. De igual modo, recuperar lo que le debían las juntas de electricidad se retrasó por la misma razón. Los trabajadores estaban resentidos porque, a pesar de sus lazos políticos con el PCI (M), no habían tenido apoyo.

Cooperativa de la maquinaria de cables

La Cooperativa Industrial de Empleados de Maquinaria de Cables, S. A., se encuentra en la zona de Panihati, en el distrito Norte 24 de Parganas, al norte de

Calcuta. La fábrica tenía 106 trabajadores, de los cuales 90 estaban en diversos talleres, seis trabajaban en la oficina y seis eran guardias de seguridad. Además, había dos ingenieros y dos dibujantes. La cooperativa había nombrado un presidente que supervisara el funcionamiento completo, pero renunció en 1997. La administración de la cooperativa se realiza mediante un comité electo que incluye al presidente, al secretario y a siete miembros. El presidente es un oficinista, mientras que el secretario es un trabajador. Tiene en total 95 miembros y fue registrada el 10 de septiembre de 1980.

La cooperativa produce cables de diferentes calibres para grúas y otros equipos de transporte. Sus talleres fabrican materiales de fundición pequeños y medianos, necesarios para industrias más grandes.

La Corporación Fabricante de Maquinaria de Cables, S. A., como se conocía originalmente, fue establecida en 1962 y tenía un buen mercado para sus productos. Sus problemas comenzaron en la década de 1970, cuando Calcuta enfrentó una severa escasez de energía. La fábrica necesitaba un suministro regular para hacer funcionar sus motores industriales, y los frecuentes cortes de energía trastocaban la producción. Por lo tanto, no pudo cumplir los pedidos pendientes y su mercado cayó gradualmente. La compañía podía haber montado su unidad de energía cautiva para superar la escasez, pero a sus propietarios no les interesaba hacer más gastos. Había serias enemistades entre los miembros de la familia dueña de la fábrica que contribuían a la crisis, pues no se tomaban decisiones de largo plazo sobre las inversiones.

En 1975, la compañía cerró la fábrica, pues ya no podía pagar los salarios. Los 290 trabajadores se quedaron sin empleo. Su sindicato trató de que los dueños reabrieran o pagaran indemnizaciones, pero no lo logró. La situación siguió así por tres años. Varios trabajadores se fueron a buscar trabajo a otro lado. Finalmente, en 1978 los propietarios pidieron al Tribunal Supremo el permiso para liquidar la compañía.

En un inicio, los trabajadores quedaron impresionados por la noticia. Sus líderes sindicales también estaban perplejos con el problema y sugirieron que los trabajadores trataran de dirigir la fábrica mediante una cooperativa. Ésta sería una medida temporal, pues el sindicato intentaría persuadir al gobierno del Frente de Izquierda, recientemente electo, de que el estado la adquiriera. Los 95 trabajadores que permanecieron en el sindicato durante los tres años del cierre se unieron y formaron la cooperativa. Después de registrar la organización, los trabajadores le solicitaron al Tribunal Supremo que, en lugar de subastar la compañía, se le diera a la cooperativa la oportunidad de dirigirla. Estaba dispuesta a rentar la fábrica y su maquinaria. De este modo, la cooperativa podría aceptar trabajos para darles un ingreso a sus miembros pobres. El tribunal estuvo de acuerdo, pero señaló que este arreglo debía renovarse cada año. Además, se continuaría así hasta que se encontrara alguna alternativa para vender los activos de la compañía. La cooperativa funcionó así unos cuantos años.

Inicialmente los negocios no iban muy bien y los trabajadores recibían magros estipendios para su supervivencia. Después de un año, más o menos, la situación mejoró y la cooperativa pudo recibir pedidos regulares de sus clientes. En 1985 alcanzó cierta estabilidad, y sus miembros recibían estipendios más altos. Entonces comenzaron a discutir que podrían aumentar sus ingresos si fabricaban sus propios productos en lugar de hacer el trabajo para otros. Pero era más fácil decirlo que hacerlo.

A fin de empezar a fabricar sus propios productos, la cooperativa tendría que reparar algunas máquinas y actualizar o remplazar otras, pero esto no era posible, pues no era la propietaria. El Tribunal Supremo solamente había otorgado el arrendamiento de la propiedad, por lo que la cooperativa no podía cambiar o remplazar ninguna parte. Podría acudir al Tribunal Supremo y solicitar permiso para actualizar las máquinas, pero ¿de dónde saldrían las finanzas para este negocio? Las investigaciones realizadas por los líderes sindicales mostraban que ninguna institución financiera estaría dispuesta a prestarle porque la cooperativa no era dueña de la propiedad.

Lo único que le quedaba era comprar la compañía, pero no contaba con los recursos adecuados. Luego de una serie de discusiones entre los trabajadores y los líderes sindicales locales, se llegó al consenso de que la cooperativa debía comprarla. Los trabajadores estaban seguros de que reunirían el dinero necesario. Se presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo el 2 de junio de 1985, en la cual se pedía que se subastaran los activos de la compañía y que se le diera a la cooperativa una oportunidad justa para pujar. La cooperativa pidió que, si se aceptaba su oferta, se le permitiera pagar el monto en abonos.

Con base en este recurso, el Tribunal Supremo convocó a una subasta el 24 de enero de 1986. Para entonces, los miembros habían tratado de acumular todos los ahorros que pudieron para comprar la compañía. Redujeron sus estipendios y trabajaron tiempo extra para aumentar sus ahorros. El costo total de la compra se fijó en 1 450 000 rupias, cantidad demasiado alta para la cooperativa. Sin embargo, el Tribunal dictaminó que, si les interesaba comprar la compañía, debían depositar 463 000 inicialmente, como dinero marginal, y pagar la cantidad total en seis meses. El tiempo para pagar el dinero marginal se fijó en dos semanas a partir de la fecha de la subasta. Reunirlo fue un gran problema para la cooperativa. Cuando los miembros solicitaron al Tribunal Supremo comprar la compañía, pensaban que se les permitiría pagar la cantidad total en plazos que se extenderían por varios años. Nunca imaginaron que el Tribunal ordenaría que el comprador debía pagar tales sumas de dinero. Los fondos de la cooperativa estaban muy por debajo del monto solicitado.

Sin embargo, los trabajadores estaban determinados a comprar la compañía y comenzaron a reunir el dinero marginal de todas las fuentes. Solicitaron al Tribunal Supremo que extendiera la última fecha para depositarlo. El Tribunal accedió

y les dio un par de meses. Los trabajadores evaluaron la situación. Los ahorros de la cooperativa eran menos de una cuarta parte del dinero marginal, y decidieron renunciar a sus estipendios durante los siguientes meses y aportarlos al fondo. Cuando esto tampoco cumplió los requisitos, contribuyeron de manera individual con lo que pudieron. Algunos trabajadores consiguieron préstamos personales, otros empeñaron las joyas de sus esposas, mientras que otros más vendieron sus valores personales para elevar la suma.

Luego de rascarle a todo lo que encontraron, los trabajadores finalmente lograron aumentar los recursos. Depositaron la cantidad ante el Tribunal Supremo y, poco después, a la cooperativa se le permitió adquirir la compañía, con la condición, desde luego, de que el total se pagara en seis meses. Por suerte, este problema se solucionó porque un banco accedió a prestar el resto del dinero. Por lo tanto, la cooperativa se volvió dueña de la fábrica en mayo de 1986.

En el momento de la adquisición, la cooperativa tenía 69 miembros. El estipendio promedio que recibían era de 450 rupias al mes, que era muy poco y sólo podría aumentar después de que la cooperativa fuera dueña, pero los miembros decidieron que la tarea más importante para ellos era mejorar la maquinaria y aumentar la producción, lo que les garantizaría estabilidad a largo plazo. En las reuniones realizadas para decidir estos temas, los trabajadores asumieron diferentes posturas. Algunos (una minoría) alegaban que sus recursos personales se habían acabado y que debía aumentarse el sueldo para que mejorara su deficiente condición económica. Otros decían que mejorar la condición de la fábrica era lo más importante. Los trabajadores habían hecho sacrificios y pasado penurias por varios meses, y podrían seguir así unos meses más hasta que la situación cambiara. Finalmente decidieron que la necesidad inmediata era mejorar la fábrica y acordaron no aumentar los salarios.

Otro punto que consideraban igualmente importante era la necesidad de personal técnico calificado y competente. Ellos podían mejorar la maquinaria, pero ¿sabrían estudiar los aspectos técnicos de la fábrica una vez renovada? Todos sus esfuerzos serían en vano si, después de pedir prestado para modernizar la maquinaria, no lograran una producción óptima. Necesitaban personal técnico capacitado, pero ¿quién estaría dispuesto a unirse a una empresa corta de fondos? Decidieron, entonces, pagar salarios más altos a las personas que llegaran a fortalecer la empresa. El entonces secretario del comité administrativo, un trabajador, me dijo lo siguiente:

Decidimos que necesitábamos buenas personas. Necesitábamos un ingeniero que pudiera administrar la fábrica y otro gerente para promover las ventas. Nosotros no tenemos mucha educación. Podemos trabajar en la fábrica y producir bienes, pero no podemos ir a las grandes compañías y pedirles que compren nuestros productos. ¿Quién hablará con nosotros? Entonces decidimos que, aun si ganáramos 500 rupias

mensuales, le pagaríamos 5 000 rupias mensuales a nuestros gerentes de ser necesario. El futuro de esta fábrica es nuestro futuro. Teníamos que lograr que tuviera éxito.

Así fue como nombraron dos gerentes, uno de los cuales estaba encargado de producción, planeación y finanzas, y el otro de mercadotecnia. Ambos se volvieron miembros de la cooperativa y uno de ellos, el gerente de producción, luego fue elegido presidente de la misma.

Los sacrificios de los trabajadores y su visión rindieron frutos poco tiempo después. La cooperativa presenció un rápido crecimiento. A principios de 1992, el número de trabajadores aumentó a 110 gracias al incremento en el volumen de trabajo. Su facturación aumentó 10 veces. Los salarios de los trabajadores también se triplicaron durante este periodo. Para el año 2000, podían ganar más que los trabajadores de otras fábricas de la zona.

Además de recibir mayores salarios, los trabajadores recuperaron otros beneficios; fueron cubiertos por el Programa de Seguro Estatal de Empleados (para enfermedad y accidentes). Este programa funcionaba antes, pues es obligatorio para empresas de este tamaño, pero fue interrumpido durante el periodo en que estuvo cerrada la fábrica. El programa del Fondo Previsor también había sido descontinuado, lo que afectaba a los trabajadores al retirarse. La cooperativa decidió retomarlos y pagar los atrasos acumulados, así como otras prestaciones relacionadas con la seguridad social, como el Programa de Gratificación de Grupo, que fueron implementadas retrospectivamente a partir de 1982 al pagar los adeudos pendientes.

Los gastos de la cooperativa aumentaron porque necesitaba reparar la fábrica y mejorar su infraestructura. El gobierno del estado le otorgó un préstamo sin intereses por 300 000 rupias, del cual usó 200 000 para reparar el edificio. Además, compró un generador de 81 kva para resolver el problema de los cortes de energía. La primera administración, financieramente más sólida, no había querido instalar una unidad de energía fija porque la consideraba demasiado cara. Estos trabajadores la compraron porque se dieron cuenta de que una fábrica bien manejada sería más rentable. La mayor parte del costo del generador fue cubierto con recursos propios de la cooperativa. Además, canceló el préstamo del estado en cuatro años; el bancario fue liquidado en 1992.

Si bien la cooperativa progresó significativamente, enfrentó problemas que afectaron su desarrollo futuro. Uno de los principales fue que los activos no eran los adecuados. Los miembros del comité administrativo me dijeron que la unidad sería más productiva si tuviera más capital. Esto le permitiría a la cooperativa comprar materia prima para completar sus pedidos. Sin esto, no podía expandir su negocio ni aceptar más solicitudes.

La falta de capital se debe, principalmente, a que la cooperativa no pudo obtener crédito ni del banco ni del gobierno del estado. Poco después de liquidar el

préstamo bancario para la compra de la unidad, a la cooperativa se le autorizó otro como capital, el cual pagó en el periodo estipulado. Sin embargo, desde entonces, y a pesar de su buen historial crediticio, la cooperativa no ha podido conseguir un nuevo financiamiento del banco. Les exigen garantías para otorgar créditos. La cooperativa recibió los primeros préstamos porque el gobierno del estado fungió como aval. Por desgracia, en los otros casos, se negó a hacerlo.

La cooperativa enfrenta, pues, una situación en la que puede ampliar su negocio, pero carece del capital para hacerlo, lo cual ha afectado gravemente su rentabilidad. Tiene que usar sus propios recursos para comprar materia prima, para reparar y actualizar su maquinaria y para todos los gastos diversos. Casi todas las demás empresas consiguen préstamos para cubrir los pagos inmediatos de esas actividades.

Otro gran problema de la cooperativa es la corrupción que existe para conseguir pedidos y obtener los pagos. Esto sucedía mucho con los del gobierno, y los principales clientes de la cooperativa eran, precisamente, los gobiernos de los estados. Me dijeron que incluso cuando ganaban mediante licitaciones, se esperaba que la cooperativa diera sobornos para apresurar el proceso. Los pagos se atrasaban, también, si el dinero no cambiaba de manos. Éste fue un problema común para casi todas las cooperativas incluidas en este estudio, porque dependían de los pedidos del gobierno o del municipio. Finalmente, superaron esos problemas al aceptar pedidos a través de agentes. Sus ingresos disminuyeron en este caso, porque tenían que darle una comisión a los agentes, pero el problema de tratar con la corrupción ya no era suyo, pues aquéllos se encargaban. Los pedidos de los gobiernos de los estados los manejan los agentes; así como las exportaciones de sus productos a países de Medio Oriente para lo que también es necesario dar dinero a los funcionarios relacionados con aduanas.

La cooperativa también comercializa directamente en algunos casos, pero casi siempre como proveedor externo de empresas más grandes. Por ejemplo, la maquinaria pesada que fabrica para el transporte de carbón se realiza para una compañía de ingenieros a gran escala del sector privado. Esta compañía da adelantos en efectivo para que la cooperativa pueda fabricar el equipo, de otra manera, no podría, porque no tiene el capital necesario para organizar la producción y comercializar el producto. Ambos aspectos requieren ingresos financieros mucho mayores. Por lo tanto, podemos ver que la falta de crédito y la corrupción son las dos principales razones que impiden que la cooperativa mejore su desempeño.

4. CONCLUSIONES: COOPERATIVAS Y EMANCIPACIÓN SOCIAL

En las secciones anteriores hemos analizado dos tipos de cooperativas ubicadas en dos ciudades distintas. A pesar de las diferencias, tienen características comunes. En primer lugar, todas fueron iniciadas por sindicatos, aspecto muy importante

para su formación. Las cooperativas de recicladoras de Ahmedabad fueron fundadas por el AMA como parte de sus actividades sindicales y AMA tiene una estrategia firme para promoverlas.

Apoyo sindical

Las cooperativas de Calcuta también fueron iniciadas por su sindicato, pero existe una diferencia en el enfoque respecto del de el AMA. Los líderes sindicales habían propuesto que los trabajadores tomaran posesión de las unidades después de que las administraciones las cerraron. Al mismo tiempo, la posición de los sindicatos fue ambivalente al principio, a diferencia del enfoque positivo del AMA. Favorecían la idea de formar las cooperativas y de asumir la producción como medida de alivio inmediato. Los líderes del sindicato estaban tratando, principalmente, de contener el problema de desempleo producido por los cierres, pero también creían que el gobierno del estado las adquiriría. Los trabajadores también lo pensaban.

Luego del apoyo inicial, el gobierno del estado fue indiferente al destino de las cooperativas. Esto fue producto de los cambios en la orientación del gobierno del Frente de Izquierda. Cuando éste ganó las elecciones por primera vez, en 1977, adoptó una política a favor de los trabajadores. Después de 1987, cuando fue electo por tercer vez, su actitud fue otra. El gobierno trató de crear una atmósfera en el estado que atrajera la inversión extranjera, al ofrecer la imagen amigable para el inversionista. En el proceso, los intereses de los trabajadores fueron marginados. Las cooperativas fueron víctimas de las nuevas políticas, lo que creó resentimiento en los trabajadores y líderes sindicales locales que apoyaban las organizaciones en su zona. Como ya se mencionó, los sindicatos de los que eran miembros los trabajadores estaban afiliados a la AMOT, y sus líderes también lo eran del PCI (M). Éstos habían alentado mucho a los trabajadores, a pesar de la falta de apoyo del gobierno del Frente de Izquierda encabezado por el PCI (M). Una secuela positiva de esta situación fue que estas cooperativas aprendieron a depender de su propia fuerza para sobrevivir, y no de un organismo externo como el gobierno del estado. A pesar de las adversidades, las cooperativas han seguido adelante. Y esto es cierto no sólo en el caso de las cuatro cooperativas analizadas en este estudio, sino también para otras en Bengala occidental. De las veintitantas cooperativas que había en Calcuta a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, sólo dos se han disuelto hasta ahora.

En el análisis anterior debemos hacer una excepción en el caso de la cooperativa de la imprenta, porque los líderes locales del PCI (M) han tratado de perturbar su funcionamiento. Los miembros originales dicen que los líderes locales del PCI (M)/AMOT ayudaron a formar la cooperativa, pero que su actitud cambió cuando los trabajadores miembros no quisieron proporcionar un edificio para que fuera

sede de la oficina del partido. Después de esto, trataron de crear división instigando a los nuevos integrantes en contra de los miembros originales. Éstos también pertenecían al sindicato afiliado a la AMOT, pero luego de los conflictos con los trabajadores nuevos, reclutados por los líderes locales, se desilusionaron del sindicato y lo dejaron. En la investigación inicial de cooperativas de trabajadores en la ciudad, tuvimos dos ejemplos similares. En todos esos casos, los líderes locales del PCI (M) que las habían iniciado las consideraban fuentes para generar fondos para el partido y empleo para sus cuadros.

Funcionamiento democrático

Además del apoyo del sindicato, otro factor importante para esas cooperativas fue la democracia interna. En las organizaciones iniciadas por el AMA, la democracia no se limitaba a la elección de los dirigentes. El sindicato organizaba programas para que los miembros de las cooperativas se capacitaran para asumir el control de su organización. Posteriormente, descubrimos que los miembros de las dos cooperativas estaban bien enterados de su funcionamiento. Participaban de manera activa en las reuniones regulares que realizaba el sindicato para discutir los problemas que se presentaban. El aspecto más importante de esas discusiones era que las opiniones de los miembros eran tomadas en serio y se les pedía que fueran críticos al expresar sus opiniones o sugerencias.

Las cooperativas de Calcuta tenían democracia interna y los líderes del sindicato desempeñaban un papel positivo en su promoción, con excepción de la cooperativa de la imprenta. Los líderes se reunían frecuentemente con los trabajadores y les explicaban los problemas. Difundir la información es la base de la democracia interna. En las tres cooperativas, los líderes trataban de mantener informados a los miembros acerca de los asuntos que les concernían. Las actividades cotidianas y las políticas se manejaban por consenso. Esto garantizaba que todos participaran activamente en el funcionamiento de la cooperativa.

La democracia se practicaba a través de medios formales e informales. Los formales eran las asambleas generales, donde se presentaban reportes, se discutían y se adoptaban las políticas. Las elecciones del comité administrativo (junta directiva) se realizaban de manera regular; las de la cooperativa del astillero siempre eran unánimes. El número de miembros era pequeño, por lo que era posible que los líderes buscaran un consenso para los puestos del consejo administrativo.

La cooperativa de cables de aluminio tenía un número comparativamente mayor de trabajadores y las elecciones eran reñidas, pero su reglamento indicaba que sólo los que participaran en la empresa podían contender. Los que no eran empleados de la cooperativa estaban excluidos de postularse en las elecciones, aunque podían votar. En todas las cooperativas, los miembros del comité administrativo

se renovaban con las elecciones para darle oportunidad a otros de participar en la toma de decisiones. Los métodos informales eran las discusiones y las reuniones del sindicato para explicar a los trabajadores el funcionamiento de la cooperativa. Este método les permitía entender los problemas. También podían hacer sugerencias respecto a diversos asuntos de la administración.

La democracia interna estaba bastante bien establecida en la cooperativa de maquinaria de cables. Las decisiones acerca de las políticas las tomaba el comité administrativo. Había un pequeño círculo dentro de este comité que parecía dominar la toma de decisiones. En un principio, daba la impresión de que este grupo de cinco miembros estaba tomando las decisiones en nombre de la cooperativa. No obstante, después descubrimos que esas personas consultaban a los trabajadores antes de tomar decisiones importantes o los mantenían informados de todo.

El funcionamiento democrático se convirtió en un grave problema en la cooperativa de la imprenta, pues sus miembros estaban divididos. Las asambleas generales terminaban invariablemente siendo caóticas, pues las líneas de batalla entre los dos grupos estaban claramente delimitadas. En el momento de este estudio, el grupo de los miembros nuevos, con la ayuda de la influencia política de los líderes locales de PCI (M), logró que el Departamento de Cooperativas del estado nombrara un administrador para la cooperativa, ya que el comité era incapaz de tomar una decisión o aprobar una resolución. Por ello la rivalidad interna ha debilitado el funcionamiento democrático de la cooperativa.

El papel del Estado

Otro aspecto importante que es necesario analizar es el papel del Estado. En el caso de las cooperativas de recicladoras, el Estado no ayudó ni obstaculizó su formación. Al mismo tiempo, hubo otros factores, como el acoso de las autoridades locales y la interrupción de contratos para recolectar papel de desperdicio de las oficinas gubernamentales, que pueden ser considerados como aspectos negativos de la interferencia estatal. Las cooperativas pudieron superarlos mediante la acción del sindicato. La influencia del AMA va más allá de la membresía de las recicladoras y, como tal, es fuerte. Por tanto, el apoyo del AMA como sindicato fue, en gran medida, responsable de aligerar las situaciones adversas que enfrentaban las recicladoras.

La situación de las cooperativas de trabajadores en Calcuta era más complicada. La intervención del Estado fue necesaria para su formación. El respaldo del Estado provino principalmente del apoyo político de que disfrutaban los sindicatos. Sin embargo, una vez que se formaron las cooperativas, el respaldo del Estado se acabó. Los trabajadores tuvieron que arreglárselas solos. Otro rasgo que aflora es la corrupción. Además de no obtener las garantías prometidas para los préstamos, las cooperativas descubrieron que tenían que dar sobornos en varias oficinas

del Estado para conseguir pedidos y también para que les pagaran una vez entregados éstos. Y eso sucedía a pesar de que el gobierno del Estado tenía como regla dar preferencia a las cooperativas al momento de hacer pedidos.

La corrupción podría haber sido contraatacada si el sindicato (AMOT) hubiera asumido una posición en contra de esas prácticas en el Estado. El sindicato debía haber garantizado que las cooperativas obtuvieran la preferencia prometida por el gobierno y presionar para que pagara más rápido. Por desgracia, nada de esto se hizo. Hay una diferencia entre el apoyo de los líderes locales de la AMOT a sus respectivas cooperativas y su posición en la esfera estatal. De hecho, ni la AMOT ni el PCI (M) han destacado los logros de esas cooperativas en las conferencias estatales ni en sus informes anuales. Pareciera que su enfoque es: las cooperativas de trabajadores pueden ser toleradas, pero no vale la pena escribir acerca de ellas. Esto es desafortunado porque, aunque dicen ser organizaciones marxistas, no parecen estar conscientes de la opinión positiva que Marx tenía de las cooperativas de trabajadores. Por otra parte, los informes anuales del AMA hacen una mención especial de los logros y los problemas de las cooperativas que ha patrocinado.

En conclusión, podemos decir que, a pesar de todos los problemas y deficiencias, estas cooperativas han demostrado que los miembros comunes son capaces de tomar el control de los medios de producción si se les da la oportunidad. Las cooperativas de trabajadores de Calcuta han tratado, con sus limitaciones, de proteger las pérdidas de empleo y la producción mediante sus esfuerzos colectivos. La determinación que han expresado puede verse en su persistencia, a pesar de tener todo en contra. Las recicladoras organizadas por el AMA en Ahmedabad demuestran que los sectores más pobres y socialmente marginados pueden mejorar sus condiciones económicas y sociales gracias al movimiento cooperativista.

BIBLIOGRAFÍA

- Bhatt, Ella, «SEWA as a Movement», en R. Dutt (coord.), *Organising the Unorganised Women*, Vikas, Delhi, 1997.
- Bhowmik, Sharit K., «Worker Cooperatives in the Plantation System: A Study of Tribal Tea Plantation Workers in Eastern India», *Labour, Capital and Society*, Montreal, 52 (2), 1992.
- , «Worker Cooperatives in the Unorganised Sector: An Alternative Strategy», en Sarath Davala (coord.), *Unprotected Labour in India*, Fundación Friedrich Ebert, Delhi, 1994.
- Marx, C., y F. Engels, *Select Works*, I, Progreso, Moscú, 1976.
- NCUI, *Report of the Committee on Principles of Cooperation formed by the International Cooperative Alliance*, National Cooperative Union of India, Delhi, 1969.
- Rose, Kalima, *Where Women are Leaders*, Sage, Delhi, 1995.
- SEWA, *Self Employed Women's Association 1999*, Shri Mahila SEWA Trust, Ahmedabad, 1999.

x. Unión General de Cooperativas en Mozambique: ¿un sistema alternativo de producción?¹

TERESA CRUZ E SILVA

INTRODUCCIÓN

El eje de la economía colonial en el sur de Mozambique tuvo como base la economía familiar campesina que funcionó como sostén: *a)* de la producción de una agricultura para el abastecimiento del mercado interno y para exportación, *b)* de la industria nacional y otros sectores de servicios, y *c)* generador de divisas mediante el trabajo migratorio hacia los países vecinos (O'Laughlin, 1981: 13-14).

La política económica introducida por el gobierno de Mozambique después de la independencia (1975) tenía como fin transformar las relaciones sociales de producción y apartar a este país del sistema mundial capitalista. La estrategia consistía en construir un sistema socialista en el cual la cooperativización de la producción de la agricultura familiar campesina, el reasentamiento de las poblaciones en aldeas comunales y la inversión en el sector estatal de producción serían los grandes motores de la transformación (O'Laughlin, 1981; Coelho, 1998; Francisco, 2000). Las medidas preconizadas por el Estado poscolonial mostraron, sin embargo, ser las menos adecuadas y terminaron por marginar a los campesinos en beneficio del desarrollo de una agricultura mecanizada, destruyendo así el sistema que había garantizado la producción para el abastecimiento del mercado interno y para la exportación.

¹ Sólo con la colaboración inestimable del padre Prosperino Gallipoli y sus colaboradores de la ugc me fue posible producir este estudio. A ellos quiero agradecer, particularmente a la profesora Marta Nhancale, en la época de formación de ésta, y al señor Camões, agrónomo responsable del área técnica de agricultura, quienes nos introdujeron a las unidades de producción y a las cooperativas del valle de Mahotas. Mi reconocimiento va también para todos nuestros entrevistados. Quiero agradecer, además, la colaboración de Hilario Diuty, asistente de investigación del cea, de Isabel Tembe y Ana Maria David (UFICS-UEM), por el trabajo de base realizado en la biblioteca del Ministerio de Agricultura, Archivo Histórico de Mozambique y Gabinete de Zonas Verdes de la ciudad de Maputo (gzv). Hago extensiva también mi gratitud a todos los compañeros del equipo de trabajo de Mozambique, por sus sugerencias y comentarios. Una parte de la información contenida en este texto fue recogida durante la realización de otros estudios financiados por The Ford Foundation y por The International Fellowship of Evangelical Mission Theologians, a quienes, desde luego, agradezco.

A la crisis económica se juntaron los desastres naturales y la desestabilización provocada por la guerra. Estos procesos, acompañados por varias transiciones políticas y económicas, acarrearón costos sociales que se reflejaron en la calidad de vida de las poblaciones, elevando de esta manera los niveles de pobreza y el aumento de la exclusión. Al mismo tiempo, y como respuesta a esta situación, también generaron iniciativas y alternativas populares de gestión social y económica.

Utilizando el estudio de la Unión General de Cooperativas Agropecuarias de Maputo (UGC), que se presenta como proyecto multisectorial en el cual se cruzan e interactúan formas económicas y sociales, en este texto analizaremos la posibilidad de alternativas de producción, en las que el espacio creado para la participación democrática y para el acceso y control de recursos económicos y sociales abre el camino a varias formas de poder y a una alteración de las relaciones sociales de este género, con la viabilidad del proyecto que se mantiene como una alternativa válida de solución de problemas en un contexto de economía abierta.

Nuestra opción por el estudio de la UGC limitó el contexto de este capítulo a un espacio social urbano, toda vez que la mayor parte de las cooperativas y unidades de producción que forman esta unión están en las zonas conurbada y urbana² de la ciudad de Maputo, las cuales desarrollan una parte significativa de sus actividades productivas en el cinturón verde que circunda la ciudad, particularmente en el valle de Mahotas, y con menor incidencia en el valle de Infulene. De la misma manera, parte importante de las unidades de producción de la UGC funciona en las mismas áreas geográficas.

Este capítulo está también circunscrito al sur del país, donde la historia de la economía política de esta región, la relativa disponibilidad de medios de comunicación y la consecuente facilidad de acceso a los mercados, complementada por una buena red comercial, además de los desarrollos económicos más recientes, le confieren características muy específicas desde el punto de vista socioeconómico y político.

I. ¿UN SISTEMA ALTERNATIVO DE PRODUCCIÓN O UNA AGRICULTURA URBANA «CAPTURADA» POR LA DIMENSIÓN DE UNA ECONOMÍA GLOBALIZANTE?

Nuestro punto de partida fue la necesidad de saber hasta qué punto la UGC podría ser considerada una prefiguración de un sistema alternativo de producción en una situación de mercado abierto. ¿Significaría esto hablar de una forma alternativa no capitalista de producción y distribución de mercancías y servicios?

² Se torna difícil establecer las delimitaciones del espacio urbano y el conurbado, sobre todo cuando la extensión de las ciudades implica la absorción de las áreas rurales, como sucedió con la ciudad de Maputo, y hay una interposición entre los espacios rural, urbano y conurbado.

¿O de qué manera la UGC logró sobrevivir, particularmente después de la adhesión de Mozambique a las instituciones de Breton Woods, ajustándose a algunas de las imposiciones hegemónicas del mercado, al mismo tiempo que buscaba caminos alternativos?

Si concordamos con que el sistema capitalista global, por medio de la hegemonía del mercado, fragmenta y penetra las áreas políticas, culturales y sociales, queda claro también que su violencia genera la producción de alternativas no exclusivamente económicas, sino que además abarca las dimensiones de lo social, al ser sus interconexiones formas necesarias, ya sea para su supervivencia, ya para su éxito (Giddens, 1998; Santos, 1998 y Appadurai, 1999).

Mahmood Mamdani, al discutir la África contemporánea y el legado del fin del periodo colonial, defiende la especificidad de la experiencia africana sin considerarla como excepcional y exótica, y toma en cuenta la necesidad de evitar que sea absorbida por un corpus teórico tan amplio que la torne rutinaria y trivial (Mamdani, 1996: 13). En este proceso, Mamdani critica el argumento de Goran Hyden sobre la especificidad de un campesinado africano libre, porque aún no ha sido «capturado» por las otras clases sociales, refiriéndose precisamente que Hyden ignora las relaciones mediante las cuales el campesinado «libre» está «capturado» y reproducido (Mamdani, 1996: 13). De esta manera, Mamdani no ha extendido esta problemática del campesinado «capturado» hacia nuestro análisis, donde la experiencia de la UGC, a pesar de que presenta formas alternativas a las dominantes y, por lo tanto, un proceso que tiende a contribuir a una mayor inclusión social, no nos puede ocultar que su supervivencia depende, en parte, de su capacidad para responder a las exigencias del mercado. Eso implica de inmediato una modernización y su inserción en la «división del trabajo global» (Giddens, 1998: 53), en el cual los cooperativistas y los trabajadores de la UGC son «capturados» de manera consecuente por la dimensión de una economía globalizante y su división del trabajo.

El estudio de la UGC, al estar inserto en un medio urbano, nos obliga a repensar el significado y alcance del concepto de campesinado en este contexto, así como la problemática de la agricultura urbana.³

Sin entrar en los debates que implican a los planificadores y teóricos del desarrollo sobre los espacios rural y urbano y sobre la agricultura urbana (Tinker, 1995), es fundamental cuestionarnos quiénes son los agricultores urbanos objeto de nuestro estudio para situarnos en nuestro análisis.

En una situación en que se torna difícil delimitar lo urbano de lo conurbado y en la que estos mismos espacios se mezclan con lo rural, particularmente en el rápido y descontrolado proceso de expansión de las ciudades, es necesario tener

en cuenta el peso de la producción agraria en el abastecimiento de las ciudades y su contribución al rendimiento de las familias de la ciudad capital. Con una tradición que se remonta al periodo colonial, en el que la reproducción de los trabajadores inmigrantes, tanto hacia los países vecinos como del campo a la ciudad, estaba en parte garantizada por la agricultura familiar, la economía agraria tiene todavía un peso importante en el desarrollo económico de ciudades como Maputo.

La producción del cinturón verde garantiza el abastecimiento de los mercados de la ciudad con hortalizas, frutas, pequeñas especies animales y otros productos característicos de la agricultura urbana. Al mismo tiempo, la producción proveniente de las pequeñas propiedades agrícolas que penetran las zonas entre lo urbano y lo conurbado y las zonas periféricas de la ciudad, o incluso la procedente de las propiedades agrícolas en la tierra natal de sus habitantes y en las proximidades de la ciudad de Maputo, constituyen una contribución importante al rendimiento económico de un inestimable número de familias. Mayoritariamente formado por mujeres, toda vez que ellas constituyen el mayor número de productores agrícolas en Mozambique (si exceptuamos a los obreros agrícolas que trabajan en las haciendas que se ocupan del abastecimiento a las ciudades, pero que no son objeto de nuestro estudio), son también parte de este grupo de trabajadores citados. Ligados de origen a una agricultura de subsistencia, provienen de los diferentes universos culturales que distinguen a la ciudad de Maputo, entre originarios del área geográfica en que la ciudad se inserta, inmigrantes antiguos y, en menor escala, resultantes de las migraciones más recientes que caracterizaron las consecuencias de la guerra entre las décadas de 1980 y 1990. De esta manera, si es verdad que en muchos agricultores urbanos encontraremos el prolongamiento de una existencia rural, ciudadanos que no se adaptan plenamente y a los que la situación económica obliga a mantener una relación con el medio rural, para muchos también está asociada a formas de sociabilidad y a la construcción de universos cognitivos y simbólicos; y entre ellos se encuentran los más jóvenes, cada vez más alejados de estos patrones.

La concepción del tipo de movimiento cooperativo introducido en Mozambique después de la independencia nacional surgió a partir de las experiencias de las «zonas liberadas», durante el proceso de lucha armada de liberación nacional, en la base de una «institución caracterizada por la socialización de los medios de producción y de la fuerza del trabajo» (Muthemba, 1998: 22). Este proceso sufrió, no obstante, una evolución a lo largo de los años, para hacer frente a las transformaciones políticas y económicas por las que el país atravesó.

La UGC es, sobre todo, una unión de cooperativas con dimensión multisectorial, enraizada en los estratos de la sociedad, que se afirma como un sistema basado en los principios de la autogestión. Su filosofía de crecimiento se inserta en el principio de la necesidad de crear las condiciones económicas y sociales que permitan a los cooperativistas, mayoritariamente mujeres, el acceso a los recursos

³ Por agricultura urbana entendemos no sólo el cultivo de hortalizas, frutas, flores y los bosques usualmente asociados a la recolección de combustibles leñosos, sino también la apicultura, piscicultura y la cría de ganado para la producción de leche, a ovejas, carneros y cabritos (Egziabher *et al.*, 1995).

económicos y sociales y a su control, por medio de su capacitación para tomar decisiones que lleven a mejorar su desarrollo social y económico.

La filosofía de la UGC nos conduce, de este modo, al encuentro de lo que entendemos por «apoderamiento» o *empowerment* de las mujeres, y su significado en el contexto en que estamos trabajando puede ser visto como una forma «individual y colectiva de decidir, controlar y transformar» (Osório, 1999: 21), lo que conduce a sus asociados a adquirir capacidades que les permitan alterar el curso de los acontecimientos en su propio beneficio (Giddens, 1976).

El acceso a los recursos, como la tierra y el crédito, a la educación formal y a la formación en el dominio de las tecnologías modernas de producción, así como el creciente control democrático de las actividades de la unión y su consecuente participación en la toma de decisiones, contribuyeron al aumento gradual del poder de las mujeres. Con diferentes grados de responsabilidad, esta autonomía no sólo se amplía a las que ocupan los puestos más importantes en la dirección de las cooperativas, uniones de zona y de la unión general, sino que se extiende hasta la unidad básica, la cooperativa.

Si consideramos que la parte esencial de la filosofía de desarrollo de la UGC se afirma en la idea de que las cooperativistas deben tomar conciencia de su condición social y luchar por la solución de sus problemas, y que el acceso al poder debe ser usado para superar las dificultades que las rodean, esta misma filosofía puede encuadrarse en el ámbito del desarrollo de las teorías feministas que defienden varias formas y caminos de apoderamiento, «de abajo hacia arriba»⁴ (Townsend *et al.*, 1999: 19-20), a partir de su toma de conciencia como ciudadanas. En nuestra opinión, lo fundamental en la estrategia de la UGC fue el haber mantenido a lo largo de su desarrollo la idea de que el acceso al poder sirve para aprender, organizar, remover obstáculos, en conclusión, cambiar de vida para mejorar y obtener resultados.

Importa también remarcar que las líneas de trabajo de la UGC, más que asegurar la solución de los problemas económicos y sociales de las cooperativistas, por la garantía de su subsistencia y la de sus familias y de un servicio de seguridad social, contribuyeron al cambio gradual de las relaciones de este tipo, con un efecto en el ámbito familiar de las comunidades incluidas en este movimiento.

2. LA CIUDAD DE MAPUTO EN EL CONTEXTO DE LAS TRANSICIONES POSTINDEPENDENCIA

La literatura disponible sobre algunos de los procesos de transición económica y social de Mozambique caracteriza y evalúa los diversos pasos de la evolución de este país entre 1975 y 1984, al presentar varias interpretaciones. En todas,

⁴ *Botton-up-approaches.*

independientemente de que el centro de gravedad del «desplazamiento del modelo» se haya movido o no, de las fuerzas externas, para hacer recaer las culpas sobre el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), en lo que se refiere a las diversas crisis por las cuales atravesó el país durante este periodo (Saul, 1994: 6-7), queda claro que la estrategia socialista de desarrollo, a la que subyace el proceso de colectivización de la producción, resultó ser un fracaso. Los incentivos «morales» repletos de voluntarismo, sin alternativas sociales ni económicas para mejorar la vida de los campesinos, fueron insostenibles (Roesch, 1986: 234). En 1983, el IV Congreso del Frelimo reconoció, no obstante, el fracaso de la estrategia económica entonces en vigor.

El refuerzo de la «hegemonía occidental» (Saul, 1993: 19) en la región y la adhesión de Mozambique, en 1984, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la política del Banco Mundial, sumados a los aspectos ya citados, llevaron al país a pasar por varias transiciones económicas y políticas desde su independencia nacional en 1975. Después de una fase de economía centralmente planificada, en 1985 se dan los primeros pasos para su liberación. Con el objetivo de revertir las tendencias negativas del crecimiento económico por medio de un ajuste estructural, en 1987 se introdujo el Programa de Rehabilitación Económica (PRE) y en 1990 el Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES), «como una señal para atribuir mayor énfasis social» hacia este proceso (Francisco, 2000: 42). Las reformas económicas que caracterizaron las décadas de 1980 y 1990 en Mozambique dieron lugar a una revisión de la economía, lo que no significa necesariamente una reducción de los índices de pobreza. «La pobreza, entendida como ausencia de las condiciones para una larga vida, instrucción y nivel de una vida aceptable, afecta a la aplastante mayoría de la población de Mozambique» (PNUD, 1998: 81; Ministry of Planning and Finance, 1998: 3).

Mozambique es un país de asimetrías que se reflejan en las discrepancias que caracterizan los niveles de desarrollo humano y económico entre las diversas provincias y entre éstas y la capital del país, Maputo (PNUD, 1999: 87-91). De esta manera, a pesar de que esta ciudad se destaca del resto del país, al contribuir con aproximadamente 35% del producto interno bruto (PIB) nacional y situarse a un nivel medio de desarrollo humano (PNUD, 1999: 89-90), estos datos no captan la distribución social, que posiblemente nos daría rangos de discrepancia variadísimos.

Un mapeo de los índices de desarrollo económico y social de la ciudad capital revelaría, ciertamente, varias áreas demarcadas de distinta manera por los elevadísimos índices de pobreza, particularmente en la periferia urbana, que las migraciones aceleradas por la guerra posterior a la independencia, terminada en 1992, y el impacto de los procesos de reformas económicas, ayudaron a expandir y consolidar.

El proceso explosivo de crecimiento de la ciudad de Maputo y la ocupación de áreas reservadas llevaron, entre otros problemas ligados a su desarrollo inadecuado,

a un descontrolado uso del suelo urbano y a los desequilibrios ecológicos en las áreas limítrofes (Araújo, 1990: 80). En este proceso podemos colocar el acceso a la tierra arable, particularmente los suelos más fértiles ubicados en los valles que circundan la ciudad, conocidos también como zonas o cinturones verdes.⁵

La ciudad de Maputo está circundada por un cinturón verde en el que predominan tierras altas secas con niveles freáticos bajos, y por tierras bajas con niveles freáticos más altos y una buena capacidad para los cultivos, particularmente de hortalizas y frutas. Los registros documentados muestran que ya en 1930 la región hortícola más productiva del país se extendía desde un área un poco al norte de la Vila de Manhiça, en la provincia de Maputo, en el valle a lo largo del río Incomati, hasta Marracuene, y se prolongaba en dirección al sur por los valles de Mahotas e Infulene (Ministerio de Agricultura, 1995), área geográfica donde la mayor parte de las cooperativas y unidades de producción de la UGC están hoy instaladas.

Antes de la independencia, el cinturón verde de la ciudad de Maputo estaba ocupado por pequeños y medianos propietarios agrícolas, colonos, además de numerosas familias campesinas, distribuidos en reducidos lotes, que desarrollaban actividades agropecuarias que permitían el abastecimiento a la ciudad de productos hortícolas, frutas y pequeñas especies animales (Ministerio da Agricultura, 1995).

Después de la independencia nacional, la mayor parte de las propiedades fue abandonada y, posteriormente, ocupada por familias campesinas. Una parte de esas haciendas o lotes fue destinada a las llamadas «*machambas* (campos de cultivo) del pueblo», y a algunas cooperativas embrionarias, bajo la dirección y control de las entidades políticas locales, como los grupos dinamizadores.⁶ La falta de dominio técnico y de insumos para la agricultura, aliada a un desinterés por la producción basada en el voluntariado, generó bajas a la producción y renta. Esto no puede, sin embargo, disociarse de la dependencia de los rendimientos de los agregados familiares en la producción familiar de pequeños lotes, como ya se dijo, como tampoco del trabajo asalariado, que el rendimiento incierto y bajo de las cooperativas no podría compensar (Ayisi, 1995; O'Laughlin, 1981).

A finales de la década de 1970, el gobierno dio inicio al desafío de reactivar la producción agropecuaria en el cinturón verde de las ciudades, con el objetivo de

⁵ Zonas o cinturones verdes se denomina a las fajas agrícolas que circundan los pueblos rurales o a las ciudades, en los que se realiza una producción agropecuaria para el abastecimiento de las zonas urbanas con productos como vegetales, frutas, huevos, aves y animales de especies pequeñas, por lo que se constituyen incluso, en muchos casos, como fuentes de abastecimiento de combustibles leñosos para los mercados urbanos. Se trata, pues, de la ya citada agricultura urbana.

⁶ Estructura política de base introducida por el Frelimo después de la independencia nacional en los barrios residenciales y en los locales de trabajo, normalmente dirigida por miembros del Frelimo a título de trabajo voluntario. La necesidad de crear una estructura con carácter más administrativo en los barrios residenciales, para el ejercicio de actividades ligadas a los municipios, transformó a muchos de estos grupos dinamizadores en representantes de la administración local, función que continúa siendo ejercida en muchos locales donde las entidades autónomas todavía no los han sustituido.

crear oportunidades de empleo y abastecer a la población de productos alimenticios, particularmente hortícolas y animales de pequeñas especies. En 1980, para administrar estas parcelas, fue creado el Gabinete* de las Zonas Verdes de la ciudad de Maputo (gzv), con la finalidad de proporcionar los conocimientos administrativos y técnicos a las cooperativas y agricultores privados con sede en estas áreas. Ligado al Consejo Municipal de la ciudad, el gzv tenía una doble subordinación, ya que estaba relacionado también con el Ministerio de Agricultura, en su calidad de promotor de apoyo técnico a través de sus centros agrícolas, las llamadas «casas agrarias».

En los años subsiguientes a su fundación, el gzv amplió sus actividades de apoyo técnico a las cooperativas del sector privado, para entrar luego al sector de la formación de campesinos, en el área de varios proyectos hidráulicos para la rehabilitación o construcción de redes de irrigación y drenaje, promoción y desarrollo de asociaciones de agricultores, comercialización de equipamientos e insumos agrícolas y construcción de infraestructura social.

3. UNIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS, ¿UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN?

Además de los problemas estructurales que hicieron viable el proyecto de socialización del campo, con cuya estrategia global la cooperativización debería de desempeñar un papel fundamental, el movimiento cooperativo terminó también siendo afectado por las consecuencias del proceso de desestabilización que alcanzó a la mayor parte del país, hasta la firma de los acuerdos de paz entre el Frelimo y la Resistencia Nacional de Mozambique (Renamo), en 1992.

El deterioro económico que afectó a Mozambique después de la independencia se agravó todavía más en la década de 1980 (Francisco: 7-39), profundizada por la situación militar. Si es verdad, como afirman algunos autores (O'Laughlin, 1981) que el problema de acceso a la tierra en este periodo no era real ni justificaba la dinamización del movimiento cooperativo, la guerra y el consecuente proceso de migración campo-ciudad y la lucha por el acceso a tierras fértiles, como las del cinturón verde de la ciudad de Maputo, cambiaron esta situación, por lo menos en términos relativos.

La concentración poblacional en la capital y en los alrededores condujo a una desmedida presión sobre el acceso y uso de las tierras más fértiles y a una práctica de la agricultura más intensiva, con el consecuente aumento de una carga de la población sobre el sistema ecológico, lo que creó, como consecuencia, desequilibrios a largo plazo. El proceso de cooperativización en las zonas verdes de Maputo

* En este caso, *gabinete* se refiere a oficina. [T.]

acabó, de este modo, por enfrentar un proceso de lucha por el acceso a la tierra, debido al contexto socioeconómico en que surgió.

El primer embrión de la Unión General de Cooperativas (UGC) se originó por la relación entre las cooperativas del cinturón verde de la ciudad de Maputo y del Gabinete de las Zonas Verdes de esta área, en 1980, a partir de un núcleo de mujeres que se organizó para coordinar las actividades de las cooperativas (Casimiro, 1999), estimuladas por el apoyo del padre Prosperino Gallipoli.⁷

Tomando como base los factores internos, es decir, el desarrollo de la UGC, y los factores externos, como el impacto de las transformaciones económicas y sociales en el ámbito nacional, nuestro análisis de la UGC se dividirá en tres periodos: *a)* 1980-1987: origen y evolución, los nuevos desafíos; *b)* 1987-1990: el movimiento cooperativo en el nuevo marco económico en vigor en el país; y *c)* 1990-2000: consolidación de la UGC: problemas y perspectivas.

1980-1987: Origen y evolución de la UGC, los nuevos desafíos

El GVC, al crear un espacio político-administrativo para la organización de los campesinos pobres en el cinturón verde de la ciudad de Maputo, está necesariamente asociado a la historia del movimiento cooperativo. Conviene resaltar, sin embargo, que este movimiento adoptó después características peculiares y logró madurar, lo cual dio origen a la creación de la embrionaria UGC, en 1980 (UGC, 1998).

En su fase inicial, la UGC, al estar enmarcada en la política que tenía como fin la construcción del socialismo, aparece asociada a los grupos dinamizadores, los cuales representan al partido en el poder, el Frelimo, y a la Organización de la Mujer Mozambiqueña (OMM), liga de mujeres del mismo partido, ya que la mayor parte de los cooperativistas eran mujeres. El crecimiento de las cooperativas agropecuarias y la necesidad de resolver muchos de sus problemas imponían, sin embargo, una mayor descentralización de poderes y una mayor participación efectiva de sus miembros en el control de los recursos y en la toma de decisiones, dificultadas por las formas de actuación y control tanto por los grupos dinamizadores como por la OMM. En este proceso, la UGC acabó por distanciarse de las instituciones partidarias, proceso emancipador lleno de dificultades debido al contexto político y económico en que acontecía.

En su fase inicial este movimiento estaba mayoritariamente formado por mujeres sin escolarización, sin formación técnica y sin empleo, lo que caracteriza el

⁷ Prosperino Gallipoli, padre católico, trabaja en Mozambique desde los años cincuenta. Debido a su postura política durante la vigencia del sistema colonial, fue expulsado del país, y regresó después de la independencia nacional. El gobierno de Mozambique lo llamó para trabajar en el Gabinete de las Zonas Verdes de la ciudad de Maputo en 1980; fue una de las personas fundamentales en el proceso de creación de la UGC. Figura carismática, continúa ligado todavía a esta Unión, al desempeñar un papel importante en su desarrollo.

perfil de las cooperativas en términos de composición de clase (UGC, 1998). Se encontraba, así, ante un enorme desafío.

Los objetivos iniciales de la embrionaria UGC consistían en crear una plataforma que permitiera producir un suplemento alimentario y un rendimiento adicional para minimizar las carencias de los grupos familiares. Para hacer frente a esta plataforma, sin embargo, era necesario dar formación técnica básica a sus miembros y crear infraestructuras adicionales para garantizar el aprovisionamiento alimentario para los cooperativistas y sus familiares, dada la crisis profunda de abastecimiento de bienes de consumo en que el país se encontraba sumergido, lo que contribuyó al desarrollo de mercados paralelos y a una alza de precios de los bienes esenciales (Tickner, 1992). Fue así como nació una tienda móvil para el abastecimiento de las cooperativas y se introdujeron gradualmente otros beneficios sociales, como las guarderías, donde las mujeres podían dejar a los niños para irse a trabajar, y más tarde la introducción de un embrionario servicio de salud comunitaria mediante la contratación de una enfermera, en 1986 (Kirchney *et al.*, 1987).

La amplia adhesión a las cooperativas ligadas a la UGC, que tuvo lugar entre 1981 y 1986, que de 24 cooperativas y 1 177 miembros en 1981 pasó a 194 cooperativas y 10 500 miembros en 1986 (Kirchney *et al.*, 1987), se debió tanto a la posibilidad de acceso a los bienes de consumo, instrumentos y factores de producción, como al aumento de los beneficios sociales concedidos a los asociados, particularmente después de 1981, con la emancipación de las cooperativas de la tutela administrativa y política anterior (Kirchney *et al.*, 1987; Casimiro, 1999).

Los diversos testimonios recogidos en las cooperativas de la UGC en el valle de Mahotas, particularmente entre las cooperativistas más viejas, citan el origen de la UGC. Es el caso de los testimonios de Lúcia C., de aproximadamente 60 años, de la cooperativa Alberto Cassimo: «La mayor parte de las cooperativistas empezó a trabajar en las *machambas* (campos de cultivo) del pueblo, donde sufrieron mucho hasta formar las cooperativas. En 1980, empezamos con la cooperativa Alberto Cassimo. Tuvimos que deforestar los terrenos y los *machongos*.⁸ Las dificultades y la baja producción provocaron la renuncia de muchas mujeres».⁹

Las palabras de Lúcia C. no son diferentes de otros testimonios de mujeres que nos hablaron del hambre que se vivía en ese periodo 1978-1979, de la baja productividad de sus *machambas* y de los escasos ingresos que recibían cuando se hacía la distribución de las utilidades provenientes de la producción colectiva. Todos fueron unánimes al afirmar que el dinero de la venta del producto de su trabajo quedaba bajo el dominio del grupo dinamizador y de la OMM, y que las cooperativas no

⁸ Tierras bajas en los valles, con niveles freáticos muy elevados, normalmente utilizados para el plantío de productos hortícolas, otros vegetales y algunos árboles frutales.

⁹ Cooperativas Alberto Cassimo, Ngungunhana, Manuel Pinto da Costa y José Eduardo dos Santos. Entrevista colectiva. Teresa Cruz e Silva e Hilário Diuty, 14 de junio de 2000 (traducción libre).

tenían control sobre la distribución de los beneficios. Luísa M., 48 años, de la Unión de Producción de Flores de la UGC, al referirse a la relación entre las cooperativas y las estructuras políticas del barrio, nos dijo:

Inicié mis actividades en 1976, cultivando en las *machambas* del pueblo, donde era posible conseguir alguna utilidad, pero que no quedaba en las cooperativas. El dinero se entregaba al grupo dinamizador. Cuando en 1980 nos adherimos al movimiento organizado por Prosperino, ya era posible ver que las utilidades eran distribuidas. En esta época, la función de la UGC era ayudar en la organización de las cooperativas, pero eran éstas las que controlaban la producción.¹⁰

El diálogo con los asociados en la búsqueda de mejores formas de organización y salida de la producción condujo a la reformulación de los métodos de trabajo en las cooperativas y a la introducción de formas democráticas de control y toma de decisiones, por medio de debates permanentes en el seno de las cooperativas, y entre éstas y sus dirigentes electos para la toma de decisiones, que ayudaron a construir las formas de relación entre las cooperativas y la Unión General. En 1982 nació la primera Asamblea General de la UGC, donde tenían lugar las discusiones sobre los problemas de las cooperativas y se delineaban las primeras decisiones, en un proceso que fue madurando gradualmente.

En el proceso de diversificación de la producción para el mercado y mejoría de la dieta alimenticia de los asociados se introdujo la porcicultura, y más tarde, y en asociación con esta actividad, la producción de biogás, como energía alternativa para mantener las guarderías y otros servicios sociales de las cooperativas.

La embrionaria UGC amplía el campo de sus actividades e inicia la venta de semillas e insecticidas, y organiza la canalización de la producción de las cooperativas y su colocación en el mercado. En este proceso, estuvieron a su favor no sólo el dinamismo de su dirección, sino también que las unidades de producción se encontraban situadas en su mayor parte en zonas con facilidades de comunicación y acceso a un mercado con capacidad de absorción rápida de sus productos.

La diversificación de las actividades promovidas por la unión y el crecimiento del movimiento cooperativo ya exigían una gestión eficiente y transparente y, por lo tanto, una formación técnica y escolar de sus asociados. Con la creación del primer centro de formación para campesinos en el valle de Mahotas en 1981, se dieron también las condiciones para la realización de cursos de alfabetización y educación para adultos, y para la formación técnica en las áreas de gestión y agropecuaria, cursos a los cuales se añadieron progresivamente otros temas, como liderazgo, organización y cooperativismo. En 1986, la UGC ya registraba un total de

¹⁰ Cooperativas Alberto Cassimo, Ngungunhana, Manuel Pinto da Costa y José Eduardo dos Santos. Entrevista colectiva. Teresa Cruz e Silva e Hilário Diuty, 14 de junio de 2000 (traducción libre).

cuatro centros para la enseñanza de quinto y sexto grado, y más tarde se creó una escuela secundaria, con lo que se dió la posibilidad de acceso a este nivel de enseñanza a los hijos de los trabajadores.

El proceso de desarrollo también exigía una contabilidad organizada e inversiones, sobre todo en la construcción de infraestructura para las áreas sociales y para el sector productivo. Además del apoyo financiero y técnico recibido de organizaciones no gubernamentales, el acceso al crédito para inversiones y el apoyo técnico para la formación en el área contable se hizo por medio del Banco Popular de Desarrollo (BDP),¹¹ en Mozambique.

En 1983 se inició el movimiento para la oficialización de la UGC, que tuvo lugar en 1984. El proyecto inicial tuvo principalmente la adhesión de mujeres, quienes también tomaron posesión de la mayor parte de los puestos en la dirección de la Unión. En 1986, ellas representaban 95% del total de los miembros (Kirchney *et al.*, 1987). Un análisis estadístico de Anneke Mulder sobre la composición social de las cooperativas nos revela un promedio que se ubica entre 20 y 60 miembros por cooperativa, y edades promedio de 39 años en 1983 y 35 años en 1986 (Kirchney *et al.*, 1987).

El crecimiento de las cooperativas y la necesidad de articularse para resolver los problemas, así como su relación con la Unión General, llevó a la creación de las uniones de zona, para las cuales se eligen democráticamente los representantes de un grupo de cooperativas de determinada zona, con voz en la Asamblea General de la Unión General, que se reúne una vez por mes. Éste es el órgano social donde se discute la vida de la Unión y donde se toman las decisiones más importantes. En 1986 ya estaban registradas 10 uniones de zona para un número de 194 cooperativas y, aproximadamente, 10 500 cooperativistas (Kirchney *et al.*, 1987).

La década de 1980 fue el periodo de presentación e introducción de nuevas experiencias. Las formas democráticas de control de las actividades, «de abajo hacia arriba», y la mejoría de las condiciones de vida y trabajo también fueron un proceso de aprendizaje para todos. Sin olvidar el aspecto económico, se dio, sin embargo, una particular importancia al incremento de las actividades sociales, una manera de no perder de vista los aspectos humanos, debido a la coyuntura en que la UGC se originó y se desarrolló.

En términos globales, los índices promedio de producción de la UGC se consideran bajos en esta fase. La mayoría de las cooperativas son débiles y se caracterizan por el exceso de mano de obra. Sin embargo, es importante notar que el balance de las actividades durante 1984 ya asentaba: *a)* un crecimiento de 60% en relación con 1983 de la producción global de las cooperativas agropecuarias de Maputo; *b)* aumento en la formación general y dinamismo de sus miembros con especialización de fuerza de trabajo en las cooperativas y en el área de gestión

¹¹ Hoy Banco Austral.

empresarial, lo que les imprime una actitud activa y los prepara para discutir sus avances y problemas, y tiende a mejorar sus vidas; y *c)* introducción de nuevos servicios (aprovisionamiento, comercialización, contabilidad, construcción, asuntos sociales y guarderías, reproducción de cerdos, viveros, mecanización y transportes), en respuesta al crecimiento de las cooperativas (UGC, 1985; Kirchner *et al.*, 1987).

A pesar de las dificultades, el crecimiento de la UGC entre 1981 y 1986 la lleva a ser aceptada en el mercado nacional. En los años ochenta, la UGC se transformó en uno de los principales abastecedores de carne y vegetales de Maputo y sus alrededores (UGC, 1998). En este periodo, la Unión ya tenía asegurados los medios de transporte para la canalización de los productos. El mercado de carne permitía, ya en 1986, el funcionamiento de una salchichonería para la producción de derivados de cerdo, y había planes para invertir en una fábrica de raciones.

De esta manera, el crecimiento de la UGC la hizo pasar a una fase más organizada de su producción y a un consecuente aumento de las utilidades. Los medios de producción dejaron de ofrecerse y empezaron a ser vendidos a los asociados, y las ganancias se destinaron a un fondo que debería apoyar rotativamente a las cooperativas, a las uniones de zona o a la UGC. En este periodo se inicia también el proceso de modernización de las cooperativas con la introducción de bombas, pozos de agua y electrificación de las áreas donde estaban instaladas éstas y las unidades de producción, y otros medios que tenían como fin mejorar la calidad de la producción y su rentabilidad, utilizando un criterio basado en la promoción como premio por la prueba de capacidad y empeño de las cooperativistas, aliada a factores como autoconfianza.

Si uno de los objetivos iniciales de la UGC era garantizar un complemento alimentario y salarial a los agregados familiares, en esta fase ya era posible distribuir un salario mensual a las cooperativistas, correspondiente a un poco más que un salario mínimo, que funcionaba como una renta segura para el grupo familiar, garantizando así la confianza de sus miembros en el crecimiento de las cooperativas y una mayor estabilidad en las familias.

El apoyo a los grupos familiares también estaba reforzado por la posibilidad de acceso a: *a)* un lote de las cooperativas para el desarrollo de la agricultura familiar, por cooperativista; *b)* extensión rural hecha mediante apoyo técnico a las tierras de explotación familiar de los asociados; y *c)* posibilidad de formación en áreas técnicas y creación de puestos de trabajo en la UGC, donde eran empleados preferentemente los hijos de los cooperativistas.

La gran inversión hecha por la UGC en infraestructura social, los bajos índices de las cooperativas en términos productivos, aunados a una gran dependencia de la ayuda externa, plantean, ya en esta fase, el problema de la eficacia de la UGC y su posibilidad de supervivencia.

Por la adhesión de Mozambique al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional en 1984, en 1985 se introdujeron las primeras medidas para la liberación

de precios de ciertos productos alimenticios, como frutas y verduras. A partir de 1987, con la introducción del Programa de Reajuste Estructural (PRE), hubo un encuadre sistemático y amplio de «un comercio liberalizado a gran escala y las unidades agrícolas e industriales se privatizaron» (Francisco, 2000: 7-42).

La UGC tiene ahora que hacer frente a un mercado cada vez más competitivo. La devaluación de la moneda y la saturación del mercado con productos tradicionalmente producidos por sus cooperativas y unidades de producción son algunos de los primeros problemas que ésta tiene que enfrentar, mediante el diseño de otras estrategias para ajustarse a las presiones de la nueva hegemonía.

1987-1990: El movimiento cooperativo en el nuevo marco económico en vigor en el país

Después de la explosión del movimiento cooperativo verificado en el periodo anterior, la UGC alcanzó también una fase de crecimiento considerable en términos cualitativos y cuantitativos. Sus actividades estaban volcadas hacia sus dos componentes esenciales: *a)* la sede de la Unión General de Cooperativas para la gestión administrativa y financiera, servicios de apoyo técnico, área de formación y las unidades de producción económicamente independientes de las cooperativas; y *b)* las cooperativas.

En su fase de crecimiento y de desarrollo, la UGC realizó inversiones en las áreas sociales y económicas e introdujo nuevas modalidades de organización para la producción, al crear más espacios de participación democrática y oportunidades para la resolución de los problemas por parte de los asociados, particularmente con discusiones en las diversas asambleas y de acuerdo con sus principios básicos. De este modo, el periodo entre 1987 y 1990 representa una fase más madura de la Unión, cuando su supervivencia como alternativa depende de la forma en que sus estrategias de desarrollo se van a ajustar a las presiones provocadas por la hegemonía del mercado. Éste también representa uno de sus periodos más difíciles por tratarse de una fase de afirmación. Así es como, inmediatamente después de la introducción de nuevas reformas económicas y la consecuente liberalización de los precios, la UGC inicia un proceso de reflexión sobre la inserción de las cooperativas en el nuevo marco económico del país.

Las dificultades para la colocación de los productos en los mercados y las ya citadas consecuencias de la devaluación de la moneda mozambiqueña, el metical, en los precios de insumos e implementos agrícolas, raciones para animales y otros productos, se reflejan de manera pesada y rápida sobre la economía de la Unión.

En esta fase de transición económica hay un proceso gradual de inmovilización de los cooperativistas y su consecuente deserción. Una explicación para estas deserciones se encuentra en el aumento de la vulnerabilidad creado por las

reformas económicas sobre las familias más pobres y la consecuente reducción de su ya de por sí débil capacidad de supervivencia. En ese periodo la búsqueda de una opción más rápida, aunque menos segura, para intentar responder de inmediato a la caída del rendimiento familiar condujo a muchas mujeres cooperativistas a ingresar en el sector informal (Cruz e Silva, 2000: 29; Andrade *et al.*, 1998: 60), abandonando las filas de la Unión.

Como nos confirmaron algunas cooperativistas del valle de Infulene, el retorno inmediato a la venta de pequeñas cantidades de bienes de consumo en el mercado informal para resolver los problemas cotidianos indujo a muchas asociadas de la UGC a optar por este tipo de trabajo, abandonando así las cooperativas.¹² Otros testimonios de las cooperativistas del valle de Mahotas nos hablaron también de las dificultades por las cuales tuvieron que pasar en el movimiento para la organización de las cooperativas, lo cual llevó a muchos de sus miembros a abandonar estos proyectos. Delfina M., de la cooperativa Alberto Cassimo, no dijo a este respecto:

En 1980, en la cooperativa Alberto Cassimo eran aproximadamente 80 personas. Había dificultades y muchas mujeres la abandonaron. Hoy han pasado muchos años y muchas desean volver, pero las que están allí y después de haber sufrido tantas dificultades, no aceptamos el regreso de ellas de ninguna manera. Hoy comen, se visten y se cubren gracias a la cooperativa [...] llegaron a donde llegaron gracias a ésta. De los 80 miembros, hoy han quedado únicamente 15 de las antiguas.¹³

Otra cooperativista, Lurdes M., de la cooperativa Ngungunhana, nos habla de las dificultades que enfrentaron las mujeres en su cooperativa:

Empecé mi trabajo en las *machambas* del pueblo en 1980. La cooperativa Ngungunhana fue creada en 1982 con el apoyo de la Casa Agraria. En esa época no teníamos nada que producir. Cada quien traía lo que tenía para cavar la tierra y regar en la cooperativa. Primero, mi trabajo lo hacía en las tierras altas, donde plantábamos mandioca y camote, pero producíamos poco. Con la ayuda del grupo dinamizador conseguimos tierras ubicadas en la parte más baja del valle. Con las semillas que recibimos gratuitamente fuimos mejorando nuestra producción. El periodo más difícil fue entre 1984 y 1985, cuando el número de cooperativistas disminuyó mucho. En esa época, la Casa Agraria también dejó de funcionar, pero logramos resolver los problemas con el apoyo de la UGC. Actualmente plantamos col, zanahoria, pimienta, lechuga, cebolla

¹² Entrevistas dirigidas por Teresa Cruz e Silva e Hilário Diuty en 1999, en las cooperativas del valle de Infulene.

¹³ Cooperativas Alberto Cassimo, Ngungunhana, Manuel Pinto da Costa y José Eduardo dos Santos. Entrevista colectiva. Teresa Cruz e Silva e Hilário Diuty, 14 de junio de 2000 (traducción libre).

y tomate en tiempos de frío, y cuando hace calor plantamos maíz y hojas de calabaza. También tenemos aviaros.¹⁴

El proceso de repensar la UGC para este periodo delineó nuevas estrategias, al tener como objetivo asentar el desarrollo del movimiento cooperativista por medio de: *a)* ahorro de divisas; *b)* prestación de servicios en el seno del movimiento a bajo costo; *c)* un programa de rehabilitación agrícola con la introducción de cultivos alternantes y de rendimiento, y sectores agropecuarios alternativos; *d)* modernización de las cooperativas y sistemas de producción, y *e)* introducción de unidades de producción de rendimiento que permitieran a la UGC hacer frente a la competencia del libre mercado.

En el balance realizado por la UGC para repensar estrategias evaluaron también los aspectos positivos del movimiento, habiendo resaltado entre otros: *a)* la importancia de su apoyo al sector familiar, a través de las cooperativas y unidades; *b)* haber logrado enfrentar la crisis provocada por las reformas económicas sin tener que alienar su patrimonio a entidades nacionales o extranjeras ni despedir trabajadores o cooperativistas; *c)* las rentas promedio de los cooperativistas han sido 1.5 veces superiores a un salario mínimo nacional, a pesar de que la mayor parte de sus miembros son mujeres con bajos niveles de escolaridad y muchas son ya ancianas (Casimiro, 1999: 199; UGC, 1997: 8).

La creación de una unidad para dirigir los servicios administrativos y financieros de la UGC en general, de las unidades de producción y de prestación de servicios, representa también una imagen de su crecimiento y la tentativa de responder a las cuestiones y problemas cotidianos, al querer mejorar su eficacia y presentar una imagen de transparencia. Las ganancias provenientes de las unidades de producción permitieron a la UGC crear un capital para invertir en las cooperativas y en los sectores sociales.

Después de un periodo de crisis en 1989, la UGC empezó a rediseñar sus expectativas. La porcicultura, que estaba en una fase de baja productividad debido al problema de raciones y dificultades de colocación de su carne en el mercado, había sido sustituida por la avicultura, con un ciclo reproductivo más rápido y una buena aceptación en el mercado nacional. La producción de pollo empezó, de este modo, a constituir parte de un proceso en cadena que envolvió a las cooperativas, las unidades de producción de la UGC y al área comercial, de administración y de finanzas. Todo esto contó con un ciclo en el cual la eficiencia y calidad son fundamentales, lo que implicó un sistema de formación de trabajadores de la UGC y cooperativistas para participar en las diferentes fases de este proceso. La producción de carne de pollo formó parte de un sistema moderno en el que todos los desperdicios son aprovechados tanto para la producción de proteínas para raciones como en fertilizantes para la producción agrícola.

¹⁴ *Idem.*

La avicultura presentó en esta fase una de las bases más importantes para la recuperación económica de la unión. Como esta misma producción no sólo se generaba en las unidades de producción de la UGC, sino también en las cooperativas, sectores sociales e individualmente por cooperativistas, permitió también el aumento del rendimiento individual de cada socio y que las unidades de apoyo social se tornaran económicamente independientes de la unión. El proceso contó con un sistema de crédito y de apoyo técnico de la UGC a las cooperativas, beneficiando igualmente el sector familiar con el apoyo técnico.

En un contexto de reajuste estructural, la UGC mantuvo una inversión en el área social, con lo que preservó su idea inicial de apoyar a los más pobres, y salvaguardar una dimensión humana (Depelchin, s/f.: 6).

1990-2000: Consolidación de la UGC: problemas y perspectivas

En la década de 1990, la UGC se encontraba en una encrucijada: entre el crecimiento cualitativo y cuantitativo de los últimos 10 años, donde «no basta la dedicación, la buena voluntad y el arrojo» (Celina Cossa, s/f.) para su mantenimiento y desarrollo, y la necesidad de planear una organización moderna y científica para enfrentar el futuro (Celina Cossa, s/f.).

Registrada como una empresa con personalidad jurídica el 2 de marzo de 1990, la UGC está legalmente reconocida en su nuevo estatus. La Unión General de Cooperativas Agropecuarias de Maputo pasa a ser ahora una empresa cooperativa, con 185 cooperativas, 12 uniones de zona, 5 500 socios y un patrimonio registrado que debe generar ingresos para ser económicamente viable. Sus órganos sociales están constituidos por una Asamblea General, un Consejo Directivo, un Consejo Fiscal, una Comisión de Gestión y un Consejo de Control, electos democráticamente (Casimiro, 1999; UGC, 1999).

Luego de haber iniciado sus actividades en las zonas verdes de la ciudad de Maputo, con siete cooperativas y 500 miembros (UGC, 1999), la UGC tiene ahora unidades de producción y cooperativas en varias zonas de la provincia de Maputo. Su conjunto diversificado de actividades agropecuarias está esencialmente dirigido hacia: *a)* la avicultura, *b)* las raciones para animales (Prodag), *c)* agricultura, *d)* artesanía, *e)* un conjunto de transportes, *f)* un sector de comercialización de productos frescos, pollos vivos y procesados (congelados), *g)* construcciones, *h)* crianza de ganado bovino, e *i)* servicios complementarios de apoyo a las unidades de producción y a las cooperativas.

Proyectos como la plantación de árboles frutales en las cooperativas y cultivos comerciales alternativos son todavía recientes y no han empezado a producir resultados cuantificables. La introducción, a partir de 1988, de la producción de

flores y la reproducción de castaños de *cajú*, así como los árboles ya mencionados, se insertan en un programa a largo plazo que tiende no sólo a crear más locales de trabajo para los cooperativistas y sus familias, sino a superar las dificultades económicas y encontrar alternativas de supervivencia además de la ayuda externa. De esta manera, la Unión pretende ser competitiva en el mercado internacional, particularmente el de la región austral de África.¹⁵

Ligada a la producción de castaña de *cajú*, la UGC estudia también la posibilidad de llevar estos cultivos a grandes extensiones y construir fábricas de procesamiento con planes para introducir, al mismo tiempo, la experimentación de una industria para descascar, basada en el trabajo doméstico y la distribución de pequeñas máquinas para este proceso tanto para los cooperativistas como para sus familias. Si este proyecto funciona, la UGC deberá estar preparada para enfrentar mercados tan competitivos como la India y Brasil. La política del gobierno para la agroindustria en los próximos años, particularmente para el desarrollo de la industria de procesamiento de castaña de *cajú*, y el comportamiento del mercado tendrán también un papel decisivo en la evolución de este proyecto (PNUD, 1998: 77-78).

La UGC tiene aún otros proyectos agendados para el mejoramiento y la diversificación de productos de frutas y de la producción agrícola en general, cuyo éxito en términos de productividad todavía depende de la introducción de nuevas tecnologías, entre las cuales están un sistema eficiente de irrigación, la introducción de semillas de alto rendimiento y bajo costo, así como mejorar la formación de los cooperativistas. Al estar Mozambique enmarcado en la región austral del continente africano, la UGC tiene que estar preparada para competir no sólo en el mercado nacional, sino también ser capaz de enfrentar el mercado internacional, en el que Sudáfrica puede simultáneamente transformarse tanto en su mayor competidor como en su mejor mercado, dependiendo de la calidad y de la capacidad de competición de la Unión.

La UGC funciona hoy como *holding*, donde los 5 500 socios representan las *shareholdings*, pues, ya en 1997, se había creado una organización no gubernamental en su seno: la Unión General de Cooperativas/Apoyo al Desarrollo (UGC /AD), que funciona como una cooperativa de crédito y ahorro (Casimiro, 1999, UGC, 1999, y entrevistas al padre Gallipoli, 20 de julio de 2000 y 27 de abril de 2001).

A pesar del enorme crecimiento de la UGC, y de haber logrado sobrevivir a las reformas económicas, ajustándose en su forma y objetivos, ésta sigue dependiendo de los donativos del financiamiento externo y de préstamos bancarios para sobrevivir. Incluso así, la UGC está capacitada para financiar pequeños proyectos de apoyo a las cooperativas y tiene un eficiente sistema de crédito para las actividades de éstas, como ya se ha dicho.

¹⁵ Prosperino Gallipoli. Entrevista personal, 27 de abril de 2001.

En el *ranking* de las 100 mayores empresas de Mozambique, realizado por la KPMG (KPMG Mozambique, 2000), en el marco principal del volumen de negocios de 1999, la UGC se colocó en la novena posición dentro de un conjunto de 15 empresas en el ramo de alimentos y bebidas. En el cuadro de las 100 mayores empresas, en un universo de 191, la Unión quedó en la posición 49 (KPMG Mozambique, 2000).

En el área social, la UGC extendió los beneficios a los cooperativistas, que pasaron del pago de un salario a la organización de un fondo para la seguridad social de sus trabajadores. De este modo, las cooperativistas más viejas ya tienen una jubilación asegurada, que corresponde a la mitad del salario de las cooperativistas ligadas al sector productivo. Hoy la UGC tiene centros de salud y ofrece asistencia a sus socios y familiares con programas de salud pública (UGC, 1999: 17).

Las guarderías para los hijos de las trabajadoras aumentaron de acuerdo con las necesidades, y ahora, desde el punto de vista financiero, muchas de ellas ya no dependen del apoyo de la UGC para su supervivencia. El área educacional experimentó también un crecimiento progresivo y, además del conjunto de escuelas de nivel primario y secundario ya mencionadas, la Unión ofrece hoy una formación media y técnica en su escuela y su instituto comerciales, y tiene ya algunos de sus trabajadores beneficiados con becas en la enseñanza superior (UGC, 1999).

El crecimiento del movimiento cooperativo probó la necesidad de llevar las experiencias hacia otras partes del país. Así, en 1993, fue creada la Unión Nacional de Campesinos (Unac), la cual congrega a las asociaciones de campesinos que existen en el país y que no están ligadas a la UGC.

La UGC mantiene nexos de diversos tipos con otras organizaciones similares, tanto nacionales como extranjeras, como miembro de la Unac. La presidenta de la UGC, Celina Cossa, es también presidenta de la Unac.

A lo largo de sus 21 años de trabajo es fácil verificar que la Unión se enfrentó a varias dificultades, muchas de las cuales han sido superadas. Aunque todavía depende de financiamientos externos y créditos bancarios, sigue haciendo frente a varios problemas, entre éstos el nivel de productividad de algunas cooperativas, que luchan también con el inconveniente de una mano de obra constituida por mujeres de edad avanzada e iletradas, con las que no siempre es fácil realizar cambios. La UGC prepara un programa social para jubilar a las mujeres más grandes, consciente de que necesita modernizar las cooperativas para entrar a la competencia impuesta por el libre mercado.

Las dificultades de crecimiento que padecen las cooperativas más débiles se explican, por lo menos en parte, como resultado de la contradicción entre las cooperativas y la UGC en su disputa por los mejores trabajadores. De esta manera, tenemos una UGC reforzada en sus sectores más importantes, como unidades de producción y cooperativas piloto, por las cooperativistas más vivas y dinámicas, en detrimento de las cooperativas más débiles. Una eventual explicación para esta

situación sería la necesidad de reforzar los sectores más rentables de la UGC mientras se buscan alternativas para esas mismas cooperativas en crisis.

A lo largo de nuestro trabajo de campo fue posible encontrar mujeres con una capacidad extraordinaria para la gestión, liderazgo y organización, al ocupar puestos para la jefatura de las unidades de producción de la UGC o en las cooperativas más importantes. Al mismo tiempo, verificamos que en otras cooperativas, ellas eran socias únicamente por cuestión de supervivencia, pero sin esperanza para el futuro. He aquí algunos testimonios:

Eugenia N. tiene 56 años y es responsable del vivero de árboles frutales. Trabaja desde hace 17 años en la UGC, después de haber estado en la cooperativa Marien Ngouabi. Hay 42 trabajadores bajo su responsabilidad, de los cuales 38 son mujeres. La función de este equipo de trabajo es crear plantitas mejoradas para su plantación definitiva, entre las cuales se encuentran los castaños de *cajú*, por medio de sistemas de injertos para producir un tipo de planta económicamente más rentable. Es casada, tiene a dos de sus hijas como trabajadoras de la UGC, una de ellas en la escuela de formación como mecánica. Ésta es su historia:

Empecé mis actividades en la *machamba* del pueblo en 1979, pero no estaba satisfecha porque trabajaba sin remuneración. Después de un año llegó el señor Prosperino, quien juntó a las mujeres y nos ayudó a organizar las cooperativas y nos enseñó, sobre todo, a producir muchas cosas. Tuvimos después la necesidad de hacer una casa agraria y de tener nuestra organización. Aprendimos nuevas ideas sobre nuevos cultivos, cómo hacer prados, canales de irrigación y cómo aprovechar mejor el agua. Al principio teníamos que aportar una pequeña contribución para alquilar un transporte para llevar nuestros productos al mercado. Recibíamos una cantidad mínima por la venta de los productos, pero teníamos el gran apoyo de la producción de alimentos para nuestras familias. Poco a poco aprendimos a utilizar el banco para depositar nuestros ahorros. Más tarde empezamos con la producción de puercos. Pero cuando vimos que la producción de éstos era lenta y que necesitábamos por lo menos dos años para ver el resultado de nuestra inversión, entonces los cambiamos por pollos. Era más fácil, podíamos ver el resultado de nuestro trabajo en tan sólo 45 días y, al mismo tiempo, mejorábamos la agricultura. La UGC creó un matadero para pollos y la mayor parte de las mujeres que ahí trabajan, como en otras unidades de producción, salieron de las cooperativas. Las mejores cooperativistas van a trabajar en las unidades de producción de la UGC. Las cooperativas quedan más débiles, pero, por otro lado, eso mejora el trabajo de la Unión.¹⁶

La cooperativa Che Guevara es una cooperativa piloto, con tractores y un sistema de irrigación alimentado por una bomba, donde, para la rentabilidad del

¹⁶ Eugenia N. Entrevista personal. Teresa Cruz e Silva e Hilário Diuty, 31 de mayo de 2000.

trabajo, la UGC realiza inversiones. La cooperativa tiene un terreno de 25 hectáreas, aunque no totalmente cultivadas. Se dedican básicamente a la producción de hortalizas durante la mayor parte del año, con cultivos alternados que se adaptan a cada estación del año. Allí trabajan 38 individuos, de los cuales 10 son trabajadores asalariados y ya cuenta con 11 jubilados, cuya pensión la paga la UGC. Además de la producción agrícola, que incluye 800 castaños de *cajú* y un plan para el desarrollo de cítricos, la cooperativa posee una unidad de producción de carne de pollo, con una capacidad para 4 000 pollitos, y las cooperativistas están satisfechas con los resultados de su trabajo. He aquí el testimonio de uno de sus miembros:

Empezamos nuestras actividades en 1980. Durante la época del grupo dinamizador deforestamos y formamos la cooperativa. No tenemos miedo de trabajar. La cooperativa tiene 25 hectáreas. Cultivamos col, lechuga, tomate, camote, ejote y pimienta. En la temporada caliente sembramos pimienta, ejote, tomate y maíz. Tenemos un plan de producción que está hecho en colaboración con la UGC. Hay un carro que viene regularmente a la cooperativa y se lleva nuestros productos para venderlos. El contador registra nuestra producción. Las ganancias se depositan en la cuenta de la UGC y entran en la contabilidad de nuestra cooperativa para pagar los préstamos que recibimos. Una vez por mes hacemos una junta para discutir el trabajo realizado y lo que hay que hacer. Estamos representados en la Asamblea General de la UGC, pero hay juntas anuales para hacer el balance de los trabajos de las cooperativas y es ahí donde hay que decidir para el futuro.

Hay cooperativistas que son retiradas de sus cooperativas para trabajar en la UGC, pero eso refuerza la capacidad de la Unión, sobre todo de ciertas unidades. Creemos que eso es importante, porque es la UGC la que nos garantiza el sustento. Para las mujeres jefes de familia la cooperativa es una ayuda para alimentar a la familia, principalmente porque podemos tener un poco de tierra donde producir para nosotros.¹⁷

Para dar testimonio de otra cara de las cooperativas más débiles de la UGC, escogimos la Marien Ngouabi, donde de las 50 cooperativistas que estuvieron en su formación, hoy tan sólo hay siete, de las cuales dos habían sido retiradas por la UGC el día anterior a la realización de nuestra entrevista para hacer otros trabajos. La presidenta estaba enferma hacía más de seis meses y las otras eran mujeres de edad avanzada. La cooperativa enfrenta desesperadamente la falta de mano de obra. Bajo la dirección de F. Moiane, de 48 años, enviada por la Unión para ayudar en los trabajos de producción en ausencia de la presidenta, se hace agricultura utilizando sistemas de ayuda mutua como alternativa a la carencia de mano de obra.

¹⁷ Cooperativa Che Guevara. Entrevista colectiva. Teresa Cruz e Silva e Hilário Diuty, 10 de junio de 2000 (traducción libre).

La cooperativa posee un pequeño aviario, destruido hace más de seis meses por un vendaval y 300 naranjos. Sobre el aviario, su rentabilidad y posible recuperación, las cooperativistas entrevistadas nada supieron explicar, ya que la compañera que asumía la responsabilidad de esa área estaba ausente. Abordadas sobre su futuro, se limitaron a informarnos que no saben si los árboles frutales podrán o no constituir una alternativa para mejorar sus ingresos, y que sólo permanecían ligadas a la cooperativa porque podían gozar del beneficio de la utilización de una parcela de tierra para la producción familiar, ya que las utilidades eran exiguas.¹⁸

En una entrevista colectiva realizada con las asociadas de las cooperativas Alberto Cassimo, Ngungunhana, Manuel Pinto da Costa y José Eduardo dos Santos, encontramos a un grupo de mujeres de varias edades en plena producción agrícola, pero igualmente con una falta de esperanza y acomodadas a una situación en que lo más importante era luchar por lo menos para sobrevivir, y que lo hacían en el marco de las actividades de la cooperativa. C. Tchaúque, 60 años, de la Cooperativa Manuel Pinto da Costa, nos dijo:

En los años ochenta, cuando fundamos la cooperativa, éramos 40 elementos. El número fue sufriendo una reducción hasta llegar a nueve personas, quienes hoy forman la cooperativa. Nos dedicamos a la producción de puercos y más tarde a la de pollos, de la que era posible obtener ganancias más rápidamente, ya que se puede producir por lo menos tres veces al año. Antes el negocio rendía beneficios, pero últimamente tenemos muchas deudas. El gran problema en los aviarios son las cuentas que hay que pagar debido a los perjuicios que hemos sufrido. Incluso así, no desistimos del trabajo, ya estamos acostumbradas. No recibimos mucho. Nuestro salario no alcanza para vivir y mandar a los hijos a la escuela. En la agricultura perdemos mucho dinero en las hortalizas, porque hay muchas personas que se dedican a los mismos productos y el mercado está saturado, pero por lo menos tenemos la posibilidad de dar comida a la familia, pues cada una de nosotras tiene tierra para cultivar dentro de la cooperativa. Tenemos este proyecto con los árboles frutales y trabajamos bien, pero no sabemos si vamos a mejorar.¹⁹

Lurdes, Rosalina y Ruth, involucradas en el mismo proyecto de cooperativas arriba mencionado, al hablar de sus cooperativas y del proyecto que la UGC está financiando para su rehabilitación, nos dijeron que éste engloba a cinco cooperativas, pero que no saben si su vida va a mejorar, incluso con los árboles frutales y con el apoyo de la UGC. Tienen esperanzas, pero nada saben. Están endeudadas. La mitad de los pollitos que reciben a crédito mueren, pero quedan las deudas, difíciles de saldar. Otras cooperativistas más jóvenes se mostraron también sin esperanza

¹⁸ Cooperativa Marien Ngouabi. Entrevista colectiva. Teresa Cruz e Silva e Hilário Diuty, Junio de 2000.

¹⁹ Cooperativas Alberto Cassimo, Ngungunhana, Manuel Pinto da Costa y José Eduardo dos Santos. Entrevista colectiva. Teresa Cruz e Silva e Hilário Diuty, 14 de junio de 2000 (traducción libre).

de un futuro mejor. De estas entrevistas nos quedó la impresión de que pocas de las mujeres que forman parte de las cooperativas con más problemas creen en cambios que puedan alterar sus vidas.²⁰

Una reflexión sobre las declaraciones de las entrevistadas que hemos mencionado nos llevó a nuestra pregunta de partida sobre la viabilidad de la UGC como alternativa en una situación de mercado competitivo. Reunimos algunos testimonios y un resumen de los resultados de nuestro trabajo, y conversamos con Prosperino Gallipoli, a quien le pedimos que hiciera un análisis de la situación:

En 1990 había un estado de movilización. Era necesario verificar siempre en una cooperativa quiénes eran los mejores, los buenos, los medianos y los malos, o sea, los más inteligentes, abiertos y críticos. Los mejores no llegaban a 10, los buenos eran aproximadamente 20 y los malos 50%. En esa época, se delineó una estrategia y se empezó a hacer una selección para mejorar el nivel, de bueno para arriba. Al fin de 10 años, tenemos 10% óptimos.

La edad avanzada es un factor importante en nuestras campesinas, con influencia en la formación. En este proceso de formación se incluye a los dirigentes, pero ¡no se puede esperar una revolución!

Una de las cosas más importantes para las cooperativistas es poder recibir un salario. Hasta 1987, todas ellas tenían salarios. Después vino el aumento de los salarios y todos los problemas ligados al PRE.

Los aviarios fueron una solución económica después de la carne de cerdo, pero hoy no resuelven los problemas. Hay mucha competencia en la producción de pollo. En el área de la agricultura existen las *machambas*, que proporcionan algún salario, pero no resuelven los problemas. Estamos en busca de nuevas soluciones con la entrada de la UGC al microcrédito, el cual deberá ser agregado a las cooperativas. Hay 1 400 trabajadores que deben tener acceso al microcrédito para sus actividades. El promedio del crédito es de uno a uno y medio millones de meticales, pudiendo llegar hasta tres millones de esta moneda. Esto podría ser una salida para revitalizar a las cooperativas, ya que sin salario no se puede vivir. La cooperativa de crédito y ahorro ya está registrada como una ONG. La UGC introdujo también un sistema de seguridad social. Las cooperativistas la descuentan para la jubilación, pero los jóvenes no quieren asociarse a las cooperativas, no ven futuro en éstas.

El objetivo principal de la UGC es ayudar a las mujeres a pensar más para tomar sus decisiones.²¹

El equilibrio entre los puntos fuertes y débiles que mueven a la UGC se basa sobre todo en su capacidad de crear condiciones para eliminar los impedimentos

básicos que afectan a sus miembros, en su mayoría mujeres, como educación, formación técnica, acceso a la tierra, al crédito y al empleo, reforzando de este modo la creación de espacios de libertad. En este equilibrio cuenta también la construcción gradual de métodos democráticos para la toma de decisiones por parte de las cooperativistas a varios niveles, en un proceso descentralizado.

De esta manera, estamos ante un campo privilegiado para el surgimiento de rupturas con una ciudadanía socialmente restringida y fragmentada (Casimiro, 1999: 112), y para hacer emerger «elementos emancipadores»²² que crean nuevas formas de relacionarse, no sólo en la esfera pública, sino, sobre todo, en la familia, ante el hecho de que «una parte de la vida productiva de la mujer se realiza fuera de la institución familiar» (Casimiro, 1999: 203).

La autonomía adquirida por las cooperativistas en la lucha por el acceso y control de recursos y para tomar decisiones en la pelea por la supervivencia las condujo gradualmente a un proceso de fortalecimiento que se reflejó en la familia y en la comunidad. Si consideramos que las relaciones sociales de este género son también relaciones de poder, y sin perder de vista que en el seno de la familia y de la sociedad también se construyen con base en un modelo androcrático, en el que no hay lugar para el protagonismo de la mujer, queda claro que se trata de un proceso gradual y en permanente construcción, en el cual la lucha para que la mujer se transforme en sujeto histórico implica, en primer lugar, la valoración de su conciencia de ciudadana y una lucha permanente para hacer valer sus derechos.

En la lucha por el acceso al poder, el cambio tiene que venir desde dentro y forma parte de una lucha que cuenta con la participación de las cooperativistas. No puede ser impuesta por modelos importados ni funciona con base en el paternalismo; necesita ir más allá del ejercicio de una ciudadanía formal, consentida por el sistema, pasando por la construcción gradual de nuevas actitudes y de nuevos valores: «Si le da poder a alguien, también puede retirarlo: es solamente cuando el poder lo conquistan por sí mismos, cuando es propiamente suyo...» (Townsend *et al.*, 1999: 24).

4. CONCLUSIONES

Partiendo del caso de la Unión General de Cooperativas Agropecuarias de Maputo (UGC), nuestro estudio se proponía analizar la posibilidad de alternativas de producción viables para que el proyecto continuara siendo válido en un contexto de economía abierta.

²⁰ *Idem.*

²¹ Prosperino Gallipoli. Entrevista personal, 20 de julio de 2000.

²² Conceição Osório, en su texto sobre «Poder político y protagonismo femenino», contenido en el volumen 1 de esta colección, aborda la problemática del acceso al poder por parte de la mujer y plantea situaciones que, de algún modo, pueden ser comparadas con las de las cooperativistas y las luchas emancipadoras.

La búsqueda de soluciones, en el marco que caracterizó el surgimiento y desarrollo de la UGC, ayudó a encontrar formas alternativas de producción, primeramente como respuesta a las estrategias de socialización del campo introducidas por el Frelimo después de la independencia nacional, bajo cuya estrategia global la cooperativización debería desempeñar un papel vital; en segundo lugar, para encontrar una nueva respuesta a la introducción en Mozambique de la política neoliberal y la consecuente hegemonía del mercado.

La historia de la UGC también nos ha mostrado que la filosofía de su crecimiento, al arraigarse en el principio de crear las condiciones económicas y sociales para capacitar a sus miembros en la decisión de mejorar sus vidas, y porque está anclada a grupos de poblaciones pobres y mayoritariamente de mujeres, adoptó una dimensión intersectorial entre la inversión en el sector social y el sector económico.

Al analizar su interferencia en el área social, la UGC considera como aspectos positivos de su trabajo: *a)* el pago de un salario mensual a las cooperativistas, *b)* la creación de empleo «mediante puestos de trabajo generados por emprendimientos comunes y en las estructuras de la UGC», beneficiando así a los miembros de la unión y a sus grupos familiares (UGC, 1998), *c)* servicios de salud pública extensivos a los familiares de los cooperativistas, *e)* educación: guarderías, escuelas primarias y secundarias, enseñanza técnica y media, extensible a los familiares de los socios, y *f)* el estímulo para la producción, con una base individual en el seno de las cooperativistas (hortícolas y avicultura), con acceso al microcrédito y con el objetivo de desarrollar un pequeño empresariado rural, que se extendió más tarde a algunas familias pobres fuera de las cooperativas (UGC, 1998).

Si tenemos en consideración que: *a)* las retribuciones de la economía familiar en las zonas urbanas como Maputo aún dependen fuertemente de las diversas contribuciones de los miembros en su conjunto, donde el peso del trabajo asalariado es todavía muy importante, *b)* que las reformas económicas introducidas en el país en las décadas de 1980 y 1990 disminuyeron las oportunidades de acceso al trabajo asalariado, *c)* que la mayoría de las mujeres cooperativistas, por su nivel de educación y edad, difícilmente tendría acceso a un empleo asalariado, *d)* además de que el acceso y el control de los recursos, como la tierra y el crédito, gracias a la complementariedad de los aspectos sociales y económicos, crearon las condiciones para el principio de una gestión colectiva por medio de métodos participativos en la toma de decisiones, y *e)* que la UGC, más que ayudar a las mujeres a encontrar alternativas de supervivencia, procura darles acceso a la posibilidad de crear una actividad generadora de ingresos, el balance de sus actividades debe considerarse como positivo y centrado en que la mujer tomara conciencia de su ciudadanía real, con lo que se abrieron espacios, ya sea para su acceso al poder, ya para contribuir al cambio gradual de las relaciones de este género en la familia y en la sociedad (Casimiro, 1999).

Entre las décadas de 1980 y 1990 la UGC pasó de una fase embrionaria a un crecimiento tanto cualitativo como cuantitativo. Los datos que se presentaron en los rubros anteriores nos muestran hoy una UGC constituida como empresa cooperativa, cuyas rentas no dependen de la producción de las cooperativas, sino de las actividades de sus unidades económicas integradas en la unión. Al mismo tiempo, estamos ante un escenario en que una parte del sector enfrenta problemas de supervivencia por su incapacidad de hacerle frente a la competencia del mercado.

Al estar la UGC orgánicamente ligada a las cooperativas, su esfuerzo ha consistido en encontrar alternativas para compensar «algunas ineficiencias de producción en moldes colectivos, particularmente en el sector agrario, sin desactivar, no obstante, las estructuras de encuadre, en especial el apoyo logístico y los mecanismos de extensión» (UGC, 1998). De este modo, la UGC camina hacia el proceso de surgimiento de un empresariado rural (UGC, 1998), al mismo tiempo que refuerza los emprendimientos que permiten la autosustentabilidad de la unión como un todo.

¿Dónde reside, entonces, la alternativa?

Para ajustarse a la hegemonía del mercado, la UGC tiende a modernizar su capital, ya que difícilmente logra huir de la dimensión global de la división del trabajo. En el actual contexto económico de Mozambique, la búsqueda de alternativas para las cooperativas, más que una producción contrahegemónica, semeja una alternativa de supervivencia, en que la tendencia parece conducir hacia una aproximación cada vez mayor de las mujeres al mercado y su proletarización (Townsend *et al.*, 1999).

Las formas hegemónicas, invariablemente, producen respuestas alternativas que no son exclusivamente económicas, sino que pueden presentar la dimensión social. Fue justamente en el área social donde la UGC supo construir formas inclusivas, particularmente en el caso de las mujeres. La historia de la UGC nos muestra cómo ha sido posible construir un camino que le ha dado a sus miembros el papel de sujetos de una transformación. Las formas democráticas de gestión y la toma de decisiones, generadas por los cooperativistas, constituyen la palanca que determinó esa misma transformación y ha permitido la construcción de un saber solidario (Santos 1998, 2000).

Para que las alternativas económicas de este proyecto tengan viabilidad para mantener la riqueza de las alternativas sociales, la UGC tendrá que concretar los proyectos que tiene en su agenda, modernizar sus cooperativas y unidades de producción, volverse competitiva nacional e internacionalmente, y crear sistemas para que sus diversos emprendimientos sean autosustentables. Mientras el apoyo del Estado en el ámbito local y nacional no se haga sentir, la Unión General de Cooperativas tendrá que reforzar a sus afiliadas y unidades de producción, de cuya iniciativa depende su desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

- Andrade, X., et al., *Famílias em contexto de mudança em Moçambique*, WLSAMoz/CEA, Maputo, 1998.
- Appadurai, A., «Globalization and the Research Imaginations», *International Social Science Journal*, 160, 1999: 229-238.
- Araújo, M., «Migrações internas e o processo de urbanização», en Direção Nacional de Estatística, *Dinâmica demográfica e processos económicos e sociais*, Comissão Nacional do Plano, Maputo, 1990: 72-89.
- Ayisi, R. A., *Supporting Women Farmers in the Green Zones of Mozambique*, Unicef, Seeds, 1995: 17.
- Casimiro, I., *Paz na terra, guerra em casa: feminismo e organizações de mulheres em Moçambique*, tesis de maestría en sociología, Universidad de Coimbra, Coimbra, 1999.
- Coelho, J. P. B., «State Resettlement Policies in Post-colonial Rural Mozambique: the Impact of the Comunal Village Programme on Tete Province, 1977-1982», *Journal of Southern African Studies* (24)1, 1998: 61-92.
- Cossa, C. (s/f.), Introdução (mimeo.).
- Cruz e Silva, «As redes de solidariedade como intervenientes na resolução de litígios: o caso da Mafalda», en Boaventura de Sousa Santos et al., *Conflito e transformação social, uma paisagem das justiças em Moçambique*, informe de investigación, CEA/CES, Maputo/Coimbra, 2000.
- Depelchin, J., *UGC de 1981 a 2000: o que fomos, o que somos, o que queremos ser: avaliação e perspectivas*, Maputo, s/f (mimeo.).
- Egziabher, A. G., «Agriculture urbaine, coopératives et population urbaine pauvre à Addis-Abeba», en A. G. Egziabher et al., *Faire campagne en ville: l'agriculture urbaine en Afrique de l'Est*, Centre de Recherches pour le Développement International, Ottawa, 1995: 100-133.
- Francisco, A., «Reestruturação económica e desenvolvimento de Moçambique», en Boaventura de Sousa Santos et al., *Conflito e transformação social: uma paisagem das justiças em Moçambique*, informe de investigación, CES/CEA 7, 2000: 1-7, 64.
- Giddens, A., *New Rules of Sociological Methods*, Hutchison, Londres, 1976.
- , *As Consequências da Modernidade*, Celta, Lisboa, 1998.
- Hyden, G., *Beyond Ujamaa in Tanzania*, Heinemann, Londres, 1980.
- KPMG Mozambique, *As 100 Maiores Empresas de Moçambique*, KPMG Moçambique, Maputo, 2000.
- Kirchney et al., *Relatório final de avaliação de movimento de cooperativas agropecuárias de zonas verdes de Maputo*, agosto de 1987 (mimeo.).
- Mamdani, M., *Citizen and Subject, Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*, James Curry, Londres, 1996.
- Ministério da Agricultura, *Relatório por ocasião da visita de S. Exa. Ministro da Agricultura e Pescas*, marzo de 1995 (mimeo.).

- Ministry of Planning and Finance, *Understanding Poverty and Well-Being in Mozambique, the First National Assessment (1996-1997)*, Maputo, 1998.
- Muthemba, M., *Cooperativas agrícolas de Moçambique, no pós-independência: o caso da Cooperativa 25 de Setembro em Boane*, tesis de licenciatura en Historia, Universidade Eduardo Mondlane-Faculdade de Letras, Maputo, 1998.
- O'Laughlin, B., «A questão agrária em Moçambique», *Estudos Moçambicanos*, 3, 1981: 9-32.
- Osório, C., *Mulher e Poder: Revisão da Literatura*, Maputo, 1999 (mimeo.).
- PNUD, *Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano de Moçambique*, Maputo, 1998.
- , *Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano de Moçambique*, Maputo, 1999.
- Roesch, O., *Socialism and Rural Development in Mozambique: the Case of Aldeia Comunal 24 de Julho*, tesis de doctorado, Universidad de Toronto, Ontario, 1986.
- Santos, Boaventura de Sousa, «A reinvenção solidária e participativa do Estado», Congreso sobre a sociedade e a reforma do Estado, São Paulo, marzo de 1998.
- Saul, J., *Recolonization and Resistance in Southern Africa in the 1990s*, Africa World Press, New Jersey, 1993.
- , «O Estado da Frelimo: da revolução à recolonização», *arquivo*, 15, 1994: 5-42.
- Tinker, I., «L'agriculture urbaine nourrit déjà des villes», en A. G. Egziabher et al., *Faire campagne en ville: l'agriculture urbaine en Afrique de l'Est*, Centre de Recherches pour le Développement International, Ottawa, 1995: 7-16.
- Tickner V., «Structural Adjustment Pricing in Mozambique», *Review of African Political Economy (ROAPE)*, 53, 1992: 25-42.
- Townsend, J., et al., *Fighting Patriarchies and Poverty*, Zed Books, Londres, 1999.
- UGC, *Movimento de cooperativização do campo. Balanço de 1984 e Plano de 1985*, marzo de 1985 (mimeo.).
- , *União Geral de Cooperativas: Zonas Verdes, Relatório provisional*, Maputo, 1997 (mimeo.).
- , *Folha Informativa*, Maputo, abril de 1998.
- , *AUGC*, Maputo-Mozambique, 1999 (mimeo.).

XI. La acción local de los ciudadanos como forma de resistencia ante la nueva ola de colonización global: el caso de la Asociación In Loco en el sur de Portugal

ALBERTO MELO

I. PREFACIO

Una búsqueda interior

Este capítulo presenta una descripción y un análisis subjetivo, ciertamente parcial, derivado de una intensa experiencia personal. La vida consiste en una combinación de azar y opción, y lo que se elige es resultado de un enmarañado complejo de ideas y emociones, por lo tanto, lo que sigue no pretende ser un informe académico de investigación sino, más bien, una búsqueda interior (claramente entrelazada con un contexto exterior de teorías, ideologías, contactos sociales y condiciones materiales), al analizar los factores que desencadenaron y acompañaron, de 1985 a 1998, mi propio compromiso en la creación y gestión cotidiana de un proyecto de desarrollo local en el interior rural del sur de Portugal.

La dimensión política

Tomé conciencia de mí mismo como ser social en el contexto extremadamente conservador y autoritario de la sociedad portuguesa de la década de 1950. No constituye, por así decir, una sorpresa que la dimensión política haya adquirido, desde muy temprano, una gran relevancia en mis preocupaciones. Y también muy pronto escogí otras opciones fundamentales que moldearon mi conciencia política de adolescente. Después de un gran empeño inicial contra la dictadura de derecha y la pobreza creciente en la sociedad portuguesa, emergió una fuerte convicción: todo el despotismo es de derecha, a pesar de sus aparentes divergencias y antagonismos, porque todos los regímenes fundamentados en la intimidación física y en la propaganda de tipo «lavado de cerebro» tienen como único fin la protección de los intereses oscuros de los poderosos y el bloqueo del libre flujo del cambio social que beneficie a la inmensa mayoría oprimida. Más que el intento por situar mi posición en la tradicional dicotomía «izquierda-derecha», empecé

por buscar un compromiso político en el *continuum* «autonomía personal contra constreñimientos externos». Algún tiempo después, la situación evolucionó hacia otro tipo de *continuum*, «autodeterminación social contra imposición estatal» y, aún más tarde, hacia una «iniciativa colectiva local contra extensión determinada por la globalización económica hegemónica» o «conciencia ciudadana y voluntad colectiva contra totalitarismo prepotente y mercantilista» o simplemente «energías vitales contra pulsiones fatales».

Educación crítica

Hasta el final de la década de 1970, en una época de intenso debate ideológico, incluso (si no esencialmente) en el seno de la izquierda, mi postura era realmente incómoda. No estaba entre los que querían «tomar el poder» para definir e instituir una política gubernamental completamente diferente, en la que todas las medidas fueran con una orientación de «izquierda pura». Mi mayor preocupación era la de «quebrantar y dividir el poder existente», de manera que se diluyera en millones de «partículas» que serían tomadas y administradas de manera creciente por todos los ciudadanos. Esto me hizo comprender, primeramente, que no tenía lugar en ningún partido político y que ningún partido político tendría interés en la aplicación de mis ideas. Segundo, que en caso de tener interés en un compromiso político activo, tendría que encontrar un significado en una política más incluyente que la convencional «política del poder». Al considerar esto, el tipo de trabajo político que estimula continuamente a los ciudadanos a volverse más autónomos, más informados, más poderosos en todos los aspectos de la vida personal y social debe denominarse *educación* (crítica). Y es por eso que, luego de varios años de una vivencia estudiantil realmente infeliz, y a veces rebelde, me sentí obligado a regresar al ámbito de la enseñanza. Sin embargo, al analizar la educación desde un punto de vista político, percibí la urgencia que había de descubrir —al aprender haciendo y al hacer aprendiendo— una nueva metodología que no fuera sólo una forma de predicar la hegemonía de algunos sobre la mayoría ni un nuevo pilar de apoyo del poder convencional y de su cultura e ideología dominantes. De esta manera, una educación crítica, constructiva y transformadora implicaría quitar el control absoluto a los profesores y salones de clase y construir fuertes eslabones con los movimientos sociales; un nuevo proceso en el que «profesores» y «alumnos» estuvieran implicados de un modo también activo en una búsqueda común de soluciones a los problemas locales que afectan cotidianamente a los socialmente desfavorecidos. Aquí, la educación ya no pretende proporcionar respuestas predefinidas (para cuestiones que generalmente ni siquiera fueron planteadas), sino, más bien, lo opuesto: significa estar atento a los problemas que las personas enfrentan y, después, procurar y producir los conocimientos, comportamientos y capacidades

necesarios para contribuir a la elaboración e implementación de las respuestas más apropiadas y eficientes.

El «laboratorio» de la acción social

Entre tanto, muchas cosas se oían y leían, algunas se decían, pero muy pocas quedaban escritas (nunca he sido de escritura fácil y fluida). Otras dos percepciones fundamentales que iluminaron mi espíritu fueron decisivas para el posterior desarrollo de los acontecimientos. Primero, el hecho de que definir, discutir, demostrar —sólo en el discurso— no era un método verdaderamente «científico», pues sólo se conoce una realidad después de experimentarla, y un entendimiento de la sociedad exige la entrada en el «laboratorio» de la acción social. Segundo, que desde mediados de la década de 1970 el «mundo de la política» estaba retrocediendo rápidamente y asumiendo un papel cada vez más servil bajo el amparo del poder económico y financiero. La consecuencia de percibir esto fue tomar la decisión, a principios de la década de 1980 —como autodenominado «científico social»—, de volverme un practicante directamente implicado en un proceso que debería, de algún modo y en algún lugar, tocar, aunque en una escala microscópica, algunos de los problemas básicos que enfrentaba la sociedad contemporánea.

Una encrucijada ilustrativa

Para un mejor entendimiento de la realidad social, y un simultáneo avance en términos de política activa, el área escogida para este compromiso personal y colectivo fue la entonces innovadora área de desarrollo local. Como es obvio, esta elección no significa que el desarrollo local sea el único, o siquiera el mejor sector en el cual una persona puede aplicar su empeño político. Es tan sólo uno entre muchos. En este aspecto no hay alternativas perfectas. Quien quiera proseguir su visión de una sociedad mejor, tiene únicamente que descubrir la manera (y esto abarca el campo y la forma en que la persona se siente simultáneamente más útil y más apreciada), el momento preciso y el lugar adecuado. Esa opción puede ser, y efectivamente lo es, muy diversificada, de acuerdo con cada persona, e incluso, según la época de la vida de cada quien. Para alguien como yo, que acababa de regresar a Portugal en vísperas de su adhesión a la Unión Europea y, más específicamente, que me estaba estableciendo en el Algarve, donde el crecimiento desordenado del litoral turístico contrastaba fuertemente con el vasto interior rural bajo amenaza de extinción, el desarrollo local surgió, a principios de la década de 1980, como la elección adecuada, una encrucijada ilustrativa de las contradicciones fundamentales y estratégicas de la sociedad portuguesa.

Una jornada personal

Las páginas que siguen intentarán revelar el ambiente concreto e ideológico en que se desarrolló un trabajo personal y colectivo de desarrollo local. Naturalmente que todo significó un esfuerzo colectivo, comúnmente comprendido, deseado, decidido, apreciado y apoyado por los que —mujeres (en su mayoría) y hombres— desempeñaron, y la mayoría aún desempeña, un papel importante en esta aventura alentadora, a veces penosa, más frecuentemente compensadora. Sin embargo, no pretendo expresar las opiniones de nadie además de la mía, en la medida en que, en este capítulo, procuro un conocimiento más profundo de los pros y los contras, de los altibajos, de mi propio compromiso con el desarrollo local desde 1983. Y no lo hago solamente para efecto de una introspección individual, sino porque creo que este ejercicio puede tener alguna utilidad para otros que pretendan comprender mejor la propia jornada de compromiso social.

¿Existirá alguna autoría individual cuando se escriben textos resultantes de una conjunción de ideas y opiniones propias con las de otros que están inconmensurablemente incorporadas dentro del capital mental de cada uno? Ciertamente, no alego haber elaborado este capítulo solo ni detentar los derechos de autor. Lo he reflexionado y lo he escrito, es cierto, y a costa de mucho esfuerzo, pero hubo otros, muertos y vivos, que contribuyeron decisivamente a su realización, así que de ninguna manera reclamo la autoría. Finalmente, permítanme prevenir al lector: no tengo por costumbre hacer citas muy fieles (hecho por el cual pido disculpas a mis compañeros de la academia), pues generalmente pierdo la noción de la diferencia entre aquello que los demás escribieron y dijeron, y aquello con lo que concordé, me identifiqué, medité y asimilé. Sin embargo, siempre que logre recordar al autor o libro que más influyó en mí sobre determinado asunto, compartiré una adecuada referencia al final del capítulo.

2. EL INICIO DE LA ASOCIACIÓN IN LOCO

Un proyecto de vida

En 1983, cuando empecé los trámites para el regreso definitivo a Portugal, después de 18 años de vivir y trabajar casi ininterrumpidamente en el exterior, esboqué un proyecto de «desarrollo comunitario participativo». El regreso a casa sólo tendría sentido si me permitía desempeñar una nueva actividad complementaria, un incentivo que se pudiera convertir en proyecto de vida. La propuesta —entonces denominada Proyecto Verde Azul (pues fue concebido para una zona rural a la orilla del océano Atlántico)— fue remitida a dos municipios en el centro oeste de Portugal, región que conocía bien desde mi infancia y adolescencia. Para mi sorpresa, no recibí ninguna respuesta de las autoridades locales. Como más tarde comprendí, en los primeros 20 años luego de la Revolución de 1974, de un régimen

de subdesarrollo planeado, se había pasado a otro en el que las recién creadas entidades de poder local estaban exclusivamente preocupadas por la infraestructura física y no contaban con tiempo ni disposición para las denominadas iniciativas «inmateriales». Ese proyecto, sin embargo, no quedó olvidado cuando, un año después, acepté una invitación para mudarme al Algarve, la provincia más al sur de Portugal, y participar en el proceso de organización del Instituto Politécnico de Faro (capital del Algarve).

El «interior escondido»

Sin conocer esta región —aproximadamente a 300 km al sur de Lisboa—, pasé los primeros meses en misiones de reconocimiento a través del «interior olvidado», además de hacer algún trabajo administrativo. Y fue una enorme sorpresa descubrir, incluso por detrás de las renombradas y cosmopolitas playas del Algarve —una de las más famosas estancias balnearias del mundo—, un panorama completamente opuesto, una sociedad rural que aún mantenía la mayor parte de sus características esenciales. La Sierra de Caldeirão es una zona semimontañosa que, a pesar de su suelo poco fértil y declives prominentes, ha proporcionado refugio y alimento a las personas que ahí radicaron desde tiempos inmemoriales. La subsistencia humana en la región se basa en una utilización diversificada de la tierra (bosque mediterráneo y árboles frutales, pequeñas huertas, crianza de ganado, etc.) y en un cultivo de autosubsistencia fuertemente arraigado.

Una identidad negativa

Esta sierra es uno de los innumerables territorios rurales europeos que hoy son víctimas de la marginación, condenados a una extinción progresiva por los «macroarquitectos» de la economía moderna. Aquí estaba, por lo tanto, la arena para la pelea entre las nuevas ideologías económicas y la determinación de «poner a las personas en primer lugar» y de hacer la demostración práctica de que la voluntad, la emoción, el querer y la acción humana pueden resistir los designios destructivos de la economía mundial. El primer obstáculo que debe superarse es la ola de derrotismo entre la población local. Habían interiorizado una identidad negativa: una persona de la sierra era hace mucho, a los ojos de la población urbana, sinónimo de retrógrada y atrasada. Era por eso que, al viajar por la zona, a la pregunta: «¿Aquí ya es la sierra?», se obtenía invariablemente la respuesta: «No, no, la sierra es más arriba». Y más y más arriba, hasta que empezábamos a descender por la ladera del lado contrario sin haber llegado todavía a la «sierra»...

Particularmente después de la década de 1960, años sucesivos de emigración habían despojado de sus miembros más activos y eficaces a las comunidades

locales, hecho que agravó fuertemente este desalentado panorama. «Ésta es sólo la tierra de aquellos que ya fueron y de los que aún han de ser», era así, de esta manera, como algunos de los residentes se referían a su área como un territorio donde sólo los viejos y los niños toleraban vivir. Los papás eran los primeros en motivar a sus retoños a partir pronto en busca de empleo y de mejores condiciones de vida.

Un plan de acción provisorio

Con el auxilio de algunos colegas del Instituto Politécnico de Faro, preparé, durante 1984, un «plan de acción para el desarrollo integrado» que se entregó más tarde a la holandesa Fundación Bernard van Leer, organismo especializado en el apoyo a proyectos de base para la primera infancia, en busca de un eventual financiamiento. Nuestra propuesta inicial tuvo que ser, necesariamente, reorganizada de modo que diera prioridad a este sector específico. Y aquí tiene lugar una de las primeras lecciones por aprender: aunque la vida humana sea multiforme y, consecuentemente, cualquier proceso en busca de soluciones para problemas locales deba abarcar todas las facetas de la sociedad, el formulario de candidatura para ser sometido a los financiadores tiene que enfocarse, predominantemente, al campo de acción que, de manera más probable, despierte su atención.

Después de una visita a la región, y de algunos meses de negociaciones, la decisión fue favorable a nuestro proyecto —que inicialmente preveía la implementación a tan sólo un pueblo—. Fue financiado y, por sugerencia de la propia Fundación, se expandió a tres nuevas localidades, mientras su duración pasaba de un año (como modestamente lo habíamos solicitado) una primera fase de tres años. Ésta fue sin duda una situación única en toda mi experiencia de «corredor de fondos». La suma que pedí inicialmente, por decisión de los que financiaban, había sido ¡multiplicada por 10!

El proyecto Radial

Era posible entonces empezar a montar un equipo de tiempo completo. Sin embargo, mis colegas del Instituto Politécnico de Faro estaban en esa época muy metidos en sus proyectos y carreras académicas, en las que la «acción comunitaria» no estaba validada ni valorada. De esta manera, para poner en práctica el proyecto Red de Apoyo para el Desarrollo Integrado del Algarve —Radial—, con el inicio previsto para octubre de 1985, los nuevos miembros tendrían que ser reclutados en el exterior. Y no sólo fuera del Politécnico, sino también fuera del Algarve. De las tres personas que constituían el equipo que empezó el proyecto, ninguna era originaria del lugar, probablemente porque las más familiarizadas con el territorio

y con sus principales problemas no creían que algo se pudiera hacer para alterar el rumbo de los acontecimientos.¹

Una auscultación preliminar

Antes del inicio del proyecto Radial, tuvo lugar, en mayo de 1985, una junta de auscultación preliminar. Se invitó a tres representantes de cada una de las ocho feligresías rurales incluidas en el territorio seleccionado para la fase inicial de las actividades: el presidente de la Junta, un empresario o «líder natural» y un joven desempleado. Los representantes de los principales servicios públicos en el Algarve (delegaciones regionales de diferentes ministerios, la Universidad y el Politécnico, y los municipios involucrados) también se hicieron presentes, así como miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Comisión Europea, a pesar de que el proceso de adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea concluyó hasta el año siguiente. Los representantes locales fueron los primeros en tomar la palabra, pues se les pidió que hicieran una pequeña presentación de su localidad, enfocada más a su potencial como generador de empleos (por ejemplo: recursos subutilizados) y menos a sus limitaciones. Luego de una de estas «auditorías a los recursos locales», se cuestionó a los representantes de los organismos presentes acerca de programas y medidas que sus servicios pudieran desarrollar y que fueran adecuados al apoyo de las iniciativas locales sugeridas. Las conclusiones generales fueron, primero, que en todas las localidades había recursos locales y en todas necesitaban apoyo y, segundo, que existía gran cantidad de fondos públicos disponibles, pero que no estaban al alcance de estas poblaciones, las cuales no tenían la información necesaria ni la capacidad técnica para preparar candidaturas adecuadas. Entre el ámbito local y la esfera pública había una «tierra de nadie» para ser superada, por medio de una estructura y de un proceso de animación, vinculación, información y formación. Ése fue el fundamento inicial, cinco meses después, del proyecto Radial.

Acción inmediata

Cuatro pueblos, así como sus alrededores rurales, fueron seleccionados para la acción inmediata y se escogieron tres puntos como trampolín para el desarrollo local integrado: animación infantil, formación para el autoempleo y apoyo a las asociaciones locales. De manera paralela, se convocaron juntas locales con toda la población para debatir «el futuro de nuestros niños». Esta problemática, aunque

¹ Actualmente esta situación ya fue completamente invertida, más de dos tercios de los miembros activos de la Asociación In Loco son de la región, y muchos nacieron y todavía viven en el interior rural.

impuesta por la Fundación van Leer, reveló ser un tema muy útil y consensual como forma de arrancar un programa de acción comunitaria que tendiera a un proceso de desarrollo local cada vez más incluyente. La cuestión de «consenso local» es realmente de relevancia crítica en este tipo de trabajo de campo territorial, especialmente en la fase inicial, pues las pequeñas comunidades están divididas, invariablemente, por conflictos de generación tras generación.

Estas juntas obtuvieron una fuerte adhesión (60 a 80 participantes en cada una) y originaron la decisión, tomada colectivamente, de crear en los pueblos centros que proporcionarían orientación y actividades preescolares y de tiempo libre para sus niños. Se formaron, entonces, comisiones de padres de familia para buscar las instalaciones adecuadas, juntar equipamientos y recoger fondos. Habría sido posible, para el proyecto Radial, invertir algunos fondos en edificios y materiales para después abrir y entregar esos centros a las familias locales. Nuestro objetivo principal, sin embargo, era fomentar el fortalecimiento de las poblaciones locales, sin transformarlas únicamente en receptoras de «regalos» provenientes del exterior. Para que eso se diera, parecía crucial que un mayor número de personas se involucrara desde el principio. Los «centros de animación infantil» locales tenían que ser *sus* centros, no los nuestros. En menos de un año, las cuatro comisiones de familias se habían constituido formalmente como (o integradas en) asociaciones locales, y cada una se encargaba de la gestión de su nuevo centro.

Los centros de animación infantil

El equipo Radial, luego de la fase inicial de movilización y organización locales, podía ahora concentrarse en la tarea de reclutar y formar a los animadores para los centros infantiles. Debido a la falta de esperanza de empleo para los jóvenes locales, se decidió reclutar entre ellos a los «paraprofesionales» que serían encargados de la gestión y animación cotidiana de los centros. Naturalmente, no tenían formación específica para ser considerados «educadores de infancia», pues su escolaridad era generalmente baja. Sin embargo, como pretendíamos adoptar como regla un proceso de aprendizaje continuo, cualquier obstáculo inicial se transformaría en fuente de innovación promisoría. La formación fue coordinada entonces por el equipo Radial, y como la inauguración de los centros no podía posponerse uno o dos años —mientras se esperaba a que toda la formación necesaria fuera suministrada—, la preparación en alternancia surgió como respuesta natural. Esta necesidad apremiante de organizar la formación para personas ya en actividad en el área para la cual deben recibirla acabó por volverse una «imagen de marca» del proyecto Radial y, después de 1988, también de la Asociación In Loco, cuando esta metodología fue perfeccionada e implementada en la preparación de agentes y animadores de desarrollo local.

Formación para el autoempleo

Durante 1986, al mismo tiempo que los centros infantiles locales iniciaban sus actividades, se presentaron también los cursos de formación para el autoempleo en las mismas poblaciones, siempre en el ámbito del proyecto Radial. Una vez que el proceso desarrollado por las familias locales y por el equipo Radial había llevado a la inauguración de los primeros centros infantiles en los pueblos incluidos, varias madres de familia pidieron otro apoyo en relación con las actividades generadoras de rentas, pues no había posibilidades de empleo local a corto o mediano plazo. En todo su trabajo de campo, el enfoque del proyecto Radial nunca fue empezar por lo que faltaba —limitaciones y deficiencias—, sino por lo que los locales ya tenían y conocían mejor. Y éste fue también el principio adoptado para esta formación. Los cursos iniciales eran supervisados por artesanos locales e incidían en las actividades tradicionales (tejido, confección y muñecas de yute). El objetivo de la preparación, sin embargo, era llegar mucho más lejos, luego que el arte local fuera debidamente reconocido y asimilado. Incluía módulos de desarrollo personal, autogestión, trabajo de equipo, tecnologías modernas, equipamiento y material, diseño de nuevos productos, percepción de tendencias de mercado, etc. Siguió una segunda generación de cursos de formación, dos años después, en juegos y juguetes de madera, tejido con agujas, hierbas aromáticas y repostería de pasteles. Como resultado, en 1989, siete nuevas unidades productivas de perfil local habían sido instaladas, proporcionando una ocupación independiente y remunerada para las aproximadamente 50 mujeres participantes. El contenido de cada curso, así como los talleres creados para ello, fueron el resultado de varios factores confluentes, especialmente tradición local, potencial salida comercial, utilización de recursos desatendidos, impacto multiplicador en la economía local.

La cuestión de los subsidios de quienes se estaban preparando

Transformar a las amas de casa residentes de los remotos pueblos rurales en productoras y gestoras calificadas, capaces y dispuestas a cooperar en un taller de propiedad común, no era tarea fácil. Afortunadamente, en esa época estaban disponibles algunos programas europeos de formación con financiamiento, que proporcionaban cursos de dos a tres años en un régimen de tiempo completo, y que también atribuían a los que se iban a capacitar un subsidio equivalente al salario mínimo. La cuestión de los subsidios individuales planteó un problema fundamental que se transformó a tiempo en una oportunidad más para innovar, bastante apropiada. El salario mínimo era un ingreso relativamente elevado en estos pueblos, particularmente para mujeres que nunca habían ejercido una actividad

remunerada. Y nosotros sabíamos que luego de los cursos de capacitación, cuando las mujeres empezaran su actividad empresarial, su remuneración sería, en los primeros meses, tan sólo de 25 a 30% de la cantidad que recibían en su etapa formativa... Una fórmula infalible para la muerte prematura de las nuevas empresas.

Entonces se propuso y se elaboró el siguiente plan para las candidatas de los cursos promovidos por el proyecto Radial (y después por In Loco): se les pidió a las que se capacitaban que ahorraran cada mes una parte de su subsidio; esta suma sería depositada por ellas mismas en una cuenta bancaria conjunta de todas las participantes en cada curso. El dinero ahorrado de esta manera sería utilizado cuando decidieran, colectivamente, invertir en equipamiento, materias primas o participación en ferias y, más tarde, cuando acabaran los subsidios, sería usado como suplemento de los parcos rendimientos iniciales de sus empresas.

Producir y vender

Respecto a actividades productivas en remotas zonas rurales, como la Sierra de Caldeirão, surgen problemas esenciales en ambos extremos del sistema: producir y vender. De hecho, no es fácil movilizar a las poblaciones locales para el refluorecimiento de productos y procesos que se tiende a asociar con un pasado retrógrado y de extrema pobreza. Y cuando algunas personas se interesan, no es viable recrear sólo los viejos procesos productivos. Nuevos mercados, nuevas tendencias de consumo, nuevas exigencias en relación con el tiempo y con el rendimiento del productor; todos esos factores apuntan hacia un cambio radical en la organización del trabajo. Normalmente se necesitan nuevas tecnologías, pero su introducción debe de ser ponderada, tomando conciencia de que los productos y muchos de los procedimientos están fuertemente arraigados en la herencia cultural de los productores. Cada producto, sea éste un artefacto o un producto alimenticio, no es únicamente algo para vender, sino también una expresión de la cultura, de una sociedad local, de la determinación de los productores y de sus familias para vivir y trabajar en la región que escogieron. Y este hecho plantea nuevos problemas y nuevas oportunidades.

La pequeña escala

Uno de los problemas que se enfrentaron y se intentó resolver tiene que ver con la escala de producción local: muy reducida, no garantizaría una actividad económicamente viable; muy ampliada, ciertamente desvirtuaría su naturaleza de producción casera y manual. Otra cuestión esencial constituye, efectivamente, la comercialización de la producción local. Por su reducida dimensión y

los numerosos productores dispersos, las estrategias convencionales de *marketing* no se adecuaban.

Los productos locales genuinos no ambicionaban la conquista de los mercados globales... Aquéllos deben combinar la calidad con la rareza. Idílicamente, deberían venderse a la puerta de la casa, a visitantes atraídos por la cultura local sobreviviente y deseosos de llevar consigo pruebas vivas en forma de «productos culturales». Y un territorio que se vuelve muy atrayente, debido a sus símbolos naturales y culturales, puede también apostar a otras formas de turismo rural, detenido y generado por los pueblos locales. La manufactura de productos diferenciados y bien cotizados, de manera que atraigan a los turistas, y al mismo tiempo, la promoción del turismo rural para aumentar la venta de productos locales: he aquí, sin duda, una fórmula realmente promisoría de desarrollo local integrado. Sin embargo, antes de alcanzar esa situación ideal, es necesario utilizar varios medios, como la colocación de productos en las tiendas de las ciudades (preferentemente tiendas especializadas en productos naturales de alta calidad y no en bagatelas importadas de países de mano de obra barata), y algunas ferias seleccionadas con una fuerte imagen de «desarrollo rural o local».

El efecto multiplicador

En 1992, la Asociación In Loco inventó una nueva feria para la región del Algarve —la Feria de la Sierra—, exclusivamente concebida para que los productores locales exhibieran y vendieran sus productos, en un ambiente festivo en el que la expresión de la cultura local, así como proyectos y estructuras locales encontraran un amplio espacio de divulgación durante los tres o cuatro días que duraba la reunión. La feria atrae aproximadamente a 20 000 visitantes, una gran parte en busca del «Algarve auténtico», y con más de un centenar de productores locales. Algunos de estos últimos afirmaron incluso que más de la mitad de su ingreso anual es ahora fruto de las ventas que ahí se efectúan. Además, a lo largo de las 18 ediciones de esta feria, se creó entre los productores participantes un fuerte sentimiento de que no están ahí únicamente como vendedores, sino también como «embajadores» de la sierra y portavoces de su «diferencia», de su cultura local; y se sienten bastante orgullosos de este hecho.

En otras ocasiones, los productores locales comenzaron a desempeñar también un papel de agentes de desarrollo local: estimulaban a otros a establecer sus iniciativas y empresas, y organizaban actos locales: festivales, ferias de artesanías y gastronomía, concursos de culinaria, museos locales... Este efecto multiplicativo es, sin duda, el distintivo de la estrategia establecida y desarrollada por la Asociación In Loco desde sus orígenes. En los cuatro pueblos donde se inició el trabajo, las primeras iniciativas estaban fuertemente interrelacionadas: el taller de juguetes de madera también producía para los centros infantiles; las tejedoras

ayudaban a los niños en sus proyectos escolares relativos a la cultura y a la artesanía local, integraban los órganos sociales de las asociaciones locales o participaban activamente en grupos de música y danza tradicionales; las que se capacitaban en los cursos de hierbas aromáticas recogían antiguas recetas de los ancianos en los hogares para la tercera edad o a domicilio... Y este principio ha sido aplicado desde siempre. Por ejemplo, un molino de viento y un molino de agua fueron restaurados debido a su valor cultural, pero también para ayudar a atraer a los turistas, de modo que hicieran rentables los restaurantes locales recién abiertos.

La creación de la Asociación In Loco

Ya es tiempo de que esta asociación sea debidamente presentada. En agosto de 1988, y a partir del proyecto Radial original, la Asociación In Loco fue formalmente constituida por 12 miembros fundadores. Luego de aproximadamente tres años desde la fase inicial, cuando todos los procedimientos oficiales se hacían por medio del Instituto Politécnico de Faro, una estructura autónoma, privada y flexible se consideraba ahora como una fuerte y urgente necesidad. Uno de los objetivos de la iniciativa fue, de hecho, demostrar que la acción cívica era aquí no sólo posible sino necesaria, pues podía ser más pertinente y eficaz, particularmente en relación con un desarrollo local ambiental y socialmente sustentable, que los procedimientos anónimos y rutinarios de la administración pública. De manera conjunta, Portugal, mientras tanto, se había adherido a la Comunidad Económica Europea (CEE) y eso le abría nuevas oportunidades de diversificación y ampliación de las fuentes de financiamiento posibles para iniciativas en beneficio de la Sierra de Caldeirão.

Una asociación de ciudadanos

La Asociación In Loco fue creada como un organismo sin fines lucrativos, compuesta de individuos, ciudadanos preocupados por el desarrollo diferenciado en el mundo en general y en el interior rural algarvío en particular. Su compromiso era dedicar su tiempo y capacidades profesionales a la concepción e implementación de actividades que tuvieran como objetivo «el mejoramiento de las condiciones de vida culturales y materiales en las comunidades locales del interior rural», conforme estaba estipulado en los estatutos de la asociación. La mayoría de los miembros fundadores ya desempeñaba un papel activo en el proyecto Radial y otros ya habían estado, en alguna ocasión, en la red informal de participación, la cual había sido naturalmente tejida entre profesionales igualmente interesados y comprometidos. Al contrario de otras asociaciones de desarrollo local en Portugal (que más tarde serían creadas, esencialmente a partir de 1991, y bajo la égida de las

autoridades locales), la Asociación In Loco fue una iniciativa de individuos, y aún no cuenta entre sus miembros con ninguna organización colectiva. Afirmar la capacidad y el poder de los ciudadanos interesados y garantizar la total independencia de intereses económicos o político-partidarios en la concepción y desarrollo de iniciativas de desarrollo local fueron, de hecho, dos factores muy fuertes en la constitución de In Loco, que todavía se aplican.

Promover el desarrollo sustentable

Durante los primeros años, paralelamente a su misión central de promover la ciudadanía activa y el desarrollo sustentable mediante prácticas locales, In Loco puso en práctica muchos proyectos, siempre y cuando los fondos europeos o nacionales estuvieran disponibles para iniciativas específicas que considerara benéficas para las personas y para la región de la Sierra de Caldeirão. En la época de la creación de In Loco, el proyecto Radial se mantenía en actividad, gracias al apoyo incesante de la Fundación Van Leer, y se convirtió en uno de los principales polos de actividad dentro de la nueva asociación, puesto ahora al servicio de una estrategia global de desarrollo local. De esta manera, luego de la consolidación de los centros de actividad infantil, en 1989 se decidió extender su ámbito de pueblo sede hacia poblaciones menores de la misma feligresía. Esto se hizo por medio de un nuevo proyecto de educación itinerante: primero, organizando visitas regulares en coche, en las que una calificada educadora de niños visitaba las poblaciones dispersas y, más tarde, con la inauguración de las llamadas «ludotecas itinerantes». Este plan de llevar los servicios necesarios a los locales donde las personas viven efectivamente, en vez de obligarlas a venir siempre al «centro», fue adoptado también más tarde por uno de los municipios locales en el planeamiento e implementación del servicio de salud local.

Actividades iniciales

Desde su origen y hasta 1992, las actividades de In Loco consistían esencialmente en la formación (planeación local y regional), intercambios trasnacionales sobre asuntos relacionados con el ambiente (cuatro Campus de verano de un mes sobre patrimonio natural y cultural para estudiantes universitarios europeos), estudios y organización de seminarios y conferencias (por ejemplo: una en diciembre de 1991, con la Comisión Europea, sobre evaluación de proyectos sociales). Estas actividades llamaron mucho la atención tanto en el ámbito europeo como en el nacional, particularmente en una época en que se había hecho muy poco en Portugal en relación con el desarrollo local. Se puede decir que el reconocimiento

inicial de In Loco en Europa facilitó una aceptación posterior del gobierno portugués. La aceptación generalizada por la clase política local y regional tardó más tiempo, y se llevó a cabo cuando In Loco alcanzó el estatus de institución «parapública», lo cual sucedió en el ámbito del programa europeo Leader.

3. ¿MADURACIÓN O TRANSFORMACIÓN?

El programa europeo Leader

De hecho, una nueva fase se inició en 1992, cuando la Asociación In Loco fue invitada por el Ministerio de Agricultura para elaborar un «plan de acción local» como parte de la etapa preparatoria de la iniciativa europea Leader. El área de intervención de In Loco iba a aumentar, de repente, de cuatro feligresías rurales iniciales a 29 (y posteriormente hasta 32), y su gama de actividades crecería hasta abarcar todos los sectores susceptibles de contribuir a un «desarrollo rural integrado». Además de eso, la capacidad de relación de In Loco con la administración pública y con las autoridades locales estaba por cambiar radicalmente: una organización que acostumbraba mendigar el apoyo material se transformaría ahora en socio y se sentaría a la misma mesa para negociar y tomar decisiones conjuntas.

De acuerdo con los reglamentos europeos, a cada institución privada (sin fines lucrativos), acreditada para encargarse de un programa territorial Leader, se le atribuye un subsidio específico para cubrir sus gastos de funcionamiento (hasta un máximo inicialmente, de 10% y, posteriormente, de 15%) y para la adjudicación y atribución de cofinanciamiento a iniciativas de emprendedores e instituciones locales. La prerrogativa de administrar «fondos públicos» (aproximadamente siete millones de euros durante 10 años), que fue otorgada a In Loco desde 1992, cuando se tornó en uno de los 20 Grupos de Acción Local (GAL) Leader portugueses (y, después de 1995, uno de los 48 GAL portugueses acreditados, en el Leader II), fue motivo de un cambio profundo en su postura e imagen, lo cual aún no ha sido analizado exhaustivamente.

Una red de animadores locales

Con el inicio del programa Leader, en mayo de 1992, la asociación In Loco dio inquestionablemente un salto cualitativo y cuantitativo. La primera decisión importante fue establecer una red de animadores de desarrollo local. Si el trabajo anterior con un número reducido de feligresías había requerido de un equipo base de siete a ocho miembros, mantener una ideología similar basada en intensos contactos locales requeriría, ciertamente, de un equipo base de por lo menos 40 personas (y esto solamente para el Programa de Desarrollo Rural Europeo), lo que no era viable ni

deseado. Consecuentemente, se estableció una organización en dos niveles: animadores locales y equipo central. El área total, de más de 3 500 km², se dividió en siete subáreas, cada una bajo la coordinación de un «veterano» que trabajaría ahí en cooperación conjunta con residentes seleccionados, generalmente de menos de 30 años, remunerados según un régimen de tiempo completo y asistiendo simultáneamente a un curso de formación organizado por el equipo base de In Loco.

Esta metodología se reveló bastante fértil y demostró el entusiasmo y eficiencia que jóvenes adultos (mujeres en su mayoría) pueden aplicar en el trabajo, a favor de sus propias comunidades, cuando se concientizan de las necesidades locales, de las cuestiones en juego y de su propia capacidad para ejercer una influencia positiva en esa situación. Los animadores apoyan a todos los empresarios locales, reales o potenciales, sociales o económicos, en la transformación de sus ideas en proyectos viables. Empezaron también a recolectar información, opiniones, calendarios de celebraciones e iniciativas, para producir de esta manera un boletín mensual bastante popular, que se entregaba a todos los residentes en sus casas. Obsérvense con atención las palabras de una animadora local que colabora en este proceso desde 1992:

Muchas personas tenían vergüenza de decir que vivían en el interior rural. Ahora es diferente, las personas se sienten orgullosas de decir que viven en la Sierra. Esto sucede porque tenemos una calidad de vida diferente, para bien. Estoy personalmente empeñada porque, sinceramente, me gusta este tipo de trabajo. Tal vez esté demasiado comprometida, lo que a veces es insoportable, pero estoy muy ligada a las personas de aquí y a sus iniciativas. Nuestro empleo es precario y no tenemos verdaderas esperanzas de futuro, pues este trabajo se puede acabar de un día para otro. Pero eso no me preocupa. Cada día es un nuevo día. Algo ha de surgir. Lo importante es que este trabajo es mi más grande motivación. Yo creo en el interior algarvío y también creo que es posible hacer algo, incluso cosas pequeñas, que cuando están unidas y articuladas pueden proporcionar mejores condiciones de vida a las poblaciones locales y hacerlas que participen debidamente en el territorio donde viven.

Esta estructura de animadores implementada por In Loco permitió que surgiera y se desarrollara todo un conjunto de proyectos, lo cual no habría sido posible sin nuestra acción. Al principio, era bastante frustrante porque yo buscaba y no lograba ver los resultados de mi trabajo. Lloré mucho en esos tiempos del inicio. Hoy veo instalaciones turísticas, unidades productivas y restaurantes nuevos o mejorados, mucho más actividades de asociaciones locales y muchísimas actividades nuevas e iniciativas de toda clase. Hace algunos años las personas decían: «¡el Algarve es tan sólo mar y playa!» Hoy, hasta la comunicación social descubrió el «otro Algarve».

Los animadores de la Asociación In Loco han ejercido una influencia destacada en la creación y refuerzo de asociaciones locales, y algunos de ellos hasta participan como candidatos en las elecciones locales a nivel de feligresía.

Una estrategia coherente

Con el innovador programa europeo Leader, In Loco finalmente logró garantizar los medios necesarios —materiales y humanos— para intentar poner en práctica una estrategia coherente de desarrollo local integrado. Naturalmente, esta afirmación debe de ser enmarcada dentro de sus debidos límites. Por un lado, los fondos disponibles pueden ser suficientes para asegurar algunos «proyectos piloto», pero no una política global (un director regional del Ministerio de Agricultura estimó que el programa Leader en la zona de In Loco había recibido menos de una centésima parte de los fondos europeos simultáneamente disponibles para financiar la «agricultura petroquímica» en el Algarve, precisamente el tipo de agricultura productivista que está matando el medio rural en toda Europa). Por otro lado, el programa Leader nunca financia ningún proyecto a 100%, sino tan sólo 50 o 75% de los costos totales. Proyectos privados con ganancias esperadas a corto plazo encuentran fácilmente fondos para costear el remanente. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en relación con los residentes pobres o con las iniciativas innovadoras de interés general que In Loco tuvo que desarrollar de modo que aseguraran el éxito de la operación como un todo. Sin recursos financieros propios, en ese caso, la asociación tuvo que buscar socios interesados en cubrir parte de la inversión. Y esto no era nada fácil de conseguir, porque In Loco empezó a ser considerada como una asociación «muy rica», que administraba millones y hasta daba subsidios a las personas e instituciones locales...

Problemas nuevos y críticos

El nuevo papel casi oficial de In Loco en el ámbito del programa Leader planteó, efectivamente, problemas cruciales: externamente, en relación con su imagen ante las personas locales, a quienes ahora tenía que exigirles todo tipo de documentos (Seguro Social, IRS e IVA, actas de nacimiento, permisos de construcción, etc.) siempre que querían concursar por un eventual subsidio; e, internamente, porque varios miembros, ocupados con anterioridad en el trabajo esencial de campo, tenían que permanecer ahora en la sede para lidiar con la enorme burocracia. Un precio elevado que tenía que pagarse, sin duda, para garantizar que algunos proyectos nuevos y esenciales finalmente se llevaran a cabo en el interior rural y empezaran a abrir camino hacia un proceso sustentable de desarrollo local. Luego quedó claro que muchos de los que mostraban una alta capacidad en el desempeño de funciones de contacto personal, educacional y de organización local, manifestaban una insuperable falta de aptitud para lidiar con el volumen y la complejidad del trabajo administrativo con el que ahora, inesperadamente, se enfrentaban. Como resultado, un pequeño grupo de voluntarios entre el personal de In Loco tuvo que

especializarse gradualmente en el «suplicio burocrático», sin dejar de guardar, no obstante, algún resentimiento hacia otros compañeros que tan sólo querían hacer el trabajo menos espinoso. Desequilibrios en las cargas de trabajo, con implicación personal y estrés; un hiato creciente entre aquellos que desarrollaban este trabajo porque creían en lo que hacían y en los valores personales y sociales que ponían en práctica y en que se empeñaban, y aquellos que querían tan sólo un trabajo remunerado, indudablemente son aspectos que en general afectan el ambiente de cualquier organización cívica de solidaridad. E In Loco no fue la excepción. Regularmente surgen conflictos entre eficacia, que es muy elevada, y eficiencia, la cual queda normalmente en un nivel bajo, que causan bastante estrés y un inevitable desperdicio de tiempo y de otros recursos valiosos. Parece que muchos activistas, aunque profesionales, no aprecian mucho una organización administrativa. La convivencia entre «veteranos» y «novatos» también origina algunos conflictos y malentendidos, los más antiguos al insistir en prerrogativas adquiridas, mientras que los más jóvenes a veces adoptan una «actitud de empleado».

Entre tanto, aún no ha habido ninguna convulsión seria en In Loco. Tal vez los continuos éxitos, la imagen muy positiva que se logró construir entre los residentes de la sierra y las diversas instituciones públicas y privadas, y el profundo y desinteresado empeño de sus responsables y colaboradores, hayan sido factores que ayudaron a superar los inevitables e inherentes conflictos que existen en cualquier grupo de personas. También la democracia interna de las estructuras de In Loco y su gestión cotidiana, basada en la descentralización y en la autonomía de los proyectos y equipos, la facilidad de acceso a los dirigentes, así como la plenaria de debate anual (cuando hay fondos disponibles) sobre todos los aspectos de la vida interna y externa de In Loco pueden ayudar a explicar su existencia relativamente sosegada.

Impacto externo

Es justo decir que el impacto de In Loco no se hizo sentir sólo localmente. Muchas veces sus actividades, opiniones y publicaciones (folletos, libros, revista, periódico mensual) tuvieron algún impacto en la legislación, en el pensamiento institucional y en los procedimientos administrativos. Fue también muy importante para el surgimiento de otras estructuras similares en varios puntos del país para la creación de una asociación-red nacional de agencias y profesionistas especializados en desarrollo local (Animar), y para la propuesta y producción de un «parlamento» bienal, espectáculo y festival de organizaciones cívicas y solidarias, productos locales, cultura alternativa y tradicional, que tiene lugar en Portugal desde 1994 (la «Manifesta»).

Como ejemplo de rápido impacto en la política pública se puede mencionar que In Loco (como muchas otras asociaciones de desarrollo local en todo el país) ha ganado —gracias al programa europeo Leader— una palabra de peso en el tipo

de proyectos por seleccionar por los fondos europeos, lo que finalmente resultó en la introducción, por ejemplo, de formas de turismo rural más «democráticas» en Portugal. Hasta entonces, la Dirección General de Turismo, en Lisboa, había adoptado una política muy restrictiva y elitista en relación con las áreas rurales. Solamente se autorizaba y subsidiaba a eminentes edificios históricos y grandes haciendas aristocráticas como instalaciones hoteleras, mientras que las solicitudes para convertir pequeñas casas de campo en alojamientos turísticos eran inexorablemente desatendidas. Cuando todas las asociaciones portuguesas del programa Leader comprendieron el peso estratégico de la renta adicional resultante del «turismo a pequeña escala» en el presupuesto de una familia rural, y comenzaron a implementar centenares de proyectos similares en todo el país, la política nacional tuvo que ser alterada, a pesar de la fuerte oposición de la siempre escéptica Dirección General de Turismo.

Productos locales

La producción local a escala reducida: he aquí otra importante batalla. Las leyes y reglamentos prácticamente excluían la producción casera a escala reducida. De hecho, las grandes inversiones necesarias para asegurar todas las condiciones requeridas para una «producción legal» en sectores como la producción de queso, la destilación de aguardiente, la preparación de chorizo y jamón serrano o el procesamiento de bienes alimentarios como un todo, estaban empujando toda esta producción hacia los brazos de la industria masificada. Y, a pesar de eso, eran muchos los consumidores que preferían la calidad superior proporcionada por el «toque personal y tradicional» que tenían esos productos. Una vez más, las macrodecisiones se tomaban contra los intereses y anhelos de la gran mayoría de productores y consumidores, hecho que se tornó por demás evidente en el ámbito de la política agrícola común de la Unión Europea, y obviamente en muchas esferas.

Como ya se mencionó, durante el primer año del programa Leader, en noviembre de 1992, fue organizada la primera Feria de la Sierra por In Loco. Por primera vez, todos los productores locales de la Sierra (legalmente habilitados o no) fueron invitados para exhibir, explicar y vender sus propios productos alimenticios o piezas de artesanía en un «tianguis» organizado en una ciudad localizada a medio camino entre las depauperadas colinas del norte y el litoral congestionado. El éxito de esta iniciativa de In Loco fue enorme sin duda. El entusiasmo fue muy grande tanto entre los organizadores como entre los visitantes y productores. Además de la gran variedad y elevada calidad de las actividades y productos en exposición, del gran volumen de ventas y del cobro por las entradas, la Feria surgió también como el mejor «curso de formación» posible para que los productores locales aprendieran cómo presentar y promover sus productos y para actualizarse en relación con los

gustos de las personas de la ciudad y de los turistas extranjeros. Esta Feria fue, efectivamente, concebida no sólo como un hecho comercial, sino esencialmente como una viva y pintoresca muestra de la Sierra de Caldeirão, donde actividades sociales, culturales y ambientales —aquí interrelacionadas— podían adquirir una expresión adecuada. Después de organizar las primeras ediciones, contando para ello con un financiamiento parcial del programa Leader, In Loco —siempre abogando por su «principio de devolución»— transfirió la responsabilidad de las Ferias de la Sierra al municipio de la ciudad donde son realizadas. Actualmente se pretende que a cada estación del año corresponda una de esas ferias, con cuatro municipios que asuman su organización en un sistema rotativo.

Hoy, y luego de un gran esfuerzo de grupos de poder en la cuestión de la producción a escala reducida, hecho por asociaciones de desarrollo local, muchas de éstas fortalecidas por su participación en el programa Leader, el gobierno portugués introdujo algunas reglas de excepción en cuanto a los productos locales, tal vez no las medidas ideales, pero demuestra por primera vez cierta empatía con los principios y objetivos del desarrollo local.

Sociedades

Naturalmente, fueron muchas y muy variadas las sociedades establecidas entre In Loco y otras instituciones, privadas y públicas, incluidas las entidades autónomas locales, de manera que se concibieron y se implementaron proyectos específicos en el ámbito de Leader y de otros programas nacionales y europeos de menor dimensión. Una de las sociedades se enfocó, por ejemplo, hacia la ya mencionada formación y supervisión de los «animadores» de desarrollo rural. Veinticinco residentes fueron seleccionados en 1992 para participar en un curso de formación integrado de dos años en desarrollo local y, simultáneamente, estimular y ayudar a sus coterráneos en la concepción y ejecución de proyectos locales viables, esencialmente de naturaleza económica. Cada proyecto sería, posteriormente, analizado de manera exhaustiva en conjunto y debatido por el promotor, el animador y el equipo central de In Loco, y se solicitarían muchas veces los pareceres a las entidades autónomas locales, a los líderes del lugar, a consultores externos o representantes de servicios públicos. Las autoridades locales aceptaron suministrar los fondos necesarios para las «becas» pagadas a los que se capacitaban y, más tarde, los salarios de esos animadores locales; proporcionaron también instalaciones adecuadas y el equipamiento indispensable.

¿En camino de la democracia social?

Sin embargo, a pesar de las muchas oportunidades que los habitantes de la Sierra de Caldeirão tuvieron para participar de manera abierta y libre en este proceso

de desarrollo local, con sus opiniones, actitudes y decisiones, nunca hubo una estructura formal concebida específicamente para asegurar una consulta regular a las poblaciones en cuanto a cuestiones de interés colectivo. Y, en mi opinión, eso es absolutamente indispensable cuando se pretende promover una mejora en la democracia representativa, ya sea a escala de feligresía, ya municipal, e introducir algunas nociones básicas de democracia participativa local. Los municipios deberían de iniciar un proceso de incentivos para la participación, utilizando la elaboración y control periódico, discusión y revisión de un plan de desarrollo local.

Hasta ahora, la tarea de preparación de una estructura participativa municipal difícilmente podría haber sido asumida por In Loco. Su papel, dentro de una visión de «democracia participativa», ha sido generalmente desempeñado por medio de las diferentes iniciativas —mayoritariamente de naturaleza educacional (en su sentido más amplio)— desarrolladas por sus miembros, fuertemente empeñados en ambas causas de promoción de una ciudadanía activa y de un desarrollo local integrado. Hasta el momento, In Loco aún no ha afirmado públicamente una posición ideológica o política a lo largo de sus muchas y variadas actividades. Sin embargo, puede, y ciertamente debe, convertirse en un socio importante en ese proceso, siempre y cuando una entidad autónoma local decida desarrollar este tipo de iniciativa. Y podría hasta colaborar para implementar nuevos procesos decisorios, más participativos respecto gobierno municipal.

Esto constituiría una ruptura, posiblemente deseable, con una estrategia actual de In Loco. Puede estar próximo, de hecho, el momento exacto de que la asociación dé un paso al frente en la dirección de estructuras locales y procesos decisorios más participativos y de capacitación. El gran problema consiste en que una asociación como esta no tenga fondos propios y, consecuentemente, dependa de proyectos para ser elaborados, propuestos y eventualmente aprobados para cubrir sus costos de funcionamiento y de personal. En estas condiciones, ¿cómo tornar disponibles a las personas y el tiempo para las tareas, incluso siendo importantes, para las cuales no hay financiamiento? ¿Tendrá entonces In Loco que asumir inevitablemente el simple papel de brazo extra de la política pública, restándole tan sólo pocas oportunidades para ocasionalmente «meter su cuchara»?

De acuerdo con Isabel Guerra, en su capítulo incluido en el actual proyecto de investigación,² estos planes y estructuras locales pueden considerarse «nuevas formas de control social». Y agrega que «para algunos serían extensiones del aparato estatal, para otros el embrión de la democracia participativa y, para otros más, los gestores de los conflictos sociales existentes, en una arena donde se exhiben las

² El capítulo de Isabel Guerra, intitulado «El territorio como espacio de acción colectiva: paradojas y virtualidades del "juego estratégico de actores" en la planeación territorial en Portugal», se encuentra publicado en el volumen 1 de esta colección. [N. del E.]

contradicciones de la sociedad global». Por la experiencia de In Loco, esto no parece una cuestión de «así o asado», sino una organización cívica y solidaria, comprometida en un proceso de desarrollo local sustentable, que necesariamente asume varios papeles de acuerdo con el contexto y con las orientaciones estratégicas. In Loco hizo todo eso en diversos momentos de su corta existencia, y nadie puede prever con seguridad cuál será la lógica dominante en los próximos años.

Hasta ahora, el objetivo principal ha sido apoyar a las poblaciones locales —individuos, familias o grupos— y ayudarlas a mejorar su comprensión de los factores que más influyen en su sociedad y a ser cada vez más capaces de controlar sus propias vidas. Confirmando lo escrito por Isabel Guerra, es un hecho que el porcentaje de poblaciones locales que participan de manera diligente en las actividades de In Loco es reducido, efectivamente, y no se puede afirmar que quienes lo hacen siempre representan los grandes intereses colectivos. En este tipo de acción social, sin embargo, no es tanto el número el que cuenta, sino la relevancia y calidad de las iniciativas y de su impacto social —y a veces global— a corto y largo plazos.

In Loco también ha tenido éxito, relativamente, para superar algunas posiciones arraigadas muy locales y para modernizar el concepto de «sierra», ahora referencia común para las aproximadamente 30 feligresías y nueve municipios hasta hoy implicados en la «odisea regional» de In Loco. Fue bajo esta divisa como las ferias se han organizado, como un nuevo periódico mensual se publica (*Jornal da Serra*), con la que se abrieron tiendas (Casa da Serra) y se organizaron festividades (*Réveillon da Serra*). A medida que estas iniciativas pasan a la jurisdicción de las entidades autónomas locales y otras organizaciones —lo cual acaba siendo la concreción definitiva de su estrategia—, In Loco podrá en un futuro próximo empezar a desempeñar un papel menos técnico y más político (a favor de una ciudadanía más activa y participativa) en la región algarvía. Todo dependerá, naturalmente, de la voluntad colectiva de sus actuales miembros y del contexto sociopolítico.

Condiciones precarias

Aproximadamente 30 personas forman el núcleo de colaboradores, la dirección y la asamblea general de In Loco. En el clímax de actividad, cuando más de 50 proyectos se desarrollaban simultáneamente, había más de 70 personas de tiempo completo. La precariedad, sin embargo, ha sido y es todavía lo que rige. Las entradas de fondos están garantizadas únicamente mientras duran los proyectos aprobados, y esto significa que en lo que se desarrollan los trabajos de los proyectos en curso, se tienen que elaborar y preparar nuevas solicitudes para evaluación y selección. E incluso durante la ejecución de los proyectos aprobados y financiados, los reglamentos, los retrasos injustificados (e impunes) en los pagos y la falta de un sistema de préstamos sin intereses obligan, a ésta y todas las otras asociaciones

en situación similar, a vivir una existencia muy dura y angustiante para producir, finalmente, sus «bienes públicos» y así elevar el bienestar de nuestra sociedad.

La Asociación In Loco no tiene ningún apoyo institucional regular ni ninguna filiación política o religiosa. Para sobrevivir y ser eficiente, In Loco ha buscado incesantemente socios, y negociado y hecho concesiones para alcanzar y formalizar los acuerdos necesarios. Naturalmente, ha intentado promover enfoques más participativos dentro de las estructuras de poder y procedimientos administrativos existentes. De hecho, el trabajo en curso de desarrollo local y la consecuente presión de organizaciones de ciudadanos están forzando la creación de un foro apartidista que permita un amplio debate y, eventualmente, iniciativas comunes entre diversas entidades locales, regionales o nacionales. En Portugal, hasta hoy, este proceso ha generado incuestionablemente algunos todavía mal explorados avances en el campo de la democracia local, lo que, esperamos, contribuirá finalmente a forjar una democracia más participativa en el ámbito nacional.

Capacidad de relacionarse con los poderes formales

Como es obvio, el futuro desarrollo dependerá siempre de los contextos políticos e instituciones globales, los cuales definirán las relaciones entre los poderes políticos formales, en sus diferentes niveles, y las organizaciones cívicas y solidarias (ocs): una denominación mejor, en mi opinión, que la «definición por la negativa» implícita en el concepto «organizaciones no gubernamentales» (ONG).

Teniendo en cuenta que las asociaciones de desarrollo local producen, efectivamente, «bienes públicos», tendría mucho sentido que recibieran regularmente un subsidio del presupuesto del Estado, independientemente de los proyectos en curso, únicamente basado en las actividades anteriores, y estipulado de acuerdo con indicadores de actividad previamente acordados. Este subsidio —«financiamiento estratégico»— aseguraría una relativa estabilidad, un nivel básico de estructura (un equipo esencial permanente y los costos mínimos de funcionamiento), y garantizaría así un recurso duradero de donde, sucesivamente, saldrían los deseados y necesarios proyectos e iniciativas, financiados por varias entidades y desarrollados por equipos que combinen profesionistas permanentes con temporales, colaboradores remunerados con voluntarios. Sin embargo, actualmente la conjetura general no apunta hacia esa dirección. En vista de los crecientes y muchas veces absurdos obstáculos —administrativos y financieros— que son impuestos, tanto por los programas europeos como por los nacionales, así como la «posición de poder» de los que deciden en muchas instituciones públicas y otros representantes que aun adoptan en debates, negociaciones y acuerdos «impuestos», me atrevo a afirmar que el futuro no parece muy promisorio para las ocs ni para las sociedades público-privadas, por lo menos en Portugal.

En el mejor de los casos, las estructuras del poder continuarán «tolerándolas» mientras cumplan rigurosamente las tareas que les delegan, pero enmarcadas en un régimen legal que impide cualquier ímpetu de innovación o de autonomía adecuado al trabajo local. En vez de actuar como fuentes de creatividad social, ¿las ocs estarán limitadas a ser simples agentes «extensionistas» de la política inmutable establecida?

Un problemático candado financiero está empujando a las ocs hacia un impedimento damocliano. Si éstas pretenden la continuación del desarrollo de actividades de carácter altamente profesional, no pueden depender tan sólo del trabajo voluntario y necesitan también de instalaciones y equipamiento adecuados. Y todo esto requiere un flujo regular de fondos, así como una gestión profesional y rigurosa. Cuando, además de todo esto, surge un gran empeño para trabajar en beneficio de poblaciones y territorios que no tienen capacidad para pagar los «servicios de desarrollo» que les son prestados, es obvia la conclusión de que las ocs tendrán siempre que recibir fondos públicos (de preferencia sin implicaciones político-partidarias asociadas). No hay motivo para tener vergüenza de ello. Las ocs reciben ciertamente un porcentaje muy diminuto del dinero público cuando se comparan con otras organizaciones representativas de otros compañeros sociales o con las grandes empresas. Y lo que sea que reciban, es más que justificado porque desempeñan —en ciertas áreas y en relación con ciertos objetivos— «funciones públicas» de una manera más importante y eficiente que los servicios públicos «de 9 a 17 h» podrían hacer alguna vez. Finalmente, las actividades específicas desarrolladas por las ocs, cuando están aseguradas por diferentes programas públicos, no deberán ser financiadas por subsidios sino, por regla general, con base en «contratos-programa» previamente negociados y nunca rigurosamente predefinidos, sino suficientemente flexibles para permitir las revisiones y ajustes necesarios, conforme los contextos (territoriales y sociales) específicos de su implementación.

Trabajo en red

La debilidad institucional de cada ocs, y también la predisposición natural hacia la cooperación en varios niveles, condujo a varios procesos de trabajo en red, ya sea nacionales, ya internacionales. El movimiento de cooperación entre las diversas entidades de desarrollo local e intervención social de los ciudadanos empezó en Portugal en 1992. La Asociación In Loco era entonces uno de los 10 socios de un proceso que culminó, en septiembre de 1993, con la creación de la Asociación Portuguesa para el Desarrollo Local (Animar), que actualmente es la gran referencia nacional para personas y agencias que trabajan para el desarrollo participativo e integrado, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Entre otras iniciativas, la Animar inauguró la bienal Manifesta. Desde 1994, este festival, feria y parlamento

del desarrollo local —que tiene por objetivo aumentar la panorámica de todo el movimiento e incrementar el ánimo y el peso social de los comprometidos— ha tenido ya cuatro ediciones. La última, en abril de 2001, coorganizada con In Loco, reunió a más de 300 agencias portuguesas y a miles de agentes, defensores y visitantes (e incluso al presidente de la República), a lo largo de sus cuatro días de duración.

Hay todavía mucho por hacer en relación con el trabajo en red internacional. La mayoría de las ocs portuguesas —e In Loco ciertamente no es la excepción— ya estableció contactos regulares o puntuales con socios transnacionales. Sin embargo, mucho más podría y debería de haberse hecho para la construcción de un modelo alternativo internacional, de acuerdo con la lógica de una globalización antihegemónica. Las asociaciones de desarrollo local y otras ocs portuguesas deberían, por ejemplo, comprometerse de manera mucho más intensa en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en Brasil.

Un trabajo que nunca acaba

Como en cualquier otro proceso dentro de esta perspectiva, en que se intenta avanzar a contracorriente, no hay victorias definitivas en los proyectos de desarrollo local ejecutados mediante la acción local de los ciudadanos. Cualquier éxito eventual, que inexorablemente se ha alcanzado gracias a un esfuerzo personal sin proporción, acaba siendo tan sólo el inicio de una nueva carrera de obstáculos. El sentimiento generalizado de los que participan en este movimiento es el de que están intentando permanente subir un tramo descendente de escaleras eléctricas... Sin embargo, cuando se entra a un movimiento de este tipo, es imposible parar o salir, pues cada momento de una lucha como ésta acarrea un sentimiento estimulante de «estar vivo», un paso que recompensa nuestro esfuerzo personal y colectivo para la mejora de nuestra sociedad y la del mundo en general y, al hacerlo, para mejorarnos a nosotros mismos.

4. LA CIUDADANÍA ACTIVA
EN EL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE
COMO UNA FORMA CREATIVA DE RESISTENCIA

Enseñanzas de Spinoza

Cuando alguien enfrenta una serie de sucesos —a escala local, regional, nacional o mundial— que desafía fuertemente su filosofía y sus valores, ¿qué tiene que hacer?, ¿cuál es y dónde está la oportunidad para aportar una contribución personal de manera que reforcemos lo que creemos que son fuerzas de Vida, Cultura y Civilización, contra la tendencia actual, aunque ampliamente predominante o

hegemónica, que encamina de manera inevitable a la humanidad y a todas las demás formas de vida hacia la discordia, la infelicidad, la degradación y la muerte?

Hace aproximadamente 320 años, Baruch Spinoza, en Ámsterdam, concibió un concepto extremadamente «moderno» del «individuo», y sobre el derecho y el deber de cada uno para volverse un miembro activo de la sociedad. Para Spinoza, cada persona no es el átomo aislado e invisible del liberalismo anglosajón, sino una red coherente de relaciones, físicas e intelectuales, con la naturaleza, con todas las cosas, con las demás personas. Y esas relaciones afectan constantemente a cada ser humano. Consecuentemente, ningún individuo puede tener una personalidad estrictamente aislada.

La coherencia inherente a esas relaciones puede y debe ser continuamente reforzada, profundizada y mejorada, pero también puede deteriorarse y desaparecer. Para mejorar esta coherencia interna propia, cada persona tiene que comprender perfectamente el tipo de relaciones que son positivas y útiles, y reforzar así su autonomía, pero también entender que lo que es útil no es sólo aquello que es conveniente sobre una base puramente individual. Lo útil se encuentra por encima de todo lo que hace a una persona sentir y actuar solidariamente con el mundo natural y social en que todos vivimos.

Para alcanzar este umbral de sabiduría y ser capaz de efectuar un proceso personal de automejoramiento y actualización, será necesario, según Spinoza, desarrollar una experiencia práctica diaria: actuar sobre el mundo, procurando y experimentando numerosas y diversas relaciones con el mundo físico y social. O, en sus propias palabras, siendo constantemente activo mediante el «trabajo» y la «política».

De manera recíproca, hay una relación inalienable de la sociedad política de cualquier Estado, para crear y promover constantemente el contexto más favorable para un desarrollo personal completo de todos los ciudadanos por medio de esos dos campos de la actividad humana.

Más recientemente, encontramos en las palabras de Paulo Freire un mensaje semejante, cuando escribe que ser cultural y ser consciente es la forma radical de ser humano, y que los seres humanos, al rehacer un mundo que no hicieron, están haciendo su propio mundo, y en este hacer y rehacer, se rehacen a sí mismos (Freire, 1975).

Un movimiento global de ciudadanía activa

Ciertamente inspirados por una filosofía igualmente humanista —la cual afirma que todo lo que está relacionado con la esfera social nunca puede estar sujeto a leyes inmutables e inexorables—, numerosas organizaciones de ciudadanos activos han sido creadas en los últimos años, buscando respuestas locales para los problemas cotidianos provocados o exacerbados por las tendencias macroeconómicas

dominantes del mundo globalizado actual. Éste es un movimiento extremadamente disperso y diversificado, donde cada proyecto y cada grupo local busca las soluciones —en términos de organización, método y contenidos— más adecuadas a su contexto específico, así como a las capacidades, necesidades y expectativas de las personas comprometidas.

En la mayoría de los casos, estas iniciativas surgen como respuesta al papel compresor «productivista», aunque no intenten aislarse del mundo exterior ni del campo económico. En vez de eso, tratan de encontrar y validar formas alternativas, viables y sustentables para combinar intereses económicos y sociales. Generalmente están ligadas o a un territorio o a un grupo específico, bajo la amenaza de marginación, si no de erradicación, por considerarse «desechables» por parte de los poderes hegemónicos. De acuerdo con la ideología actualmente dominante, todo lo que se aparte de los parámetros de la «economía única» (o sea, la economía globalizada dominada por los mercados financieros) no tiene lugar en la sociedad actual.

Los tres niveles de la economía

En esta tendencia incluyente, el movimiento antihegemónico global, conocido como desarrollo local sustentable, empieza por negar la existencia de una economía única. Al hacer esto, adopta la estructura pluralista propuesta por el historiador económico francés Fernand Braudel que, en 1980, definió tres esferas económicas relativamente independientes, cada una con sus reglas y características específicas: la economía mundial, la local de mercado y la familiar o de subsistencia.

En un trabajo más reciente (1994), Verschave sostiene que la estructura tripartita braudeliiana permite, incluso en el mundo casi totalitario de nuestros días, algún margen de libertad humana y de creatividad social. Existe comunicación y también interdependencia entre los tres niveles de economía, pero no sobredeterminación: los impedimentos y contradicciones que ocurren en cada uno de los tres niveles pueden también influir en los restantes.

El nivel superior —la economía mundial— ha sido dominado esencialmente por los «nuevos conquistadores», las grandes multinacionales y los grandes cárteles financieros que pueden construir o destruir la mayoría de las economías nacionales y regionales de un día para otro. En este nuevo y singular contexto, las funciones del Estado fueron reducidas a simples dispositivos financieros, legales y burocráticos, con el objetivo principal de garantizar las condiciones más favorables para la maximización de la acumulación monetaria por las grandes empresas nacionales y transnacionales. De esta manera, la esencia del Estado, como expresión política del interés público común, parece estar desapareciendo. El Estado ha sido privatizado. La alianza entre el Estado y los intereses económicos es ahora

muy patente, en detrimento de la democracia y de los ciudadanos. El Estado, que debería de ser el brazo político de la sociedad humana, se transformó en agente, si no en rehén, de la economía mundial. Los Estados sufren hoy una fiscalización próxima e implacable: los fondos públicos tienen que invertirse de acuerdo con los decretos de la economía mundial, sin tener en cuenta la voluntad y las necesidades de los ciudadanos. Consecuentemente, aquellos gobiernos que en un cierto momento se sientan más preocupados por la situación de las regiones marginadas o de los grupos sociales víctimas de exclusión, y que tengan la intención de implementar programas públicos importantes en su beneficio, son reprendidos inmediatamente por sus «supervisores» y castigados por infringir las normas de «convergencia financiera». Si persisten en esos comportamientos, se les pondrá en la lista negra de los inversionistas y de los bancos internacionales, y su economía sufrirá los efectos negativos (inflación, estancamiento, desempleo, etcétera).

Construir alternativas de abajo hacia arriba

Debido a las restricciones en cuanto a política e instituciones gubernamentales, me atrevo a decir que la posibilidad de un verdadero —justo y sustentable— desarrollo global empieza en lo local, porque todas las medidas macroeconómicas están forzosamente centradas en el crecimiento y, de esa manera, se adoptan criterios cuantitativos, monetarios y productivistas (mercantilistas) e indicadores incompatibles con un desarrollo centrado en las personas. Y mientras el crecimiento conduce inexorablemente a la concentración y al totalitarismo, el desarrollo local sustentable está fuertemente dirigido hacia la libertad, ya que tiende a propiciar la economía, la conciencia y la participación cooperativa de la mayoría.

Además, la cuestión de hoy no es solamente tratar de encontrar respuestas económicamente viables en el plano local, sino comprometerse en un proceso que —a largo plazo y con un trabajo en red de un conjunto de estructuras y experiencias locales— produzca una alternativa global (o más bien alternativas, pues el desarrollo local implica diversidad) ante la destructiva economía dominante y ante nuestras sociedades fragmentadas. No consiste, sin embargo, en un nuevo sistema para sustituir al antiguo. Creo más bien en el lento, pero firme establecimiento de una coexistencia creativa y fértil de diferentes formas de trabajo, producción, consumo y convivencia. Y esto es, sin duda, un paso decisivo en el avance de la democracia: alcanzar una economía plural como parte de una sociedad verdaderamente abierta.

No nos aproximamos hacia el «fin de la historia»: nuestras sociedades actualmente están, y estarán siempre, comprometidas en un proceso permanente de creación, de construcción del futuro. Y el futuro está siendo construido —hoy y siempre— dentro de las «grietas» culturales, sociales, económicas y ambientales del

sistema dominante mediante múltiples y variadas experiencias, incluyendo aquellas que tienen lugar en el ámbito de las actividades del desarrollo local. La adopción del enfoque hacia el desarrollo local sostenido en las sociedades contemporáneas implica enfrentar permanentemente la pretensión ilegítima de un sistema económico y político único y hegemónico, y proporcionar, en sustitución, el brote de iniciativas y las más diversas opciones, asegurando así el pluralismo y la diversidad, que son dimensiones vitales, no tan sólo de la vida orgánica, sino también de la vida social.

Dentro de esta nueva tendencia existe una gran necesidad de resistencia frente a la dominación impuesta por los mercados financieros globales. Los proyectos locales, por lo tanto, tienen que conquistar determinado grado de autonomía en varios ámbitos (desde local hasta interlocal e internacional), y se hará necesario, entre otras medidas, reducir la dependencia frente al comercio mundial y, consecuentemente, huir de las devastadoras manipulaciones de los mercados de cambio. Ciertamente, en el mundo actual ya no hay lugar para la autosuficiencia y el proteccionismo excesivos. Pero nada debe impedirle a una localidad o a una región o país implementar estrategias basadas en cierto grado de autoconfianza económica, especialmente en el estratégico sector alimentario. Para que eso suceda, la política actual tiene que dar una reviraje y comenzar a rediseñar y a reorganizar la vida económica y social de «abajo hacia arriba». Es necesario probar el principio de subsidiariedad también en el campo económico: detectar necesidades básicas, identificar recursos actuales y potenciales, de localidad a localidad; y tan sólo en relación con los bienes y servicios no disponibles localmente, es como se establecerán relaciones con los mercados regionales y, siguiendo la misma lógica, con mercados nacionales, continentales y mundiales. Después del sector alimentario, todos los demás campos de la vida económica y social deberán seguir este camino.

Con base en auditorías y levantamientos realizados localmente, es posible elaborar un plan integrado, relativo al desarrollo sustentable y a la calidad de vida, como marco orientador que necesariamente exige estrategias diferenciadas y descentralizadas para territorios y sectores diferentes: en algunos casos, aún habrá lugar para el crecimiento económico; en otros, la prioridad se le dará a una economía estancada de nulo crecimiento y, en localidades excesivamente congestionadas, el objetivo será una tasa de crecimiento negativa, por lo menos por algún tiempo, mientras que en todas las situaciones el fin último será promover constantemente la mejoría de la calidad de vida (de todas las formas de vida) para las generaciones actuales y futuras.

El anhelo por un contexto político más favorable

Al mismo tiempo, tiene que elaborarse un cuadro institucional favorable, de manera que se promuevan las microiniciativas dispersas. Por ejemplo: hay que estimular

a las agencias intermediarias —comisiones locales y asociaciones de desarrollo local— a mostrarse, consolidarse y asumir un papel activo por medio de «contratos programa» financiados a través de un fondo descentralizado concebido para promover el desarrollo local sustentable. Obviamente, tendrá que adoptarse una nueva legislación e implementarse nuevas reglas que no opriman, sino que promuevan la creación de microempresas y el autoempleo a escala reducida, especialmente en cuanto a los requisitos legales de producción (actualmente basados en las necesidades de la producción industrial en masa), a la tasación y a las deducciones para la seguridad social. También es necesario estimular a las universidades y centros de investigación para que dirijan sus actividades hacia las comunidades y economías locales, así como hacia la producción a escala reducida. Serán necesarias también las agencias de crédito, de sociedades de capital de riesgo y compañías de seguros descentralizadas, de manera que se canalicen los ahorros locales hacia las iniciativas en la región. Otra innovación necesaria, ya existente en varios lugares, es la creación de «dinero local», que puede sacar del mercado mundial una parte importante de los trueques efectuados localmente. Ciertos subsidios, por ejemplo, podrían pagarse con esta moneda mediante cheques válidos únicamente para la adquisición de bienes y servicios disponibles localmente que necesiten ser protegidos y estimulados, a pesar de que no sean competitivos en el mercado abierto. De esta manera, se garantiza que por lo menos una parte de las bonificaciones y subsidios pagados localmente servirían, efectivamente, para reforzar y estimular las economías locales en vez de ser engullidos por las fuerzas dominantes de la economía global. Estos «cheques locales» también se emitirían para instituciones como escuelas, hospitales y hogares de la tercera edad, representando así un canal de flujo importante para los productos y servicios locales como, por ejemplo, cosechas agrícolas y productos alimenticios considerados no comerciables por los padrones macroeconómicos. Más aún, todos los concursos públicos deberían incluir cláusulas sociales y ecológicas, dándole preferencia a candidatos que garanticen, por ejemplo, la creación o la mejora del empleo local, así como un verdadero respeto por las cuestiones ambientales.

Luego de esta pequeña lista de ejemplos, y sabiendo que se podrían mencionar muchos más, es fácil entender el alcance y la profundidad de los cambios que podrían inducirse en nuestras sociedades con la implementación prioritaria del desarrollo local sustentable, por medio de planes e iniciativas territoriales. De ahí la importancia vital de las experiencias sociales que están ocurriendo globalmente y que pueden ser incluidas bajo este título. En este contexto, «local» significa forzosamente mucho más que tan sólo el «cuarto nivel» de implementación de medidas macroeconómicas. Efectivamente, es el único escalón en que es posible alcanzar, en un cierto territorio viable, la integración efectiva de programas sectoriales y, al mismo tiempo, garantizar la participación total, cotidiana y el fortalecimiento de un creciente porcentaje de ciudadanos. Y es también en el ámbito local

donde las asociaciones pueden desarrollar sus proyectos políticos, sociales y económicos, pues es únicamente a esta escala en que la creatividad de la sociedad civil logra claramente expresarse y materializarse.

Aún una cuestión muy compleja

El desarrollo local sustentable ha probado ser una respuesta muy positiva para los grupos y territorios hechos a un lado por parte de la economía mundial. Sin embargo, el desarrollo local es en sí un asunto muy complejo. Crear, a partir de los recursos existentes, industrias alternativas que tienen que ser, por lo menos parcialmente, viables en el contexto económico global, no es tarea fácil. Pedir el apoyo indispensable de la sociedad en general, en forma de subsidios y otros sistemas de ayuda, sin quedar como rehén de una ayuda permanente, también constituye una cuestión delicada. Y combinar el conocimiento local con el externo, de manera que se conciban proyectos que ayuden a reavivar el tejido social y económico de las comunidades locales, no es ciertamente un proceso lineal sino muy complejo y propenso al surgimiento de conflictos. Transformar el conflicto en creatividad es la capacidad que deben adquirir y desarrollar todos los que participan en estos procesos y estructuras.

Además de eso, ¿cómo promover la «cultura del desarrollo» o el «anhelo por la autonomía» en las zonas más carentes y fuertemente afectadas por el aislamiento, la aculturación, la dependencia, la emigración y la falta de confianza? Es un hecho que, en zonas rurales en decadencia, que enfrentan procesos de desertificación, tanto en términos demográficos como en términos ecológicos, así como en áreas urbanas marginadas y desfavorecidas, se necesitará un movimiento social de cambio —para una mejor calidad de vida, y no sólo para una vida— normalmente introducido desde el exterior. Existen, obviamente, algunos recursos locales —humanos y naturales— en los que puede fundamentarse. Sin embargo, debido a la ruptura social y cultural provocada por los fuertes descontentos externos, y también por un sentimiento fuertemente arraigado de incredulidad en sus recursos y capacidades, la paradoja siguiente debe entenderse bien y aceptarse en el ámbito del desarrollo local: cualquier proceso que tienda hacia un desarrollo endógeno incluyente necesita del impulso externo, seguramente en su fase inicial, pero también frecuentemente como hilo conductor accesorio por algunos años, hasta que la capacidad de organización local alcance un aprendizaje de madurez y autosuficiencia.

¿Tiene la Asociación In Loco un futuro viable?

La Asociación In Loco, ya descrita y analizada, ha desempeñado este tipo de papel desde mediados de la década de 1980. La prueba final de su éxito sería su eventual pérdida de relevancia a medida que nuevas asociaciones locales —de feligresía o concejalía— fueran surgiendo. Este proceso está sucediendo, efectivamente, pero todavía de manera tímida y desigual, e In Loco ha dado siempre todo su apoyo a esa construcción de capacidad de organización. Tal desarrollo, no obstante, no parece volver redundante a In Loco, pues continuamente se hacen nuevas solicitudes por parte de las estructuras locales y regionales. Su naturaleza puede, sin embargo, cambiar radicalmente como resultado de un mejor ordenamiento territorial, e In Loco se volverá técnicamente más especializada y más activa políticamente, concentrando su capacidad y su experiencia práctica en cuestiones estratégicas, como asistencia técnica a las entidades autónomas y a las asociaciones locales para el desarrollo sustentable, un papel mediador en sociedades interlocales, experimentaciones y demostraciones, como dínamo para la innovación tecnológica y organizacional, centro de formación para activistas profesionales y escuela práctica para la ciudadanía activa.

BIBLIOGRAFÍA

- Freire, Paulo, *Pedagogia do oprimido*, Afrontamento, Oporto, 1975.
Verschave, François-Xavier, *Libres leçons de Braudel. Passerelles pour une Société Excluante*, Fondation pour le progrès de l'homme Syros, París, 1994.

XII. ¿Sistemas alternativos de producción?

Aníbal Quijano

INTRODUCCIÓN

La aspiración a una existencia social sin explotación es, como se sabe, antigua. Pero su cristalización en la idea de que para realizarla es necesario un «modo» o un «sistema alternativo de producción» tiene apenas casi dos siglos, lo mismo que su referente, el concepto mismo de «modo de producción». Ambos son, en ese sentido, productos específicos del moderno patrón de poder capitalista. Aunque empieza ya desde comienzos del siglo XIX a ser elaborada y discutida teórica y políticamente en Europa, esa idea no adquiere ciudadanía plena en la civilización moderna sino hasta mediados de dicha centuria.¹ Desde entonces, con sus conocidos avatares, nunca ha dejado de estar en el debate y en los conflictos sociales mundiales, en el centro mismo de fermento y de fervor muchas veces; la última, en los años sesenta del siglo anterior. Otras, como ahora, llega desde los márgenes, pero como una vasta marejada.

El capitalismo, según la perspectiva europea, es el campo de relaciones que otorga sentido a la idea de «alternativo» para todo «modo» o «sistema de producción» considerado, o esperado, idóneo para no sólo remplazar al del capital, sino, ante todo, eliminar las raíces sociales y las condiciones históricas de la explotación y de la dominación social. En otros términos, esa idea es, desde hace 200 años,

¹ El proceso de elaboración teórica de esa idea comienza, por supuesto, con la crítica de la sociedad capitalista y prosigue con la de la teoría de la economía capitalista o «economía política» que se había desarrollado durante el siglo XVIII hasta culminar en su período «clásico», a fines de esa misma centuria, con Smith y Ricardo. La crítica teórica y política de la sociedad capitalista europea comenzó ya a fines del siglo XVIII, pero tiene un primer momento de maduración apenas desde comienzos del XIX, primero en la vasta y precursora obra de Henri de Saint-Simon y, después, a lo largo del siglo, en la de Owen, Fourier, Proudhon, Marx y Bakunin, principalmente. En cambio, la crítica de la teoría de la economía capitalista no llega a tener ese momento, sino bien pasada la primera mitad del siglo XIX, con Marx sobre todo, cuyo *Das Kapital* (1867) se subtítulo, precisamente, «Crítica de la economía política».

uno de los ejes centrales de las luchas contra el capitalismo, en particular, y en general de toda forma de explotación y dominación.

No es ésta la ocasión, desde luego, ni éste el lugar para historiar ni discutir el debate entre las corrientes europeas de propuestas de tales supuestos o posibles «modos alternativos de producción», aunque es una tarea urgente para confrontarlas con las provenientes del resto del mundo capitalista. No será del todo inútil, aludir por lo menos a las de mayor presencia e influencia en las luchas revolucionarias y, más generalmente, en las disputas de poder.

A lo largo del siglo XIX y hasta la primera Guerra Mundial, en Europa fueron emergiendo varias iniciativas. Desde la ambigua, pero pletórica idea saintsimoniana de «sociedad de productores», pasando por las «cooperativas» de Owen; el «falánsterio» de Fourier; la estatización de todos los recursos de producción planteada en el *Manifiesto comunista* de Marx y Engels; la comunidad del tipo de la *obschina*, de los *narodnikis* o «populistas» rusos; la revolución de la «comuna» de París en 1871, adoptada desde entonces por Marx, quien corrigió radicalmente su propuesta del *Manifiesto*; la «comuna» del movimiento anarquista; la idea de los «consejos obreros» de algunas minoritarias fracciones del socialismo europeo, en Holanda sobre todo.

La que pareció tener mejor fortuna práctica fue, hasta no hace mucho, el plan de estatización de la economía, contenido en el *Manifiesto comunista* de 1848. Fue seguida por el movimiento socialdemócrata europeo, y con mayor énfasis por los llamados «bolcheviques», como propia y específica del socialismo, no obstante las posteriores enmiendas del propio Marx desde la Comuna de París. Con la toma del poder por los bolcheviques en Rusia en 1917, esa idea fue impuesta en la práctica, primero en Rusia. Todavía durante la Guerra Civil española (1936-1939) estuvieron activos, aunque en abierto conflicto con los defensores de la estatización de la economía, importantes sectores que procuraban poner en acción las «comunidades» y los «consejos» como forma central de organización de la nueva sociedad, y sus ensayos se intentaron sobre todo en Cataluña y en Aragón, respectivamente. La derrota de los republicanos en esa guerra, arrastró también dichas experiencias. Después de la segunda Guerra Mundial, la estatización de la economía fue impuesta por Rusia también en la práctica de todo el llamado «campo socialista», dentro y fuera de Europa. Desde entonces, debido a la hegemonía mundial del movimiento comunista, que se apoyaba en el prestigio y en el poder político ruso, la corriente permeó también intelectualmente a escala mundial y arrinconó todas las demás propuestas, en especial las asociadas con el llamado «socialismo utópico», con el «consejismo», con el «populismo ruso» y con el «anarquismo», presentados según la peculiar «lectura» bolchevique y, en especial, estaliniana. Así, el largo, rico y complejo debate de los revolucionarios anticapitalistas de Europa quedó prácticamente enterrado, y la idea de que socialismo y estatización de la economía eran conceptos teórica y políticamente

intercambiables predominó mundialmente por casi todo el siglo XX, hasta la desintegración del poder de Rusia y del «campo socialista» europeo, que culmina en 1989.

Solamente el cooperativismo logró sobrenadar en la avalancha, aunque a costa de drásticas contorsiones, porque en Europa fue cobijado por el movimiento que retuvo el nombre de socialdemócrata, y fuera de Europa por algunas de las corrientes democrático-nacionalistas, en la lucha contra la alianza oligárquico-imperialista, tanto en Asia como en América Latina. Como todas esas corrientes políticas se replegaron, finalmente, a la lucha por reformar el capitalismo para moderar la explotación de los trabajadores y a la correspondiente administración de las relaciones entre capital y trabajo en los países donde accedieron al gobierno, el cooperativismo fue vinculado a la concepción y práctica de tales reformas. Se mantuvo, así, como parte del debate y de la práctica política, pero más bien como un sector marginal de la economía capitalista. En un sentido, esa historia daba la razón a Marx, para quien las cooperativas no eran por sí mismas una alternativa al capitalismo, pero podrían tener un importante papel de apoyo en la autoeducación de los trabajadores para reapropiarse del control de su trabajo contra el despotismo del capital.

Fuera de Europa, especialmente en América Latina, emergieron algunas propuestas diferentes en el periodo revolucionario comprendido entre 1925 y 1935.² La más importante fue, seguramente, la de José Carlos Mariátegui (1895-1930) en Perú, aunque la prematura muerte del autor no le permitió indagar y elaborar sistemáticamente su proyecto. Éste no quedó, por eso, libre de ambigüedades. Por una parte, las reflexiones de Mariátegui sobre el papel y el lugar de la «comunidad indígena» en una revolución de trayectoria socialista tienen algún parentesco con las investigaciones y las propuestas de los *narodnikis* rusos, aunque es dudoso que él estuviera familiarizado con ese debate, excepto en la versión leninista. Pero, por otra parte, Mariátegui tenía interés explícito en la nacionalización de la población de un espacio político y no desechó el Moderno Estado-nación como marco institucional de una revolución socialista. Sus ideas acerca de las comunidades indígenas y sobre la cuestión nacional merecieron áspera condena en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 1929) de los representantes de la Internacional Comunista, y más tarde, en 1941, fue acusado de *narodniki* por un comentarista ruso. Todavía hoy es calificado, por

² Quizá no es del todo ocioso recordar a los lectores no latinoamericanos que, durante esos años, los países de América Latina, sin excepción, fueron sacudidos por procesos revolucionarios, algunos con amplia influencia socialista, dirigidos contra la alianza imperialista-oligárquica que controlaba entonces el poder en estos países. Todos esos procesos, salvo en México y Chile, fueron derrotados y sucedidos por sangrientas dictaduras militares que se mantuvieron hasta después de la segunda Guerra Mundial. No hay suficientes estudios específicos, pero es útil ver *América Latina en los años treinta*, volumen colectivo coordinado por Pablo González Casanova y publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1977.

esas mismas propuestas, como «anticapitalista romántico» por algunos estudiosos trotskistas de Europa.³

Con la segunda Guerra Mundial entraron en escena dos proyectos nuevos. Durante la conquista de Palestina, las corrientes socialistas del sionismo organizaron, con el nombre de *kibutz*, una suerte de «comunidades» en los territorios que iban ocupando. Esas instituciones llegaron a ser, para muchos, una de las experiencias más interesantes y quizá más próximas a una visión democrática de sociedad socialista. Pero los *kibutz* pronto fueron subordinados a las necesidades del capitalismo y de su nuevo Estado en Israel, a las contingencias de la guerra de resistencia de los palestinos y a los conflictos entre los sectores más autoritarios y más liberales en el propio Estado. No se han desintegrado del todo, pero están reconocidamente cada vez más lejos de sus proyectos e, incluso, de sus primeras realizaciones.

El otro intento fue parte de la experiencia del Estado de Yugoslavia, bajo la dirección de Tito y de la Liga Comunista Yugoslava, tras la ruptura con Rusia y con Stalin. Dicho proyecto, con el nombre de «autogestión» obrera de la producción, fue levantado como toda una alternativa al estatismo económico en Rusia y, no obstante que estaba articulada con el control burocrático del Estado, incluso como base de un socialismo democrático frente al despotismo estaliniano. El balance de esa experiencia está por hacerse, aunque no sobrevivió a la desintegración del Estado yugoslavo. En América Latina ejerció limitada influencia en el debate de minoritarias corrientes socialistas que propugnaban por un «socialismo democrático» (por ejemplo, en el Partido Socialista de Chile antes de 1973) y en ciertos regímenes, como el «Gobierno revolucionario de las fuerzas armadas» (1968-1980) en Perú, presidido en su primera etapa por el general Juan Velasco Alvarado y conocido por eso como «velasquismo».

I. A LA HORA DE LA GLOBALIZACIÓN: ¿QUÉ HA CAMBIADO?

El capitalismo, ciertamente, ha cambiado mucho. Sobre todo desde mediados de la crisis mundial iniciada a mediados de los años setenta del siglo xx. Y es la percepción de tales cambios lo que permite tan extendida difusión de la idea de «globalización». Un «sistema alternativo de producción» no puede, pues, sino referirse a este innovado capitalismo, lo que implica sin duda dimensiones nuevas en la idea de «alternativo». Pero, a pesar de todos sus cambios, con el capitalismo

³ Sus *Obras completas*, incluida su correspondencia, han sido reeditadas en repetidas ocasiones en Lima. Su libro más famoso, *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, originalmente publicado en 1926, en Lima, tiene numerosa reimpresión en Perú y es una de las obras más traducidas a todos los idiomas. Integra la colección Clásicos de América, de la Biblioteca Ayacucho. El Fondo de Cultura Económica publicó, en 1991, un volumen titulado *Textos básicos*, que reúne toda su obra político-sociológica. Sobre Mariátegui, hay una vasta y creciente literatura, en varios idiomas. Por ejemplo, Miroshevski, 1942.

no se trata, exactamente, de un nuevo patrón de poder. En ese sentido, las demandas de «modos» o «sistemas alternativos de producción» se refieren de todas maneras al capitalismo.

¿No hay, pues, nada nuevo en tales demandas? La respuesta es sí. Ahora hay un nuevo imaginario anticapitalista que no se contrapone solamente al capitalismo, sino también a la propuesta de estatización de la economía como alternativa real al capitalismo. Y creo que éste es el elemento efectivamente nuevo del actual imaginario crítico en la sociedad y en el periodo asociado a la «globalización».⁴

Se podría afirmar, según eso, que la idea de «alternatividad» respecto de los «modos» o «sistema de producción» encuentra su actual sentido concreto en relación con dos referentes mayores: a) el capitalismo, por supuesto, y en especial por la virulencia de sus tendencias desatadas junto con la «globalización», y b) la frustránea experiencia del estatismo y del despotismo burocrático en los países del «campo socialista» y en Rusia en particular.

El nuevo imaginario anticapitalista no está aún expresado en, o asociado con, una nueva teoría crítica del poder, sistemáticamente investigada, y a sus correspondientes propuestas políticas revolucionarias. Ya están activas, sin embargo, corrientes en esa dirección. Eso seguramente explica que, por un lado, en la crítica y en la resistencia contra las tendencias capitalistas más predatorias que la «globalización» ha desencadenado contra los derechos de los explotados y los dominados del mundo, lo que todavía predomina, aunque recesivamente, son los instrumentos de la teoría crítica que estuvo asociada a la derrota mundial del anticapitalismo entre 1968-1989. Pero también que, por otro lado, en las alternativas que comienzan a surgir, lo que está notoriamente ausente es, precisamente, la estatización de la economía.

Parecería extraño que, en tal contexto, los masivos reclamos populares contra la falta de empleo asalariado y de alguna más equitativa distribución de ingresos, de bienes y de servicios; contra la eliminación de los derechos legales de los asalariados para negociar las condiciones de venta de su fuerza de trabajo, esto es, contra la flexibilización y la precarización del trabajo, se dirijan ante todo al Estado. No lo es, si se tiene en cuenta que mientras no estén otras opciones eficaces activas en escena, de manera concreta, el Estado sigue siendo, en el capitalismo, no solamente un instrumento de los dominadores y explotadores, sino también una arena de luchas sociales por los límites, las condiciones y las modalidades de dominación y de explotación. En el marco institucional del Estado, no es probable que ese horizonte se rebase. Después de todo, las más avanzadas de las democracias en el universo capitalista no son otra cosa que la institucionalización negociada de tales conflictos.⁵

⁴ He adelantado algunas ideas en torno a esas cuestiones en Quijano, 2001.

⁵ Presentamos una discusión de esta cuestión en el Instituto de Estudios Internacionales Pedro Gual, Caracas, Venezuela, en *Colonialidad del poder, globalización y democracia* y en *Trayectorias. Revista de Ciencias Sociales* de la Universidad de Monterrey, México.

esas mismas propuestas, como «anticapitalista romántico» por algunos estudiosos trotskistas de Europa.³

Con la segunda Guerra Mundial entraron en escena dos proyectos nuevos. Durante la conquista de Palestina, las corrientes socialistas del sionismo organizaron, con el nombre de *kibutz*, una suerte de «comunidades» en los territorios que iban ocupando. Esas instituciones llegaron a ser, para muchos, una de las experiencias más interesantes y quizá más próximas a una visión democrática de sociedad socialista. Pero los kibutz pronto fueron subordinados a las necesidades del capitalismo y de su nuevo Estado en Israel, a las contingencias de la guerra de resistencia de los palestinos y a los conflictos entre los sectores más autoritarios y más liberales en el propio Estado. No se han desintegrado del todo, pero están reconocidamente cada vez más lejos de sus proyectos e, incluso, de sus primeras realizaciones.

El otro intento fue parte de la experiencia del Estado de Yugoslavia, bajo la dirección de Tito y de la Liga Comunista Yugoslava, tras la ruptura con Rusia y con Stalin. Dicho proyecto, con el nombre de «autogestión» obrera de la producción, fue levantado como toda una alternativa al estatismo económico en Rusia y, no obstante que estaba articulada con el control burocrático del Estado, incluso como base de un socialismo democrático frente al despotismo estaliniano. El balance de esa experiencia está por hacerse, aunque no sobrevivió a la desintegración del Estado yugoslavo. En América Latina ejerció limitada influencia en el debate de minoritarias corrientes socialistas que propugnaban por un «socialismo democrático» (por ejemplo, en el Partido Socialista de Chile antes de 1973) y en ciertos regímenes, como el «Gobierno revolucionario de las fuerzas armadas» (1968-1980) en Perú, presidido en su primera etapa por el general Juan Velasco Alvarado y conocido por eso como «velasquismo».

I. A LA HORA DE LA GLOBALIZACIÓN: ¿QUÉ HA CAMBIADO?

El capitalismo, ciertamente, ha cambiado mucho. Sobre todo desde mediados de la crisis mundial iniciada a mediados de los años setenta del siglo xx. Y es la percepción de tales cambios lo que permite tan extendida difusión de la idea de «globalización». Un «sistema alternativo de producción» no puede, pues, sino referirse a este innovado capitalismo, lo que implica sin duda dimensiones nuevas en la idea de «alternativo». Pero, a pesar de todos sus cambios, con el capitalismo

³ Sus *Obras completas*, incluida su correspondencia, han sido reeditadas en repetidas ocasiones en Lima. Su libro más famoso, *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, originalmente publicado en 1926, en Lima, tiene numerosa reimpresión en Perú y es una de las obras más traducidas a todos los idiomas. Integra la colección Clásicos de América, de la Biblioteca Ayacucho. El Fondo de Cultura Económica publicó, en 1991, un volumen titulado *Textos básicos*, que reúne toda su obra político-sociológica. Sobre Mariátegui, hay una vasta y creciente literatura, en varios idiomas. Por ejemplo, Miroshovski, 1942.

no se trata, exactamente, de un nuevo patrón de poder. En ese sentido, las demandas de «modos» o «sistemas alternativos de producción» se refieren de todas maneras al capitalismo.

¿No hay, pues, nada nuevo en tales demandas? La respuesta es sí. Ahora hay un nuevo imaginario anticapitalista que no se contrapone solamente al capitalismo, sino también a la propuesta de estatización de la economía como alternativa real al capitalismo. Y creo que éste es el elemento efectivamente nuevo del actual imaginario crítico en la sociedad y en el periodo asociado a la «globalización».⁴

Se podría afirmar, según eso, que la idea de «alternatividad» respecto de los «modos» o «sistema de producción» encuentra su actual sentido concreto en relación con dos referentes mayores: a) el capitalismo, por supuesto, y en especial por la virulencia de sus tendencias desatadas junto con la «globalización», y b) la frustrada experiencia del estatismo y del despotismo burocrático en los países del «campo socialista» y en Rusia en particular.

El nuevo imaginario anticapitalista no está aún expresado en, o asociado con, una nueva teoría crítica del poder, sistemáticamente investigada, y a sus correspondientes propuestas políticas revolucionarias. Ya están activas, sin embargo, corrientes en esa dirección. Eso seguramente explica que, por un lado, en la crítica y en la resistencia contra las tendencias capitalistas más predatorias que la «globalización» ha desencadenado contra los derechos de los explotados y los dominados del mundo, lo que todavía predomina, aunque recesivamente, son los instrumentos de la teoría crítica que estuvo asociada a la derrota mundial del anticapitalismo entre 1968-1989. Pero también que, por otro lado, en las alternativas que comienzan a surgir, lo que está notoriamente ausente es, precisamente, la estatización de la economía.

Parecería extraño que, en tal contexto, los masivos reclamos populares contra la falta de empleo asalariado y de alguna más equitativa distribución de ingresos, de bienes y de servicios; contra la eliminación de los derechos legales de los asalariados para negociar las condiciones de venta de su fuerza de trabajo, esto es, contra la flexibilización y la precarización del trabajo, se dirijan ante todo al Estado. No lo es, si se tiene en cuenta que mientras no estén otras opciones eficaces activas en escena, de manera concreta, el Estado sigue siendo, en el capitalismo, no solamente un instrumento de los dominadores y explotadores, sino también una arena de luchas sociales por los límites, las condiciones y las modalidades de dominación y de explotación. En el marco institucional del Estado, no es probable que ese horizonte se rebase. Después de todo, las más avanzadas de las democracias en el universo capitalista no son otra cosa que la institucionalización negociada de tales conflictos.⁵

⁴ He adelantado algunas ideas en torno a esas cuestiones en Quijano, 2001.

⁵ Presentamos una discusión de esta cuestión en el Instituto de Estudios Internacionales Pedro Gual, Caracas, Venezuela, en *Colonialidad del poder, globalización y democracia* y en *Trayectorias. Revista de Ciencias Sociales* de la Universidad de Monterrey, México.

Por lo demás, durante casi tres décadas estuvieron mundialmente ausentes cuestionamientos radicales y propuestas alternativas a este patrón de poder. Y antes de este periodo, antes de la catástrofe del «campo socialista», las corrientes hegemónicas del movimiento mundial anticapitalista insistían en que las luchas apuntaban a la «captura» del Estado para, desde allí, «construir» la nueva sociedad. Eso hace visible que el lugar central del Estado no solamente es cierto en el universo ideológico del liberalismo, sino —y con frecuencia más enfáticamente— también en el del materialismo histórico. No sorprende, por todo eso, que al iniciarse la resistencia masiva contra las políticas neoliberales y contra el imperialismo global, los sectores que se encaminan hacia el cuestionamiento radical del poder y hacia otras propuestas, sean minoritarios. Por eso mismo, tampoco sería extraño que con el crecimiento de la resistencia y de la protesta los dominadores fueran forzados, como incipientemente está sucediendo, a hacer concesiones que, normalmente también, sólo podrían ser realizadas a través del Estado. Si eso llegara a ocurrir, quizás regresarían al debate propuestas de estatización de la economía, como la alternativa normal de desenvolvimiento y mutación del capitalismo en socialismo, tal como se presenta en el materialismo histórico. Pero es dudoso que las tendencias intersubjetivas actuales sean clausuradas del todo y desmanteladas sus condiciones sociales. En tal caso, es también dudoso que las propuestas estatistas vuelvan, como en el pasado, a imponerse como la mejor alternativa anticapitalista.

2. ORIGEN Y SENTIDO DE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS ACTUALES

Si se revisa la literatura y el historial de las propuestas alternativas al capitalismo que han emergido con la crisis mundial desde finales de los años sesenta del siglo xx, es posible diferenciar dos momentos y dos vertientes.

Una primera vertiente fue la investigación latinoamericana sobre la cuestión de la marginalización,⁶ que fue la primera en señalar, desde 1966, que el capitalismo procesaba tendencias nuevas en las relaciones capital-trabajo y que dejaban fuera del empleo asalariado estable a una población creciente de trabajadores, más allá de los conocidos ciclos de expansión y contracción de la estructura de acumulación del capital. El término usado para ese fenómeno fue el de «marginalización», pero no implicaba que esa población quedara fuera del capitalismo. Y fue en una vertiente de esos estudios donde se encontró que los «marginados» del salario tendían a organizar lo que se denominó «polo marginal» de la economía, *ergo* del capitalismo, y donde las relaciones entre mercado y reciprocidad

⁶ El debate fue abierto por José Nun y Aníbal Quijano, principalmente, a mediados de la década de los sesenta (Nun, 1969; Quijano, 1977). El debate sigue y cada uno de ellos ha continuado en esa indagación y es numerosa la lista de los participantes.

eran muy heterogéneas y precarias, pero también extremadamente activas (Quijano, 1969).

Una segunda vertiente fue producto de la crisis mundial capitalista desde mediados de 1973. Al estallar esa crisis, la «marginación» de los trabajadores se amplió violentamente en todo el mundo y muy en especial, por supuesto, en las áreas periféricas y dependientes.⁷ Fue en ese contexto donde se hizo rápidamente universal la idea de «estrategias de sobrevivencia»⁸ de la inmensa masa de trabajadores excluida del empleo asalariado y que, en consecuencia, se sumaba a la masa de gente empobrecida. Paralelamente, hicieron su ingreso los conceptos de «desocupación estructural» entre los economistas del capital, como reconocimiento empírico de que los cambios en las relaciones capital-trabajo no eran ya coyunturales y transitorios. Por ese mismo mecanismo de hacer «abstracted empiricism», para los ideólogos del capitalismo los trabajadores marginados se convirtieron en «pobres» y su vasta población en «socialmente excluidos». Una buena parte de investigadores sociales, que previamente eran críticos del poder, siguió esas formulaciones. El proceso de subalternación del pensamiento social, incluso el que se reclamaba como científico-social, caminaba rápidamente.

Ante esas tendencias del capitalismo, comenzó un nuevo periodo de resistencia de los trabajadores, que se diferencia en dos momentos. En el primero, durante el resto de casi todo el siglo xx, la resistencia consistió, ante todo, en asegurar la sobrevivencia. ¿Y cómo hacerlo cuando la mercantilización se adueñaba de todo, literalmente, en el mundo, y el desempleo significaba, precisamente, la falta de ingresos y de «poder adquisitivo», de «solvencia», como dice la jerga de los economistas, y en consecuencia la virtual imposibilidad de vivir del o según el mercado?

La respuesta probablemente mayoritaria fue la universalización de los mecanismos del «polo marginal de la economía» o, según otra nomenclatura, la extensión de la «informalidad», término que aludía aún a lo que hacían los pobres para sobrevivir, es decir, antes de que los capitalistas invadieran ese espacio para precarizar y flexibilizar el trabajo, y universalizar la subcontratación antes de que fueran legalmente «desreguladas» las relaciones capital-trabajo. A ese primer momento de la resistencia del trabajo contra el capital corresponde la extensión de las *grassroot organizations*, que ya venían operando, por lo menos en América Latina, desde comienzos de la década de los sesenta. Esta etapa de la resistencia llega hasta fines de los ochenta.

En esa misma época se aceleraron y profundizaron las tendencias polarizadoras del capital y la rápida y drástica reconcentración del control de la autoridad pública a escala mundial, gracias a la derrota de todos los regímenes, movimientos

⁷ Respecto de América Latina, en ese mismo momento ocurrió también el golpe de Estado de Pinochet en Chile.

⁸ Debida a Joaquín Duque, 1973.

y organizaciones antisistémicos o rivales del imperialismo. En tales tendencias, los trabajadores —según sus específicas circunstancias en un universo histórico y estructuralmente heterogéneo— fueron y son empujados a diversos comportamientos: *a)* ser sometidos a formas presalariales de explotación, más perversas cuanto más son resultado de las tendencias y necesidades actuales del capitalismo; *b)* recurrir a «estrategias de sobrevivencia», usando la propia lógica y los propios mecanismos del capitalismo y continuar reclamando empleo asalariado y luchar por conseguirlo; *c)* en fin, recurrir de nuevo a la práctica de la reciprocidad en las nuevas condiciones y con los instrumentos producidos en el capitalismo.

Una parte importante de la población mundial de trabajadores comenzó a ser víctima, de nuevo, de las peores formas presalariales de explotación. Ahora se reproducen y expanden la esclavitud y la servidumbre personal. La pequeña producción mercantil independiente se extendió ubicuamente en todo el mundo, como quizá el sector central de la llamada «economía informal». Esas perversas tendencias del capitalismo de la «globalización» están creciendo.⁹

Asimismo, son cada vez más amplios los sectores de trabajadores desalariados («pobres» y «excluidos») que tuvieron que recurrir más, o sobre todo, a la reciprocidad, no sólo para intercambiar fuerza de trabajo y trabajo entre sí, sino también para manejar con menos desventaja sus inevitables e indispensables relaciones con el mercado. Tanto más, en la medida en que avanzaban las tendencias de «desocupación estructural», en especial cuando ésta pasó a ser una política mundial producida por el creciente desinterés del capital para mercantilizar y valorar la fuerza de trabajo viva e individual, sobre todo de modo estable y regulado.

La reciprocidad¹⁰ nunca estuvo totalmente ausente en el capitalismo, pero sus espacios se habían reducido. Ahora se extiende, quizá masivamente, el recurrir a esa forma de control del trabajo y de organización de la producción. Eso es, en rigor, un redescubrimiento de los trabajadores en la resistencia al capitalismo. Pero no se trata del resultado de una crítica consciente y explícita a éste. Tal redescubrimiento es, más bien, una conducta social que resulta de las propias tendencias del capitalismo, en especial de su creciente desinterés en la mercantilización de la fuerza viva de trabajo individual.

Recurrir crecientemente a la reciprocidad es una nueva tendencia de la resistencia de los trabajadores, e implica la entrada de un nuevo momento del nuevo periodo histórico de las experiencias y conflictos sociales en el capitalismo, en tanto

⁹ La información ordenada sobre esos procesos apenas comienza, pero la disponible es espeluznante. Según Naciones Unidas, se estima en unos 200 millones la población sometida a esclavitud, no solamente en África, sino en el Sudeste Asiático, en América Latina y en la frontera EUA-México. He comenzado a discutir esas cuestiones en *La economía popular y sus caminos en América Latina*, ya citada. Y en *El trabajo al final del siglo xx*, conferencia inaugural para el Primer Centenario de la Confederación General de Trabajadores de Puerto Rico, en 1998. San Juan, Puerto Rico.

¹⁰ En este contexto, y para simplificar, llamo *reciprocidad* al intercambio de fuerza de trabajo y de trabajo (productos, tangibles e intangibles), sin la intermediación del mercado.

que son las necesidades materiales producidas por las tendencias actuales de ese sistema y el consiguiente comportamiento de la realidad las que empujan a los trabajadores a encontrar que sólo en la medida en que salgan, se liberen de las reglas del juego del capitalismo y ejerciten prácticas sociales que les lleven a reapropiarse del control de su trabajo, de sus recursos y de sus productos, y a reapropiarse de las demás instancias de su existencia social, podrán defenderse mejor del capital incluso usar mejor en esa dirección las reglas capitalistas del mercado.

No es indispensable que, para esas prácticas sociales en torno de la reciprocidad, los agentes y los protagonistas sociales sean conscientes desde el inicio de las implicaciones teóricas y políticas del proceso y de sus propias acciones. Incluso, como se ha dicho, esas prácticas pueden aparecer en extrañas combinaciones con ideologías políticas conservadoras. Pero es la práctica social misma, en la producción o en otras instancias de la existencia social, lo que genera e irá generando modos diferentes de producción de sentido, esto es, de perspectivas mentales diferentes de las asociadas al capitalismo. Éstas se van, se irán, incorporando a su vez a esas prácticas, incluso sin que sus agentes tengan desde el comienzo plena conciencia de que así está ocurriendo. Obviamente, la conciencia de esas implicaciones permitiría llevar mejor y más lejos el proceso y defenderse más y mejor de la reacción capitalista.

Bien puede, entonces, sugerirse que quizá no es una mera coincidencia que la resistencia contra el capitalismo y su «globalización» se haya convertido en una marejada mundial sólo en la última década, y que ese movimiento busque, ahora sí explícitamente, opciones de sociedad. Sin duda el lema del Foro Mundial de Porto Alegre, «Otro mundo es posible», expresa bien la orientación del nuevo periodo, la transición de la resistencia a la búsqueda de alternativas.

3. LAS PRINCIPALES VARIANTES EN AMÉRICA LATINA

En un periodo complejo, de heterogéneas prácticas de resistencia del trabajo respecto al capital, es comprensible que no sean pocas, en la actualidad, las organizaciones y prácticas sociales que se presentan a sí mismas como opciones económicas diferentes a la dominante. Sería pertinente y necesario, en consecuencia, encontrar los elementos eficaces de deslinde entre aquellas que muestran, y las que no, la vitalidad social necesaria para tomar parte en una historia diferente, en una existencia social distinta a la que conocemos. Tampoco faltan las propuestas de deslinde,¹¹ pero esa labor tropieza con un problema delicado: ¿cuál o cuáles

¹¹ Coraggio (1998) sugiere distinguir la individualista, la asociacionista y la solidarista como articuladas al capitalismo, pero dirigidas a combatir la pobreza y a promover el desarrollo, y la «economía popular» que puede ser admitida como un subsistema económico dentro de la economía capitalista, pero diferente de ella (*op. cit.*, pp. 67-68).

elementos podrían ser definidos como eficaces para semejante deslinde? ¿La autoidentificación y la intencionalidad explícita de las propuestas y prácticas como diferentes al capitalismo? ¿Cómo se evalúa su vitalidad para sostenerse y reproducirse dentro y en contra del universo capitalista?

Hay, por ejemplo, una frondosa literatura sobre las «organizaciones sociales de base» o *grassroot organizations*, vinculada en unos casos a la vasta preocupación sobre las «estrategias de sobrevivencia» de las víctimas de las tendencias polarizantes del capitalismo y, en otros, a la fiebre de investigación y discusión de los «nuevos movimientos sociales» que agitó a virtualmente todas las ONG del mundo, aunque quizá muy especialmente de América Latina, cuando se hizo perceptible para todos la derrota mundial de los movimientos llamados ahora «antisistémicos» y numerosos grupos creían descubrir en ellos los nuevos «sujetos revolucionarios». ¹²

Las experiencias de las *grassroot organizations* son presentadas con frecuencia como una economía alternativa. Una exploración anterior, relativamente extensa, de la investigación y documentación de esas experiencias (Quijano, 1998) permite, sin embargo, concluir que no es descaminado afirmar que casi en su totalidad aquéllas no han podido ir más allá de ser «estrategias de sobrevivencia». Eso no disminuye en lo absoluto su inmensa importancia para ayudar a la creciente población empobrecida del mundo a sobrevivir y, en muchos casos, incluso a mejorar sus condiciones de existencia. Pero no son inútiles las reservas acerca de sus propias pretensiones de alternatividad. Sheldon (1988) tiene razón cuando observa:

Nongovernmental grassroot organizations are so frequently lost in selfadmiration that they fail to see that strengths for which they are acclaimed can also be serious weaknesses. In the face of pervasive poverty, for example, «small scale» can mean merely «insignificant». «Politically independent» can mean «powerless» or «disconnected». «Low cost» can mean «underfinanced» or «poor quality». «Innovative» can mean simply «temporary» or «unsustainable». (Sheldon, 1988: 209.)

Incluso una parte de la literatura sobre la llamada «economía informal» la presenta como un nuevo «modo de producción» o una «economía alternativa» (Paulo Renato Souza y Victor Tockman, 1976), ¹³ puesto que en ese «sector» de la economía se trata de lo que hacen los trabajadores para producir y distribuir(se) los productos, y no lo que hacen los capitalistas o la empresa. Eso se concretaría en el hecho de que la «unidad de producción» es la fuerza de trabajo y no la empresa. Y esa sería la diferencia clave entre «sector informal» y «sector moderno».

¹² En verdad es muy abultada la bibliografía. Una revisión y discusión sobre buena parte de ella, en «Poder y crisis en América Latina», *Páginas*, núm. 109, junio 1991: 40-59, Lima, Perú.

¹³ De las numerosas publicaciones del Programa de Recuperación de Empleo en América Latina y el Caribe (Prealc), sobre este punto véase, principalmente, Souza y Tockman, 1976, y Tockman, 1987.

Como se colige, no basta la presencia de la solidaridad como código ético del comportamiento de la gente de una determinada entidad para que tenga la vitalidad y la viabilidad necesarias para convertirse en un modo alternativo de producción de otro tan poderoso, flexible, de probada capacidad de adaptación como el capital y el capitalismo. Si eso bastara, la historia humana sería, probablemente, muy distinta desde miles de años atrás. Es, sin embargo, también demostrable, en particular según las informaciones de los trabajos que componen el presente volumen, que la ausencia de solidaridad debilita el esfuerzo por mantener la vitalidad de un ejercicio alternativo.

No es pertinente en los límites de este trabajo, llevar más lejos esta rápida revisión. Lo que interesa aquí, por el momento, es identificar lo que en la investigación y la correspondiente literatura pueden ser reconocidas como las vertientes mayores del actual debate latinoamericano en torno a la cuestión de las formas alternativas de producción, que son, básicamente, dos:

1. La que algunos autores denominan «economía solidaria». La cooperativa es su institución central, alternativa al capital. Esta propuesta atraviesa, como ya quedó señalado, toda la tradición atlántica de los dos últimos siglos. Aunque algunos (Coraggio, 1998, entre otros) descartan muy rápidamente la promesa y la potencialidad alternativa de las cooperativas, conviene andar más despacio. Las cooperativas son instituciones que organizan, o pueden organizar, a numerosas personas, entre las cuales no predominan, o no necesariamente, las relaciones primarias; que cubren por lo general un determinado ramo o sector de actividad económica; que están articuladas de modo sistemático al mercado; y que, en consecuencia, requieren, para reproducirse y crecer, una división del trabajo relativamente clara y una administración eficaz. Su diferenciación con las empresas capitalistas no se refiere, por lo mismo, ni a su división del trabajo ni a su relación con el mercado ni al lugar del salario o de la administración jeraquizada. Según sus actuales defensores, las diferencias residen, ante todo, en que sus agentes se identifican, explícitamente, como un sistema de autogestión de los trabajadores, de su fuerza de trabajo, de los instrumentos de producción, de los recursos u objetos de producción y de los productos. Es decir, se ubican ideológica y políticamente, de modo explícito, en contraposición al capitalismo. En consecuencia, la distribución de productos, bienes, servicios y beneficios de mercado se hace, o debe hacerse, por el acuerdo de los trabajadores y para los fines decididos por ellos, además de, por supuesto, en favor de ellos. Según uno de sus principales teóricos, se trata así de retomar la autonomía de los sujetos colectivos en torno de la centralidad del trabajo vivo y de la ciudadanía (Singer, 1998).

2. La que se conoce como «economía popular». Esta segunda parece ser, en tanto propuesta, específicamente latinoamericana, aunque no es improbable que sus mismas prácticas sociales tengan otras denominaciones en otras latitudes.

Lo que la distingue de la anterior es que, en primer término, se trata de instituciones heterogéneas de organización de la producción, de la distribución y la relación con el mercado, y vinculadas, a veces al mismo tiempo, a heterogéneas actividades económicas, de producción y distribución; en segundo lugar, su elemento común es que son unidades constituidas por gente que tiene relaciones «primarias» entre sí y, en consecuencia, no pueden ser agrupaciones muy grandes, sino más bien pequeñas; en tercer lugar, tienden a organizarse socialmente según lo que algunos autores han llamado una «lógica comunitaria» (Luis Razeto *et al.*, 1990).¹⁴ A diferencia de la economía solidaria, en la economía popular no se trata siempre, o necesaria y explícitamente, de la autoidentificación ideológica y política de sus agentes, ni de su visión revolucionaria del mundo. Incluso puede ocurrir que se trate de apuestas políticas contrarias. Lo que caracteriza la *economía popular* es que las relaciones de trabajo y de distribución de recursos y del producto se organizan, en lo fundamental, en torno a la reciprocidad y la vida social, las prácticas sociales cotidianas y la comunidad. Eso no significa, por supuesto, que no esté articulada con el mercado de múltiples maneras y medidas.

Lo que claramente diferencia estas vertientes de otras propuestas, es que en el caso de las cooperativas están más presentes las reglas del mercado y del salario, y la reciprocidad opera como desde fuera de las relaciones de trabajo, por una decisión consciente de los miembros o, por lo menos, de la minoría dirigente y aceptada por la mayoría. Por eso, seguramente, cuando esa conciencia no existe, o cuando se estrella contra situaciones desventajosas en la materialidad de las relaciones de trabajo y de distribución del producto, las cooperativas se desintegran o se transforman en empresas convencionales para reproducirse y crecer. En cambio, en el heterogéneo universo de las llamadas «organizaciones económicas populares», en muchas ciudades latinoamericanas, es la materialidad misma de las relaciones sociales la que requiere, obliga si se prefiere, a la solidaridad. En otros términos, es el hecho de que la reciprocidad sea la naturaleza misma de las relaciones sociales lo que entraña la práctica de la solidaridad, incluso quizá al margen, si no necesariamente en contra, de la conciencia política y de la ética social formal de los miembros. Volveremos sobre estas cuestiones en la parte final de estas notas.

Si los leemos desde esta perspectiva, los trabajos que forman este volumen se agrupan, en lo fundamental, en dos vertientes principales: a) los que documentan y discuten experiencias cooperativistas, urbanas como en Brasil (Paul Singer),

¹⁴ Quienes han extendido la denominación de «economía popular» y de «organizaciones económicas populares» a las respectivas unidades, son los miembros del colectivo Programa de Economía del Trabajo (PET) y sus publicaciones son numerosas, a partir de Luis Razeto, Arno Klenner, Apolonia Ramírez y Roberto Urmeneta, 1990. Otro autor importante en este debate es José Luis Coraggio, 1998, ya citado. Mi propia participación se encuentra en Quijano, 1998, también citado, donde puede encontrarse una amplia referencia a numerosos estudios en América Latina, Asia y África.

Colombia (César Rodríguez) e India (Sharit Bhowmik), o rurales como, de nuevo, en Brasil (Paul Singer, Zander Navarro, Martins Carvalho, Almeida Lopes), Mozambique (Cruz e Silva) y Sudáfrica (Heinz Klug). En el caso brasileño, en cierto sentido también en el mozambicano, esas experiencias están vinculadas al problema de la tierra y a las luchas por ésta, sobre todo, pero también a la producción de ciudades para ser habitadas por los trabajadores de la tierra. b) El «desarrollo comunal» como alternativa local a la «globalización», en una experiencia promovida en una zona antes económicamente deprimida del sur de Portugal (Alberto Melo). Lugar aparte tiene el de Harsh Sethi, que al discutir la experiencia india de desarrollo, abre algunas cuestiones sobre la relación de las políticas económicas nacionales y globales con los problemas de la ecología, sobre todo, pero también con los de género e infancia.

No tendría sentido aquí, obviamente, reseñar o reproducir los relatos y las inferencias que nos entregan los textos, puesto que éstos hablan al lector por sí mismos. Lo que es pertinente es intentar una primera discusión del significado de esas experiencias en la constitución de sistemas alternativos de producción y abrir, a ese respecto, algunas ideas indispensables de ser indagadas y debatidas.

4. LAS COOPERATIVAS URBANAS: LA EXPERIENCIA EN BRASIL, COLOMBIA E INDIA

Dos tipos de cooperativas urbanas han sido documentadas y discutidas en este volumen. Por un lado, aquellas que fueron establecidas por los trabajadores a partir de empresas en bancarota, en ramas de producción industrial ya constituidas y sobre la base de la previa estructura institucional, y de relaciones comerciales, financieras y estatales de esas empresas. La mayoría de esas experiencias corresponde a Brasil y una a la India.

Por otro lado, están las que fueron organizadas en una rama de actividad que, como la recolección de materiales reciclables en la basura, no está aún, o no del todo, ocupada por las empresas y que, por lo tanto, son experiencias de trabajadores de una rama de actividad no industrializada, dependiente de la autoridad pública y sin previas instituciones ni conexiones comerciales, tecnológicas o financieras. Las dos experiencias aquí documentadas se ubican, una, en Ahmedabad, ciudad al oeste de la India, y otra en Bogotá, Colombia.

Las cooperativas industriales de Brasil y de la India comparten, significativamente, algunos elementos básicos:

1. Todas empiezan su historia desde finales de la década de 1980, en la India, y desde la década siguiente en el caso brasileño. Esto es, en pleno desarrollo del «ajuste estructural», del neoliberalismo y de la «globalización».

2. Todas se organizan a partir de empresas en bancarrota, en unos pocos casos por la ocupación de esas empresas por sus trabajadores para evitar la desocupación y la falta de pago; las demás por transferencia negociada de los activos de las empresas, con los empresarios y con el Estado.
3. Todas se originan con apoyo político e institucional de los respectivos sindicatos de fábrica o de las centrales sindicales locales o regionales.
4. Reciben el apoyo financiero del Estado, o de la Iglesia, o de alguna ONG. Y cuando ese apoyo cesa o disminuye, sobrevienen graves dificultades que en no pocos casos llevan a la desaparición de la cooperativa y, en otros, a no poder crecer ni desarrollarse tecnológicamente en un periodo en que sin estos recursos no es posible mantener ninguna actividad continua y adecuadamente rentable.
5. Establecen redes de relaciones comerciales y financieras en el mundo empresarial, si es que van a sobrevivir. Las demás tienen que dejar la escena.
6. Tienen relaciones ambiguas y contradictorias, a veces conflictivas, con los sindicatos, con los partidos políticos y con el Estado.
7. Las más grandes y exitosas organizan o se integran en asociaciones regionales, nacionales o internacionales.
8. Todas operan en ramas industriales en las que no existen grandes concentraciones de capital financiero y, por lo general, usan tecnología atrasada.
9. La división interna del trabajo no es muy diferente de la empresarial y hay dificultades en la distribución de ganancias. Por ejemplo, en una de las cooperativas de Calcuta hay 150 miembros, de los cuales 35 son oficinistas y reciben más salario. No hay modo de comparar eso con la experiencia brasileña, porque la información respectiva no llega hasta ese grado de detalle.
10. En general tiende a disminuir, en lugar de aumentar, el número de trabajadores. Estos rasgos permiten plantear algunas cuestiones necesarias. No cabría aquí discutir las todas, menos en detalle, por lo que nos restringiremos a muy pocas. En primer término, en estos trabajos se insiste en que las cooperativas son una expresión de la conciencia social y política de los trabajadores y de su decisión de salir de las reglas capitalistas de trabajo y de producción. Eso es cierto si nos referimos a los intentos autónomos de los trabajadores, en particular en el siglo XIX en Inglaterra, o en el siglo XX en momentos de conflicto social generalizado y políticamente expresado en la disputa por el control del poder en una sociedad. Por ejemplo, en el Chile anterior al golpe de Estado de Pinochet, en 1973, y en especial durante el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende, fueron numerosos los casos de empresas industriales tomadas por los trabajadores. Se organizó la autogestión obrera de las empresas, en forma de cooperativas, con apoyo financiero y técnico del Estado y de los partidos de la UP. Sobre esa base se constituyó el llamado «sector social» de la economía chilena. De la misma manera, en Bolivia, durante la revolución de

1952, durante la Asamblea Popular entre 1970-1972, y de nuevo bajo el gobierno de Siles Suazo entre 1983-1984, los trabajadores ocuparon las minas y las fábricas e instalaron organismos de autogestión cooperativa y de algo llamado cogestión de los trabajadores con el Estado.¹⁵

Claramente, en esos ejemplos, se trataba de la decisión política de los trabajadores de tomar en sus manos la gestión de su trabajo, de los recursos de producción y de los productos, como parte de un proceso político nacional que trataban de orientar y de empujar hacia una profunda revolución de trayectoria socialista. La conciencia social y política revolucionaria desempeñaba allí un papel central y determinante. Es verdad que esas empresas del sector social y las cooperativas fueron eliminadas con el golpe militar de Pinochet. Pero se trató de una derrota política general, sin duda una de las peores que el movimiento mundial de trabajadores haya sufrido y que anunciaba la entrada de una nueva política del capital en el mundo, la prolongada asociación entre la dictadura militar y el neoliberalismo, que preparó las condiciones para que este último tuviera que ser admitido incluso por las agrupaciones de la antigua izquierda en regímenes elegidos, como en Chile, por ejemplo.

La cuestión es, por supuesto, si en las actuales experiencias de Brasil o India estamos delante del mismo fenómeno político, basado en una conciencia social explícita, cuando los trabajadores deciden tomar empresas en quiebra y negociar con los dueños y con el Estado para evitar el desempleo o la falta de pago de derechos sociales, mientras los dueños y los burócratas estatales quieren, precisamente, esa transacción. No es necesario reducir o negar la importancia de la conciencia, pero no necesariamente se trata, en estos u otros casos equivalentes, de una conciencia crítica o revolucionaria anticapitalista, sino de una expectativa diferente, ante todo contra el desempleo. O ¿de qué modo se explicaría, si no, la conducta de los trabajadores de las cooperativas actuales, en Brasil o en la India, ante las dificultades financieras o comerciales, si se tratara ante todo de que el origen y el sentido de esas cooperativas radican en la conciencia anticapitalista? Porque el problema no es privativo de Brasil o de la India. Durante la dictadura de Pinochet, las empresas tomadas por los trabajadores fueron, por supuesto, devueltas a sus dueños capitalistas. Pero muchos de éstos no estaban interesados en ellas y preferían venderlas a los trabajadores y obtener un beneficio. Algunos grupos de trabajadores obtuvieron créditos bancarios para comprarlas y se organizaron en cooperativas. Y después, entre 1982 y 1983, cuando se derrumba la economía chilena bajo el peso de la deuda externa y de los escandalosos desfalcos financieros de los banqueros pinochetistas, numerosas empresas fabriles entraron en quiebra.

¹⁵ Sobre el caso de Chile con Allende, véase Peter Winn, 1986; el texto de Jaime Ruiz-Tagle y A. Doma en Iturraspe, *op. cit.*, pp. 9-48. Sobre Bolivia, de Juan del Granado Cosío, también en Iturraspe, pp. 156-192.

La mismísima dictadura de Pinochet decidió vendérselas a sus trabajadores, para que organizaran cooperativas con apoyo crediticio del Estado. Las cooperativas originadas de esa manera no han sobrevivido. Unas pocas se han transformado en empresas convencionales, esto es, capitalistas.¹⁶ ¿Tendría sentido pensar en la actuación de una conciencia crítica, anticapitalista, entre dichos trabajadores, y en la flexibilidad de una sangrienta dictadura para entregar las empresas a esos mismos trabajadores, por esas razones y en tales condiciones?

Esa misma cuestión se plantea también cuando verificamos que la voluntad cooperativa depende, en casi todas las experiencias documentadas, del apoyo financiero externo, del Estado, de la Iglesia, de alguna ONG o, raramente, de créditos bancarios. Y que cuando ese apoyo falta, se suspende o se reduce, la voluntad cooperativista entre los miembros también falta o se reduce y, como consecuencia, en la generalidad de los casos, la membresía de las cooperativas disminuye. Por otro lado, hay en todas ellas descontento por la división del trabajo y, en especial, por la distribución del salario y las ganancias. Esto último, en muy buena medida, como resultado de aquellas dificultades.

Ese comportamiento resulta notablemente similar a lo que ocurre con otras organizaciones de «economía solidaria»: se originan por iniciativas o con apoyo de instituciones de ayuda asistencial a los «pobres» (iglesias u ONG ligadas a ellas, como Cáritas, etc.), subsisten y hasta parecen ayudar al desarrollo de la conciencia social de sus miembros hacia una ética social de solidaridad. Pero todas se desintegran apenas la ayuda financiera externa se corta. Y las muy pocas que sobreviven se transforman en pequeñas o medianas empresas dedicadas, explícita y conscientemente, al lucro individual y bajo el control y en beneficio de los que administraban esas organizaciones «solidarias».¹⁷

Esos problemas no disminuyen, por cierto, la importancia inmediata de los esfuerzos cooperativos de los trabajadores, tanto para enfrentar las consecuencias de las tendencias polarizantes del capitalismo y defender la sobrevivencia, como para la autoeducación que puede llevar al desarrollo o a la formación de una conciencia crítica. Sin embargo, piden cautela respecto de, quizá muy rápidas, expectativas sobre su potencial anticapitalista y revolucionario, así como también respecto de muy rápidas conclusiones negativas sobre esas potencialidades. Esas preguntas no son arbitrarias y requieren ser investigadas. Las relaciones entre conciencia social y política y organización cooperativa de la producción y de su mercado son, sin duda, complejas, contradictorias y, sobre todo, tan heterogéneas como los contextos temporales y estructurales específicos en los cuales ocurren o se establecen. Y requieren ser discutidas a partir de tales contextos específicos y en

relación con ellos, porque los fenómenos sociales no encuentran explicación ni, sobre todo, sentido fuera de ellos.

En el caso de las cooperativas de las mujeres que trabajan recogiendo basura en las ciudades de Ahmedabad, en la India occidental, y en Bogotá, Colombia, los respectivos investigadores reconocen, explícitamente, que no se trata tanto de las relaciones entre la conciencia social y el cooperativismo, sino entre las necesidades inmediatas y urgentes de empleo e ingresos y las posibles ventajas de la organización cooperativa para satisfacerlas. Incluso, en el caso de Colombia, esa postura es expresa («la pregunta central que guía este trabajo es ¿en qué condiciones pueden surgir y consolidarse organizaciones económicas populares no capitalistas que, al mismo tiempo, faciliten la lucha por la inclusión de las clases populares y sean viables en un mercado globalizado?» Rodríguez, 2001).¹⁸ Esto es, no se trata aquí tanto de un «modo de producción» alternativo, como en el caso de las cooperativas de trabajadores industriales brasileños, sino de organizaciones «no capitalistas», pero aptas para caber dentro de un «mercado globalizado»; es decir, más bien alternativas al desempleo y a la pobreza que al capitalismo.

Ambas experiencias parecerían tener, por eso mismo, también elementos generales comunes. Los tienen, pero sobre todo son historias diferentes que les otorgan sentidos diferentes. Así, por lo primero, ninguna nace de la propia iniciativa y de los esfuerzos de los trabajadores, sino de la iniciativa y con el apoyo financiero de otros agentes. En el caso de la India, hay un hecho notable. La iniciativa corresponde a una institución que tiene doble interés: ser de trabajadoras y ser de mujeres. La Self Employed Women's Association (SEWA) surgió, a su vez, en el seno de la Textile Labor Association (TLA), organizada por Gandhi en 1918, sindicalizada según el Trade Union Act de 1926, pero que dejó de serlo después de la Independencia. La SEWA tiene ahora 250 000 asociadas y promueve la organización de cooperativas en diversas áreas de actividad y capacitación técnica y administrativa para sus agremiadas. Estamos, sin duda, frente a ideas, instituciones, y experiencias que asocian las luchas por la independencia de la India con las propuestas de alternativas anticapitalistas no estatistas, y proceden de los tiempos heroicos del movimiento cooperativista. Se trata, pues, de un hecho político, de una orientación política de las acciones de la gente. Esa historia proporciona no sólo una diferencia, sino una ventaja a las trabajadoras indias cooperativistas: la SEWA las defiende de la policía, les da ayuda política, técnica y financiera. Cuando establece que los intermediarios pagan sumas muy bajas a las recogedoras, estudia el mercado del reciclaje de basura y descubre que los precios son muy fluctuantes.

¹⁸ La referencia a «organizaciones económicas populares» rinde, obviamente, tributo al debate latinoamericano al que ya hicimos referencia, así como la idea de «inclusión de las clases populares» es tributaria de la literatura sobre la «exclusión social» y sobre el «desarrollo humano», que habla más bien de los «pobres», ya que las «clases populares», si por eso se entiende a los trabajadores, están «incluidas» de todos modos en el engranaje de la explotación y la dominación del capitalismo.

¹⁶ La información sobre esas experiencias en Larrain, s/f.

¹⁷ Véase, de Aníbal Quijano, *La economía popular y sus caminos en América Latina*, ya citado, sobre todo las pp. 109-129.

Entonces decide proporcionar a la cooperativa ayuda para construir un depósito de la basura recogida cada día, y paga a las recogedoras un precio pactado. Y cuando mejoran los precios en el mercado, la basura es vendida y las ganancias se distribuyen entre las trabajadoras de modo equitativo. Es pues la SEWA la institución principal, no la cooperativa. Es la SEWA la que decide orientar a las recogedoras de basura a organizar otras cooperativas en otras áreas de actividad, para que no dependan exclusivamente de la basura. La SEWA contrata trabajos de limpieza con otras entidades, públicas y privadas, donde las trabajadoras recibirán salario y recogerán la basura para luego ser vendida, lo que produce beneficios que serán distribuidos entre todas las cooperativistas, no sólo entre las inmediatamente implicadas. La SEWA induce a las recogedoras a aprender a leer, a escribir, a preparar comida, sobre nutrición, y las alienta a organizar sus propios negocios. La SEWA no es una institución cooperativista, es una organización sindical y política de las mujeres trabajadoras, que las orienta y dirige políticamente.

Si se tiene en cuenta que las recogedoras de basura en la India no son solamente pobres, mujeres y trabajadoras —características que juntas son por sí solas una terrible desventaja en todas partes—, sino también «intocables», puede inferirse la extraordinaria importancia que para ellas tiene la asociación en una cooperativa, pero sobre todo estar en una institución como SEWA. El trabajo de Bhowmik documenta los extraordinarios cambios: el mejoramiento de sus ingresos y de sus condiciones de trabajo; la prevención contra riesgos de trabajo, porque han aprendido a usar instrumentos protectores y de mejor rendimiento; el aprendizaje de la escritura y la lectura, de la gestión, incluso doméstica. Y, por encima de todo, el nacimiento de la autoestima individual y social de aquellas mujeres, pobres, trabajadoras e «intocables».¹⁹ Todo lo que aparece, seguramente, la entrada en una perspectiva y un sentido nuevos de su propia existencia.

En el caso de Colombia, las mujeres recogedoras de basura son también trabajadoras que, como en casi en todas partes, forman uno de los sectores sociales más oprimidos. Pero en Colombia no hay «intocables». Y como el mercado local de material reciclable en la basura urbana mueve una apreciable masa de dinero (20 millones de dólares, según el documento), resulta una no desdeñable fuente de ingresos extra al salario en tiempos de «ajuste estructural» y declinación del crecimiento de la economía. Por eso, aunque antes la tarea congregaba solamente a familias de antigua pobreza, y se transmitía de padres a hijos, hoy una parte de quienes ingresan al negocio de la basura y venta de reciclables, proviene de los

¹⁹ Los y las *intocables* forman el escalón más bajo y socialmente despreciado de la sociedad india. De allí el nombre de «intocables». Pero lo son, recuérdese, no por razones «raciales» en el sentido europeo, sino porque en el imaginario de los dominantes y del conjunto de la sociedad, después de tanto tiempo, se les asocia a la «impureza». Y esa asociación proviene de que fueron, desde hace demasiado tiempo, como los *burakumin* de Japón, forzados a realizar los trabajos más sucios, los más denigrantes, los más «impuros». Véase al respecto, entre otros textos, Dumont, 1986.

nuevos desempleados industriales, y otros muchos tienen educación secundaria e incluso universitaria. Y eso ocurre de modo creciente. Eso introduce una importante diferencia respecto de la experiencia de Calcuta. Para comenzar, eso probablemente facilita que el Estado y las entidades privadas de asistencia social promuevan entre las recogedoras de basura de todo el país, cooperativas. En 1999 había 50 cooperativas en ese sector. Ahora son 94. Tanto el Estado como las entidades privadas, promovieron también las asociaciones regionales entre esas cooperativas y, finalmente, de una Asociación Nacional de Recicladores (ANR), desde 1991. Igualmente, promueven ampliar las actividades de las cooperativas a la intermediación mercantil, incluso a la industrialización del material reciclable. Ambas experiencias tienen, por supuesto, rasgos comunes.

También en el caso de Colombia, la iniciativa y el apoyo financiero y técnico que han ayudado a Rescatar a sostenerse y afirmarse, se debe a una agencia externa al propio sector de trabajadoras. En este caso, la Fundación Social, una ONG de carácter religioso, jesuita por más señas. Pero esa Fundación es una entidad de asistencia social a los pobres. No es, como la SEWA india, una organización política de las trabajadoras. Y eso introduce importantes diferencias. La que aquí es pertinente destacar, es que esa Fundación Social que sostiene a más de 20 de esas 94 cooperativas, ha decidido que ya es tiempo de terminar con ese apoyo (financiero, técnico, institucional), para que las propias trabajadoras y cooperativas se desarrollen con autonomía. Eso ocurre en un momento en que el Estado está entregando el control de la recolección y reciclaje de basura a empresas capitalistas. El autor del estudio se ve obligado a concluir que «las cooperativas y redes están atravesando un periodo crítico en el que su capacidad de desarrollo autónomo está por comprobarse» (Rodríguez, 2001).

No hay duda de que la situación de las trabajadoras implicadas mejoró, social y económicamente, con la experiencia de las cooperativas. Incluso las redes llegaron a tener una gravitación no desdeñable en el debate sobre el futuro del sector correspondiente de actividades. Pero es inevitable recordar que un proceso muy semejante, con resultados muy positivos, terminó cuando la agencia de asistencia social decidió suspender su apoyo. En Colombia se organizó, en la década de 1970, una vasta red de cooperativas rurales, que creció a escala nacional, exitosa mientras disponía del apoyo y de la supervisión de una entidad similar a la Fundación Social, el Instituto Campesino Avanzado, también jesuita. Esa red cooperativa nacional llegó a tener, en un momento, 1 300 cooperativas, y agrupaba a 15 000 familias, más de 100 000 personas. Pero cuando terminó el apoyo del Instituto Campesino Avanzado, la virtual totalidad de las cooperativas se desintegró, y unas pocas se transformaron en empresas privadas.²⁰ Hoy es

²⁰ Manuel G. Gonzáles, *Origen y evolución de las formas asociativas campesinas de producción y de trabajo en Colombia*, CEPAL, 1987. También Jean L. Flora et al., 1988.

otro tiempo, y los comportamientos no tienen que ser los mismos ni llevar a lo mismo.

5. EL PROBLEMA DE LA TIERRA, LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS Y LAS COOPERATIVAS

Como es sabido, las relaciones entre el campesinado y el capitalismo, y entre ambos y la tierra, sea para cultivar o para poblar, son cuestiones cuyo centenario debate no tiene visos de agotarse. La anunciada «descampesinización», tampoco. Ese debate cruza también los textos dedicados a esos problemas en este volumen. Pero no podemos pretender aquí entrar sino en muy pocas de sus cuestiones.²¹

En la documentación sobre la experiencia brasileña de las cooperativas asociadas al Movimiento de los Sin Tierra (MST) no parece que las tendencias, o resultados materiales, las hagan muy diferentes de las que se organizan en los sectores industriales y en las actividades urbanas de la economía, respecto de sus éxitos económicos o de las relaciones con los trabajadores. La documentación recabada por Singer sobre la experiencia de algunas de esas cooperativas, indica que tropiezan con una resistencia más bien general, masiva si se quiere, y que pierden membresía de manera frecuente. Y el propio Martins de Carvalho informa que en los 1 500 asentamientos asociados al MST, en junio de 2001, había sólo 41 cooperativas colectivizadas con 2 299 familias, 32 de servicios con 11 174 familias, 7 de crédito, 2 de trabajo y 3 de pequeños agricultores. Solamente 13 473 familias del total de 250 000.

En cambio, hay una densa problemática respecto de las implicaciones sociales, políticas y culturales de las movilizaciones masivas de campesinos o gente que busca tierra para cultivar, porque en un espacio vasto y heterogéneo son también vastamente complejas y heterogéneas las condiciones de vida que resultan de las ocupaciones de tierra, de la formación de poblaciones nuevas, de las relaciones entre grupos de gente de diversa procedencia e historia, de las relaciones entre los líderes locales, regionales y nacionales, de la emergencia de formas y estructuras de autoridad, de emancipación o de subalternidad de las personas implicadas; en fin, del proyecto social que emerge con este movimiento, su carácter y sus perspectivas.

Almeida Lopez relata el modo como se presenta y se aborda el problema del poblamiento de una masa de gente que ocupa una hacienda. Es un problema que

²¹ Hace más de 30 años comencé a publicar los resultados de mis indagaciones en este asunto. El texto más difundido «Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latina», en S. M. Lipset y Aldo Solari (eds.), *Elites y desarrollo en América Latina*, Paidós, 1967, acaba de ser reeditado en parte en el *Observatorio Social de América Latina*, año 1, núm. 2, septiembre, 2000, Clacso, pp. 171 y ss. Las cuestiones de debate siguen pendientes.

no ha sido abordado antes en los estudios sobre luchas campesinas por la tierra. Este problema forma parte de otro más amplio, la relación campo-ciudad en las luchas por la transformación social y en el proceso de revolución de una determinada sociedad. Ese problema requiere ser urgentemente reabierto, replanteado, en el actual contexto histórico, local y mundial en que se llevan a cabo estos movimientos sociales. En Almeida, lo que descubrimos es la emergencia de una trama de relaciones de tipo urbano, de conductas civiles, de nuevos oficios, de formas de vecindad, de comunicación, en las cuales la vida y la actividad campesina se entretajan con las nuevas necesidades e imágenes de la vida urbana. Para el autor, esta experiencia tiene una especificidad, se trata de una *ciudad de reforma agraria*. Sobre todo porque la conformación de la ciudad se hace *pari passu* de la formación de una cooperativa, hasta el punto de que es necesario decidir si ambos términos son intercambiables. No lo son, como pronto se descubre, porque el MST enfrenta la resistencia de los asentados al modelo de colectivización que trata de implantar. Por otro lado, puesto que los pobladores son, todavía, campesinos, surge la cuestión de si se trata de una *ciudad sin ciudadanos*. Pero es la ciudad la que hace a los ciudadanos, no tanto a la inversa. En todo caso, un nuevo campo de indagación y debate está abierto.

La parte más densa se plantea en torno del carácter de las perspectivas y de las implicaciones del movimiento que conduce el MST, pero la información específica que permitiría apreciar no sólo y no tanto la pertinencia de las cuestiones, sino lo que ocurre en la experiencia real, no es suficiente en esta documentación. Comenzado con el problema de la resistencia de la gente a los modelos de cooperativa y de organización social que proponen, o imponen, los líderes del MST. ¿A qué, precisamente, se resiste esa gente: a pertenecer con derechos individuales, de propiedad, de lugar en los beneficios, a una cooperativa? ¿A la colectivización de la propiedad, de los demás recursos, de los beneficios? ¿Quién toma las iniciativas para cualquiera de esas opciones? ¿Los campesinos, los técnicos, la dirección del MST? ¿Quién toma las decisiones finales sobre la organización, el tipo de organización, la división del trabajo, la orientación de la producción, etc.? Esos son, exactamente, los asuntos en debate. Zander Navarro, sobre todo, aunque también Singer menos explícitamente, pone en el centro del debate la cuestión de la democracia, como De Carvalho pone la cuestión del socialismo. Es decir, lo que realmente está en duda es el carácter y las perspectivas del proyecto del MST, no sólo respecto de la tierra y del campesinado, sino también del conjunto de la sociedad y de su estado. En otros términos, el proyecto sobre el poder del cual depende, sin duda, lo que hay que tratar de hacer con la tierra y con el trabajo en el campo. Zander Navarro niega al movimiento que conduce el MST potencialidades transformadoras globales y radicales, antisistémicas, sin negar sus notables éxitos en la movilización del campesinado y en sus conquistas, y plantea preguntas sobre la verticalidad, la mistificación ideológica, incluso un cierto *ethos* militarista, en el liderazgo del MST. De Carvalho, en cambio, sostiene que esa transformación está

ya en proceso, que ya está constituyéndose una nueva sociedad, «en red» y con identidad propia. Y como implícita defensa del estilo del liderazgo del MST, sostiene que no son necesarios partidos políticos ni otras formas de intermediación y de representación para una masa movilizadora y orientada a la acción directa, pues de eso debe resultar la identidad del proyecto y la nueva sociedad «en red». Es infortunado que ninguna de las partes haya querido hacer explícito lo que afirma, sea con la idea de democracia, sea con la idea de una nueva «sociedad en red». Sobre la cuestión del poder volveremos después.

Muy diferentes, más complejos y más difíciles quizá, son los problemas que Heinz Klug encuentra en África del Sur en relación con la tierra y los modelos de producción y de asentamiento poblacional, en una sociedad en la cual «la más clara indicación de pobreza, en el tramonto del milenio, sigue siendo ser negra, mujer y habitante de un área rural». La política del nuevo Estado sudafricano respecto de la tierra está normada por tres leyes: la Ley de Restitución de la Tierra, la Reforma de la Tenencia de la Tierra, y la Ley de Redistribución de la Tierra, pero la aplicación de éstas no tropieza solamente con la resistencia, esperada, de los terratenientes colonialistas o «blancos», sino también de los jefes locales de la población colonizada o «negra». Ésta es una muestra de la colonialidad del poder, tanto en su dimensión «racial» como en referencia a los instrumentos de control que el colonialismo introdujo y que son reclamados después como derechos tradicionales, es decir, como privilegios. Ésta es una cuestión de interés teórico y político mayor, que debe ser investigada en relación con los problemas de las luchas por la emancipación social. Y, sobre todo en su dimensión «racial», está, sin duda, también presente en la experiencia brasileña. Pero está ausente entre los estudiosos brasileños de este volumen, quizá porque el escenario de los conflictos no es más el nordeste, como en tiempos de las Ligas Camponesas y de Juliao, sino en el sur y en el centro-sur del país.

De nuevo, es la cuestión de la democracia la que está en juego. Los jefes locales se resisten a la aplicación de normas que proponen la igualdad entre los miembros de las asociaciones, lo que implica, por cierto, las relaciones varón-mujer; el acceso abierto a la toma de decisiones; acceso a las asociaciones de propiedad, responsabilidad de los miembros, transparencia de sus conductas, representatividad de los cuerpos administrativos, etc. A pesar de las concesiones hechas a los «jefes tradicionales», éstos y sus seguidores defienden sus «derechos tradicionales» en contra de esas normas y en particular de la igualdad, la transparencia, el libre acceso a las membresías y a la representatividad. El argumento es que esas tradiciones vienen desde antes de la colonización. Pero, como en buena parte de África, fue la colonización la que generó o alteró, en beneficio de los colonizadores, las relaciones sociales y las jerarquías previas.

Asimismo, se enfrentan dos corrientes respecto de las formas de propiedad. Por un lado, quienes presionan por la privatización de la tierra y la titulación

inmediata, lo que les permitiría concentrar el control sobre agua, pastos y tierra. Y, por el otro, los que defienden la propiedad comunal como herencia africana precolonial, pero envuelta en una romantización de las estructuras no democráticas, la compulsión represiva sobre la gente, y sin tomar en cuenta que el coloniaje fue un factor activo en la formación de normas reputadas como ancestrales y precoloniales, en particular para fines de la segregación colonial. Los problemas no se resuelven, sin embargo, con las formas de propiedad. Porque allí donde «negros», rurales y pobres habitan, las comunidades o las propiedades individuales siguen siendo reservorios de mano de obra barata, donde se reproduce la fuerza de trabajo con muy bajo o ningún costo para los capitalistas.

No es diferente lo que resulta de la experiencia de las cooperativas semiurbanas de Mozambique, a pesar de las historias particulares. Aunque las mujeres de las cooperativas sobreviven algo mejor, es demostrable que no se trata de ninguna «economía alternativa». Como concluye Cruz e Silva: «en el contexto actual de Mozambique, para las cooperativas la búsqueda de alternativas, más que una tendencia contrahegemónica, parece ser la producción de una alternativa de sobrevivencia, que conduce a una aproximación creciente de las mujeres al mercado y a la proletarianización» (Cruz e Silva, 2001). Es la misma pregunta que Heinz Klug deja abierta respecto de África del Sur: ¿serán las formas asociativas de propiedad y de producción, finalmente, caminos de emancipación social o estrategias marginalizadas de subsistencia? Y, obviamente, ése no es un problema que puede ser resuelto por las formas de propiedad o de organización de la producción.

6. EL «DESARROLLO COMUNAL» COMO ALTERNATIVA

No deja de ser curioso, casi irónico, que la experiencia más exitosa que está documentada en este volumen no corresponda a ninguna propuesta anticapitalista, ni siquiera asociativa en términos cooperativistas. Se trata, por el contrario, de un caso bien logrado de una vieja propuesta de los tiempos del gran debate sobre el desarrollo-subdesarrollo: el desarrollo comunal.

Ocurre en un área del sur de Portugal, deprimida y aislada durante mucho tiempo («marginalized, earmarked for gradual extinction by the «macro-architects» of modern Economy»), tanto que sus habitantes, campesinos pequeños y artesanos, habían admitido una identidad negativa, como real e inevitable: ser de allí, de Sierra de Caldeirao, era ser retrasado. Tierra de migrantes, donde todos querían que sus hijos se fueran a buscar otro horizonte. Hasta que un buen día el autor del texto, que regresa después de 18 años a Portugal, con la decisión de no quedarse en la crítica intelectual, académica o profesional de una sociedad autoritaria y conservadora, la descubre detrás de las playas más cosmopolitas, mundialmente famosas, del país. Diseña una ONG que se llamará Asociación In Loco, formada por

profesionales foráneos a la sierra, y consigue financiamiento internacional para poner en marcha un proyecto de desarrollo local.

El proyecto, que por supuesto no tenemos que recontar aquí, ha producido dos actividades exitosas: *a)* pequeñas empresas de artesanía, con materiales y creatividad locales, pero adaptados a los gustos y modas internacionales actuales; y *b)* ferias a las que han logrado que concurran miles de personas de todas partes y que hacen muy rentables no sólo las actividades artesanales, sino que dinamizan todas las demás de la zona, en especial el comercio.

El resultado no es solamente el éxito económico, sino la afirmación de una identidad nueva, basada en la autoestima y en la autosuficiencia de los habitantes de la localidad y el ingreso de éstos en una relación nueva con el resto del mundo, lo que implica, necesariamente, una incorporación a los procesos mundiales como agentes, como participantes, no como víctimas.

Su éxito en los Algarves ha convertido a In Loco en todo un paradigma, en Portugal y en la Comunidad Europea, del desarrollo local como alternativa a la extinción bajo la «globalización». Eso le permite influencia, ingresos multiplicados, pero también nuevos problemas, algunos de los cuales implican hechos y situaciones que van a contramano de las preferencias ideológicas de los creadores de la ONG, acerca de las relaciones democráticas entre la gente y de la autonomía de ésta en el desarrollo.

Como ya se dijo, la propuesta es vieja, y en América Latina, sobre todo en las décadas de 1950 y 1960, no fueron pocas las experiencias y los estudios que, por lo general, verificaban fracasos o limitados y transitorios éxitos. Es bueno preguntarse ahora si el éxito en los Algarves se debe a que se realiza bajo el signo de la entrada de Portugal a la Unión Europea, con los recursos financieros, tecnológicos y de comunicación de que allí se dispone. O si se trata, realmente, de un eficaz camino de desarrollo local que se apoya, precisamente, en la globalización. En otro contexto y con otros horizontes, también en América Latina está de regreso, con otras denominaciones, también con algún éxito, pero con implicaciones diferentes.²²

La pregunta, sin embargo, y Melo mismo se la hace, es si todo ese éxito y el modelo correspondiente son suficientes para promover, sostener y reproducir la democracia como forma de vida cotidiana de la población y de sus relaciones con el resto de la sociedad, nacional e internacional. No hay duda de que el nivel de vida de esa población mejoró, que hay ahora una identidad positiva entre ella y sobre ella. Pero todo se inició, se gestó y se desarrolló por iniciativa y con financiamiento, organización y apoyo de agentes externos. Y así ocurre aún. ¿Qué pasaría si se interrumpiera o las corrientes turísticas fueran hacia otros rumbos? No es claro, en consecuencia, si ese modelo es equivalente a una respuesta

²² Ahora se llama «formación de capital social», según la propuesta de Robert Putnan, 1993. Sobre una experiencia en comunidades indígenas de Guatemala, véase John Durston, 1999.

democrática local, reproducible y perdurable frente a las tendencias que recorren el orden mundial.

De todos modos, se trata de una buena experiencia de desarrollo local, no como alternativa a la «globalización», sino como un modo de ubicarse mejor dentro de ella. Aunque eso no la convierte, tampoco, en un sistema alternativo de producción.

7. LA AUTONOMÍA LOCAL Y NACIONAL

De modo general, es dentro de la misma preocupación por la autonomía local frente a la «globalización», aunque a escala de todo un país, como se instala el trabajo de Harsh Sethi sobre el lugar de la propuesta gandhiana de *swadeshi*, independencia económica, autosuficiencia, respeto por el otro, resistencia no violenta (que no es lo mismo que pasiva), contra la dominación, en la India actual y en especial en sus relaciones con el orden mundial.

Aquí creo pertinente recoger sobre todo dos de las cuestiones planteadas por Sethi. La primera se refiere a las relaciones entre la idea de *swadeshi* y el rechazo, entre los líderes del Estado, al mercado, a la propiedad y a la empresa privadas. Un primer resultado de la concentración estatal del control de los recursos condujo a la evolución de la India como «una nación de suplicantes, mirando hacia el gobierno como madre-padre». Tras el fracaso de esa «economía de comando», el péndulo ahora se mueve hacia la liberalización interna e internacional. Pero ese giro, que pone en desventaja a la India como país, golpea sobre todo a los trabajadores, a los pobres del país. Gandhi había advertido ya, desde antes, que para una competencia entre gigantes y enanos era necesario, primero, levantar al enano a la altura del gigante. La economía bajo comando estatal no lo logró, y la competencia en la «globalización» tiene todas las conocidas implicaciones sobre y dentro de la India.

La segunda cuestión se refiere a los nuevos significados y al lugar que tienen, en ese nuevo contexto, los grupos, organizaciones y movimientos que, en medidas y maneras diversas, buscan combinar la lucha por los derechos de los pobres y los desposeídos, con la búsqueda de nuevos patrones y perspectivas de desarrollo. Esos grupos cubren desde la lucha contra la deforestación y degradación del ambiente, como Chipko, la resistencia de los pescadores artesanales contra la pesca agotadora con recursos industriales, hasta la formación de cooperativas en las empresas quebradas o abandonadas bajo los efectos del neoliberalismo. Con historias y modos diferentes, esos grupos y movimientos transitan ahora de ser fenómenos locales, domésticos o nacionales, a ser actores en el escenario mundial provisto por la globalización, puesto que son sus víctimas y se enfrentan a ella. Eso les ha llevado a la formación de amplias articulaciones. La principal es la National Alliance of People's Movements (NAPM), que reúne a grupos comunitarios, ONG, sindicatos y movimientos sociales.

Sin desconocer la gran importancia de esos movimientos y coaliciones para los debates y las luchas dentro de la India y a escala internacional, Sethi no ha dejado de formular la inevitable pregunta: ¿cuál es la nueva perspectiva de desarrollo? Y constata que también allá se confronta una misma dificultad: «Struggles against structural adjustment, internal liberalization and privatization, and globalization, all suffer from a deep ambivalence vis-à-vis the state» (Sethi, 2001).

8. NOTA FINAL: CUESTIONES PENDIENTES

¿Existe ya hoy una «economía alternativa»? Ésa es la pregunta que nos hacemos en América Latina, en especial en relación con las «organizaciones económicas populares». La pregunta que subyace a los textos de este volumen es si las experiencias documentadas y discutidas son «modos» o «sistemas alternativos de producción».

Hasta donde la información específica lo permite, no me parece que haya respuestas categóricas para ninguna de esas preguntas. Y tampoco que se deba sólo, o principalmente, a déficit de información. Creo que lo que hace falta, más bien, es replantear los términos del debate sobre las cuestiones implicadas. Ante todo, aquellas vinculadas a una perspectiva de conocimiento, de producción de conocimiento y de sentido, cuya aptitud para dar cuenta de la experiencia histórica mundial está en duda y en crisis.²³ Aquí, por obvias razones, cabe apenas abrir algunas pocas cuestiones y de manera más bien alusiva y enumerativa:

1. Está muy arraigada la idea de que la historia puede ser dividida en precapitalista y capitalista, no sólo como referencia a las diferencias cronológicas entre capital y no capital, sino implicando que el capital, después de vencer en los necesarios conflictos, desalojaría tarde o temprano a todos los demás «modos de producción» de la escena histórica y, por lo tanto, el capital existiría y se desarrollaría finalmente solo y separado. En esa perspectiva, *capitalismo* es un término que se refiere exclusivamente al capital. Pero la historia de los últimos 500 años ha mostrado que no sucedió así y que si las actuales tendencias se desarrollan, no sucederá jamás. El capital existe única y exclusivamente como eje dominante de articulación de todos los demás «modos de producción» conocidos, y de otro modo nunca existió, ni habría podido desarrollarse y hacerse dominante. Así, capitalismo es un término que da cuenta del sistema de articulación de los modos de producción bajo el dominio del capital.

2. En segundo término, puede sospecharse que la búsqueda de «modos» o «sistemas alternativos de producción» está asociada, implícitamente o no, según

²³ Hay ya una numerosa literatura acerca del debate sobre el eurocentrismo, en particular en América Latina. Entre otros, Walter Mignolo, 1995; Arbor (s/d); Lander, 2000; Coronil, 1998; Dussel, 1998; Quijano, 1992, 1997, 1998.

los casos, a la perspectiva evolucionista-dualista que predominó tanto en el liberalismo positivista como en el materialismo histórico. Esa búsqueda va en pos del «modo» que sucederá al capital. Sin embargo, lo que podríamos estar confrontando son tendencias de reconfiguración de la articulación del capital y los otros «modos», en la medida en que el capital va limitando crecientemente, por razones tecnológicas, su interés y su capacidad de asalariar a los trabajadores. Si están expandiéndose de nuevo la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil y la reciprocidad, el capital no deja aún de ser dominante, pero en una muy distinta configuración que en el pasado.

3. Todas las vertientes principales del pensamiento social admitieron en el siglo xx, como un sentido común, que en la existencia social pueden ser diferenciadas, en la práctica reificadas y separadas, la economía, la sociedad, la política y la cultura. Siguiendo esa misma idea, el materialismo histórico²⁴ sostiene que la dominación proviene de la explotación, en el sentido de que es determinada por ella. Según eso, se puede pensar en la emergencia de un nuevo modo o sistema alternativo de producción, que si logra imponerse como sucesor del capital, podrá, más tarde o más temprano, generar su propio sistema de dominación. Pero éste no se origina en la explotación, aunque puede ser modulado e influido por ella, y se remite sobre todo al control de la autoridad y de la subjetividad. Produce, incluso, instrumentos más duraderos y poderosos que un determinado modo de producción, como el capitalismo, con el cual está asociado. Desde hace 500 años, es la clasificación social universal de la población del planeta sobre la base de la idea de «raza».²⁵

4. El materialismo histórico sostiene también que la propiedad privada es la condición misma de la explotación, de la capitalista en particular. El enemigo a eliminar sigue siendo la propiedad privada de los recursos de producción. Por eso, la búsqueda del o de los posibles modos alternativos de producción pone todo el énfasis en el sistema de propiedad: tanto menos privado es el sistema de propiedad, tanto más cerca estará de lo alternativo al capitalismo. Y después del fracaso del modelo de estatización del control de los recursos de producción, la búsqueda se inclina por la propiedad totalmente colectivizada como cumplimiento del carácter alternativo del modo de producción. La gama entre propiedad privada y colectiva es pensada, evolucionistamente, como el camino que lleva fuera del capitalismo. Incluso en las dictaduras nacionalistas del «Tercer mundo», la retórica «socialista» ha reclamado la propiedad estatal, la participación autogestiva y las cooperativas comunales, como demostraciones de la orientación anticapitalista

²⁴ Lo que se llama materialismo histórico es la versión más eurocéntrica de la herencia teórica de Marx. Es el resultado de la hibridación de algunas de sus propuestas teóricas con el evolucionismo y el dualismo positivistas y con la idea hegeliana de un macrosujeto histórico. Fue codificado por Stalin como marxismo-leninismo desde 1924 y fue mundialmente predominante en el pensamiento social crítico de todo el siglo xx.

²⁵ Sobre esas relaciones de origen y de carácter colonial, sobre sus implicaciones en el poder, remito a mi discusión en Quijano, 1997, ya citado.

de esos regímenes. Pero en la historia de la explotación han intervenido todas las formas posibles de propiedad, colectiva, individual, de grupos, empresarial, estatal, etc. Hay, pues, que buscar las fuentes de la explotación en otra parte.

5. La explotación consiste en el control del trabajo (fuerza de trabajo y producto) en beneficio del que no es trabajador. Y para imponerlo se requiere separar al trabajador del control de su fuerza de trabajo y de los recursos de producción. Y eso, por supuesto, no se puede hacer sin dominación. El control de la autoridad, de la fuerza, y después de su naturalización y legitimación, es el primer instrumento de la dominación, a la que se asociará después el control de la subjetividad, del conocimiento y del modo de producir conocimiento. No es, por consiguiente, el sistema de propiedad el origen ni la explicación de la explotación. Ni ésta de la dominación. Por el contrario, sin dominio social, estructurado y duradero, no puede haber explotación social igualmente estructurada y duradera.

6. El poder, en la experiencia histórica conocida, es una relación de dominación/explotación/conflicto entre los habitantes de una sociedad, por el control de cada uno de los ámbitos fundamentales o decisivos de la existencia social humana: a) trabajo-recursos-productos, b) sexo-recursos-productos, c) subjetividad-recursos-productos, y d) autoridad colectiva-recursos-productos. Ninguna de tales dimensiones o ámbitos del poder existe separada de las otras, pero ninguna proviene de ninguna de las otras, porque cada una corresponde a un ámbito fundamental de la existencia social, de toda existencia social, en la cual ninguno de ellos proviene de los otros; pero no existe, salvo de modo aislado y transitorio, desarticulado de los otros. Y las varias formas históricas de articulación entre esas instancias del poder conforman un determinado patrón, cuyas modalidades concretas son siempre cambiantes en la historia, por el carácter mismo del poder.²⁶

7. Por todo eso, finalmente, aquí es donde se plantea en toda su rotundidad el problema de la democracia. En el capitalismo, puesto que se trata de la igualdad jurídica y política de desiguales en el poder, la más avanzada de las democracias no llega más allá de una negociación institucionalizada de los límites, las condiciones y las modalidades de explotación y dominio. El llamado «moderno Estado-nación» es su marco institucional. Pero si la democracia debe ser una estructura de relaciones sociales donde la gente, toda la gente, tiene el control autónomo de su trabajo, de su sexo, de la autoridad colectiva y de la subjetividad, eso supone un marco institucional capaz de expresarla y, al mismo tiempo, de hacerla valer. El Estado-nación, por moderno que fuese, no sería el marco institucional correspondiente.

8. Eso significa que la democracia no es el resultado, sino la condición misma, *sine qua non*, de toda trayectoria histórica en la cual el dominio y la explotación

sean reducidos y erradicados. En otros términos, se trata de una revolución social. Desde esa perspectiva, es pertinente afirmar que no existe «economía alternativa» ni «sistemas alternativos de producción» sin estructura de autoridad alternativa a la del Estado capitalista, en cualquiera de sus variantes, desde los brutalmente autoritarios y represivos, hasta los más democráticos. De hecho, en el propio capitalismo la democracia ha sido la condición y la compañera de todos los procesos que llevaron a determinados países a integrarse en el «centro» del sistema mundial.

9. Como ya se sabe, en la esclavitud o en la servidumbre personal, la democracia es imposible; sus límites respecto a los salarios y la pequeña producción mercantil ya han sido mostrados; la democracia requiere un contexto en el cual el sistema de la autoridad apoye la reproducción de un sistema de control del trabajo que, a su vez, apoye la reproducción de un modo de control democrático de la autoridad. Eso no puede establecerse, obviamente, sino entre comunidad y reciprocidad.

10. En esa conexión es indispensable admitir la diferencia básica entre la reciprocidad como una relación social de control democrático del trabajo, de sus recursos y de sus productos, y, por otro lado, la comunidad como una determinada estructura de control democrático de la autoridad colectiva. Comunidad es un término equívoco y hoy es el centro de un amplio debate político. Es indispensable, por eso, que la idea de comunidad quede asociada, estrictamente, a una estructura formal de autoridad en la cual todos los miembros tienen acceso igual y abierto al control constante de los cargos y funciones acordados y a las tareas asignadas, en cada momento, a esos cargos.

11. En la experiencia histórica conocida, la comunidad, en ese específico sentido, articula siempre a una población que practica más de un modo de producción, aunque la reciprocidad sea el eje de la relación entre todos ellos. Y si se termina del todo con el evolucionismo/dualismo eurocéntrico, en la lucha por la eliminación final de la explotación del trabajo, los modos de producción y distribución no explotadores, o no básicamente explotadores, seguramente pueden ser más de uno. Por ejemplo, además de la reciprocidad, la pequeña producción mercantil independiente y, en consecuencia, el intercambio y distribución del trabajo entre ellos.

Esta somera y esquemática enumeración sirve para sugerir que es necesario abrir, de nuevo, todas las cuestiones básicas del debate sobre la sociedad, el poder, el cambio histórico y la revolución. El primer paso en esa dirección es, sin duda, salir y liberarse del eurocentrismo, lo mismo en Europa que en el resto del mundo.

²⁶ Una primera discusión de estas cuestiones desde esta perspectiva, en *La cuestión del poder y de la democracia*, de próxima publicación. Una versión abreviada se publicó como «Poder y derechos humanos», en Carmen Pimentel (comp.), *Salud mental, poder y derechos humanos*, Cecosam, Lima, 2000.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
BIBLIOTECA

BIBLIOGRAFIA

- Arbor, Ann, «Diferencia colonial y razón postcolonial», *Anuario Mariateguiano*, 10(10), s/f: 171-189.
- Coraggio, José Luis, *Economía urbana. La perspectiva popular*, Abya-ala, Quito, 1998.
- Coronil, Fernando, «Más allá del occidentalismo», en S. Castro Gomes y E. Mendieta (orgs.), *Teorías sin disciplinas*, Porrúa, México, 1998.
- Duque Joaquín, *Las estrategias de sobrevivencia de las unidades familiares del sector popular urbano*, Proelce, Santiago de Chile, 1973.
- Durstón, John, «Construyendo capital social comunitario. Una experiencia de empoderamiento rural en Guatemala», *CEPAL*, Santiago de Chile, 1999 (Serie políticas sociales, 30).
- Dussel, Enrique, «Beyond Eurocentrism. The World System and the Limits of Modernity», en F. Jameson y M. Miyoshi (orgs.), *The Cultures of Globalization*, Duke University Press, Carolina del Norte, 1998.
- Flora, Jean L., Cornelia Butler, Humberto Rojas, y Norma Villarreal, «Community Stores in Rural Colombia», en Anis Sheldon y Peter Hakim (orgs.), *Direct to the Poor*, Rienner, Boulder, 1988.
- Lander, Edgardo (org.), *Colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, UNESCO/Clacso, Buenos Aires, 2000.
- Larrain, Manuel Riesco, *¿La propiedad? ¡Todo el poder a los trabajadores!*, Centro Nacional de Desarrollo Alternativo, Santiago de Chile, s/f.
- Louis, Dumont, *Homo hierarchicus. Le système de castes et ses implications*, Gallimard, París, 1986.
- Mignolo, Walter, *The Darker Side of the Renaissance. Literacy, Territoriality and Colonization*, Michigan University Press, Michigan, 1995.
- Miroshevski, V., «El populismo en el Perú. Papel de Mariátegui en la historia del pensamiento social latinoamericano», *Dialéctica*, 1, La Habana, mayo-junio, 1942: 55-70, (trad. de *O Narodnitchesvo v Peru*; en *Istoriik Marksist*, núm. 4, Moscú 1941).
- Nun, José, «Sobrepoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal», *Revista Latinoamericana de Sociología*, 5(2), Buenos Aires, julio, 1969.
- Putnam, Robert, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, Princeton, 1993.
- Quijano, Aníbal, *Mano de obra marginal y polo marginal de la economía*, CEPAL, Santiago de Chile, 1969. [Incorporado luego en *Imperialismo y marginalidad*].
- , *Imperialismo y marginalidad en América Latina*, Mosca Azul, Lima, 1977.
- , «Colonialidad y modernidad/racionalidad», en H. Bonilla (org.), *Los conquistados*, Tercer Mundo, Bogotá, 1992.
- , «Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina», *Anuario Mariateguiano*, 10(9), 1997: 113-121.
- , *La Economía popular y sus caminos en América Latina*, Mosca Azul, Lima, 1998.
- Quijano, Aníbal, «El regreso del futuro y las cuestiones del conocimiento», *Hueso Humero*, 38, Lima, abril, 2001: 1-18.
- Razeto, Luis, Arno Klenner, Apolonia Ramírez y Roberto Urmeneta, *Las organizaciones económicas populares (OEP), 1973-1990*, PET, Santiago de Chile, 1990.
- Rodríguez, César, «À procura de alternativas económicas em tempos de globalização: o caso das cooperativas de recicladores de lixo na Colômbia», *Projecto a Reinvenção da Emancipação Social*, <<http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa>>, 2001.
- Sethi, Harsh, «Swadeshi em debate», *Projecto a Reinvenção da Emancipação Social*, La versión electrónica de este texto puede ser consultada en <<http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa>> 2001.
- Sheldon, Anis, «Can Small-Scale Development be Large-Scale Policy?», en Anis Sheldon y Peter Hakim (orgs.), *Direct to the Poor*, Rienner, Boulder, 1988.
- Singer, Paulo, *Uma utopia militante. Repensando o socialismo*, Vozes, Petrópolis, 1998.
- Souza, Paulo Renato, y Víctor Tockman, «The Informal Urban Sector in Latin America», *International Labour Review*, 114(3), noviembre-diciembre, 1976.
- Tockman, Víctor, «El sector informal quince años después», *Trimestre Económico*, 14(215), 1987.
- Winn, Peter, *Weavers of Revolution*, Oxford University Press, Oxford, 1986.

<i>Sumario</i>	7
<i>Lista de acrónimos y siglas</i>	9
<i>Introducción. Para ampliar el canon de la producción</i>	15
1. Un mapa de alternativas de producción	23
Las formas de cooperativas de producción	23
Las economías populares y el desarrollo alternativo en la periferia y en la semiperiferia	33
En busca de alternativas para el desarrollo	40
2. Los estudios de caso	44
3. Conclusiones: nueve tesis sobre las alternativas de producción	49
Tesis 1	49
Tesis 2	51
Tesis 3	52
Tesis 4	53
Tesis 5	54
Tesis 6	55
Tesis 7	56
Tesis 8	57
Tesis 9	58
Bibliografía	59
1. <i>La reciente resurrección de la economía solidaria en Brasil</i>	63
1. Breve introducción conceptual	63
Lo que es	63
La inserción económica y política de la economía solidaria	65
2. La economía solidaria en el Brasil de hoy	66
Autogestión a partir de la bancarrota o crisis de las empresas: la Anteag	66

La Unisol, una iniciativa de los sindicatos obreros	71
Estudio de un caso: la metamorfosis de Conforja	73
Autogestión a partir de la reforma agraria: el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)	80
3. Estudios de un caso: asentamientos de la Reforma Agraria en Paraná. .	84
Abapan	84
Novo Paraíso	85
Santa María	88
Conclusiones	90
4. Autogestión como arma para la lucha contra la pobreza: Cáritas, acción de la ciudadanía e incubadoras de cooperativas	92
Cáritas	92
La Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Miseria y por la Vida.	94
Incubadoras de cooperativas	97
5. Los sindicatos adoptan la economía solidaria	99
6. Conclusiones	101
Bibliografía	101
II. <i>El debate sobre swadeshi</i>	103
Introducción	103
1. El proceso	105
2. Reacciones	107
3. Impactos	113
4. Repercusiones mayores	115
5. Conclusiones	118
Bibliografía	121
III. <i>Comunidad, pobreza y seguridad en el campo de Sudáfrica: ¿oportunidades de emancipación o estrategias marginales de supervivencia?</i>	123
Introducción	123
1. La opresión de la pobreza estructural	124
2. Desarrollo, pobreza y formas alternativas de tenencia	125
3. Reforma de la tenencia y la creación de un espacio institucional disputado.	128
4. La Ley de Asociaciones de Propiedad Comunal (APC)	132
5. Gobernar los terrenos comunitarios: las constituciones APC y el control sobre la tierra	134
6. Promesas y peligros	141
Apéndice: APC y fechas de registro (citadas por número en el texto) . . .	142
Bibliografía	142

IV. <i>«Movilización sin emancipación.» Las luchas sociales de los sin tierra en Brasil.</i>	146
Introducción	146
1. Historia concisa del MST (1980-2000)	152
El contexto original	152
El MST: fases de su historia	154
2. El MST y los dilemas de la lucha social en el campo	163
3. Conclusiones	176
Bibliografía	179
V. <i>La emancipación del movimiento en el movimiento de emancipación social continua (respuesta a Zander Navarro)</i>	181
1. ¿Y que hay de malo en ello?	181
2. Secretos íntimos	185
3. Buscando otros caminos	199
4. Siendo así...	201
Bibliografía	201
VI. <i>El MST y la canonización de la acción colectiva (respuesta a Horácio Martins de Carvalho)</i>	203
Introducción	203
1. El «proyecto estratégico»	209
2. El desarrollo agrario y su interpretación	209
Pequeño bosquejo sobre el desarrollo agrario brasileño reciente y sus características principales.	210
3. Las políticas públicas y la deslegitimación del Estado	213
4. El control social sobre los colonos	214
5. Alianzas y relaciones con otras organizaciones	215
6. ¿Por qué no apostar en la democracia?	216
Bibliografía	218
VII. <i>«El dorso de la ciudad»: los sin tierra y la concepción de otro tipo de ciudad</i>	219
Introducción	219
1. La acción: imagen de un tiempo próximo	222
2. Primeramente: construir un escenario	223
3. Después: un precepto para enfrentar la precariedad	224
4. El contexto del movimiento: el MST como acción local	226
5. El contexto del municipio: entre lo colectivo y lo particular	227
6. El contexto del asentamiento: centralidad como condición de sustentabilidad	232

7. El pretexto de la ciudad: centralidad como condición de producción de la existencia	235
8. El subtexto de la ciudad: distancias entre concepción y acto	239
9. Prospección: en las entrelíneas del deseo por un tiempo próximo	243
10. Consideraciones finales	246
Bibliografía	253
VIII. <i>En busca de alternativas económicas en tiempos de globalización: el caso de las cooperativas de recicladores de basura en Colombia</i>	255
1. Globalización, desigualdad y exclusión	255
Las cooperativas de trabajadores en el contexto de la globalización	258
Plan y metodología del estudio	261
2. De «desechables» a empresarios solidarios: la lucha de los recicladores de basura en Colombia.	263
El mercado del reciclaje.	263
Los recicladores	264
Los dos problemas centrales	266
Las cooperativas de recicladores	268
El balance social de las cooperativas	272
El balance económico de las cooperativas	277
¿Pueden sobrevivir las cooperativas?	278
3. Conclusiones	280
Bibliografía	283
IX. <i>Cooperativas y la emancipación de los marginados: estudios de caso de dos ciudades de la India</i>	286
Introducción	286
1. Cooperativas y trabajadores marginados	287
2. Recicladoras de Ahmedabad	289
Sindicalizar a las recicladoras	291
Formación de cooperativas	292
Recuperación del amor propio	293
3. Cooperativas de trabajadores en Calcuta.	294
La cooperativa del astillero	295
Cooperativa de la imprenta	297
Cables y conductores de aluminio	299
Cooperativa de la maquinaria de cables	300
4. Conclusiones: cooperativas y emancipación social	305
Apoyo sindical	306
Funcionamiento democrático	307

El papel del Estado.	308
Bibliografía	309
X. <i>Unión General de Cooperativas en Mozambique: ¿un sistema alternativo de producción?</i>	310
Introducción	310
1. ¿Un sistema alternativo de producción o una agricultura urbana «capturada» por la dimensión de una economía globalizante?	311
2. La ciudad de Maputo en el contexto de las transiciones postindependencia	314
3. Unión general de cooperativas, ¿una alternativa de producción?	317
1980-1987: Origen y evolución de la UGC, los nuevos desafíos	318
1987-1990: El movimiento cooperativo en el nuevo marco económico en vigor en el país.	323
1990-2000: Consolidación de la UGC: problemas y perspectivas	326
4. Conclusiones	333
Bibliografía	336
XI. <i>La acción local de los ciudadanos como forma de resistencia ante la nueva ola de colonización global: el caso de la Asociación In Loco en el sur de Portugal</i>	338
1. Prefacio	338
Una búsqueda interior	338
La dimensión política	338
Educación crítica	339
El «laboratorio» de la acción social	340
Una encrucijada ilustrativa	340
Una jornada personal	341
2. El inicio de la Asociación In Loco	341
Un proyecto de vida	341
El «interior escondido»	342
Una identidad negativa	342
Un plan de acción provisorio	343
El proyecto Radial	343
Una auscultación preliminar	344
Acción inmediata	344
Los centros de animación infantil	345
Formación para el autoempleo	346
La cuestión de los subsidios de quienes se estaban preparando	346
Producir y vender	347
La pequeña escala	347

El efecto multiplicador	348
La creación de la Asociación In Loco	349
3. ¿Maduración o transformación?	351
El programa europeo Leader	351
Una red de animadores locales	351
Una estrategia coherente	353
Problemas nuevos y críticos	353
Impacto externo	354
Productos locales	355
Sociedades	356
¿En camino de la democracia social?	356
Condiciones precarias	358
Capacidad de relacionarse con los poderes formales	359
Trabajo en red	360
Un trabajo que nunca acaba	361
4. La ciudadanía activa en el desarrollo local sustentable como una forma creativa de resistencia	361
Enseñanzas de Spinoza	361
Un movimiento global de ciudadanía activa	362
Los tres niveles de la economía	363
Construir alternativas de abajo hacia arriba	364
El anhelo por un contexto político más favorable	365
Aún una cuestión muy compleja	367
¿Tiene la Asociación In Loco un futuro viable?	368
Bibliografía	368
XII. ¿Sistemas alternativos de producción?	369
Introducción	369
1. A la hora de la globalización: ¿qué ha cambiado?	372
2. Origen y sentido de las principales propuestas actuales	374
3. Las principales variantes en América Latina	377
4. Las cooperativas urbanas: la experiencia en Brasil, Colombia e India	381
5. El problema de la tierra, los moviminetos campesinos y las cooperativa	388
6. El «desarrollo comunal» como alternativa	391
7. La autonomía local y nacional	393
8. Nota final: cuestiones pendientes	394
Bibliografía	398

Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista
 de Boaventura de Sousa Santos se terminó de imprimir en febrero de 2011
 en Impresora y Encuadernadora Progreso S. A. de C. V. (IEPSA),
 Calzada San Lorenzo, 244, 09830 México, D. F.
 En su composición se usaron tipos
 Adobe Caslon Pro de 18, 12.5, 11.5:13 y 8:9.5 puntos.
 La edición consta de 2 000 ejemplares.

Otros títulos de la colección

Boaventura de Sousa Santos
*Democratizar la democracia.
Los caminos de la democracia
participativa*

Zygmunt Bauman
*La globalización. Consecuencias
humanas
Vida de consumo*

Viviane Forrester
El horror económico

Alain Touraine
Crítica de la modernidad

Michel Wieviorka
*Otro mundo... Discrepancias,
sorpresas y derivas
en la antimundialización*

Cuando hablamos de globalización nos referimos, en realidad, a la globalización neoliberal. Boaventura de Sousa Santos, reconocido especialista transdisciplinario en derecho, economía y sociología, analiza las ventajas y desventajas de distintas propuestas formuladas por una globalización alternativa, contrahegemónica, que a través de redes y alianzas locales e internacionales busca generar opciones de resistencia ante un sistema que antepone la producción a la existencia.

Este libro —resultado del proyecto de investigación internacional “Reinventar la emancipación social. Hacia nuevos manifiestos”, dirigido por el propio Santos— expone la gran variedad de experiencias alternativas al modo de producción y distribución capitalista de bienes y servicios, como las prácticas de economía solidaria popular en Brasil, Colombia, India, Sudáfrica, Mozambique y Portugal, que contemplan la creación de cooperativas, empresas de autogestión, administración colectiva de la tierra y asociaciones de desarrollo local.

“Boaventura de Sousa Santos ha influido en el pensamiento social crítico contemporáneo, rompiendo con las teorías posmodernas más convencionales y profundizando en la crítica radical de los enfoques hegemónicos con el rescate de conceptos tales como la emancipación y la interculturalidad.” Conacyt, 11 de enero de 2011.

